NORMAN G. FINKELSTEIN



UNA INVESTIGACIÓN SOBRE SU MARTIRIO

NORMAN G. FINKELSTEIN



UNA INVESTIGACIÓN SOBRE SU MARTIRIO

Siglo XXI / Colección Hitos

Norman G. Finkelstein

Gaza

Una investigación sobre su martirio

Traducción: Ana Useros Martín

SIGLO XXI

ESPAÑA





Diseño de portada

RAG

Motivo de cubierta

Madre llorando la muerte de su bebé asesinado durante el Margen Protector, 18 de julio de 2014. Fotografía de Heidi Levine, 2014.

Nota editorial:

Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.

Nota a la edición digital:

Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.

Título original

Gaza. An Inquest into its Martyrdom

Sector Foresta, 1

28760 Tres Cantos

Madrid - España

Tel.: 918 061 996

Fax: 918 044 028

www.sigloxxieditores.com

ISBN: 978-84-323-1979-2

Para Gaza

la Verdad

La masacre de gente inocente es un asunto muy grave. No es algo que se pueda olvidar con facilidad. Es nuestro deber atesorar su recuerdo.

Mahatma Gandhi

PREFACIO

Este libro no trata de Gaza. Trata de lo que se le ha hecho a Gaza. Hoy parece estar de moda hablar de la capacidad para actuar de una víctima. Pero hay que ser realista acerca de las limitaciones que las circunstancias objetivas imponen sobre esa capacidad. Frederick Douglass podía afirmar su virilidad devolviendo los golpes a un esclavista que lo había maltratado a conciencia. Nelson Mandela podía conservar su dignidad en la cárcel a pesar de una situación calculada para humillarlo y degradarlo. Aun así, estos eran individuos excepcionales y eran circunstancias excepcionales y, en cualquier caso, incluso si queda absuelto con honores, las decisiones elementales que afectan a la vida cotidiana de un hombre en cautividad y el poder de llevar a cabo dichas decisiones siguen estando fuera de su control. Gaza, como señaló el ex primer ministro británico David Cameron, es una «cárcel al aire libre»[1]. A su cargo hay un alcaide israelí. En la imaginación popular, confeccionada por la propaganda estatal y obsequiosamente amplificada por todas las demás autoridades, se diría que Israel está siempre reaccionando y respondiendo al «terrorismo». Pero ni el bloqueo ilegal e inhumano que Israel ha impuesto a Gaza, ni las sangrientas «operaciones» periódicas que Israel ha desatado contra el territorio se deben a los misiles que lanza Hamás. Han sido decisiones políticas israelíes que proceden de los cálculos políticos israelíes, en las cuales las acciones militares de Hamás son un factor con tendencia a cero. De hecho, la mayor parte de las veces, Israel reaccionaba ante la inacción de Hamás: el movimiento islámico se negó a proporcionar la excusa «terrorista» que buscaba Israel para lanzar una operación cuyo predicado era político, no militar (defensa propia). Por supuesto, si Gaza «se limitara a hundirse en el mar» (Premio Nobel de la Paz Isaac Rabin)[2], o si rindiera unilateralmente su destino a los caprichos israelíes, Israel no la martirizaría. Pero, a falta de estas opciones, Gaza tiene tanto margen de maniobra (es decir, tan poco) como cualquier persona encerrada. La idea de que unos petardos lanzados desde un hormiguero pudieran, por sí solos, influir en la política de Estado de una de las potencias militares más impresionantes del mundo es

risible, o lo sería si no fuera por la labor del formidable aparato de desinformación de dicha potencia.

Este libro se centra en las políticas del martirio de Gaza. Su dimensión económica ya ha sido diseccionada de manera exhaustiva y competente[3]. Un observador no podría sino sorprenderse ante las resmas de papel que se han gastado en analizar la economía de Gaza y en dictar recetas para dicha economía, a pesar de que esta economía sea más una noción que una realidad. El Banco Mundial informó en 2015-2016 de que Gaza «ahora depende en aproximadamente un 90 por 100 de su PIB de los gastos del Gobierno palestino, las Naciones Unidas y otras remesas externas y proyectos donantes»[4]. No me cabe duda de que quienes recopilaron estos informes económicos actuaban impelidos por el deseo de hacer el bien, aunque al final la mayoría de ellos capitularon frente al diktat de Israel[5]. Pero si Gaza sobrevive es gracias a las subvenciones extranjeras, entregadas en sincronía –con una fanfarria sicofántica internacional– con el aflojado ocasional de algún tornillo israelí. De hecho, la paradoja es que, a medida que se redactan más y más informes económicos, el día del completo «desdesarrollo» de Gaza se acerca más y más. Es difícil también resistirse a la idea de que Gaza se habría beneficiado más si todo ese tiempo, energía y gasto invertidos en estos meticulosos informes, repletos de minucias que nublan la mente, se hubieran canalizado simplemente en hacer una piscina, dentro de la cárcel al aire libre, para los niños abandonados de Gaza. Aun así, constituyen un registro imborrable y un testamento del horror que se le ha infligido a Gaza. Son un monumento eterno a los mártires y una acusación eterna contra sus torturadores. Los informes sobre derechos humanos en Gaza, que constituyen el tema principal de este libro, reflejan ese contenido y han sufrido el mismo destino que estos informes económicos. Todos esos informes sobre derechos humanos podrían ahora mismo conformar una biblioteca de tamaño mediano; generalmente han seguido unos criterios de precisión exhaustivos y registran un relato horrendo de sufrimiento y desgracias, por una parte, y de excesos criminales y crueldad, por la otra. Pero, con la excepción de un reducido cuadro de especialistas, han sido en su mayor parte ignorados y, finalmente, la propia comunidad de los derechos humanos ha sucumbido ante el gigante Israel. En cualquier caso, los informes constituyen el recurso

esencial para aquellos a quienes les preocupa la verdad y para quienes la verdad es un tesoro. Incluso aunque estén en gran medida infrautilizados, son el arma más potente dentro del arsenal de quienes esperan, contra toda esperanza, movilizar a la opinión pública, de forma que se conserve un mínimo de justicia.

Lo que ha caído sobre Gaza es un desastre de fabricación humana. Por su duración y su crudeza, por su despliegue, no bajo el manto de la guerra ni en la oscuridad de lo remoto, sino a plena luz del día y ante los ojos de todos, por la complicidad de tantos, no solamente por obra, sino también y especialmente por omisión, es un delito claramente malvado. Los lectores juzgarán por sí mismos si esta descripción es ingenua o si los registros documentales la apoyan; si el autor de este libro es partidario de Gaza o si son los hechos quienes le dan la razón; si Gaza plantea un desafío de «narraciones» en conflicto o si plantea el desafío de desentrañar su inocencia de la maraña de mentiras que la ocultan. Sería políticamente prudente explayarse sobre la complejidad de Gaza. Pero también sería una excusa moral. Pues Gaza trata de una Gran Mentira compuesta de mil otras pequeñas mentiras, a veces aparentemente abstrusas y arcanas. El objetivo de este libro es refutar esa Gran Mentira exponiendo todas y cada una de las pequeñas mentiras. No se ha escrito con amor. Por el contrario, ha sido una tarea agotadora, detallada, impulsada por un odio visceral a la falsedad, en especial cuando esta se coloca al servicio del poder y la vida humana paga las consecuencias. Si el diablo está en los detalles, solo se puede luchar contra él y vencerlo con una disección metódica de lógica y pruebas. Solicito por adelantado la indulgencia del lector, pues atravesar este libro exigirá una paciencia infinita.

Norman G. Finkelstein

31 de diciembre de 2016

Ciudad de Nueva York

[1] «David Cameron Describes Blockaded Gaza as a “Prison”», BBC,

27 de julio de 2010.

[2] A. Hass, Drinking the Sea at Gaza: Days and Nights in a Land Under Siege, Nueva York, 1999, p. 9.

[3] S. Roy, The Gaza Strip: The Political Economy of De-development, 3.a ed. aumentada, Washington, DC, 2016.

[4] Asamblea General de las Naciones Unidas, «Situation of Human Rights in the Palestinian Territories Occupied since 1967», 19 de octubre de 2016, §46.

[5] Véase la «Conclusión».

AGRADECIMIENTOS

Querría agradecer su ayuda y cooperación a Usama Antar, Rudolph Baldeo, Kayvan Beklik, Alex Davis-Lawrence, John Dugard, Marilyn Garson, Jason Gordon, Maren Hackmann-Mahajan, Jens Ole Bach Hansen, Siham Faidoli Hansen, Abdalla Hassan, Ria Julien, Sana Kassem, Yarden Katz, Philip Luther, Deborah Maccoby, Sanjeev Mahajan, Alex Nunns, Mouin Rabbani, Sara Roy, Rana Shubair, Jamie Stern-Weiner, Desmond Travers y Jeff Wyneken. Deseo también reconocer la ayuda de un portavoz de la ONU que ha preferido quedar en el anonimato. Partes de este manuscrito han formado parte de publicaciones mías anteriores.

Este libro se ha beneficiado enormemente de la ausencia de apoyo de cualquier fundación o institución. Si quien paga manda, a mí nadie me ha pagado…



Ataque con fósforo blanco

© UNRWA, 2009

PRIMERA PARTE

OPERACIÓN PLOMO FUNDIDO

I. EN DEFENSA PROPIA

El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que dividía la Palestina bajo dominio británico en un Estado judío que incorporaba el 56 por 100 de Palestina y un Estado árabe que incluía el 44 por 100 restante[1]. En la guerra que siguió al paso de la resolución, el recién nacido Estado de Israel expandió sus fronteras hasta incorporar casi el 80 por 100 de Palestina. Las únicas áreas no conquistadas de Palestina comprendían Cisjordania, que fue anexionada posteriormente por el reino de Jordania, y la Franja de Gaza, que pasó a estar bajo el control gubernamental egipcio.

En el mango de sartén que forma la península del Sinaí, Gaza limita al Norte y al Este con Israel, con Egipto en el Sur y con el mar Mediterráneo por el Oeste. Aproximadamente 250.000 palestinos, expulsados de sus hogares durante la guerra de 1948, huyeron a Gaza y abrumaron a una población indígena de unos 80.000 habitantes. Hoy, más del 7 por 100 de los habitantes de Gaza lo forman expulsados de la guerra de 1948 y sus descendientes, y más de la mitad de esta abrumadora población refugiada tiene menos de dieciocho años; Gaza tiene la «segunda proporción más alta de población del mundo entre las edades de 0 y 14 años». Sus actuales 1.800.000 habitantes están apiñados en una tira de tierra de 40 kilómetros de largo y 8 kilómetros de ancho; es una de las áreas más densamente pobladas del mundo, más habitada incluso que Tokio. Entre 1967, cuando empezó la ocupación israelí, y 2005, cuando el primer ministro, Ariel Sharon, volvió a desplegar las tropas israelíes por la parte interior del perímetro de Gaza, Israel impuso a Gaza un régimen de explotación de «desdesarrollo» único en el mundo. En las palabras de la economista de Harvard Sara Roy, ha privado a «la población nativa de sus recursos económicos más importantes –agua, tierra y mano de obra–, así como de la capacidad interna y del potencial de desarrollar esos recursos»[2].

El camino que ha conducido a la desesperada situación de la Gaza moderna está plagado de múltiples atrocidades, la mayoría de las

cuales se han olvidado o no se han conocido fuera de Palestina. Después del cese de las hostilidades en el campo de batalla en 1949, Egipto mantuvo un férreo control sobre la actividad de los fedayeen (las guerrillas palestinas) en Gaza. Pero, a principios de 1955, los líderes israelíes tramaron arrastrar a Egipto a la guerra para derrocar al presidente Gamal Abder Nasser. Lanzaron una sanguinaria incursión a través de la frontera con Gaza, asesinando a 40 soldados egipcios. Este ataque en Gaza resultó ser una provocación casi perfecta, a medida que aumentaban los enfrentamientos en la frontera. En octubre de 1956, Israel (con el apoyo de Gran Bretaña y Francia) invadía la península egipcia del Sinaí y ocupaba Gaza, un objetivo que perseguía desde hacía tiempo. El destacado historiador israelí Benny Morris describía así lo que ocurrió a continuación:

Muchos fedayeen y calculo que unos 4.000 soldados regulares egipcios y palestinos quedaron atrapados en la Franja, fueron identificados y detenidos por las IDF [Fuerzas de Defensa Israelíes], la GSS [Servicio General de Seguridad] y la policía. Docenas de estos fedayeen parecen haber sido ejecutados sumariamente, sin juicio. Algunos probablemente fueron asesinados durante dos masacres que cometieron las tropas de las IDF inmediatamente después de la ocupación de la Franja. El 3 de noviembre, el día que se conquistó Jan Yunis, las tropas de las IDF fusilaron a cientos de refugiados palestinos y habitantes de la ciudad. Un informe de la ONU habla de «unos 135 residentes locales» y «140 refugiados» asesinados a medida que las IDF se adentraban en la ciudad y en su campo de refugiados «buscando gente en posesión de armas».

En Rafah, que cayó ante las IDF entre el 1 y el 2 de noviembre, las tropas israelíes asesinaron a entre 48 y 100 refugiados y a varios residentes locales, e hirieron a otros 61 durante una operación de cribado masivo el 12 de noviembre, en la que buscaban identificar a los antiguos soldados egipcios y palestinos y a los fedayeen que se ocultaban entre la población local […].

Otros 66 palestinos, probablemente fedayeen, fueron ejecutados en una serie de incidentes durante operaciones de cribado en la Franja de Gaza entre el 2 y el 20 de noviembre […].

Las Naciones Unidas calculan que, en conjunto, las tropas israelíes mataron entre 447 y 550 civiles árabes en las tres primeras semanas de ocupación de la Franja[3].

En marzo de 1957, Israel fue obligado a retirarse de Gaza después de que el presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, ejerciera una fuerte presión diplomática y amenazara con sanciones económicas. Para cuando finalizó la operación, más de 1.000 habitantes de Gaza habían sido asesinados. «El coste humano de los cuatro meses de ocupación israelí de la Franja de Gaza fue alarmantemente elevado», observaba recientemente un historiador. «Si las cifras de quienes fueron heridos, torturados o encarcelados se suman al número de personas que perdieron la vida, se diría que 1 de cada 100 habitantes ha sido físicamente dañado por la violencia de los invasores»[4].

La etiología de las desdichas actuales de Gaza se remonta a la conquista israelí. A lo largo de la guerra de 1967, Israel reocupó la Franja de Gaza (junto con Cisjordania) y desde entonces ha seguido siendo la potencia ocupante. Tal como Morris cuenta la historia, «la gran mayoría de los árabes de Cisjordania y de Gaza aborrecieron desde el inicio la ocupación»; «Israel pretendía quedarse […] y su gobierno no se habría derrocado mediante la desobediencia civil o la resistencia civil, que se aplastaba con facilidad. La única opción real era la lucha armada»; «como todas las ocupaciones, la de Israel se basaba en la fuerza bruta, en la represión y en el miedo, en el colaboracionismo y la traición, en las palizas y las cámaras de tortura, y en la intimidación, humillación y manipulación cotidiana»; «la ocupación siempre fue una experiencia brutal y mortificante para el ocupado»[5].

Desde el inicio, Palestina se resistió a la ocupación israelí. Los gazatíes en particular opusieron una resistencia dura, tanto armada como sin armas, mientras que la represión israelí resultaba igualmente tozuda. En 1969, Ariel Sharon se convirtió en el jefe del Mando Sur de las IDF y no pasó mucho tiempo antes de que se embarcara en una campaña para quebrar la resistencia en Gaza. Una de las mayores especialistas académicas americanas sobre Gaza recuerda cómo Sharon

imponía toques de queda de veinticuatro horas a los campos de refugiados, durante los cuales las tropas llevaban a cabo registros casa por casa y reunían a todos los hombres en la plaza para interrogarlos. Muchos hombres fueron obligados a meterse en el Mediterráneo con el agua hasta la cintura durante horas mientras se llevaban a cabo los registros. Además, unos 12.000 miembros de familias de supuestos guerrilleros fueron deportados a campos de detención […] en Sinaí. En unas pocas semanas, la prensa israelí empezó a criticar a los soldados y a la policía fronteriza por dar palizas a la gente, por disparar a las multitudes, por destrozar los contenidos de las casas y por imponer restricciones extremas durante el toque de queda […].

En julio de 1971, Sharon añadió la táctica de «esquilmar» los campos de refugiados. Las tropas militares desalojaron a más de 13.000 residentes a finales de agosto. El ejército abrió grandes carreteras atravesando los campamentos y a través de los limoneros, facilitando así que las unidades mecanizadas operaran y que la infantería recuperara el control de los campamentos […]. Esa acción del ejército rompió la espina dorsal de la resistencia[6].

En diciembre de 1987, un accidente de tráfico en la frontera entre Israel y Gaza, que se saldó con cuatro palestinos muertos, desencadenó una rebelión en masa, o intifada, contra el dominio israelí en los territorios ocupados. «No fue una rebelión armada», recuerda Morris, «sino una campaña masiva y persistente de resistencia civil, con huelgas y cierres de comercios, acompañada de manifestaciones violentas (aunque desarmadas) contra las fuerzas de ocupación. La piedra y, ocasionalmente, el cóctel molotov y el cuchillo eran sus armas y sus símbolos, no las pistolas y las bombas». No se puede decir, sin embargo, que Israel reaccionara proporcionalmente. Sigue contando Morris: «Se intentó casi todo: disparar a matar, disparar para herir, palizas, arrestos en masa, torturas, juicios, detenciones administrativas y sanciones económicas»; «Una amplia proporción de los muertos palestinos no recibieron disparos en situaciones de riesgo para la vida del tirador y la mayoría eran niños»; «Solamente una pequeña minoría de los

malhechores [de las IDF] fueron convocados por la maquinaria legal del ejército, y casi todos ellos se libraron, con sentencias ridículamente leves»[7].

A principios de la década de 1990, Israel había conseguido reprimir la primera intifada. Posteriormente se implicó en un acuerdo negociado en secreto en Oslo (Noruega) con la Organización de Liberación Palestina (OLP) y que se ratificó en septiembre de 1993 en los jardines de la Casa Blanca. Israel, mediante los Acuerdos de Oslo, pretendía optimizar la ocupación retirando sus tropas del contacto directo con los palestinos y reemplazándolas por subcontratas palestinas. «Uno de los sentidos de Oslo», apuntaba el exministro de Exteriores israelí Shlomo Ben-Ami, «fue que la OLP […] se convertía en colaboradora de Israel en la tarea de aplastar la intifada y atajar […] una lucha auténticamente democrática por la independencia palestina»[8]. En concreto, Israel se esforzó en reasignar a sus sustitutos palestinos las tareas sórdidas de la ocupación. «La idea de Oslo», reconocía el exministro israelí Natan Sharansky, «era encontrar un dictador fuerte que […] tuviera bajo control a los palestinos»[9]. «Los palestinos establecerán una seguridad interna mucho mejor de lo que lo haríamos nosotros», les contaba a los escépticos entre sus filas el primer ministro israelí Isaac Rabin, «porque no permitirán apelaciones al Tribunal Supremo y no consentirán que las asociaciones de derechos humanos israelíes critiquen la situación. […] Gobernarán según sus propios métodos y, esto es lo más importante, librarán a los soldados israelíes de tener que hacer esa tarea»[10].

En julio de 2000, el líder de la OLP, Yasir Arafat, y el primer ministro israelí, Ehud Barak, se unieron al presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, en Camp David para negociar un acuerdo final sobre el conflicto. La cumbre se desmoronó entre acusaciones mutuas. Pero ¿qué bando fue el culpable principal de que se abortaran las conversaciones? «Si yo fuera palestino», comentaba más tarde Ben-Ami, uno de los principales negociadores por parte de Israel en Camp David, «también habría rechazado Camp David»; mientras que el analista estratégico Zeev Maoz concluía que las «concesiones sustanciales» que Israel exigía a los palestinos en Camp David «no eran aceptables ni podían ser aceptables»[11]. Las negociaciones posteriores también fracasaron a la hora de lograr un

avance. En diciembre de 2000, el presidente Clinton expuso sus «parámetros» para resolver el conflicto; ambos bandos los aceptaron con reservas[12]. En enero de 2001, se reinició el diálogo en Taba, Egipto. Aunque ambas partes afirmaron que «se habían hecho significativos progresos» y que «nunca habían estado más cerca de un acuerdo», el primer ministro Barak, unilateralmente, «pidió un alto» en las negociaciones y, como resultado, «el proceso de paz israelí-palestino quedó indefinidamente detenido»[13].

En septiembre de 2000, en mitad del estancamiento diplomático y después de la provocación israelí, los palestinos de los territorios ocupados, una vez más, iniciaron una revuelta. Como su precursora de 1987, esta segunda intifada fue, desde su inicio, mayoritariamente no violenta. No obstante, en palabras de Ben-Ami, «la desproporcionada respuesta de Israel a lo que había comenzado como una revuelta popular, con jóvenes desarmados enfrentándose a los soldados israelíes dotados de armas letales, incendió la [segunda] intifada sin control posible y la convirtió en una guerra abierta»[14]. Se olvida que los primeros bombardeos suicidas de Hamás de la segunda intifada no ocurrieron hasta que no pasaron cinco meses de incesante derramamiento de sangre por parte de Israel. Las fuerzas israelíes dispararon un millón de unidades de munición únicamente en los primeros días de la revuelta, mientras que la proporción de palestinos muertos en relación con los muertos israelíes durante las primeras semanas era de 20 a 1[15]. A lo largo de la espiral de violencia provocada por la «respuesta desproporcionada», Israel golpeó a Gaza con una saña especial. En una cruel revisión del Eclesiastés, cada nueva estación presagiaba otro ataque israelí sobre Gaza que dejaba montones de muertos y las frágiles infraestructuras del territorio destrozadas: «Operación Arcoíris» (2004), «Operación Días de Penitencia» (2004), «Operación Lluvias de Verano» (2006), «Operación Nubes de Otoño» (2006), «Operación Invierno Caliente» (2008)[16]. En el retorcido recuerdo del presidente israelí y Premio Nobel de la Paz Shimon Peres, sin embargo, esta época fue «otro error: nos contuvimos durante ocho años y permitimos que [los gazatíes] nos arrojaran miles de proyectiles. […] La contención fue un error»[17].

A pesar de los continuos asaltos israelíes, Gaza siguió agitándose.

Ya en la época de los Acuerdos de Oslo su tenacidad provocaba que Israel se amargara en la Franja. «Ojalá se limitara a hundirse en el mar», se desesperaba Rabin[18]. En abril de 2004, el primer ministro Sharon anunciaba que Israel se «desentendería» de Gaza y, en septiembre de 2005, tanto las tropas israelíes como los asentamientos judíos se habían retirado. Dov Weisglass, un asesor clave de Sharon, expuso las razones tras el desvinculamiento: aliviaría la presión internacional sobre Israel (en especial la americana), y, a su vez, «congelaría […] el proceso político. Y congelando ese proceso se evita establecer un Estado palestino»[19]. Israel afirmó posteriormente que ya no era la potencia ocupante de Gaza. No obstante, las organizaciones de derechos humanos e instituciones internacionales han rechazado esta afirmación; el hecho es que, de miles de maneras, Israel aún conservaba una dominación casi completa en la Franja. «Ya esté el ejército israelí desplegado dentro de Gaza o reubicado en su periferia», concluía Human Rights Watch, «la cuestión es que sigue bajo su control»[20]. La voz más autorizada en Israel sobre derecho internacional, Yoram Dinstein, se alineaba igualmente con la «opinión predominante» de que la ocupación israelí de Gaza no había finalizado[21].

Se nos ha enseñado a pensar que el proceso que se inició en Oslo debe considerarse un fracaso, puesto que no ha tenido como fruto una paz duradera. Pero un veredicto así desvirtúa su objetivo real. Si el propósito de Israel era, como ha apuntado Ben-Ami, dar pábulo a una clase de colaboracionistas palestinos, entonces Oslo fue un éxito rotundo para los israelíes. Y no solamente para ellos. Si se estudia el II Acuerdo de Oslo, firmado en septiembre de 1995, y si se analizan con detalle los derechos y deberes mutuos de las partes contratantes del acuerdo de 1993, se puede ver lo que pesaba más en las cabezas de los negociadores palestinos: mientras que hay cuatro páginas completas dedicadas a «El paso de los VIPs [palestinos] (la sección se subdivide en "VIPs de categoría1", "VIPs de categoría2", "VIPs de categoría3" y "VIPs secundarios")», menos de una página (la última) se dedica a la «Liberación de los presos y detenidos palestinos», que se contaban por muchos miles[22].

En una elocuente anomalía, el Acuerdo de Oslo estipulaba un periodo de cinco años para la supuesta construcción de la confianza

entre los antiguos enemigos. De manera contraria, allí donde y cuando Israel buscaba realmente la paz, el proceso de reconciliación se desarrollaba a un ritmo rápido. Así, durante décadas, Egipto había sido la principal Némesis de Israel dentro del mundo árabe. Había sido Egipto quien lanzó un ataque por sorpresa en 1973, en el curso del cual perecieron miles de soldados israelíes. No obstante, la cumbre de Camp David, concertada por el presidente Jimmy Carter en 1978, que tuvo como resultado el «Marco para la Paz» y el «Tratado de paz» de 1979, el cual daba formalmente por finalizadas las hostilidades, se produjo con solo seis meses de diferencia; y se necesitaron únicamente tres años para que Israel evacuara (en 1982) la totalidad de la península egipcia del Sinaí[23]. En las negociaciones entre Egipto e Israel no se incluyó la necesidad de media década para recuperar la confianza.

El fin apenas disimulado del prolongado periodo interim de Oslo no era construir la confianza o facilitar la paz entre israelíes y palestinos, sino montar una colaboración que facilitara una ocupación de Israel sin cargas para este último. La premisa operativa era que, después de haberse acostumbrado a los emolumentos del poder y a los privilegios, el estrato de los beneficiarios palestinos se resistiría a prescindir de ellos; aunque fuera a regañadientes, cortejaría al poder, que compensaría generosamente y «les proporcionaría importantes gratificaciones»[24]. El periodo de transición también permitiría a Israel calibrar la fiabilidad de estas subcontratas palestinas, puesto que periódicamente estallarían crisis que pondrían a prueba su lealtad. Hacia el final del «proceso de paz» de Oslo, Israel podía contar entre sus muchas bondades que el número de tropas israelíes apostadas en los territorios ocupados palestinos era el menor desde el inicio de la primera intifada[25]. La única resistencia en el liderazgo palestino era su cabeza visible. A pesar de su legendario oportunismo, Arafat llevaba consigo un residuo de su pasado nacionalista y no se acomodaría a presidir un Batustán al estilo de Sudáfrica. Sin embargo, una vez que desapareció de la escena en 2004, todas las piezas estaban colocadas para que la «autoridad palestina» implantada en los territorios ocupados pudiera alcanzar un modus vivendi con Israel. Excepto que ya era demasiado tarde.

En 2006, hartos de años de corrupción institucional y de

negociaciones sin fruto, los palestinos votaron y llevaron al gobierno al movimiento islámico Hamás, en unas elecciones que fueron ampliamente elogiadas como «completamente honradas y justas» (Jimmy Carter)[26]. En privado la senadora Hillary Clinton se quejaba de que Estados Unidos no hubiera amañado el resultado: «Deberíamos habernos asegurado de hacer algo para decidir quién ganaba»[27]. A partir de su creación en 1988, Hamás había rechazado formalmente los términos respaldados internacionalmente para resolver el conflicto israelopalestino. Sin embargo, su participación en la contienda electoral indicaba la posibilidad de que el movimiento islámico estuviera «evolucionando y aún pudiera evolucionar más»[28]. Pero Israel inmediatamente intensificó el asedio y «la actividad económica en Gaza quedó en punto muerto, pasando a ser una economía de supervivencia»[29]. Estados Unidos y la Unión Europea siguieron la pista, infligiendo unas «sanciones financieras demoledoras»[30]. Pero si se apretaban los nudos a Hamás, junto con la población de Gaza, era porque habían hecho lo que se les pidió: habían participado en una elección democrática. El subtexto tácito, por cuya ignorancia Gaza pagó un precio tan alto, era que Hamás tenía la obligación de perder. El relator especial de la ONU sobre derechos humanos en los territorios palestinos ocupados señaló otras anomalías en esta respuesta punitiva:

En efecto, el pueblo palestino ha sido sometido a sanciones económicas, es la primera vez que se ha tratado así a población ocupada. Esto es algo difícil de entender. Israel está violando las principales resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General que tratan sobre el cambio territorial ilegal y la violación de los derechos humanos y no ha implantado el dictamen no vinculante del Tribunal Internacional de Justicia, pero ha conseguido evitar la imposición de sanciones. En cambio, el pueblo palestino […] ha sido sometido a lo que es posiblemente la forma más severa de sanción internacional que se haya impuesto en esta época[31].

El impulso tras esta despiadada guerra económica, que tiene como

objetivo hundir «un gobierno libremente elegido por una población bajo la ocupación», era garantizar el fracaso de Hamás para desacreditar al movimiento como organismo gubernamental[32]. Tanto Washington como Bruselas pidieron simultáneamente al movimiento islámico que renunciara a la violencia y que reconociera a Israel así como los acuerdos israelíes-palestinos previos[33]. Esas condiciones previas para un compromiso internacional eran unilaterales: a Israel no se le conminó a renunciar a la violencia; a Israel no se le conminó a reconocer el recíproco derecho palestino a tener un Estado en los límites territoriales de 1967; y mientras que se obligaba a Hamás a reconocer los acuerdos previos, como los Acuerdos de Oslo, que legitimaban la ocupación y permitían a Israel aumentar ampliamente los asentamientos ilegales, Israel tenía la libertad de eviscerar los acuerdos previos, como la Hoja de ruta del gobierno de Bush en 2003[34]. En efecto, las potencias occidentales estaban «estableciendo condiciones previas imposibles para el diálogo» con el movimiento islámico[35]. «El triunfo de Hamás en las elecciones palestinas de enero de 2006», concluye un estudio de 2014, podría haber augurado una evolución política pacífica, «pero únicamente si la interferencia activa de Estados Unidos y la pasividad de la Unión Europea no hubieran saboteado esta experiencia de gobierno»[36].

En 2007 Hamás consolidó su control de Gaza después de desbaratar un golpe orquestado por Washington en alianza con Israel y con los elementos de la vieja guardia palestina[37]. «Cuando Hamás previene [un golpe]», bufaba más tarde una figura importante de los servicios de inteligencia israelíes, «todo el mundo grita “falta”, reclamando que es un golpe militar de Hamás, pero ¿quién dio el golpe?»[38]. Aunque considera que Hamás es «cruel, horrible y está lleno de odio», el editor de uno de los periódicos de más tirada de Israel se hizo eco de esa postura heterodoxa acerca de lo que se había desvelado: «Hamás no ha “tomado el control” de Gaza. Tomó las medidas necesarias para imponer su autoridad, desarmando y destrozando una milicia que se había negado a inclinarse ante su autoridad»[39]. Estados Unidos e Israel reaccionaron con prontitud ante el rechazo por parte de Hamás de esta oferta de «ascenso democrático» (es decir, el intento de golpe), apretando aún más las tuercas a Gaza[40]. En junio de 2008, Hamás e Israel acordaron un alto el fuego auspiciado por Egipto, pero, en noviembre de ese

mismo año, Israel violaba el alto el fuego. Llevó a cabo una incursión letal en la frontera de Gaza que recordaba a los ataques transfronterizos de 1955. Entonces y ahora el objetivo era provocar una respuesta y, por lo tanto, tener una excusa para un asalto masivo.

De hecho, la incursión fronteriza resultó ser el preámbulo de una invasión sangrienta. El 27 de diciembre de 2008 Israel lanzó la «Operación Plomo Fundido»[41]. Empezó con bombardeos aéreos seguidos de un asalto combinado por tierra y aire. Pilotando la flota aérea de combate más avanzada del mundo, el ejército israelí del aire hizo casi 3.000 incursiones sobre Gaza y soltó 1.000 toneladas de explosivos, mientras que el ejército israelí desplegaba varias brigadas equipadas con sofisticados sistemas de recopilación de información y armamento, que incluía cañones manejados por control remoto y ayudados de cámaras y robots. Por el otro bando, Hamás[42] lanzó unos cientos de misiles rudimentarios y granadas hacia Israel. El 18 de enero de 2009, Israel declaró un alto el fuego unilateral, «aparentemente a petición de Barack Obama, cuya investidura como presidente iba a tener lugar dos días más tarde»[43]. No obstante, el asedio a Gaza siguió. El gobierno de Bush y el Congreso estadounidense prestaron un apoyo sin condiciones a Israel durante el ataque. En el Senado se aprobó por unanimidad una resolución que declaraba a Hamás como el único culpable de la muerte y destrucción que acontecería. En el Congreso se aprobó por 390 votos a favor, frente a 5 en contra[44]. Pero, mayoritariamente, la opinión pública internacional (incluyendo amplias franjas de la opinión pública judía) se horrorizó ante el ataque israelí sobre una población civil indefensa[45]. En 2009, una Misión de investigación del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dirigida por el respetado jurista sudafricano Richard Goldstone, publicó un voluminoso informe que documentaba la comisión por parte de Israel de múltiples crímenes de guerra y posiblemente crímenes contra la humanidad. El informe acusaba a Hamás de cometer crímenes semejantes, pero en una escala que palidecía por comparación. Estaba claro que, en las palabras del columnista israelí Gideon Levy, «esta vez se habían pasado»[46].

Israel justificaba oficialmente la Operación Plomo Fundido porque

debía defenderse ante los ataques de los misiles de Hamás[47]. Esa explicación, no obstante, no soportaba ni siquiera un examen superficial. Si Israel hubiera querido evitar los ataques con misiles de Hamás, no los habría provocado, rompiendo el alto el fuego de 2008[48]. Podría también haber optado por renovar (y, para variar, respetar) el alto el fuego. De hecho, como un exfuncionario israelí de los servicios de inteligencia le contó al Crisis Group, «las opciones de alto el fuego que se pusieron sobre la mesa después de la guerra ya estaban ahí antes de ella»[49]. Si la finalidad de Plomo Fundido era destruir la «infraestructura del terrorismo», entonces la coartada israelí de la defensa propia parece aún menos creíble después de la invasión. Mayoritariamente Israel no apuntó a los baluartes de Hamás, sino a lugares «claramente no terroristas, no de Hamás»[50].

El contexto de los derechos humanos contribuyó a socavar la excusa israelí de la defensa propia. El informe anual de 2008 de B'tselem (el Centro Israelí de Información sobre Derechos Humanos en los Territorios Ocupados) documentaba que, entre el 1 de enero y el 26 de diciembre de 2008, las fuerzas de seguridad israelíes habían asesinado a 455 palestinos, de los cuales al menos 175 eran civiles, mientras que los palestinos habían asesinado a 31 israelíes, de los cuales 21 eran civiles. Así pues, en la víspera de la llamada «guerra en defensa propia» de Israel, la ratio total entre civiles palestinos e israelíes asesinados era al menos de 8 a 1. Solamente en Gaza, Israel mató al menos a 158 civiles no combatientes en 2008, mientras que los ataques con misiles de Hamás mataron a 7 civiles israelíes, una ratio superior a 22:1. Israel lamentó la detención por parte de Hamás de un combatiente israelí capturado en 2006, pero Israel tenía en su poder a unos 8.000 «presos políticos» palestinos, incluyendo a 60 mujeres y 390 niños, de los cuales 548 estaban en prisión preventiva, sin acusación ni juicio (42 de ellos durante más de dos años)[51]. El cerco cada vez más estrecho sobre Gaza se añadía a la desproporcionada violación israelí de los derechos humanos palestinos. El bloqueo equivalía a «un castigo colectivo, una grave violación de la ley humanitaria internacional»[52]. En septiembre de 2008, el Banco Mundial describía Gaza como «drásticamente transformada, de una potencial ruta comercial a un enclave tapiado de donaciones humanitarias»[53]. A mediados de diciembre, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de

Asuntos Humanitarios (OCHA) informaba de que «el bloqueo de 18 meses [de Israel] había creado una profunda crisis de dignidad humana, conduciendo a una erosión generalizada de las condiciones de vida y a un significativo deterioro de las infraestructuras y de los servicios esenciales»[54]. Si los gazatíes no tenían electricidad 16 horas al día; si los gazatíes recibían agua una vez por semana durante unas pocas horas, y si el 80 por 100 de ese agua no era adecuada para el consumo humano; si uno de cada dos habitantes de Gaza no tenía empleo y sufría «inseguridad alimentaria»; si el 20 por 100 de las «medicinas esenciales» en Gaza estaban en «nivel cero», y si más del 20 por 100 de los pacientes que sufrían cáncer, enfermedades coronarias y otros cuadros graves no podían obtener permiso para recibir atención médica en el extranjero; si los gazatíes se aferraban a la vida con el más frágil de los hilos, esto se podía achacar, en último término, al bloqueo israelí. La población de Gaza, concluía OCHA, se sentía «cada vez más atrapada, física, intelectual y emocionalmente». Si examinamos la contabilidad en términos de los derechos humanos a finales de 2008, e incluso dejando de lado que fue Israel quien rompió el alto el fuego, ¿no tienen acaso los palestinos unas razones mucho más potentes que Israel para recurrir a la lucha armada en defensa propia?

[1] Menos de un 1 por 100 de Palestina se apartó para crear una zona internacional (Corpus separatum) que incluía Jerusalén.

[2] S. Roy, The Gaza Strip: The Political Economy of De-development, 3.a ed. aumentada, Washington, DC, 2016, pp. xxxii, 3-5; para la especificidad de la política económica de Israel en Gaza, véase ibid., pp. 117-134. United Nations Country Team in the Occupied Palestinian Territory, «Gaza in 2020: A liveable place?», 2012 («segunda tasa más alta»).

[3] B. Morris, Israel’s Border Wars, 1949-1956, Oxford, 1993, pp. 407-409. Morris documenta que, hasta la incursión israelí en Gaza de 1955, la «preocupación predominante» de Egipto «en sus relaciones con Israel era evitar provocar ataques de la IDF»; «Egipto normalmente perseguía la tranquilidad de su frontera con Israel». No obstante, «a partir de un cierto momento en 1954», el general de las IDF, Moshe Dayan, «buscaba la guerra y, periódicamente,

esperaba que un desafío concreto avergonzara o provocara al Estado árabe atacado y le obligara a responder, dando así una razón a Israel para aumentar la respuesta armada, hasta culminar en una guerra». La «política de engañar a Nasser para que entrara en guerra la pensaron [David] Ben Gurion y Dayan». El predicado de su estrategia indirecta de provocación fue que «como Israel no podía permitirse que se le señalara como agresor, la guerra debería alcanzarse mediante un proceso de escalada gradual, lograrse mediante periódicos ataques israelíes en represalia a gran escala, en respuesta a las infracciones del armisticio que cometiera Egipto». Cuando «Egipto se negó a caer en las sucesivas trampas que le tendía Dayan», Israel tramó con Gran Bretaña y Francia atacar directamente a Egipto (ibid., pp. 85, 178-179, 229-230, 271-272, 279-280, 427, 428).

[4] J.-P. Filiu, Gaza: A History, Nueva York, 2014, p. 105.

[5] B. Morris, Righteous Victims: A History of the Zionist-Arab Conflict, 1881-2001, Nueva York, 2001, pp. 340-343, 568. Véase también Z. Schiff y E. Ya'ari, Intifada: The Palestinian Uprising-Israel's Third Front, Nueva York, 1990.

[6] A. Mosely Lesch, «Gaza: History and politics», en A. Mosely Lesch y M. Tessler, Israel, Egypt, and the Palestinians: From Camp David to Intifada, Bloomington, 1989, pp. 230-232.

[7] B. Morris, Righteous Victims, cit., pp. 561, 580, 587, 591, 599.

[8] S. Ben-Ami, Scars of War, Wounds of Peace: The Israeli-Arab Tragedy, Nueva York, 2006, pp. 191, 211.

[9] A. Levy-Ajzenkopf, «Sharansky on Tour Promoting Identity, Freedom», Canadian Jewish News, 1 de julio de 2008. Sharansky ocupó varias carteras ministeriales entre 1996 y 2005.

[10] G. Usher, «The Politics of Internal Security: The PA's new intelligence services», Journal of Palestine Studies, invierno de 1996, p. 28; The B'Tselem Human Rights Report, primavera de 1994.

[11] S. Ben-Ami, entrevista en Democracy Now!, 14 de febrero de

2006; Z. Maoz, Defending the Holy Land: A Critical Analysis of Israel's Security and Foreign Policy, Ann Arbor, 2006, p. 476; véase también p. 493.

[12] Y. Beilin, The Path to Geneva: The Quest for a Permanent Agreement, 1996-2004, Nueva York, 2004, pp. 52-53, 219-226; C. E. Swisher, The Truth about Camp David, Nueva York, 2004, p. 402. Para un análisis en detalle de las diversas fases de las negociaciones de 2000-2001, véase N. G. Finkelstein, Knowing Too Much: Why the American Jewish Romance with Israel Is Coming to an End, Nueva York, 2012, pp. 229-248.

[13] B. Morris, Righteous Victims, cit., p. 671.

[14] S. Ben-Ami, Scars of War, cit., p. 267; véase también I. Zertal y A. Eldar, Lords of the Land: The War over Israel's Settlements in the Occupied Territories, 1967-2007, Nueva York, 2007, pp. 412-415.

[15] N. G. Finkelstein, Beyond Chutzpah: On the Misuse of Anti-Semitism and the Abuse of History, edición de bolsillo aumentada, Berkeley, 2008, cap. 4. El primer ataque suicida durante la segunda intifada ocurrió en marzo de 2001.

[16] Más de 400 palestinos (entre ellos 85 niños) fueron asesinados, frente a cinco soldados israelíes, durante las operaciones «Lluvias de Verano» y «Nubes de Otoño». 33 niños palestinos fueron asesinados por un civil israelí, en tan solo cinco días durante la operación «Invierno Caliente». Al Mezan Center for Human Rights, Bearing the Brunt Again: Child Rights Violations during Operation Cast Lead, septiembre de 2009, pp. 8, 18-19.

[17] B. Morris, «Israeli President Shimon Peres Reflects on His Mentor, His Peace Partner, and Whether the State of Israel Will Survive», Tablet, 26 de julio de 2010.

[18] A. Hass, Drinking the Sea at Gaza: Days and Nights in a Land under Siege, Nueva York, 1996, p. 9.

[19] S. Roy, Failing Peace: Gaza and the Palestinian-Israeli Conflict, Londres, 2007, pp. 327-328. Véase también S. Roy, Gaza Strip, pp. xxiii-xxv; y G. Golan, Israel and Palestine: Peace Plans from Oslo to

Disengagement, Princeton, 2007.

[20] Human Rights Watch, «“Disengagement” Will Not End Gaza Occupation», 29 de octubre de 2004. El World Report 2006 de HRW reiteraba esta postura:

En agosto y septiembre de 2005, Israel unilateralmente retiró unos 8.000 asentamientos, junto con personal militar e instalaciones, de la Franja de Gaza, y cuatro pequeños asentamientos en el norte de Cisjordania, cerca de Jenin. Mientras que desde entonces Israel ha declarado que la Franja de Gaza es «territorio extranjero» y el paso entre Gaza e Israel «frontera internacional», bajo el derecho humanitario internacional Gaza continúa ocupada e Israel sigue teniendo responsabilidad por el bienestar de los residentes de Gaza. Israel conserva el control efectivo sobre Gaza, regulando el movimiento de entrada y salida de la Franja, así como el espacio aéreo, el espacio marítimo, los servicos públicos y el registro de población. Además, Israel ha declarado su derecho a volver a entrar militarmente en Gaza en cualquier momento dentro de su «Plan de Desvinculación». Desde la retirada, Israel ha efectuado bombardeos aéreos, incluyendo asesinatos selectivos, y ha disparado artillería en el extremo noreste de Gaza.

Para un análisis legal en detalle, véase Gisha (Legal Center for Freedom of Movement), Disengaged Occupiers: The Legal Status of Gaza, Tel Aviv, enero de 2007.

[21] Y. Dinstein, The International Law of Belligerent Occupation, Cambridge, 2009, p. 277.

[22] Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip, Washington, DC, 1995, pp. 92-96, 314. Para un análisis de Oslo II, véase N. G. Finkelstein, Image and Reality of the Israel-Palestine Conflict, segunda edición de bolsillo aumentada, Nueva York, 2003, pp. 172-183.

[23] Una querella de fronteras por un diminuto triángulo de tierra

se resolvió posteriormente a favor de Egipto mediante un arbitraje internacional.

[24] International Crisis Group, Tipping Point? Palestinians and the Search for a New Strategy, abril de 2010, p. 2.

[25] «Israel Army's West Bank Presence 'Lowest in 20 Years», Agence France-Presse, 28 de noviembre de 2010.

[26] «Opening Remarks by Former US President Jimmy Carter to the 2006 Human Rights Defenders Policy Forum», 23 de mayo de 2006. Véase también P. Scholey, «Palestine: Hamas's unfinished transformation», en J. de Zeeuw (ed.), From Soldiers to Politicians: Transforming Rebel Movements after Civil War, Boulder, CO, 2008, que describe esas elecciones como «un modelo de reforma democrática» (p. 138).

[27] K. Kurson, «2006 Audio Emerges of Hillary Clinton Proposing Rigging Palestine Election», Observer, 28 de octubre de 2016.

[28] Á. de Soto, End of Mission Report (mayo de 2007), § 44. De Soto fue «United Nations Special Coordinator for the Middle East Peace Process and Personal Representative of the Secretary-General to the Palestine Liberation Organization and the Palestinian Authority Envoy to the Quartet» entre 2005 y 2007. Su informe es el documento más fiable y revelador acerca del periodo que abarca desde el redespliegue de Israel en Gaza hasta la victoria de Hamás en las elecciones y sus consecuencias. Sobre la trayectoria política de Hamás anterior a las elecciones de 2006, en lo que se refiere a su aceptación del Estado de Israel, véase International Crisis Group, Enter Hamas: The Challenges of Political Integration, enero de 2006, pp. 2, 19-22.

[29] Á. de Soto, End of Mission Report, cit., §§ 25, 52.

[30] Ibid., § 51.

[31] J. Dugard, Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the Palestinian Territories Occupied since 1967 (A/HRC/2/5), 5 de septiembre de 2006. El relator especial seguía diciendo: «Es interesante recordar que los Estados occidentales se

negaron a imponer sanciones económicas significativas a Sudáfrica para obligarla a renunciar al apartheid, argumentando que dañarían a la población negra de Sudáfrica. No se ha mostrado una comprensión semejante hacia la población palestina o hacia sus derechos humanos».

[32] Á. de Soto, End of Mission Report, cit., §§ 50, 53.

[33] Aunque muchas de las iniciativas hostiles contra Hamás procedían formalmente del Cuarteto del Próximo Oriente –Estados Unidos, Unión Europea, Rusia, Secretaría General de la ONU– en realidad este grupo era la marioneta de Estados Unidos (ibid., §§ 63, 69, 78-79).

[34] J. Carter, Palestine Peace Not Apartheid, Nueva York, 2006, pp. 159-160; G. Golan, Israel and Palestine, p. 90; Á. de Soto, End of Mission Report, §§ cit., 30, 81 n. 6 y 131.

[35] Á. de Soto, End of Mission Report, cit., § 50.

[36] J.-P. Filiu, Gaza, cit., p. 306; véase también Á. de Soto, End of Mission Report, cit., §§ 50, 52.

[37] D. Rose, «The Gaza Bombshell», Vanity Fair, abril de 2008; International Institute for Strategic Studies, «Hamas Coup in Gaza», 2007; B. Brenner, Gaza under Hamas: From Islamic Democracy to Islamist Governance, Londres, 2017, pp. 35-40. El ataque preventivo fue lanzado por el ala militar de Hamás y posteriormente avalado por los líderes políticos de Hamás. Para las maquinaciones de Washington con el fin de fomentar una guerra civil en Gaza, previas al intento de golpe, y la complicidad de los altos funcionarios de la Autoridad Palestina, véase Á. de Soto, End of Mission Report, cit., §§ 55-57, 123, 127.

[38] P. McGeough, Kill Khalid: The Failed Mossad Assassination of Khalid Mishal and the Rise of Hamas, Nueva York, 2009, p. 377.

[39] E. O'Loughlin, «Hopeless in Gaza», Sydney Morning Herald, 23 de junio de 2007.

[40] La cacareada pieza central de la política exterior de Bush era el

«fomento de la democracia».

[41] La expresión «Plomo Fundido» procede de un verso de una canción de Hanukkah.

[42] Cuando nos referimos a las acciones y capacidades militares palestinas se emplea Hamás como abreviatura de todos los grupos armados palestinos que operan en Gaza.

[43] J.-P. Filiu, Gaza, cit., p. 316.

[44] S. Zunes, «Virtually the Entire Dem-Controlled Congress Supports Israel's War Crimes in Gaza», Alternet, 13 de enero de 2009.

[45] N. G. Finkelstein, «This Time We Went Too Far»: Truth and Consequences of the Gaza Invasion, edición de bolsillo aumentada, Nueva York, 2011, pp. 107-129.

[46] G. Levy, «Goldstone's Gaza Probe Did Israel a Favor», Haaretz, 2 de octubre de 2009.

[47] M. Rabbani, «Birth Pangs of a New Palestine», Middle East Report Online, 7 de enero de 2009.

[48] Véase cap. II.

[49] International Crisis Group, Gaza's Unfinished Business, abril de 2009, p. 21; véase ibid., pp. 27-28, para los términos del alto el fuego posterior a la invasión. Véase también «Israeli Leaders "To Topple Hamas"», BBC News, 22 de diciembre de 2008; Z. Bar'el, «Delusions of Victory in Gaza», Haaretz, 28 de diciembre de 2008.

[50] Report of the Independent Fact-Finding Committee on Gaza: No Safe Place. Presentado ante la Liga de Estados Árabes, 2009, § 411(3). El comité estaba dirigido por el eminente jurista sudafricano John Dugard. En una nota adjunta, el comité señalaba:

Si las IDF hubieran querido destrozar por completo los túneles [bajo la frontera sur de Gaza] habría sido algo relativamente sencillo. Son

fácilmente discernibles y, dada la capacidad de vigilancia aérea de las IDF, estas debían saber su localización exacta. No obstante, el Comité tuvo claro que no se habían destrozado durante el conflicto. En opinión del Comité, esto suscita preguntas acerca de la afirmación israelí de que actuaba en defensa propia contra el contrabando de armas a través de los túneles (ibid., § 394).

[51] B'Tselem (Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories), Human Rights in the Occupied Territories: 2008 annual report, Jerusalén, 2009.

[52] Human Rights Watch, «Donors Should Press Israel to End Blockade», 1 de marzo de 2009.

[53] S. Roy, Gaza Strip, cit., p. xxxi.

[54] United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Gaza Humanitarian Situation Report-The Impact of the Blockade on the Gaza Strip: A human dignity crisis, 15 de diciembre de 2008.

II. DISUADIR A LOS ÁRABES, DISUADIR DE LA PAZ

La Operación Plomo Fundido resultó ser una debacle para Israel en términos de relaciones públicas. Por mucho que les hubiera gustado que fuera de otra manera, los medios de comunicación occidentales, comentaristas y diplomáticos no podían ignorar la muerte y destrucción masiva en Gaza. Si no era en defensa propia, ¿qué era entonces lo que empujaba a Israel a perseverar en una campaña contra una población civil, que solo produciría rechazo agudo en el extranjero? Las primeras especulaciones se centraban en la pesca de votos para las inminentes elecciones de 2009. Las encuestas durante la invasión mostraban que entre el 80 y el 90 por 100 de los judíos israelíes la apoyaban. «En el contexto de un respaldo casi unánime de la operación por parte de la opinión israelí», señalaba posteriormente la Asociación por los Derechos Humanos de Israel, «la tolerancia de cualquier discrepancia era mínima»[1]. Pero, como apuntaba el veterano periodista israelí Gideon Levy, «Israel había pasado por una guerra muy similar [...] hacía dos años y medio [en Líbano] y entonces no hubo elecciones»[2]. De hecho, los líderes israelíes se inhiben a la hora de arriesgar los intereses críticos del Estado, como puede ser iniciar una guerra, únicamente por la ganancia electoral. Incluso en las últimas décadas, cuando la escena política israelí se ha vuelto más sórdida, tendríamos dificultades para nombrar una campaña militar importante motivada por fines políticos partidistas[3]. Los motivos principales tras la invasión de Gaza se remontan no al ciclo electoral, sino a la necesidad dual de restaurar la «capacidad disuasoria» de Israel y acallar la amenaza que planteaba una nueva «ofensiva de paz» palestina.

La «mayor preocupación» de Israel durante Plomo Fundido, según informaba el corresponsal en Oriente Próximo de The New York Times, Ethan Bronner, citando fuentes israelíes, era «restablecer la capacidad disuasoria israelí», porque «sus enemigos tienen menos miedo del que antes tenían o del que deberían tener»[4]. Conservar la capacidad disuasoria ha sido desde siempre un factor importante de la doctrina estratégica israelí. De hecho, esta idea fue una de las principales impulsoras del primer ataque de Israel a Egipto en junio

de 1967, que tuvo como resultado la ocupación de Gaza y Cisjordania por parte de Israel. Para justificar Plomo Fundido, el historiador israelí Benny Morris recordaba que «muchos israelíes sienten que esos muros […] se están acercando […] tal como lo sentían a principios de junio de 1967»[5]. Pero aunque los israelíes de a pie presagiaran lo peor antes de la guerra de junio, Israel no se enfrentaba en aquel momento a una amenaza existencial (como bien sabe Morris)[6] y los líderes israelíes no dudaban de que Israel vencería en caso de que hubiera guerra. Después de que Israel amenazara y después avanzara sus planes de atacar Siria en mayo de 1967[7], el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser desplegó las tropas egipcias en la península del Sinaí y anunció que cerraría los estrechos de Tiran a los barcos israelíes. (Egipto acababa de firmar unos pocos meses antes un pacto militar con Siria.) El ministro de Exteriores israelí, Abba Eban, hizo unas emotivas declaraciones en las que decía que, debido al bloqueo, Israel solamente podía «respirar por un solo pulmón». Pero, excepto para el paso de petróleo, del cual tenía amplias reservas, Israel prácticamente no usaba los estrechos. Además, Nasser no impuso el bloqueo: días después de su anuncio las naves circulaban libremente a través de los estrechos. ¿Cuál era, entonces, la amenaza militar que suponía Egipto? Varias agencias de espionaje estadounidenses habían llegado a la conclusión de que Egipto no quería atacar a Israel y de que, en el caso improbable de que lo hiciera, solo o en compañía de otros países árabes, Israel, en palabras del presidente Lyndon Johnson, «les batiría el cobre»[8]. Mientras tanto, el jefe del Mossad les decía a altos funcionarios americanos el 1 de junio de 1967 que «no había diferencias entre Estados Unidos e Israel en lo que respecta a los datos de la inteligencia militar o a su interpretación»[9]. Por lo tanto, Israel mismo debía ser consciente de que Nasser no pretendía atacar y de que el ejército egipcio sería derrotado si lo hiciera. El dilema real al que se enfrentaba Israel era la creciente percepción dentro del mundo árabe, espoleada por el nacionalismo radical de Nasser, que culminaba en sus gestos de desafío de mayo de 1967, de que ya no tenían por qué temer al Estado judío. El comandante de división Ariel Sharon regañaba a los miembros del gobierno que dudaban en lanzar un primer ataque, diciéndoles que Israel estaba perdiendo su «capacidad disuasoria, […] nuestra arma principal, el miedo que nos tienen»[10]. En efecto, la capacidad de disuasión no consiste en repeler una

amenaza existencial inminente, sino en notificar a los rivales que cualquiera que desafíe en el futuro el poder israelí recibirá una respuesta violenta y decisiva. A la cúpula del ejército israelí «no le preocupaba un ataque por sorpresa de Egipto», concluía el analista estratégico Zeev Maoz: «Más bien, la cuestión clave era cómo recuperar la credibilidad de la disuasión israelí»[11].

La expulsión del ejército de ocupación israelí de Líbano en 2000 por parte de Hezbolá planteó un nuevo desafío a la capacidad disuasoria israelí. El hecho de que sufriera una humillante derrota y de que la victoria de Hezbolá se festejara a lo largo y ancho de todo el mundo árabe hizo que fuera casi inevitable otra guerra. Israel empezó inmediatamente a planificar el siguiente asalto[12]. Encontró una excusa plausible en 2006, cuando Hezbolá mató a varios soldados israelíes y capturó a otros dos y después exigió para liberarlos un intercambio con los presos libaneses confinados en cárceles israelíes. Aunque desató toda la furia de sus fuerzas aéreas y preparó una invasión terrestre, Israel sufrió una segunda e ignominiosa derrota en la guerra del verano de 2006. «La Fuerza Aérea Israelí [IAF], la rama militar israelí que antes destruía fuerzas aéreas completas en unos pocos días», concluía un respetado analista militar estadounidense, «no solamente se había revelado incapaz de parar los ataques con misiles de Hezbolá, sino que ni siquiera había podido causar el daño suficiente como para evitar que Hezbolá se recuperara rápidamente», mientras que «las fuerzas terrestres israelíes sufrieron un varapalo terrible a manos de un rival bien pertrechado y hábil»[13]. La yuxtaposición de varias cifras deja patente la magnitud del revés israelí. Israel desplegó a 30.000 soldados contra los 2.000 combatientes regulares de Hezbolá y a 4.000 combatientes irregulares, tanto de Hezbolá como de otros grupos; Israel trasladó y disparó 162.000 proyectiles, mientras que Hezbolá disparó 5.000 (4.000 misiles y proyectiles hacia Israel y 1.000 misiles antitanques dentro de Líbano)[14]. Más aún, «la amplia mayoría de los combatientes» con los que se enfrentaron los soldados israelíes «no formaba [...] parte del ejército regular de Hezbolá y, en algunos casos, ni siquiera eran miembros de Hezbolá»; y «muchos de los mejores y más diestros combatientes de Hezbolá ni siquiera llegaron a entrar en acción, pues esperaban a lo largo del río Litani con la idea de que el asalto de las IDF sería mucho más profundo y que llegarían hasta ellos con

mucha mayor rapidez de lo que lo hicieron»[15]. En el frente político, un indicio del cambio de fortuna de Israel fue que, por primera vez, no luchaba desafiando una resolución de alto el fuego de la ONU, sino, por el contrario, con la esperanza de que una resolución de ese tipo le sacara de un atolladero. «La frustración con el desarrollo y el resultado de la Segunda Guerra del Líbano [2006]», informaba más tarde un influyente instituto israelí, condujo a Israel a «iniciar un exhaustivo examen interno […] con la formación de 63 comisiones diferentes de investigación»[16].

Tras la guerra de 2006, Israel estaba deseando volver a enfrentarse con Hezbolá, pero aún no tenía la seguridad de que volvería triunfante del campo de batalla. A mediados de 2008, Israel buscaba enrolar a Estados Unidos para un ataque conjunto sobre Irán, que forzosamente también decapitaría a Hezbolá (socio junior de Irán) y como consecuencia neutralizaría a los principales aspirantes a la hegemonía regional. Israel y sus cuasi emisarios, como Benny Morris, advertían de que, si Estados Unidos no se sumaba, «tendrían que usar armamento no convencional» y que «morirían muchos iraníes inocentes»[17]. Para desgracia y humillación de Israel, Washington vetó un ataque e Irán siguió tan campante. La credibilidad de la capacidad de aterrorizar de Israel había bajado otro punto. Había llegado el momento de encontrar otro blanco diferente. La diminuta Gaza, mal defendida, pero orgullosa y desafiante, encajaba como un guante. Aunque débilmente armado, Hamás se había resistido a los diktat israelíes. Incluso presumía de que había forzado a Israel a «retirarse» de Gaza en 2005 y de que había obligado a Israel a plegarse a un alto el fuego en 2008. Si Gaza iba a ser el lugar en el que Israel restauraría su capacidad disuasoria, el teatro de la guerra de 2006 daba pistas sobre cómo se llevaría a cabo. A lo largo de su ataque, Israel demolió el barrio suburbial de Beirut conocido como Dahiya, donde se alojaban los votantes chiitas más pobres de Hezbolá. Después de la guerra, los mandos militares israelíes apuntaban a la «doctrina Dahiya» cuando formulaban los planes de contingencia:

Hacer uso de una potencia desproporcionada contra cualquier aldea desde la que se dispare a Israel y causaremos un daño y destrucción

inmensos. Esto no es una sugerencia. Es un plan que ya ha sido autorizado (jefe del Mando Norte Gadi Eisenkot).

La próxima guerra […] conducirá a la eliminación del ejército libanés, la destrucción de la infraestructura nacional y a un sufrimiento intenso de la población. Un daño grave a la República del Líbano, la destrucción de los hogares y las infraestructuras y el sufrimiento de miles de personas son consecuencias que pueden tener más influencia que ninguna otra en el comportamiento de Hezbolá (jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Israel, Giora Eiland).

Ante una ruptura de las hostilidades, Israel necesitará actuar inmediata, decisivamente y con una fuerza desproporcionada […]. Una respuesta así busca infligir daño e infligir un castigo hasta un extremo que requiere de un largo y costoso proceso de reconstrucción (coronel en la reserva Gabriel Siboni)[18].

Tanto el empleo desproporcionado de la fuerza, como el señalar como objetivo la infraestructura civil constituyen crímenes de guerra según el derecho internacional. Aunque la doctrina Dahiya se formuló teniendo en cuenta a todos los rivales de Israel, Gaza fue escogida como el objetivo prioritario. «Una lástima que no se aplicara inmediatamente después de la "desvinculación" de Gaza [2005] y de las primeras ráfagas de misiles», se lamentaba un respetado comentarista israelí en octubre de 2008. «Si hubiéramos adoptado inmediatamente la estrategia Dahiya, probablemente nos habríamos ahorrado muchos problemas.» Cada vez que los palestinos lanzaran otro ataque con misiles, según la exhortación del ministro del Interior israelí Meir Sheetrit un mes antes, «las IDF […] tendrían que escoger un barrio de Gaza y arrasarlo»[19]. El plan de acción para la Operación Plomo Fundido podía deducirse de afirmaciones que hacían las autoridades israelíes a medida que se desarrollaba la invasión: «Lo que tenemos que hacer es actuar sistemáticamente, con la intención de castigar a todas aquellas organizaciones que están disparando los misiles y los morteros, así como a los civiles que posibilitan dispararlos y que los esconden» (general de Brigada en la reserva Amiram Levin); «Tras esta operación, no quedará un solo edificio de Hamás en pie en Gaza»

(subjefe del Estado Mayor Dan Harel); «Cualquier cosa relacionada con Hamás es un objetivo legítimo» (portavoz de las IDF, comandante Avital Leibowitz). Pero en cuanto a puro descaro y brutalidad, no obstante, sería difícil superar al viceprimer ministro Eli Yishai: «[Debería ser] posible destruir Gaza, para que entiendan que no deben meterse con nosotros […]. Es una gran oportunidad de demoler miles de casas de todos los terroristas, para que se lo piensen dos veces antes de tirar misiles. […] Espero que la operación termine con […] la completa destrucción del terrorismo y de Hamás. […] Habría que arrasarlos por completo, que miles de casas, túneles y industrias queden demolidas». El corresponsal militar del Canal 10 de noticias israelí señaló que Israel «no intenta disimular el hecho de que reacciona desproporcionadamente»[20].

Los medios de comunicación israelíes se regocijaron de la «conmoción y pavor» (Maariv) de la primera campaña aérea, que estaba diseñada para «suscitar un sentimiento de terror»[21]. No cabe duda de que la misión se cumplió. Mientras que Israel asesinó a 55 libaneses durante los primeros dos días de la guerra de 2006, asesinó a 300 gazatíes en solamente cuatro minutos del primer día de la Operación Plomo Fundido. La mayoría de los blancos se localizaban en «áreas residenciales densamente pobladas», mientras que los bombardeos comenzaron «sobre las 11:30 a. m., […] cuando las calles estaban llenas de civiles, incluyendo niños en edad escolar que salían de su turno de clases de la mañana, así como quienes se dirigían a clase en esos momentos»[22]. Un respetado analista estratégico israelí señaló unos días después de la matanza: «Las IDF, que planeaban atacar edificios y sedes pobladas por miles de personas, no los conminaron por adelantado a irse, sino que buscaban matar a muchos de ellos y lo consiguieron»[23]. Mientras tanto, Benny Morris elogiaba «el muy eficaz ataque aéreo sobre Hamás» y un analista militar estadounidense se maravillaba ante la «precisión maestra» del ataque[24]. Pero el veterano columnista israelí B. Michael no estaba tan impresionado por el despliegue de helicópteros de combate y aviones jet «sobre una cárcel gigante, disparando a la gente»[25]. Solamente el primer día, los ataques aéreos israelíes asesinaron o hirieron al menos a 16 niños, mientras que un misil de precisión manejado con un dron mató a nueve estudiantes universitarios (dos de entre ellos mujeres jóvenes) «que estaban esperando un autobús de la ONU» para volver a casa.

Human Rights Watch (HRW) concluyó que «no había combatientes palestinos activos en esa calle o en la zona adyacente justo antes o en el momento del ataque» sobre el grupo de universitarios[26]. A medida que la Operación Plomo Fundido proseguía a buen ritmo, destacadas personalidades israelíes abandonaron cualquier intento de fingir que su propósito era detener el lanzamiento de misiles de Hamás. «Recuerden que el enemigo real de Barak [el ministro de Defensa israelí Ehud Barak] no es Hamás», le contaba un exministro israelí al Crisis Group. «Es el recuerdo de 2006»[27]. Otros presumían de que «Gaza es a Líbano lo que una recuperación es para un primer examen, una segunda oportunidad para hacerlo correctamente», y de que Israel había «mandado de vuelta» a Gaza, no solamente 20 años (como hizo con el Líbano), sino «de vuelta a la década de 1940»; de que si «Israel recuperaba sus capacidades disuasorias» sería porque «la guerra en Gaza había compensado las deficiencias de […] la Guerra del Líbano»; y de que «no había duda de que el líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, estará disgustado estos días […]. No quedará ya nadie en el mundo árabe que pueda decir que Israel es débil». Un año después, recordando aquello, un corresponsal militar israelí decía que el asalto israelí «se consideraba un remedio eficaz al fracaso de la Segunda Guerra del Líbano de 2006»[28].

Thomas Friedman, el experto de The New York Times en temas internacionales, se unió al coro de aleluyas durante la Operación Plomo Fundido. Israel en realidad había ganado la Guerra del Líbano de 2006, según Friedman, porque había «dado una lección» a Hezbolá, infligiendo «un daño sustancial sobre la propiedad y bajas colaterales en Líbano». Temiendo la ira de la población libanesa, Hezbolá se lo «pensaría tres veces la próxima vez» antes de desafiar a Israel. También expresó su esperanza de que Israel «educara» a Hamás infligiendo una abultada cifra de muertos entre los militantes de Hamás y un inmenso dolor a la población de Gaza. Para justificar que la población civil libanesa fuera blanco de los ataques durante la guerra de 2006, Friedman aducía que Israel no tenía otra opción: «Hezbolá había creado una red militar muy "plana" […] profundamente imbricada en las aldeas y ciudades locales», y mientras «Hezbolá anidara entre civiles, la única fuerza disuasoria a largo plazo sería producir un daño a los civiles suficiente como para […] contener a Hezbolá en un futuro»[29].

Como hipótesis, si dejamos de lado la terminología hueca de Friedman (¿qué significa «plana»?) y dejamos también de lado que no solamente ha defendido que el asesinato de civiles es inevitable, sino que también ha defendido atacar a los civiles como estrategia de disuasión, incluso así la pregunta sigue en pie: ¿estaba Hezbolá «imbricado», «anidado» y «entrelazado» con la población civil? Una investigación exhaustiva de HRW concluye que mayoritariamente no: «Hemos encontrado pruebas concluyentes de que Hezbolá almacenaba la mayoría de sus misiles en búnkers y almacenes de armas situados en campos y valles deshabitados, de que en la amplia mayoría de los casos los combatientes de Hezbolá salían de las áreas pobladas por civiles y de que Hezbolá disparó la mayoría de sus misiles desde posiciones previamente planificadas fuera de las aldeas»; «En casi todos los casos de muertes civiles que hemos investigado, los combatientes de Hezbolá no se habían mezclado con la población civil ni habían ejercido cualquier acción que pudiera contribuir a que una casa o un vehículo particular fuera seleccionado como objetivo por parte de las fuerzas israelíes»; «Los patrones de bombardeo israelíes en Líbano apoyan la conclusión de que Hezbolá disparó buena parte de sus misiles desde campos de tabaco, plataneras, olivares y limonares y desde valles más remotos, despoblados»[30]. Una investigación del US Army War College, basada ampliamente en entrevistas con soldados israelíes que lucharon en la Guerra del Líbano de 2006, se hacía eco de las conclusiones de HRW: «Los principales campos de batalla de la campaña terrestre al sur del río Litani estaban en su mayoría libres de civiles y los participantes de las IDF informan de manera coherente de que no había o no había apenas una mezcla significativa de combatientes de Hezbolá y de civiles en la zona de combate que sirvieran como escudos»[31]. «Más que enfrentarse directamente al ejército de Israel», sigue afirmando Friedman, Hezbolá escogía como objetivo a la población civil israelí para provocar los ataques en respuesta israelíes que indudablemente matarían a civiles libaneses y «encenderían las calles arabo-musulmanas». Pero, como han mostrado numerosos estudios[32], y como los propios oficiales israelíes han ratificado[33], durante la guerra de guerrillas que libró contra el ejército de ocupación israelí, Hezbolá escogió como blanco a civiles israelíes solamente después de que Israel lo hubiera hecho con civiles libaneses. En la guerra de 2006, Hezbolá de nuevo atacó concentraciones de civiles israelíes

solamente después de que Israel infligiera pérdidas graves a civiles libaneses y el líder de Hezbolá, Sayyed Hassan Nasrallah, aseguró que atacarían a civiles israelíes únicamente «mientras el enemigo continúe su agresión sin límites ni líneas rojas»[34].

Si Israel atacaba a la población civil libanesa durante la guerra de 2006 no fue porque no tuviera otra opción y no fue porque Hezbolá lo hubiera provocado. Más bien fue porque aterrorizar a la población civil libanesa pareciera constituir un método barato de «pedagogía». Una estrategia así era claramente preferible a enzarzarse con un enemigo decidido y soportar muchas bajas en combate. No funcionó exactamente como se había planeado, no obstante. La feroz e inesperada resistencia de Hezbolá impidió que Israel se adjudicara la victoria. Pero Israel sí consiguió educar al pueblo libanés. Hezbola fue, por lo tanto, humillado para no proporcionar a Israel un casus belli dos años más tarde, durante la Operación Plomo Fundido[35]. La pedagogía israelí se anotó un éxito aún más contundente en Gaza. «Fue complicado convencer a los gazatíes, cuyas casas habían sido demolidas y sus familias y amigos asesinados», señalaba el Crisis Group después de la Operación Plomo Fundido, «de que esto era una “victoria”, como presumía Hamás»[36]. En el caso de Gaza, Israel podía también aducir una victoria militar, pero únicamente porque –en palabras de Gideon Levy– «un gran ejército está luchando contra una población indefensa y una organización débil y agotada que ha huido de las zonas de conflicto y que apenas presenta batalla»[37].

Las justificaciones de la Operación Plomo Fundido que adelantaba Friedman en las páginas de The New York Times equivalían a una apología del terrorismo de Estado[38]. De hecho, la evolución del modus operandi de Israel en su intento de recuperar su capacidad disuasoria describe una curva que inexorablemente retrocede a la barbarie. Israel en 1967 venció principalmente en el campo de batalla, aunque fuera un «tiro al plato»[39], mientras que en los siguientes enfrentamientos armados logró tanto una victoria en el campo de batalla como bombardear hasta la saciedad a la población civil. Pero Israel escogió Gaza para recuperar su capacidad de disuasión porque así esquivaba cualquiera de los riesgos de una guerra convencional. Atacó a Gaza porque estaba esencialmente indefensa. Que recurriera al puro terror revelaba, a su vez, el

relativo declive de las IDF como fuerza de combate, mientras que la celebración de la bravura militar de Israel durante y después de la Operación Plomo Fundido por parte de personajes de la talla de Benny Morris era una prueba del creciente alejamiento de la realidad de los intelectuales israelíes, así como de una buena parte de la opinión pública[40]. Un beneficio suplementario de la estrategia de disuasión de alta tecnología y libre de costes, que convertía a los civiles en objetivos militares, fue que devolvió la moral interna a Israel. Un documento interno de la ONU concluyó que «un logro destacado» de la Operación Plomo Fundido era que despejaba cualquier duda entre los israelíes acerca de «la capacidad y potencia de las IDF a la hora de asestar un golpe a sus enemigos […]. El uso de la "fuerza excesiva" […] demuestra que Israel es el amo y señor. […] Las imágenes de la destrucción estaban destinadas más a los ojos de los israelíes que a los enemigos de Israel, ojos hambrientos de venganza y de orgullo nacional»[41].

Además de recuperar su capacidad de disuasión, el principal objetivo de Israel en la Operación Plomo Fundido era ahuyentar la última amenaza que había planteado el pragmatismo palestino. Los líderes palestinos estaban alineándose demasiado con la opinión global como para que Israel se sintiera cómodo. La comunidad internacional había apoyado en su conjunto un acuerdo sobre el conflicto israelí-palestino que pedía dos Estados, basado en una completa retirada israelí hasta las fronteras anteriores a junio de 1967 y en una «resolución justa» de la cuestión de los refugiados, basada en el derecho al retorno y en una compensación[42]. Las dos excepciones notables a este acuerdo general habían sido Israel y Estados Unidos. Recordemos el voto de la Asamblea General de la ONU (UNGA) anual, en la resolución titulada «Acuerdo pacífico de la cuestión palestina». La resolución incorpora estos principios para lograr «una solución en dos Estados de Israel y Palestina»: (1) «Afirmar el principio de la inadmisibilidad de la adquisición de territorio mediante la guerra»; (2) «Reafirmar la ilegalidad de los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado desde 1967, incluyendo Jerusalén Este»; (3) «Insistir en la necesidad de: (a) La retirada de Israel del territorio palestino ocupado desde 1967, incluyendo Jerusalén Este; (b) El cumplimiento de los

derechos inalienables del pueblo palestino, principalmente el derecho de autodeterminación y el derecho a un Estado independiente»; y (4) «También insiste en la necesidad de resolver con justicia el problema de los refugiados palestinos, en conformidad con su resolución 194 (III) del 11 de diciembre de 1948»[43]. El cuadro 1 recoge el voto sobre esta resolución en los años que precedieron a la Operación Plomo Fundido.

Cuadro 1. Voto en la Asamblea General de la ONU sobre la resolución «Acuerdo pacífico de la cuestión de Palestina»

Año	Voto [sí-no-abstención]	Votos negativos emitidos por...
1997	155-2-3	Israel, Estados Unidos
1998	154-2-3	Israel, Estados Unidos
1999	149-3-2	Israel, Estados Unidos, Islas M
2000	149-2-3	Israel, Estados Unidos
2001	131-6-20	Israel, Estados Unidos, Islas M
2002	160-4-3	Israel, Estados Unidos, Islas M
2003	160-6-5	Israel, Estados Unidos, Islas M
2004	161-7-10	Israel, Estados Unidos, Austra
2005	156-6-9	Israel, Estados Unidos, Austra
2006	157-7-10	Israel, Estados Unidos, Austra
2007	161-7-5	Israel, Estados Unidos, Austra
2008	164-7-3	Israel, Estados Unidos, Austra

▪

En el nivel regional, una cumbre de 2002 de la Liga Árabe en Beirut presentó por unanimidad una iniciativa que se hacía eco del consenso de la ONU, mientras que los 57 miembros de la Organización de la Conferencia Islámica (OIC), que incluía a la República Islámica de Irán, «adoptaban la iniciativa de paz árabe para resolver el tema de Palestina y Oriente Próximo […] y decidían usar todos los medios posibles con el fin de explicar y aclarar las implicaciones completas de esta iniciativa y lograr un apoyo internacional para su implantación»[44]. La iniciativa de la Liga Árabe se comprometía no solamente a reconocer a Israel, sino también a «establecer relaciones normales» una vez que Israel implantara los términos consensuados para una paz completa.

Israel empezó a construir en 2002 una barrera física que se incrustaba aún más profundamente en Cisjordania y que adoptaba una forma sinuosa para incorporar los grandes edificios de asentamientos. La Asamblea General de la ONU pidió que el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) aclarara las «consecuencias legales que se desprendían de la construcción del muro que estaba levantando Israel». En 2004, el Tribunal emitió su pionero dictamen no vinculante[45]. En el proceso de dictaminar que el muro era ilegal, el TIJ también reiteraba elementos clave del marco jurídico para resolver el conflicto Israel-Palestina[46]. Inventariaba estas «normas y principios del derecho internacional que son relevantes para evaluar la legalidad de las medidas adoptadas por Israel»: (1) «Ninguna adquisición territorial resultado de la amenaza o del uso de la fuerza puede reconocerse como legal»; y (2) «la política y práctica de Israel estableciendo asentamientos en los territorios palestinos y en otros territorios árabes ocupados a partir de 1967» no tiene «validez legal». En sus deliberaciones posteriores sobre «si la construcción del muro ha infringido estas normas y principios», el TIJ estableció:

Tanto la Asamblea General como el Consejo de Seguridad se han referido, en lo que se refiere a Palestina, a la norma consuetudinaria de «la inadmisibilidad de la adquisición de territorio mediante la

guerra». […] Sobre esta misma base el Consejo [de Seguridad] ha condenado en varias ocasiones las medidas adoptadas por Israel para modificar el estatus de Jerusalén. […]

En lo que se refiere al principio del derecho de los pueblos a la autodeterminación […] la existencia de un «pueblo palestino» hace tiempo que ya no está en duda […]. Sus derechos incluyen el derecho a la autodeterminación. […]

[…] El Tribunal concluye que los asentamientos israelíes en los territorios ocupados palestinos (incluyendo Jerusalén Este) han sido establecidos quebrantando el derecho internacional.

Ninguno de los 15 jueces que formaban el TIJ hizo constar ninguna discrepancia con respecto a estos principios y conclusiones básicos. Apenas se puede decir, no obstante, que demostraran prejuicios en contra de Israel, o que el juicio fuera una farsa, como aducía el catedrático de Derecho de Harvard Alan Dershowitz[47]. Varios de los jueces, aunque votaron junto con la mayoría, expresaron una profunda simpatía por la causa de Israel en sus votos particulares respectivos. Si los jueces eran prácticamente unánimes en su decisión final, este consenso no surgía de un prejuicio colectivo, sino de la situación fáctica: la naturaleza incontrovertida de los principios legales en juego y la clarísima violación de estos por parte de Israel. Incluso el único juez que votó en contra de la mayoría de 14 personas que condenaba la construcción del muro israelí, Thomas Buergenthal (de Estados Unidos), se preocupó mucho por destacar que «estaba de acuerdo» con «buena parte» del dictamen no vinculante. Sobre la cuestión crítica de los asentamientos israelíes, declaraba: «El párrafo 6 del artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra […] no admite como excepción las razones militares o exigencias de seguridad. Establece que "la potencia ocupante no deportará o transferirá parte de su propia población civil al territorio que ocupa". Estoy de acuerdo en que esta medida se aplica a los asentamientos israelíes en Cisjordania y que su existencia viola el Artículo 49, párrafo 6».

También ha cristalizado un amplio consenso internacional respaldando el «derecho de retorno» de los palestinos. La resolución

anual de la ONU, apoyada mayoritariamente por los Estados miembro, pide un arreglo de la cuestión de los refugiados sobre la base de la resolución 194 de la Asamblea General de la ONU. Esta última resolución «decide que a los refugiados que deseen regresar a sus hogares y vivir en paz con sus vecinos debería permitírseles hacerlo así en la primera fecha disponible y que a aquellos que decidan no regresar deberá abonárseles una compensación por sus propiedades». Además, las organizaciones de defensa de los derechos humanos «apremian a Israel a reconocer el derecho de retorno para aquellos palestinos y sus descendientes que huyeron de un territorio que ahora está dentro del Estado de Israel y que han mantenido vínculos adecuados con dicho territorio» (HRW), y piden «que los palestinos que huyeron o fueron expulsados de Israel, de Cisjordania o de la Franja de Gaza, junto con aquellos de sus descendientes que hayan conservado vínculos auténticos con el lugar, puedan ejercer su derecho al retorno» (Amnistía Internacional)[48]. Lo bueno es que existe un amplio consenso, desde hace mucho tiempo, sobre el estatus definitivo de todo un espectro de temas supuestamente controvertidos –fronteras, asentamientos, Jerusalén Este, refugiados–, mientras que la postura de Israel en cada uno de estos temas ha sido mayoritariamente rechazada por los organismos políticos más representativos de la comunidad internacional, así como por los organismos judiciales y las organizaciones de derechos humanos del mundo.

La Autoridad Palestina no solamente estaba de acuerdo en los términos de este consenso global antes de la Operación Plomo Fundido, sino que también hizo concesiones significativas que iban aún más allá[49]. Pero ¿qué pasaba con las autoridades de Hamás en Gaza? Un estudio de 2009 de una agencia gubernamental estadounidense concluía que Hamás «había estado ajustando cuidadosa y conscientemente durante años su programa político» y que «había dado señales reiteradas de que estaba preparado para iniciar un proceso de coexistencia con Israel»[50]. Tan solo unos meses antes de la Operación Plomo Fundido, Khalid Mishal, el líder del politburó de Hamás, afirmaba en una entrevista que «la mayor parte de las fuerzas palestinas, incluyendo Hamás, aceptan un Estado en las fronteras de 1967»[51]. Incluso justo después de la devastación que causó la invasión, Mishal repetía que «el objetivo sigue siendo la constitución de un Estado palestino con Jerusalén

Este como su capital, el regreso de los israelíes a las fronteras anteriores a 1967 y el derecho al retorno de nuestros refugiados»[52]. Con una fórmula de cortesía, Mishal transmitió al expresidente estadounidense Jimmy Carter en 2006 que «Hamás aceptaba cualquier acuerdo de paz negociado entre los líderes de la OLP [Organización para la Liberación de Palestina] e Israel, siempre que después fuera aprobado por los palestinos mediante un referéndum o por un gobierno democráticamente elegido»[53]. Pero ¿qué hay de la famosa carta antisemita de Hamás? De hecho, a partir de mediados de la década de 1990, Hamás «muy pocas veces, si lo hizo alguna vez», invocaba esa carta, hasta el punto de que «ya no la cita ni se refiere» a ella[54]. Las autoridades israelíes sabían perfectamente, antes de lanzar la Operación Plomo Fundido, que se podría haber alcanzado un acuerdo diplomático con Hamás a pesar de la carta. «Los líderes de Hamás han reconocido que su objetivo ideológico no es alcanzable y que no lo será en un futuro próximo», señalaba el exdirigente del Mossad Ephraim Levy en 2008. «Están listos y dispuestos para establecer el Estado palestino en las fronteras temporales de 1967. […] Saben que en el momento en el que se instaure un Estado palestino con su colaboración […] tendrán que emprender un camino que podrá llevarlos lejos de sus fines ideológicos originales»[55].

El flagrante pragmatismo de los líderes palestinos se convirtió en un factor clave para la decisión de atacar de Israel. Después de rechazar las propuestas de alto el fuego que le hizo Hamás durante meses, Israel accedió finalmente a ello en junio de 2008[56]. Es instructivo recordar lo que ocurrió a continuación. Hamás «se preocupó mucho de mantener el alto el fuego», concedía una publicación israelí semioficial, a pesar del hecho de que Israel renegó del quid pro quo crucial de aflojar sustancialmente el asedio a Gaza. «La tregua se violaba esporádicamente con disparos de misiles y mortero efectuados por organizaciones terroristas descontroladas», continuaba esta fuente israelí. «Al mismo tiempo, el movimiento [Hamás] intentó imponer los términos del acuerdo al resto de organizaciones terroristas e impedir que estas lo violaran»[57]. El movimiento islámico en esta ocasión había respetado su palabra y, consecuentemente, se convirtió en un negociador creíble. La aceptación por parte de Hamás del acuerdo de los dos Estados, por una parte, y el alto el fuego, por otra, situó a

Israel diplomáticamente a la defensiva. Ya no podía justificar su desprecio de Hamás y era únicamente cuestión de tiempo que los europeos reanudaran el diálogo y las relaciones con el movimiento islámico. La perspectiva de un próximo gobierno estadounidense negociando con Irán y con Hamás, y acercándose al consenso internacional para resolver el conflicto entre Israel y Palestina, una postura que ahora defendían algunos legisladores centristas en Estados Unidos[58], amenazaba con arrojar una luz aún más despiadada sobre la intransigencia israelí. En su valoración anual de 2008, el Jewish People Policy Planning Institute, que tenía su sede en Jerusalén y que dirigía el temible Dennis Ross, advertía de que «la llegada del nuevo gobierno en Estados Unidos podría acompañarse de una reevaluación política completa. […] El tema de Irán podría llegar a considerarse como la clave para la estabilización de Oriente Próximo y […] podría trazarse una estrategia que persiguiera un "trato regional" completo, que incluiría un esfuerzo relativamente potente para resolver el conflicto árabo israelí»[59]. En un escenario alternativo, sobre el que más tarde especulaba Nasrallah, el líder de Hezbolá, el próximo gobierno estadounidense planeaba convocar a una conferencia internacional de paz a «americanos, israelíes, europeos y los denominados moderados árabes» para imponer un acuerdo. El único obstáculo era «la resistencia palestina y el gobierno de Hamás en Gaza»; «librarse de esa piedra en el camino es […] el fin auténtico» de la Operación Plomo Fundido[60]. En cualquier caso, Israel necesitaba provocar a Hamás para que reanudara los ataques. Si Hamás mordía el anzuelo y se desataban hostilidades armadas, quedaría descalificado como una de las partes negociadoras legítimas, pues la facción intransigente ganaría las luchas internas, o sería físicamente arrasado, para así poder llegar a un acuerdo según los términos de Israel.

No era la primera vez que Israel se enfrentaba a una triple amenaza –la iniciativa de paz de la Liga Árabe, la aceptación por parte de Palestina de un acuerdo de dos Estados, el acuerdo palestino de un alto el fuego– y tampoco era la primera vez que Israel se embarcaba en la provocación y en la guerra para ahogarla en la cuna. «A finales de la década de 1970», tal como recuerdan un par de académicos israelíes, «la solución de los dos Estados había logrado el apoyo de los líderes palestinos en los territorios ocupados, así

como el de la mayoría de los Estados árabes y de otros miembros de la comunidad internacional»[61]. Además, los líderes en los cuarteles generales de la OLP en el Líbano se habían adherido estrictamente al alto el fuego que habían negociado con Israel en 1981[62], mientras que Arabia Saudita desveló en 1981 y la Liga Árabe aprobó posteriormente un plan de paz basado en el acuerdo de los dos Estados[63]. Consciente de estos amenazantes procesos, Israel aceleró los preparativos a finales de 1981 para destruir a la OLP[64]. En su análisis de la escalada que culminó en la invasión del Líbano por parte de Israel en 1982, el analista estratégico israelí Avner Yaniv señalaba que el líder de la OLP, Yasir Arafat, estaba sopesando un compromiso histórico con el «Estado sionista», mientras que «todos los gobiernos israelíes desde 1967», así como los «principales pacifistas conocidos», se oponían a un Estado palestino. Temiendo las presiones diplomáticas, Israel maniobró para sabotear el acuerdo de los dos Estados, eliminando a la OLP como parte potencial negociadora. Llevó a cabo incursiones militares de castigo «deliberadamente desproporcionadas» sobre objetivos «civiles palestinos y libaneses» con el fin de debilitar «a los moderados de la OLP», fortalecer la facción de los «rivales radicales» de Arafat y garantizar la «inflexibilidad» de la OLP. En último término, sin embargo, Israel había tenido que elegir entre dos opciones claras: «un movimiento político que condujera a un compromiso histórico con la OLP o una acción militar preventiva contra ello». Para contener la «ofensiva de paz» de Arafat (elocuente formulación de Yaniv) Israel se embarcó en acciones militares en junio de 1982. La invasión israelí «se había visto precedida de más de un año de alto el fuego efectivo con la OLP». Pero, después de las provocadoras masacres israelíes, la última de las cuales se saldó con más de 200 civiles muertos (incluyendo a los 60 ocupantes de un hospital infantil palestino), la OLP finalmente respondió, provocando una única baja israelí. Aunque Israel se aprovechó de que la OLP retomara los ataques de misiles sobre el norte de Israel para justificar su invasión («Operación Paz en Galilea»), Yaniv concluía que la «raison d'être de toda la operación» era «destruir a la OLP como una fuerza política capaz de reclamar un Estado palestino en Cisjordania»[65].

Volvamos a la víspera de la Operación Plomo Fundido. A principios de diciembre de 2008, la ministra de Exteriores israelí Tzipi Livni

planteó que, aunque Israel podría beneficiarse de un periodo de calma temporal con Hamás, una tregua amplia «daña el fin estratégico israelí, empodera a Hamás y da la impresión de que Israel reconoce el movimiento»[66]. Traducción: un alto el fuego prolongado, que llamara la atención sobre el pragmatismo de Hamás de palabra y obra y que, por lo tanto, aumentara la presión pública sobre Israel para levantar el bloqueo y negociar un acuerdo diplomático, erosionaba el objetivo estratégico de Israel de perpetuar la ocupación. De hecho, Israel ya había decidido atacar a Hamás a principios de 2007 y únicamente aceptó la tregua de 2008 porque «el ejército israelí necesitaba tiempo para prepararse»[67]. Una vez que las piezas encajaban, Israel aún necesitaba una excusa para abortar el irritante alto el fuego. El 4 de noviembre de 2008, mientras en Estados Unidos estaban pendientes de la histórica jornada electoral (Barack Obama fue elegido presidente), Israel rompía el alto el fuego con Hamás[68] matando a militantes con la espuria excusa de prevenir una incursión de Hamás[69]. Tenía la esperanza de que una incursión mortal provocaría a Hamás y sus plegarias fueron atendidas. «El alto el fuego acordado en junio entre Israel y los grupos armados palestinos en Gaza aguantó cuatro meses y medio», señalaba Amnistía en su informe anual, «pero se rompió después de que las fuerzas israelíes mataran a seis militantes palestinos en ataques aéreos y otros ataques el 4 de noviembre»[70].

El ataque israelí, como era predecible, provocó que Hamás retomara los ataques con misiles «en respuesta» (las comillas proceden de una publicación israelí semioficial)[71]. Aun así, Hamás seguía interesado en renovar la calma relativa con Israel, según el jefe de Seguridad interna de Israel, Yuval Diskin, y estaba dispuesto a aceptar un «trato» en el que «cesaría el fuego a cambio de que se aflojaran […] las políticas israelíes que estaban estrangulando la economía de la Franja», según el excomandante de las IDF en Gaza, Shmuel Zakai[72].

Pero Israel apretó el bloqueo un grado más, mientras que exigía un alto el fuego unilateral e incondicional a Hamás. Incluso antes de que Israel intensificara el bloqueo, la ex alta comisionaria de la ONU para los derechos humanos, Mary Robinson, lamentó sus efectos: «Toda la civilización [de Gaza] ha sido destruida y no estoy

exagerando»[73]. A finales de 2008, Israel había logrado que las infraestructuras de Gaza «estuvieran a punto del colapso», según una organización de derechos humanos israelí[74]. «Comida, medicinas, combustible, piezas de recambio para la conducción de agua y los sistemas sanitarios, fertilizantes, láminas de plástico, teléfonos, papel, cola, zapatos e incluso tazas de té no llegan en cantidad suficiente o no llegan en absoluto», informaba la economista política de Harvard Sara Roy. «Una sociedad entera se está derrumbando ante nuestros ojos, pero no hay respuesta internacional más allá de las débiles advertencias de la ONU, que son ignoradas»[75].

Si Hamás no hubiera reaccionado después de la masacre del 4 de noviembre, Israel sin duda habría intensificado sus provocaciones –de la misma manera que lo hizo en los acontecimientos que llevaron a la Guerra del Líbano de 1982, hasta que la contención se volvió políticamente insostenible para Hamás–. En cualquier caso, enfrentado con la perspectiva de un asfixiante bloqueo israelí incluso si dejaba de disparar misiles, forzado a elegir entre «el hambre y la lucha»[76], Hamás optó por la resistencia, si bien en gran parte simbólica. «No puedes asestar golpes, dejar a los palestinos en Gaza en la miseria económica en la que están, y esperar que Hamás se quede ahí sentado sin hacer nada», señalaba el excomandante israelí en Gaza[77]. «Nuestros modestos proyectiles caseros», escribía el líder de Hamás, Khalid Mishal, en una carta abierta durante la invasión, «son nuestros gritos de protesta ante el mundo»[78]. Pero Israel ahora podía alegar defensa propia ante sus voluntariamente crédulos clientes occidentales, mientras se embarcaba en otra invasión brutal para frustrar otra ofensiva de paz palestina. Aparte de unas pocas adaptaciones en el guión –el coco no era el «terrorismo de la OLP», sino «el terrorismo de Hamás»; la excusa no eran los proyectiles en el norte, sino los misiles en el sur–, el remake de 2008 era sorprendentemente fiel al original de 1982, en tanto estropeó un alto el fuego que funcionaba y evitó una resolución diplomática del conflicto[79].

[1] E. Bronner, «In Israel, a Consensus That Gaza War Is a Just One», The New York Times, 13 de enero de 2009. Association for

Civil Rights in Israel, The State of Human Rights in Israel and the Occupied Territories: 2009 Report, Jerusalén, diciembre de 2009, p. 6.

[2] G. Levy, Democracy Now!, 29 de diciembre de 2008, disponible en [democracynow.org/2008/12/29/israeli_attacks_kill_over_310_in].

[3] Aunque es discutible que la decisión del primer ministro israelí Menachem Begin de bombardear el reactor iraquí OSIR AK en 1981 fuera una treta electoral, esta sencilla operación no ponía en riesgo los intereses del Estado. De hecho, la supuesta amenaza que Sadam Hussein suponía para Israel no tenía fundamento; no se había embarcado en un programa de rearme nuclear con anterioridad al bombardeo. R. Wilson, «Incomplete or Inaccurate Information Can Lead to Tragically Incorrect Decisions to Preempt: The example of OSIR AK», ponencia presentada en Erice, Sicilia, 18 de mayo de 2007, actualizada el 9 de febrero de 2008, disponible en [users.physics.harvard.edu/~wilson/publications/pp896.html]; R. Wilson, «A Visit to the Bombed Nuclear Reactor at Tuwaitha, Iraq», Nature, 31 de marzo de 1983; Wayne White, exvicedirector del Departamento de Estado para Oriente Próximo y Asia del Sur, en «Fifty-Third in the Capitol Hill Conference Series on US Middle East Policy», 20 de junio de 2008.

[4] E. Bronner, «Israel Reminds Foes That It Has Teeth», The New York Times, 29 de diciembre de 2008.

[5] B. Morris, «Why Israel Feels Threatened», The New York Times, 30 de diciembre de 2008. Gideon Levy se burlaba del incesante alarmismo de Israel como «el refugio del diablo», que «todo lo explica y todo lo justifica». «Waiting for the All Clear», Haaretz, 30 de abril de 2009.

[6] B. Morris, Righteous Victims, cit., p. 686.

[7] A. Gluska, The Israeli Military and the Origins of the 1967 War: Government, Armed Forces and Defence Policy 1963-1967, Nueva York, 2007, pp. 74-76, 80, 94-100, 103-106, 114-118.

[8] N. G. Finkelstein, Image and Reality of the Israel-Palestine

Conflict, 2.a ed. de bolsillo aumentada, Nueva York, 2003, pp. 134-140. La cita de Johnson está en la p. 135, la de Eban en la p. 139.

[9] «Memorandum for the Record», 1 de junio de 1967, Foreign Relations of the United States, 1964-1968, vol. 19, Arab-Israeli Crisis and War, 1967, Washington, DC, 2004.

[10] T. Segev, 1967: Israel, the War, and the Year that Transformed the Middle East, Nueva York, 2007, p. 293, cursivas mías.

[11] Z. Maoz, Defending the Holy Land: A Critical Analysis of Israel's Security and Foreign Policy, Ann Arbor, 2006, p. 89.

[12] B. S. Lambeth, Air Operations in Israel's War against Hezbollah: Learning from Lebanon and Getting it Right in Gaza, Arlington, VA, 2011, p. 97; M. Kalman, «Israel Set War Plan More than a Year Ago», San Francisco Chronicle, 21 de julio de 2006.

[13] W. Arkin, Divining Victory: Airpower in the 2006 Israel-Hezbollah War, Maxwell Air Force Base, AL, 2007, pp. xxv-xxvi, 54, 135, 147-148.

[14] Ibid., pp. xxi, 25, 64.

[15] A. Exum, Hizballah at War: A Military Assessment, Washington, DC, 2006, pp. 9, 11-12.

[16] Reut Institute, Building a Political Firewall against Israel's Delegitimization, Tel Aviv, 2010, § 35.

[17] B. Morris, «A Second Holocaust? The Threat to Israel», 2 de mayo de 2008, disponible en [http://www.mideastfreedomforum.org/fileadmin/editors_de/Audio/Iran_Konferenz_2008/Panel_1/07_-_Benny_Morris.mp3]. Cuando Israel volvió a amenazar con atacar a Irán a finales de 2009 y principios de 2010, Morris retomó su característica actuación de 2008, evocando escenarios apocalípticos si Estados Unidos no respaldaba un ataque israelí. B. Morris, «Obama's Nuclear Spring», The Guardian, 24 de noviembre de 2009; B. Morris, «When Armageddon Lives Next Door», Los Angeles Times, 16 de abril de

2010.

[18] Y. London, «The Dahiya Strategy», ynetnews.com, 6 de octubre de 2008; G. Eiland, «The Third Lebanon War: Target Lebanon», Strategic Assessment, noviembre de 2008; G. Siboni, «Disproportionate Force: Israel’s concept of response in light of the Second Lebanon War», Institute for National Security Studies, 2 de octubre de 2008; A. Harel, «Analysis: IDF plans to use disproportionate force in next war», Haaretz, 5 de octubre de 2007; J. Nasr, «Israel warns Hezbollah war would invite destruction», Reuters, 2 de octubre de 2008; J.-L. Samaan, «The Dahya concept and Israeli military posture vis-à-vis Hezbollah since 2006», Comparative Strategy, 2013.

[19] Y. London, «Dahiya Strategy», cit.; A. Somfalvi, «Sheetrit: We should level Gaza neighborhoods», ynetnews.com, 2 de octubre de 2008.

[20] «Israeli General Says Hamas Must Not Be the Only Target in Gaza», IDF Radio, Tel Aviv, 26 de diciembre de 2008; BBC Monitoring Middle East; T. Dadon, «Deputy Chief of Staff: Worst still ahead», ynetnews.com, 29 de diciembre de 2008; «B’Tselem to Attorney General Mazuz: Concern over Israel targeting civilian objects in the Gaza Strip», 31 de diciembre de 2008; Report of the United Nations Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict, 25 de septiembre de 2009, § 1204; a partir de ahora citado como Informe Goldstone. Véase también Public Committee against Torture in Israel (PCATI), No Second Thoughts: The Changes in the Israeli Defense Forces’ Combat Doctrine in Light of «Operation Cast Lead», Jerusalén, 2009, pp. 20-28.

[21] S. Milne, «Israel’s onslaught on Gaza is a crime that cannot succeed», The Guardian, 30 de diciembre de 2008; S. Fogelman, «Shock and Awe», Haaretz, 31 de diciembre de 2010.

[22] Amnesty International, Operation «Cast Lead»: 22 Days of Death and Destruction, Londres, 2009, p. 47.

[23] R. Pedatzur, «The Mistakes of Cast Lead», Haaretz, 8 de enero de 2009.

[24] B. Morris, «Why Israel feels threatened»; M. M. Matthews, «The Israeli Defense Forces response to the 2006 War with Hezbollah», Military Review, julio-agosto de 2009, p. 45.

[25] B. Michael, «Déjà vu in Gaza», ynetnews.com, 29 de diciembre de 2008.

[26] Al Mezan Center for Human Rights, Bearing the Brunt Again: Child Rights Violations During Operation Cast Lead 2009, p. 28; Human Rights Watch, Precisely Wrong: Gaza Civilians Killed by Israeli Drone-launched Missiles, 2009, pp. 14-17.

[27] International Crisis Group, Ending the War in Gaza, 2009, p. 18. Defendiendo la Operación Plomo Fundido, a la vez que olvidando voluntariamente su objetivo actual, el filósofo israelí Asa Kasher opinaba que «un Estado democrático […] no puede usar a los seres humanos como meros instrumentos para crear disuasión», porque «los seres humanos no son instrumentos de nada» y «matar por disuasión se puede emparentar con el terrorismo». A. Kasher, «Operation Cast Lead and Just War Theory», Azure, verano de 2009, p. 51; A. Kasher, «A Moral Evaluation of the Gaza War», The Jerusalem Post, 7 de febrero de 2010.

[28] A. Harel y A. Issacharoff, «Israel and Hamas are both paying a steep price in Gaza», Haaretz, 10 de enero de 2009; A. Shavit, «Israel's victories in Gaza make up for its failures in Lebanon», Haaretz, 12 de enero de 2009; G. Bechor, «A dangerous victory», ynetnews.com, 12 de enero de 2009; A. Harel, «Israel Stuck in the mud on internal Gaza probe», Haaretz, 30 de enero de 2010.

[29] T. L. Friedman, «Israel's coals in Gaza?», The New York Times, 14 de enero de 2009. Véase también T. L. Friedman, «War, timeout, war, time…», The New York Times, 26 de junio de 2010.

[30] Human Rights Watch, Why They Died: Civilian Casualties in Lebanon during the 2006 War, Nueva York, 2007, pp. 5, 14, 40-41, 45-46, 48, 51, 53.

[31] S. Biddle y J. A. Friedman, The 2006 Lebanon Campaign and the Future of Warfare: Implications for Army and Defense Policy, Carlisle, PA, 2008, pp. 43-45. En una nota adjunta, el estudio

mencionaba que «la gran mayoría de los combatientes de Hezbolá llevaban uniforme. De hecho, su vestimenta y material eran bastante parecidos a la mayoría de los cuerpos militares estatales, con monos verdes o tono desierto, cascos, chalecos de rejilla, chalecos antibalas, placas de identidad e insignias de rango».

[32] Human Rights Watch, Civilian Pawns: Laws of War Violations and the Use of Weapons on the Israel-Lebanon Border, Nueva York, 1996; Z. Maoz, Defending the Holy Land, pp. 213-214, 224-225, 252; A. R. Norton, Hezbollah: A Short History, Princeton, 2007, pp. 77, 86.

[33] J. P. Harik, Hezbollah: The Changing Face of Terrorism, Londres, 2004, pp. 167-168.

[34] Human Rights Watch, Civilians under Assault: Hezbollah's Rocket Attacks on Israel in the 2006 War, Nueva York, 2007, p. 100. HRW afirma que los ataques de Hezbolá con misiles sobre la población civil israelí no fueron en respuesta, pero no aporta pruebas que lo apoyen.

[35] Y. Evron, «Deterrence: The campaign against Hamas», Strategic Assessment, febrero de 2009, p. 81; International Crisis Group, Gaza's Unfinished Business, 2009, p. 19, n. 198.

[36] International Crisis Group, Gaza's Unfinished Business, cit., pp. 7-8.

[37] G. Levy, «The IDF Has No Mercy for the Children in Gaza Nursery School», Haaretz, 15 de enero de 2009.

[38] G. Greenwald, «Tom Friedman Offers a Perfect Definition of "Terrorism"», Salon.com, 14 de enero de 2009.

[39] «Memorandum for the Record», 17 de noviembre de 1968, n. 13, Foreign Relations of the United States, 1964-1968. La cita es de W. W. Rostow, un asesor de alto rango del presidente Johnson.

[40] A. Kulick, «"Lebanon Lite": Lessons from the Operation in Gaza and the Next Round against Hizbollah», Military and Strategic Affairs, abril de 2009, pp. 57, 59.

[41] International Crisis Group, Gaza’s Unfinished Business, cit., p. 19.

[42] N. Chomsky, The Fateful Triangle: The United States, Israel and the Palestinians, Boston, 1983, cap. 3; N. G. Finkelstein, Knowing Too Much: Why the American Jewish Romance with Israel Is Coming to an End, Nueva York, 2012, pp. 203-221.

[43] La formulación de esta sección de la resolución ha variado ligeramente de año en año.

[44] Final Communiqué of the Twenty-Ninth Session of the Islamic Conference of Foreign Ministers Session of Solidarity and Dialogue, Jartún, 25-27 de junio de 2002. A manos de los propagandistas de Israel, este hecho se transmutó en la sentencia: «Los 57 miembros de la OIC son todos virulentamente contrarios a Israel». R. Shepherd, A State Beyond the Pale: Europe’s Problem with Israel, Londres, 2009, p. 205. Posteriormente la OIC se rebautizó como Organizacion para la Cooperación Islámica. Irán también votó de acuerdo con la mayoría de la Asamblea General de la ONU en la resolución sobre un «acuerdo pacífico».

[45] Tribunal Internacional de Justicia, dictamen no vinculante Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, 9 de julio de 2004.

[46] Para un análisis en detalle, véase N. G. Finkelstein, Knowing Too Much, cit., pp. 307-353.

[47] A. C. Esensten, «Dershowitz Advises Israel on Wall Dispute», Harvard Crimson, 24 de febrero de 2004.

[48] «Human Rights Watch Urges Attention to Future of Palestinian Refugees», 21 de diciembre de 2000, disponible en [hrw.org/en/news/2000/12/21/human-rights-watch-urges-attention-future-palestinian-refugees]; «Israel, Palestinian Leaders Should Guarantee Right of Return as Part of Comprehensive Refugee Solution», 21 de diciembre de 2000, disponible en [hrw.org/en/news/2000/12/21/Israel-palestinian-leaders-should-guarantee-right-return-part-comprehensive-refugee]; Amnesty International, The Right to Return: The Case of the Palestinians. Policy Statement, Londres, 29

de marzo de 2001.

[49] N. G. Finkelstein, Knowing Too Much, cit., pp. 229-248.

[50] P. Scham y O. Abu-Irshaid, Hamas: Ideological Rigidity and Political Flexibility, United States Institute of Peace Special Report, Washington, DC, 2009, pp. 2-4. Véase también K. Hroub, «A “New Hamas” through Its New Documents», Journal of Palestine Studies, verano de 2006; y J. Gunning, Hamas in Politics: Democracy, Religion, Violence, Nueva York, 2008, pp. 205-206, 236-237. La evolución política de Hamás seguía los pasos de la de la OLP, en la cual la reivindicación de un Estado en la totalidad de Palestina fue sustituida primero por una estrategia de liberación por «fases» que empezara por un Estado en Cisjordania y Gaza y después por la aceptación de un acuerdo de dos Estados. S. Mishal y A. Sela, The Palestinian Hamas: Vision, Violence, and Coexistence, Nueva York, 2006, pp. 108-110.

[51] M. Rabbani, «A Hamas Perspective on the Movement’s Evolving Role: An interview with Khalid Mishal, Part II», Journal of Palestine Studies, verano de 2008.

[52] G. Perrelli, «Con Israele non sarà mai pace», entrevista con Khalid Mishal, L’espresso, 26 de febrero de 2009.

[53] J. Carter, We Can Have Peace in the Holy Land: A Plan that will Work, Nueva York, 2009, pp. 137, 177. Véase también N. al-Mughrabi, «Hamas Would Honor Referendum on Peace with Israel», Reuters, 1 de diciembre de 2010.

[54] K. Hroub, Hamas: Political Thought and Practice, Washington, DC, 2000, p. 44. Véase también p. 254; S. Zuhur, Hamas and Israel: Conflicting Strategies of Group-based Politics, Carlisle, PA, 2008, pp. 29-31 (este estudio fue publicado por el Strategic Studies Institute of the US Army War College). Véase también J. Gunning, Hamas in Politics, cit., pp. 19-20.

[55] «What Hamas Wants», The Mideast Mirror, 22 de diciembre de 2008.

[56] S. Zuhur, Hamas and Israel, cit., pp. ix, 14.

[57] Intelligence and Terrorism Information Center at the Israel Intelligence Heritage and Commemoration Center, The Six Months of the Lull Arrangement, diciembre de 2008, pp. 2, 6, 7; véase también el punto 3, «Defense Minister Barak’s Discussions…» (29 de agosto de 2008), WikiLeaks. Según los egipcios que negociaron el alto el fuego de 2008, este preveía un cese inmediato de las hostilidades armadas, una retirada gradual del bloqueo económico que, después de diez días, debía permitir el paso de todos los productos, con la excepción de los materiales empleados para la fabricación de proyectiles y explosivos; así como negociaciones tres semanas después para un intercambio de presos y para la apertura del paso de Rafah. International Crisis Group, Ending the War in Gaza, p. 3; Carter, We Can Have Peace, pp. 137-138. Después del intento de golpe de 2007, que condujo a la consolidación del poder de Hamás en Gaza (véase cap. I), Israel restringió duramente la entrada de mercancías «que no se consideraran esenciales para la subsistencia básica de la población». Permitía el paso únicamente de «un mínimo humanitario», un criterio que se decidía arbitrariamente, que no era sancionado mediante el derecho internacional y que, de hecho, no cubría en absoluto las necesidades humanitarias mínimas de Gaza. Gisha (Legal Center for Freedom of Movement), Red Lines Crossed: Destruction of Gaza’s Infrastructure, 2009, pp. 11, 13, 41-42, 45-46, 50; véase también Oxfam et al., The Middle East Quartet: A Progress Report, 25 de septiembre de 2008, pp. 14-15; UNICEF, Humanitarian Action Update, 23 de octubre de 2008; Amnesty International, «Gaza Ceasefire at Risk», 5 de noviembre de 2008; Gisha, «Israel Reveals Documents Related to the Gaza Closure Policy», 21 de octubre de 2010.

[58] R. N. Haass y M. Indyk, «Beyond Iraq: A new US strategy for the Middle East»; y W. R. Mead, «Change they can believe in: to make Israel safe, give Palestinians their due», en Foreign Affairs, enero-febrero de 2009.

[59] The Jewish People Policy Planning Institute, Annual Assessment 2008, Jerusalén, 2008, p. 27. Ross ha sido uno de los principales artífices de la política estadounidense en el conflicto Israel-Palestina.

[60] Discurso del secretario general de Hezbolá, general Sayyed

Hassan Nasrallah ante el Consejo Central Ashura, 31 de diciembre de 2008.

[61] S. Mishal y A. Sela, Palestinian Hamas, cit., p. 14.

[62] N. Chomsky, Fateful Triangle, cit., caps. 3, 5.

[63] Y. Lukacs (ed.), The Israeli-Palestinian Conflict: A Documentary Record, 1967-1990, Cambridge, 1992, pp. 477-479.

[64] Y. Harkabi, Israel's Fateful Hour, Nueva York, 1988, p. 101.

[65] A. Yaniv, Dilemmas of Security: Politics, Strategy and the Israeli Experience in Lebanon, Oxford, 1987, pp. 20-23, 50-54, 67-70, 87-89, 100-101, 105-106, 113, 143 y p. 294, n. 46; R. Fisk, Pity the Nation: The Abduction of Lebanon, Nueva York, 1990, pp. 197, 232. En su historia del «proceso de paz», Martin Indyk, ex embajador estadounidense en Israel, hacía este resumen de la secuencia de acontecimientos que acabamos de narrar: «En 1982, las actividades terroristas de Arafat provocaron que el gobierno israelí de Menachem Begin y Ariel Sharon invadieran por completo el Líbano». M. Indyk, Innocent Abroad: An Intimate Account of American Peace Diplomacy in the Middle East, Nueva York, 2009, p. 75.

[66] S. Bannoura, «Livni calls for a large scale military offensive in Gaza», IMEMC, 8 de diciembre de 2008; «Livni "ashamed" of State of Gaza truce», The Jerusalem Post, 9 de diciembre de 2008.

[67] U. Blau, «IDF Sources: Conditions not yet optimal for Gaza exit», Haaretz, 8 de enero de 2009; B. Ravid, «Disinformation, secrecy, and lies: How the Gaza offensive came about», Haaretz, 28 de diciembre de 2008.

[68] Un minucioso estudio que cubre el periodo 2000-2008 demostraba que «mayoritariamente» era «Israel quien atacaba después de una pausa en el conflicto». N. Kanwisher, J. Haushofer y A. Biletzki, «Reigniting Violence: How do ceasefires end?», The Huffington Post, 6 de enero de 2009; véase también J. Haushofer, A. Biletzki y N. Kanwisher, «Both sides retaliate in the Israeli-Palestinian conflict», Proceedings of the National Academy of

Sciences of the United States, 4 de octubre de 2010, que establecía que la violencia palestina, lejos de ser azarosa y sin sentido, «revelaba un patrón de respuesta». Igualmente, fue Israel y no Hamás quien rompió la tregua de facto después de su redespliegue en Gaza a finales de 2005. 30 palestinos fueron asesinados en los tres meses que siguieron al redespliegue, sin que muriera un solo israelí. Israel insistió además en su práctica ilegal de los «asesinatos selectivos», a pesar del alto el fuego unilateral de Hamás después de ganar las elecciones de 2006 y su consiguiente trayectoria diplomática, que buscaba una «paz por etapas» con Israel. J. Slater, «A perfect moral catastrophe: Just war philosophy and the Israeli attack on Gaza», Tikkun, marzo-abril de 2009; J.-P. Filiu, Gaza, cit., pp. 288-291. Para demostrar que Hamás no estaba impulsado por el pragmatismo y el «agravio legítimo», sino por una ideología sanguinaria, un par de veteranos apologetas señalaron los ataques con misiles después del redespliegue de Israel en Gaza en 2005:

«Durante el ascenso al poder de Hamás (enero de 2006 a abril de 2008), se lanzaron más de 2.500 misiles desde Gaza, impactando en ciudades y pueblos israelíes. Israel ya no ocupa Gaza, pero los misiles siguen, bajo el control de Hamás. Hay quien dice que los misiles son una respuesta a las represalias israelíes. Pero esto es fácil de refutar. Si no hubiera misiles, es muy improbable que Israel tuviera razones para responder. Incluso en periodos sin represalias, ha seguido el lanzamiento de misiles» [D. Ross y D. Makovsky, Myths, Illusions and Peace: Finding a New Direction for America in the Middle East, Nueva York, 2009, p. 255 (véase también ibid., pp. 138-139, 243, 252)].

Una vez que se recupera el registro de los hechos, refutar esta supuesta prueba es coser y cantar: incluso dejando de lado que Israel seguía ocupando Gaza e imponiendo un bloqueo ilegal, era Israel, y no Hamás, quien «mayoritariamente» rompía el alto el fuego.

[69] Z. Bar'el, «Crushing the Tahadiyeh», Haaretz, 16 de noviembre de 2008; U. Avnery, «The Calculations behind Israel's Slaughter of

Palestinians in Gaza», redress.cc, 2 de enero de 2009.

[70] Amnesty International Report 2009: The State of the World's Human Rights, 2009, apartado «Israel and the Occupied Palestinian Territories», pp. 182-183; véase también Human Rights Watch, Rockets from Gaza: Harm to Civilians from Palestinian Armed Groups' Rocket Attacks, Nueva York, 2009, p. 2.

[71] Intelligence and Terrorism Information Center, Six Months, p. 3.

[72] «Hamas wants better terms for truce», The Jerusalem Post, 21 de diciembre de 2008; B. Burston, «Can the first Gaza war be stopped before it starts?», Haaretz, 22 de diciembre de 2008. Diskis le dijo al gobierno israelí que Hamás renovaría la tregua si Israel levantaba el asedio de Gaza, cesaba en los ataques militares y ampliaba la tregua a Cisjordania. Robert Pastor, asesor sobre Oriente Próximo del Carter Center, testificaba que en diciembre de 2008 él, personalmente, había presentado al gobierno israelí una oferta de Khalid Mishal para renovar el alto el fuego de junio de 2008 si Israel detenía el bloqueo tal como se estipulaba en el acuerdo de alto el fuego de junio. Israel se opuso. «La conclusión parece clara», informaba Pastor: «Israel ha tenido la opción de dar los pasos y, si lo hubiera hecho, no habría habido más misiles». R. Pastor, «Memorandum to the UN Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict: Operation "Cast Lead" and the right of self-defense», 6 de diciembre de 2009; R. Pastor, «Email: Israeli invasion of Gaza, December 2008», 8 de diciembre de 2013. Copias en mi archivo personal.

[73] «Gaza Residents "Terribly Trapped"», BBC News, 4 de noviembre de 2008.

[74] Gisha, Red Lines, cit., pp. 5, 26, 33.

[75] S. Roy, «If Gaza Falls…», London Review of Books, 1 de enero de 2009. Para una completa descripción del bloqueo en sus diversas fases y en su impacto devastador a largo plazo, véase S. Roy, The Gaza Strip: The Political Economy of De-development, 3.a ed. aumentada, Washington, DC, 2016, pp. xxx-lxix.

[76] International Crisis Group, Ending the War in Gaza, cit., pp. 3, 10-11.

[77] B. Burston, «Can the First Gaza War», cit.

[78] K. Mishal, «This Brutality Will Never Break Our Will to Be Free», The Guardian, 6 de enero de 2009.

[79] No ha sido, por cierto, la primera vez que Israel buscó provocar a Hamás después de que este propusiera un modus vivendi. En septiembre de 1997, solo unos días antes del intento frustrado de asesinato de Khalid Mishal por parte de Israel, el rey de Jordania Hussein mandó un mensaje de parte de los líderes de Hamás al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. En este mensaje, Hamás proponía abrir un diálogo indirecto con el gobierno israelí, con la mediación del rey, con el fin de lograr un cese de la violencia, así como una «discusión sobre todos los temas». Pero el mensaje se ignoró o se perdió o, en cualquier caso, se volvió irrelevante después del intento de asesinato del dirigente de Hamás. S. Mishal y A. Sela, Palestinian Hamas, cit., p. 72; véase también P. McGeough, Kill Khalid: The Failed Mossad Assassination of Khalid Mishal and the Rise of Hamas, Nueva York, 2009, esp. pp. 141, 146, 226.

III. EL CONTROL DEL RELATO

Molesto con las imágenes de la carnicería que desde Gaza inundaban los medios de comunicación internacionales, Israel y sus partidarios se dispusieron a reparar la reputación mancillada del Estado judío. Poco después de que terminara la Operación Plomo Fundido, el 18 de enero de 2009, Anthony Cordesman publicó un informe titulado The «Gaza War»: A Strategic Analysis[1]. Merece que se lo estudie atentamente tanto porque Cordesman había sido un influyente analista militar[2], como porque el informe sintetizaba y sistematizaba ordenadamente las respuestas improvisadas de Israel a medida que aumentaban las críticas por la invasión.

El informe de Cordesman exculpaba en buena parte a Israel de conducta incorrecta y concluía explícitamente que «Israel no había violado el derecho bélico»[3]. No obstante, Cordesman también añadía la «advertencia clave» de que él no estaba emitiendo un juicio «legal o moral» sobre la conducta de Israel y de que «analistas no formados en las complejas leyes de la guerra» no debían hacer tales juicios. Su absoluta absolución, por una parte, y su curiosa advertencia, por la otra, no acababan de casar. Afirmaba que ni el «derecho bélico» ni «los precedentes históricos» prohibían «el empleo por parte de Israel de ingentes cantidades de fuerza», mientras que también, y al mismo tiempo, se refrenaba de aventurar un juicio «legal o moral» sobre el tema de la «proporcionalidad»[4]. Absolvía a Israel de culpabilidad y de delito a la vez que invocaba agnosticismo. También alegaba que las leyes de la guerra «a menudo eran difíciles o imposibles de aplicar»[5]. Si esto era así, ¿cómo llegaba a la conclusión de que «Israel no había violado las leyes de la guerra»? Además afirmaba que las leyes de la guerra tenían un sesgo en contra de Israel, porque «no maniatan o refrenan a actores no estatales como Hamás»[6]. En el plano práctico, no resulta inmediatamente evidente que las leyes de la guerra hayan maniatado o refrenado tampoco a Israel. Dicho esto, «las leyes de la guerra», según el catedrático de Derecho de Harvard Duncan Kennedy, en realidad «favorecen a las fuerzas

convencionales frente a las no convencionales en un conflicto bélico asimétrico»[7].

El análisis que presentaba Cordesman se basaba por completo en «reuniones en Israel […] posibilitadas por una visita patrocinada por Project Interchange y usando informes diarios emitidos por el portavoz de la Defensa israelí»[8]. ¿No debería haber mencionado que Project Interchange está afiliado al reflexivo y apologético American Jewish Committee? A lo largo de su viaje pagado, Cordesman da completo crédito a las declaraciones de la cúpula israelí. Y, a la inversa, comentaristas israelíes muy respetados cada vez son más escépticos con las fuentes gubernamentales israelíes. «Las autoridades estatales, incluyendo a la cúpula de defensa y sus ramas», observaba Uzi Benziman en Haaretz, «se han ganado una dudosa reputación en lo que respecta a su credibilidad». Los «comunicados oficiales que publican las IDF cada vez se liberan más de las limitaciones de la verdad», escribía B. Michael en Yediot Ahronot, y «el corazón de la estructura de poder» –es decir, la policía, el ejército y los servicios de inteligencia– ha sido infectado por una «cultura de la mentira»[9]. Durante la Operación Plomo Fundido, Israel fue repetidamente pillado falseando, entre otras muchas cosas, su despliegue de fósforo blanco[10]. A medida que la invasión proseguía, un portavoz de las IDF dijo en la CNN: «No puedo decirle con certeza que no se esté usando en absoluto el fósforo blanco», mientras que el jefe del Estado Mayor de las IDF, Gabi Ashkenazi, le dijo al Comité de Asuntos Exteriores y Defensa del Knesset: «Las IDF actúan únicamente según lo que el derecho internacional permite y no emplean fósforo blanco»[11]. Incluso después de que numerosas organizaciones de derechos humanos documentaran y concluyeran que Israel empleaba ilegalmente el fósforo blanco, una «investigación militar» israelí insistía en esa prevaricación[12]. Un exanalista de alto rango del Pentágono y analista militar senior en Human Rights Watch, recordando la sarta de mentiras de Israel tanto durante la Guerra del Líbano de 2006 como durante la Operación Plomo Fundido, hacía una pregunta retórica: «¿Cómo puede confiar nadie en el ejército israelí?»[13].

Una parte del «análisis estratégico» de Cordesman consistía en reproducir palabra por palabra las notas de prensa diarias de las fuerzas aéreas israelíes y de los portavoces del ejército.

Amablemente les cambiaba el nombre por «cronologías» de la guerra, aducía que ofrecían un «análisis profundo» de lo que ocurría[14] y las reciclaba una y otra vez. Por ejemplo, salpica su texto con diversas versiones de estas afirmaciones: «Las IDF continuarán actuando contra los operativos del terror y contra cualquier persona implicada, incluyendo a quienes patrocinan y albergan a terroristas y a quienes envían a mujeres y niños inocentes para que se les use como escudos humanos»; «Las IDF no dudarán en golpear a quienes estén tanto directa como indirectamente implicados en ataques contra los ciudadanos del Estado de Israel»; «Las IDF continuarán operando contra la infraestructura del terror de Hamás en la Franja de Gaza, según los planes, con el fin de reducir el lanzamiento de misiles en el sur de Israel»; «Los efectivos del Cuerpo de Infantería, de la División Acorazada, de la División de Ingeniería, del cuerpo de Artillería y de la División de Inteligencia continúan operando durante la noche contra la infraestructura terrorista de Hamás en toda la Franja de Gaza»[15]. Buena parte del informe de Cordesman, en otras palabras, se limita a repetir ad nauseam los materiales promocionales genéricos del ejército israelí. Mientras tanto, en un punto de conflicto específico, reproduce una nota de prensa israelí que afirma que Israel ha derribado «un vehículo que transportaba una remesa de misiles Grad»[16]. Pero una investigación simultánea de B'Tselem (el Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados) concluyó, y con el tiempo las IDF lo admitieron, que, casi sin ninguna duda, eran bombonas de oxígeno[17]. El vehículo fue impactado por un ataque de misiles de precisión por control remoto y el ataque produjo ocho muertes civiles, aunque, según HRW, «el avanzado equipo de rastreo del dron debería haber permitido que quien operara el dron tuviera clara la naturaleza de los objetos que vigilaba»[18]. Se diría que quien manejaba el dron hubiera apuntado deliberadamente a un vehículo civil que conducía a no combatientes. Cordesman también alega que los datos oficiales israelíes eran «mucho más creíbles» que los datos no israelíes, como las fuentes de la ONU. Basaba esta conclusión, entre otras cosas, en el hecho de que «muchos israelíes creen que las fuentes de la ONU tienen un fuerte sesgo en favor de los palestinos»[19]. ¿Debería darse crédito a la cifra israelí según la cual los combatientes de Hamás sumaban dos tercios de las víctimas mortales en Gaza[20], incluso aunque haya

sido desmentida por todas las fuentes independientes respetadas?[21]. Cordesman proclamaba, en especial, el cuidado excepcional que tuvo Israel durante la Operación Plomo Fundido de limitar las bajas civiles y el daño a la infraestructura civil. Argumentaba que «todo aspecto» del plan de ataque de las fuerzas aéreas israelíes «se basaba en un detallado análisis de objetivos, que explícitamente evaluaba el riesgo para los civiles y la localización de lugares sensibles como escuelas, hospitales, mezquitas, iglesias y otros lugares sagrados»; que Israel usó el «mínimo armamento posible», junto con sistemas de guía de precisión, para «desvincular los objetivos militares del daño a las instalaciones civiles»; que «Israel planificaba sus campañas aéreas y tierra-aire de maneras que claramente distinguían entre objetivos civiles y militares y que su intención era limitar las bajas civiles y los daños colaterales»[22]. Si él podía afirmar tranquilamente esas precauciones era porque sus interlocutores israelíes y las notas de prensa israelíes se las confirmaban repetidamente.

Israel no solamente tuvo que lidiar con una cobertura mediática adversa durante la Operación Plomo Fundido, sino con una avalancha de informes posteriores sobre derechos humanos que condenaban su manera de ejecutar la invasión. Debido al alto número de estos informes, al amplio abanico de instituciones respetadas que los publicaban y a la uniformidad de sus principales conclusiones, estos informes no se podían desdeñar tan fácilmente como propaganda antiisraelí[23]. Aunque los informes hacían un uso amplio de los testigos oculares palestinos, estos testimonios tampoco podían rechazarse fácilmente como inspirados por Hamás o sospechosos de intimidación por parte de Hamás. «Los delegados que han visitado Gaza durante o después de la Operación Plomo Fundido», observaba Amnistía Internacional, «pudieron efectuar su investigación sin obstáculos y la gente a menudo expresaba críticas a la conducta de Hamás, incluyendo los ataques con misiles»[24].

La censura generalizada por parte de profesionales de los derechos humanos obligó a Israel a publicar en 2009 un informe «fáctico y legal» en su defensa, The Operation in Gaza[25]. Alegaba que estos informes críticos sobre los derechos humanos «muy a menudo» suponían un «juicio precipitado», puesto que se publicaban «unas pocas horas, días o semanas» después de la Operación Plomo

Fundido[26]. De hecho, la mayoría de los informes se publicaron meses después. La evidencia crítica aducida por el informe israelí consistía en buena parte en testimonios recabados de los detenidos palestinos durante su «interrogatorio». Las circunstancias que rodean estas supuestas confesiones arrojan dudas sobre su valor probatorio. El Informe Goldstone averiguó que los detenidos palestinos atrapados durante Plomo Fundido fueron «sometidos […] a un trato cruel, inhumano y degradante durante todo su calvario con la intención de aterrorizarlos, intimidarlos y humillarlos. Los hombres fueron obligados a desnudarse, a menudo por completo, en diferentes etapas de su encierro. Todos los hombres iban esposados de la manera más dolorosa y con los ojos tapados, lo que aumentaba su sensación de miedo e indefensión»; «Se mantuvo a hombres, mujeres y niños junto a las posiciones de los tanques y la artillería, donde constantemente había disparos y explosiones, por lo tanto no solamente exponiéndolos al peligro, sino aumentando su miedo y terror»; los detenidos palestinos fueron «objeto de palizas y otros abusos físicos que suponen tortura», fueron «usados como escudos humanos» y fueron sometidos «no solo a métodos de interrogación que se consideran tortura […] sino también a la coerción física y moral de civiles para obtener información»[27]. Se diría, entonces, que habría que tomar las «confesiones» de estos detenidos palestinos con pinzas.

Eludiendo las afirmaciones acusatorias de estos informes sobre derechos humanos, el memorando de Israel declaraba que «adoptó medidas extensas para cumplir con las obligaciones del derecho internacional» y que «el modo de operación [de las IDF] reflejaba la extensa formación de los soldados de las IDF para respetar las obligaciones que imponía el derecho internacional»[28]. En especial, alegaba que las fuerzas israelíes solamente disparaban a objetivos legítimos y que ejercían la máxima precaución viable. Las IDF dirigían sus ataques «únicamente contra objetivos militares» y se esforzaban por garantizar que «los civiles y los objetos civiles no fueran dañados»; «Cuando no se podía evitar un daño incidental a civiles o a propiedad civil, las IDF hacían un esfuerzo extraordinario para garantizar que no fuera excesivo»; las IDF «usaban las municiones menos destructivas a su alcance para lograr los objetivos militares legítimos», así como «armas sofisticadas de precisión para minimizar el daño a civiles»; las IDF «comprobaban y

recomprobaban cuidadosamente los objetivos […] para asegurarse de que se empleaban para actividades terroristas o de combate, y no únicamente para uso civil»[29].

Basándonos en lo que periodistas y organizaciones de derechos humanos descubrieron, y en lo que testificaron más tarde soldados de a pie israelíes, surge un cuadro totalmente diferente de la Operación Plomo Fundido. «Nos vamos a la guerra», les dijo el oficial de una compañía a sus soldados antes del ataque. «Quiero agresividad. Si hay alguien sospechoso en el último piso de una casa, la volamos. Si tenemos sospechas sobre una casa, la derribamos. […] No habrá vacilaciones»[30]. Un combatiente recordaba una reunión con su comandante de brigada y otros donde las «normas de combate», «esencialmente», se expresaron en la línea de «si ves algún signo de movimiento, dispara»[31]. Otros soldados recordaban: «Si al segundo oficial del batallón le parecía una casa sospechosa, la volábamos. Si a los soldados de infantería no les gustaba la pinta de esa casa, disparábamos» (soldados sin identificar); «Si nos encontrábamos ante una zona tapada por un edificio, se derribaba el edificio. No se preguntan cosas como "¿quién vive en ese edificio?"» (soldado recordando las órdenes de su comandante de brigada); «En cuanto a las normas de combate, el ejército trabaja con la hipótesis de que en toda la zona no habría civiles. […] A cualquiera que se encontrara allí, por lo que respecta al ejército, habría que matarlo» (soldado no identificado); «Nos dijeron: "Ante cualquier señal de peligro, abrid fuego a discreción"» (miembro de una patrulla de reconocimiento); «Disparábamos a cualquier cosa que se moviera» (combatiente de la Brigada Golani); «A pesar del hecho de que nadie nos disparaba, los disparos y las demoliciones continuaban sin parar» (artillero de un tanque)[32]. «Esencialmente, a una persona le bastaba con estar en un lugar "problemático"», descubría un reportero de Haaretz, «en circunstancias que se podrían definir vagamente como sospechosas, para ser "incriminada" y, de hecho, sentenciada a muerte»[33].

Aunque el memorando israelí afirmaba que «la protección de las tropas de las IDF no eliminó el resto de factores»[34], tanto la investigación periodística como los testimonios de los combatientes israelíes apuntan a lo contrario. «A los israelíes les habría costado aceptar graves bajas en las IDF», decía Haaretz en la reconstrucción

de la etapa de planificación de la invasión, por lo que el ejército recurrió a una «abrumadora potencia de fuego. […] Las vidas de nuestros soldados tienen preferencia, se les dijo a los mandos en las reuniones» (El Estado Mayor de las IDF preveía antes de empezar que habría «600-800 palestinos civiles» muertos)[35]. Era una «atmósfera», recordaba un soldado de las IDF, en la cual «las vidas de los palestinos, digamos, eran algo mucho, mucho menos importante que las vidas de nuestros soldados». Otro combatiente rememora la orden de su jefe de batallón: «Que no le toquen ni un pelo de la cabeza a ninguno de mis soldados. No estoy dispuesto a que ningún soldado mío corra riesgos por dudar. Si no estás seguro, dispara»; mientras que un jefe de patrulla recordaría cómo las IDF «usaban una enorme cantidad de munición y mataron a un enorme número de personas a medida que avanzaban, para que no nos hicieran daño y no nos dispararan»[36]. «Cuando sospechábamos que un combatiente palestino se escondía en una casa, le disparábamos un misil y después dos obuses desde un tanque y después usábamos una excavadora para derribar la casa», le contó un oficial de alta graduación a Haaretz. «Produce daños, pero evita la pérdida de vidas entre los soldados»[37]. Un oficial que sirvió en el cuartel general de una brigada recordaba un año después de la invasión que la política de las IDF se resumía en garantizar «literalmente, riesgo cero para los soldados»[38].

Aun así, ¿no intentó Israel proteger a los civiles avisándoles de los inminentes ataques? «Israel distribuyó cientos de miles de folletos», parloteaba Cordesman, «y empleó a sus servicios de inteligencia en redes de telefonía de Gaza para emitir avisos a la población civil»[39]. El informe israelí destacaba «las medidas extraordinarias que se adoptaron para evitar herir a la población civil en la Operación Gaza», y «los esfuerzos importantes para minimizar los daños a la población civil», como lanzar «folletos que advertían a los ocupantes de que se alejaran de los baluartes de Hamás y que abandonaran los edificios que Hamás estuviera usando para lanzar los ataques», y contactando a «los ocupantes por teléfono para avisarlos de inminentes ataques en edificios concretos»[40]. Pero los folletos y las llamadas de teléfonos «no daban detalles sobre las áreas que serían blanco de ataques», según los informes de derechos humanos, «ni tampoco, por el contrario, de las áreas que eran seguras». Más aún, puesto que todo el territorio de Gaza estaba

siendo atacado, por una parte, y puesto que sus fronteras con Israel y Egipto estaban cerradas, por otra parte, «no había ningún lugar al que pudiera haber ido la población civil». La consecuencia inevitable y predecible de estos supuestos avisos, en medio del constante e indiscriminado bombardeo de este territorio herméticamente cerrado, fue, según un comité de investigación encabezado por el jurista sudafricano John Dugard, «un estado de terror, confusión y pánico entre la población local»[41]. De hecho, el ministro de Interior, Meir Sheetrit, alegaba que «el ejército hizo 250.000 llamadas a la gente para que abandonara sus casas». Impertérrita, Amnistía replicaba: «Apenas hay 250.000 hogares en Gaza. Si realmente el ejército israelí llamó a tantas familias para decirles que abandonaran sus hogares, eso querría decir que prácticamente se le dijo eso a todas las familias»[42]. ¿Cómo no iba a producirse un pandemonio y un revuelo? No obstante, profundamente impresionado por la cantidad de las advertencias israelíes, un académico del derecho americano aportaba, en un novedoso giro interpretativo, que esos avisos deberían ser acreditados incluso aunque los palestinos no pudieran seguirlos: «La ley no contiene ningún requerimiento de que la población civil deba ser capaz de actuar según las advertencias como condición para considerarlos eficaces»[43]. ¿Es «eficaz» colocar señales que digan «En caso de incendio, usar las salidas de emergencia, si el edificio no tiene una salida de incendios?

El Informe de Israel no solamente destacaba sus advertencias previas durante la Operación Plomo Fundido, sino que también exageraba sus esfuerzos paliativos. Aseguraba que Israel «buscó proporcionar y facilitar asistencia humanitaria» y que implantó un «esfuerzo de largo alcance para garantizar que se cubrían las necesidades humanitarias de la población civil en Gaza»[44]. Por si acaso esta actitud solícita ocasionara algún escepticismo, Cordesman lo descartaba rápidamente. Blandía las notas de prensa israelíes, así como las «afirmaciones del Ministerio de Defensa israelí» que lo corroboraban, e incluso citaba a nada menos que al ministro de Defensa Ehud Barak: «Somos muy conscientes de las preocupaciones humanitarias; estamos haciendo y seguiremos haciendo todo lo posible para cubrir las necesidades humanitarias de los residentes de Gaza»[45]. Los hechos sobre el terreno tenían un aspecto muy diferente, sin embargo. «Las agencias de la ONU y

las ONG humanitarias continúan operando a pesar de la extrema inseguridad», observaba la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de los Asuntos Humanitarios (OCHA). «A lo largo de las tres semanas de hostilidades, cinco componentes de la plantilla de la UNRWA [Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Oriente Próximo] y tres de sus trabajadores contratados han sido asesinados mientras cumplían con su deber y otras 11 personas de la plantilla y cuatro contratadas han resultado heridas; se ha informado de cuatro incidentes de camiones de ayuda que han sido atacados y al menos 53 edificios de las Naciones Unidas han recibido un daño importante»[46]. La ministra de Exteriores, Tzipi Livni, declaró con audacia en mitad de la Operación Plomo Fundido que en Gaza «no había una crisis humanitaria». Pero el director de operaciones de la UNRWA respondió: «En Gaza se está produciendo una catástrofe para la población civil. […] Están atrapados, traumatizados, aterrorizados»[47]. Aunque incluye algunas advertencias genéricas que reconocen «los retrasos y errores» de Israel en sus esfuerzos humanitarios, y aunque cita innumerables notas de prensa israelíes, Cordesman no encuentra un hueco para citar esta afirmación o cualquier otra afirmación crítica de las organizaciones de ayuda humanitaria y los funcionarios de la ONU[48]. El Informe Goldstone concluía que Israel «violaba su obligación de permitir el paso libre de toda remesa de los objetos médicos y hospitalarios, de comida y ropa»; que «la cantidad y variedad de los artículos de comida, médicos y hospitalarios, así como de la ropa [permitida] eran totalmente insuficientes para cubrir las necesidades humanitarias de la población»; y que, desde el endurecimiento del bloqueo en 2007 hasta el final de la invasión, Israel había impedido el paso de mercancías suficientes «como para cubrir las necesidades de la población»[49]. Incluso después de que entrara el vigor el alto el fuego de enero de 2009, Israel insistía en bloquear la ayuda humanitaria, incluyendo cargamentos de garbanzos, dátiles, té, macarrones, dulces, mermelada, galletas, pasta de tomate, rompecabezas para niños y bolsas de plástico para distribuir la comida[50]. «Apenas ha podido repararse parte del extenso daño que [Israel] ha causado a las casas, las infraestructuras civiles, los servicios públicos, las granjas y los comercios», informaban 16 respetadas organizaciones humanitarias y de defensa de los derechos humanos, en un completo estudio publicado un año

después de la invasión. «Esto no es un accidente, es una decisión política. El bloqueo del gobierno israelí […] no solamente prohíbe a la mayoría de los gazatíes abandonar el lugar o exportar cualquier cosa al mundo exterior, sino que únicamente permite la importación de un número altamente restringido de los bienes humanitarios básicos». El estudio descubría que, como resultado directo del continuado bloqueo israelí, «todo tipo de materiales de construcción –cemento, grava, madera, tuberías, cristal, barras de hierro, aluminio, alquitrán– y de piezas de repuesto escasean gravemente o directamente no están disponibles»; «el 90 por 100 de la población de Gaza sigue sufriendo cortes de electricidad entre cuatro y ocho horas al día, mientras que el resto no tiene electricidad en absoluto»; miles de personas están abocadas a «una existencia sin agua canalizada»; y había «grandes retrasos o se les negaba la entrada a materiales básicos educativos, como libros de texto o papel»; mientras que los niños, «ya traumatizados por la ofensiva militar, no pueden aprender y desarrollarse en estas condiciones inseguras e insalubres»[51].

La interferencia de Israel en los esfuerzos de la ayuda humanitaria durante la Operación Plomo Fundido iba a la par con su asalto más general de las agencias de la ONU y de las instalaciones médicas de Gaza. Después de que Israel bombardeara con proyectiles de fósforo blanco una instalación de la UNRWA, que se incendió, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dio rienda suelta a su ira: «Estoy escandalizado […] es un ataque despreciable y totalmente inaceptable contra las Naciones Unidas»[52]. Una Junta de Investigación comisionada por la ONU, que investigaba los asaltos en múltiples sedes de la ONU durante la Operación Plomo Fundido, encontró a Israel culpable inter alia de un «ataque intencional y directo» que mató a tres hombres jóvenes en una escuela de la UNRWA que acogía a unos cuatrocientos civiles; de disparar una «serie de morteros» que impactaron cerca de una escuela de la UNRWA, matando e hiriendo a montones de civiles; de un ataque con fósforo blanco «claramente negligente», con una «despreocupación insensata», sobre una escuela de la UNRWA que albergaba a unos 2.000 civiles, matando a dos niños e hiriendo a 13. (También averiguó que, en uno de esos incidentes, un almacén de la ONU fue alcanzado por un misil tipo Qassam que «es muy probable que fuera disparado desde dentro de Gaza por Hamás o

por cualquier otra facción palestina».) La Junta de Investigación concluía que «en ninguno de estos incidentes se llevaba a cabo ninguna actividad militar dentro de las instalaciones de las Naciones Unidas»; que Israel sin duda «debía esperar» que los palestinos respondieran a «los continuos ataques buscando refugio dentro de las instalaciones de las Naciones Unidas»; y que Israel «seguía» alegando falsedades acerca de que los militantes de Hamás habían estado disparando desde las instalaciones de la ONU, incluso «después de que ya había quedado claro que era mentira»[53]. Aun así, calificando al informe de la ONU como «injusto y unilateral», el presidente israelí, Shimon Peres, declaraba: «No lo aceptaremos nunca. Es escandaloso». El ministro de Defensa alegaba que una investigación interna de las IDF negaba «irrefutablemente» las conclusiones de la Junta y demostraba una vez más –por si hacían falta más reivindicaciones– que «tenemos el ejército más moral del mundo»[54].

La crisis humanitaria se exacerbaba a medida que los ataques de Israel apuntaban y causaban un daño inmenso a las instalaciones médicas de Gaza. Ya antes de la Operación Plomo Fundido, Israel había privado a los gazatíes enfermos del acceso a la atención médica en el extranjero y condicionaba el conceder permisos de salida a que colaboraran con los servicios de inteligencia israelíes[55]. El Informe israelí graznaba que durante la invasión habían facilitado el traslado al extranjero de muchos pacientes gazatíes que requerían tratamiento[56]. Pero las organizaciones de defensa de los derechos humanos informaban de que Israel creaba obstáculos casi insuperables que impedían que los heridos gazatíes accedieran a dichos tratamientos[57]. La catástrofe médica provocada porque Israel impedía la salida al extranjero se complementaba con los ataques de Israel a las instalaciones médicas dentro de Gaza. En el transcurso de la Operación Plomo Fundido, los ataques directos o indirectos de Israel dañaron o destruyeron 29 ambulancias y casi la mitad de los 122 centros de salud de Gaza, incluyendo 15 hospitales. 16 miembros del personal médico fueron asesinados y otros 25 heridos mientras trabajaban[58]. Cordesman se hace eco fielmente de la afirmación de Israel de que «coordinaba el movimiento» de las ambulancias y el informe israelí destaca que se creó «un centro especial de coordinación médica» para manejar «la evacuación de los heridos y los muertos de la zona de

hostilidades»[59]. Pero, según B'Tselem, «incluso allí donde se montó una coordinación, se ha informado de que los soldados disparaban a las ambulancias»[60]. Un informe de Physicians for Human Rights-Israel documenta ataques israelíes a equipos médicos y ambulancias, así como «incontables» obstáculos por parte de Israel para bloquear el camino de los «equipos de rescate sobre el terreno que trataban de evacuar a las personas atrapadas y heridas»[61]. Un informe suplementario redactado por un equipo independiente de expertos médicos, encargado por Physicians for Human Rights–Israel y la Palestinian Medical Relief Society, concluía que Israel «prohibía» que se «evacuara en ambulancia» a los gazatíes heridos y que las ambulancias y su personal eran «objetivos militares». Concluía que «el significado subyacente del ataque en la Franja de Gaza parecía ser producir terror, sin compasión por nadie»[62]. El habitualmente discreto Comité Internacional de la Cruz Roja emitió un comunicado de rechazo público a Israel después de un «sorprendente incidente» en el cual los soldados israelíes rechazaron el paso de un equipo de rescate de la Cruz Roja enviado en ayuda de civiles heridos, a quienes dejaron morir allí[63]. El Al Mezan Center for Human Rights calcula que la obstrucción sistemática del acceso médico de Israel durante la invasión provocó la muerte de al menos 258 gazatíes[64].

Pero ¿acaso los mandos de Hamás no hacían un uso perverso de las ambulancias? Cordesman aduce que Hamás usaba «las ambulancias para movilizar a terroristas», pero no aporta ninguna prueba[65]. El Informe israelí alega que Hamás hizo «un uso amplio de las ambulancias que portaban los emblemas protectores de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para transportar operativos y armamento» y el «uso de las ambulancias para "evacuar" a terroristas del campo de batalla». La única prueba independiente que pudo reunir, sin embargo, no es exactamente apabullante: un «reportero» italiano fabulador, por una parte, y un conductor de ambulancias de Gaza que contó cómo los militantes de Hamás trataron, sin éxito, de apropiarse de su vehículo, por otra[66]. El informe israelí llega incluso a defender que «las IDF se refrenaron de atacar vehículos médicos incluso en los casos en los que Hamás y otras organizaciones terroristas los estaban usando con fines militares»[67]. Pero si las IDF no apuntaban a las ambulancias tomadas por Hamás para fines militares, y si «no hay ninguna duda

en absoluto» de que las IDF «tomaron como objetivo un gran número de ambulancias»[68], entonces las ambulancias que tomaron como objetivo no deben haber sido usadas con fines militares. «El argumento de que los palestinos usaban incorrectamente las ambulancias ha sido aportado muchísimas veces por los mandos israelíes», recordaba B'Tselem, «aunque Israel casi nunca ha presentado pruebas que lo demostraran»[69]. De hecho, Israel había disparado misiles sobre ambulancias libanesas claramente señalizadas durante la guerra de 2006, incluso aunque, según HRW, no «había razones para concluir que Hezbolá estuviera usando las ambulancias con fines militares»[70]. Pero ¿y en la Operación Plomo Fundido? El Informe Goldstone «no encontró prueba ninguna que apoyara la alegación de que […] se usaran ambulancias para el transporte de combatientes o para cualquier otro fin militar». Si aún quedaban dudas a este respecto, resultaron zanjadas por Magen David Adom, el servicio nacional israelí de emergencias, catástrofes, ambulancias y banco de sangre. Inequívocamente declaró que «no se habían usado las ambulancias de la PRCS [La sociedad de la media luna roja palestina] para el transporte de armas o municiones»[71]. Pero ¿acaso los militantes de Hamás no disparaban desde los hospitales y se refugiaban en ellos? «Ingentes cantidades de información, tanto desde fuentes del servicio de inteligencia como en informes de las fuerzas de las IDF sobre el terreno», defendía Israel, «muestran que Hamás de hecho sí hizo un uso intensivo de los hospitales y de otras instalaciones militares»[72]. Pero, según Amnistía, los oficiales israelíes no proporcionaron «pruebas ni siquiera de un solo caso así». La propia Amnistía «no encontró pruebas durante su investigación sobre el terreno de que dichas prácticas, si es que se produjeron alguna vez, estuvieran generalizadas»; Physicians for Human Rights–Israel no encontró «ninguna prueba que respaldara la afirmación oficial israelí de que los hospitales se usaban para ocultar personal militar o político»; el Informe Goldstone «no encontró ninguna prueba que respaldara las alegaciones de que las autoridades de Gaza o los grupos armados palestinos usaran las instalaciones hospitalarias para albergar actividades militares»[73]. El informe israelí defendía también que las IDF «se habían abstenido de atacar el Hospital al-Shifa, en Ciudad de Gaza, a pesar de que Hamás usaba toda la planta baja como cuartel general […] sin que le preocupara el inevitable perjuicio a los civiles que estaban también en el

hospital». Fiel a la línea del partido, el historiador israelí Benny Morris también declaraba: «Los líderes de Hamás se pasaron toda la campaña en la planta baja del hospital al-Shifa de Gaza, apostando –correctamente– a que Israel no bombardearía o arrasaría un hospital». Excepto el ubicuo reportero italiano, que iba de exclusiva en exclusiva, la única fuente del informe israelí era la confesión de un detenido palestino «durante su interrogatorio»[74]. Si Israel no atacó este hospital, donde supuestamente se escondía el Estado Mayor de Hamás, entonces habría que preguntarse con asombro por qué sí atacó muchos otros hospitales palestinos. Las dos plantas superiores del Hospital Al-Quds, junto con el edificio administrativo y el almacén adyacente, fueron totalmente destrozadas; el hospital Al Wafa sufrió impactos directos de ocho obuses, dos misiles y miles de balas. El Hospital Europeo de Jan Kunis sufrió ataques de artillería en sus muros, en sus tomas de agua y electricidad; la sala de urgencias del hospital Al Dorah sufrió dos impactos; el hospital Al-Awda sufrió daños procedentes de dos proyectiles de artillería que cayeron cerca de la sala de urgencias[75]. Podría argumentarse que las IDF estaban respondiendo al fuego enemigo cuando estos hospitales fueron atacados, excepto que Israel también proclamaba que no atacaba a «terroristas» que lanzaban ataques «en la vecindad de un hospital»[76].

Israel no solamente atacaba a la población civil de Gaza y a su sistema de ayuda humanitaria. También apuntaba sistemáticamente a la infraestructura civil de Gaza. En el transcurso de la Operación Plomo Fundido, Israel destruyó o dañó 58.000 hogares (6.300 fueron totalmente derruidos o sufrieron daños graves); 238 escuelas y guarderías (18 escuelas quedaron totalmente destrozadas y 6 edificios de universidad completamente arrasados); 1.500 fábricas y talleres (incluyendo 22 de las 29 fábricas de hormigón premezclado de Gaza); varios edificios que albergaban a la prensa palestina y extranjera (dos periodistas murieron haciendo su trabajo; otros cuatro murieron también); instalaciones eléctricas, de agua y alcantarillado (más de un millón de gazatíes se quedaron sin electricidad durante la invasión y a medio millón se les cortó el agua corriente); 190 complejos de invernadero, el 80 por 100 de las cosechas agrícolas y casi un quinto de la tierra cultivada[77]. El

informe israelí, sin embargo, defiende que Israel tomó todas las precauciones para no perjudicar a la propiedad civil. De hecho, ¿quién podría dudar de que las IDF «comprobaron minuciosamente y volvieron a comprobar los objetivos […] para asegurarse de que se empleaban para el combate o para actividades terroristas», cuando, según el Informe Goldstone, lanzaron un ataque «intencionado y preciso» para destruir «el único de los tres molinos de harina de Gaza que aún estaba en funcionamiento»? El Informe Goldstone concluía que el «único fin» de este ataque era «terminar con la producción de harina en la Franja de Gaza» y «destruir la capacidad local de producir harina»[78]. ¿Quién podría dudar de que las IDF «claramente distinguían entre objetivos civiles y militares» (Cordesman), cuando, «sistemática y deliberadamente», «arrasaban» una gran granja avícola que surtía al 10 por 100 del mercado de huevos de Gaza? El Informe Goldstone concluía que «esto constituía un acto deliberado de gratuita destrucción no justificada por ninguna necesidad militar»[79]. El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas informaba de que «más de 4.000 cabezas de ganado, ovejas y cabras y más de un millón de aves, pollos y gallinas fueron eliminados durante la Operación Plomo Fundido, con pruebas de que el ganado era el objetivo directo de las ametralladoras israelíes»[80]. Si la muerte y la destrucción parecen ser indefendibles, como alegaba Israel tras la invasión, era únicamente por «el límite de la cantidad de información confidencial que podía compartir con las comisiones de investigación sin comprometer las capacidades operativas y las fuentes de información»[81]. Si el mundo supiera lo que realmente eran aquellas gallinas…[82]. El coste directo total de los daños a la infraestructura civil de Gaza durante la Operación Plomo Fundido se calculaba entre 660 y 900 millones de dólares, mientras que las pérdidas totales que emanaban de la destrucción e interrupción de la vida económica se calculaban entre 3.000 y 5.000 millones de dólares[83]. Tras su «megadespliegue de poder militar (oficial del Estado Mayor de las IDF)»[84], Israel dejó unas 600.000 toneladas de desechos. Deseando el «segundo asalto», un miembro del Consejo Regional de Israel en la zona limítrofe con Gaza exhortaba a los militares a que la próxima vez deberían «aplanar Gaza y convertirla en un aparcamiento, destruirla»[85]. Una yuxtaposición de la destrucción infligida por Israel y la infligida sobre Israel cuenta por sí sola toda la historia. Los ataques con misiles de Hamás sobre

Israel dañaron «unas cuantas casas civiles y otras estructuras; [...] una quedó casi completamente destruida»[86], mientras que el total de los daños israelíes alcanzaba casi 15 millones de dólares[87].

En testimonios posteriores a la invasión, los soldados de las IDF recordaron las escenas macabras de la destrucción de Gaza: «No vimos una sola casa que quedara intacta [...]. No quedó casi nada en nuestra zona designada. Tenía un aspecto horrible, como en esas películas de la Segunda Guerra Mundial en las que nada queda en pie. Una ciudad totalmente destrozada»; «Hicimos muchas demoliciones. Había gente que estuvo en Gaza dos días seguidos constantemente derribando una casa tras otra, y hablamos de todo un batallón»; «Una noche vieron a un terrorista y este desapareció, así que decidieron que se habría metido en un túnel, trajeron un D-9 [bulldozer] y arrasaron todo el frutal»; «La cantidad de destrucción era increíble. Cuando pasabas por esos barrios no se podía identificar nada. No quedaba piedra sobre piedra. Se veían muchos campos, invernaderos, frutales, todo devastado. Totalmente arruinado. Es terrible. Es surreal»; «Había un punto donde los D-95 estaban arrasando zonas. Era sorprendente. Al principio se veían un montón de casas. Una semana más tarde, después de ser arrasado, se veía el horizonte, casi se podía ver el mar»[88]. Un veterano de la invasión diseñó una camiseta que mostraba a un soldado estilo King Kong agarrando una mezquita y mirando con el ceño fruncido a una ciudad que estaba siendo atacada, y la camiseta lucía el eslogan: «¡Si crees que se puede arreglar, cree entonces que se puede destruir!». «Yo estuve en Gaza», contó a Haaretz, «y seguían subrayando que el objeto de la operación era causar la destrucción en las infraestructuras»[89]. El único castigo que impuso Israel por destrucción ilegal de propiedad durante la Operación Plomo Fundido fue una medida disciplinaria desconocida contra un soldado[90].

El informe israelí alegaba que su «uso general de la fuerza contra Hamás durante la Operación Gaza fue [...] proporcional a la amenaza que planteaba Hamás»[91]. Los testimonios posteriores a la invasión de soldados israelíes describen con intensidad cómo se vivía ese uso «proporcional» de la fuerza: «Había más munición de la que nunca había visto [...] explosiones constantes [...] la tierra temblaba constantemente»; «Sobre el suelo escuchabas todo el día

esas explosiones atronadoras. Quiero decir, no solamente el disparo de los obuses, que es una música a la que te puedes acostumbrar, sino explosiones que hacían tambalearse el puesto, hasta el punto de que a algunos de nosotros nos mandaron fuera de la casa en la que nos alojábamos por miedo a que se derrumbara»[92]. De hecho, un soldado tras otro testificaban que Israel desplegó unas cantidades «delirantes» de munición durante la invasión: «Estábamos disparando a inocentes y nuestro fuego de artillería era una locura»; «La munición era una locura»; «Dijo que íbamos a ejercer una potencia de fuego desmesurada con la artillería y la fuerza aérea»; «Esta era la actitud general en el ejército; salir con una potencia de fuego desmesurada, porque era nuestra única ventaja frente a ellos»[93]. El informe israelí también alega que «las directrices y órdenes de las IDF […] subrayan que todas las operaciones de demolición deben ejecutarse de manera que minimicen en lo posible el daño causado a cualquier propiedad que no esté usando Hamás o cualquiera de las otras organizaciones combatientes en la batalla»[94]. Pero las organizaciones de defensa de los derechos humanos pintaban un cuadro muy diferente. Amnistía descubrió que «mucha de la destrucción» de edificios e infraestructuras civiles «era gratuita y resultado de la demolición deliberada e innecesaria de propiedad, ataques directos contra objetivos civiles y ataques indiscriminados que no distinguían entre objetivos militares legítimos y objetivos civiles»[95]. El momento, lugar y ritmo de la devastación apuntalaban los hallazgos de Amnistía y minaban las declaraciones oficiales israelíes. Casi el 90 por 100 de la destrucción de los edificios e infraestructuras civiles –incluyendo fábricas de zumos, helados, galletas y Pepsi-Cola– tuvo lugar en los últimos días de la Operación Plomo Fundido, según el Informe Dugard, en áreas ya completamente pacificadas por las IDF, y buena parte de esta destrucción fue causada por las tropas israelíes mientras se retiraban[96]. Un estudio de HRW descubría que «casi cada casa, fábrica y huerto había sido destruido dentro de determinadas zonas, aparentemente indicando que se estaba llevando a cabo un plan de destrucción sistemática en esos lugares». Usando imágenes por satélite «tomadas a intervalos durante el conflicto», HRW documentó numerosos casos «en los que las fuerzas israelíes causaron una destrucción completa de casas, fábricas, granjas e invernaderos en zonas bajo el control de la IDF, sin ningún fin militar evidente. Estos casos sucedían cuando ya no

había combates en esas zonas; en muchos casos, la destrucción se llevó a cabo durante los últimos días de la campaña, cuando la retirada de Israel era inminente». En el barrio de Izbt Abd Rabbo, por ejemplo, la «amplia mayoría» de «la destrucción integral de manzanas de edificios enteras» tuvo lugar «después de que las IDF tomaran el control»[97]. Una extensión en el este de Gaza que contenía granjas, fábricas y casas fue «prácticamente arrasada» según el Crisis Group, mientras que la destrucción «deliberada y sistemática» por parte de Israel de ese sector, mediante una combinación de bulldozers y minas antitanque, según un experto militar, «les llevó al menos dos días de duro trabajo»[98]. Se podía argumentar que, si Israel atacaba tantas casas, era porque «Hamás está poniendo trampas en cada casa que abandonan sus residentes» (portavoz de las IDF, citado por Cordesman)[99]. Pero este argumento implausible prima facie quedó mortalmente erosionado después de la invasión, cuando las propias IDF concedían que la «escala de destrucción» era legalmente indefendible[100]. Aun así, un funcionario de seguridad israelí presumía con orgullo de que «arrasando edificios que se creían trampas», Israel había roto «el ADN de la lucha de guerrillas urbana», mientras que el viceprimer ministro, Eli Yishay, declaraba después de que el alto el fuego entrara en vigor que, «incluso si los misiles [de Hamás] caen en el aire [sic] o en el mar, debemos golpear su infraestructura y destruir 100 casas por cada misil disparado»[101]. Parece que la ratio de 6.400 casas de Gaza destruidas por cada casa israelí «casi completamente destruida» no había logrado saciar su sed de destrucción.

Israel no solamente apuntaba a los edificios e infraestructuras civiles, sino también a la herencia cultural de Gaza. Se destruyeron 30 mezquitas y se dañaron 15 más durante el asalto israelí. Si Cordesman concluía que «las fuerzas de las IDF casi con total seguridad acertaron cuando informaban de que Hamás usaba mezquitas y otros lugares sensibles para el combate», es porque sus «cronologías» basadas en las notas de prensa de las IDF así lo afirmaban[102]. Inicialmente, Israel defendía que, después de que impactaran proyectiles contra las mezquitas, se habían producido explosiones secundarias, lo que confirmaría que se almacenaba armamento en ellas. Pero más tarde abandonó esta argumentación por completo, aunque las mezquitas siguieron siendo un

objetivo[103]. El Informe Goldstone documentaba un ataque israelí «intencionado» con misiles sobre una mezquita donde murieron al menos 15 personas que se encontraban allí rezando. No encontró «prueba ninguna de que esta mezquita se usara como almacén de armas o para cualquier otra actividad militar por parte de grupos armados palestinos»[104]. Israel ni se molestó en refutar esta conclusión concreta del Informe Goldstone[105] hasta que no aumentaron las críticas por ello. Entonces descubrió con retraso que –¿quién lo habría adivinado?– el misil «apuntaba a dos operativos terroristas que estaban cerca de la entrada de la mezquita»[106]. En general, la defensa que Israel usaba para justificar el ataque a las mezquitas no convencía. Argumentaba que Hamás usaba las mezquitas para apilar armas. Pero, como observaba el experto militar del Informe Goldstone, habría sido estúpido por parte de Hamás, contando como contaba con «abundantes escondites en los laberínticos callejones de Gaza», «almacenar nada en un edificio abierto como una mezquita, que podía haber sido localizada y registrada de antemano por los servicios de información israelíes»[107]. Israel también alegaba que Hamás almacenaba armas en las mezquitas porque Hamás «suponía», basándose en las experiencias pasadas, «que las IDF no las atacaban». Pero, al contrario, Israel había dañado o destruido por completo 55 mezquitas en Gaza entre 2001 y 2008[108]. Dando un paso más, el catedrático de Derecho de Harvard Alan Dershowitz alegaba que «los líderes de Hamás presumían de haber almacenado armas en las mezquitas»[109]. Pero, como de costumbre, no adjuntaba pruebas y aparentemente no existen. Las diversas explicaciones de Israel tampoco pueden justificar el ataque sistemático a los minaretes, que, al ser demasiado finos como para que puedan apostarse en ellos francotiradores, no poseen ningún valor militar aparente. El Informe Dugard concluye que «las mezquitas, y más concretamente los minaretes, han sido objetivos militares deliberados por la razón de que simbolizan el islam»[110]. Los testimonios posteriores a la invasión de las IDF confirman el ataque indiscriminado a las mezquitas[111]. Israel justificaba el ataque a las instituciones educativas alegando que Hamás «de hecho las usaba»[112]. No obstante, cuando se le presentaba un ejemplo específico para que demostrara esas alegaciones, Israel concedía que sus pruebas fotográficas eran de 2007[113]. Para atenuar su ataque sobre la Universidad Islámica de Gaza, Israel argumentaba que era el centro

neurálgico de «investigación y desarrollo armamentístico» de Hamás y de «actividades militares terroristas». Pero en vano se buscarían pruebas para corroborar esta afirmación[114]. Si Israel apuntaba a la Universidad Islámica porque era un centro terrorista, habría entonces que preguntarse por qué «prácticamente todas las universidades sufrieron daños»[115]. El Informe Goldstone «no encontró ninguna información» que confirmara el uso de instituciones educativas «como instalación militar o su contribución al esfuerzo militar»[116]. El informe israelí alegaba que, después de su detención, un preso palestino «admitió» bajo interrogatorio que «los operativos de Hamás a menudo lanzaban misiles desde las escuelas [...] precisamente porque sabían que los aviones israelíes no dispararían a las escuelas»[117]. Pero ¿por qué haría una confesión así cuando, una y otra vez, eso es precisamente lo que hacía Israel?

Los estragos que produjo la Operación Plomo Fundido quizá fueran gratuitos, pero había un método incontestable detrás de esa locura. Si Israel poseía buenos «mapas de referencia» de Gaza y una «capacidad de recogida de información» que «seguía siendo extraordinariamente eficaz»; si hizo un uso intenso de armamento de precisión de último modelo; si «el 99 por 100 de los disparos que efectuó [la flota aérea] impactaron con precisión en sus objetivos»; si solamente una vez se equivocó al etiquetar un edificio como objetivo; de hecho, si Israel mismo proporcionó la mayoría de los datos que acabamos de citar, entonces, como concluye lógicamente el Informe Goldstone, la destrucción masiva que infligió Israel a las infraestructuras civiles de Gaza debe haber sido premeditada. Era «el resultado de una planificación deliberada y de unas decisiones políticas que recorrían la cadena de mando, desde los procedimientos operativos habituales hasta las instrucciones que se les daban a las tropas sobre el terreno»[118]. Dicho de otra manera, si Israel era capaz de precisar sus objetivos y si, como él mismo reconoce, podía acertar y acertaba estos objetivos con una precisión exacta, entonces no puede alegar que la destrucción criminal era un resultado de un desliz o de una interrupción de la cadena de mando. Lo que ocurrió en Gaza estaba previsto que ocurriera, por parte de todo el mundo, desde los soldados que ejecutaron las órdenes, pasando por los oficiales que las emitieron, hasta los políticos que las aprobaron. «La destrucción integral fue, en mucha

medida, deliberada», concluía Amnistía, «y una parte integral de una estrategia en diferentes niveles de la cadena de mando, desde los oficiales de alta graduación hasta los soldados rasos»[119].

Para justificar la magnitud de la devastación que había provocado, Israel se afanó en describir la invasión de Gaza como una auténtica batalla militar. Cordesman dibujaba con siniestro detalle, adornado con cuadros, grafos e ilustraciones, el vasto arsenal de proyectiles, morteros y otras armas que Hamás supuestamente manufacturaba y metía de contrabando a través de los túneles (incluyendo «misiles hechos en Irán» que podrían «alcanzar la mayor parte del sur de Israel» y «golpear infraestructuras clave»), así como la «tela de araña de puntos fuertes preparados, de refugios ocultos y subterráneos y puntos de emboscada» que Hamás supuestamente construyó[120]. Informaba de que, según los «altos funcionarios israelíes», Hamás reunía entre 6.000 y 10.000 «combatientes expertos»[121]. Yuxtaponía la «guerra de Gaza» con la guerra de 1967, la guerra de 1973 y la guerra de 2006, como si estuvieran en el mismo plano[122]; se explayaba sobre los complejos planes y preparativos de guerra de Israel; y afirmaba que la victoria de Israel se debía en parte a sus «altos niveles de secretismo», como si el resultado hubiera sido diferente si Israel no se hubiera beneficiado del elemento sorpresa[123]. El informe israelí aducía que Hamás había «amasado una inmensa fuerza armada de más de 20.000 operativos armados en Gaza», «obtenido material militar a través de una amplia red de túneles y cargamentos clandestinos desde Irán y Siria» y «adquirido armamento avanzado, desarrollado armas propias y aumentado el rango y el carácter letal de sus misiles»[124].

No obstante, incluso Cordesman tuvo que admitir, aunque tangencialmente, que lo que Israel había librado difícilmente se podía llamar guerra. Concedía que Hamás era un «actor no estatal débil», mientras que Israel poseía un inmenso arsenal de armamento de última generación; que la fuerza aérea israelí «se enfrentaba a riesgos limitados por parte de la primitiva línea de defensa antiaérea de Hamás»; que «el enfrentamiento sostenido sobre el terreno fue limitado»; que el ejército israelí evitaba aquellos

enfrentamientos en los que «probablemente fuera a sufrir» bajas significativas; y que «las IDF usaban la guerra nocturna en la mayoría de las operaciones de combate, porque Hamás no tenía la tecnología o la formación para combatir de noche»[125]. No obstante, en la mayor parte de su texto, Cordesman persiste en la dudosa descripción de la Operación Plomo Fundido. Israel había demostrado que podía librar «una campaña aérea con éxito en áreas urbanas superpobladas», según Cordesman, «así como una prolongada batalla terrestre contra un actor no estatal»[126]. De hecho, su campaña aérea fue una «batalla» tanto como pescar peces en un barreño puede llamarse «pescar». Casi (aunque sin darse cuenta) usando esa analogía, Cordesman cita a un oficial de alto rango de la fuerza aérea israelí que presume de que «la IAF ha hecho unas 3.000 salidas con éxito sobre una pequeña zona densamente poblada durante tres semanas de lucha, sin un solo accidente o pérdida». Pero ¿cómo podría haber sido de otro modo, si «los aviones operaban en un ambiente despejado de defensas antiaéreas, disfrutando de una superioridad aérea completa»[127]? Describir la Operación Plomo Fundido como una prolongada batalla territorial igualmente estaba muy alejado de la realidad. Hamás estaba mal pertechado, apenas presente en las zonas de conflicto, y las tropas israelíes no se enfrentaron directamente a Hamás, excepto cuando Hamás no tenía posibilidad de contraatacar.

No toda la ciudadanía israelí celebró el triunfo de su país en esta no-guerra. «Es muy peligroso para las IDF creer que han ganado la guerra cuando no ha habido guerra», advertía un respetado analista estratégico israelí. «En realidad, no se ha librado ni una sola batalla durante los 22 días de lucha»[128]. El Crisis Group informó de que Hamás «casi siempre evitó la confrontación directa con las tropas israelíes» y que, «por lo tanto, solo un número limitado de combatientes han muerto». Un exministro de Exteriores israelí bufó: «No ha habido guerra. Hamás se sentó en sus búnkeres y salió cuando ya había terminado todo», mientras que un oficial israelí apuntaba con desprecio: «Ni siquiera nos dispararon con armas ligeras. No se les ve mucho [a Hamás], sobre todo se esconden»[129]. Los testimonios posteriores a la invasión por parte de soldados de las IDF confirman una y otra vez la casi ausencia del enemigo sobre el terreno: «Allí no había nada. Ciudades fantasma. Excepto algún ganado, no se movía nada»; «La mayoría del tiempo

era aburrido. No ocurrían muchas cosas»; «Se encontraron algunos explosivos en una casa, armas, cosas importantes como esas, pero no una resistencia real»; «No vi ni un solo árabe durante todo el tiempo que estuvimos allí, durante toda una semana»; «A todo el mundo le decepcionaba no enfrentarse a nadie»; «Normalmente no veíamos ni un alma. Excepto, claro, nuestros soldados. Ni un alma»; «Pregúntales a los soldados cuántas veces se toparon con combatientes en Gaza: nunca. […] Se suponía que había una mínima fuerza de resistencia cuando entramos, pero no la había»; «Casi nadie se cruzó con el enemigo. Me han contado dos encuentros durante toda la operación. Los soldados estaban también decepcionados por no haber tenido ningún contacto con los terroristas»[130]. El Informe Goldstone señalaba que había «recibido relativamente pocos informes de un fuego cruzado real entre las fuerzas armadas israelíes y los grupos armados palestinos»[131]. Hamás ni siquiera consiguió desarbolar por completo ni un tanque israelí[132]. En su defensa del comportamiento de las IDF y de las consiguientes muertes civiles, un filósofo de la Universidad Hebrea apuntó el desafío al que se enfrentaba un soldado israelí: tenía que «decidir si el individuo frente a él, en vaqueros y deportivas, era o no un combatiente» y se encontraba combatiendo en un terreno «muy densamente poblado»[133]. Aun así, juzgando por todas las pruebas disponibles, el desafío realmente abrumador en Gaza no era diferenciar entre civiles y militantes, sino, por el contrario, encontrarse con algún militante; en las áreas densamente pobladas, o, para el caso, en las áreas escasamente pobladas, no se producían batallas. Dicho sencillamente, no hubo fragor de la batalla, no hubo confusión de la batalla.

La muerte y destrucción desatada por la Operación Plomo Fundido claramente fue más allá de la misión declarada de Israel de eliminar a los «terroristas» y las «infraestructuras terroristas», o incluso del castigo colectivo de la población civil palestina. La destrucción sistemática de las casas y las escuelas, las fábricas y las granjas, los hospitales y las mezquitas, cuyo fin parecía ser convertir a Gaza en un lugar donde literalmente no se pudiera vivir, hace inevitable plantearse esta pregunta: ¿Qué estaba tratando de lograr Israel? De hecho, tanto la masacre como el caos eran factores intrínsecos y fundamentales para el éxito de la operación. Su fin, según Cordesman –y aquí las pruebas, sin que sirvan de precedente, le dan

la razón–, era «restaurar la capacidad disuasoria de Israel y mostrar a Hezbolá, Irán y Siria que desafiar a Israel era demasiado peligroso»[134].

Pero si Israel buscaba restaurar su capacidad de disuasión, no podía alcanzar ese fin infligiendo una derrota militar, puesto que Hamás no era claramente una potencia militar. «No está claro», observa Cordesman, «que cualquier oponente de Israel creyera que Hamás era realmente lo bastante fuerte como para ser un desafío real para las fuerzas israelíes sobre el terreno»[135]. Por lo tanto, Israel solamente podía volver a ser temido en la región demostrando la cantidad de pura devastación que estaba dispuesto a infligir. «Tenía que conseguir que sus enemigos creyeran que era una “locura”» (oficial israelí) y que estaba dispuesto a producir destrucción en «una escala impredecible» y sin tomar en cuenta «la opinión mundial» (Cordesman)[136]. En otras palabras, y contradiciendo la pretensión oficial de Israel de que el uso de la fuerza en Gaza fue «proporcionado» y «discriminador», las IDF aumentaron deliberadamente el nivel de destrucción hasta un punto desproporcionado e indiscriminado, incluso demente. Cuando se les pillaba con la guardia baja, los oficiales israelíes admitían el verdadero objetivo de la Operación Plomo Fundido. A medida que la invasión se desinflaba, la ministra de Exteriores Livni declaraba que «había restaurado la capacidad disuasoria de Israel. […] Hamás entiende ahora que, cuando dispara sobre ciudadanos [de Israel], este responde de manera salvaje, y esto es algo bueno». El día después de que se hiciera efectivo el alto el fuego, presumía de que «Israel había demostrado un total vandalismo durante el curso de la operación reciente, que es lo que le pedí»[137]. Más tarde, Livni declararía que estaba «orgullosa» de sus decisiones durante la invasión de Gaza y que «repetiría» todas y cada una de ellas, porque «buscaban restaurar la capacidad disuasoria de Israel y la restauraron»[138]. Un exfuncionario de Defensa israelí le contó al Crisis Group que Israel había recuperado su capacidad de disuasión porque «había mostrado a Hamás, a Irán y a toda la región que podía ser tan lunático como cualquiera de ellos»[139]. «El Informe Goldstone, que defendía que Israel enloquece cuando se le ataca, nos hizo algún daño», observaba un destacado comentarista israelí, «pero en nuestra región fue una bendición. Si Israel se vuelve loco y destruye todo de esta manera cuando se le ataca, hay que tener

cuidado. Nadie se mete con locos así»[140].

Tras la invasión, filósofos judíos, israelíes y estadounidenses abordaron los sutiles dilemas morales de la conducta de Israel. El belicista Filósofo A planteaba que Israel «debería favorecer las vidas de sus propios soldados sobre las vidas de los vecinos de un terrorista», mientras que los pacifistas Filósofos B y C respondían que no bastaba con que Israel «no tuviera la intención» de matar a civiles en la guerra contra el «terrorismo»; las IDF debían «tratar de no matar a civiles»[141]. Se diría que ambos bandos de esta docta disputa sobre el equilibrio moralmente correcto entre conservar la vida de un soldado, por un lado, y la vida de un enemigo civil, por el otro, de algún modo se perdían lo esencial de lo que había ocurrido durante la Operación Plomo Fundido: cuando invadieron Gaza, las IDF acabaron con todo lo que se les ponía a la vista. Basándose no en las elucubraciones vaporosas de un seminario filosófico, sino en los hechos reales, el Informe Goldstone descubría que un análisis matizado de si Israel había o no calibrado adecuadamente el principio de «proporcionalidad» no tenía sentido: «Las acciones de las fuerzas armadas israelíes y las declaraciones de los líderes políticos y militares antes y durante las operaciones indican que, en conjunto, se basaban en una política deliberada de fuerza desproporcionada dirigida no al enemigo, sino a […] la población civil». También concluía que el sutil análisis sobre si Israel había o no aplicado adecuadamente el principio de «distinción» (entre combatientes y civiles) no tenía sentido: «Las reglas efectivas de combate, los procedimientos habituales y las instrucciones para las tropas sobre el terreno parecen haber sido concebidos para crear un entorno en el que la consideración debida a las vidas civiles y a la dignidad humana básica se sustituía por el desprecio al derecho humanitario internacional y a las normas básicas de derechos humanos»[142]. Mientras los filósofos eruditos debatían sobre la interpretación correcta de las leyes de la guerra y ambos lados tácitamente adjudicaban a Israel la noble intención de querer obedecerlas, la premisa real de la Operación Plomo Fundido y la condición previa esencial de su éxito era quebrar por completo esas leyes.

[1] A. H. Cordesman, The «Gaza War»: A Strategic Analysis, 2009.

[2] En ese momento, Cordesman detentaba la cátedra Arleigh A. Burke sobre Estrategia en el Center for Strategic and International Studies y era analista de seguridad nacional para la cadena ABC News.

[3] Solamente admitía que Israel podría haber atacado injustificadamente «algunos» objetivos civiles, «como una escuela de la UNRWA donde murieron 42 palestinos». Estas atrocidades merecen una mención de dos frases en su informe de 92 páginas. «No hay pruebas de que se produjeran otros abusos de los, por otra parte, estrechos límites impuestos por el derecho de guerra», continuaba, «aparte de unos pocos casos limitados»; y «el único incidente significativo que por ahora ha surgido es el posible uso ilegítimo de 20 proyectiles de fósforo en las áreas urbanas de Beit Lahiya». A. H. Cordesman, op. cit., pp. ii, 1-3, 63-64.

[4] A. H. Cordesman, op. cit., pp. 1, 10.

[5] A. H. Cordesman, op. cit., p. 2.

[6] A. H. Cordesman, op. cit.

[7] D. Kennedy, «A Context for Gaza», Harvard Crimson, 2 de febrero de 2009.

[8] A. H. Cordesman, op. cit., p. ii.

[9] U. Benziman, «Until proved otherwise», Haaretz, 18 de junio de 2006; B. Michael, «Of liars and hunters», Yediot Ahronot, 3 de septiembre de 2005; B. Michael, «Stop the lying!», Yediot Ahronot, 5 de septiembre de 2008. Véase también G. Levy, «Israel: Where the media will blindly buy what the ruling authorities dictate», Haaretz, 27 de agosto de 2016.

[10] K. Roth, «The Incendiary IDF», Human Rights Watch, 22 de enero de 2009.

[11] B. Wedeman, «Group Accuses Israel of Firing White Phosphorus into Gaza», CNN, 12 de enero de 2009; R. Marquand y N. Blanford, «Gaza: Israel under fire for alleged white phosphorus

use», Christian Science Monitor, 14 de enero de 2009.

[12] B'Tselem (Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories), «Military rejects horrific results of use of white phosphorus in Operation Cast Lead», 21 de mayo de 2009; véase también D. PoKempner, «Valuing the Goldstone Report», Global Governance 16, 2010, p. 149.

[13] A. Hass, «In the rockets' red glare», Haaretz, 15 de enero de 2009.

[14] A. H. Cordesman, op. cit., pp. 20, 27.

[15] A. H. Cordesman, op. cit., pp. 20-27 y ss., 42-57 y ss.

[16] A. H. Cordesman, op. cit., p. 22.

[17] B'Tselem (Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories), «Suspicion: Bombed truck carried oxygen tanks and not Grad rockets», 31 de diciembre de 2008; Israel Ministry of Foreign Affairs, «Conclusions of investigations into central claims and issues in Operation Cast Lead-Part 2», 22 de abril de 2009.

[18] Human Rights Watch, Precisely Wrong: Gaza Civilians Killed By Israeli Drone-Launched Missiles, 2009, pp. 17-21.

[19] A. H. Cordesman, op. cit., pp. 58, 62.

[20] A. H. Cordesman, op. cit., p. 58; A. Harel, «Israel: Two-thirds of Palestinians killed in Gaza fighting were terrorists», Haaretz, 13 de febrero de 2009; Y. Katz, «IDF: World duped by Hamas's false civilian death toll figures», The Jerusalem Post, 15 de febrero de 2009.

[21] El cómputo inflacionario de Israel de los combatientes enemigos durante la Operación Plomo Fundido sigue un patrón familiar. Mientras que Israel alegaba tras la guerra de 2006 que el 60 por 100 de las bajas libanesas eran guerrilleros de Hezbolá, todas las fuentes independientes daban una cifra cercana al 20 por 100. W. Arkin, Divining Victory: Airpower in the 2006 Israel-Hezbollah War, Maxwell Air Force Base, AL, 2007, p. 74; Human

Rights Watch, Why They Died: Civilian Casualties in Lebanon During the 2006 War, 2007, pp. 76, 79; M. Prothero, «Hizbollah builds up covert army for a new assault against Israel», The Observer, 27 de abril de 2008; A. Crooke y M. Perry, «How Hezbollah Defeated Israel; Part 2, Winning the Ground War», The Asia Times, 13 de octubre de 2006.

[22] A. H. Cordesman, op. cit., pp. 16-17, 63.

[23] La exposición siguiente se centra en las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos que se derivan directamente de la Operación Plomo Fundido. Algunos informes de derechos humanos también han documentado violaciones indirectas, como la represión por parte de Hamás de miembros de Al Fatah en Gaza y la represión recíproca por parte de la Autoridad Palestina de miembros de Hamás en Cisjordania, así como la represión por parte de Israel del disenso en Israel y Cisjordania y no proporcionar refugios antiaéreos a los beduinos del sur de Israel.

[24] Amnesty International, Operation «Cast Lead»: 22 Days of Death and Destruction, 2009, p. 4. El Informe Goldstone señalaba que «encontró cierta reticencia en las personas a las que entrevistó en Gaza a hablar de las actividades de los grupos armados». No obstante, concluyó que se podía evaluar la exactitud de los testimonios palestinos:

Teniendo en cuenta la disposición de los testigos, la plausibilidad de sus relatos y la coherencia de estos con las circunstancias observadas y con otros testimonios, la Misión pudo confirmar la credibilidad y fiabilidad de quienes escuchó. […] Las conclusiones definitivas sobre la fiabilidad de la información recibida se hicieron tomando todas estas cuestiones en cuenta, cruzando datos del material y la información relevante y evaluando si, en toda circunstancia, había suficiente información de una naturaleza creíble y fiable para que la Misión lo diera como un hecho probado (Report of the United Nations Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict [25 de septiembre de 2009], §§ 35, 170-171, 440; a partir de ahora Informe Goldstone).

Algunas experiencias discrepantes de Amnistía y la Misión Goldstone se pueden justificar por el perfil más elevado de la Misión, que provocó una intrusión mayor por parte de Hamás y, paralelamente, más reservas por parte de la población.

[25] The State of Israel, The Operation in Gaza, 27 December 2008-18 January 2009: Factual and Legal Aspects, 2009.

[26] State of Israel, Operation in Gaza, cit., § 34. Por supuesto, Israel no desdeñaba completamente estos informes sobre derechos humanos. Cita afirmativamente uno de ellos que condenaba los ataques suicidas de Hamás (State of Israel, Operation in Gaza, cit., p. 52, n. 139).

[27] Informe Goldstone, cit., §§ 1107-1164 y ss.

[28] State of Israel, Operation in Gaza, cit., §§ 22, 25.

[29] State of Israel, Operation in Gaza, cit., §§ 6, 8, 84, 115, 222-223.

[30] A. Harel, «Testimonies on IDF misconduct in Gaza keep rolling in», Haaretz, 22 de marzo de 2009.

[31] D. Macintyre, «Israeli Commander: “We rewrote the rules of war for Gaza”», The Independent, 3 de febrero de 2010.

[32] A. Pfeffer, «Gaza Soldiers Speak Out», Jewish Chronicle, 5 de marzo de 2009; Breaking the Silence, Soldiers’ Testimonies from Operation Cast Lead, Gaza 2009, Jerusalén, 2009, pp. 24 (Testimonio 9), 29 (Testimonio 10), 62 (Testimonio 26). El Informe Goldstone ponía en duda la premisa de las IDF de que los civiles palestinos ya habían huido de las zonas que atacaba Israel (§ 522); sobre este punto, véase también Public Committee against Torture in Israel (PCATI), No Second Thoughts: The Changes in the Israeli Defense Forces’ Combat Doctrine in Light of «Operation Cast Lead», 2009), pp. 18-19.

[33] A. Harel, «What Did the IDF Think Would Happen in Gaza?», Haaretz, 27 de marzo de 2009.

[34] State of Israel, Operation in Gaza, cit., § 232.

[35] A. Harel, «What Did the IDF Think», cit.

[36] Breaking the Silence, Soldiers' Testimonies, cit., p. 20 (Testimonio 7); A. Harel, «IDF in Gaza: Killing civilians, vandalism, and lax rules of engagement», Haaretz, 18 de marzo de 2009; A. Harel, «Shooting and Crying», Haaretz, 19 de marzo de 2009.

[37] A. Harel, «IDF Officer: "It will take many years to restore" bombwracked Gaza», Haaretz, 7 de enero de 2009.

[38] D. Macintyre, «Israeli Commander», cit.

[39] A. H. Cordesman, op. cit., p. 17.

[40] State of Israel, Operation in Gaza, cit., §§ 8, 17, 24, 138, 141, 154, 262-365.

[41] Report of the Independent Fact-Finding Committee on Gaza: No Safe Place, presented to the League of Arab States, 30 de abril de 2009, § 13 del Resumen ejecutivo; §§ 283-399, 467-468, 483, 490; a partir de ahora, Informe Dugard. En una nota relacionada, el informe señalaba:

Para poder dar un aviso telefónico razonable, las IDF no solamente tendrían que saber los números de teléfono de los residentes de Gaza, sino los números de los residentes de un edificio o una zona concreta. El Comité no tiene constancia de cómo se las ingeniaron las IDF para obtener y confirmar esta información cuando la mayoría de los teléfonos en Gaza son teléfonos móviles, que no están asociados con una dirección o localidad determinada, y la utilidad de advertir a alguien para que desaloje un lugar por teléfono móvil requiere el conocimiento de su localización real (Informe Dugard, cit., § 293 [véase también Informe Dugard, cit., § 467]).

Para un «caso claramente documentado y a gran escala,

comunicado en tiempo real, de que las IDF solamente hablaban de boquilla en lo que se refiere a los avisos a civiles para minimizar los daños», véase PCATI, No Second Thoughts, cit., pp. 17-18. Véase también Human Rights Watch, White Flag Deaths: Killings of Palestinian Civilians in Operation Cast Lead, Nueva York, agosto de 2009), p. 5; Informe Goldstone, cit., §§ 37, 501-502, 511, 515, 531-542 (el Informe concedía que los avisos pudieron haber sido eficaces en «algunos» momentos); y D. PoKempner, «Valuing the Goldstone Report», cit., p. 152.

[42] J. Bowen, «Gaza Stories: Israeli minister», entrevista con Meir Sheetrit, BBC News, 9 de febrero de 2009; Amnesty International, Operation «Cast Lead», cit., pp. 3, 50-51. El informe israelí refiere «más de 165.000 llamadas de teléfono avisando a los civiles de que se alejaran de los objetivos militares», mientras que el asesor legal principal de las IDF alegaba que se habían hecho «más de 250.000 llamadas». State of Israel, Operation in Gaza, cit., §§ 8, 264; Y. Katz, «Security and defense: waging war on the legal front», The Jerusalem Post, 18 de septiembre de 2009.

[43] L. R. Blank, «The Application of IHL in the Goldstone Report: A critical commentary», Yearbook of International Law 12, 2009, pp. 47-48.

[44] State of Israel, Operation in Gaza, cit., §§ 86, 266.

[45] A. H. Cordesman, op. cit., pp. 37, 64.

[46] United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Humanitarian Monitor, enero de 2009; véase también Amnesty International, Operation «Cast Lead», cit., pp. 51-53.

[47] H. Balousha y Chris McGreal, «Tanks, rockets, death and terror: A civilian catastrophe unfolding», The Guardian, 5 de enero de 2009.

[48] A. H. Cordesman, op. cit., p. 64.

[49] Informe Goldstone, cit., §§ 72, 317, 1297, 1315; véase también § 1299 para las falsedades israelíes sobre las cantidades y tipos de

provisiones humanitarias que permitió introducir en Gaza.

[50] Human Rights Watch, «Choking Gaza harms civilians», 18 de febrero de 2009; OCHA, «Field update on Gaza from the Humanitarian Coordinator», 10-16 de marzo de 2009; véase también A. Hass, «Israel bans books, music, and clothes from entering Gaza», Haaretz, 17 de mayo de 2009.

[51] Amnesty International et al., Failing Gaza: No Rebuilding, no Recovery, no More Excuses, 2009, pp. 3, 6, 10, 12.

[52] UN News Center, «Opening Remarks at Press Conference», 20 de enero de 2009.

[53] UN General Assembly, Letter dated 4 May 2009 from the Secretary-General addressed to the President of the Security Council: Summary by the Secretary-General of the report of the United Nations Headquarters Board of Inquiry into certain incidents in the Gaza Strip between 27 December 2008 and 19 January 2009, 2009), A/63/855-S/2009/250, §§ 10-28, 46-67, 77-84, 97, 100, 107. Ya fuera porque optara o recibiera presiones para esconder el informe del escrutinio público, Ban ki-moon solamente publicó un resumen. El gobierno de Obama lo forzó a rechazar en su carta de presentación del informe la recomendación que había hecho la Junta de Investigación de que se investigaran más a fondo los incidentes. Véase J. Stern-Weiner, «Ban Ki-moon Stars in Live Puppet Show», 22 de junio de 2015, disponible en [jamiesternweiner.wordpress.com/2015/06/22/ban-ki-moon-stars-in-live-puppet-show/].

[54] B. Ravid, «Peres Tells Ban: Israel will never accept UN Gaza probe», Haaretz, 7 de mayo de 2009; B. Ravid, «Barak: IDF did not mean to shoot at UN facilities in Gaza», Haaretz, 5 de mayo de 2009.

[55] Physicians for Human Rights-Israel, Holding Health to Ransom: GSS Interrogation and Extortion of Palestinian Patients at Erez Crossing, 2008.

[56] State of Israel, Operation in Gaza, cit., § 274.

[57] Entre 2006 y el final de la Operación Plomo Fundido, casi 300 gazatíes que requerían cuidados médicos en el extranjero murieron por el cierre de fronteras. Al Mezan Center for Human Rights, «Yet Another Child Casualty Due to Israel's Closure Policies», 2009. En una nota adjunta, Cordesman daba crédito a la acusación israelí de que Hamás «impedía la evacuación médica de los palestinos a Israel», aunque de hecho Hamás no tenía control sobre esas derivaciones médicas. Después de que se hiciera efectivo el alto el fuego el 18 de enero, Israel abrió una «clínica humanitaria» en el paso de Erez, pero para entonces la emergencia médica había pasado y los funcionarios palestinos la ignoraron. La instalación era considerada en general (también por Physicians for Human Tights-Israel) un gesto de relaciones públicas israelí. El 28 de enero, Israel anunció el cierre de la clínica debido a la falta de pacientes. A. H. Cordesman, op. cit., p. 66; Physicians for Human Rights-Israel, «Ill Morals»: Grave Violations of the Right to Health During the Israeli Assault on Gaza, 2009, pp. 18-20, 23, 51.

[58] J. McGirk, «Gaza's Health and Humanitarian Situation Remains Fragile», The Lancet, 4 de febrero de 2009; Amnesty International et al., Failing Gaza, cit., p. 11.

[59] A. H. Cordesman, op. cit., p. 64; State of Israel, Operation in Gaza, cit., § 274.

[60] B'Tselem (Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories), Guidelines for Israel's Investigation into Operation Cast Lead, 27 December 2008-18 January 2009, Jerusalén, 2009, p. 14.

[61] Physicians for Human Rights-Israel, «Ill Morals», cit., p. 35.

[62] S. Van As et al., Final Report: Independent Fact-Finding Mission into Violations of Human Rights in the Gaza Strip During the Period 27.12.2008-18.01.2009, Bruselas, 2009, p. 77.

[63] «Gaza: ICRC demands urgent access to wounded as Israeli army fails to assist wounded Palestinians», nota de prensa, 8 de enero de 2009.

[64] Al Mezan Center for Human Rights, Bearing the Brunt Again:

Child Rights Violations during Operation Cast Lead, 2009, p. 32.

[65] A. H. Cordesman, op. cit., p. 65.

[66] State of Israel, Operation in Gaza, cit., §§ 7, 23, 141, 171, 174, 176, 177-179, 371-372, 377-380; véase también Intelligence and Terrorism Information Center, Hamas and the Terrorist Threat from the Gaza Strip: The Main Findings of the Goldstone Report versus the Factual Findings, 2010), pp. V, 173-177 (este documento también cita pruebas extraídas de una «página web asociada a Al Fatah»). El informe israelí está plagado de referencias al dudoso reportaje del periodista italiano Lorenzo Cremonesi. Pero, con prudencia, no cita el sensacional hallazgo de Cremonesi de que, en total, «no más de 500 o 600» gazatíes murieron durante la Operación Plomo Fundido. Si esa cifra fuera exacta, no solamente las organizaciones de defensa de los derechos humanos, sino también Israel, habrían exagerado la cifra de muertes palestina. L. Cremonesi, «Così i ragazzini di Hamas ci hanno utilizzato come bersagli», Corriere della Sera, 21 de enero de 2009; «Palestinians confirm Hamas war crimes, refute Gaza death toll», Israel Today, 22 de enero de 2009.

[67] State of Israel, Operation in Gaza, cit., § 371, cursiva en el original.

[68] S. Van As et al., Final Report, cit., p. 77.

[69] B'Tselem, Guidelines, cit., p. 16. Véase también N. G. Finkelstein, Beyond Chutzpah: On the Misuse of Anti-Semitism and the Abuse of History, edición de bolsillo aumentada, Berkeley, 2008, pp. 128-130; y E. O'Loughlin, «Israel Withdraws Disputed Footage», Age, 8 de octubre de 2004.

[70] Human Rights Watch, Why They Died, cit., p. 160.

[71] Informe Goldstone, cit., §§ 36, 468-473 (el testimonio de Magen David Adom en § 473), 485.

[72] Intelligence and Terrorism Information Center, Hamas and the Terrorist Threat, cit., p. 164; véase también State of Israel, Operation in Gaza, cit., §§ 7, 23, 141, 171-172, 175.

[73] Amnesty International, Operation «Cast Lead», cit., p. 43. Véase también Amnesty International Report 2010: The State of the World's Human Rights [2010], entrada «Israel and the Occupied Palestinian Territories», p. 183; Physicians for Human Rights-Israel, «Ill Morals», cit., p. 41; Informe Goldstone, §§ 36, 466-467, 485.

[74] State of Israel, Operation in Gaza, cit., §§ 172, 175; véase también Intelligence and Terrorism Information Center, Hamas and the Terrorist Threat, cit., pp. V, 163-177. B. Morris, «Derisionist History», New Republic, 28 de noviembre de 2009.

[75] United Nations Development Program, Gaza, Early Recovery and Reconstruction Needs Assessment-One Year After, 2010, p. 20.

[76] State of Israel, Gaza Operation Investigations: Second update, 2010, § 69.

[77] M. Coker, «Gaza's Isolation Slows Rebuilding Efforts», Wall Street Journal, 5 de febrero de 2009; OCHA, The Humanitarian Monitor; E. Bronner, «Amid the Destruction, a Return to Life in Gaza», The New York Times, 25 de enero de 2009; United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), «Tough Times for University Students in Gaza», 26 de marzo de 2009; Reporters without Borders, Operation «Cast Lead»: News Control as Military Objective, 2009; Al Mezan, Bearing the Brunt, cit., pp. 10, 62, 81; Amnesty International et al., Failing Gaza, cit., p. 9; United Nations Institute for Training and Research, Satellite Image Analysis in Support to the United Nations Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict, 2009, p. ii; Gisha (Legal Center for Freedom of Movement), Red Lines Crossed: Destruction of Gaza's Infrastructure, 2009, pp. 5-6, 19, 27. Entre la destrucción infligida durante la Operación Plomo Fundido y la expansión de Israel de la «zona intermedia» en Gaza después de la invasión, un año después casi la mitad de las tierras agrícolas de Gaza no tenían producción. El análisis más completo de la destrucción causada por el ataque israelí y sus consecuencias duraderas se encuentra en United Nations Development Program, Gaza, Early Recovery, cit.

[78] Informe Goldstone, §§ 50, 913-941. El molino producía «el ingrediente más básico de la dieta local». Israel posteriormente trató de defender su ataque al molino (State of Israel, Gaza Operation

Investigations: An Update [enero de 2010], pp. 41-44), pero había pruebas contundentes que desmentían la versión israelí de los hechos (A. Pfeffer, «UN Insists Israel Bombed Flour Mill during Cast Lead», Haaretz [4 de febrero de 2010]; Human Rights Watch, «I Lost Everything»: Israel's Unlawful Destruction of Property during Operation Cast Lead [Nueva York, enero de 2010], pp. 5, 83-86. Aun así, Israel siguió adhiriéndose a su relato original. Gaza Operation Investigations: Second Update, julio de 2010, pp. 9, 141-145. Un año después de la invasión, Israel seguía impidiendo la entrega de cemento para reconstruir el molino de harina (Amnesty International et al., Failing Gaza, cit., p. 6.).

[79] Como resultado de este único ataque israelí, «65.000 pollos murieron aplastados o quedaron enterrados vivos» Amnesty International, Operation «Cast Lead», cit., p. 62; Informe Goldstone, cit., §§ 51, 942-961.

[80] United Nations Development Program, Gaza, Early Recovery, cit., p. 67.

[81] A. Mizroch, «Analysis: Grappling with Goldstone», The Jerusalem Post, 18 de septiembre de 2009; véase también Israel Ministry of Foreign Affairs, «Israel Gaza FAQ: Goldstone Mission» (s. f.).

[82] En un informe publicado un año y medio después de la Operación Plomo Fundido, Israel, como era de esperar, alegó que las cooperativas avícolas se destruyeron «por razones de necesidad militar». Gaza Operation Investigations: Second Update, cit., §§ 122-129.

[83] Amnesty International et al., Failing Gaza, cit., p. 7; United Nations Conference on Trade and Development, «Report on UNCTAD Assistance to the Palestinian People: Developments in the economy of the occupied Palestinian territory», agosto de 2009, § 20.

[84] Amnesty International et al., Failing Gaza, cit., p. 7; B. Opall-Rome, «Israel's new hard line on Hizbollah», Defense News, 31 de mayo de 2010.

[85] International Crisis Group, Gaza's Unfinished Business, 2009, cit., p. 21.

[86] Amnesty International, Operation «Cast Lead», cit., p. 66; véase también Human Rights Watch, Rockets from Gaza: Harm to Civilians from Palestinian Armed Groups' Rocket Attacks, 2009, pp. 2, 20 (informando de los daños a una sinagoga, una escuela y una escuela infantil); e Informe Goldstone, cit., §§ 1659-1661.

[87] State of Israel, Operation in Gaza, cit., p. 17, n. 27.

[88] Breaking the Silence, Soldiers' Testimonies, cit., pp. 26 (Testimonio 10), 59 (Testimonio 24), 60 (Testimonio 25), 85 (Testimonio 38), 101 (Testimonio 47).

[89] U. Blau, «Dead Palestinian babies and bombed mosques-IDF fashion 2009», Haaretz, 20 de marzo de 2009.

[90] Human Rights Watch, «I Lost Everything», cit., p. 7.

[91] State of Israel, Operation in Gaza, cit., § 71.

[92] Breaking the Silence, Soldiers' Testimonies, cit., pp. 69 (Testimonio 29), 83 (Testimonio 37).

[93] Breaking the Silence, Soldiers' Testimonies, cit., pp. 18 (Testimonio 6), 20 (Testimonio 7), 46 (Testimonio 18), 60 (Testimonio 25), 85 (Testimonio 38); véase también ibid., pp. 47–«fuego masivo» (Testimonio 19), 48–«disparaban como locos» (Testimonio 20), 67–«Nunca había visto tal despliegue. Usaban todas las armas que yo conocía» (Testimonio 29), 76–«En general, todo lo que se podía disparar, se disparaba» (Testimonio 33).

[94] State of Israel, Operation in Gaza, cit., § 445.

[95] Amnesty International, Operation «Cast Lead», cit., p. 55.

[96] Informe Dugard, cit., §§ 300, 372-387; véase también Informe Goldstone, cit., §§ 53, 351, 1004, 1207, 1319.

[97] Human Rights Watch, «I Lost Everything», cit., pp. 1, 4, 41, 44.

[98] International Crisis Group, Gaza's Unfinished Business, cit., p. 2. Aparentemente refiriéndose a esta misma zona, Amnistía informaba de que «parecía que hubiera sufrido un terremoto»: Operation «Cast Lead», cit., p. 61.

[99] A. H. Cordesman, op. cit., p. 49.

[100] A. Harel, «IDF Probe: Cannot defend destruction of Gaza homes», Haaretz, 15 de febrero de 2009. Sobre las casas palestinas arrasadas, Amnistía decía:

Muchas de las casas destruidas durante la Operación Plomo Fundido habían sido saqueadas o tomadas temporalmente por los soldados israelíes durante las incursiones de los años anteriores. Es muy poco probable que Hamás o el resto de los grupos palestinos hubieran situado sus centros de mando, sus talleres de fabricación de misiles o los almacenes de armamento en las zonas más accesibles y más fácilmente invadidas por las tropas israelíes. […] El hecho de que los soldados usaran [minas antitanque] que les exigían salir de los tanques, caminar entre edificios o entrar en las casas, para colocar las cargas explosivas dentro de las casas junto a los muros de carga, indica que se sentían totalmente confiados de que no había tiradores palestinos dentro o en torno a las casas. Indica también su confianza en que no había túneles bajo las casas que los tiradores pudieran usar para atraparlos y que las casas no tenían trampas (Operation «Cast Lead», cit., p. 56).

El Informe Goldstone subdividía la destrucción de las casas en fases cronológicamente diferenciadas: «Una primera fase de destrucción de casas, extensiva por la "necesidad operativa" de avance de las tropas israelíes, fue seguida de un periodo de relativa ociosidad por parte de los bulldozers y de los ingenieros de explosivos israelíes. Pero durante los últimos tres días, consciente de su inminente retirada, las fuerzas armadas israelíes se lanzaron a otra ola de destrucción sistemática de edificios civiles» (Informe Goldstone, cit., §§ 990-1004, 1323). El Al Mezan Center for Human Rights informaba de que «al menos 1.732 refugios» fueron destruidos

«después del final de las hostilidades, cuando estaban ya bajo el control efectivo de Israel, lo que indica que ya no podían ser objetivos militares ni estar junto a otros objetivos militares legítimos y que, por lo tanto, deberían haberse respetado en tanto objetivos civiles» Al Mezan, Bearing the Brunt, cit., pp. 80-94. En un punto semejante HRW señalaba la ausencia de cualquier prueba de que «las trampas explosivas colocadas por los grupos armados palestinos o las explosiones secundarias causadas por las armas almacenadas por estos grupos armados fueran responsables de cualquier cantidad significativa de los daños observados en Gaza». Human Rights Watch, «I Lost Everything», cit., p. 18.

[101] International Crisis Group, Gaza's Unfinished Business, cit., p. 19; Informe Goldstone, cit., § 1201.

[102] A. H. Cordesman, op. cit., pp. 18, 24, 26.

[103] Tanto las notas de prensa israelíes que cita A. H. Cordesman, op. cit., pp. 24, 26, como State of Israel, Operation in Gaza, cit., p. 61, n. 161, § 234, afirman explosiones secundarias únicamente en los casos de las dos mezquitas atacadas respectivamente el 31 de diciembre de 2008 y el 1 de enero de 2009. En una respuesta publicada mucho después de que terminara el asalto a Gaza, Israel aludía a una explosión secundaria en una mezquita atacada el 13 de enero de 2009. Intelligence and Terrorism Information Center, Hamas and the Terrorist Threat, cit., p. 157.

[104] El Informe Goldstone concluye cautamente: «Aunque las situaciones investigadas por la Misión no pudieron establecer el uso de las mezquitas para fines militares o para esconder actividades militares, la Misión no puede descartar que esto haya podido ocurrir en otros casos», cit., §§ 36, 464-465, 486, 497, 822-843, 1953. En un par de artículos de periódico, la directora ejecutiva de B'Tselem, Jessica Montell, defendía que el Informe Goldstone no era lo suficientemente crítico con Hamás porque «ignoraba» pruebas que contradecían su conclusión provisional. Sin embargo, a pesar de mis reiteradas peticiones, Montell no ha podido respaldar su alegación de que Hamás había empleado mal las mezquitas. J. Montell, «A Time for Soul-Searching», The Jerusalem Post, 30 de septiembre de 2009; J. Montell, «The Goldstone Report on Gaza», The Huffington Post, 1 de octubre de 2009.

[105] Intelligence and Terrorism Information Center, Hamas and the Terrorist Threat, cit., pp. 143-144.

[106] State of Israel, Gaza Operation Investigations: Second Update, cit., § 69.

[107] H. Chehata, «Exclusive MEMO Interview with Colonel Desmond Travers», Middle East Monitor, 23 de enero de 2010. Además, puesto que las mezquitas atacadas eran «frecuentadas» por funcionarios de alto rango de Hamás (Intelligence and Terrorism Information Center, Hamas and the Terrorist Threat, cit., pp. 147-148), es muy probable que estuvieran bajo vigilancia israelí.

[108] Intelligence and Terrorism Information Center, Hamas and the Terrorist Threat, cit., p. 146; Base de datos del Al Mezan Center for Human Rights. También se puede suponer que Hamás almacenara armas en las mezquitas porque quisiera demonizar a Israel atrayéndolo a atacarlas, pero una hipótesis así es difícil de cuadrar con el hecho de que también se decía que Hamás escondía las armas en las mezquitas. Intelligence and Terrorism Information Center, Hamas and the Terrorist Threat, cit., pp. 147, 152, 158.

[109] A. Dershowitz, The Case against the Goldstone Report: A Study in Evidentiary Bias, disponible en [https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/3593975/DershowitzGoldstone.pdf?sequence=2&isAllowed=y], pp. 4, 39-41.

[110] Informe Dugard, cit., §§ 349-353, 498, 502; véase también Amnesty International, Operation «Cast Lead», cit., p. 15.

[111] Breaking the Silence, Soldiers' Testimonies, cit., p. 70.

[112] Intelligence and Terrorism Information Center, Hamas and the Terrorist Threat, cit., p. 179.

[113] Informe Dugard, cit., § 347.

[114] Intelligence and Terrorism Information Center, Hamas and the Terrorist Threat, cit., pp. V, 193-194.

[115] United Nations Development Program, Gaza, Early Recovery, cit., p. 26.

[116] Informe Goldstone, cit., § 1273.

[117] State of Israel, Operation in Gaza, cit., § 158; véase también Intelligence and Terrorism Information Center, Hamas and the Terrorist Threat, cit., p. 185.

[118] Informe Goldstone, cit., §§ 54, 61, 1180, 1182, 1185-1191, 1891; A. H. Cordesman, op. cit., p. 18.

[119] Amnesty International, Operation «Cast Lead», cit., p. 55.

[120] A. H. Cordesman, op. cit., pp. 8-9.

[121] A. H. Cordesman, op. cit., p. 27.

[122] A. H. Cordesman, op. cit., pp. ii, 1, 15-16, 18, 19, 28, 38, 40, 57.

[123] A. H. Cordesman, op. cit., pp. 15 y ss.

[124] State of Israel, Operation in Gaza, §§ cit., 4, 59, 73-82. Véase también Intelligence and Terrorism Information Center, Hamas and the Terrorist Threat, cit., pp. 6-7, 45-55, 76-78.

[125] A. H. Cordesman, op. cit., pp. 10, 16, 28, 39, 42.

[126] A. H. Cordesman, op. cit., pp. 27, 57.

[127] A. H. Cordesman, op. cit., p. 41; R. Pedatzur, «The war that wasn't», Haaretz, 25 de enero de 2009.

[128] R. Pedatzur, «War that wasn't», cit.

[129] International Crisis Group, Gaza's Unfinished Business, cit., pp. 2, 21 (véase también ibid., p. 8, n. 82, y p. 19); Amnesty International, Operation «Cast Lead», cit., p. 56.

[130] Breaking the Silence, Soldiers' Testimonies, cit., pp. 25 (Testimonio 9), 36 (Testimonio 13), 47 (Testimonio 19), 54 (Testimonio 23), 60 (Testimonio 25), 68 (Testimonio 29), 77 y 80 (Testimonio 34), 90 (Testimonio 41).

[131] Informe Goldstone, cit., § 459.

[132] Informe Dugard, cit., § 214. A la luz de este fracaso operativo, la alegación de Israel de que Hamás había amasado «miles» de «misiles antitanque avanzados» parece disparatada. Intelligence and Terrorism Information Center, Hamas and the Terrorist Threat, cit., pp. 7, 52, 104.

[133] M. Halbertal, «The Goldstone Illusion: What the UN report gets wrong about Gaza-and war», New Republic, 6 de noviembre de 2009.

[134] A. H. Cordesman, op. cit., p. 11.

[135] A. H. Cordesman, op. cit., p. 68.

[136] A. H. Cordesman, op. cit., pp. 11, 32.

[137] K. Sengupta y D. Macintyre, «Israeli cabinet divided over fresh Gaza surge», The Independent, 13 de enero de 2009; PCATI, No Second Thoughts, cit., p. 28.

[138] A. Blomfield, «Israeli Opposition Leader Tzipi Livni "cancels London visit over prosecution fears"», The Daily Telegraph, 14 de diciembre de 2009; H. Keinon, «Miliband "shocked" at Livni's warrant», The Jerusalem Post, 15 de diciembre de 2009; D. Edelson, «Livni: We must do what's right for us», ynetnews.com, 15 de diciembre de 2009.

[139] International Crisis Group, Ending the War in Gaza, cit., p. 19; International Crisis Group, Gaza's Unfinished Business, cit., p. 19.

[140] G. Bechor, «Israel is back», ynetnews.com, 19 de febrero de 2010. En los testimonios posteriores a la invasión, un soldado de las IDF susurraba que «no había necesidad de un fuego tan intenso, no era necesario usar morteros, munición de fósforo. […] El ejército buscaba la oportunidad de hacer una maniobra espectacular para mostrar su potencia». Breaking the Silence, Soldiers' Testimonies, cit., pp. 68-69 (Testimonio 29).

[141] A. Kasher, «Operation Cast Lead and just war theory», Azure,

verano de 2009, pp. 64-67; A. Margalit y M. Walzer, «Israel: civilians & combatants», The New York Review of Books, 14 de mayo de 2009, cursiva en el original.

[142] Informe Goldstone, cit., §§ 1886-1887.

IV. ESCUDOS HUMANOS

Unos 1.400 palestinos fueron asesinados durante la Operación Plomo Fundido, de los cuales hasta cuatro quintos de ellos eran civiles y 350 niños y niñas[1]. Por el otro lado, el total de las bajas de Israel equivalen a diez combatientes (cuatro caídos por fuego amigo) y tres civiles[2]. La proporción total de palestinos e israelíes asesinados era superior a 100:1 y la de los palestinos e israelíes civiles alcanzaba 4000:1[3]. Cuando un reportero de la BBC se enfrentó al ministro del Interior, Meir Sheetrit, con el hecho de que Israel «había impuesto 100 veces más bajas en Gaza en las tres semanas de la operación que lo que ellos habían causado», este replicó: «Esa es la idea de la Operación, ¿qué se creía usted?»[4]. Una encuesta que se hizo poco después de que terminara la invasión descubrió que dos tercios de los judíos israelíes pensaban que la Operación Plomo Fundido debería haber continuado hasta que Hamás se rindiera[5]. Si los israelíes se quejaban de que la invasión no había logrado sus objetivos, el subtexto, según el periodista de Haaretz Gideon Levy, era que «no habíamos matado suficiente»[6].

Para reducir su culpabilidad por la pérdida de vidas, Israel alegaba que si muchos civiles gazatíes habían muerto era porque Hamás los usaba como «escudos humanos». Hamás «había elegido basar sus operaciones en las zonas civiles no a pesar, sino por razón de la posibilidad de daños sustanciales a civiles», expresaba un informe «fáctico y legal» israelí; y «los operativos de Hamás se jactaban de poner en peligro las vidas civiles». Pero estas acusaciones no procedían de las investigaciones sobre derechos humanos. En uno de los informes más extensos sobre derechos humanos, posterior a la invasión, Amnistía Internacional concluía que Hamás había quebrantado algunas leyes de la guerra. «Había lanzado misiles y emplazado material militar y posiciones cerca de casas civiles, poniendo en peligro las vidas de sus habitantes, exponiéndolos al riesgo de los ataques israelíes. También había usado casas y propiedades vacías como posiciones de combate durante los enfrentamientos armados con las fuerzas israelíes, exponiendo así a los habitantes de las casas vecinas al peligro de los ataques o a

quedar atrapados en el fuego cruzado.» El informe de Amnistía seguía, no obstante, con unas advertencias importantes: no había «pruebas de que los misiles se lanzaran desde las casas o edificios residenciales mientras hubiera civiles en esos edificios»; «los militantes palestinos usaban con frecuencia casas vacías, pero […] no tomaron por la fuerza casas habitadas»; «Hamás se mezclaba con la población civil, aunque lo contrario hubiera sido casi imposible de evitar en la pequeña y superpoblada Franja de Gaza»; «los combatientes palestinos, como los soldados israelíes, iniciaron enfrentamientos armados en torno a las áreas residenciales donde había civiles presentes, poniéndolos en peligro. La localización de estos enfrentamientos la determinaban en su mayoría las fuerzas armadas israelíes, que entraron en Gaza con tanques y transportes blindados de personal y tomaron posiciones en el interior de los barrios residenciales». En el caso de la acusación más explosiva, Amnistía exoneraba categóricamente a Hamás:

Al contrario de las reiteradas alegaciones por parte de oficiales israelíes del empleo de «escudos humanos», Amnistía Internacional no ha encontrado pruebas de que Hamás u otros combatientes palestinos dirigieran el tránsito de civiles de manera que protegieran de los ataques los objetivos militares. No ha encontrado pruebas de que Hamás o cualquier otro grupo armado obligara a los residentes a permanecer dentro o cerca de los edificios que usaban los combatientes, ni de que los combatientes impidieran a los residentes que abandonaran los edificios o las zonas que habían sido tomados por los militantes […].

Los delegados de Amnistía Internacional entrevistaron a muchos palestinos que se quejaban de la conducta de Hamás, especialmente sobre la represión y los ataques de Hamás contra sus oponentes, incluyendo asesinatos, torturas y detenciones arbitrarias, pero no recibieron ninguna información sobre combatientes de Hamás usándolos como «escudos humanos». En los casos que ha investigado Amnistía Internacional de civiles muertos en ataques israelíes, las muertes no pueden explicarse como resultado de la presencia de combatientes escudándose entre civiles, como en general argumenta el ejército israelí. En todos los casos que

Amnistía Internacional ha investigado de familias fallecidas cuando sus casas fueron bombardeadas desde el aire por las fuerzas israelíes, por ejemplo, ninguna de las casas atacadas estaba siendo usada por los grupos armados para actividades militares. De manera similar, en los casos de los misiles de precisión o los obuses disparados desde tanques que mataron a civiles en sus casas, no había combatientes presentes en las casas que fueron atacadas y los delegados de Amnistía Internacional no han encontrado indicios de que hubiera habido ningún enfrentamiento o cualquier otra actividad militar en las inmediaciones en el momento del ataque.

Aunque no encontró pruebas de que Hamás usara escudos humanos, Amnistía sí encontró amplias pruebas de que Israel sí los usaba. El informe israelí confiesa que las normas de actuación de las IDF prohíben estrictamente «el uso de civiles como escudos humanos» y que «las IDF adoptaron una serie de medidas para enseñar y concienciar sobre estas reglas de actuación al mando y los soldados». Pero, de hecho, los soldados israelíes «usaron a civiles, incluyendo niños y niñas, como “escudos humanos” poniendo en peligro sus vidas, obligándolos a permanecer dentro o cerca de las casas que ellos tomaban y usaban como posiciones militares. Algunos de ellos fueron obligados a efectuar tareas peligrosas, como inspeccionar propiedades u objetos sospechosos de ser trampas cazabobos. Los soldados también tomaron posiciones y lanzaron ataques desde casas deshabitadas y sus alrededores, exponiendo a los residentes locales al peligro de los ataques o a quedarse atrapados en un fuego cruzado». Otras investigaciones sobre derechos humanos (en especial los gráficos relatos del Informe Goldstone) y el testimonio posterior a la invasión de los soldados israelíes corroboraron el uso de escudos humanos por parte de las IDF[7].

Aun así, era axiomático para filósofos como Avishai Margalit y Michael Walzer que, mientras que los enemigos de Israel «intencionadamente ponían en peligro a los civiles, usándolos como protección», Israel «condenaba esas prácticas»[8]. En un libro que «explora los mitos y fantasías» sobre el Próximo Oriente, el diplomático de alto rango estadounidense Dennis Ross cargaba

contra Hamás porque usaba «a la población civil como escudos humanos» y «hacía un uso extenso de escudos humanos»[9]. El coronel británico Richard Kemp, que dirigía al ejército británico en Afganistán, afirmó en varias ocasiones que Hamás «deliberadamente se colocaba tras el escudo humano de la población civil»; «ordenaba y obligaba si era preciso, a que hombres, mujeres, niños y niñas de su propia población se colocaran en lugares que sabían que serían atacados por las IDF»; «deliberadamente» atraía a Israel «a asesinar a sus propios civiles inocentes»; y, «por supuesto», que desplegaban «a mujeres, niños y niñas» como bombas suicidas. El nexo de estas afirmaciones con la realidad terrenal era tan tenue como su perorata, citada ubicuamente por los apologetas de Israel, de que «durante la Operación Plomo Fundido, las IDF hicieron más por salvaguardar los derechos de la población civil en una zona de combate que ningún otro ejército en toda la historia militar»[10]. Implausible como es esta afirmación, la verdad es que inspira piedad por la población civil atrapada en el teatro de operaciones de Kemp.

Las circunstancias que rodearon las muertes de muchos palestinos subrayaban la fragilidad de la coartada «escudos humanos» de Israel. «Los ataques que causaron el mayor número de muertos y heridos», descubría Amnistía,

fueron efectuados con municiones de largo alcance y alta precisión disparados por la flota aérea, helicópteros y drones, o desde tanques estacionados a una distancia de varios kilómetros –a menudo sobre objetivos preseleccionados, un proceso que normalmente requeriría de la aprobación por parte de la cadena de mando–. Las víctimas de esos ataques no fueron atrapadas en el fuego cruzado de las batallas entre los militantes palestinos y las fuerzas israelíes, ni estaban cubriendo a militantes o cualquier otro objetivo legítimo. Muchos de ellos murieron mientras dormían y sus casas fueron bombardeadas. Otros estaban llevando a cabo sus tareas cotidianas en sus casas, sentados en el patio, colgando la ropa en la azotea, cuando fueron atacados por ráfagas aéreas o disparos de obuses desde los tanques. Los niños y las niñas estaban estudiando o jugando en sus cuartos o en las azoteas, o en el exterior de sus

casas, cuando fueron impactados por misiles o por obuses[11].

Los civiles palestinos, «incluyendo mujeres, niños y niñas, recibieron disparos desde corta distancia cuando no suponían ninguna amenaza para las vidas de los soldados israelíes», descubría Amnistía también, y «no había ninguna refriega en las inmediaciones cuando recibieron el disparo»[12]. Un estudio de HRW documentaba las matanzas por parte de Israel de civiles palestinos que «estaban intentando transmitir su estatus de no combatientes agitando una bandera blanca»; «Las fuerzas israelíes tenían el control de las zonas en cuestión, no había lucha allí en aquel momento y los combatientes palestinos no se escondían entre los civiles a quienes dispararon». En un incidente típico, «dos mujeres y tres niñas de la familia Abd Rabbo estuvieron unos minutos en el exterior de su casa, al menos tres de ellas sosteniendo trozos de tela blanca, cuando un soldado israelí abrió fuego, matando a dos niñas, de dos y siete años de edad, hiriendo a la abuela y a la tercera niña»[13]. El Informe Goldstone concluía que «las fuerzas armadas israelíes abrieron fuego repetidamente sobre civiles que no formaban parte de las hostilidades y que no les planteaban ninguna amenaza», y que «las fuerzas armadas israelíes han llevado a cabo ataques directos intencionados contra civiles», sin «ninguna razón que hubiera podido inducir razonablemente a las fuerzas armadas israelíes a asumir que los civiles atacados estaban de hecho tomando parte en las hostilidades»[14]. Los testimonios posteriores a la invasión de las IDF corroboraban el asesinato gratuito de civiles palestinos: «Ves a gente que más o menos sigue con su rutina cotidiana, paseando, cosas así. Claramente, no terroristas. Escucho de otras patrullas que han disparado allí a gente. Que han intentado matarlos»; «La gente no parece disgustarse demasiado por quitarle la vida a la gente»; «Allí a todo el mundo se le considera terrorista»; «Podíamos hacer lo que quisiéramos. ¿Quién nos iba a decir que no lo hiciéramos?»; «Comprendí que nuestra conducta allí había sido bastante salvaje: “Si lo ves, dispara”»; «Puedes hacer lo que te dé la gana […] simplemente porque mola», incluso lanzar fósforo blanco, «porque es divertido. Mola»[15].

La increíblemente asimétrica ratio de bajas entre Israel y Palestina es un testimonio de que la Operación Plomo Fundido en realidad no fue una guerra, sino una masacre. Era «típica de una especie particular de "acción policial"», observaba el catedrático de Derecho de Harvard Duncan Kennedy, «que las potencias coloniales [...] han emprendido históricamente para convencer a las poblaciones nativas que resistían de que, a no ser que dejaran de resistirse, sufrirían una muerte y privaciones insoportables»[16]. De hecho, el espectro de una masacre acecha los testimonios posteriores a la invasión de las IDF. Un soldado recordaba cómo la Operación Plomo Fundido se dirigía en buena parte por control remoto. «Es como si empezara la temporada de caza», recordaba. «A veces me recuerda a un juego de la Play.» «Te sientes como un niño jugando con una lupa», recordaba otro soldado, «quemando hormigas»[17]. «La mayor parte de las bajas palestinas se produjeron por ataques aéreos, fuegos de artillería y francotiradores», recordaban un par de soldados un año después de la invasión. «¿Victoria en el combate? Se parecía más a pescar peces de un barril»[18]. Invocar la frase «pulverización de los gazatíes», protestaba no obstante el editor literario de The New Republic, Leon Wieseltier, «era una indiferencia calculada a la moral desgarradora y a las perplejidades estratégicas que están contenidas en la desagradable realidad de la guerra asimétrica»[19]. De hecho, ¿no deberíamos compadecer a los pobres israelíes mientras luchaban con las perplejidades de quemar hormigas y pescar peces en un barreño? Entre tanto, el filósofo israelí Asa Kasher declaraba: «Estoy muy impresionado por el valor desplegado por todos y cada uno de los soldados que han participado en la Operación Plomo Fundido y sus mandos»[20]. Ocho soldados israelíes recibieron medallas por su «heroísmo»[21].

El modus operandi de la Operación Plomo Fundido apuntaba a la idoneidad del imaginario de los soldados. Un estudio de HRW sobre el uso «ilegal» del fósforo blanco encarnaba la metáfora de las hormigas quemadas. Causando «quemaduras horribles», a veces hasta el hueso, el fósforo blanco alcanza una temperatura de 1.500 grados Fahrenheit (816 grados Celsius)[22]. HRW informaba de que Israel «había hecho explotar reiteradamente fósforo blanco sobre las áreas pobladas, matando e hiriendo a civiles, y dañando las estructuras civiles, incluyendo una escuela, un mercado, un almacén de ayuda humanitaria y un hospital». Las IDF dispararon fósforo

blanco sobre los cuarteles generales de la UNRWA, en Ciudad de Gaza, «a pesar de las advertencias múltiples del personal de las Naciones Unidas sobre el posible daño a civiles»; en la escuela de la ONU de Beit Latiya incluso aunque «la ONU había proporcionado a las IDF las coordenadas GPS de la escuela antes de que empezaran las operaciones militares»; y, en el hospital Al Quds, aunque «estaba claramente señalizado y no parecía haber enfrentamientos en las zonas cercanas». HRW también señalaba que «todos los proyectiles de fósforo» que recolectaron en Gaza estaban fabricados en Estados Unidos[23]. La naturaleza semejante a un videojuego de Plomo Fundido quedaba subrayada en otro estudio de HRW, que documentaba los asaltos de alta tecnología de Israel sobre la población de Gaza. «Los misiles teledirigidos de Israel son de una precisión increíble», apuntaban. «Además de las cámaras de alta resolución y de otros sensores en los drones mismos, el misil disparado desde un dron tiene sus propias cámaras, que permiten que el operador observe el objetivo desde el momento del disparo. […] Si surge una duda de último momento sobre el objetivo, el operador del dron puede usar el control remoto del misil para desviar el misil disparado, apartando el misil del objetivo con un joystick». HRW investigó seis ataques con drones que mataron a 29 civiles (ocho de ellos menores). Descubrió que no había combatientes palestinos «presentes en las inmediaciones del ataque en aquellos momentos», y que cinco de los seis ataques «tuvieron lugar a pleno día, mientras los civiles estaban comprando, volviendo de la escuela o ocupados en sus actividades cotidianas, algo que sin duda no habrían hecho si hubiera habido combatientes palestinos en aquella zona en aquel momento»[24].

Inasequible al desaliento, el informe israelí sigue elogiando el respeto especial de las IDF por los «valores supremos» de la «vida humana» y la «pureza de las armas», puesto que «no emplearon […] armas y fuerza para herir a seres humanos que no fueran combatientes o prisioneros de guerra»[25]. Kasher elogiaba los valores «impecables» de las IDF, entre ellos, «proteger la dignidad humana de todo ser humano, incluso los terroristas más despreciables», y «el especial aprecio israelí […] por la santidad de la vida humana»[26]. El catedrático de Derecho de Harvard, Alan Dershowitz, aseveraba que «Israel se tomó muchas molestias para proteger a civiles», mientras que el fundador de Human Rights

Watch, Robert Bernstein, proponía que «la prensa podía pensar en elogiar» a Israel por sus «logrados intentos de minimizar las bajas civiles»[27]. En una historia de portada de The New Yorker, sobre «qué ocurrió realmente», el periodista Lawrence Wright informaba de que «el ejército israelí adoptó esfuerzos minuciosos para salvar vidas civiles en Gaza»[28]. ¿Qué debería preocuparnos más: que se crean o que no se crean esas fantasías?

¿Qué diría Gandhi?

A los palestinos se les reprocha a menudo que no abracen una estrategia a lo Gandhi que repudie la resistencia violenta. «Si los palestinos adoptaran los métodos de Gandhi», decía el vicesecretario de Defensa estadounidense Paul Wolfowitz en una conferencia en la Universidad de Georgetown en 2003, «creo que de hecho producirían un cambio muy profundo muy, muy rápidamente»[29]. Es posible que tuviera razón, pero, aun así, «los métodos de Gandhi» no obligarían a los palestinos a deponer sus armas improvisadas. Gandhi clasificaba la resistencia por la fuerza en condiciones imposibles –una mujer enfrentándose a un violador con bofetadas y añarazos, un hombre desarmado resistiéndose físicamente a la tortura por parte de una banda, o la defensa propia armada polaca ante la agresión nazi– como «casi no violenta». Era esencialmente una violencia simbólica, un incentivo para que el espíritu superara los miedos y que permitiría una muerte digna; se entendía como «una negativa a doblegarse ante la fuerza desproporcionada, con el pleno conocimiento de que supondría una muerte cierta»[30]. Ante la carnicería infernal y tecnológica de Israel en Gaza, ¿acaso los ocasionales proyectiles de Hamás no entran en esa categoría de violencia simbólica que Gandhi se negaba a condenar? Incluso si los ataques de proyectiles contituyeran una violencia de pleno derecho, aún no está claro que Gandhi los hubiera desautorizado. «Combatid a la violencia con la no violencia si es posible», exhortaba, «y, si no es posible, combatid la violencia por cualquier medio, aunque implique vuestra completa extinción. Pero en ningún caso deberéis permitir que rapiñen y quemen vuestros hogares»[31]. ¿No es eso lo que hacía Hamás cuando decidía «combatir la violencia por cualquier medio», incluso

si suponía la «total extinción», después de que Israel rompiera el alto el fuego y se negara a levantar el bloqueo ilegal que está destruyendo «toda la civilización de Gaza» (Mary Robinson) y causando «el colapso de una sociedad entera» (Sara Roy)?[32].

La coartada de los «escudos humanos» de Israel era sintómatica de sus esfuerzos por ofuscar lo que había ocurrido realmente durante la invasión. De hecho, Israel comenzó a preparar su hasbara (propaganda) seis meses antes de que se lanzara la Operación Plomo Fundido. Un organismo centralizado en la oficina del primer ministro, el National Information Directorate, se encargó específicamente de coordinar la campaña de relaciones públicas[33]. Aun así, después de que la opinión pública mundial se volviera en contra de Israel, Anthony Cordesman achacaba su aislamiento a no haber invertido en la «guerra de las percepciones». Israel «hizo poco para explicar los pasos que estaba dando para minimizar las bajas civiles y el daño colateral ante el mundo»; «sin duda podría y debería haber hecho mucho más para mostrar su nivel de contención militar y hacerlo creíble»[34]. En opinión del editor jefe de Haaretz.com, Bradley Burston, el problema era que los israelíes «eran pésimos relaciones públicas»; mientras que, según el politólogo Shlomo Avineri, si el mundo se llevó una pésima impresión de la Operación Plomo Fundido fue por «el nombre que se le dio a la operación, que afectaba enormemente a la forma en la que se percibía»[35]. Pero si la fulminante hasbara microgestionada finalmente no convenció, la explicación no radica ni en la incapacidad de Israel para transmitir su moral humanitaria ni en que el mundo no entendiera bien lo que ocurría. Más bien es que la dimensión de la masacre fue tan abrumadora que no había propaganda capaz de disfrazarla. Hizo falta tiempo, no obstante, para que saliera a la luz la auténtica imagen. Israel había impuesto «los controles de prensa más draconianos de la historia de las guerras contemporáneas»[36]. La Foreign Press Association denunciaba las trabas a los medios de comunicación diciendo que «colocaba al Estado de Israel en la compañía de ese puñado de regímenes de todo el mundo que habitualmente impedía a la prensa hacer su trabajo»; mientras que Reporteros sin Fronteras protestaba de que era «un escándalo y debería ser condenado por la comunidad

internacional»[37]. Pero el desafío de las imágenes filtradas que procedían de Gaza se complicó más después de que se hiciera efectivo el alto el fuego. Israel ya no podía prohibir a la prensa extranjera con las excusas falsas que había tramado durante el asalto. Aun así, más de medio año después de que terminara la Operación Plomo Fundido, Israel obstruía el paso a Gaza de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, como Amnistía, HRW y B'Tselem. «Si Israel no tiene nada que ocultar», preguntaba retóricamente HRW, «¿por qué se niega a dejarnos pasar?»[38].

La campaña de hasbara israelí sufrió un revés importante cuando varios medios de comunicación difundieron los testimonios posteriores a la invasión de los pilotos de combate y los soldados de infantería que o bien habían cometido crímenes de guerra en Gaza, o los habían presenciado. La organización israelí Breaking the Silence publicó entonces una amplia recopilación de testimonios condenatorios de las IDF. El informe israelí había asegurado a los lectores que «Israel es una sociedad abierta y democrática que respeta por completo la libertad de expresión […]. Las informaciones sobre posibles comportamientos erróneos de los soldados llegan a las IDF por varias vías»[39]. Pero después de la publicación de los testimonios condenatorios de las IDF, el ministro de Exteriores israelí presionó a los gobiernos europeos que financiaban Breaking the Silence para que interrumpieran las subvenciones[40]. La negación oficial de estos testimonios que acusaban a las IDF no tenía mucha credibilidad. Después de todo, ¿por qué razón iban a mentir estos combatientes?[41]. El resto de respuestas oscilaron entre una incredulidad fingida y la minimización tipo «manzana podrida»[42]. Como el personaje de Casablanca, el capitán Louis Renault, que estaba «¡escandalizado!» al descubrir que la gente jugaba en Casablanca, algunos oficiales expresaron una incredulidad llorosa ante la idea de que los soldados israelíes pudieran haber tenido conductas criminales. Pero dichas conductas eran la «continuación natural de los últimos nueve años, cuando los soldados mataron a casi 5.000 palestinos, al menos la mitad de ellos civiles inocentes, casi 1.000 de ellos niños, niñas y adolescentes», respondía Gideon Levy, burlándose de la consternación fingida. «Todo lo que los soldados describían en Gaza, todo ocurrió durante esos años bañados en sangre como si

fueran acontecimientos cotidianos»[43]. Los oficiales israelíes buscaron también minimizar esas confesiones argumentando que se estaba montando mucho jaleo por unas pocas manzanas podridas. O, como dijo Alan Dershowitz, «los soldados incontrolables son parte de la guerra»[44]. Pero el comportamiento delictivo de los soldados individuales era una consecuencia ineluctable del objetivo criminal general de la Operación Plomo Fundido: restaurar la capacidad de disuasión de Israel infligiendo una violencia letal masiva sobre la población civil. «No son ejemplos de "disparos aislados"», continuaba Levy, «sino de disparos deliberados originados en una orden»[45]. Los relatos de esta publicación prueban que «no estamos ante errores de los soldados individuales y, en cambio, testifican los errores […] principalmente en un nivel sistémico», decía Breaking the Silence en su editorial[46]. «Cientos de civiles no fueron asesinados "por error" o por un puñado de "manzanas podridas"», afirmaba el Public Committee against Torture in Israel después de una extensa investigación[47]. «Las declaraciones que han hecho los oficiales, junto con los datos acumulativos», señalaba la Association for Civil Rights en Israel en su informe anual, «revelan que los ataques sobre civiles y sobre las estructuras civiles no fueron generalmente el resultado de una decisión espontánea, en los niveles inferiores, sino más bien de decisiones y directrices producidas por los eslabones superiores del gobierno y de las IDF»[48]. Basándose en parte en los testimonios de las IDF, el Informe Goldstone concluía que «el reiterado fracaso a la hora de distinguir entre combatientes y civiles parece […] haber sido el resultado de unas instrucciones deliberadas a los soldados […] y no el resultado de lapsus ocasionales»[49].

Sin duda, algunos soldados de las IDF aprovecharon la oportunidad de la masacre en curso para dar rienda suelta a sus impulsos sádicos, mientras que otros se embrutecieron por el caos que se había desatado. Los testimonios de las IDF recuerdan «el odio y la alegría», la «diversión» y «el gozo» de asesinar a gazatíes, la destrucción «para pasarlo bien» y para «divertirse». Otros testimonios captan la jerga del soldado degenerado, como: «Maté a un terrorista, ¡guau! […] Le reventamos la cabeza»; «Afortunadamente, los hospitales están llenos, así que la gente muere más rápido»; «No podía dar por terminada la operación sin matar a alguien»[50]. Aun así, fue la esencia bárbara de la

Operación Plomo Fundido lo que permitía estos «excesos». Centrarse en el sadismo de las IDF o, para el caso, en su comportamiento belicoso y zafio eclipsaba la verdad fundamental de que los crímenes más importantes durante la Operación Plomo Fundido fueron ejecutados de forma rutinaria y disciplinada. Uno de los interlocutores de los soldados israelíes que confesaban expresaba su disgusto por que no hubieran dejado limpias y ordenadas las casas gazatíes que habían ocupado: «Es comportarse simplemente como animales […]. Estás describiendo un ejército con unas normas de conducta muy rastreras, esa es la verdad»[51]. Pero demostró mucha menos incomodidad ante los 6.300 hogares que las IDF arrasaron de manera sistemática. En un intento de desviar la culpabilidad de la Operación Plomo Fundido del corazón de la sociedad israelí y volcarla en su excrecencia fundamentalista judía, la campaña de hasbara se cebó en las expresiones fanáticas y en las exhortaciones incendiarias de los rabbis de las IDF y de los reclutas procedentes de las escuelas religiosas. La criminalidad era obra de «nacionalistas religiosos», sugería Ethan Bronner en The New York Times. «Han ocupado cada vez más puestos de mayor responsabilidad militar» y han desplazado a los kibbuzniks «laicos, occidentales y cultos» que, en los días de gloria de Israel, componían los mandos de las IDF[52]. Pero una explicación así olvidaba convenientemente, por un lado, que la Operación Plomo Fundido era la niña bonita de un triunvirato principalmente secular: el primer ministro Ehud Olmert, el ministro de Defensa Ehub Barak y la ministra de Exteriores Tzipi Livni; y, por otro lado, que las IDF habían cometido muchos excesos brutales mucho antes de que los zelotes religiosos se infiltraran en sus filas[53].

Después de la primera ronda de los testimonios de los soldados, las IDF prometieron abrir una investigación, pero la cerraron abruptamente diez días más tarde, concluyendo que estos relatos de asesinatos gratuitos y destrucción eran simplemente «rumores»[54]. Una «investigación interna» posterior de las IDF halló que «las tropas de las IDF no habían herido a propósito a civiles durante la Operación Plomo Fundido». Barak elogió la investigación, pues «una vez más, demuestra que las IDF son uno de los ejércitos más morales del mundo». El informe israelí afirmaba que «el aparato legal y judicial de Israel está completamente equipado y motivado para abordar las supuestas violaciones del derecho nacional o

internacional por parte de sus oficiales y soldados». Pero los resultados de la investigación interna de las IDF provocaron que los grupos de defensa de los derechos humanos llegaran a conclusiones diferentes: «El ejército israelí no se monitoriza objetivamente» (HRW); «Las afirmaciones del ejército parecen ser más bien un intento de eludir sus responsabilidades que un auténtico proceso para establecer la verdad» (Amnistía); «Hay serias dudas acerca de la voluntad de Israel de llevar a cabo una auténtica investigación de una forma imparcial, independiente, rápida y eficaz» (Informe Goldstone)[55]. El balance de la Operación Plomo Fundido parecía respaldar este escepticismo. Solamente cuatro israelíes fueron condenados por conducta incorrecta; solo tres de ellos recibieron penas de cárcel. La sentencia más dura fue de siete meses y medio, por el robo de una tarjeta de crédito. Dos soldados condenados por usar a un niño de nueve años como escudo humano recibieron una suspensión de tres meses como condena[56]. En un conmovedor gesto de expiación, el ministro de Información israelí, Yuli Edelstein, declaró: «Me avergüenzo del soldado que robó unas tarjetas de crédito»[57].

La proliferación de informes sobre derechos humanos que condenaban la Operación Plomo Fundido apuntaba a que Israel no había conseguido controlar la percepción pública; de hecho, la campaña hasbara le había salido por la culata. La brutalidad del ataque israelí, por un lado, y la desvergüenza de sus negaciones, por otra, impulsó la acción de la comunidad de defensa de los derechos humanos. Veamos el informe de Amnistía, Fueling Conflict: Foreign Arms Supplies to Israel / Gaza[58], que recomendaba un embargo de armas completo: «Amnistía Internacional pide a la ONU, especialmente al Consejo de Seguridad, que imponga un embargo inmediato y completo a todas las partes del conflicto, y a todos los Estados que actúen de manera individual para imponer embargos nacionales sobre cualquier transferencia de armas a las partes del conflicto hasta que cese el riesgo sustancial de que dichas armas puedan usarse para cometer graves violaciones del derecho internacional». Seguía haciendo un inventario de las armas de fabricación extranjera desplegadas por Israel durante la Operación Plomo Fundido, como los proyectiles de fósforo blanco, la munición de tanques y los misiles guiados de fabricación estadounidense. Colocando bajo los focos al mayor valedor de Israel, Amnistía

informaba de que «Estados Unidos ha sido con enorme diferencia el mayor proveedor de armas convencionales a Israel»; de que «Estados Unidos ha proporcionado amplia financiación anualmente a Israel para conseguir armas, a pesar de la legislación estadounidense que restringe dicha ayuda ante violaciones coherentemente graves de los derechos humanos»; y de que «la intervención militar de Israel en la Franja de Gaza ha sido llevada a cabo en gran medida con armamento, municiones y pertrechos proporcionados por Estados Unidos y pagados con el dinero de los contribuyentes estadounidenses». El informe también hacía un rápido inventario de las armas de fabricación extranjera que poseían los grupos armados palestinos, «en muy pequeña escala comparadas con […] Israel».

La petición de Amnistía de un embargo de armas completo sobre Israel y los grupos armados palestinos fue un punto de inflexión en el conflicto. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos en el pasado habían presionado a Washington para que restringiera tanto la ayuda militar a Israel como el uso por parte de Israel de armas específicas mientras que sistemáticamente violara las leyes[59]. Pero ningún grupo prominente de defensa de los derechos humanos había publicado nunca un cuadro tan preciso de los proveedores extranjeros de armas a Israel o había pedido con tanta vehemencia un embargo de armas completo por parte de estos proveedores. Como era de esperar, el gobierno estadounidense rechazó la petición de Amnistía[60] y la propia Amnistía sufrió un fulminante ataque por parte de grupos como la Anti Defamation League por su «informe pernicioso y sesgado», que «nada menos que niega a Israel el derecho a la defensa propia»[61]. El golpe más fuerte a la hasbara israelí no lo asestó, no obstante, una respetada organización de defensa de los derechos humanos. Vino desde una dirección que pilló a Israel con la guardia baja y falto de preparación. El Consejo de los Derechos Humanos de la ONU había encargado una investigación sobre las violaciones de los derechos humanos durante la Operación Plomo Fundido, que sería dirigida por Richard Goldstone. Cuando la Misión Goldstone publicó sus devastadoras conclusiones, Israel explotó de ira y sorpresa, porque, además de ser un distinguido jurista, Goldstone era también un devoto sionista.

[1] Palestinian Center for Human Rights, «Confirmed figures reveal the true extent of the destruction inflicted upon the Gaza Strip», 12 de marzo de 2009; Al Mezan Center for Human Rights, «Cast Lead offensive in numbers», 2 de agosto de 2009; «B'Tselem's investigation of fatalities in Operation Cast Lead», 9 de septiembre de 2009; B'Tselem (Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories), Human Rights Review, 1 January 2009-30 April 2010, Jerusalén, 2010, p. 5; Al Mezan Center for Human Rights, Bearing the Brunt Again: Child Rights Violations During Operation Cast Lead, 2009, p. 16; Amnesty International et al., Failing Gaza: No Rebuilding, No Recovery, No More Excuses, 2009, p. 7; United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA, «Field update on Gaza from the Humanitarian Coordinator», 3-5 de febrero de 2009. Los funcionarios israelíes alegaban que el total de las muertes palestinas era de 1.166, de las cuales al menos un 60 por 100 eran «terroristas». La discrepancia en la proporción de civiles y combatientes palestinos se derivaba en parte de un desacuerdo sobre la clasificación adecuada de la policía de Gaza. Véase S. Fogelman, «Shock and Awe», Haaretz, 31 de diciembre de 2010. El amplio consenso entre las organizaciones de defensa de los derechos humanos consideraba que la policía debería ser considerada mayoritariamente como civiles, puesto que no tomaban parte directa en las hostilidades y no formaban parte de los grupos armados palestinos. La veracidad de las cifras israelíes puede comprobarse examinando la subclasificación «menores de 16». Mientras que Israel alegaba que había matado a 89 palestinos menores de 16 años, B'Tselem informaba de que 252 palestinos menores de 16 habían sido asesinados y de que tenía «copias de los certificados de nacimiento y de defunción, junto con otros documentos relacionados con la amplia mayoría de los menores que habían sido asesinados». Para un análisis crítico de las cifras de bajas de Israel véase Public Committee against Torture in Israel, PCATI, No Second Thoughts: The Changes in the Israeli Defense Forces' Combat Doctrine in Light of «Operation Cast Lead», 2009, pp. 9-11. Este estudio muestra que Israel alteró repentinamente las cifras que manejaba de muertes palestinas y concluye que «el cálculo de las bajas proporcionado por otras fuentes (unos 1.400

muertos) es más creíble que el que proporciona el portavoz de las IDF». Incluso el informe en gran medida exculpatorio del Departamento de Estado americano, 2009 Human Rights Report cifra el número de muertos en «cerca de 1.400 palestinos, incluyendo más de 1.000 civiles». Hamás en un principio afirmó que solamente 48 de sus guerrilleros habían sido abatidos durante la Operación Plomo Fundido, pero después subió la cifra a varios cientos, ante la acusación de que la población de Gaza «había pagado el precio» de sus decisiones irresponsables. El primer ministro Benjamin Netanyahu se aferró a la cifra de muertes políticamente hinchada de Hamás como argumento que sustentaba la afirmación israelí de que un alto porcentaje de las bajas gazatíes eran «terroristas de Hamás». «Hamas confirms losses in Cast Lead for first time», The Jerusalem Post, 1 de noviembre de 2010; Ministerio de Exteriores israelí, «PM Netanyahu Addresses the General Assembly of the Jewish Federation of North America», 8 de noviembre de 2010.

[2] Human Rights Watch, Rockets from Gaza: Harm to Civilians from Palestinian Armed Groups' Rocket Attacks, 2009.

[3] Israel afirmaba que, si no fuera por sus sofisticados sistemas de alerta y refugio, «las bajas humanas causadas por los bombardeos de Hamás sin duda habrían sido mucho mayores». State of Israel, The Operation in Gaza: 27 December de 2008-18 January 2009: Factual and Legal Aspects, 2009, §§ 42-46. Pero si no fuera por el heroísmo de los empleados de la UNRWA, las bajas palestinas también habrían sido mucho más numerosas. Cientos de palestinos que se refugiaron en el Complejo de los Cuarteles generales de la UNRWA sin duda habrían muerto si los empleados no hubieran impedido que el fósforo blanco que Israel soltó sobre ellos alcanzara los depósitos de combustible. Report of the United Nations Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict, 25 de septiembre de 2009, § 545; a partir de ahora, Informe Goldstone. Para la reconstrucción de ese incidente por parte del portavoz de la UNRWA, Chris Gunness, véase «Building Understanding: Epitaph for a warehouse», 28 de octubre de 2014, disponible en [unrwa.org/newsroom/videos/building-understanding-epitaph-warehouse]; para el contexto y datación de esta producción, véase «UN makes a drama out of Gaza crisis», Independent, 25 de octubre de 2009.

[4] J. Bowen, «Gaza Stories: Israeli minister», entrevista con Meir Sheetrit, BBC News, 9 de febrero de 2009.

[5] Thomas Steinmetz Center for Peace Research, «War and Peace Index-February 2009».

[6] G. Levy, «Everyone Agrees: War in Gaza was a failure», Haaretz, 12 de marzo de 2009.

[7] State of Israel, Operation in Gaza, cit., §§ 23, 119, 154, cursivas en el original, 170, 186-89, 223-228; Anthony H. Cordesman, The «Gaza War»: A Strategic Analysis, Washington, DC, 2009, pp. 10, 18-23 passim, 36, 42, 44, 63-66 passim; Intelligence and Terrorism Information Center, Hamas and the Terrorist Threat, pp. 110-142, 195-261; Amnesty International, Operation «Cast Lead»: 22 Days of Death and Destruction, Londres, 2009, pp. 3-4, 47-50, 64, 74-77. Para las investigaciones sobre derechos humanos que coinciden con el hallazgo de Amnistía de que algunos militantes de Hamás lucharon en áreas residenciales, pero no usaron a civiles palestinos como escudos humanos, véase Human Rights Watch, «Letter to EU Foreign Ministers to address violations between Israel and Hamas», 16 de marzo de 2009; Human Rights Watch, Rockets from Gaza, cit., pp. 22, 24; Informe Goldstone, cit., §§ 35, 452, 475, 482-488, 494, 1953. Para las organizaciones de defensa de los derechos humanos y los testimonios de las IDF que corroboraban el uso por parte de Israel de escudos humanos, véase National Lawyers Guild, Onslaught: Israel's Attack on Gaza & the Rule of Law, 2009, pp. 14-15; Human Rights Watch, White Flag Deaths: Killings of Palestinian Civilians during Operation Cast Lead, 2009, pp. 11-12; Breaking the Silence, Soldiers' Testimonies from Operation Cast Lead, Gaza 2009, 2009, pp. 7-8 (Testimonio 1), 107 (Testimonio 51); Informe Goldstone, cit., §§ 55, 1032-1106; Al Mezan, Bearing the Brunt, cit., pp. 52-59. En un par de artículos de prensa, la directora ejecutiva de B'Tselem, Jessica Montell, defendía que Hamás sí usó escudos humanos, pero no fue capaz de proporcionar ninguna prueba de ello a pesar de mis repetidas peticiones. J. Montell, «A Time for Soul-Searching», The Jerusalem Post, 30 de septiembre de 2009; J. Montell, «The Goldstone Report on Gaza», The Huffington Post, 1 de octubre de 2009.

[8] A. Margalit y M. Walzer, «Israel: Civilians & combatants», The

New York Review of Books, 14 de mayo de 2009.

[9] Ross también informaba, en su «valoración basada en la realidad», de que Hamás «rechaza la idea misma de una solución de dos Estados», prescindiendo de las iniciativas diplomáticas de Hamás de los últimos años; de que Hamás «eligió romper» el alto el fuego de junio de 2008, prescindiendo del mortífero asalto en las fronteras de Israel del 4 de noviembre de 2008; y de que «se alcanzó una precaria tranquilidad únicamente después de que las IDF hubieran destruido casi todos los objetivos militares de Hamás», prescindiendo del completo asalto de Israel a la población civil de Gaza. D. Ross y D. Makovsky, Myths, Illusions and Peace: Finding a New Direction for America in the Middle East, Nueva York, 2009, pp. 7, 128, 137, 153-154, 244, 247, 252.

[10] Coronel R. Kemp CBE, «International Law and Military Operations in Practice», Jerusalem Center for Public Affairs, 18 de junio de 2009.

[11] Amnesty International, Operation «Cast Lead», cit., p. 7; para los detalles, véase ibid., pp. 11 y ss.; véase también Informe Goldstone, cit., §§ 459, 653-703.

[12] Amnesty International, Operation «Cast Lead», cit., pp. 1, 24; para los detalles, véase ibid., esp. pp. 24-27. Véase también Informe Goldstone, cit., §§ 704-885.

[13] Human Rights Watch, White Flag Deaths, cit., pp. 2, 4, 10-15.

[14] Informe Goldstone, cit., §§ 802, 810-811.

[15] A. Harel, «Shooting and Crying», Haaretz, 19 de marzo de 2009; A. Harel, «Testimonies on IDF misconduct in Gaza keep rolling in», Haaretz, 22 de marzo de 2009; Breaking the Silence, Soldiers' Testimonies, cit., pp. 21-23 (Testimonio 8), 75 (Testimonio 32), 88 (Testimonio 39), 89 (Testimonio 40).

[16] D. Kennedy, «A Context for Gaza», Harvard Crimson, 2 de febrero de 2009.

[17] A. Harel, «What did the IDF think»; Breaking the Silence,

Soldiers’ Testimonies, cit., p. 88 (Testimonio 40).

[18] A. Diamant y D. Zonsheine, «Talk to Hamas», The Guardian, 15 de febrero de 2010.

[19] L. Wieseltier, «Something Much Darker», The New Republic, 8 de febrero de 2010. La ofensiva frase «pulverización […]» procede del exeditor de The New Republic, Andrew Sullivan, en su denuncia de la Operación Plomo Fundido.

[20] A. Kasher, «Operation Cast Lead and Just War Theory», Azure, verano de 2009, p. 70.

[21] «8 Cast Lead IDF Heroes Get Decorated», The Jerusalem Post, 16 de diciembre de 2009.

[22] El fósforo blanco se inflama y se quema al contacto con el oxígeno, generando un denso humo blanco. Se usa mayoritariamente para camuflar operaciones militares sobre el terreno. En este caso, no obstante, HRW concluía que, si Israel hubiera querido una cortina para sus tropas hubiera podido usar proyectiles de humo, fabricados por una empresa israelí, y que los persistentes disparos de fósforo blanco, cuando no había tropas israelíes presentes sobre el terreno, indicaban que de hecho servía como un arma incendiaria.

[23] Human Rights Watch, Rain of Fire: Israel’s Unlawful Use of White Phosphorus in Gaza, 2009, pp. 1-6, 39, 60. Véase también Al Mezan, Bearing the Brunt, cit., pp. 42-45.

[24] Human Rights Watch, Precisely Wrong: Gaza Civilians Killed by Israeli Drone-launched Missiles, 2009, pp. 4, 6, 12. Los drones israelíes mataron al menos a 513 personas, incluyendo a 116 menores. Al Mezan, Bearing the Brunt, cit., pp. 37-42.

[25] State of Israel, Operation in Gaza, cit., § 213.

[26] A. Kasher, «A Moral Evaluation of the Gaza War», The Jerusalem Post, 7 de febrero de 2010.

[27] A. Dershowitz, The Case Against the Goldstone Report: A Study in Evidentiary Bias, disponible en [https://dash.harvard.edu/

bitstream/handle/1/3593975/DershowitzGoldstone.pdf?sequence=2&isAllowed=y], pp. 7, 11, 21, 22; Robert L. Bernstein, «Human Rights in the Middle East», UN Watch, 10 de noviembre de 2010.

[28] L. Wright, «Captives: A report on the Israeli attacks», The New Yorker, 9 de noviembre de 2009. Durante su estancia en Gaza, Wright adivinó que la población local sentía una afinidad especial con un soldado israelí capturado por Hamás: «Los pálidos rasgos y la expresión mansa de [Gilad] Shalit invaden la imaginación de los gazatíes. Aunque pueda parecer perverso, ha surgido una potente identificación entre el tímido soldado y la gente cuyo gobierno lo mantiene preso. Los gazatíes se ven como Shalit: encerrados, maltratados y desesperados». Esto resolvía el misterio de por qué familia tras familia en Gaza ponía a sus recién nacidos el nombre de Gilad […].

[29] «Hungry Like the Wolfowitz», Georgetown Voice, 6 de noviembre de 2003.

[30] «What Women Should Do in a Difficult Situation», 4 de septiembre de 1932, en The Collected Works of Mahatma Gandhi (Ahmedabad), vol. 51, pp. 18-19; «Discussion with Mahadev Desai», 4 de septiembre de 1932, en ibid., vol. 51, pp. 24-25; «Discussion with B. G. Kher and Others», 15 de agosto de 1940, en ibid., vol. 72, p. 388; «Discussion with Bharatanand», 2 de septiembre de 1940, en ibid., vol. 72, p. 434; «Message to States' People», 1 de octubre de 1941, en ibid., vol. 74, p. 368; «Speech at Prayer Meeting», 5 de noviembre de 1947, en ibid., vol. 89, p. 481.

[31] «Speech at Goalundo», 6 de noviembre de 1946, en ibid., vol. 86, p. 86.

[32] Véase cap. II.

[33] A. Pfeffer, «Israel claims success in the PR war», The Jewish Chronicle, 31 de diciembre de 2008; H. Goodman, «The effective public diplomacy ended with Operation Cast Lead», The Jerusalem Post, 5 de febrero de 2009.

[34] A. H. Cordesman, «Gaza War», cit., pp. 31-32, 68.

[35] B. Burston, «Why Does the World Media Love to Hate Israel?», Haaretz, 23 de marzo de 2009; S. Avineri, «What Was the Computer Thinking?», Haaretz, 18 de marzo de 2009. Siguiendo dicho consejo, Israel, en su resumen oficial, evitó mencionar Operación Plomo Fundido excepto en una referencia entre paréntesis a la «Operación Gaza», también conocida como «Operación Plomo Fundido». Operation in Gaza, cit., § 16.

[36] D. Waghorn, «They kept us out and Israeli officials spun the war», The Independent, 25 de enero de 2009; L. Goldman, «Eyeless in Gaza», Forward, 16 de enero de 2009.

[37] E. Bronner, «Israel puts media clamp on Gaza», The New York Times, 6 de enero de 2009; Reporters without Borders, Operation «Cast Lead»: News Control as Military Objective, 2009.

[38] Human Rights Watch, «Israel: End ban on human rights monitors», 22 de febrero de 2009; Human Rights Watch, White Flag Deaths, cit., p. 7.

[39] State of Israel, Operation in Gaza, cit., § 288.

[40] B. Ravid, «Group that exposed "IDF Crimes" in Gaza slams Israel bid to choke off its funds», Haaretz, 26 de julio de 2009; B. Ravid, «Israel targets UK funding of group that exposed "IDF Crimes" in Gaza», Haaretz, 29 de julio de 2009; B. Ravid, «Israel asks Spain to stop funding group that reported "IDF Crimes" in Gaza», Haaretz, 2 de agosto de 2009.

[41] A. Harel, «Can Israel dismiss its own troops' stories from Gaza?», Haaretz, 19 de marzo de 2009.

[42] A. Hass, «Time to believe Gaza War crimes allegations», Haaretz, 24 de marzo de 2009.

[43] G. Levy, «IDF Ceased Long Ago Being "Most Moral Army in the World"», Haaretz, 22 de marzo de 2009.

[44] A. Dershowitz, The Case, cit., p. 27.

[45] G. Levy, «IDF Ceased», cit.

[46] Breaking the Silence, Soldiers' Testimonies, cit., p. 5.

[47] PCATI, No Second Thoughts, cit., p. 29.

[48] Association for Civil Rights in Israel, The State of Human Rights in Israel and the Occupied Territories: 2009 report, Jerusalén, 2009, p. 52; véase también ibid., p. 50, «Israel intentionally and deliberately bombed government buildings and civilian institutions in Gaza».

[49] Informe Goldstone, cit., § 1889.

[50] Breaking the Silence, Soldiers' Testimonies, cit., pp. 16 (Testimonio 5), 55 (Testimonio 23), 56-57 (Testimonio 24), 73 (Testimonio 31), 86 (Testimonio 38), 92 (Testimonio 41), 93 (Testimonio 43).

[51] A. Harel, «Shooting and Crying», cit.

[52] E. Bronner, «A religious war in Israel's army», The New York Times, 22 de marzo de 2009.

[53] N. G. Finkelstein, Beyond Chutzpah: On the Misuse of Anti-Semitism and the Abuse of History, edición de bolsillo ampliada, Berkeley, 2008, pp. 316-319.

[54] A. Pfeffer y A. Harel, «IDF ends Gaza Probe, says misconduct claims are "rumors"» Haaretz, 30 de marzo de 2009.

[55] A. Pfeffer, «Barak: Gaza probe shows IDF among world's most moral armies», Haaretz, 23 de abril de 2009; State of Israel, Operation in Gaza, cit., § 284; Human Rights Watch, «Israeli military investigation not credible», 23 de abril de 2009; Amnesty International, «Israeli army probe lacks credibility and is no substitute for independent investigation», 23 de abril de 2009; Informe Goldstone, cit., §§ 1832, 1961.

[56] B'Tselem (Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories), «Israeli authorities have proven they cannot investigate suspected violations of international humanitarian law by Israel in the Gaza Strip», 5 de septiembre de 2014; Human Rights Watch, «Israel: Soldiers' punishment for using boy as "human

shield” inadequate», 26 de noviembre de 2010.

[57] «UK officer slams “pavlovian” criticism of IDF after Gaza War», Haaretz, 22 de febrero de 2010.

[58] Amnesty International, Fueling Conflict: Foreign Arms Supplies to Israel / Gaza, cit., 2009.

[59] Amnesty International, Broken Lives: A Year of Intifada, Londres, 2001; Human Rights Watch, Razing Rafah: Mass Home Demolitions in the Gaza Strip, 2004.

[60] S. Zunes, «Obama and Israel’s Military: Still arm-in-arm», Foreign Policy in Focus, 4 de marrzo de 2009. Cuando terminaba el mandato de Obama en 2016, Amnistía, señalando que la ayuda militar de Estados Unidos a Israel «se había utilizado para cometer violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario», renovó su petición para que «cancelara […] la ayuda militar que acababa de anunciar de 33.000 millones de dólares, vehiculada por la financiación militar extranjera de Israel que se había incluido en el nuevo tratado de 10 años con el gobierno de Israel». Amnesty International, Letter to President Barack Obama, 12 de octubre de 2016.

[61] Anti-Defamation League, «Amnesty International Report on Gaza Conflict “Pernicious and Biased”», 23 de febrero de 2009.



Richard Goldstone

SEGUNDA PARTE

EL INFORME GOLDSTONE

V. UN SIONISTA PRESTA TESTIMONIO

En abril de 2009, el presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU nombró una «misión de investigación» para «investigar todas las violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario» durante la Operación Plomo Fundido[1]. Richard Goldstone, exjuez del Tribunal Constitucional de Sudáfrica y exfiscal del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia y Ruanda, fue nombrado jefe de la Misión. Su encargo original era únicamente inspeccionar las violaciones israelíes de los derechos humanos durante la Operación Plomo Fundido, pero Goldstone condicionó su aceptación del trabajo a ampliar el encargo para incluir violaciones de ambos bandos. El presidente del consejo invitó a Goldstone a escribir él mismo el encargo, él se puso manos a la obra y el presidente aceptó el encargo. «Era muy difícil rechazar […] un encargo que yo mismo me había prescrito», observó. Aun así, Israel se negó a cooperar con la Misión, aduciendo que estaba sesgada[2]. En septiembre de 2009, el largamente esperado informe de la Misión Goldstone se publicó[3]. Resultó ser una acusación mordaz, no solamente de la Operación Plomo Fundido, sino también de la continua ocupación israelí.

El Informe Goldstone concluyó que una gran parte de la devastación que Israel había infligido durante la Operación Plomo Fundido había sido premeditada. También concluyó que la operación se anclaba en una doctrina militar que «contempla la destrucción desproporcionada y la creación de la máxima alteración en las vidas de mucha gente como un medio legítimo para alcanzar los fines militares y políticos», y que se había diseñado «para tener consecuencias desastrosas inevitables para los no combatientes en Gaza»[4]. La «destrucción y violencia desproporcionadas contra los civiles» procedían de una «política deliberada», como procedía de ahí también «la humillación y deshumanización de la población palestina»[5]. Aunque Israel justificaba el ataque por razones de defensa propia frente a los ataques con misiles de Hamás[6], el Informe apuntaba a un motivo diferente. El «objetivo principal» del bloqueo israelí era «propiciar una situación que a la sociedad civil

le pareciera tan intolerable que quisiera marcharse (si eso fuera posible) o echar del gobierno a Hamás, así como infligir un castigo colectivo a la población civil»; mientras que la propia Operación Plomo Fundido «buscaba castigar a la población de Gaza por su resiliencia y por su aparente apoyo a Hamás y, posiblemente, con la intención de forzar un cambio en dicho apoyo»[7]. El Informe concluía que el asalto de Israel constituía «un ataque deliberadamente desproporcionado, diseñado para castigar, humillar y aterrorizar a la población civil, para disminuir radicalmente la capacidad económica local, tanto de trabajar como de cubrir sus necesidades, e imponerles una sensación cada vez mayor de dependencia y vulnerabilidad»[8]. También rendía tributo a «la resiliencia y dignidad» del pueblo gazatí «ante las terribles circunstancias»[9].

En sus precisiones legales, el Informe Goldstone afirmaba que Israel había cometido numerosas violaciones del derecho internacional y del derecho consuetudinario. También relacionaba una serie considerable de crímenes de guerra cometidos por Israel, incluyendo «los asesinatos deliberados, la tortura o el trato inhumano», «causar a propósito un enorme sufrimiento o heridas graves para el cuerpo y la salud», «la destrucción extensa de la propiedad, no justificada por la necesidad militar y ejecutada de manera ilegal y gratuita», y el «uso de escudos humanos»[10]. Afirmaba, además, que las acciones israelíes que «privan a los palestinos de la Franja de Gaza de sus medios de subsistencia, empleo, vivienda y agua, que les niegan la libertad de movimiento y su derecho a entrar y salir de su propio país, que limitan su acceso a los tribunales de justicia a los remedios efectivos […] podrían justificar que un tribunal competente fallara que se han cometido crímenes contra la humanidad»[11]. El Informe adjudicaba la culpabilidad principal de estos actos criminales a las elites militares y políticas de Israel: «La naturaleza deliberada y sistemática de las actividades […] no deja dudas a la Misión de que la responsabilidad radica en primer lugar en quienes diseñaron, planificaron, ordenaron y supervisaron las operaciones»[12]. El Informe también decidía que las bajas mortales, el daño a la propiedad y el «trauma psicológico» resultado de los ataques con misiles «indiscriminados» y «deliberados» de Hamás contra la población civil israelí constituían «crímenes de guerra y podían llegar a ser crímenes

contra la humanidad[13]. Se acusó al Informe de sesgado porque solamente una pequeña parte de sus páginas se dedicaban a los ataques con misiles de Hamás. La acusación de sesgo era válida, pero el sesgo se inclinaba en la dirección opuesta. Si la proporción de muertes palestinas e israelíes se fijaba en más de 100:1, y la de las casas destruidas en más de 6.000:1, entonces la proporción que el Informe dedicaba a los crímenes de Hamás era mucho mayor de lo que se merecería por los datos objetivos[14]. Cuando posteriormente se le planteó a Goldstone que el Informe se centraba de manera desproporcionada en cómo Israel había quebrantado el derecho internacional, este contestaba: «Es difícil lidiar en igualdad con un partido estatal, con un ejército sofisticado […] con una fuerza aérea y una armada, y con las armas más sofisticadas, que Israel no solamente posee en su arsenal, sino que fabrica y exporta, por una parte, y con Hamás usando un armamento realmente improvisado, impreciso, por otra»[15].

El Informe Goldstone no se limitaba estrictamente a la Operación Plomo Fundido. Se amplió, para constituir una acusación completa y detallada del trato de Israel a los palestinos durante los largos años de ocupación. El Informe condenaba la fragmentación de la población palestina por parte de Israel[16] y sus restricciones a la capacidad de movimiento palestina[17]; la «discriminación institucionalizada» contra la población palestina, tanto en los territorios palestinos ocupados como en Israel[18]; la represión violenta de los manifestantes palestinos (así como de los israelíes) que se oponen a la ocupación y los ataques violentos sobre los civiles palestinos en Cisjordania por parte de los soldados israelíes y los colonos judíos que disfrutaban de impunidad legal[19]; la detención, tortura y maltrato de palestinos (incluyendo cientos de menores) y la ausencia de un juicio adecuado[20]; la «transferencia silenciosa» de palestinos en Jerusalén Este con el fin de hacer una limpieza étnica[21]; el «anexar de facto» el 10 por 100 de Cisjordania en el «lado israelí» del muro, algo que «equivale a la anexión del territorio por la fuerza, contrario a la Carta de las Naciones Unidas»[22]; y su expansión mediante asentamientos, expropiaciones de tierras y demoliciones de las casas y aldeas palestinas[23]. El Informe afirmaba que algunas de estas políticas constituían crímenes de guerra[24] y también que violaban el derecho fundamental (ius cogens) palestino a la

autodeterminación[25]. Aunque no trazaba una distinción clara entre los infractores y las víctimas de una ocupación brutal, el Informe sí reprochaba «igualar la posición de Israel en tanto Potencia Ocupante con la de la población palestina ocupada o las entidades que la representan. Las diferencias en lo que respecta al poder y la capacidad de infligir daño o de protegerse, incluyendo garantizar los procesos de justicia cuando suceden las violaciones, son obvias»[26].

El Informe Goldstone proponía varios remedios para que tanto Israel como Hamás fueran responsabilizados de sus respectivos delitos contra el derecho internacional. Se exhortaba a los Estados individuales dentro de la comunidad internacional a «iniciar investigaciones penales en los tribunales nacionales, usando la jurisdicción universal, allí donde hubiera evidencias suficientes de la comisión de graves infracciones de las Convenciones de Ginebra de 1949. Allí donde, tras la investigación, estuviera justificado, los supuestos infractores deberían ser detenidos y juzgados según los criterios de justicia internacionalmente reconocidos»[27]. También pedía al Consejo de Seguridad de la ONU que monitorizara la disposición de Israel y Hamás a «impulsar investigaciones adecuadas que sean independientes y en conformidad con los criterios internacionales sobre las graves violaciones del derecho internacional humanitario y el derecho internacional sobre derechos humanos». Si cualquiera de las partes no emprendía «investigaciones de buena fe», el Informe solicitaba al Consejo de Seguridad que «refiriera la situación en Gaza a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional»[28]. También recomendaba que Israel abonara una compensación por daños a través de un depósito custodiado por la Asamblea General de la ONU[29]. En un plano más general, el Informe recomendaba que las Partes Contratantes de la Cuarta Convención de Ginebra «respaldaran la Convención» y «garantizaran su observancia» en los territorios ocupados palestinos. También pedía que Israel finalizara «inmediatamente» su bloqueo de Gaza y la estrangulación de la economía de Gaza, su violencia contra la población civil palestina, su «destrucción y afrentas a la dignidad humana», su intromisión en la vida política palestina, la represión de la discrepancia política y sus restricciones sobre la libertad de movimiento. El Informe, recíprocamente, pedía a Hamás que «renunciara a los ataques sobre la población civil y la

propiedad civil israelí», que liberara al soldado israelí (Gilad Shalit) que habían capturado, que liberara a los presos políticos y respetara los derechos humanos[30].

La reacción israelí al Informe Goldstone fue fulminante y airada. Aparte de unas pocas honrosas (si bien predecibles) excepciones, fue sometido durante meses a una catarata de insultos a lo largo y ancho del espectro político israelí y en todos los niveles de la sociedad[31]. De hecho, era casi imposible localizar el Informe real en internet en medio de la avalancha de ataques despiadados. Después de despreciar el Informe como una «broma de la historia» y al propio Goldstone como a un «hombrecillo sin ningún sentido de la justicia, un tecnócrata sin una verdadera comprensión de la jurisprudencia», el presidente israelí Shimon Peres pasó a aclarar las cosas: «Las operaciones de las IDF habían posibilitado la prosperidad económica de Cisjordania, habían liberado a los ciudadanos libaneses del terror de Hezbolá y habían permitido que los gazatíes volvieran a vivir vidas normales»[32] El primer ministro, Benjamin Netanyahu, afirmó que el Informe era «una farsa de juicio contra Israel»[33], mientras que el ministro de Defensa, Ehud Barak, sostenía que era «una mentira, distorsionada y sesgada en apoyo del terror»[34]. Posteriormente Netanyahu propuso una iniciativa para «enmendar las normas de la guerra» con el fin de facilitar «la batalla contra el terrorismo» en el futuro. «¿Qué es lo que quiere Israel?», contraatacaba el historiador israelí Zeev Sternhell. «¿Permiso para atacar ferozmente núcleos de población indefensos con aviones, tanques y artillería?»[35]. El portavoz de la Knesset, Reuven Rivlin, advertía que la «nueva y taimada moralidad» del Informe «impulsaría una nueva era de la civilización occidental, parecida a la que recordamos a partir del Pacto de Múnich [1938]»[36]. Antes de que acabara el festín del odio, casi todas las figuras políticas destacadas se habían apuntado. La exministra de Exteriores, Tzipi Livni, declaraba que el Informe Goldstone había «nacido en pecado»[37]. El ministro de Exteriores, Avigdor Lieberman, declaraba que «no tenía valor legal, fáctico o moral»; y el viceministro de Exteriores, Danny Ayalon, advertía de que «proporcionaba legitimidad al terrorismo» y se arriesgaba a «convertir el derecho internacional en un circo»[38]. Dan Gillerman, exembajador israelí en las Naciones Unidas, descartaba el Informe por sus «descaradas y sesgadas mentiras anti Israel», y

Dore Gold, exembajador israelí en las Naciones Unidas, lo ridiculizaba como «una de las armas más potentes en el arsenal de las organizaciones terroristas internacionales»; mientras que Gabriela Shalev, embajadora israelí ante las Naciones Unidas, lo fustigaba como «sesgado, unilateral y político»[39]. Michel Oren, embajador israelí en Estados Unidos, se ganaba la Triple Corona por sus venenosas pullas. En una presentación ante el American Jewish Committee afirmaba que Hezbolá era uno de los principales beneficiarios del Informe; en The Boston Globe recitaba que el Informe «debería ser rechazado por quienes se preocupen por la paz»; y en The New Republic decía que el Informe era incluso peor que «[el presidente iraní Mahmud] Ahmadinejad y quienes negaban el Holocausto»[40]. El jefe del Estado Mayor de las IDF, Gabi Ashkenazi, ridiculizaba el Informe como «sesgado y desequilibrado», mientras que el asesor legal senior de las IDF, Avichai Mendelblit, se burlaba de él como «sesgado, sorprendentemente extremista, sin ninguna relación con la realidad»[41].

Las instituciones no gubernamentales y las figuras públicas también se implicaron. Un editorial de The Jerusalem Post decía que el Informe «era una proeza de superficialidad cínica» y que «había nacido sesgado y se había convertido en un completo aborto de justicia». El exeditor jefe de Haaretz, David Landau, lamentaba que «la premisa fundamental» del Informe, «que los israelíes perseguían a la población civil», eliminaba toda posibilidad de una «discusión honesta»[42]. (Lejos de esta suposición, esa era justamente la conclusión del Informe después de examinar montones de pruebas.) Israel Harel, líder del movimiento colono, se burlaba del Informe como «destructivo, tóxico», incluso peor que Los protocolos de los Sabios de Sión, y mal dirigido, «contra precisamente el país que protege la ética humana y militar más de lo que el mundo ha visto nunca». Los residentes de una ciudad fronteriza con Gaza se manifestaron ante las oficinas de la ONU en Jerusalén con carteles que decían: «Goldstone, discúlpate» y «Estamos hartos de antisemitas»[43]. Un centro de la Universidad de Tel Aviv para el estudio del «antisemitismo y el racismo» afirmaba que el Informe era responsable de la nueva ola global de «delitos de odio contra los judíos» y de la «equiparación de la guerra en Gaza con el Holocausto»[44]. Alegando que las acusaciones de Goldstone contra

Israel se remitían a las que se le hicieron a Alfred Dreyfus, el profesor Gerald Steinberg, de la Universidad Bar Ilan, declaraba que «Israel tiene todo el derecho moral de arrasar Gaza»[45]. (Steinberg había fundado el programa de la universidad sobre resolución y gestión de conflictos.) El 94 por 100 de los judíos israelíes que estaban familiarizados con el Informe pensaban que estaba sesgado en contra de Israel, y un 79 por 100 rechazaba la acusación de que las IDF cometieran crímenes de guerra[46]. Incluso después de la Operación Plomo Fundido y de las mentiras subsiguientes y tapaderas por parte del ejército, un 90 por 100 de los judíos israelíes decían que las IDF eran la institución en la que más confiaban[47]. A pesar de que los hallazgos del Informe eran totalmente inaceptables, el único tema que se consideró digno de debatirse en Israel fue si Israel debería o no haber cooperado con la Misión Goldstone[48]. Pero, como el veterano activista por la paz Uri Avnery señalaba, la «verdadera respuesta» a por qué Israel había decidido no cooperar «era muy sencilla: sabían perfectamente que la Misión, que cualquier misión, acabaría por llegar a las conclusiones a las que ha llegado»[49]. En una elocuente diferenciación de los histrionismos anteriores, los israelíes prescindieron después de la Operación Plomo Fundido de esos emotivos ataques de angustia –«disparos y gritos»– que los palmeros extranjeros acostumbran a poner como prueba de la exquisita y única sensibilidad del alma judía. Brutalizados y encallecidos, los israelíes ya ni siquiera se molestaban en fingir remordimientos. Aunque pedían un alto el fuego después del ataque aéreo inicial, los iconos del «campo pacifista» israelí –Amos Oz, A. B. Yehoshua y David Grossman– aún afirmaban que Hamás era «responsable» del horror que se desplegaba y que el ataque por aire y tierra israelí era «necesario», porque los líderes de Hamás «se negaban a cualquier intento israelí y egipcio de alcanzar un compromiso que evitara esta última conflagración»[50].

En una segunda bocanada de aire caliente, los sospechosos habituales de Estados Unidos estuvieron a la altura (o a la bajeza) de las circunstancias, denigrando el mensaje y degollando al mensajero. Max Boot despreció el Informe Goldstone en la página web de Commentary como «una serie de hallazgos risibles», mientras que John Bolton, exembajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, opinaba en The Wall Street Journal que «la

respuesta lógica a esta debacle es retirarse y dejar sin financiación» al Consejo de los Derechos Humanos[51]. Elie Wiesel condenaba el Informe no solamente como «un crimen contra el pueblo judío», sino también por «innecesario»: «No puedo creer que los soldados israelíes asesinaran a la gente o dispararan contra niños y niñas. Simplemente no puede ser»[52]. Liderando la caza de brujas interna, Alan Dershowitz, de la Harvard Law School, afirmaba que el Informe «está tan repleto de mentiras, distorsiones y malditos libelos que podría haber sido redactado por extremistas de Hamás»; que recordaba a Los protocolos de los Sabios de Sión y que era «sesgado y fanático»; que «cualquier estudiante serio de los derechos humanos debería horrorizarse ante este informe contrario a los derechos humanos y altamente politizado»; que «descubría hechos (casi todos erróneos)», afirmaba «conclusiones legales (casi todas cuestionables)» y que hacía «recomendaciones específicas (casi todas unilaterales)»; que el mismo Goldstone era «un traidor al pueblo judío», un «hombre malvado, malvado» y –proclamó en la televisión israelí– semejante al «Ángel de la Muerte» de Auschwitz, Josef Mengele[53]. La «esencia» y la «conclusión central» del Informe, según Dershowitz, era que Israel tenía «una política minuciosamente planificada y ejecutada de atacar deliberadamente a civiles inocentes con el fin de ejecutar una masacre»; que el «auténtico fin» de Israel era «atacar a civiles palestinos inocentes –niños, niñas, mujeres y ancianos– para matarlos». Repetía esta caracterización del Informe en casi todas las páginas –a menudo varias veces en una sola página– de su extenso «estudio sobre el sesgo evidenciario» y después procedía directamente a refutar la acusación[54]. Pero Dershowitz convocaba a un hombre de paja: el Informe nunca afirmó ni apuntó a que el objetivo principal de la Operación Plomo Fundido fuera asesinar a palestinos. Si así fuera, habría acusado a Israel de genocidio. Es un tópico decir que cuantas más veces se repite una mentira, más creíble se vuelve. La novedad del «estudio» de Dershowitz era que repetía una falsedad para desacreditar con mayor facilidad a su supuesto proveedor. Los mamporreros de Goldstone en Estados Unidos también afirmaban que Hamás había preparado e intimidado a los testigos palestinos, disfrazado a sus militantes de testigos y proporcionado a Goldstone información no contrastada[55]. Sin embargo, ninguno de estos detractores aportaba un gramo de evidencia, mientras que el propio Goldstone ofrecía «todas las garantías de que aquello no había

ocurrido»[56]. Las organizaciones comunitarias judías previsiblemente se unieron al ataque colectivo. El American Israel Public Affairs Committe (AIPAC) calificó a la Misión Goldstone de «amañada» y al Informe de «muy defectuoso»[57]; el American Kewish Committe deploraba que fuera «un documento profundamente distorsionado»[58]; Abraham Foxman, de la Anti Defamation League, estaba «escandalizado y preocupado porque Estados Unidos no lo desechara unilateralmente»[59].

El gobierno de Obama rápidamente se acompasó con el lobby israelí. Probablemente no hubiera necesitado un empujón tan grande. Uno de los argumentos de Israel en Washington era que la recomendación del Informe Goldstone de que se juzgara a los soldados por los crímenes de guerra «debería preocupar a cualquier país que esté combatiendo el terror»[60]. El portavoz del Departamento de Estado, Ian Kelly, aducía que, mientras que el Informe «formula conclusiones de gran envergadura de hecho y derecho en lo que respecta a Israel, sus conclusiones sobre la deplorable conducta de Hamás […] son más generales»; el ayudante del secretario de Estado para la Democracia de Estados Unidos, Michael Posner, lo condenó como «gravemente defectuoso»; y el viceembajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Alejandro Wolff, le reprochó «el centrarse desequilibradamente en Israel»[61]. En la entrada de 47 páginas dedicada a «Israel y los territorios ocupados», el Informe sobre Derechos Humanos de 2009 del Departamento de Estado de Estados Unidos dedica tres frases a la Operación Plomo Fundido, después menciona los hallazgos del Informe y concluye despreciativamente: «El informe Goldstone ha sido ampliamente criticado por errores metodológicos, errores legales y fácticos, falsedades y por prestar una atención insuficiente a la naturaleza asimétrica del conflicto y al hecho de que Hamás y el resto de los militantes palestinos estaban operando deliberadamente en las áreas urbanas densamente pobladas de Gaza»[62]. El congresista Gary Ackerman, presidente del Subcomité del Congreso para Oriente Próximo y el Sur de Asia, se mofó de Goldstone, del que dijo que «habitaba una tierra de fantasía mojigata», y dijo del Informe que era «una diatriba política pomposa, tendenciosa y unilateral»[63]. Las probabilidades de que cualquier de estos críticos se hubiera leído realmente el Informe se aproximan a cero. Después de absorber en silencio esta incesante

ráfaga de ataques, Goldstone finalmente desafió al gobierno de Obama a que justificara sus críticas[64]. Mientras tanto, HRW se enfrentó al gobierno estadounidense por «decir que el informe era "desequilibrado" y "profundamente defectuoso", sin aportar hechos reales que apoyaran estas afirmaciones»[65]. El Congreso estadounidense aprobó por 344 votos contra 36 una resolución no vinculante que condenaba el Informe como «irremediablemente sesgado e indigno de más consideración o legitimidad»[66]. Antes de que se emitieran los votos, Goldstone procedió a una refutación punto por punto, demostrando que la resolución de la Cámara estaba viciada por «graves inexactitudes fácticas y ejemplos en los que las informaciones y las afirmaciones se han sacado groseramente de contexto»[67].

El gobierno de Obama trabajó a escondidas en conjunción con Israel para impedir que se debatiera el Informe en foros internacionales y en privado se jactó de los éxitos que había logrado[68]. Hilary Clinton presumiría después de que mientras era secretaria de Estado en el gobierno de Obama había «defendido a Israel contra el aislamiento y los ataques en las Naciones Unidas y en otros escenarios internacionales, incluyendo la oposición al sesgado Informe Goldstone»[69]. También se ejerció presión sobre la Autoridad Palestina (AP) para que retirara su apoyo a las recomendaciones del Informe. «La AP ha alcanzado un punto en el que debe decidir», declaraba un alto funcionario israelí, «si está trabajando con nosotros o en nuestra contra»[70]. La respuesta no se hizo esperar. Actuando en nombre del presidente Mahmud Abbas, el representante de la AP en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas efectivamente aceptó no tener en cuenta el Informe. Su decisión provocó, sin embargo, tal furor entre los palestinos que la AP tuvo que retractarse y el Consejo convino deliberar sobre el Informe[71]. Aprobó una resolución en la que «condenaba todo ataque sobre civiles y subrayaba la urgente necesidad de garantizar la asunción de responsabilidades para todas las violaciones del derecho internacional, respaldaba las recomendaciones del Informe y urgía a las Naciones Unidas a actuar en consecuencia»[72]. El 7 de noviembre de 2009, la Asamblea General de la ONU aprobaba por un voto de 114 contra 18 (y 44 abstenciones) una resolución que «condenaba todos los ataques a civiles y a la infraestructura civil» y pedía que tanto Israel como

Hamás «abrieran investigaciones independientes, creíbles y en conformidad con los criterios internacionales sobre las graves violaciones del derecho […] internacional de las que había informado la Misión de investigación»[73]. Denunciando esta resolución como «completamente alejada de las realidades» y como una «farsa de realidad», Israel proclamó que el voto «demuestra que Israel está consiguiendo transmitir el mensaje de que el informe es unilateral y no es serio», y que «los Estados democráticos de "primera división" han votado por la postura israelí» –entre ellos, las Islas Marshall, Micronesia y Palau[74]–. En febrero de 2010, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, informaba ante la Asamblea General que aún «no se podía decidir nada sobre la implementación» de su resolución de noviembre de 2009 que pedía una investigación creíble[75]. Más tarde, ese mismo mes, la Asamblea General aprobó otra resolución, por un voto de 98 a 7 (31 abstenciones), reiterando su petición a Israel y Hamás para que «dirigieran unas investigaciones independientes, creíbles y en conformidad con los criterios internacionales» y pidiendo que el secretario general informara de nuevo en cinco meses sobre la implementación de la resolución[76]. A pesar de la intensiva presión lobbista por parte de los grupos judíos europeos, en marzo de 2010 el Parlamento Europeo aprobó (355 1 287) una resolución que «pedía» la implantación de las recomendaciones del Informe y «pedía responsabilidades por todas las violaciones del derecho internacional, incluyendo los supuestos crímenes de guerra». El portavoz de la misión israelí ante la Unión Europea lamentó la resolución y dijo que era «defectuosa y contraproducente»[77].

En enero y julio de 2010, Israel publicó «actualizaciones» de sus propias investigaciones[78]. Aunque ambas actualizaciones indicaban que se habían iniciado muchas investigaciones, sus resultados mayoritariamente exoneraban a los israelíes en su conducta. Un puñado de soldados sufrió castigos disciplinarios, como un oficial que fue «severamente reprendido». La sentencia más dura fueron siete meses y medio de cárcel para un soldado que había robado una tarjeta de crédito[79]. Aun así, incluso estos castigos simbólicos provocaron que las IDF protestaran contra los grilletes que supuestamente se les ponían[80]. A las investigaciones israelíes no se les podía reprochar, sin embargo, falta de creatividad. Un soldado que había matado a una mujer que llevaba

una bandera blanca fue absuelto porque la bala en realidad había sido un «disparo de aviso» que había «golpeado contra una nube»[81]. A pesar de que estas «investigaciones» le daban la razón, Israel, magnánimamente, «adoptó por escrito nuevos e importantes procedimientos y doctrinas destinados a aumentar la protección de civiles [...] y a limitar el daño innecesario a la propiedad e infraestructura civil» en futuros conflictos[82]. El concepto tácito era que, si Israel tenía una mínima responsabilidad en la muerte y destrucción de Gaza, se debía a defectos operativos y no –como concluía el Informe Goldstone– a un asalto «diseñado para castigar, humillar y aterrorizar a la población civil». Después de la primera actualización, el editorial de Haaretz decía que las investigaciones israelíes no eran «lo bastante convincentes respecto a que se había hecho todo lo posible para llegar a la verdad». Pero, en un editorial posterior, validaba la segunda ronda de investigaciones y daba a entender que había llegado el momento de pasar página del Informe[83]. Tanto Amnistía como HRW rechazaron completamente la primera ronda de investigaciones israelíes, mientras que HRW afirmaba después de la segunda que, aunque se habían alcanzado «algunos resultados», la investigación israelí aún «se queda corta a la hora de abordar las graves y generalizadas alegaciones de conducta ilegal durante la batalla»[84]. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos anunciaba en junio de 2010 la formación de un comité independiente para «garantizar que se adjudiquen responsabilidades para todas las violaciones de las leyes internacionales humanitarias y de derechos humanos durante el conflicto de Gaza»[85]. El informe del comité, publicado en septiembre de 2010[86], establecía que mientras que «se han dado algunos pasos positivos [...] a partir de las investigaciones de Israel», en el fondo «las investigaciones militares hasta el momento parecen haber tenido muy pocos resultados»[87]. De hecho, aunque «el Comité no puede concluir que se hayan llevado a cabo investigaciones creíbles y auténticas por las autoridades de facto de la Franja de Gaza»[88], en el momento de la publicación del informe Hamás sí había condenado aparentemente y sentenciado a penas de prisión a más individuos que Israel[89]. Después de la publicación del informe del Comité, Amnistía urgió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a «reconocer el fracaso de las investigaciones llevadas a cabo por Israel y por el gobierno de facto de Hamás» y «pedir a la Fiscalía del

TPI [Tribunal Penal Internacional] que tomara una decisión […] sobre si el TPI tenía jurisdicción sobre el conflicto de Gaza»[90].

En marzo de 2010, el Israeli Intelligence and Terrorism Information Center (ITIC), un organismo semioficial, publicó una voluminosa respuesta al Informe Goldstone[91]. Se basaba en gran parte en «interrogatorios a operativos terroristas», «informes de las fuerzas de las IDF», «información confidencial israelí» y pruebas fotográficas no verificables e indescifrables. Ignorando la inmensa cantidad de pruebas que habían recogido las organizaciones de defensa de los derechos humanos, la publicación del ITIC negaba que en Gaza se sufriera una crisis humanitaria antes de la Operación Plomo Fundido (culpaba a Hamás de la escasez)[92]; negaba que el ataque del 4 de noviembre de 2008 en Gaza por parte de Israel causara la ruptura del alto el fuego por parte de Hamás[93]; y negaba que Israel usara a gazatíes como escudos humanos[94]. Además, argumentaba falsamente que el Informe Goldstone casi no hacía «mención de los brutales métodos de represión que utilizaba Hamás contra sus oponentes»[95]; alegaba falsamente que el Informe dedicaba «solo tres párrafos» a «los disparos de misiles y mortero [de Hamás] durante la Operación Plomo Fundido» y minimizaba las muertes civiles de Israel[96]; aducía falsamente que el Informe «absolvía» a Hamás «de toda responsabilidad por los crímenes de guerra»[97]; alegaba falsamente que el Informe concedía un trato «superficial» al «uso por parte de las organizaciones terroristas de civiles como escudos humanos»[98]; y alegaba falsamente que el Informe dependía «de las poco fiables estadísticas proporcionadas por Hamás»[99]. En más de una ocasión, la publicación del ITIC desafiaba los límites del descaro y la credibilidad. No solamente reprendía a Israel, sino también a Hamás por «cooperar involuntariamente con la Misión [Goldstone]»[100] y afirmaba que «los operativos de Hamás colocaban a civiles inocentes cerca de los tanques de las IDF para evitar que los soldados de las IDF los dispararan»[101]. En otras palabras, los combatientes de Hamás arrastraban a civiles palestinos a los lugares donde se encontraban los tanques israelíes, les ordenaban que se quedaran allí y después se largaban rápidamente. No se nos dice si los civiles se quedaban allí quietos.

Podríamos preguntarnos por qué el Informe Goldstone provocó tanto rechazo en Israel y puso en marcha una «ofensiva diplomática» para limitar los efectos colaterales[102]. Después de todo, no era sino uno más de los cientos de informes sobre derechos humanos que condenaban la Operación Plomo Fundido; sus hallazgos no diferían tanto de los demás, e Israel nunca había prestado ninguna atención a los organismos de la ONU[103]. La respuesta, no obstante, no era difícil. Goldstone no solamente era judío, sino un autoproclamado sionista, que «había trabajado para Israel durante toda mi vida adulta», «había apoyado completamente el derecho a la existencia de Israel» y era «un firme creyente en el absoluto derecho del pueblo judío a tener allí su hogar». Encabezaba una organización judía que gestionaba escuelas de formación profesional en Israel y formaba parte del Consejo de Administración de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que le había concedido el título de Doctor Honoris Causa. Su madre era activista en la rama femenina del movimiento sionista, mientras que su hija había emigrado a Israel y era una ferviente sionista[104]. Goldstone había destacado que el Holocausto nazi era la inspiración seminal para la agenda del derecho internacional y de los derechos humanos, de la cual él era un principal exponente[105]. A la luz de su bona fide judía / sionista, Israel no podía jugar sus cartas habituales –«antisemita», «judío que se odia a sí mismo», «negador del Holocausto»– contra Goldstone. En efecto, su personalidad neutralizaba las armas ideológicas que Israel había perfeccionado durante muchas décadas para defenderse de la crítica. «Esta vez», decía Gideon Levy en una frase elocuente, «el mensajero está a prueba de propaganda»[106]. Por supuesto, hubo intentos desesperados de desacreditar a Goldstone como «antisemita» (como el del ministro de Finanzas israelí Yuval Steinitz) y al Informe como «parcialmente motivado por opiniones antisemitas de Israel» (profesor de Filosofía Asa Kasher) y el «tipo de antisemitismo» que condujo al Holocausto (ministro de Información israelí Yuli Edelstein)[107]. Una búsqueda en Google de los términos «Goldstone antisemita Gaza» una semana después de la publicación del Informe arrojó más de 75.000 resultados. Aun así, las calumnias se desplomaron bajo el peso de su carácter claramente absurdo. Los detractores de Goldstone entonces especularon con que el Informe fuera un producto de la desmesurada ambición de Goldstone. Se decía que buscaba el Premio Nobel de la Paz o presidir las Naciones

Unidas. Pero la reputación impecable de Goldstone superó fácilmente estas acusaciones de oportunismo[108]. No obstante, en las entrevistas y declaraciones posteriores al Informe, Goldstone parecía renunciar a sus conclusiones más incriminatorias y minimizar la extensión de los crímenes israelíes[109]. Entonces se alegó que «habían convencido a Goldstone para que prestara su buen nombre a un informe a medio hacer»[110]. Pero el fiscal jefe de múltiples tribunales que habían juzgado crímenes de guerra claramente no era una marioneta.

Si Goldstone no era un antisemita, un judío resentido o un negador del Holocausto; si nunca había mostrado inquina hacia Israel, sino, por el contrario, le había manifestado un profundo afecto; si se le suponía un hombre íntegro, que colocaba la verdad y la justicia por encima de partidismos y egocentrismos; si no era ni un incompetente ni un tonto; si Goldstone podía presumir de todo esto y más, entonces la única explicación plausible para el devastador contenido del documento que él había elaborado en su mayoría era que este registraba con fidelidad los hechos condenatorios que se habían desarrollado durante la Operación Plomo Fundido. «Lo único de lo que pueden tener miedo», observó más tarde Goldstone sobre sus detractores, «es de la verdad. Y creo que por eso están atacando al mensajero y no al mensaje»[111]. Obligado a enfrentarse a los hechos y a sus consecuencias, desarmado y expuesto, Israel entró en modo pánico. Los tertulianos israelíes expresaban su alarma por que el Informe pudiera impedir la capacidad de Israel de lanzar ataques militares en el futuro[112], mientras que el primer ministro Netanyahu colocaba «la amenaza Goldstone» entre los principales desafíos estratégicos a los que se enfrentaba Israel[113]. Mientras tanto, a los funcionarios israelíes les preocupaba que los fiscales pudieran dar caza a los israelíes que viajaran al extranjero[114]. De hecho, poco después de que el Informe se publicara, el TPI anunció que estaba sopesando una investigación sobre un funcionario israelí implicado en crímenes de guerra durante la Operación Plomo Fundido[115]. Entonces, en diciembre de 2009, Tzipi Livni tuvo que cancelar un viaje a Londres después de que un tribunal británico emitiera una orden de arresto por su papel en la comisión de crímenes de guerra mientras ejercía como ministra de Exteriores durante la Operación Plomo Fundido y, en junio de 2010, dos abogados belgas, en representación de un

grupo de palestinos, acusaron a 14 políticos israelíes (entre ellos a Livni y a Ehud Barak) de cometer crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra durante el ataque[116]. Incapaz de exorcizar su fantasma, los agresores de Goldstone aumentaron la maldad de sus ataques ad hominem. Los líderes comunitarios judíos de Sudáfrica conspiraron para impedir que Goldstone atendiera el bar mitzvah de su nieto, pero se retractaron después de una ola de publicidad vergonzante en el extranjero[117]. Israel entonces sacó a la luz la carrera judicial de Goldstone bajo el gobierno del apartheid en Sudáfrica y gacetilleros como Jeffrey Goldberg (en la revista The Atlantic) y Jonathan Chait (en The New Republic) la difundieron a conciencia por los medios de comunicación americanos[118]. A Goldstone se le etiquetó como un «juez de la horca» por su dudosa carta de servicios bajo un «régimen totalmente ilegítimo y bárbaro» (Dershowitz)[119]. Pero, como Sasha Polakow-Suransky, editor senior de la revista Foreign Affairs y autor de Unspoken Alliance: Israel's Secret Relationship with Apartheid South Africa, señalaba: «En su papel de principal y más fiable proveedor de armas de Sudáfrica, durante un periodo de violenta represión interna y de agresión externa, el gobierno de Israel hizo más por ayudar al régimen del apartheid que lo que Goldstone hizo nunca»[120]. De hecho, justo cuando la represión de la mayoría negra alcanzaba su cénit en Sudáfrica, el ministro de Defensa, Shimon Peres, confesaba a su aparato de poder que la cooperación israelí con el régimen del apartheid se «basaba no solamente en intereses comunes, sino también en los cimientos inamovibles de nuestro odio común por la injusticia»; y el primer ministro Isaac Rabin brindaba por «los ideales compartidos por Israel y Sudáfrica: la esperanza de una justicia y de una coexistencia pacífica». Mientras que santurronamente denunciaba el apartheid en público, Peres había forjado y después alimentado en momentos clave la alianza de Israel con Sudáfrica y tanto él como Rabin apoyaron esta colaboración hasta los últimos años del régimen del apartheid[121]. En las últimas jugadas desesperadas para crucificar a Goldstone, la junta de gobierno de la Universidad Hebrea lo destituyó[122] y el exdirector ejecutivo de la AIPAC, Neal Sher, «pidió a los funcionarios americanos que prohibieran al exjuez Richard Goldstone entrar en el país debido a sus sentencias durante el régimen del apartheid, en Sudáfrica». El caso moral que Sher había construido quedaba algo cojo, no obstante, por el hecho de que él

mismo había sido expulsado del colegio de abogados después de gastar los importes de compensación del Holocausto en sus juergas de vacaciones[123].

El simbolismo (el pathos, de hecho) del pliego de acusaciones de Goldstone contra Israel era difícil de obviar. Un partidario de Sión pedía ahora que Sión se presentara ante el Tribunal Penal Internacional por una serie de crímenes de guerra y de posibles crímenes contra la humanidad. En efecto, la entrada de Goldstone en el teatro del conflicto entre Israel y Palestina señala la implosión de esta inestable aleación –hay quien lo llamaría oxímoron– denominada «sionismo liberal». Por una parte, él era el judío liberal arquetípico, un reverenciado defensor del imperio de la ley y de los derechos humanos; por otra parte, había creado un profundo vínculo con Israel. Goldstone estaba ahora obligado por las circunstancias de su nombramiento a hacer una elección. Incluso si prescindiera de su familia y de su fe, aun así no podía defender la Operación Plomo Fundido. Su temperamento judicial, su reputación pública y su orgullo personal se interponían en ello. Estaba obligado por los parámetros de la ley, que, si se consultaban con buena conciencia, no podían estirarse más allá de ciertos límites. Funcionaba en un entorno de defensa de los derechos humanos que ya había emitido un veredicto devastador sobre la Operación Plomo Fundido: no podía ignorarlo y seguir conservando su credibilidad dentro de esa comunidad. El hecho era que solo en teoría tenía una elección. Si Goldstone hubiera elegido defender a Israel contra lo indefendible, habría cometido un suicidio profesional y habría manchado irrevocablemente su propia reputación. Y Goldstone no estaba dispuesto a tanto en su defensa de Israel.

Mientras tanto, mientras que Israel luchaba para conservar la adhesión de la diáspora judía, la publicación del Informe ponía otro palo en las ruedas. Cada vez se les hacía más difícil a los que se consideraban judíos liberales de la diáspora defender los crímenes cada vez más audaces de Israel[124]. La Operación Plomo Fundido marcó el nadir del descenso gradual de Israel hacia la barbarie; o, como el Informe lo expresaba eufemísticamente, la operación supuso «un salto cualitativo» por parte de Israel, «desde las operaciones relativamente concentradas hasta la destrucción masiva y deliberada»[125]. Si incluso un judío, sionista y liberal con las

credenciales inmaculadas de Goldstone confirmaba ese «salto», ¿cómo podía ignorarse? Los judíos que compartían el temperamento de Goldstone –que hay que decir que son la mayoría de los judíos americanos, que «identificaban sus intereses a largo plazo con las políticas liberales»[126]– a partir de ese momento verían casi imposible hacer oídos sordos incluso a las críticas más duras hacia Israel, mientras que los defensores de Israel lo pasarían muy mal para desviar esas críticas. «Aquellos grupos que atacan sin pensárselo dos veces la veracidad del informe», escribía en The Guardian un «amigo y partidario de Israel» británico, «se encuentran aún más alienados de significativos sectores de la opinión judía, especialmente entre las generaciones más jóvenes»[127]. La reacción de los bastiones del liberalismo judío americano al Informe destacaba tanto por lo que no se decía como por lo que se decía. Aunque los editoriales de los periódicos y los comentaristas liberales no salieron en defensa de Goldstone, tampoco defendieron a Israel frente a él[128]. El Informe parecía anunciar el final de una era y la emergencia de otra: el final de un liberalismo judío apologético, que negaba o disculpaba los crímenes de Israel, y la emergencia de un liberalismo judío que regresaba a su apogeo inspirador cuando –aunque fuera únicamente como un ideal imperfectamente realizado– todos los malhechores, tanto judíos como no judíos, eran responsabilizados si se desviaban del camino de la justicia. «Los violentos ataques personales al juez Goldstone […] son profundamente perturbadores», observaba el rabí Brant Rosen. «Lo que quizá sea más interesante, no obstante, es el hecho de que una parte tan amplia de la comunidad judía americana está negándose a unirse al coro. […] Los judíos americanos […] trabajan para mantener a Israel comprometido con un conjunto de valores judíos que son más importantes que cualquier ideología política»[129]. Aunque estuvieran tentados de hacerlo, los judíos de la diáspora no enterrarían el Informe Goldstone, porque había tenido una profunda resonancia en los ambientes en los que trabajaban y socializaban. «Los gobiernos occidentales pueden ignorar este informe condenatorio», profetizaba un comentarista israelí, «pero ahora servirá como base para la crítica a Israel en la opinión pública, los medios de comunicación, los campus universitarios y los institutos, lugares en los que los documentos de la ONU aún se toman en serio»[130]. Un oficial israelí en la reserva, que trabajaba a la vez como emisario de

Israel en los campus universitarios de Estados Unidos, lamentaba que los estudiantes que se manifestaban «citaban el Informe Goldstone. […] Se ha convertido en su biblia»[131]. Entre los judíos que decían ser ilustrados, la elección entre la credibilidad de los palmeros de Israel y los tipos como Goldstone no era tan complicada. «¿No acaba siendo todo una cuestión de en qué reputación confías?», preguntaba retóricamente Antony Lerman. «Si es así, ¿confiarías en los críticos de las agencias de defensa de los derechos humanos, como Alan Dershowitz, el destacado abogado americano que cree que habría que legalizar la tortura; o en Melanie Phillips, una columnista que a los judíos críticos con Israel los llama "Judíos por el Genocidio" […]? ¿O en Richard Goldstone, exfiscal jefe del Tribunal Penal Internacional en los casos de la ex Yugoslavia y Ruanda, que está arriesgando su considerable reputación al aceptar el encargo de la UNHRC? Francamente, no me parece que haya conflicto»[132].

El Informe Goldstone también anunciaba el amanecer de una nueva era en la que la dimensión de los derechos humanos en el conflicto entre Israel y Palestina se trasladaría al centro del escenario junto –e incluso desplazándolo en ocasiones– con el fatuo «proceso de paz». Durante las primeras décadas de la ocupación de Israel, los defensores palestinos de los derechos humanos confiaban necesariamente en la investigación y testimonio de un puñado de israelíes, valientes pero políticamente marginales[133]. Veamos el caso de la tortura. En los últimos tiempos, respetadas organizaciones de defensa de los derechos humanos e historiadores israelíes han reconocido que Israel torturaba rutinariamente a los detenidos palestinos desde el inicio de la ocupación[134]. No obstante, hasta la década de 1990, y a pesar de una plétora de pruebas que lo corroboraban, la opinión progresista trataba los informes de la tortura israelí con cautela y se apartaba prudentemente de la palabra tortura cuando hacía referencia a esos informes[135]. Hubo un cambio radical durante la primera intifada (1987-1993), cuando los palestinos practicaban la resistencia civil no violenta. Por una parte, la tortura de los detenidos palestinos alcanzó proporciones epidémicas y, por otra, la nueva organización israelí de defensa de los derechos humanos B'Tselem (Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados) documentó sin lugar a dudas el uso generalizado de la

tortura. Incapaz ya de cerrar los ojos, pero también moral y políticamente escudada tras reputados grupos israelíes, la comunidad occidental de defensa de los derechos humanos empezó también a documentar sistemáticamente la atroz práctica de la tortura por parte de Israel, así como otras muchas violaciones de los derechos humanos[136]. No obstante, la mayoría de estas publicaciones solamente cogían polvo en los estantes, pues los medios de comunicación afines al sistema las ignoraban escrupulosamente y, en cambio, fingían desesperarse en la búsqueda de la verdad entre las acusaciones palestinas y las negaciones israelíes. La novedad del Informe Goldstone era que, de un solo golpe, catapultó el historial de derechos humanos de Israel directamente al patio de la opinión pública, cerró la brecha entre las «narraciones» judía y palestina sobre el historial de derechos humanos de Israel y cargó de consecuencias políticas los hallazgos condenatorios de las organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Ante la escalada de los costes políticos potenciales, no es sorprendente que la histeria alrededor del Informe Goldstone coincidiera en Israel y en Estados Unidos con una campaña feroz de descrédito de las organizaciones de defensa de los derechos humanos. «Vamos a dedicar tiempo y recursos humanos a combatir a estos grupos», declaraba el director de planificación política del gabinete del primer ministro israelí[137]. «Por primera vez», se quejaba el director de la división de Oriente Próximo de HRW, «el gobierno israelí está adoptando un papel activo en la difamación de los grupos de defensa de los derechos humanos»[138]. Estos grupos y uno de sus benefactores (New Israel Fund) sufrieron un virulento ataque en Israel por, supuestamente, proporcionar los datos que el Informe usaba para manchar el nombre de Israel. Se creó un subcomité de la Knesset para «examinar las fuentes de financiación» de los grupos de defensa de los derechos humanos establecidos en Israel[139], y una sucesión de decretos de la Knesset proponía, respectivamente, ilegalizar las ONG que proporcionaran información que incriminara legalmente a organismos extranjeros y obligar a los miembros de las ONG israelíes a declarar sus fuentes de financiación extranjeras en todas las actividades públicas[140]. Una encuesta del Israel Democracy Institute concluía que «la mitad de la opinión pública está de acuerdo con la afirmación de que las

organizaciones de derechos civiles y humanitarias, como la Asociación por los Derechos Civiles en Israel y B'Tselem, son perjudiciales para el Estado», mientras que una encuesta de la Universidad de Tel Aviv concluía que casi el 60 por 100 de quienes respondieron estaba de acuerdo con que a las organizaciones de defensa de los derechos humanos que expusieran la conducta inmoral de Israel «no debía dejárseles operar libremente»[141]. Enfrentados a estos vientos inquietantes, los grupos israelíes de defensa de los derechos humanos arriaron velas conspicuamente. En su informe anual, B'Tselem dedicó más líneas a las violaciones palestinas del derecho internacional durante la Operación Plomo Fundido que a las israelíes; dedicó dos veces más espacio a «la grave infracción» (o «crimen de guerra») de Hamás al capturar al soldado israelí Gilad Halit y retenerlo como «rehén» que a todas las violaciones israelíes (ninguna de las cuales se caracterizaba como un crimen de guerra) durante la Operación Plomo Fundido; y discutía hallazgos clave del Informe Goldstone, pero no aportaba pruebas en sentido contrario[142]. En una línea paralela de ataque, el lobby israelí radicado en Estados Unidos se movilizó contra lo que llamaba «guerra legal»[143]. El término se refería a «aislar a Israel mediante el lenguaje de los derechos humanos»[144]. En otras palabras, la guerra legal señalaba la idea escandalosa de que Israel debería responder ante la justicia por sus crímenes. Bajo los auspicios de las principales facultades de Derecho y las organizaciones profesionales surgieron congresos pseudoacadémicos con temas como «El Informe Goldstone: Guerra legal y la amenaza y la seguridad nacional de Israel y América en la era del terrorismo» (Fordham University School of Law)[145], y «Guerra legal: el uso del derecho como arma de guerra» (New York County Lawyers Association)[146]. Indignado por el «escándalo del Informe Goldstone», un erudito oponente de la «guerra legal» corregía así su sesgo: «Ningún otro ejército en la historia militar ha dedicado más atención o energía que los ejércitos de Israel y Estados Unidos a distinguir y proteger a los civiles en la guerra y a garantizar que la fuerza que emplean en el conflicto armado sea proporcional a la amenaza a la que se enfrentan»[147]. Por supuesto, esta afirmación tan amplia se presentaba sin prueba ninguna; como en la religión, o bien eras creyente o no lo eras. Simultáneamente, los apologetas perennes del Estado Santo, como Alan Dershowitz y Elie Wiesel, orquestaban una caza de brujas contra HRW[148]. «De verdad que

dudo si emplear palabras como conspiración, pero tengo la sensación de que hay una campaña organizada», observaba el director de programas de HRW. «Estamos sufriendo una enorme presión y ataques tremendos, algunos de ellos muy personales»[149]. El fundador de HRW, Robert Bernstein, que durante años había amordazado la crítica a Israel por parte de HRW dentro de la organización, abandonó el barco y se metió en la refriega. Después de la publicación del Informe, y en una deserción muy publicitada, Bernstein publicó un comentario editorial en The New York Times denunciando el supuesto sesgo de los informes de HRW sobre Israel. Pero el único testimonio al que pudo acudir en su defensa de Israel fue al del ubicuo coronel Richard Kemp, que elogiaba a Israel por su inigualable dedicación al derecho humanitario durante la Operación Plomo Fundido[150]. El exabrupto de Bernstein tuvo su continuación medio año más tarde en un reportaje cotilla de The New Republic sobre el descontento interno en HRW con el supuesto giro anti Israel del grupo[151]. El artículo no exploraba la única pregunta con sentido que suscitaba su contenido: ¿por qué donantes judíos partidarios de Israel, sin conocimiento ninguno sobre los derechos humanos u Oriente Próximo –«un legendario magnate de Hollywood», «un antiguo trabajador de Wall Street de 48 años», «un excorredor de bolsa»–, ejercían tanto poder e influencia sobre la división de Oriente Próximo de HRW? Lamentablemente, HRW se demostró incapaz de capear la tormenta de vilipendio sin sufrir daños. Su Informe Mundial 2010 declaraba, por ejemplo, que «los informes de los medios informativos y de las organizaciones no gubernamentales indican que, en algunos casos, los grupos armados palestinos intencionadamente se ocultaron detrás de civiles para usarlos ilegalmente como escudos que impidieran los contraataques israelíes»[152]. Olvidaba mencionar que ni las misiones de investigación ni las organizaciones de defensa de los derechos humanos –ni siquiera HRW– habían encontrado pruebas de que los grupos armados palestinos usaran escudos humanos durante la Operación Plomo Fundido. Entonces, en un claro gesto desesperado para aplacar al lobby israelí, y mientras Israel persistía en su asedio ilegal e inhumano sobre el millón y medio de habitantes de Gaza, HRW se limitó a condenar públicamente al dueño de un restaurante jordano que se había negado a servir comida a dos israelíes[153].

El retroceso de HRW era sintomático del hecho de que el ataque incesante y coordinado de Israel sobre el Informe Goldstone había logrado su objetivo. Un año después de su publicación, el Informe no estaba aún parado en medio del mar, pero sí había perdido fuelle en sus velas. Después de negar cualquier delito y de atacar el Informe, y después de que los objetivos de su vilipendio habían sido ablandados, Israel, diestramente, cambió de táctica. Administró un puñado de castigos simbólicos y, prometiendo enmendarse, afirmó que en las guerras futuras seguiría las lecciones del Informe[154]. Deseosos de unirse al consenso israelí, los partidarios iniciales de Goldstone, como Haaretz, se dieron por satisfechos y elogiaron la capacidad de autocrítica (aunque tardía) de Israel[155]. El ministro de Defensa Barak predecía, confiado, que estaba en el proceso de deshacerse de «los restos del Informe Goldstone»[156]. Siguiendo las indicaciones de Washington, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, elogiaba «el progreso significativo [de Israel] en la investigación de las alegaciones de conducta inapropiada de las IDF», incluso aunque las supuestas investigaciones habían arrojado resultados ridículos[157]. De hecho, los «progresos significativos» y las reacciones de peso ante el Informe Goldstone se mostraron a finales de 2010, cuando el comandante de la Operación Plomo Fundido fue ascendido a jefe del Estado Mayor de las IDF[158]. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU siguió retrasando la acción sobre los hallazgos de Goldstone, mientras que la AP y la Liga Árabe, que preferían que el Informe muriera en silencio, lo dejaron languidecer entre la burocracia de la ONU. Una resolución de septiembre de 2010 del Consejo de Derechos Humanos, que se aprobó por 27 votos a favor, 1 en contra (Estados Unidos) y 19 abstenciones, pedía a su Comité de Expertos Independientes que sometiera un informe más sobre los progresos en la sesión dieciséis del Consejo (en marzo de 2011)[159]. La AP y los Estados árabes, conjuntamente, patrocinaron este despreciable retraso táctico, mientras que Estados Unidos votó en contra, porque, «como Israel tenía la capacidad de llevar a cabo una investigación creíble y un serio autoexamen, un seguimiento posterior del Informe Goldstone por parte de los organismos de las Naciones Unidas era innecesario e injustificado»[160]. Los grupos palestinos de defensa de los derechos humanos denunciaron a la AP por «ampliar la impunidad a los líderes políticos y militares israelíes»; una declaración de Amnistía criticaba la «resolución gravemente deficiente» del

consejo, «que no logra establecer un proceso claro para la justicia» y «equivale a una traición a las víctimas», y solicitaba al consejo que remitiera el asunto al Tribunal Penal Internacional para su consideración; un representante de HRW evaluó que la resolución era «un paso atrás» y «el inicio de una muerte lenta» del Informe[161].

Para desacreditar, o al menos para minar el Informe Goldstone, Israel se había lanzado a las profundidades más hondas de su Estado y de su sociedad, reuniendo y concentrando todas sus fuerzas, y había movilizado simultáneamente a los fieles aparachicks del Estado de Israel en el extranjero. Pero, aunque había logrado extraer parte del veneno del Informe, Israel seguía estando peligrosamente expuesto. La devastadora acumulación de pruebas seguía siendo una acusación de su comportamiento criminal. La resonancia internacional del Informe aún complicaba la capacidad de Israel de lanzar otro ataque a gran escala. La comunidad de defensa de los derechos humanos seguía necesitando que se le advirtiera de que no volviera a intentar otro truco así. Incluso meses después de su publicación, se quejaba un columnista israelí, «el Informe Goldstone sigue ocupando el lugar de honor de la lista de los dolores de cabeza más vendidos de Israel»[162].

[1] Report of the United Nations Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict, 25 de septiembre de 2009, §§ 1, 151; a partir de ahora, Informe Goldstone. Para una escalofriante retrospectiva sobre el Informe Goldstone escrita por un miembro de la Misión cinco años después del ataque israelí, véase el manuscrito inédito de D. Travers, «Gaza: "[…] for the day after[…]"», 2014.

[2] Informe Goldstone, cit., §§ 144, 162; B. Moyers, Journal, 23 de octubre de 2009, disponible en [pbs.org/moyers/journal/10232009/transcript1.html]. Para la extensa correspondencia entre Goldstone y el Gobierno israelí, véase Informe Goldstone, cit., anexo II, pp. 434-450.

[3] Para una evaluación crítica, pero en último término favorable, del Informe Goldstone por «reconocidos expertos» de los organismos relevantes del derecho internacional, véase Report of an Expert

Meeting Which Assessed Procedural Criticisms Made of the UN Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict, The Goldstone Report, 2009. Estos expertos concluyeron que el Informe Goldstone «estaba muy lejos de ser invalidado por las críticas [que se le dirigían]. El Informe suscita temas extremadamente graves que tienen que abordarse. Contiene pruebas conclusivas de algunos incidentes».

[4] Informe Goldstone, cit., §§ 63, 1213-1214.

[5] Informe Goldstone, cit., §§ 1215, 1892.

[6] Aquí, como en el resto del libro, Hamás se emplea para denotar a todas las facciones armadas palestinas en Gaza.

[7] Informe Goldstone, cit., §§ 1208, 1884.

[8] Informe Goldstone, cit., § 1893.

[9] Informe Goldstone, cit., § 1898. Goldstone recordaría después que, aunque inicialmente tenía reparos en viajar a Gaza («tenía pesadillas en las que me secuestraban. Sabes que es difícil, especialmente para un judío, entrar en una zona controlada por Hamás»), se quedó «sorprendido por la calidez de la gente que conocimos y tratamos en Gaza», B. Moyers, Journal, cit.

[10] Informe Goldstone, cit., §§ 46, 50, 60, 937, 961, 987, 1006, 1171-1175, 1935.

[11] Informe Goldstone, cit., §§ 75, 1334-1335, 1936. Un comité de investigación encabezado por el distinguido colega sudafricano de Goldstone, John Dugard, llegó un poco más lejos en sus conclusiones legales. Establecía que, en el curso de un ataque «odioso e inhumano», Israel había cometido crímenes de guerra, como «ataques indiscriminados y desproporcionados sobre civiles», «matando, hiriendo y aterrorizando a civiles», «una destrucción gratuita de la propiedad» y bombardeos y ataques con proyectiles sobre hospitales y ambulancias, y que había obstruido la evacuación de los heridos. Establecía más adelante que Israel era culpable de crímenes contra la humanidad, incluyendo la matanza «insensata» e intencionada de civiles, «asesinatos masivos» –«en algunos casos “exterminación”»– y «persecución». No acusaba, sin embargo, a

Israel del delito de genocidio: «La principal razón de la operación no era destruir un grupo humano, tal como se requiere para el delito de genocidio, sino emprender un ejercicio despiadado de castigo colectivo diseñado bien para obligar a la población a rechazar a Hamás como la autoridad gobernante en Gaza, o bien para reducir a la población a un estado de sometimiento». Aun así, establecía que «soldados individuales bien podrían haber tenido esa intención y, por lo tanto, ser procesados por ese delito» Report of The Independent Fact-Finding Committee on Gaza: No Safe Place. Presented to the League of Arab States, 30 de abril de 2009, §§ 20, 22-23, 25-30 del Resumen ejecutivo; §§ 405, 485-491, 496-498, 500-504, 506-510, 519-520, 526-529, 540-547, 554-558, 572-573; a partir de ahora, Informe Dugard.

[12] Informe Goldstone, cit., § 1895.

[13] Informe Goldstone, cit., §§ 108, 1691, 1953. El Comité Dugard halló culpable a Hamás de crímenes de guerra como «ataques indiscriminados y desproporcionados a civiles», y «matar, herir y aterrorizar a civiles». No obstante, incluía la advertencia de que «un número de factores […] reducen su culpabilidad moral, aunque no su responsabilidad penal», entre ellos «que Israel ha negado a los palestinos el derecho de autodeterminación y han sido sometidos desde hace mucho tiempo a un cruel asedio por parte de Israel», «la escala de las acciones de Israel» y «la enorme diferencia tanto en la capacidad armamentística de los bandos en conflicto como en el uso de su respectivo armamento». Informe Dugard, cit., §§ 21, 24, 35 del Resumen ejecutivo; §§ 457, 484, 495, 499, 575-577.

[14] Dinah PoKempner, consejera general de Human Rights Watch, señaló, además, que «no era sorprendente» que el espacio que se le concediera a Hamás fuera «bastante breve, porque hay pocas discusiones fácticas acerca de si las autoridades de Gaza toleraron el disparo de misiles a las zonas civiles israelíes y no hay ambigüedades legales que debatir». «Valuing the Goldstone Report», Global Governance 16, 2010, p. 153.

[15] B. Moyers, Journal, cit.

[16] «Israel, efectivamente, ha dividido burocrática y logísticamente no solamente a los palestinos de los territorios

ocupados y sus familias en Israel, sino también a los palestinos residentes en Jerusalén y a los habitantes del resto del territorio, y a los gazatíes de los cisjordanos y los residentes en Jerusalén». Informe Goldstone, cit., § 205.

[17] El informe hace una referencia de pasada, en este contexto, al «derecho de retorno de los refugiados». Informe Goldstone, cit., §§ 92, 1509.

[18] Informe Goldstone, cit., §§ 206-207.

[19] En opinión de la Misión, se ha traspasado una línea, lo que de manera falaz se ha considerado un «"comportamiento bélico" aceptable se ha convertido en norma. El apoyo popular a una actitud más dura hacia los palestinos en general, la falta de censura pública y la no asunción de responsabilidades se combinan para aumentar un nivel de violencia ya crítico contra la población protegida». Informe Goldstone, cit., § 1440.

[20] «La Misión señala el elevado número de palestinos que han sido detenidos desde el inicio de la ocupación, que suman el 40 por 100 de la población adulta masculina […] siguiendo una práctica que parece buscar ejercer control, humillar y provocar miedo, impedir la actividad política y servir a intereses políticos», Informe Goldstone, cit., § 1503; «A la Misión […] le preocupan los informes de coerciones y torturas durante los interrogatorios, los juicios basados en confesiones forzadas o pruebas confidenciales y los relatos de maltrato sistemático e institucionalizado en las cárceles. A la Misión le alarma especialmente la detención y encierro de cientos de niños y el aumento de la detención de niños durante y después de las operaciones militares israelíes en Gaza. El maltrato de los niños y los adultos que se le ha descrito a la Misión muestra una crueldad deliberada inquietante», Informe Goldstone, cit., §§ 1504-1505.

[21] Informe Goldstone, cit., §§ 1535-1537. La Misión afirma explícitamente que «considera a Jerusalén Este como parte de los Territorios Palestinos Ocupados», Informe Goldstone, cit., p. 369 n. 1062.

[22] Informe Goldstone, cit., § 1546.

[23] Informe Goldstone, cit.

[24] «La extensiva destrucción y apropiación de propiedad, incluyendo la confiscación de tierras y las demoliciones de casas en Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, no justificadas por necesidades militares y llevadas a cabo de manera ilegal y gratuita, es una grave violación […] de la Cuarta Convención de Ginebra», Informe Goldstone, cit., § 1946.

[25] «En lo que se refiere a las restricciones de movimiento y acceso, los asentamientos y su infraestructura, las políticas demográficas respecto a Jerusalén y la "zona c" de Cisjordania, así como la separación de Gaza de Cisjordania, todo ello impide que surja un Estado palestino viable, contiguo y soberano, y son actos que violan el derecho ius cogens a la autodeterminación», Informe Goldstone, cit., § 1947.

[26] Informe Goldstone, cit., § 1876.

[27] Informe Goldstone, cit., §§ 127, 1857, 1975.

[28] Informe Goldstone, cit., § 1969.

[29] Informe Goldstone, cit., §§ 128, 1873, 1971(b).

[30] Informe Goldstone, cit., §§ 1971-1974. El informe también pedía explícitamente a Israel que «liberara a los palestinos detenidos en relación con la ocupación».

[31] Entre las excepciones: A. Hass, «The One Thing Worse than Denying the Gaza Report», Haaretz, 17 de septiembre de 2009; G. Levy, «Disgrace in the Hague», Haaretz, 17 de septiembre de 2009; G. Levy, «Goldstone's Gaza probe did Israel a favor», Haaretz, 1 de octubre de 2009; Y. Laor, «The national choir», Haaretz, 22 de septiembre de 2009; Y. Laor, «Turning off the lights», Haaretz, 7 de octubre de 2009; Z. Sternhell, «A permanent moral stain», Haaretz, 25 de septiembre de 2009; L. Derfner, «A wake-up call from Judge Goldstone», The Jerusalem Post, 16 de septiembre de 2009; L. Derfner, «Our exclusive right to self-defense», The Jerusalem Post, 7 de octubre de 2009; L. Derfner, «Some victims we are», The Jerusalem Post, 28 de octubre de 2009. El líder del partido pacifista

Meretz y los editoriales de Haaretz pidieron al gobierno israelí que creara una comisión de investigación. G. Hoffman y H. R. Gur, «Oron calls for Israeli Cast Lead probe», The Jerusalem Post, 18 de septiembre de 2009; «A committee of inquiry is needed», Haaretz, 18 de septiembre de 2009; «Only an external probe will do», Haaretz, 3 de octubre de 2009; «Israel's whitewash», Haaretz, 28 de enero de 2010.

[32] «Statement by President Shimon Peres: "Goldstone Mission report is a mockery of history"», 16 de septiembre de 2009, disponible en [mfa.gov.il/mfa/pressroom/2009/pages/president-peres-reply-to-the-goldstone-commission-report-16-sep-2009.aspx]; S. Sadeh, «Peres: Goldstone is a small man out to hurt Israel», Haaretz, 12 de noviembre de 2009.

[33] B. Ravid y N. Mozgovaya, «Netanyahu Calls UN Gaza Probe a "Kangaroo Court" against Israel», Haaretz, 16 de septiembre de 2009.

[34] «Rights Council to debate Gaza war», Al Jazeera, 15 de octubre de 2009, disponible en [aljazeera.com/news/europe/2009/10/2009101521222102631.html]; B. Ravid, «Israel slams Goldstone "misrepresentations" of internal probes into Gaza war», Haaretz, 7 de febrero de 2010.

[35] B. Ravid, «Israel prepares to fight war crimes trials after Goldstone Gaza Report», Haaretz, 20 de octubre de 2009; B. Ravid, «Israel to set up team to review Gaza War probe», Haaretz, 26 de octubre de 2009; Z. Sternhell, «With a conscience that is always clear», Haaretz, 30 de octubre de 2009. Acerca de la propuesta de Netanyahu, Goldstone comentaba: «Se diría que contiene una aceptación implícita de que han quebrantado la ley que existe y que por eso necesitan una nueva». B. Moyers, Journal, cit.

[36] R. A. Stoil y T. Lazaroff, «EU to debate Goldstone Report», The Jerusalem Post, 24 de febrero de 2010.

[37] «Dershowitz: Goldstone is a traitor», The Jerusalem Post, 31 de enero de 2010.

[38] G. Hoffman y H. R. Gur, «Oron Calls»; D. Macintyre, «Israelis

hit back at UN Report alleging war crimes in Gaza», The Independent, 17 de septiembre de 2009; B. Ravid y N. Mozgovaya, «Netanyahu calls».

[39] S. Zohar, «Peres: Goldstone report mocks history», The Jerusalem Post, 16 de septiembre de 2009; D. Gold, «The Dangerous Bias of the United Nations Goldstone Report», US News & World Report, 24 de marzo de 2010.

[40] M. Oren, «UN Report a victory for terror», Boston Globe, 24 de septiembre de 2009; M. Oren, «Address to AJC», 28 de abril de 2010, disponible en [http://archive.boston.com/bostonglobe/editorial_opinion/oped/articles/2009/09/24/un_report_a_victory_for_terror/]; M. B. Oren, «Deep denial: Why the Holocaust still matters», New Republic, 6 de octubre de 2009. El periodista Gideon Levy llamó a Oren el «embajador-propagandista». G. Levy, «Israel's attacks will lead to its isolation», Haaretz, 22 de octubre de 2009. Para un análisis crítico de la carrera académica de Oren, véase N. G. Finkelstein, Knowing Too Much: Why the American Jewish Romance with Israel is Coming to an End, Nueva York, 2012, pp. 221-248.

[41] «We'll defend ourselves by any means», The Jerusalem Post, 21 de septiembre de 2009; Y. Katz, «Security and Defense: Waging war on the legal front», The Jerusalem Post, 18 de septiembre de 2009; A. Harel, «IDF: UN Gaza report biased, radical and groundless», Haaretz, 20 de septiembre de 2009.

[42] «Goldstoned», The Jerusalem Post, 16 de septiembre de 2009; «The "Goldstoning" of Israel», The Jerusalem Post, 2 de febrero de 2010; D. Landau, «The Gaza Report's wasted opportunity», The New York Times, 20 de septiembre de 2009.

[43] I. Harel, «Venom and destruction», Haaretz, 18 de septiembre de 2009; I. Harel, «Don't establish an investigative Comité», Haaretz, 1 de octubre de 2009; J. Khoury, «Goldstone tells Obama: Show me flaws in Gaza report», Haaretz, 22 de octubre de 2009.

[44] Stephen Roth Institute for the Study of Contemporary Antisemitism and Racism, Antisemitism Worldwide 2009, 2010, disponible en [https://cst.org.uk/news/blog/2010/04/12/

antisemitism-worldwide-in-2009], pp. 29, 37, 39.

[45] G. Steinberg, «From Dreyfus to Goldstone», Canadian Jewish News, 19 de noviembre de 2009.

[46] «Israel's Jewish Public: Goldstone report biased against IDF», ynetnews.com, 18 de octubre de 2009.

[47] A. Arian et al., Auditing Israeli Democracy: Democratic Values in Practice, Jerusalén, 2010, pp. 88, 133, 173.

[48] Y. Dror, «Why Israel should have cooperated with Goldstone on Gaza», Haaretz, 21 de septiembre de 2009.

[49] U. Avnery, «UM-Shmum, UM-Boom», Gush Shalom, 19 de septiembre de 2009, disponible en [zope.gush-shalom.org/home/en/channels/avnery/1253361627/].

[50] M. Sela, «Amos Oz: Hamas responsible for outbreak of Gaza violence», Haaretz, 30 de diciembre de 2008; D. Grossman, «Is Israel too imprisoned in the familiar ceremony of war?», Haaretz, 30 de diciembre de 2008.

[51] M. Boot, «The Goldstone Report», Commentary blog, «Contentions», 16 de septiembre de 2009; J. Bolton, «Israel, the US and the Goldstone Report», Wall Street Journal, 20 de octubre de 2009.

[52] «Wiesel: If Ahmadinejad were assassinated, I wouldn't shed a tear», Haaretz, 9 de febrero de 2010; «I Wouldn't Cry If He Was Killed», The Jerusalem Post, 9 de febrero de 2010.

[53] A. M. Dershowitz, «Goldstone Investigation undercuts human rights», blog del The Jerusalem Post, «Double Standard Watch», 17 de septiembre de 2009; A. Dershowitz, «Goldstone Criticizes UN Council on Human Rights», The Huffington Post, 22 de octubre de 2009; A. M. Dershowitz, «Goldstone Backs away from Report: The two faces of an international poseur», blog del The Jerusalem Post, «Double Standard Watch», 15 de octubre de 2009; «Dershowitz: Goldstone is a traitor», The Jerusalem Post; J. Nathan-Kazis, «Dershowitz Explains Critical Goldstone Remark», Forward, 3 de

febrero de 2010; T. Barak, «Judge Goldstone's Dark Past», ynet-news.com, 6 de mayo de 2010.

[54] A. Dershowitz, The Case against the Goldstone Report: A Study in Evidentiary Bias, disponible en [https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/3593975/DershowitzGoldstone.pdf?sequence=2&isAllowed=y].

[55] J. Goldberg, «J Street, Down the Rabbit Hole», The Atlantic blog, 30 de septiembre de 2010; J. Muravchik, «Goldstone: An exegesis», World Affairs, mayo-junio de 2010. Muravchik también recurrió a la sorprendente afirmación de que Goldstone nunca les preguntó a los gazatíes testigos de los ataques israelíes «si había un tirador palestino cerca». Véase también B.-H. Lévy, «It's time to stop demonizing Israel», Haaretz, 8 de junio de 2010.

[56] B. Moyers, Journal, cit.

[57] E. Fingerhut, «AIPAC condemns Goldstone Report», Jewish Telegraphic Agency, 17 de septiembre de 2009.

[58] American Jewish Committee, «Letter to Secretary Clinton urges condemnation of Goldstone Report», 23 de septiembre de 2009.

[59] «Rice: "Serious concerns" about the Goldstone Report», Jewish Telegraphic Agency, 17 de septiembre de 2009.

[60] N. Guttman, «Israel, US working to limit damage of Goldstone Report», Haaretz, 27 de septiembre de 2009.

[61] L. Rozen, «State on Goldstone Report: "Deeply concerned"», Politico, 18 de septiembre de 2009; B. Ravid y S. Shamir, «PA pushing for UN to act on Goldstone "War Crime" findings», Haaretz, 1 de octubre de 2009; S. Shamir, «UN Human Rights chief endorses Goldstone Gaza Report», Haaretz, 23 de octubre de 2009.

[62] US Department of State, 2009 Human Rights Report.

[63] House Subcommittee on the Middle East and South Asia, «Ackerman blasts Goldstone Report as "pompous, tendentious, one-sided political diatribe"», 16 de septiembre de 2009.

[64] J. Khoury, «Goldstone tells Obama»; «Goldstone Dares US on Gaza Report», Al Jazeera, 22 de octubre de 2009.

[65] Human Rights Watch, «UN, US, EU undermine justice for Gaza conflict», 1 de octubre de 2009.

[66] «H. R ES. 867, 111th Congress», 23 de octubre de 2009; N. Mozgovaya y B. Ravid, «US House backs resolution to condemn Goldstone Gaza Report», Haaretz, 5 de noviembre de 2009; N. Shirazi, «Goldstonewalled! US Congress endorses Israeli war crimes», MRzine, 12 de noviembre de 2009.

[67] «Goldstone sends letter to Berman, Ros-Lehtinen correcting factual errors in HR 867, which opposes UN Fact Finding Report on Gaza», uruknet.info, 29 de octubre de 2009. Después de que Goldstone presentara su refutación, uno de los promotores de la resolución le hizo agunos cambios superficiales. S. Ackerman, «Berman Puts New Language into Anti-Goldstone Resolution», washingtonindependent.com, 3 de noviembre de 2009. El grupo lobista judío liberal J. Street pidió «una resolución mejor, más equilibrada», que la Cámara redactó, pero una que aún «apremiara a Estados Unidos a dejar claro que usaría su veto para prevenir cualquier remisión de este asunto al Tribunal Penal Internacional». «J Street Position on H. Res. 867», 30 de octubre de 2009.

[68] Un funcionario del gobierno afirmó inicialmente off the record que Estados Unidos vetaría la actuación de la ONU sobre el Informe, pero la Casa Blanca, posteriormente, negó esa declaración. «US pledges to quash Goldstone recommendations», The Jewish Telegraphic Agency, 22 de septiembre de 2009; «White House: Official "misspoke" on Goldstone report», The Jewish Telegraphic Agency, 23 de septiembre de 2009. No obstante, se descubrió más tarde que Washington había estado presionando sigilosamente para contener los efectos del Informe. J. Flanery y B. Norton, «Deferring justice: Clinton emails show how State Dept. undermined UN action on Israeli war crimes», Salon, 19 de noviembre de 2015.

[69] H. Clinton, «How I would reaffirm unbreakable bond with Israel-and Benjamin Netanyahu», Forward, 4 de noviembre de 2015.

[70] A. Harel y A. Issacharoff, «Israel demands PA drop war Crimes

suit at The Hague», Haaretz, 27 de septiembre de 2009.

[71] H. Schneider y C. Mynch, «UN Comité defers vote on Gaza Report», The Washington Post, 3 de octubre de 2009; A. Hass, «PA move to thwart Goldstone Gaza Report shocks Palestinian public», Haaretz, 4 de octubre de 2009.

[72] «The Human Rights Situation in the Occupied Palestinian Territory, Including East Jerusalem», A/HRC/R ES/S-12/1, 16 de octubre de 2009. Los críticos con Goldstone informaron con alegría de que se oponía a la resolución del Consejo. El rumor era una verdad a medias y una completa mentira. Goldstone no aprobaba la redacción de la primera versión, pero esta se modificó después de que expresara sus reservas y él aprobó la segunda versión que se sometió a voto. B. Moyers, Journal, cit.

[73] United Nations General Assembly, «Follow-up to the Report of the United Nations Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict», A/64/L.11, 2 de noviembre de 2009; S. Shamir, «UN General Assembly Adopts Goldstone Report», Haaretz, 6 de noviembre de 2009.

[74] S. Shamir, «Israel: UN “detached from reality” for adopting Goldstone report», Haaretz, 6 de noviembre de 2009; «FM: UNGA vote shows Israel has moral majority», The Jerusalem Post, 6 de noviembre de 2009.

[75] United Nations General Assembly, Follow-Up to the Report of the United Nations Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict: Report of the Secretary-General, A/64/651, 4 de febrero de 2010.

[76] United Nations General Assembly, «Follow-Up to the Report of the United Nations Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict, II», A/64/L.48, 23 de febrero de 2010. El bajo número de votos se debe probablemente a que ese día hubo un enorme temporal de nieve.

[77] «European Parliament Resolution of 10 March 2010 on Implementation of the Goldstone Recommendations on Israel/ Palestine», P7_TAPROV(2010)0054; L. Phillips, «Despite Heavy Lobbying, EU Parliament Endorses Goldstone Report», euobserver.com, 10 de marzo de 2010, disponible en

[euobserver.com/9/29650]; «EU Parliament backs Goldstone Report», The Jerusalem Post, 10 de marzo de 2010.

[78] State of Israel, Gaza Operation Investigations: An Update, cit., enero de 2010; State of Israel, Gaza Operation Investigations: Second update, cit., julio de 2010.

[79] State of Israel, Gaza Operation Investigations: An update, cit., §§ 100, 108, 137; State of Israel, Gaza Operation Investigations: Second update, §§ 10, 11, 37, 46, 60, 73, 74, 94, 102.

[80] A. Harel, «MESS Report: Gaza war probes are changing Israel's defiant ways», Haaretz, 22 de julio de 2010.

[81] State of Israel, Gaza Operation Investigations: Second update, cit., § 105.

[82] State of Israel, Gaza Operation Investigations: Second update, cit., §§ 150-156.

[83] «Israel is being evasive again», Haaretz, 1 de febrero de 2010; «Thanks to the critics», Haaretz, 27 de julio de 2010.

[84] Amnesty International, «Latest Israeli response to Gaza investigations totally inadequate», 2 de febrero de 2010; Human Rights Watch, «Military investigations fail Gaza War victims», 7 de febrero de 2010; Human Rights Watch, «Wartime inquiries fall short», 10 de agosto de 2010.

[85] UN News Service, «UN Rights Chief unveils members of Independent Probe into Gaza Conflict», 14 de junio de 2010.

[86] Report of the Committee of The Independent Experts in International Humanitarian and Human Rights Laws to Monitor and Assess Any Domestic, Legal or Other Proceedings Undertaken by Both the Government of Israel and the Palestinian Side, in the Light of General Assembly Resolution 64/254, Including the Independence, Effectiveness, Genuineness of These Investigations and Their Conformity with International Standards, 21 de septiembre de 2010.

[87] Report of the Committee, cit., §§ 42, 55.

[88] Report of the Committee, cit.

[89] Report of the Committee, cit. El comité informó de que Israel había condenado a un soldado por el delito de saqueo, mientras que una submisión de Hamás les dio «ejemplos de procesos penales […] incluyendo un caso en el que una serie de acusados fueron condenados y encarcelados».

[90] Amnesty International, «Time for International Justice Solution for Gaza Conflict Victims», 23 de septiembre de 2010.

[91] Intelligence and Terrorism Information Center, Hamas and the Terrorist Threat from the Gaza Strip: The main findings of the Goldstone Report versus the factual findings, 2010.

[92] Intelligence and Terrorism Information Center, Hamas and the Terrorist Threat, cit., p. 69.

[93] Intelligence and Terrorism Information Center, Hamas and the Terrorist Threat, cit., pp. IV, 8, 73, 80. Mientras que una primera publicación del ITIC informaba de que Hamás «procuraba mantener el alto el fuego» y buscaba «respaldar los términos del acuerdo con el resto de organizaciones terroristas», véase cap. II, esta nueva publicación alegaba que el alto el fuego «era repetida y sistemáticamente violado por Hamás» y que Hamás «no hacía esfuerzos eficaces para imponer el cese» sobre el resto de «organizaciones terroristas». Aun así, los propios grafos de la nueva publicación muestran que en octubre de 2008 solamente se disparó un misil y un mortero sobre Israel y conceden que «los primeros cinco meses de la tregua fueron relativamente tranquilos». Intelligence and Terrorism Information Center, Hamas and the Terrorist Threat, cit., pp. 74, 79.

[94] Intelligence and Terrorism Information Center, Hamas and the Terrorist Threat, cit., p. IV.

[95] Intelligence and Terrorism Information Center, Hamas and the Terrorist Threat, cit., pp. 3, 35; pero véase Goldstone Report, cit. §§ 1345-1372.

[96] Intelligence and Terrorism Information Center, Hamas and the

Terrorist Threat, cit., pp. 95, 97, pero véase Goldstone Report, cit., §§ 1604-1606, 1610-1636, 1647-1674, 1682-1691; el Informe afirma que «el impacto sobre las comunidades [de Israel] es mayor que el número de muertos y heridos que realmente soportan».

[97] Intelligence and Terrorism Information Center, Hamas and the Terrorist Threat, cit., pp. VIII, 57, pero véase Informe Goldstone, cit., §§ 1687-1691. La publicación del ITIC también culpaba al Informe por referirse a «los grupos armados palestinos» en lugar de implicar directamente a Hamás, pero el Informe se refiere también, recíprocamente a «las fuerzas armadas israelíes».

[98] Intelligence and Terrorism Information Center, Hamas and the Terrorist Threat, cit., p. 120, pero véase Informe Goldstone, cit., §§ 475-498.

[99] Intelligence and Terrorism Information Center, Hamas and the Terrorist Threat, cit., pp. 315, 321-322, pero véase Informe Goldstone, cit., §§ 352-363. La publicación del ITIC también se recreaba en la especulación sin fundamento de que las familias palestinas buscaban «una compensación monetaria» y que podrían haber hecho pasar muertes «por causas naturales» por muertes relacionadas con la invasión. Intelligence and Terrorism Information Center, Hamas and the Terrorist Threat, cit., p. 322.

[100] Intelligence and Terrorism Information Center, Hamas and the Terrorist Threat, cit., p. 318, pero véase Informe Goldstone, cit., § 144: mientras que Israel se negó a cooperar con la Misión Goldstone, «miembros relevantes de las autoridades de Gaza […] prestaron todo su apoyo y cooperación con la Misión».

[101] Intelligence and Terrorism Information Center, Hamas and the Terrorist Threat, cit., p. 196.

[102] G. Hoffman y H. R. Gur, «Oron Calls»; E. Haber, «In wake of Goldstone Report, Israel must launch battle for its image», ynetnews.com, 17 de septiembre de 2009.

[103] R. Falk, «The Goldstone Report: Ordinary text, extraordinary event», Global Governance 16, 2010, p. 173. Un miembro de la Misión Goldstone calculó «unas 300» investigaciones en defensa de

los derechos humanos sobre la Operación Plomo Fundido, que mostraban «una unanimidad notable en sus hallazgos en contra de las acciones de las IDF». D. Travers, «Operation Cast Lead: Legal and doctrinal asymmetries in a military operation», Irish Defense Forces, An Cosantóir, 2010, p. 10. Algunos críticos defendieron que el Informe era más «agresivo» que el resto. E. Bronner, «Israel poised to challenge a UN Report on Gaza», The New York Times, 23 de enero de 2010. Pero esa afirmación no resistía un examen detallado. En aspectos clave el Informe realmente se situaba entre los más cautos y conservadores. Mientras que HRW explícitamente señalaba el uso del fósforo blanco por parte de Israel en las zonas civiles como un «crimen de guerra», el Informe no lo hacía; mientras que el Informe Dugard concluía que había «soldados individuales» que podrían ser culpables de genocidio, el Informe no lo hacía; y mientras que Amnistía recomendaba un embargo completo de armas a Israel y Hamás, el Informe no lo hacía.

[104] B. Moyers, Journal, cit.; The Forward y C. Braude, «Will Goldstone's Gaza Report prove him just a naïve idealist?», Haaretz, 23 de septiembre de 2009; «"My father is a Zionist, loves Israel"», The Jerusalem Post, 16 de septiembre de 2009; «Goldstone's daughter: my father's participation softened UN Gaza report», Haaretz, 16 de septiembre de 2009; «Tikkun Interview with Judge Richard Goldstone», 2 de octubre de 2009.

[105] A. Pfeffer, «Goldstone: Holocaust shaped view on war crimes», Haaretz, 18 de septiembre de 2009.

[106] G. Levy, «Disgrace», cit.

[107] N. Guttman, «Israel, US Working»; Y. Katz, «Mandelblit: Israel right not to cooperate with Goldstone», The Jerusalem Post, 16 de septiembre de 2009; H. Keinon y T. Lazaroff, «"UNHRC Vote May Affect Moscow Parley"», The Jerusalem Post, 19 de octubre de 2009; R. Sofer, «Minister Edelstein: Goldstone report anti-Semitic», ynetnews.com, 25 de enero de 2010; «UK Officer Slams "Pavlovian" criticism of IDF after Gaza War», Haaretz, 22 de febrero de 2010.

[108] A. Mizroch, «Grappling with Goldstone», The Jerusalem Post, 18 de septiembre de 2009; A. Mizroch, «What South African Jews think of Richard Goldstone», The Jerusalem Post, 1 de octubre de

2009; R. W. Johnson, «Who is Richard Goldstone?», Radio Free Europe / Radio Liberty, 20 de octubre de 2009; A. Rindsberg, «UN's Goldstone Sent 13-Year-Old Boy to Prison for Protesting Apartheid», The Huffington Post, 19 de noviembre de 2009; Dershowitz, «Goldstone Investigation».

[109] R. Goldstone, «Justice in Gaza», The New York Times, 17 de septiembre de 2009; R. Goldstone, «Who's being unfair?», The Jerusalem Post, 21 de septiembre de 2009; G. Beckerman, «Goldstone: "If this was a court of law, there would have been nothing proven"», Forward, 16 de octubre de 2009; «Tikkun Interview with Judge Richard Goldstone».

[110] H. Evans, «A moral atrocity», The Guardian, 20 de octubre de 2009.

[111] B. Moyers, Journal, cit.

[112] A. Benn, «In wake of UN Gaza probe, how can Israel go to war again?», Haaretz, 16 de septiembre de 2009; Ari Shavit, «Watch out for the Goldstoners», Haaretz, 8 de octubre de 2009. Véase también G. Levy, «Peres, not Goldstone, is the small man», Haaretz, 15 de noviembre de 2009; y Reut Institute, Building a Political Firewall Against Israel's Delegitimization, Tel Aviv, 2010, §§ 40, 106.

[113] «PM: Israel faces the "Goldstone threat"», The Jerusalem Post, 23 de diciembre de 2009.

[114] B. Ravid y A. Pfeffer, «Israel seeks Obama backing on Gaza Probe», Haaretz, 26 de septiembre de 2009.

[115] Y. Feldman, «ICC may try IDF officer in wake of Goldstone Gaza Report», Haaretz, 24 de septiembre de 2009; R. Ahren, «Israeli soldiers from South Africa Feel heat of prosecution drive in old country», Haaretz, 22 de noviembre de 2009.

[116] «Livni reportedly cancels UK visit, dearing arrest», Haaretz, 16 de diciembre de 2009; D. Harman, «Belgian lawyers to charge Barak and Livni for war crimes», Haaretz, 23 de junio de 2010. Para un eco posterior de estos episodios, véase B. Ravid, «In

unprecedented move, British Police summoned Tzipi Livni over suspected Gaza war crimes», Haaretz, 3 de julio de 2016; e Y. J. Bob, «Scotland Yard summons Livni for Cast Lead war crimes questioning», The Jerusalem Post, 3 de julio de 2016.

[117] L. Derfner, «Yasher Koah, Judge Goldstone», The Jerusalem Post, 22 de abril de 2010. Para justificar este intento abortado de ostracismo, el presidente de la South African Zionist Federation reprochó a Goldstone no «haber exigido a Hamás la liberación incondicional de Gilad Shalit» o al menos «exigir que se reconociera su estatus como prisionero de guerra». Pero el Informe sí «recomendaba que los grupos armados palestinos que retienen al soldado israelí Gilad Shalit lo liberen por motivos humanitarios. Mientras se produce dicha liberación deberían reconocer su estatus como prisionero de guerra, tratarlo de manera acorde y permitir las visitas de la ICRC». Irónicamente, Israel criticó la recomendación del Informe de que Shalit fuera considerado un prisionero de guerra. «Opening Statement by Avrom Krengel, Chairman of the SAfr Zionist Fed, delivered at meeting with Judge Richard Goldstone», 4 de mayo de 2010; Informe Goldstone, cit., § 1973(b); Intelligence and Terrorism Information Center, Hamas and the Terrorist Threat, p. 66, n. 49.

[118] T. Gross, «Goldstone's death sentences for blacks: Just following orders», Mideast Dispatch Archive, 10 de mayo de 2010; M. J. Rosenberg, «The "Get Goldstone" campaign», MEDIAMATTERS Action Network, 10 de mayo de 2010.

[119] A. Dershowitz, «Legitimating bigotry: The legacy of Richard Goldstone», Hudson New York, 7 de mayo de 2010; véase también I. Evyatar y D. Horowitz, «"We are not done with Goldstone"», The Jerusalem Post, 21 de mayo de 2010, donde Dershowitz le llamaba un «oportunista» que le recordaba a «criminales de guerra nazis […] muchos de los cuales eran jueces».

[120] S. Polakow-Suransky, «Gold stones, glass houses», Foreign Policy, 10 de mayo de 2010.

[121] S. Polakow-Suransky, The Unspoken Alliance: Israel's Secret Relationship with Apartheid South Africa, Nueva York, 2010, pp. 80, 92.

[122] A. Selig, «Goldstone stripped of honorary Hebrew U governorship», The Jerusalem Post, 5 de junio de 2010.

[123] E. B. Solomont, «Attorney seeks to bar Goldstone from US», The Jerusalem Post, 14 de mayo de 2010; N. Cattan, «Restitution leader disbarred by Court after investigation of job misconduct», Forward, 5 de septiembre de 2003.

[124] N. G. Finkelstein, Knowing Too Much, pp. 5-89.

[125] Informe Goldstone, cit., § 1193. Una nota a pie de página incluía esta advertencia: «La referencia aquí a operaciones relativamente focalizadas no debe malinterpretarse como una indicación de que todas esas acciones fueran aceptables en términos de distinción y proporcionalidad. Es meramente una referencia comparativa».

[126] Jewish People Policy Planning Institute, Annual Assessment 2008, Jerusalén, 2008, p. 33.

[127] D. Levy, «Israel must now heal itself», The Guardian, 18 de septiembre de 2009.

[128] R. Carey, «The Goldstone Report on Gaza», blog de The Nation, «The Notion», 25 de septiembre de 2009. Se puede encontrar de vez en cuando alguna palabra crítica hacia Israel y de apoyo a Goldstone. Véase J. Carroll, «A time of reckoning», Boston Globe, 21 de septiembre de 2009. Aunque no era judío, Carroll solía escribir sobre temas judíos desde una perspectiva filosemítica.

[129] Rabbi B. Rosen, «Alan Dershowitz and the politics of desperation», The Huffington Post, 28 de mayo de 2010.

[130] A. Benn, «In wake of UN Gaza probe», cit.

[131] A. Harel, «IDF vs. Goldstone: PR "commando" explains war against Hamas to Americans», Haaretz, 13 de noviembre de 2009.

[132] A. Lerman, «Judge Goldstone and the pollution of argument», The Guardian, 15 de septiembre de 2009. Lerman había sido director del Institute for Jewish Policy Research de Londres.

[133] Entre otros, las abogadas de izquierda israelíes Felicia Langer y Lea Tsemel y el profesor de Química de la Universidad Hebrea Israel Shahak.

[134] Amnesty International, Combating Torture, Londres, 2003, sección 2.2. B. Morris, Righteous Victims, cit., pp. 341-343, 568, 587, 600-601; T. Segev, 1967: Israel, the War, and the Year that Transformed the Middle East, Nueva York, 2007, pp. 475, 517.

[135] En su «1979 Report and Recommendations […] to the Government of the State of Israel», 1980, Amnistía se limitaba a decir que «hay suficientes pruebas prima facie del maltrato por parte de seguridad a los sospechosos de los Territorios Ocupados […] como para justificar que se haga una investigación pública»; mientras que en su influyente estudio Torture in the Eighties, Londres, 1984, Amnistía señalaba con precaución que «seguía recibiendo informes de maltrato» en las cárceles israelíes de «palestinos de los territorios ocupados detenidos por razones de seguridad», pp. 233-234.

[136] N. G. Finkelstein, Beyond Chutzpah: On the Misuse of Anti-Semitism and the Abuse of History, edición de bolsillo aumentada, Berkeley, 2008, II parte.

[137] C. McGreal, «Israel "personally attacking human rights group" after Gaza war criticism», The Guardian, 13 de noviembre de 2009.

[138] A. Horowitz y P. Weiss, «Israel vs. Human Rights», The Nation, 30 de septiembre de 2009.

[139] NGO Monitor / Institute for Zionist Strategies, Trojan Horse: The Impact of European Government Funding for Israeli NGOs, 2009.

[140] J. Mitnick, «Rights Groups under fire for scrutiny of Israel's conduct of Gaza War», Christian Science Monitor, 3 de febrero de 2010; D. Izenberg, «Cabinet backs bill to register NGOs funded by foreign States», The Jerusalem Post, 15 de febrero de 2010; D. Macintyre, «The new McCarthyism sweeping Israel», The Independent, 13 de febrero de 2010; A. Selig, «"Goldstone Report

was our smoking gun”», The Jerusalem Post, 18 de febrero de 2010.

[141] A. Arian et al., Auditing Israeli Democracy: Democratic Values in Practice, Jerusalén, 2010, p. 128; N. Jeffrey, «Kadima Bill: NGOs that assist in war crime accusations should be illegal», Forward, 12 de mayo de 2010.

[142] B’Tselem, Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories, Human Rights Review, 1 de enero de 2009-30 de abril de 2010, pp. 5-7, 11-12.

[143] B. Plett, «Legal Row over Gaza Report Intensifies», BBC News, 6 de noviembre de 2009.

[144] G. Steinberg, «Isolating Israel through Language of Human Rights», The Jerusalem Post, 30 de agosto de 2009.

[145] 27 de abril de 2010, disponible en [http://www.intjewishlawyers.org/site/].

[146] 11 de marzo de 2010, disponible en [https://www.nycla.org/].

[147] P. Berkowitz, «The Goldstone Report and International Law», Policy Review, agosto-septiembre de 2010.

[148] «NGO Monitor’s International Advisory Board Calls for Review of HRW», ngo-monitor.org, 14 de octubre de 2009; «Wiesel, Dershowitz: Human Rights Watch reform needed», ynetnews.com, 29 de septiembre de 2009; NGO Monitor, Experts or Ideologues? A Systematic Analysis of Human Rights Watch’s Focus on Israel, 2009.

[149] C. McGreal, «Israel “Personally Attacking”», cit.

[150] R. L. Bernstein, «Rights Watchdog, Lost in the Mideast», The New York Times, 20 de octubre de 2009. Para la respuesta de Human Rights Watch, véase K. Roth, «Human Rights Watch Applies Same Standards to Israel, Hamas», Haaretz, 27 de octubre de 2009; véase también S. MacLeod, «Bashing Human Rights Watch», Los Angeles Times, 30 de octubre de 2009. Para Kemp, véase cap. IV.

[151] B. Birnbaum, «Human Rights Watch Fights a Civil War over

Israel», New Republic, 27 de abril de 2010.

[152] Human Rights Watch, World Report 2010, cit., 2010, p. 511.

[153] Human Rights Watch, «Jordan: Restaurant owner ousts Israelis», 7 de diciembre de 2010.

[154] State of Israel, Gaza Operation Investigations: Second update, cit., §§ 146-157.

[155] «Thanks to the Critics», Haaretz, 27 de julio de 2010.

[156] «Q & A with Israeli Defense Minister Ehud Barak», Washington Post, 26 de julio de 2010.

[157] United Nations General Assembly, Second Follow-Up to the Report of the United Nations Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict: Report of the Secretary-General, A/64/890, 11 de agosto de 2010.

[158] C. Wegman, «Israel Picks Gaza War Commander as New Military Chief», Agence France-Presse, 5 de septiembre de 2010.

[159] A/HRC/15/L.34.

[160] «Human Rights Council takes up Human Rights situation in Palestine and other occupied Arab territories», press release, 27 de septiembre de 2010.

[161] J. Malsin, «Whither Goldstone? Did the PA kill the UN's Goldstone report?», Foreign Policy, 27 de octubre de 2010; Amnesty International, «Human Rights Council fails victims of Gaza Conflict», 30 de septiembre de 2010.

[162] A. Gefen, «Are We Hiding Something?», ynetnews.com, 8 de febrero de 2010.

VI. EL TESTIGO ESTRELLA SE RETRACTA

El 1 de abril de 2011 a Israel se le pasó su mayor dolor de cabeza. Arrojando una bomba desde la página de opinión de The Washington Post[1], Richard Goldstone renegó efectivamente del devastador informe de la ONU sobre los crímenes israelíes que llevaba su nombre[2]. Israel estaba eufórico. «Todo lo que dijimos se demuestra cierto», presumía el primer ministro, Benjamin Netanyahu. «Siempre dijimos que las IDF son un ejército moral que actúa de acuerdo con el derecho internacional», declaraba el ministro de Defensa, Ehud Barak. «No teníamos ninguna duda de que la verdad saldría a la luz algún día», proclamaba el ministro de Exteriores, Avigdor Lieberman[3]. El gobierno de Obama aprovechó la oportunidad de la retractación de Goldstone para reiterar que Israel no había «cometido ningún crimen de guerra» durante la Operación Plomo Fundido, mientras que el Senado estadounidense, por unanimidad, pidió a las Naciones Unidas que «rescindiera» el Informe Goldstone[4]. En resumen, la retractación de Goldstone fue un día aciago para los derechos humanos y un día señalado en tinta roja para sus transgresores. La fuerza había doblegado, una vez más, a la razón. Aquellos que aún tenían esperanzas examinaban las palabras de Goldstone para demostrar que en realidad no se había retractado[5]. Mientras que técnicamente podría ser cierto, una estrategia retórica así no colaba. Goldstone era un destacado jurista. Sabía cómo moldear el lenguaje de manera precisa. Si no hubiera querido repudiar el Informe, este escultor de palabras podría simplemente haber escrito: «No estoy rechazando mi informe original, que aún defiendo». Pero no dijo eso ni nada parecido. Era perfectamente consciente de cómo se entendería su intervención y su legado sería esta predecible consecuencia, no sus palabras analizadas. El hecho ineludible fue que asesinó su Informe y que, simultáneamente, se despidió de su carrera.

De un plumazo, Goldstone causó un daño irreparable a la causa de la verdad y la justicia y al imperio de la ley. A pesar del paso del tiempo, su golpe a la esperanza aún duele mientras escribo estas líneas. Envenenó las relaciones judío palestinas, minó la obra

valiente de los opositores israelíes y «lo más imperdonable, aumentó el riesgo de otro ataque sin piedad de las IDF»[6]. No pasaría mucho tiempo antes de que Israel confirmara esta predicción. Hubo muchas especulaciones acerca de por qué Goldstone se retractó. ¿Lo chantajeaban? ¿Sucumbió finalmente a la incesante campaña de odio que lo atacaba? ¿Decidió poner a su tribu por delante de la verdad? Son preguntas que siguen hoy abiertas. Lo que sí se puede decir con seguridad es que las justificaciones que aportaba no responden de su decisión de echarse atrás. El meollo de la retractación de Goldstone era que Israel no había cometido crímenes de guerra durante la Operación Plomo Fundido y que era totalmente capaz de investigar por su cuenta las violaciones del derecho internacional que hubieran podido ocurrir. El pasaje decisivo decía:

Nuestro Informe encontró pruebas de potenciales crímenes de guerra y de «posibles crímenes contra la humanidad», tanto por parte de Israel como de Hamás […]. Las alegaciones de intencionalidad por parte de Israel se basaban en las muertes y heridas a civiles en situaciones donde nuestra misión de investigación no tenía pruebas con las que sacar otras conclusiones razonables. […] Las investigaciones publicadas por el ejército israelí […] indican que los civiles no fueron atacados intencionadamente como parte de una política.

No queda claro cómo interpretar este mea culpa. Si estaba diciendo que Israel no atacó sistemáticamente a la población civil de Gaza para matarla, su retractación era gratuita. El Informe nunca manejó y mucho menos planteó esa acusación, que hubiera sido equivalente a acusar a Israel de genocidio. Basándose en un enorme volumen de pruebas, el Informe acusaba a Israel de desplegar deliberadamente una fuerza desproporcionada e indiscriminada para «castigar, humillar y aterrorizar a una población civil»[7]. En su retractación, Goldstone no hacía excepción de las pruebas que en el Informe sustentaban esta acusación. De hecho, ¿como podría hacerlo? Altos funcionarios israelíes, analistas informados y combatientes no se quedaron cortos reconociendo –de hecho, la mayor parte de las

veces se jactaban de ello– que las IDF habían arrojado cantidades «insanas» de munición, habían «enloquecido», habían demostrado un «auténtico vandalismo», se habían comportado como «perros rabiosos», actuado como «lunáticos» y «locos» y «habían destruido todo lo que se les ponía por delante» durante la Operación Plomo Fundido[8]. En resumen, o Goldstone desmentía lo que no había afirmado en primer lugar, o desmentía una conclusión clave de su Informe, pero no discutía, ni podía hacerlo, el montón de pruebas según las cuales había alcanzado esa conclusión.

Aun así, si, como Goldstone afirmaba, el uso deliberado e indiscriminado de la potencia de fuego israelí no apuntaba «intencionadamente» a los civiles, ¿difería eso cualitativamente, como él mismo sugería más tarde, de un ataque deliberado sobre civiles, y no acababa siendo igualmente un crimen de guerra? Una premisa del derecho es que «debe suponerse que el ejecutor de un acto ha buscado sus consecuencias naturales y predecibles»[9]. Si un ataque indiscriminado y deliberado resulta inevitable y predeciblemente en la muerte y heridas de civiles, entonces no se distingue legalmente de un ataque deliberado hacia ellos. «No hay una diferencia real entre un ataque premeditado contra civiles [...] y un desinterés imprudente del principio de distinción»[10], según Yoram Dinstein, la mayor autoridad israelí en derecho internacional; «ambas están igualmente prohibidas»[11]. Si Goldstone argumentaba que la potencia de fuego «demencial» de Israel durante la Operación Plomo Fundido no constituía un crimen de guerra porque no atacaba intencionadamente a civiles, y que no era un comportamiento criminal en un ejército invasor el volverse «loco», demostrar «auténtico vandalismo», comportarse como «perros rabiosos», actuar como «lunáticos» y «locos», y «destruir todo lo que se les ponía por delante», si realmente creía esto, entonces tendría que repasar sus libros de derecho; de hecho, no debía seguir ejerciendo. Un ataque indiscriminado y desproporcionado sobre zonas civiles es en sí mismo un crimen de guerra y no menos criminal que un ataque deliberadamente escogido.

Para absolver a Israel de su culpabilidad, Goldstone repasaba el incidente más infame durante la Operación Plomo Fundido, en el que al menos 21 miembros de la familia Al-Samouni fallecieron. El

Informe Goldstone afirmaba que Israel había lanzado «un ataque deliberado sobre civiles»[12]. En su retractación, no obstante, Goldstone aceptaba las historias publicadas en los medios de comunicación procedentes de una «investigación» israelí que atribuía las muertes a un error en la imagen de un dron. Resulta que Goldstone había también hablado de esa «investigación» israelí tan solo dos meses antes, en la Universidad de Stanford[13]. Además, tanto Amnistía Internacional[14] como un comité de la ONU al que el mismo Goldstone cita con aprobación[15] también presentaron descubrimientos actualizados sobre el incidente. El cuadro 2 yuxtapone estos diversos testimonios; las omisiones clave de Goldstone en su retractación se señalan en cursiva. En su retractación, Goldstone cortó todas las pruebas que arrojaban dudas sobre la nueva coartada israelí. Mientras que en Standford presentó sensatamente los argumentos de ambos bandos y suspendió su juicio, solamente dos meses más tarde ponía toda su fe en informes de segunda mano de una «investigación» israelí que ni siquiera había terminado. Aún más, tanto Amnistía como el comité de la ONU pusieron en duda la plausibilidad de esta nueva coartada israelí. La tendenciosa descripción que hace Goldstone de los hechos en su retractación podría haber sido adecuada si hubiera sido el abogado defensor de Israel, pero no encaja en el director de una misión a la que se le había encargado averiguar la verdad.

Cuadro 2. El incidente Al-Samouni: Goldstone v. Goldstone, Amnistía y la Junta de expertos de la ONU

▪

Retractación (abr[illegible] 2011) [illegible] de la ONU (ma[illegible]

«El ataque más g[illegible]

▪

Goldstone justificaba su giro en que «hoy sabemos mucho más». Sí era cierto que después de la publicación de su Informe se había hecho pública más información sobre la Operación Plomo Fundido. Pero la mayor parte de esta sustentaba e incluso ampliaba los hallazgos del Informe. Veamos estos ejemplos. Un nuevo contingente de soldados israelíes negando la propaganda oficial dio un paso al frente. Un oficial que había servido en el cuartel general de una brigada recordaba que la política de las IDF se reducía a garantizar «literalmente un riesgo cero para los soldados», mientras que un combatiente recordaba una reunión con el comandante de su brigada, donde se les transmitió: «Ante cualquier señal de movimiento, disparad. Estas son esencialmente las normas de combate»[16]. Aunque Goldstone podría haber citado estos nuevos testimonios para apuntalar su Informe, optó, en cambio, por ignorarlos. En 2010, HRW publicó un estudio basado en las imágenes de satélite que documentaban numerosos casos «en los cuales las fuerzas israelíes causaban amplia destrucción de casas, granjas e invernaderos en zonas bajo el control de las IDF, sin ningún fin militar evidente. Estos casos ocurrieron cuando no había enfrentamientos en esas zonas; en muchos de ellos, la destrucción se efectuó durante los últimos días de la campaña, cuando la retirada de Israel era inminente»[17]. Aunque Goldstone podría haber citado este nuevo estudio para apuntalar su Informe, eligió, en lugar de ello, ignorarlo. Si él evitaba escrupulosamente todas las nuevas pruebas que confirmaban los hallazgos del Informe, es difícil no llegar a la conclusión de que la invocación de Goldstone a «mucha más» información estaba teñida de partidismo. También dice mucho que en cuanto nuevas pruebas aparecían para confirmar las conclusiones del Informe Goldstone, los renovados intentos de Israel de refutar estas conclusiones fracasaban reiteradamente. Después de la publicación del Informe, Israel respondió con una batería de negaciones. La más voluminosa fue una compilación de 350 páginas, Hamas and the Terrorist Threat from the Gaza Strip, recogida por The Israeli Intelligence and Terrorism Information Center. Pero, cuando se inspeccionaba, resultaba ser una mezcla de interpretaciones dudosas, falsedades evidentes y directamente mentiras[18]. Si la refutación más ambiciosa del Informe por parte de Israel era tan insustancial, ¿cómo se las apañó Goldstone para

desenterrar «mucha más» información nueva, que minaba mortalmente el Informe? ¿Cómo consiguió invalidar un documento crítico con Israel que, a pesar de sus muchos intentos, Israel mismo no había podido invalidar?

De hecho, la información adicional que Goldstone publicitaba no era exactamente impresionante. Señalaba a los resultados de las investigaciones militares israelíes. Pero ¿qué «sabemos hoy» sobre estas audiencias de cámara rodeadas de secretismo, excepto lo que Israel ha revelado sobre ellas? Israel no proporcionó apenas información con la que valorar de manera independiente las pruebas presentadas o la justicia de los procesos. No se sabe cuántas de ellas se completaron y cuántas siguen abiertas[19]. Incluso cuando su resultado eran acusaciones penales, las investigaciones a menudo resultaban inaccesibles para el público (aparte de los abogados de los soldados acusados) y las transcripciones completas después no se pusieron a disposición del público[20]. La pieza maestra de la reveladora nueva información de Goldstone era la imagen procedente del dron en el caso Al-Samouni. Una lectura érronea de esa imagen, alegaba Israel (y Goldstone en principio estaba de acuerdo), había provocado que un oficial apuntara erróneamente a una familia extensa de civiles. Si, como declararon las organizaciones humanitarias y de defensa de los derechos humanos justo después del ataque, fue uno de los incidentes más «graves» y más escandalosos durante la Operación Plomo Fundido[21], y si, como el propio Goldstone había afirmado, el ataque era «el incidente aislado más grave» que su Informe documentaba, entonces, ¿por qué Israel no se apresuró a restaurar su dañada reputación, sino que, en lugar de ello, dejó pasar 22 meses antes de presentar una explicación tan sencilla? Para defenderse de los hallazgos de Goldstone, Israel repartió numerosas fotografías aéreas tomadas durante la Operación Plomo Fundido. ¿Por qué, entonces, Israel no publicó esa imagen de un dron que supuestamente la exoneraba de responsabilidad criminal en el incidente más importante que se le achacaba? También causó perplejidad por qué Goldstone dio por buena esa «prueba» israelí sin haberla visto y, en cambio, ignoró otras pruebas nuevas creíbles y muy pertinentes. Después de la publicación de su Informe, la periodista Amira Hass reveló en las páginas de Haaretz que «soldados de la Givati establecieron puestos de vigilancia y bases en

al menos seis casas de la urbanización de los Samouni» antes del ataque[22]. ¿Acaso el comandante de la Givati que ordenó el asalto aéreo comprobó con sus soldados sobre el terreno antes de desatar el fuego mortal, para asegurarse de que no había peligro? ¿No pidió confirmar la borrosa imagen del dron de unos hombres aparentemente portando lanzaderas de misiles, y no le corrigieron? Pero Goldstone no se molestó siquiera en plantearse esas preguntas obvias, porque «hoy […] sabemos» que fue simplemente un error. Después de la publicación del Informe Goldstone, las autoridades israelíes tenían una explicación lista, si bien no apoyada por pruebas, para muchos de los otros crímenes de guerra documentados. Adujeron que el molino de harina de Al-Bader se destruyó «para neutralizar amenazas inmediatas a las fuerzas de las IDF»[23]; que la granja de pollos Sawafeary se había destruido «por razones de necesidad militar»[24]; y que la mezquita Al-Maqadmah fue atacada porque «dos operativos terroristas estaban cerca de su entrada»[25]. ¿Eran falsas todas las abrumadoras pruebas de los delitos que recogía el informe, suplementadas por miles de páginas de otros informes de defensa de los derechos humanos, porque así lo decía Israel? Cuando se acusó a Israel de arrojar fósforo blanco sobre zonas civiles durante la Operación Plomo Fundido, ¿acaso no «supimos» que no había ocurrido porque Israel lo negó categóricamente?

La única prueba nueva que Goldstone aporta en su retractación es una cifra de bajas que había aportado tardíamente un funcionario de Hamás. Sobre la base de esta cifra de muertos revisada, observaba Goldstone, el número de los combatientes caídos durante la Operación Plomo Fundido «resultaba ser similar» a la cifra oficial israelí. La buena noticia era que la cifra de Hamás parecía confirmar la afirmación israelí de que la mayoría de los asesinados en Gaza eran combatientes y no civiles. Pero entonces Goldstone añade entre paréntesis que Hamás «pudiera tener sus razones para inflar esa cifra». De hecho, hay razones firmes para dudar de la autenticidad de esa nueva cifra. Para demostrar que había derrotado a Israel en el campo de batalla, Hamás empezó por afirmar que únicamente habían muerto 48 de sus guerrilleros. Pero a medida que se iba descubriendo la amplitud de la destrucción israelí después de su retirada, cada vez era menos creíble que Hamás dijera que había ganado en el campo de batalla. Frente a las

acusaciones de que la población de Gaza había pagado el precio de sus decisiones imprudentes[26], Hamás repentinamente elevó la cifra en varios cientos para demostrar que ellos también habían sufrido grandes pérdidas[27]. Como el propio Goldstone lo expuso en Stanford, solo dos meses antes de su retractación, la nueva cifra de Hamás «buscaba propulsar la fama de Hamás entre la población de Gaza»[28]. Aunque Goldstone se inclinaba en su retractación ante esta cifra políticamente inflada de Hamás, su Informe se había basado en los números que le habían proporcionado las respetables organizaciones de defensa de los derechos humanos israelíes y palestinas, cada una de las cuales había investigado de manera meticulosa e independiente los agregados y los desgloses civiles / combatientes de las muertes gazatíes. Desmintiendo la afirmación israelí de que únicamente habían muerto 300 civiles, estas organizaciones de defensa de los derechos humanos los cifraron entre 800 y 1.200[29] y también habían demostrado convincentemente que las cifras oficiales israelíes no tenían sentido. Incluso el Informe de derechos humanos 2009, del Departamento de Estado estadounidense, en general bastante tolerante, daba un número de muertos «cercano a los 1.400 palestinos, incluyendo más de 1.000 civiles»[30]. Pero, gracias a que una cifra políticamente manipulada por Israel coincidía con una cifra políticamente manipulada por Hamás, Goldstone descartaba la cifra muy superior de muertes palestinas civiles, documentada por las organizaciones de defensa de los derechos humanos y validada por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Su esperanza de que Hamás investigara después de la Operación Plomo Fundido, se quejaba Goldstone en su retractación, había sido «poco realista». Israel, por el contrario, decía a continuación, «había ya llevado a cabo investigaciones de manera transparente y de buena fe […] hasta un grado significativo» y tenía «confianza» en que esas investigaciones acabarían por llevar a todos los infractores ante la justicia. Uno se pregunta sobre qué base se podría haber formado una prognosis tan optimista[31]; ninguna de las pruebas disponibles, viejas o nuevas, la respaldaba. Pensemos, en primer lugar, en el historial judicial de Israel anterior a la Operación Plomo Fundido. Unos 1.300 palestinos murieron en la década posterior a la primera intifada (1987-1997) y, sin embargo, solo 19 soldados israelíes fueron condenados por homicidio y ninguno de ellos llegó

a entrar en la cárcel. Unos 2.300 civiles palestinos murieron durante la segunda intifada (2000-2003) y aun así únicamente 5 soldados israelíes fueron considerados penalmente responsables de estas muertes civiles y ninguno de ellos fue acusado de homicidio o asesinato. Entre 2006 y 2009, un soldado que matara a un palestino que no tomara parte en hostilidades, según B'Tselem, «nunca se enfrentaba a la justicia por su acción» (los colonos judíos que cometían actos de violencia contra los palestinos gozaban de una impunidad semejante). A lo largo de esas décadas, las organizaciones de defensa de los derechos humanos habían condenado reiteradamente el uso por parte de Israel de una potencia de fuego desproporcionada, indiscriminada y deliberada contra civiles palestinos, así como la incapacidad de Israel de procesar a los responsables de esos crímenes[32]. Si la expectativa de Goldstone de que Hamás investigara por sí mismo después de la Operación Plomo Fundido era «no realista», ¿cuánto más realista era la esperanza de que Israel llevara a cabo investigaciones de buena fe después de la Operación Plomo Fundido? De hecho, Israel a continuación hizo exactamente lo que se hubiera predicho que haría. A lo largo de la Operación Plomo Fundido, Israel había dañado o destruido «todo lo que se le ponía por delante» y no tan por delante, incluyendo 48.000 hogares, 1.500 fábricas y talleres, 280 escuelas y guarderías, instalaciones de agua, alcantarillado y electricidad, 190 complejos de invernaderos, el 80 por 100 de las cosechas agrícolas y casi un quinto de las tierras de labor. Barrios enteros quedaron destrozados. También destrozó o dañó 29 ambulancias, casi la mitad de los 122 centros de salud de Gaza (incluyendo 15 hospitales) y 45 mezquitas. Cuando finalmente se retiraron, las IDF dejaron allí 600.000 toneladas de escombros y 1.400 cadáveres, 350 de ellos de niños y niñas. Las misiones de investigación, así como las respetadas organizaciones de defensa de los derechos humanos israelíes y palestinas, concluyeron que buena parte de esta destrucción y muerte era el resultado de que Israel había cometido crímenes de guerra. Pero el único castigo que Israel impuso por destrucción ilegal de la propiedad durante la Operación Plomo Fundido era una medida disciplinaria que castigaba a un soldado. Cuando Goldstone se retractó, el único soldado israelí que había pasado tiempo en la cárcel estuvo allí siete meses y medio por robar una tarjeta de crédito. Después de su retractación, otro soldado fue condenado a una pena de 45 días de cárcel después de

asesinar a dos mujeres que ondeaban una bandera blanca (fue condenado por «uso ilegal de armas»)[33]. Los pobres resultados de estos procesos judiciales se alineaban perfectamente con el historial de Israel. No obstante, según Goldstone, Israel había llevado a cabo investigaciones «de manera transparente y de buena fe […] hasta un grado significativo» y había demostrado resolución para alcanzar la justicia en unos pocos casos relevantes. Goldstone o hablaba otro idioma o hablaba con lengua de serpiente.

Mientras que apenas podía contener sus elogios hacia Israel, Goldstone tampoco podía contener su desprecio por Hamás. Su intención criminal «se da por sentada, sus misiles estaban dirigidos a propósito e indiscriminadamente hacia objetivos civiles». El Informe Goldstone había basado sus conclusiones en un par de declaraciones públicas de los líderes de Hamás, por una parte, y en el ataque de zonas civiles con proyectiles por parte de Hamás, por la otra. Pero los oficiales israelíes habían hecho declaraciones públicas comparablemente incriminatorias, mientras que su potencia de fuego, incomparablemente más letal, también «se dirigía a propósito e indiscriminadamente a objetivos civiles». ¿Por qué, entonces, Goldstone, en su retractación, acusaba a Hamás por su intención criminal pero absolvía a Israel de ella? De hecho, si juzgamos por los descubrimientos más relevantes del Informe, ninguno de los cuales negaba ahora Goldstone, el caso contra Israel era mucho más convincente. A pesar de sus bravatas, Hamás apenas podía hacer poco más que soñar con que sus proyectiles rudimentarios alcanzaran las zonas civiles. Una sola casa israelí sufrió daños parciales durante la Operación Plomo Fundido. Pero si Israel poseía «buenos mapas de cuadrícula» de Gaza y una capacidad de recogida de información «extremadamente efectiva»; si hacía un uso intensivo del armamento de precisión último modelo, y si el 99 por 100 de las misiones de combate de la fuerza aérea israelí alcanzaban con éxito sus objetivos; y si solamente una vez impactaron en un edificio por error, de hecho, si Israel misma confirmaba todos estos hechos, entonces, como concluía de manera lógica el Informe Goldstone, la muerte y destrucción masiva que Israel había infligido a Gaza debía ser «el resultado de una planificación deliberada y de decisiones políticas a lo largo de la cadena de mando»[34]. Hamás «no había hecho nada», recordaba con disgusto Goldstone, para investigar la conducta criminal de los

gazatíes durante la Operación Plomo Fundido. ¿Cómo no iba a estar escandalizado? Hamás había asesinado a tres civiles israelíes y había dejado inhabitable una casa, mientras que Israel había matado a 1.200 civiles gazatíes y había convertido más de 6.000 hogares gazatíes en imposibles de habitar. Pero Hamás «no había hecho nada» para procesar a los infractores, mientras que Israel había encerrado a un soldado por robar una tarjeta de crédito. ¿No es claro y obvio que Hamás es mucho peor?

Él había aceptado presidir la misión de investigación, confesaba Goldstone, para inaugurar una «nueva era de ecuanimidad» en los foros que trataran el conflicto entre Israel y Palestina. Por muy noble que fuera su objetivo, su realización se vio prejuiciada por los vergonzosos y vergonzantes dobles raseros que dejaba traslucir su retractación. También reclamaba crédito hacia las «numerosas lecciones que había aprendido» Israel y hacia sus concomitantes «cambios políticos», incluyendo la adopción de los nuevos protocolos de las IDF para proteger a los civiles en los casos de guerrilla urbana[35]. Israel aplicó estas lecciones aprendidas y estos cambios protocolarios unos años después, en la Operación Margen Protector (2014): en lugar de asesinar a 350 niños y niñas, asesinó a 500; en lugar de destruir 6.300 hogares, destruyó 18.000[36]. La única lección que Israel realmente aprendió del Informe Goldstone fue que nunca era demasiado tarde para quebrar la columna vertebral de los defensores de los derechos humanos y retomar sus matanzas. De hecho, el mérito mayor de la retractación de Goldstone era que renovó la licencia para matar de Israel.

Richard Goldstone claramente no se retractó porque «hoy sabemos mucho más». Lo que presentaba como información nueva consistía por completo en aserciones inverificables hechas por las partes interesadas. El hecho de que no pudiera citar claramente ninguna prueba nueva que justificara su giro era la prueba más elocuente de que no existían. ¿Qué había ocurrido entonces? Incluso desde la publicación de su Informe, Goldstone había sido objeto de una incesante campaña de difamación[37]. No era, no obstante, el único que había sido atacado. El eminente jurista Christian Tomuschat fue nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU como

presidente de un comité creado con posterioridad para decidir si Israel y Hamás estaban investigando a conciencia las alegaciones del Informe. Cuando decidió que Tomuchat no era lo suficientemente dócil, el lobby de Israel lo persiguió y difamó hasta que no tuvo más remedio que dimitir[38]. (Fue reemplazado por la jueza del estado de Nueva York Mary McGowan Davis, que más tarde lideraría la misión de investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la Operación Marco Protector[39].) Con el fin de neutralizar el impacto del Informe, Israel estaba dispuesta a tocar todas las teclas.

Muchas facetas de la retractación de Goldstone eran sorprendentes.

Goldstone tenía fama de ambicioso[40]. Como Israel ya había caído en el ostracismo ante la opinión pública cuando Goldstone accedió a liderar la misión de investigación, sin duda él se sentía seguro en el conocimiento de que el encargo no iba a obstaculizar su carrera, e incluso podría resultar un impulso, puesto que él quedaría como el defensor del imperio de la ley a pesar de su coste personal. Aunque Goldstone sufrió ataques salvajes justo después de la publicación del Informe, la marea había empezado últimamente a volverse a su favor. El editorial de Haaretz decía que «ya era hora de agradecer a los críticos que hubieran forzado a las IDF a hacer examen de conciencia y a enmendar sus procedimientos. Incluso aunque no todas las 32 acusaciones de Richard Goldstone tuvieran fundamento, algunas de ellas sin duda lo tenían»[41]. La revista judeoamericana Tikkun honró a Goldstone en una gala que celebraba su 25 aniversario. En Sudáfrica, personalidades distinguidas, como el juez Dennis David, exmiembro de la Junta de diputados judíos, denunció públicamente una visita del profesor de Harvard Alan Dershowitz porque, entre otras cosas, había «falseado gravemente el historial judicial del juez Richard Goldstone»[42]. Era extraño, entonces, que un jurista ambicioso, en la cumbre de una larga y distinguida carrera, persiguiera el suicidio profesional con una retractación pública errática, alienando a sus colegas de la comunidad de defensa de los derechos humanos y arrojando dudas sobre su temperamento judicial, justo cuando su estrella, después de un breve eclipse, empezaba a brillar de nuevo.

A lo largo de su carrera profesional, Goldstone se había movido

dentro de la burocracia y por fuerza debía haber internalizado sus normas. Pero, en una ruptura sorprendente con el protocolo burocrático, soltó su bomba sin avisar primero a sus tres colegas de la misión de investigación o a cualquier otra persona en las Naciones Unidas. Si Goldstone no se lo comunicó por adelantado, ¿no sería porque no podía defenderlo con credibilidad, pero tampoco quería ser disuadido de su decisión de retractarse? Si temía que sus colegas no lo respaldaran, su intuición resultó ser correcta. Poco después de la publicación de su retractación los tres miembros restantes de la Misión Goldstone –Christine Chinkin, Hina Jilani y Desmond Travers– publicaron una declaración conjunta en la que inequívocamente respaldaban los descubrimientos del Informe original: «Coincidimos en nuestra opinión de que no hay ninguna demanda ni expectativa para reconsiderar el Informe, puesto que no ha surgido nada lo bastante importante como para que cambien el contexto, los hallazgos o las conclusiones del Informe»[43].

Goldstone alegaba que habían sido las nuevas pruebas en lo que se refería al asalto mortal de Israel sobre la familia Al-Samouni, y la cifra revisada de las bajas de Hamás, lo que le había inducido a desdecirse. Pero solamente dos meses antes, en la Universidad de Stanford, se había referido tranquilamente a esos dos puntos sin extraer de ellos consecuencias dramáticas nuevas. Entre tanto no había surgido ninguna otra prueba. Goldstone también se refería a un documento de la ONU para poder conceder a Israel un certificado de buena salud de sus investigaciones internas. Pero este documento era mucho más crítico con las investigaciones israelíes de lo que Goldstone daba a entender[44]. Era como si Goldstone estuviera aferrándose desesperadamente a cualquier retazo de evidencia, por muy problemática que fuera, para justificar su decisión predeterminada de retractarse. De hecho, se apresuró a absolver a Israel de culpa criminal en las muertes de la familia Al-Samouni, incluso antes de que el ejército israelí hubiera cerrado la investigación.

Unos días antes de someter su retractación a The Washington Post, Goldstone había presentado otra versión a The New York Times[45]. Este rechazó la entrega, aparentemente porque no repudiaba el Informe. Era como si Goldstone estuviera siendo

presionado contra su voluntad para retractarse públicamente. Para evitar manchar su reputación, y porque no deseaba hacerlo, Goldstone inicialmente envió una retractación tibia al Times. Después de que el Times la rechazara porque no era noticia, y en una carrera contrarreloj, metió apresuradamente una formulación que se pudiera entender como un rechazo completo, para garantizar que el Post publicara lo que ahora era una bomba de relojería. La presión externa sobre Goldstone explicaría la composición torpe, las formulaciones opacas y la turbiedad generalizada, en la que parecía estar simultáneamente rechazando y no rechazando el Informe. También explicaría su vergonzosa inclusión de irrelevancias, como su llamada al Consejo de Derechos Humanos para condenar la muerte de una familia de colonos israelíes –dos años después de la Operación Plomo Fundido y en un incidente sin relación con la Franja de Gaza– por parte de desconocidos.

El eminente jurista sudafricano John Dugard era un colega de Goldstone. Había encabezado una misión de investigación semejante, que investigaba la Operación Plomo Fundido. Los hallazgos de su Informe –el cual contenía un análisis legal más fino, mientras que el Informe Goldstone tenía un alcance más amplio– coincidían en su mayor parte con el Informe Goldstone. Concluía que «el fin de la acción de Israel era castigar a la población de Gaza» y que Israel era «responsable de cometer actos internacionalmente delictivos por razón de la comisión de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad»[46]. En una devastadora disección de la retractación de Goldstone, Dugard decretaba: «No hay hechos nuevos que exoneren a Israel y que hubieran podido llevar a Goldstone a cambiar de opinión. Lo que hizo que cambiara de opinión, por lo tanto, sigue siendo un secreto muy bien guardado»[47]. Aunque el secreto de Goldstone probablemente nunca llegue a revelarse y su retractación ha causado un daño irreparable, es aún posible, mediante una paciente reconstrucción de los registros fácticos, conocer la verdad sobre lo que ocurrió en Gaza. Por respeto a la memoria de quienes fallecieron durante la Operación Plomo Fundido, esta verdad debe conservarse y protegerse de sus asesinos.

[1] R. Goldstone, «Reconsidering the Goldstone Report on Israel and War Crimes», The Washington Post, 1 de abril de 2011.

[2] Report of the United Nations Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict, 25 de septiembre de 2009; a partir de ahora, Informe Goldstone.

[3] B. Ravid, «Netanyahu to UN: Retract Gaza war report in wake of Goldstone's comments», Haaretz, 2 de abril de 2011); «Lieberman Praises Goldstone for "Vindicating" Israel», The Jerusalem Post, 2 de abril de 2011.

[4] «US Agrees: Israel did not commit Cast Lead war crimes», The Jerusalem Post, 5 de abril de 2011; N. Mozgovaya, «US Senate Urges UN to Rescind Goldstone's Gaza Report», Haaretz, 15 de abril de 2011.

[5] J. Haber, «Judge Goldstone's The Washington Post Op-ed», jeremiahhaber.com, 2 de abril de 2011.

[6] N. G. Finkelstein, Goldstone Recants: Richard Goldstone Renews Israel's License To Kill, Nueva York, 2011, p. 8.

[7] Informe Goldstone, cit., § 1893.

[8] Véase cap. III.

[9] International Court of Justice, Advisory Opinion, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 8 de julio de 1996, «Dissenting Opinion of Judge Weeramantry», cap. III, «Humanitarian Law», sec. 10, «Specific rules of the humanitarian law of war», (a) «The prohibition against causing unnecessary suffering»; cursiva en el original.

[10] El principio de distinción implica: «Las partes del conflicto deben en todo momento distinguir entre civiles y combatientes. Los ataques solamente pueden dirigirse contra combatientes». Los ataques indiscriminados y desproporcionados rompen con este principio. International Committee of the Red Cross, Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules, Cambridge, 2005, parte I.

[11] Y. Dinstein, Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict, Cambridge, 2004, p. 117.

[12] Informe Goldstone, cit., §§ 706-735.

[13] «Judge Goldstone's notes for the Panel on civilians in war zones», §§ 29-35, disponible en [maurice-ostroff.tripod.com/id315.html].

[14] Amnesty International, Amnesty International's Updated Assessment of Israeli and Palestinian Investigations into the Gaza Conflict, 18 de marzo de 2011.

[15] Report of the Committee of Independent Experts in International Humanitarian and Human Rights Law Established Pursuant to Council Resolution 13/9, 18 de marzo de 2011.

[16] D. Macintyre, «Israeli Commander: "We rewrote the rules of war for Gaza"», Independent, 3 de febrero de 2010; «IDF Officer: Gaza civilians risked to protect Israel troops during war», Haaretz, 3 de febrero de 2010.

[17] Human Rights Watch, «I Lost Everything»: Israel's Unlawful Destruction of Property During Operation Cast Lead, 2010. Véase cap. III para citas más extensas sobre esto.

[18] Véase cap. V.

[19] Amnesty International, Amnesty International's Updated Assessment; B'Tselem (Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories), «Goldstone then and now», 5 de abril de 2011.

[20] Amnesty International, Amnesty International's Updated Assessment, cit.

[21] UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Protection of Civilians Weekly Report, 1-8 de enero de 2009; Amnesty International, Operation «Cast Lead»: 22 Days of Death and Destruction, 2009, p. 20.

[22] A. Hass, «What led to IDF bombing house full of civilians

during Gaza War?», Haaretz, 24 de octubre de 2010.

[23] State of Israel, Gaza Operation Investigations: An Update, enero de 2010, pp. 41-44. Aunque las evidencias críticas negaban la versión israelí de lo que había ocurrido, Israel se atuvo a su historia original. Véase cap. III para referencias.

[24] State of Israel, Gaza Operation Investigations: Second update, cit., § 123.

[25] State of Israel, Gaza Operation Investigations: Second update, cit., § 68.

[26] J.-P. Filiu, Gaza, cit. p. 318.

[27] «Hamas confirms losses in Cast Lead for first time», The Jerusalem Post, 1 de noviembre de 2010.

[28] «Judge Goldstone's Notes», cit., § 24.

[29] Palestinian Center for Human Rights, «Confirmed Figures Reveal the True Extent of the Destruction Inflicted upon the Gaza Strip», 12 de marzo de 2009; Al Mezan Center for Human Rights, «Cast Lead Offensive in Numbers», 2 de agosto de 2009; «B'Tselem's Investigation of Fatalities in Operation Cast Lead», 9 de septiembre de 2009.

[30] Véase cap. IV para la referencia completa.

[31] Aunque se refería al Comité de Expertos Independientes de la ONU, dirigido por Mary McGowan Davis, en último término se concluía que «las investigaciones militares hasta entonces parecen haber sido muy poco productivas», véase cap. V.

[32] M. Van Creveld, The Sword and the Olive: A Critical History of the Israeli Defense Force, Nueva York, 1998, p. 349; N. G. Finkelstein, Beyond Chutzpah: On the Misuse of Anti-Semitism and the Abuse of History, edición de bolsillo ampliada, Berkeley, 2008, pp. 96-130; Y. Din, A Semblance of Law: Law Enforcement upon Israeli Civilians in the West Bank, 2006, pp. 6, 26, 91-93; Y. Din, Exceptions: Prosecution of IDF Soldiers during and after the Second Intifada, 2008, pp. 19-20; B'Tselem, Void of Responsibility: Israel

Military Policy not to Investigate Killings of Palestinians by Soldiers, 2010, pp. 7-8, 53.

[33] Véanse caps. III y IV para referencias completas y G. Cohen, «IDF Soldier sentenced to 45 days for death of mother, daughter in Gaza War», Haaretz, 12 de agosto de 2012.

[34] Véase cap. III para referencias completas.

[35] Goldstone también daba crédito total a la «limitación del uso» por parte de Israel del «fósforo blanco en las zonas civiles». Israel sí dejó de arrojar fósforo blanco después de la Operación Plomo Fundido. Pero el uso por parte de Israel había suscitado un escándalo universal, por lo que la decisión probablemente se tomó en Washington, que era quien proporcionaba a Israel los proyectiles de fósforo blanco.

[36] Véase cap. XI para referencias completas.

[37] Véase cap. V.

[38] Dershowitz, «Goldstone follow-up commission head a “bigot”», The Jerusalem Post, 2 de noviembre de 2010; B. Weinthal, «Tomuschat, Head of Goldstone Follow-Up Committee, Resigns», The Jerusalem Post, 3 de diciembre de 2010.

[39] Aunque su informe de seguimiento sobre la Operación Plomo Fundido no era blanqueante, McGowan Davis también se inclinaba a aplacar a Israel. Incluso elogiaba con reservas el ridículo Informe Turkel, que exoneraba a Israel de cualquier delito en el asalto a la flotilla de la libertad de Gaza. Report of the Committee of Independent Experts, § 39. Para un análisis detallado del Informe Turkel, véase cap. VIII.

[40] E. Bronner y J. Medina, «Past holds clue to Goldstone’s shift on the Gaza War», The New York Times, 19 de abril de 2011.

[41] «Thanks to the critics», Haaretz, 27 de julio de 2010.

[42] «Dershowitz is not welcome here!», The Cape Times, 24 de marzo de 2011.

[43] H. Jilani, C. Chinkin, y D. Travers, «Goldstone Report: Statement issued by members of UN mission on Gaza war», The Guardian, 14 de abril de 2011.

[44] R. Cohen, «The Goldstone chronicles», The New York Times, 7 de abril de 2011; A. Eldar, «What exactly did Goldstone “Retract” from his Report on Gaza?», Haaretz, 12 de abril de 2011.

[45] «NY Times: We turned down a different version of Goldstone retraction», Haaretz, 5 de abril de 2011.

[46] Report of the Independent Fact-Finding Committee on Gaza: No Safe Place, presentado ante la Liga de Estados Árabes, 30 de abril de 2009, §§ 556, 573.

[47] J. Dugard, «Where Now for the Goldstone Report?», The New Statesman, 6 de abril de 2011.



El Mavi Marmara (a la derecha)

TERCERA PARTE

EL MAVI MARMARA

VII. ASESINATO EN ALTA MAR

La devastación infligida a Gaza durante la Operación Plomo Fundido (2008-2009) estaba diseñada para exacerbar los efectos del bloqueo ilegal en curso. «Yo esperaba ver daños graves, pero tengo que decir que me quedé estupefacto cuando vi la amplitud y precisión de la destrucción», observaba el director de la sección de la Franja del Programa de Alimentos Mundiales después del ataque. «Las zonas que se habían arrasado eran precisamente las zonas económicas estratégicas de las que Gaza depende para aliviar su dependencia de la ayuda humanitaria»[1]. Las IDF destruyeron infraestructura cívica fundamental, como el único molino de harina operativo y casi todas las fábricas de cemento, en la esperanza y conocimiento de que, después de que el alto el fuego entrara en vigor, los gazatíes se verían reducidos a una abyecta dependencia y no podrían reconstruir sus vidas a menos que se inclinaran ante los dictados de Israel[2].

Un año y medio después de la Operación Plomo Fundido, las principales organizaciones humanitarias y de defensa de los derechos humanos testimoniaban unánimemente que Gaza seguía sufriendo una crisis humanitaria debida al asedio: «Contrariamente a lo que manifiesta el gobierno de Israel, la ayuda humanitaria que se permite que entre en Gaza es únicamente una fracción de lo que se necesitaría para responder a las ingentes necesidades de un pueblo exhausto» (Oxfam); «El bloqueo […] ha dañado gravemente la economía, dejando en la pobreza a un 70 u 80 por 100 de los gazatíes» (Human Rights Watch); «Israel está bloqueando provisiones médicas vitales que no deja entrar en la Franja de Gaza» (Organización Mundial de la Salud); «El bloqueo está teniendo un impacto devastador en el millón y medio de personas que viven en Gaza» (Comité Internacional de la Cruz Roja)[3]. Aun así, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, proclamaba que «no había crisis humanitaria» y que en Gaza «no había carencia de medicinas o de cualquier otro artículo de primera necesidad»[4]. El mediático filósofo parisino Bernard-Henri Lévy proclamaba que «el bloqueo afectaba únicamente a las armas y al material necesario para

fabricarlas»[5]. Burlándose de los informes que hablaban de una crisis humanitaria, el viceministro de Exteriores, Danny Ayalon, señalaba «el nuevo y radiante centro comercial [de Gaza], […] la nueva piscina de tamaño olímpico […], restaurantes y hoteles de cinco estrellas»[6]. Para tranquilizar a la opinión pública, Israel repartió fotografías de esos lujosos escenarios por internet[7]. Algunos pocos bolsillos en Gaza sí estaban, de hecho, prosperando. La economista política de Harvard Sara Roy señalaba la emergencia de un delgado estrato económico que «se había enriquecido enormemente a partir de la economía del mercado negro» y del «casi perverso consumismo en los restaurantes y tiendas que son el ámbito de los ricos»[8]. Por muy terrible que sea, una comparación así no debería escandalizar a nadie, al menos no a los estudiosos de la historia judía. «La espada de la política de la exterminación nazi pendía sobre todos los judíos por igual», recordaba un superviviente del gueto de Varsovia:

[…] pero en el gueto surgió una diferenciación social, que colocaba aparte a los grupos que tenían los medios, incluso bajo aquellas condiciones infernales, de llevar una vida comparativamente plena, bien alimentada, y que disfrutaban de algunos placeres. En las mismas calles en las que diariamente se podían ver escenas de horror, entre los enjambres de niños muriendo como moscas por la tuberculosis […] te encontrabas tiendas repletas de los mejores manjares, restaurantes y cafés que servían los platos y las bebidas más caras […]. La clientela de estos lugares se componía principalmente de agentes judíos de la Gestapo, de los oficiales de policía judíos, de ricos comerciantes que hacían negocios con los alemanes, contrabandistas, tratantes de moneda extranjera y otras clases de gente similares.

Y señalaba a continuación: «Los nazis hicieron películas de esas orgías festivas para mostrar al “mundo” lo bien que los judíos vivían en el gueto»[9].

El consenso entre las organizaciones de defensa de los derechos humanos y las organizaciones humanitarias era que el bloqueo de

Gaza por parte de Israel constituía una forma de castigo colectivo en flagrante violación del derecho internacional[10]. Surgió una controversia inapropiada entre los críticos y los partidarios de Israel sobre si el bloqueo había situado a los gazatíes bajo un régimen de «hambruna» (críticos) o de «menos hambruna» (partidarios). Los términos de ese debate desviaron y confundieron la atención del punto fundamental: ¿qué derecho tenía Israel a poner a la población de Gaza en régimen ninguno? Incluso los críticos del asedio secundaban el derecho de Israel a impedir que entraran armas en Gaza. Pero, si los palestinos accedían a los términos legalmente establecidos para resolver el conflicto[11], ¿acaso de facto el derecho internacional les prohibía usar la fuerza de las armas o adquirir armamento para poner fin a la ocupación? Los puntos legales más destacados eran estos: primero, en un dictamen no vinculante de 2004, el Tribunal Internacional de Justicia determinó que «en lo que se refiere al principio del derecho de los pueblos a la autodeterminación, el Tribunal señala que la existencia de un "pueblo palestino" ya no es un tema a debate; que "los derechos [del pueblo palestino] incluyen el derecho a la autodeterminación" y que Israel está impelido a cumplir con esta obligación de respetar el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación»[12]. Segundo, la unidad territorial dentro de la cual debía ejercitarse este derecho palestino a la autodeterminación «claramente incluye Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza»[13]. Tercero, el derecho internacional prohíbe el uso de la fuerza militar «por una potencia administrativa para suprimir la insurrección popular generalizada en una unidad de autodeterminación», mientras que «el uso de la fuerza por parte de una entidad no estatal en ejercicio del derecho de autodeterminación es legalmente neutro, es decir, no regulado en absoluto por el derecho internacional», y «la ayuda por parte de Estados a los insurgentes locales en una unidad de autodeterminación puede ser permisible»[14]. Cuarto, se puede discutir si la situación legal en los territorios palestinos ocupados está o no regulada por el derecho a la autodeterminación o por las normas de la ocupación beligerante[15]; que «la ocupación beligerante no tiene como fin ganar las mentes y los corazones de los habitantes locales; tiene objetivos militares –o de seguridad– y su fundamento es el "poder de la bayoneta"»[16]; que, por lo tanto, la población civil de un territorio ocupado no tiene el derecho de resistirse por la fuerza a una potencia ocupante. No obstante,

incluso aunque Israel sí pudiera calificarse como un ocupante beligerante, el conflicto entre Israel y Palestina en cualquier caso sería una de esas «situaciones en las que la ocupación beligerante y las guerras de liberación nacional se superponen»[17] y el derecho a la liberación nacional / autodeterminación es una norma perentoria del derecho internacional que no es permisible derogar»[18]. Este derecho perentorio limitaría, por lo tanto, el ámbito de la ley de la ocupación beligerante –en especial sus limitaciones en lo que respecta al uso de la fuerza– en situaciones híbridas o que se superponen. La conclusión era que el derecho palestino a la autodeterminación prevalecía sobre cualquier otro derecho que Israel pudiera haber adquirido en tanto ocupante beligerante. Quinto, de hecho, no obstante, al negarse a negociar de buena fe una resolución del conflicto, Israel había renunciado a cualquier derecho que pudiera haber invocado bajo la ley de la ocupación beligerante. Podía entonces apelar legalmente solamente a un «derecho», el de retirarse, mientras que no había ley que prohibiera a los palestinos usar la fuerza o adquirir armamento de Estados amigos para hacer efectiva esa retirada[19]. Era una medida de cómo se había degradado el derecho internacional el que se hubieran invertido los derechos y las obligaciones: la premisa tácita del discurso público era que Israel tenía el derecho a usar la fuerza de las armas, mientras que los palestinos tenían la obligación de desarmarse. Incluso si, como hipótesis, el derecho internacional en efecto prohibiera al pueblo palestino recurrir a la resistencia armada, el hecho seguiría siendo que, como pedía Amnistía Internacional (aunque con razones diferentes), el embargo de armas debería habérsele impuesto tanto a Hamás como a Israel[20]. Sería una curiosa concepción de la justicia la que negara a las víctimas los medios para resistir incluso cuando apoyaban las normas legalmente ordenadas para alcanzar la paz, pero permitiera a los agresores colar de nuevo su arsenal de presión incluso aunque rechazaran esas normas y pasaran por encima de ellas.

El 31 de mayo de 2010 una flotilla humanitaria que se dirigía a Gaza y que llevaba 700 pasajeros a bordo fue atacada en aguas internacionales por comandos israelíes. Los seis barcos de la flotilla acarreaban 10.000 toneladas de provisiones que la población desesperada de Gaza necesitaba con urgencia. Cuando finalizó el ataque israelí a mitad de la noche, nueve pasajeros a bordo del

buque insignia Mavi Marmara habían muerto a consecuencia de disparos[21]. «Si la Operación Plomo Fundido fue un momento decisivo para la actitud del mundo hacia nosotros», se quejaba el columnista de Haaretz Gideon Levy, «esta operación es la segunda entrega de lo que parece una serie de terror continua»[22]. Aun así, siempre un genio de las relaciones públicas, Israel se las apañó para hacer de los comandos las víctimas del ataque[23]. En un paroxismo solipsista de indignación y sin una brizna de discrepancia, los funcionarios israelíes y los medios de comunicación de todo el espectro político proclamaban que los comandos estaban inicialmente armados únicamente con «rifles de pintura» y que recurrieron a tácticas agresivas «como último recurso», en «defensa propia» y que habían sido «provocados», «emboscados», «engañados», «linchados» y «atraídos» a una «trampa» por una falange de «radicales antioccidentales», «machete en mano», «sedientos de sangre», «yihadistas» y «mercenarios» vinculados a «Al Qaeda» y a otras organizaciones «terroristas». Las calumnias de Israel se centraban en que los pasajeros del Mavi Marmara pertenecían a Insani Yardim Vakfi (IHH), el grupo turco que patrocinaba el barco. Se dijo que IHH era una organización terrorista (o relacionada con el terrorismo)[24]. Pero, en un paquete de información israelí distribuido justo antes del ataque del comando, IHH había sido descrita de manera benigna, como «una organización de defensa de los derechos humanos turca propalestina con una fuerte orientación musulmana […] que proporciona ayuda humanitaria en zonas de guerra y conflicto»[25]. «Los soldados fueron vencidos», entonaba solemnemente el premio Nobel de la Paz y presidente israelí Shimon Peres, «únicamente porque no quisieron matar a nadie». «Luchasteis moralmente y mostrasteis valor en vuestras acciones», se dirigió entonces a los comandos. «Os saludo y admiro vuestro valor y contención incluso ante el peligro para vuestras propias vidas»[26]. El embajador de Israel en España comparó a los pasajeros del Mavi Marmara con los terroristas islámicos que habían matado a cientos de pasajeros en los trenes de Madrid en 2004, a la vez que ligaba a los nueve civiles muertos en el barco con «los 23 españoles muertos en las carreteras ese fin de semana»[27]. Un 90 por 100 de los judíos israelíes apoyaban la decisión de detener la flotilla y creían que Israel había usado la cantidad de fuerza necesaria o menos de la necesaria, mientras que únicamente un 16

por 100 apoyaba levantar el asedio de Gaza[28]. Uno de los comandos responsables de matar a varios pasajeros estaba supuestamente nominado para una medalla al valor, mientras que el viceprimer ministro, Eli Yishai, exhortaba al ministro de Defensa, Ehud Barak, a conceder medallas a todos los comandos: «El coraje de estos guerreros es ejemplar y se merecen una mención»[29].

La secuencia exacta de los acontecimientos de aquella fatídica noche probablemente nunca se conozca con certeza[30]. Pero, incluso aunque así fuera, no afectaría materialmente a la asignación de culpas. Si Israel buscaba justificar su ataque sobre el Mavi Marmara basándose en la defensa propia, iría contra el pilar del derecho que dice que no se puede derivar un beneficio legal o un derecho de un acto ilegal (ex iniuris non oritur ius). En este caso, Israel no podría alegar su derecho a la defensa propia si su recurso a la violencia se hubiera originado en la imposición de un bloqueo ilegal. Los pasajeros a bordo de un convoy en aguas internacionales, transportando ayuda humanitaria a una población desesperada, sí tenían, en cambio, todo el derecho a usar la fuerza en defensa propia contra un ataque equivalente a un asalto pirata[31]. Aún más, cuando Israel atacó la flotilla, no tenía ninguna sospecha de que a bordo hubiera contrabando ilegal. La dirección de la flotilla ofreció que un organismo neutral, como la Cruz Roja Internacional, verificara previamente la naturaleza humanitaria de su carga (parece que los contenidos ya habían sido rigurosamente inspeccionados a la salida), mientras que los oficiales israelíes ni mostraron interés en registrar la carga de la flotilla ni adujeron siquiera que los barcos estuvieran transportando armas a Gaza[32]. «Hubo una provocación junto a las costas de Gaza, pero los provocadores no fueron los activistas por la paz», declaraba el veterano disidente israelí Uri Avnery. «La provocación fue obra de los barcos de la armada y de los comandos, […] que cerraron el paso de los barcos de ayuda usando fuerza letal.» Si los oficiales israelíes habían proclamado después de la Operación Plomo Fundido que habían «actuado» como lunáticos para detener a sus enemigos, entonces había razones para preocuparse por si después del ataque del comando se habían convertido en lunáticos. «Solo un gobierno loco, que ha perdido toda contención y toda conexión con la realidad», seguía diciendo Avnery, «haría algo así: considerar como enemigo a unos barcos que transportaban ayuda humanitaria

y a activistas por la paz de todo el mundo y enviar una fuerza militar masiva a aguas internacionales para atacarlos, disparar y matar»[33].

Incluso aunque algunos puntos controvertidos quedaran sin aclarar, en la medida en la que se podían asegurar con certeza los hechos, la mayor parte de las alegaciones de Israel no aguantaban un examen de cerca[34]. La fuerza atacante no usó inicialmente escopetas de pintura; por el contrario, los combatientes israelíes, que abordaron el Mavi Marmara en zódiacs, abrieron fuego con gas lacrimógeno, granadas de humo y aturdidoras y quizá con balas de plástico; y después los helicópteros, que planeaban sobre los navíos, abrieron fuego con munición real antes de que el comando hubiera pisado la cubierta[35]. Los pasajeros no pertenecían a organizaciones terroristas[36] ni habían montado una trampa mortal; por el contrario, ni siquiera se habían preparado para el caso de ser heridos[37], no poseían armas de fuego ni dispararon las que cogieron[38] y no llevaban dinero que hubieran cobrado para matar a israelíes[39]. Los comandos israelíes que los pasajeros retuvieron no sufrieron un linchamiento; por el contrario, se les proporcionó ayuda médica y se les acompañó para ser liberados[40]. Los comandos israelíes no dispararon con contención y únicamente en defensa propia; por el contrario, asesinaron a nueve pasajeros disparándolos no una, sino múltiples veces –cinco recibieron disparos en la cabeza y al menos seis de los nueve fueron asesinados de una manera coherente con una ejecución arbitraria, extralegal y sumaria–[41]. «El comportamiento del ejército israelí y del resto del personal hacia los pasajeros de la flotilla», concluía una prestigiosa misión de investigación de la ONU, «no solamente era desproporcionado en relación con el incidente, sino que demostraba unos niveles de violencia totalmente innecesarios e increíbles. Exhibía un nivel de brutalidad inaceptable»[42]. Poco después de la publicación del informe de la ONU, sin embargo, el primer ministro Netanyahu elogió el «crucial, esencial, importante y legal» asalto y «saludó» a los comandos israelíes que habían actuado «con valor, moralmente y con contención», contra «aquellos que vinieron a mataros y que trataron de mataros»; «No hay nadie mejor que vosotros»[43]. Por supuesto, los oficiales israelíes reconocieron que el operativo era mejorable: «Cuando la próxima flotilla […] sea abordada por la armada […] los primeros en subir a bordo serán los

perros de ataque, para evitar que los soldados sufran daños […], son fuertes e implacables»[44]. No quedaba claro qué planes de contingencia se habían previsto para el caso de que los pasajeros «engañaran» y «lincharan» a los caninos. Mientras tanto, el semioficial Intelligence and Terrorism Information Center apuntó, como un supuesto atenuante de los asesinatos, que hasta siete de los nueve pasajeros muertos podrían haber buscado el martirio; las últimas entradas del diario de uno de ellos, por ejemplo, expresaban su disposición a morir «por una causa noble»[45]. Antes de ser ahorcado por los británicos en 1775, el revolucionario americano Nathan Hale lamentó «no tener más que una vida que perder por mi país». Gandhi exhortaba a sus seguidores a buscar activamente el martirio: «Me entusiasmaría oír que un colega […] ha sido fusilado o que a otro colega […] se le ha partido el cráneo»[46]. ¿Acaso que un hombre esté preparado para hacer el sacrificio supremo por un bien mayor justifica que se le mate?

Si tantos occidentales inicialmente se tragaron la historia sin pies ni cabeza de Israel fue porque la campaña de hasbara (propaganda) había sido cuidadosamente ensayada y perfectamente ejecutada[47] mientras los medios de comunicación occidentales acogieron con entusiasmo el relato israelí. «En una operación que recuerda a la primera semana o así» de la Operación Plomo Fundido, observaba Anthony Lerman en el periódico británico The Guardian, «la maquinaria de relaciones públicas de Israel ha conseguido que las principales agencias de noticias se centren en su versión de los hechos y que utilicen el discurso de las autoridades israelíes durante unas 48 horas cruciales»[48]. Los únicos testigos capaces de responder a la versión oficial israelí habían sido encarcelados y se les habían confiscado sus pruebas fotográficas. Pero la ofensiva de la propaganda israelí acabó quedando al descubierto y la opinión internacional (incluyendo amplias franjas de la opinión judía) se inclinó claramente en la dirección opuesta[49]. Israel entonces la rebatió diciendo que, si había gente que veía las cosas de otra manera, eso se remontaba a la «eterna guerra contra el pueblo judío»[50], y al hecho de que la oficialidad israelí había fracasado en el frente de las relaciones públicas[51]. La comunidad internacional se volvió hostil, según el influyente Reut Institute, debido a «los logrados intentos de señalar [a Israel] como una entidad ocupante y agresiva que ignora y mina los derechos

humanos y el derecho internacional», mientras que a las flotillas se las situaba en el contexto de la resistencia a la «ocupación» y a la «opresión», de la defensa de la paz y de los derechos humanos, de una respuesta moral a la «crisis humanitaria» de Gaza y dentro del espíritu del derecho internacional[52]. En otras palabras, si la imagen de Israel había sufrido un golpe más, no se debía a la sórdida realidad que subyacía, sino más bien a una forma distorsionada de «señalarla».

A pesar de la oleada de escándalo público, Estados Unidos prestó un apoyo ciego a Israel mediante su último imbroglio diplomático. El presidente Barack Obama se limitó a expresar un «profundo pesar» por la pérdida de vidas[53], mientras que su gobierno escudaba a Israel e impedía que se le pidieran cuentas en los foros internacionales. El vicepresidente Joe Biden defendía la acción del comando diciendo que, si la flotilla se hubiera limitado a descargar su carga en un puerto israelí, Israel habría estado dispuesto y preparado para transferirla a Gaza. En una extraña secuencia de non sequiturs, Biden alternativamente afirmaba que Israel estaba bloqueando el paso de provisiones como materiales de construcción y que la flotilla podría haberlas «introducido fácilmente»[54]. Mientras tanto, el representante de Estados Unidos en una Sesión de Emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU negaba desvergonzadamente que Israel hubiera evitado que bienes vitales llegaran a Gaza: «Existen mecanismos para la transferencia de ayuda humanitaria a Gaza por parte de los Estados miembros y por los grupos que deseen hacerlo»[55]. Ochenta y siete de los 100 miembros del Senado de Estados Unidos firmaron una carta dirigida a Obama en la que declaraban que «apoyaban por completo el derecho de Israel a la defensa propia» después de que los comandos israelíes «llegaran» al Mavi Marmara y «fueran brutalmente atacados». El Congreso de Estados Unidos siguió esta estela y 338 de sus 435 miembros firmaron una carta expresando su «sólido apoyo al derecho de Israel a defenderse a sí mismo» después de que «los pasajeros del barco atacaran a los soldados israelíes con porras y barras de hierro»[56]. Los líderes del Congreso, actuando a petición de los «grupos judíos», pasaron a designar oficialmente como terroristas a las víctimas del ataque, y no a los agresores, y a los patrocinadores de la misión humanitaria como una organización terrorista. También buscaron impedir la entrada de los

supervivientes del baño de sangre en Estados Unidos, porque «no debería dejárseles entrar […] para que extiendan su propaganda y su odio y su retórica terrorista»[57]. «Desde que los palestinos de Gaza eligieron a Hamás», les contaba el senador por Nueva York Chuck Schumer a un grupo de judíos ortodoxos después del ataque, tiene sentido «estrangularlos económicamente hasta que vean que por ahí no van a ningún sitio»[58]. Por otro lado, la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, y otros altos funcionarios occidentales, junto con el Consejo de Seguridad de la ONU al completo, experimentaron una epifanía: la mañana después del terror en la flotilla proclamaron que el asedio de Israel sobre Gaza era «insostenible» y que debía suspenderse[59]. Aun así, como observaba agudamente el Crisis Group: «La condena internacional y las peticiones de una investigación vendrán fácilmente, pero muchos de quienes las emiten deberán reconocer su propio papel en el deplorable trato a Gaza, que forma la espina dorsal» del ataque israelí[60]. Tres cuartas partes del daño y la destrucción que Israel provocó durante la Operación Plomo Fundido aún no se habían reparado o reconstruido cuando la flotilla se embarcó en su misión humanitaria[61]. Aunque Israel prometió después de la masacre en la flotilla y del subsiguiente escándalo internacional «aflojar» las restricciones en algunos bienes para entrar en Gaza, aún seguía prohibiendo artículos necesarios para restaurar el sector fabril en Gaza y ponía condiciones imposibles para la entrada de los materiales clave de construcción[62]. Los «impedimentos para la entrada de los materiales de construcción», advertía una organización israelí de defensa de los derechos humanos, podrían «convertir en papel mojado la promesa de permitir la reconstrucción»[63]. Los funcionarios de la ONU calculaban que, bajo las restricciones que aún imponía Israel, se tardarían «75 años» en reconstruir Gaza[64]. A finales de 2010, casi medio año después de que Israel se comprometiera públicamente a relajar el bloqueo, un consorcio de más de 20 respetadas organizaciones de defensa de los derechos humanos y humanitarias que operaban en Gaza informaron sombríamente de que «hay pocas señales de una verdadera mejora sobre el terreno, puesto que el "relajo" ha dejado intactos los fundamentos de la política ilegal del bloqueo»; «Gaza necesita 670.000 camiones de material de construcción, mientras que solamente se ha recibido una media de 715 camiones por mes»; «El sector privado queda excluido de la posibilidad de importar

materiales de construcción, incluyendo hormigón, acero y grava, obstaculizándose así los esfuerzos de la población de Gaza para reconstruir sus casas, sus negocios y otras propiedades»; «Las exportaciones siguen prohibidas y, excepto la actividad humanitaria de exportar una pequeña cantidad de fresas, ningún otro camión ha salido de Gaza desde el relajo»; «Muchos artículos humanitarios, incluyendo material vital para tratar el agua, y que no están en la lista de los productos restringidos por Israel, continúan sin recibir permiso de entrada»; «A los residentes de Gaza se les sigue negando el acceso a sus amigos y a su familia y a las oportunidades educativas en Cisjordania, Jerusalén Este y el extranjero»; «El acceso al aproximadamente 35 por 100 de las tierras de labor y al 85 por 100 de las áreas marítimas de pesca de Gaza sigue restringido por la "zona intermedia" israelí, con un impacto devastador sobre la economía, los derechos y el modo de vida de la gente»; «El 39 por 100 de los residentes de Gaza sigue en paro», mientras que «el 80 por 100 de la población depende de la ayuda internacional». «No puede darse una resolución justa y duradera del conflicto entre Israel y Palestina», concluía el acreditado informe, «sin que termine el aislamiento y el castigo de la población de Gaza»[65]. Israel se limitó a rechazar el informe como «sesgado y distorsionado»[66].

Incluso si, como hipótesis, el derecho de Israel a cortar el paso a la flotilla estuviera acreditado, aún no explicaría «por qué, para interceptarlo de manera supuestamente pacífica, sus comandos escogieron abordar el barco descolgándose desde un helicóptero militar, en la oscuridad y en aguas internacionales»[67]. De hecho, Israel escogió un modus operandi que prácticamente garantizaba provocar pánico y caos. Podría fácilmente haber escogido (y así lo concedían los oficiales israelíes) un abanico de opciones relativamente más benignas, como desmontar el motor, la hélice o el timón del navío y remolcarlo hasta el puerto israelí de Ashdot, o bloquear físicamente el paso del barco[68]. (Los pasajeros de la flotilla anticipaban que «si no nos detenemos, probablemente estropeen el motor o la hélice y después nos remolquen a algún lugar para repararlo»[69].) Para la propia coartada oficial israelí, el ataque de un comando era una elección extraña. Tras el

derramamiento de sangre, afirmaron que no habían esperado una resistencia violenta; se esperaba «violencia moderada, insultos, empujones y escupitajos en la cara», «una sentada, una cadena humana», «resistencia pasiva, tal vez resistencia verbal», o «entablar conversación con los pasajeros»[70]. Pero si Israel no esperaba un recibimiento violento, ¿por qué no interceptó el Mavi Marmara a pleno día, con una corte de periodistas a remolque que mostrara al mundo sus intenciones pacíficas? ¿Por qué desactivó de antemano las comunicaciones del barco, impidiendo transmisiones al exterior? ¿Por qué inició el contacto usando gas lacrimógeno, granadas de humo, aturdidoras y posiblemente balas de plástico? Si lo que esperaba era charlar con los pasajeros, ¿por qué desplegó una unidad de combate entrenada para matar, y no una unidad policial acostumbrada a tratar con la resistencia civil? A juzgar por su preparación previa, la inferencia razonable es que Israel buscaba un enfrentamiento sangriento, aunque no probablemente en la escala que ocurrió. (No pudo prever que los comandos entraran en pánico ante la resistencia decidida de los pasajeros y que entonces cometieran más asesinatos por venganza.) «¿Qué esperaban los comandos que hicieran los activistas propalestinos una vez que abordaron el barco?», decía el editorial de The Guardian, «¿Invitarlos a bordo a tomar el té con el capitán en el puente?»[71].

Aun así, sigue siendo un misterio por qué lanzó Israel un ataque violento. De hecho, múltiples factores convergían para que un ataque comando fuera el plan operativo óptimo. Antes del ataque a la flotilla, Israel había llevado a cabo una sucesión de operaciones chapuceras. Había sufrido una grave derrota militar en 2006, cuando invadió Líbano y se enfrentó a Hezbolá. Se propuso restaurar su «capacidad de disuasión» en 2008-2009, cuando invadió Gaza, pero el ataque no había suscitado admiración ante las proezas marciales de Israel, sino escándalo por su cobardía letal[72]. En 2010 envió un equipo comando a asesinar a un líder de Hamás en Dubai, pero, incluso aunque cumplieron la misión, la unidad acabó levantando una tormenta diplomática por su ejecución chapucera. Israel estaba desesperada por restaurar la imagen épica de las IDF de los tiempos pasados. ¿Qué mejor que un ataque comando al estilo de Entebbe[73]? La decisión de lanzar el ataque sobre el Mavi Marmara fue tomada conjuntamente por el primer ministro, Netanyahu, y el ministro de Defensa, Barak. Ambos

habían formado parte de una unidad comando en su juventud; Barak había sido el mentor y comandante de Netanyahu en la unidad[74]. Con un ataque comando en 1973 se había ganado Barak su reputación[75], mientras que Netanyahu se beneficiaba del reflejo de la gloria de su hermano Jonathan, que había sido la única baja israelí en el asalto de Entebbe. Sus historias personales entrecruzadas conducían a Barak y Netanyahu a optar por un violento asalto de los comandos, para lustrar la reputación de las IDF y, no casualmente, las suyas propias. Ambos eran «inveteradas criaturas de operaciones militares», señalaba un columnista de Haaretz después del ataque de la flotilla, «inmersos en la mentalidad de heroísmo instantáneo y el espíritu comando […] en el que una fuerza militar aparece en lo más agudo de una crisis como un deus ex machina y de un solo golpe parte en dos el nudo gordiano». ¿Acaso una operación comando no redimiría la promesa siempre en fuga de la salvación política? «Aunque ya habían pasado décadas desde que el chute moral [de dichas operaciones] se inyectó en nuestras venas, nuestros líderes nunca han dejado de intentar recrearlas para expiar su ineficacia en tanto estadistas. Cuanto más grande el número de misiones fracasadas sucesivas, más grande el deseo de lanzar la próxima misión redentora que sanará el trauma y el mal viaje de su predecesora […]. Son respuestas de adictos a los que se les niega repetidamente el chute: la perfecta operación de las IDF, o la guerra decisiva, que desenmarañará todas las complejidades y resolverá todas las dudas (y cualquier necesidad de acción del Estado)»[76].

No nos sorprende que, de los seis navíos de la flotilla, Israel escogiera el Mavi Marmara para su trato «especial». Unos dos tercios de los 600 pasajeros eran ciudadanos turcos. Se dijo que el núcleo del grupo en este barco era «una tapadera para una organización islamista radical, probablemente vinculada con el partido en el gobierno en Turquía», lo que lo convertía en un objetivo mucho más tentador[77]. En los últimos tiempos, el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdoğan, se había mostrado cada vez más resuelto a desarrollar una política internacional independiente y había criticado abiertamente a Israel. A esto le siguió un toma y daca diplomático. Erdoğan increpó públicamente al presidente Peres en el Foro Económico Mundial, justo después de la Operación Plomo Fundido: «En lo que se refiere a matar, bien sabe usted cómo

matar»[78]. El viceministro de Exteriores, Ayalon, humilló públicamente al embajador turco a principios del año 2010, negándose a estrechar su mano frente a las cámaras de televisión israelíes y sentándolo en un sillón a una altura mucho menor que la suya[79]. Erdoğan entonces tomó la iniciativa (junto con Brasil) de resolver diplomáticamente el callejón sin salida con Irán sobre su programa nuclear[80]. Israel se refrenó ante el gesto turco, porque apoyaba con todas sus fuerzas una solución militar. Días antes del ataque a la flotilla, recordaría más tarde Netanyahu, Turquía «había reforzado su identificación y cooperación con Irán». La última gota fue que Ankara ignorara el consejo de Tel Aviv de impedir la salida del Mavi Marmara. (Aunque el gobierno turco, sin embargo, sí trató activamente de desanimar a IHH de emprender la misión)[81]. Ya era hora de poner en su sitio a la revoltosa Turquía, y un elegante (aunque sanguinario) ataque de comando era justamente lo que necesitaba Erdoğan para recordar quién mandaba en esa esquina del mundo. Si Israel había descartado opciones menos violentas para detener la flotilla, dilucidaba un analista estratégico israelí, era porque necesitaba «decirle a la islamizada Turquía […] que hasta aquí había llegado. Las fuerzas del Imperio otomano, que aspiraban a gobernar de nuevo sobre Oriente Próximo, como lo habían hecho hacía ya casi 500 años, se detendrían en las costas de Gaza»[82]. La riña que esto abrió con el aliado histórico de Israel parecía negar tales especulaciones: ¿por qué arriesgarse a pagar un precio diplomático tan alto? Pero Israel se había acostumbrado a que los líderes del mundo árabe musulmán encajaran con mansedumbre sus humillantes golpes. Si los comandos israelíes hubieran asesinado a nueve egipcios en un convoy humanitario, el presidente egipcio, Hosni Mubarak, habría hecho oídos sordos. Incluso el presidente sirio, Bashar al Assad, se había quedado callado cuando un asalto aéreo israelí en 2007 destruyó un supuesto reactor nuclear sirio. «Estoy seguro de que la reacción turca cogió por sorpresa a los líderes sionistas», observó astutamente el secretario general de Hezbolá, Sayyed Hassan Masrallah[83].

El ataque comando estaba inicialmente diseñado para cortar la marea creciente de navíos humanitarios con destino a Gaza. Israel en principio había permitido a los barcos que llevaban mercancías pasar tranquilamente a través del bloqueo, esperando que los ánimos de los organizadores se desinflaran a medida que se

desvanecía el interés público. Cuando vio que los organizadores persistían, la armada israelí acosó e interceptó barcos de camino a Gaza[84]. Pero cada vez llegaban más barcos. Después de que Israel bloqueara una nave humanitaria y le impidiera llegar a Gaza en 2009, una delegación británica se «preocupó» en voz alta ante los funcionarios de la embajada americana en Beirut «de que el gobierno israelí no fuera tan indulgente en el futuro si ocurrían incidentes similares»[85]. Si el asalto a la flotilla no podía haber pillado por sorpresa a quienes estaban en la onda diplomática, tampoco sorprendió a los veteranos observadores del escenario israelí. La «violenta intercepción de barcos civiles llevando ayuda humanitaria», reflexionaba el novelista israelí Amos Oz, era «el producto total» del «mantra [israelí] de que lo que no se puede hacer por la fuerza se puede hacer con todavía más fuerza»[86]. Para reforzar su afirmación de que la violencia de los comandos fue espontánea, Israel señaló el hecho de que se esperaba meramente una «resistencia como la que encontramos en Bil'in»[87]. Pero Israel había recurrido a menudo a la fuerza letal para suprimir una resistencia civil. Lo que ocurrió a bordo del Mavi Marmara, observaba un columnista de Haaretz, fue «muy similar a lo que Israel ha estado haciendo semana tras semana durante los últimos cuatro años en Bil'in: herir y matar a manifestantes civiles desarmados que están exigiendo sus derechos básicos»[88].

El asalto al Mavi Marmara resultó ser otra operación chapucera más y las antaño elogiadas IDF cada vez se asemejaban en mayor medida a «la banda que no mataba nunca a derechas»[89]. Aunque la hasbara israelí publicitaba desesperadamente el asalto como «un éxito operativo»[90] y a los comandos como héroes sin tacha, pocos se lo tragaron. La clase tertuliana lamentó este «vergonzoso fiasco» y esta «humillación nacional» en la que «la capacidad disuasoria ha sufrido un grave revés»[91]. «La magia hace tiempo que se ha evaporado, el ejército más moral del mundo, el que una vez fuera el mejor ejército del mundo, ha vuelto a fallar», observó con ironía Gideon Levy. «Cada vez más da la impresión de que casi todo lo que toca perjudica a Israel»[92]. De hecho, los comandos navales constituían las «mejores unidades de batalla»[93] y habían ensayado el ataque durante semanas, construyendo incluso una maqueta del Mavi Marmara[94]. No obstante, cuando 30 de estos comandos se enfrentaron con un número igual de pasajeros

civiles[95], que solamente blandían armas improvisadas, tres de ellos se dejaron capturar y por todo el ciberespacio circularon fotografías suyas mientras los cuidaban. Se suponía que los soldados israelíes, y aún más los comandos de elite, no se dejaban atrapar con vida; lo último que necesitaba Israel era una nueva versión de Gilad Shalit[96]. «La afirmación del portavoz de las IDF de que las vidas de los soldados se encontraban en peligro y de que temían un linchamiento», opinaba con discreción un respetado analista militar estratégico, «no es muy halagadora para los hombres que forman las unidades navales de elite»[97]. Las imágenes de una fuerza de combate inepta y cobarde tampoco parecen haber consolado a la población interna. Después de tantos fiascos, ¿se pondrían en cuestión las capacidades de las IDF para mantener a raya a una aparentemente infinita lista de enemigos cada vez más potentes? «Una cosa es que la gente crea que estás loco», se quejaba un general israelí, «pero es peor cuando creen que eres incompetente y loco, y esa es la sensación que damos»[98]. Una encuesta de 2010 entre el mundo árabe, que mostraba que solamente el 12 por 100 de la población árabe creía que Israel era «muy poderoso», mientras que un buen 44 por 100 creía que era «más débil de lo que parecía», no contribuyó a calmar la angustia israelí[99]. Cada misión desastrosa subía las apuestas de la próxima jugada. Parecía como si Israel, más pronto que tarde, tuviera que lanzar una misión aún más espectacular para compensar por la larga ristra de fracasos. Un general israelí declaraba después de la Operación Plomo Fundido que las IDF «continuarían aplicando» la llamada «doctrina Dahiya», consistente en dirigir una fuerza descomunal contra la infraestructura civil «en el futuro»[100]. La esencia de la doctrina estratégica de Israel, comentaba el subjefe del gabinete, era que «cada nuevo asalto» de combate «trae resultados peores que el anterior» a los enemigos de Israel[101]. Líbano se asomaba en ese momento como el siguiente objetivo de Israel[102]. Pero Hezbolá había amasado su propia «capacidad de disuasión». Israel no estaba dispuesto a arriesgar las masivas bajas civiles que ocurrirían en caso de ataque. Al final del día, la indefensa Gaza continuaría siendo la saca de golpear favorita de Israel.

Los nueve pasajeros asesinados a bordo del Mavi Marmara fueron las primeras bajas del entierro del Informe Goldstone. Si no hubiera sido efectivamente «vetado», observaba el abogado de derechos

humanos palestino Raji Sourani, «si la comunidad internacional hubiera cumplido con su obligación de imponer el derecho internacional humanitario, y si el imperio de la ley se respetara, es casi seguro que el injustificable derramamiento de sangre en el Mediterráneo se habría evitado»[103]. No obstante, aunque Israel había conseguido despejar el obstáculo Goldstone, ahora tenía que lidiar con el nuevo escándalo internacional después del ataque comando. No por primera vez, decidió nombrar una comisión para que investigara el incidente. La expectativa era que, mezclando la gravitas judicial con la cobarde sumisión al Estado, una investigación así aplacara a la opinión internacional o, en cualquier caso, a los sectores de la opinión que contaban[104]. La comisión no decepcionó.

[1] «The Rubble That Was Gaza», World Food Program News, 25 de enero de 2009. Véase también European Commission, Damage Assessment and Needs Identification in the Gaza Strip, Final Report, 2009, pp. xv, 93.

[2] D. Travers, «Operation Cast Lead: Legal and doctrinal asymmetries in a military operation», Irish Defense Forces, An Cosantóir, 2010, pp. 10-12.

[3] Oxfam, «Gaza Weekly Update», 30 de mayo–5 de junio de 2010; Human Rights Watch, «Israel: Full, impartial investigation of flotilla killings essential», 31 de mayo de 2010; World Health Organization, «Medical Supplies Blocked from Entering Gaza», 1 de junio de 2010; International Committee of the Red Cross, «Gaza Closure: Not another year!», 14 de junio de 2010.

[4] Ministerio de Exteriores israelí, «Statement by Prime Minister Netanyahu: “No love boat”», 2 de junio de 2010; Ministerio de Exteriores israelí, «PM Netanyahu’s Statement before the Turkel Commission», 9 de agosto de 2010.

[5] B.-Henri Lévy, «It’s Time to Stop Demonizing Israel», Haaretz, 8 de junio de 2010. Véase también G. Levy, «In Response to Bernard-Henri Lévy», Haaretz, 10 de junio de 2010.

[6] D. Ayalon, «The Flotilla Farce», The Wall Street Journal, 29 de julio de 2010.

[7] T. Gross, «A Nice New Shopping Mall Opened Today in Gaza: Will the media report on it?», Mideast Dispatch Archive, 17 de julio de 2010.

[8] S. Roy, «Gaza: Treading on shards», The Nation, 1 de marzo de 2010; véase también S. Roy, The Gaza Strip: The Political Economy of De-development, 3.a ed. aumentada, Washington, DC, 2016, pp. xliii-xlv.

[9] B. Goldstein, Five Years in the Warsaw Ghetto, Edimburgo, 2005, pp. 77-78.

[10] El análisis legal más fiable fue redactado por una misión de investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, presidida por un juez jubilado del Tribunal Penal Internacional y que también incluía a un exfiscal jefe del Tribunal Especial auspiciado por la ONU en Sierra Leona. Este comité descubrió lo siguiente: 1. «El bloqueo estaba causando un daño desproporcionado sobre la población civil de la Franja de Gaza y que, por lo tanto, que Israel interceptara el barco no podía justificarse y debía ser considerado un acto ilegal», y 2. «Uno de los motivos principales tras la imposición del bloqueo era un deseo de castigar a la población de la Franja de Gaza por haber elegido a Hamás. La combinación de este motivo y del efecto de las restricciones en la Franja de Gaza no dejan lugar a dudas de que las acciones y políticas de Israel componen un castigo colectivo en los términos en que el derecho internacional lo define» UN Human Rights Council, Report of the International Fact-Finding Mission to Investigate Violations of International Law, Including International Humanitarian and Human Rights Law, Resulting from the Israeli Attacks on the Flotilla of Ships Carrying Humanitarian Assistance, 27 de septiembre de 2010, §§ 53, 54; a partir de ahora: Report of the Fact-Finding Mission. Una de las conclusiones principales del Informe demuestra su equilibrio, sensatez y humanidad:

La Misión no es la única que considera que en Gaza se vive una

situación deplorable, que ha sido caracterizada como «insostenible». Es algo totalmente intolerable e inaceptable en el siglo XXI. Es sorprendente que alguien pueda describir la situación de la población como satisfactoria dentro de los criterios aceptables más básicos. Instamos a las partes y a la comunidad internacional a que encuentren la solución que aborde todas las legítimas preocupaciones por la seguridad tanto de Israel como del pueblo palestino, ambos con igual derecho a disponer «de su lugar bajo el cielo». La aparente dicotomía en este caso entre los derechos en pugna de la seguridad y del derecho a una vida digna solamente puede resolverse si los antiguos antagonismos se subordinan a un sentido de la justicia y del juego limpio. Hay que encontrar la fuerza para extirpar los agravios enraizados en el recuerdo y avanzar (§ 275).

El Consejo de los Derechos Humanos de la ONU votó «respaldar las conclusiones» de este Informe por 30 votos a favor, 1 en contra y 15 abstenciones, A/HRC/15/L.33, 29 de septiembre de 2010. Aunque el único voto negativo procedía de Estados Unidos, en su alocución el representante americano no discutió las conclusiones del Informe.

[11] Véase cap. II.

[12] International Court of Justice, Dictamen no vinculante, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, 9 de julio de 2004, §§ 118, 149.

[13] J. Dugard, Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the Palestinian Territories Occupied since 1967, A/HRC/7/17, 21 de enero de 2008, § 49.

[14] J. Crawford, The Creation of States in International Law, 2.a ed., Oxford, 2006, pp. 135-137, 147. Véase también H. A. Wilson, International Law and the Use of Force by National Liberation Movements, Oxford, 1988, pp. 135-136: «[la legislación] aún no se ha puesto de acuerdo» sobre el derecho de los movimientos de liberación nacional de usar la fuerza, aunque «la tendencia […] desde 1960 […] ha sido hacia la ampliación de la autorización a usar la fuerza por parte de los movimientos de liberación nacional»,

mientras que «el uso de la fuerza para negar el libre ejercicio del derecho de un pueblo a su autodeterminación es contrario a los principios del derecho internacional». A. R. Sureda, The Evolution of the Right to Self-Determination: A Study of United Nations Practice, Leiden, 1973, pp. 331, 343-344, 354: «A partir de 1965, la Asamblea General ha […] empezado a pedir a los Estados que ayuden a los pueblos dependientes a alcanzar su autodeterminación con su ayuda moral y material» y «el hecho de que el Consejo de Seguridad nunca haya condenado expresamente las actividades de la guerrilla palestina puede interpretarse como un reconocimiento implícito de su derecho a recuperar al menos los territorios de los que fueron desplazados tras las hostilidades de junio de 1967 y de hacerlo por la fuerza si es necesario».

[15] Ocupación beligerante se refiere al hecho de que Israel ocupó Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, y la Franja de Gaza, en el transcurso de una guerra.

[16] Y. Dinstein, The International Law of Belligerent Occupation, Cambridge, 2009, §§ 80, 218.

[17] H. A. Wilson, International Law, cit. p. 20.

[18] J. Crawford, Creation, cit. pp. 99-102; A. R. Sureda, Evolution, cit. p. 353; véase también International Court of Justice, Legal Consequences of the Construction of a Wall, cit., §§ 88, 156.

[19] Véase cap. XI y Apéndice.

[20] Véase cap. IV.

[21] Uno de los pasajeros quedó en coma como consecuencia de las heridas recibidas y murió cuatro años más tarde.

[22] G. Levy, «Operation Mini Cast Lead», Haaretz, 1 de junio de 2010.

[23] A. Gupta, «How the US Corporate Media Got the Israel Flotilla Catastrophe So Wrong», AlterNet, 16 de junio de 2010.

[24] Intelligence and Terrorism Information Center, Conspicuous among the Passengers and Organizations aboard the Mavi Marmara

Were Turkish and Arab Islamic Extremists Led by IHH, 26 de septiembre de 2010, §§ 2, 9, 11.

[25] Military Strategic Information Section, International Military Cooperation Department, Strategic Division, Israel Defense Forces, «Free Gaza Flotilla», 27 de mayo de 2010.

[26] A. Raved, «Peres: Soldiers were beaten for being humane», ynetnews.com, 1 de junio de 2010; R. Medzini, «Peres: World always against us», ynetnews.com, 3 de junio de 2010.

[27] G. Tremlett, «Gaza Flotilla Attack: Israeli ambassador to Madrid tries to play down deaths», The Guardian, 4 de junio de 2010.

[28] M. Miskin, «Poll: Israelis support flotilla raid, Gaza blockade, PM and IDF», Arutz Sheva, 11 de junio de 2010. Véase también los artículos de A. Hass, N. Gordon, e I. Pappé en M. Bayoumi (ed.), Midnight on the Mavi Marmara: The Attack on the Gaza Freedom Flotilla and How it Changed the Course of the Israel / Palestine Conflict, Nueva York, 2010.

[29] H. L. Julian, «Medal for Israeli Commando for Valor on Mavi Marmara?», Arutz Sheva, 6 de junio de 2010.

[30] La recopilación y el análisis más completo de los relatos aparecidos en la prensa es un manuscrito aún no publicado: R. Lightbown, The Israeli Raid of the Freedom Flotilla 31 May 2010: A Review of Media Sources, 31 de agosto de 2010. Para una reconstrucción turca del incidente, véase İ. Y. Vakfı, IHH, Palestine Our Route, Humanitarian Aid Our Load: Flotilla Campaign Summary Report, s. f. Véase también Friends of Charities Association, Timeline & Inconsistencies Report Relating to the Gaza-Bound Freedom Flotilla Attack May 31, 2010, Washington, DC, 2010.

[31] Los pasajeros en un principio usaron mangueras de agua para repeler el asalto israelí, que es lo que la International Maritime Organization recomienda «como medio de prevenir un intento de abordaje por parte de piratas y ladrones armados», Report of the Fact-Finding Mission, p. 25, n. 68.

[32] International Crisis Group, Turkey's Crises over Israel and Iran, 2010, p. 6; R. Friedman, «IDF: Flotilla supplies unnecessary», The Jerusalem Post, 2 de junio de 2010; Report of the Fact-Finding Mission, cit. §§ 55-58, 88-89, 109.

[33] U. Avnery, «A Crime Perpetrated by Order of the Government of Israel and the IDF Command», Gush Shalom, 31 de mayo de 2010. Véase también D. Grossman, «The Gaza Flotilla Attack Shows How Far Israel Has Declined», The Guardian, 1 de junio de 2010.

[34] Las pruebas aducidas por Israel en su investigación interna se examinarán en el cap. VIII.

[35] Report of the Fact-Finding Mission, cit., §§ 112-114. Una publicación semioficial israelí no discutía que «se hubiera disparado gas, granadas de humo y aturdidoras desde los barcos [israelíes]» inmediatamente, a medida que se acercaban al Mavi Marmara, mientras que una reconstrucción bastante exculpatoria de The New York Times concedía que «el chasquido de una granada de sonido israelí y una lluvia de balas de goma desde lo alto se supondría que dispersaría a los activistas» antes de que los comandos se posaran en la cubierta del Mavi Marmara. Intelligence and Terrorism Information Center, Preparations Made by IHH for Confrontation with the IDF and the Violence Exercised by That Organization's Operatives, 15 de septiembre de 2010, § 11; S. Tavernise y E. Bronner, «Days of Planning Led to Flotilla's Hour of Chaos», The New York Times, 4 de junio de 2010.

[36] Parece ser que uno de los pasajeros del Mavi Marmara había sido condenado en el pasado y había cumplido sentencia por su implicación en el secuestro en 1996 de un ferry ruso. Los secuestradores pedían la liberación de los presos chechenos.

[37] H. Pope, «Erdogan Is Not the Bogeyman», Haaretz, 18 de junio de 2010; International Crisis Group, Turkey's Crises, p. 7; Report of the Fact-Finding Mission, cit., § 129. Los pasajeros tuvieron que abrir las provisiones médicas que destinaban a Gaza para poder curar a los heridos.

[38] Report of the Fact-Finding Mission, cit., §§ 101, 116, 165. Israel no ha mostrado ninguna prueba que respalde su afirmación

de que los pasajeros dispararon munición real a los comandos, mientras que sus declaraciones públicas sobre este punto están plagadas de contradicciones. Ibid., p. 26, n. 70.

[39] «¿Se puede concebir seriamente», se preguntaba retóricamente Henry Siegman en Haaretz, «que activistas turcos a los que supuestamente se les pagaban 10.000 dólares a cada uno llevaran ese dinero consigo a bordo de un barco, sabiendo que serían detenidos por las autoridades israelíes?» «Israel's Greatest Loss: Its moral imagination», Haaretz, 11 de junio de 2010.

[40] Report of the Fact-Finding Mission, cit., §§ 125-126.

[41] Ibid., §§ 118, 120, 170; R. Booth, «Gaza Flotilla Activists Were Shot in Head at Close Range», The Guardian, 4 de junio de 2010. Unos 50 pasajeros fueron heridos, mientras que Israel informó de nueve comandos heridos, tres de ellos graves.

[42] Report of the Fact-Finding Mission, cit., §§ 264-265; véase también §§ 167-172.

[43] «Netanyahu "Salutes" Commandos Who Raided Gaza Flotilla», Haaretz, 26 de octubre de 2010.

[44] H. Greenberg, «Dogs to Be Used in Next Flotilla Raid», ynetnews.com, 7 de octubre de 2010.

[45] Intelligence and Terrorism Information Center, According to Well-Documented Information, Seven of the Nine Turks Killed in the Violent Confrontation aboard the Mavi Marmara Had Previously Declared Their Desire to Become Martyr[s], Shaheeds, 13 de julio de 2010.

[46] «Speech at Bulsar», 29 de abril de 1930, en The Collected Works of Mahatma Gandhi, Ahmedabad, vol. 43, pp. 327-328.

[47] D. Ayalon, «Public Relations Battle Is a Marathon, Not a Sprint», The Jerusalem Post, 8 de junio de 2010.

[48] A. Lerman, «Israeli PR Machine Won Gaza Flotilla Media Battle», The Guardian, 4 de junio de 2010.

[49] N. G. Finkelstein, «This Time We Went Too Far»: Truth and consequences of the Gaza invasion, ed. de bolsillo aumentada, Nueva York, 2011, pp. 168-180.

[50] C. Glick, «Ending Israel's Losing Streak», The Jerusalem Post, 1 de junio de 2010.

[51] Z. Mazel, «Peace Activists? More Like "Peace" Militants», The Jerusalem Post, 1 de junio de 2010; H. Goodman, «The Source of Failure: Israel's public diplomacy and the intelligence community», Institute for National Security Studies, 9 de junio de 2010; A. Fishman, «Israel Losing the War», ynetnews.com, 20 de junio de 2010.

[52] Reut Institute, The Gaza Flotilla: A Collapse of Israel's Political Firewall, agosto de 2010, § 27.

[53] «Obama Supports UN Call for Investigation of Flotilla Incident», America.gov, 1 de junio de 2010.

[54] N. Mozgovaya, «Biden: Israel right to stop Gaza flotilla from breaking blockade», Haaretz, 2 de junio de 2010; R. Adams, «Gaza Flotilla Raid: Joe Biden asks "So what's the big deal here?"» The Guardian blog, 2 de junio de 2010.

[55] United States Mission to the United Nations, «Remarks by Ambassador Alejandro Wolff, Deputy Permanent US Representative to the United Nations, at an Emergency Session of the Security Council», 31 de mayo de 2010.

[56] «Bipartisan Group of 87 Senators, Led by Reid and McConnell, Send Letter to President Obama in Support of Israel's Right to Self-Defense», Democrats.senate.gov, 23 de junio de 2010; Congress of the United States, House of Representatives, «Dear Mr. President», 29 de junio de 2010. Véase también «Congress Shows Israel Support», The Jerusalem Post, 9 de junio de 2010.

[57] N. Guttman, «Push to Sanction Backers of Gaza Flotilla Gains Steam in US», Forward, 16 de junio de 2010.

[58] «C. Schumer: "Strangle" them economically», The Huffington

Post, 11 de junio de 2010. Véase también J. Cole, «Schumer's Sippenhaftung», Informed Comment blog, 12 de junio de 2010.

[59] J. Ferziger y C. Ben-David, «Gaza Situation "Unsustainable", Clinton Says as Ship Approaches», Bloomberg Businessweek, 1 de junio de 2010; United Nations Department of Public Information, «Security Council Condemns Acts Resulting in Civilian Deaths during Israeli Operation against Gaza-Bound Aid Convoy, Calls for Investigation, in Presidential Statement», 31 de mayo de 2010. Véase también B. Kouchner, F. Frattini y M. Á. Moratinos, «Averting Another Gaza», The New York Times, 10 de junio de 2010; «EU Strongly Condemns Gaza Flotilla Attack», EurActiv.com, 2 de junio de 2010; Y. Lempkowicz, «Gaza Flotilla: EU Parliament calls for international inquiry and end to blockade», The European Jewish Press, 17 de junio de 2010.

[60] International Crisis Group, «Flotilla Attack the Deadly Symptom of a Failed Policy», 31 de mayo de 2010.

[61] R. H. Serry, coordinador especial de la ONU para el Proceso de Paz en Oriente Próximo, «Briefing to the Security Council on the Situation in the Middle East», 15 de junio de 2010, citando un estudio del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas.

[62] Estado de Israel, The Civilian Policy towards the Gaza Strip, junio de 2010, apéndice B; Estado de Israel, «Briefing: Israel's new policy towards Gaza», 5 de julio de 2010.

[63] Gisha, Legal Center for Freedom of Movement, «Unraveling the Closure of Gaza», 7 de julio de 2010.

[64] United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA, The Humanitarian Monitor, julio de 2010, p. 8. Para un informe contemporáneo sobre la historia, impacto y ramificaciones legales de la política de cierre de Israel en Gaza, véase Palestinian Center for Human Rights, The Illegal Closure of the Gaza Strip: Collective Punishment of the Civilian Population, 2010.

[65] Amnesty International et al., Dashed Hopes: Continuation of the Gaza blockade, 30 de noviembre de 2010. Véase también Gisha,

Legal Center for Freedom of Movement, «Facts behind MFA Report on “Easing” of Gaza Closure», 2010. Gisha informaba a finales de diciembre de 2010 de que, con «mínimas excepciones», Israel «seguía prohibiendo la entrada en Gaza de acero, grava y cemento», mientras que «en las últimas semanas había comenzado una exportación pequeña y limitada». «Reconstructing the Closure», diciembre de 2010.

[66] D. Izenberg, «Int’l Groups Say Israel Not Living Up to Gaza Promises», The Jerusalem Post, 30 de noviembre de 2010.

[67] B. Knight, «Claim and Counterclaim after Deadly Flotilla Raid», ABC News, 1 de junio de 2010.

[68] N. Barnea, «The Test of the Result», Yediot Ahronot, 1 de junio de 2010; B. Kaspit, «It’s Not Enough to Be Right», Maariv, 1 de junio de 2010; A. Harel, «Straight into the Trap», Haaretz, 1 de junio de 2010; M. Kedar, «A War for World’s Future», ynetnews.com, 31 de mayo de 2010; M. Bergman, «The IDF Soldiers Were Sent on a Mission That Defies Logic», The Huffington Post, 1 de junio de 2010; Y. Katz, «Duped», The Jerusalem Post, 4 de junio de 2010.

[69] H. Mankell, «Flotilla Raid Diary», en M. Bayoumi, Midnight, cit., p. 22.

[70] Y. Katz, «Duped», cit.; A. Raved, «20 People Threw Me from Deck», cit., ynetnews.com, 1 de junio de 2010; «Israel Navy’s Gaza Flotilla Probe “Finds Planning, Intel Flaws”», Haaretz, 20 de junio de 2010; «Army Inquiry Slams Flotilla Raid’s Planning», ynetnews.com, 8 de julio de 2010; S. Tavernise y E. Bronner, «Days of Planning», cit.

[71] «Gaza: From blockade to bloodshed», The Guardian, 1 de junio de 2010.

[72] Véanse caps. II y IV.

[73] La incursión en Entebbe fue una operación de rescate de rehenes efectuada por los comandos de elite israelíes en el aeropuerto de Entebbe, en Uganda, el 4 de julio de 1976.

[74] U. Mahnaimi y G. Jenkins, «Operation Calamity», The Sunday Times, 6 de junio de 2010. Los dos supuestamente aún se comunicaban entre sí en el lenguaje codificado de sus tiempos de comando.

[75] Lideró una misión de asesinato en Líbano que acabó con la vida de tres altos cargos de la OLP.

[76] D. Rosenblum, «Israel's Commando Complex», Haaretz, 4 de junio de 2010.

[77] S. Wilson, «Israel Says Free Gaza Movement Poses Threat to Jewish State», The Washington Post, 1 de junio de 2010, citando a Itamar Rabinovich, exembajador israelí en Estados Unidos; «Eiland: Flotilla was preventable», The Jerusalem Post, 23 de julio de 2010.

[78] K. Bennhold, «Leaders of Turkey and Israel Clash at Davos Panel», The New York Times, 29 de enero de 2009.

[79] «Israel Snubs Turkish Ambassador in Public», BBC, 12 de enero de 2010.

[80] A. Barrionuevo, «Brazil and Turkey Near Nuclear Deal with Iran», The New York Times, 16 de mayo de 2010.

[81] «PM Netanyahu's Statement»; International Crisis Group, Turkey's Crises, cit., p. 6.

[82] M. Kedar, «A War», cit.

[83] «Speech of Secretary-General Nasrallah on Freedom Flotilla Attack», 4 de junio de 2010. Pero la importancia del enfrentamiento posterior de Turquía con Israel también se hinchó un poco. No afectó a los extensos lazos comerciales que los unían. Turquía era el principal socio comercial de Israel en la zona. El comercio israelí con Turquía se incrementó, de hecho, casi en un tercio durante los primeros siete meses de 2010. La crisis diplomática tampoco impidió que Ankara adquiriera drones israelíes. A finales de 2010, altos funcionarios turcos expresaron «su compromiso de conservar unas relaciones cordiales con Israel». J. Melik, «Gaza Flotilla: Israeli-Turkish trade "unaffected"», BBC News, 2 de junio de 2010;

D. Wainer y B. Holland, «Turks in Tel Aviv Show Business Binds Israel to Muslim Ally in Gaza Crisis», Bloomberg News, 14 de julio de 2010; D. Bilefsky, «Turkey and Israel Do a Brisk Business», The New York Times, 4 de agosto de 2010; «Israel Exports to Turkey Up 32 Pct Despite Tensions», Agence France-Presse, 19 de agosto de 2010; «Turkish Officials: We're committed to preserving friendly Israel ties», Haaretz, 26 de agosto de 2010.

[84] Report of the Fact-Finding Mission, cit., §§ 76-77.

[85] O9Beirut177 Date13/02/2009 05:56 Origin Embassy Beirut Classification SECR ET//NOFOR M, WikiLeaks.

[86] A. Oz, «Israeli Force, Adrift on the Sea», The New York Times, 1 de junio de 2010.

[87] Es decir, durante las manifestaciones contra el muro que Israel ha estado construyendo en Cisjordania. «Israel Navy's Gaza Flotilla Probe»; R. Ben-Yishai, «A Brutal Ambush at Sea», ynetnews.com, 31 de mayo de 2010.

[88] M. Michaeli, «Nothing to Investigate: Everyone knows what was wrong about the flotilla attack», Haaretz, 3 de junio de 2010. Para el uso de la fuerza armada por parte de Israel en otras partes de Cisjordania, «incluso cuando las acciones de las IDF no estaban precedidas de violencia por parte de los manifestantes», véase Association for Civil Rights in Israel, The State of Human Rights in Israel and the Occupied Territories: 2009 report, Jerusalén, 2009, p. 13. Entre 2002 y 2010, 27 manifestantes palestinos fueron asesinados por las fuerzas de seguridad israelíes; no murió ningún miembro de las fuerzas de seguridad. International Crisis Group, Tipping Point? Palestinians and the Search for a New Strategy, 2010, p. 28, n. 226.

[89] J. J. Mearsheimer, «Sinking ship», American Conservative, 1 de agosto de 2010.

[90] Y. Katz, «Duped», cit.

[91] B. Kaspit, «It's not enough», cit.; D. Horowitz, «The Flotilla Fiasco», The Jerusalem Post, 1 de junio de 2010; A. Harel, «Straight

into the trap», cit.; C. Levinson y J. Solomon, «Israel's Isolation Deepens», The Wall Street Journal, 3 de junio de 2010.

[92] G. Levy, «Operation Mini», cit.

[93] B. Kaspit, «It's not enough», cit.

[94] U. Mahnaimi y G. Jenkins, «Operation Calamity», cit.

[95] N. Barnea, «Test of the Result», cit.

[96] N. Sheizaf, «Flotilla: New Mavi Marmara pictures raise more questions regarding IDF attack», Promised Land, 6 de junio de 2010.

[97] R. Pedatzur, «A Failure Any Way You Slice It», Haaretz, 1 de junio de 2010.

[98] J. Goldberg, «Says One Israeli General: "Everybody thinks we're bananas"», the-atlantic.com, 1 de junio de 2010.

[99] University of Maryland, junto con Zogby International, 2010 Arab Public Opinion Poll. Un 41 por 100 respondió que la potencia de Israel «tenía sus fortalezas y sus debilidades».

[100] Y. Katz, «The Dahiya Doctrine: Fighting dirty or a knock-out punch?», The Jerusalem Post, 28 de enero de 2010; J. White, If War Comes: Israel vs. Hizballah and its Allies, Washington, DC, 2010, pp. 10, 12, 35, 40. Véase cap. II para la doctrina Dahiya.

[101] B. Opall-Rome, «Israel's New Hard Line on Hizbollah», Defense News, 31 de mayo de 2010.

[102] N. G. Finkelstein, This Time, cit., pp. 184-197.

[103] R. Sourani, «1.000 Days», en N. Bayoumi, Midnight, cit., p. 147.

[104] El precedente clásico fue el nombramiento por parte de Israel de la Comisión de Investigación Kahan después de que la masacre de Shabra y Chatila suscitara una protesta internacional. Para el blanqueamiento de la masacre por parte de la Comisión, véase N.

Chomsky, The Fateful Triangle: The United States, Israel and the Palestinians, Boston, 1983, pp. 397-409; y A. Kapeliouk, Sabra and Shatila: Inquiry into a Massacre, 1982.

VIII. LAVADO DE CARA I: EL INFORME TURKEL

En junio de 2010, Israel creó una «comisión pública independiente» para investigar el «incidente marítimo del 31 de mayo de 2010». En enero de 2011, la comisión, presidida por el exjuez del Tribunal Supremo Israelí Jacob Turkel, publicó sus conclusiones[1]. El Informe Turkel, de casi trescientas páginas, exculpaba completamente a Israel por la carnicería a bordo del Mavi Marmara y, en su lugar, culpaba a un grupo de pasajeros que supuestamente habría conspirado y se habría armado para asesinar a los comandos israelíes. El Informe se dividía en dos partes principales: un análisis legal del bloqueo israelí y una reconstrucción fáctica de los acontecimientos que culminaron en la violencia. Empezaba, no obstante, recapitulando el contexto histórico del bloqueo israelí. Estos pasajes del Informe proporcionan interesantes perspectivas sobre su objetividad. El Informe afirma que «en octubre de 2000 estallaron violentos incidentes en Cisjordania y la Franja de Gaza, que recibieron el nombre de "Segunda Intifada". […] En estos incidentes, los ataques suicidas hicieron de nuevo su aparición en el territorio israelí»[2]. Esta sucinta descripción de la segunda Intifada omitía mencionar que Israel había usado una potencia de fuego masivo, indiscriminado y letal para reprimir manifestaciones en buena medida no violentas y que la población palestina había soportado cinco meses de derramamiento de sangre antes de recurrir a los ataques suicidas[3]. El Informe empezaba destacando que «desde el inicio del año 2001, miles de morteros y misiles de diversos tipos han sido disparados en cantidades cada vez mayores desde la Franja de Gaza»[4]. Pero esta descripción omite que Israel dirigió una potencia de fuego mucho más letal hacia Gaza durante este mismo periodo[5]. Aunque el Informe sí concede que las organizaciones humanitarias y de defensa de los derechos humanos, así como un destacado jurista israelí, han concluido que Gaza seguía ocupada después de la «retirada» israelí de 2005, no obstante apoya la postura contraria del gobierno israelí[6]. El Informe afirmaba que el alto el fuego de junio de 2008 entre Israel y Hamás «se vino abajo en diciembre de 2008, cuando empezaron de nuevo los ataques de morteros y misiles contra Israel»[7]. De hecho, como

observaba en aquel momento Amnistía Internacional, la tregua «se interrumpió después de que las fuerzas israelíes asesinaran a seis militantes palestinos en un ataque aéreo y otros ataques el 4 de noviembre [de 2008]»[8]. El Informe, por lo tanto, describe un contexto histórico importante totalmente a favor de Israel.

El Informe Turkel sostenía la legalidad del bloqueo israelí sobre Gaza mediante dos justificaciones: (1) la población de Gaza no experimentaba hambre y su supervivencia física no estaba en riesgo; y (2) las penalidades que pudiera sufrir la población civil de Gaza eran un daño «colateral» y «proporcional» de un bloqueo que apuntaba a las capacidades militares de Hamás.

1. Si la población gazatí no pasaba hambre y tenía cubiertas sus necesidades esenciales, entonces el bloqueo era legal. El Informe Turkel yuxtaponía la opinión de consenso entre las organizaciones humanitarias y de defensa de los derechos humanos de que el asedio de Israel sobre Gaza había provocado una crisis humanitaria[9] con la negativa israelí de dicha crisis[10]. Resolvía «estas dos percepciones muy diferentes de realidad»[11] concluyendo, por ejemplo, que, incluso si el 60 por 100 de la población gazatí experimentara «inseguridad alimentaria»[12], aun así Israel estaría cumpliendo con su obligación legal, en la medida en que la gente no estaba muriendo de hambre, sino simplemente hambrienta. El Informe citaba con aprobación a los funcionarios israelíes que decían que «nadie había establecido […] que la población de la Franja de Gaza se estuviera "muriendo de hambre"». Venía a defender la legalidad del asedio en los términos de que «"la inseguridad alimentaria" no es equiparable a "morirse de hambre"»[13]. Prima facie, sería extraño que el derecho internacional actual, que concede tantas salvaguardas a la población civil en las épocas de guerra y bajo la ocupación, aprobara una política que roza el genocidio[14]. De hecho, siendo aparentemente conscientes de que un criterio legal así es demasiado laxo (por no mencionar que es cruel, más si procede de un respetado miembro del Tribunal Supremo)[15], el Informe simultáneamente expresa que incluso si la ley actuara no solamente ante el morirse de hambre, sino también ante la condición menos exigente del hambre a secas, e incluso si el asedio sí produjera hambre, aun así Israel no estaba deliberadamente provocando ese

hambre y, si no era una política voluntaria, entonces Israel no era legalmente culpable: «La comisión no ha encontrado pruebas […] de que Israel esté intentando privar de alimentos a la población de la Franja de Gaza»[16]. Pero si el efecto predecible e inevitable de impedir la entrada de productos alimenticios en Gaza tenía como consecuencia el hambre, es complicado imaginarse cómo el resultado punitivo era una simple ocurrencia y no la intención de Israel[17]. O, dicho de otra manera, para no querer provocar hambre, Israel lo hacía muy bien.

De la misma manera que exoneraba a Israel de la acusación de negar comida a los gazatíes, así también el Informe Turkel exoneraba a Israel de negar a la población de Gaza otros «objetos esenciales para la supervivencia de la población civil». Reconocía que Israel bloqueaba la entrada de materiales de construcción, pero justificaba esta política porque, según la «información confidencial», Hamás podría usarlos para «fines militares». El Informe desdeñaba la posibilidad de que el motivo tras esta prohibición fuera castigar a la población de Gaza: «Está claro que estas restricciones no se impusieron para evitar el uso de dichos materiales por parte de la población civil»[18]. Hemos buscado en vano, no obstante, pruebas de esta afirmación tajante. Más aún, el Informe defendía tanto que Israel negaba la entrada de objetos esenciales, como materiales de construcción (pero únicamente por razones de seguridad), como que «no había pruebas» de que Israel estuviera negando la entrada de dichos objetos esenciales[19]. El Informe afirmaba después que «no se habían presentado pruebas […] de que Israel impidiera el tránsito de material médico, aparte de aquellos objetos incluidos en la lista de materiales cuya entrada en la Franja de Gaza está prohibida por razones de seguridad»[20]. Pero Israel incluye en esa lista, según la Organización Mundial de la Salud, «suministros médicos vitales, como máquinas de rayos x, escáneres de exploración electrónica, material de laboratorio y artículos básicos, como ascensores para los hospitales»[21]. Si Israel estaba privando a los gazatíes de los «suministros médicos vitales», entonces les estaba negando «objetos esenciales» para su «supervivencia». El Informe también defendía incoherentemente tanto que Israel había negado el paso de objetos esenciales por razones de seguridad, como que Israel permitía la entrada de la mayoría de esos objetos –aparentemente, sin comprometer su seguridad– después de que el

ataque a la flotilla despertara la indignación internacional[22]. El Informe, finalmente, nunca abordó la pregunta obvia: ¿por qué tantas respetables organizaciones humanitarias y de defensa de los derechos humanos dieron la voz de alarma sobre una crisis humanitaria en Gaza, si no existía dicha crisis?

El resultado fue que el Informe Turkel alegaba que el bloqueo de Israel no violaba el derecho humanitario, con el extraño argumento de que los gazatíes no se estaban literalmente muriendo de hambre; que, si el umbral de la legalidad era producir hambre, entonces Israel no causaba deliberadamente el hambre, incluso aunque el hambre fuera el resultado inevitable y predecible de este bloqueo; que Israel impedía la entrada de materiales de construcción imprescindibles y que categóricamente no impedía el paso de materiales de construcción imprescindibles; y que Israel no impedía el paso de suministros médicos vitales, aunque sí impidiera el paso de suministros médicos vitales. Aunque el Informe se las apañaba para demostrar que el bloqueo era legal, lo hacía, desgraciadamente, sacrificando toda lógica, coherencia o hechos.

2. Si el daño a la población civil de Gaza era proporcional y colateral, entonces el bloqueo era legal. El Informe Turkel aplicaba un test de proporcionalidad al bloqueo[23]. Si los gazatíes experimentaban penalidades como resultado del asedio israelí, estas constituían un daño «colateral» y «proporcionado» al objetivo de seguridad, que consistía en degradar las capacidades militares de Hamás. Aunque ocasionalmente apuntaba a que el bloqueo era algo más que una medida de seguridad[24], el Informe subrayaba que este no apuntaba a la población civil. En una de sus diversas formulaciones, el Informe decía que el asedio tenía «dos metas: una meta de seguridad, para impedir la entrada de armas, munición y suministros militares dentro de la Franja de Gaza […] y una meta estratégica más amplia de “guerra económica indirecta”, cuyo fin era restringir la capacidad económica de Hamás en tanto organismo en control de la Franja de Gaza, para poder adoptar una acción militar en contra de Israel»[25]. El Informe concluía más tarde que Israel no era culpable de infligir «un castigo colectivo» porque «no hay prueba ninguna […] que apunte a que Israel está intencionadamente restringiendo productos con la única o principal intención de negárselos a la población de Gaza» (cursiva en el

original)[26]. Pero, si la intención del asedio israelí era degradar la capacidad militar de Hamás y no dañar a la población civil de Gaza, entonces habría que preguntarse por qué Israel restringía severamente el paso de productos «no considerados esenciales para la subsistencia básica de la población» y por qué permitía el paso de únicamente un «mínimo humanitario» de bienes de consumo civiles[27]. Tampoco se entendía bien por qué los funcionarios israelíes seguían repitiendo en privado que su intención era «mantener la economía de Gaza al borde del colapso, pero sin llegar a empujarla del todo al abismo»[28]. En otras palabras, ¿por qué estaba calibrado el bloqueo de tal manera que tenía a la población de Gaza al borde de un precipicio, si la población civil no era el objetivo del bloqueo? Aunque tedioso, repetitivo y repleto de minucias sobre puntos arcanos de la ley, el Informe guarda un estruendoso silencio sobre exactamente qué productos interceptaba Israel para disminuir las capacidades ofensivas de Hamás. Omite que la lista aparentemente interminable de productos verboten incluye salvia, cilantro, jengibre, mermelada, halva, vinagre, nuez moscada, chocolate, fruta en conserva, semillas y frutos secos, galletas, patatas fritas de bolsa, instrumentos musicales, cuadernos, material de escritura, juguetes, gallinas y cabras[29]. «El objetivo de la guerra económica en la Franja de Gaza», asevera el Informe, era «minar la capacidad de Hamás de atacar a Israel y a sus ciudadanos. Las restricciones en el paso de productos no relacionados con la seguridad, como las restricciones sobre algunos alimentos, son parte de esta estrategia»[30]. Claro, ¿quién pondría en duda el potencial ofensivo del chocolate, las patatas fritas y las gallinas?[31].

Ni los hechos ni el razonamiento legal que exponía el Informe Turkel refutaron la opinión consensuada de que Gaza estaba experimentando una crisis humanitaria; de que el asedio israelí estaba causando esa crisis humanitaria; de que Israel estaba deliberadamente provocando esa crisis humanitaria; de que, por lo tanto, el asedio israelí constituía una forma ilegal de castigo colectivo; y de que el uso de la fuerza contra la flotilla humanitaria, puesto que se planificó para prolongar el asedio ilegal, era también ilegal.

La segunda parte del Informe Turkel reconstruía los acontecimientos que culminaron en el asesinato de nueve pasajeros a bordo del Mavi Marmara por parte de los comandos israelíes[32]. El Informe absolvía a Israel de culpabilidad legal ante la violencia y las muertes y, en cambio, pedía responsabilidades a un grupo dirigente de pasajeros que supuestamente habrían conspirado y se habían armado por adelantado para matar a israelíes. También establecía que el uso letal de la fuerza por parte de los comandos israelíes constituía una defensa propia justificada.

Las principales conclusiones del Informe Turkel se oponían diametralmente a las de una prestigiosa Misión de investigación de la ONU[33]. Sin poder acceder a las pruebas sobre las que cada bando elaboraba sus conclusiones, sería muy complicado poder decidir entre ambas versiones. No obstante, sobre la base de su coherencia interna, y juzgando sobre hechos incontrovertibles, es posible emitir un juicio sobre qué conclusiones son más convincentes. En un punto preliminar, las fuentes en las que se basa el Informe Turkel provocan cierto escepticismo. La resolución gubernamental que fundaba la Comisión Turkel eximía a los «soldados de las IDF» de testificar ante ella[34]. El Informe, por lo tanto, tenía que depender de «declaraciones de los soldados que se documentaban únicamente por escrito y se enviaban a la Comisión»[35]. El Informe consideraba que «los testimonios de los comandos» eran «creíbles y fiables» porque «los soldados daban información detallada, usaban un lenguaje natural y no daba la sensación de que hubieran coordinado sus versiones»[36]. Sorprende qué valor probatorio puede achacarse al «lenguaje natural» de unas redacciones: ¿acaso aumentaba la credibilidad de los comandos el hecho de que tuvieran el reflejo de llamar «terrorista» a cualquiera que se cruzaba en su camino sobre el Mavi Marmara?[37]. Tampoco queda claro cómo podría la comisión decidir si los comandos habían coordinado o no de antemano sus redacciones. El Informe afirma que «los relatos de los soldados se examinaron cuidadosamente y se contrastaron unos con otros»[38]. ¿Tan raro hubiera sido que los soldados también hubieran «examinado minuciosamente, y contrastado las declaraciones» unos con otros antes de entregarlas? (Ni siquiera queda claro que el protocolo prohibiera dicha coordinación previa.) De hecho, los soldados podían inferir, antes de prestar testimonio, que no

sufrirían castigo judicial por ello y que ni siquiera tendrían que pasar un interrogatorio riguroso: «A los soldados no se les advirtió de que sus derechos estuvieran implicados cuando prestaron sus declaraciones y no sufrieron un contra interrogatorio»[39]. En general, la Comisión aceptó sin cuestionarse los testimonios de los oficiales y funcionarios israelíes, incluso aunque respetados comentaristas israelíes habían ridiculizado su historial de veracidad[40].

Con la excepción del testimonio oral de los palestinos israelíes, de declaraciones esquemáticas y en su mayoría sin firma extraídas por las autoridades penitenciarias israelíes y por los servicios de inteligencia de los detenidos de la flotilla antes de su liberación, y de un libro que publicó uno de los turcos que iban a bordo del Mavi Marmara[41], el Informe Turkel no se benefició de la contribución de los pasajeros y de la tripulación del barco. Una vez liberados, los ex-presos afirmaron que las declaraciones y las firmas fueron obtenidas bajo una presión física y emocional extrema, mientras que el material filmado en secreto de sus interrogatorios se montó de manera distorsionada[42]. El Informe alegaba que, debido a la falta de cooperación de los otros testigos, se había visto «obligado a basarse principalmente en los testimonios e informes de la parte israelí»[43]. (Amnistía informaba de que, aunque «la comisión invitó a testificar a los participantes de la flotilla, parece que sus esfuerzos para lograr sus testimonios no fueron muy entusiastas»[44].) El Informe no explicaba, no obstante, por qué los testimonios sin juramentar de los comandos israelíes constituían una prueba creíble, mientras que los testimonios de primera mano de numerosos pasajeros, accesibles en dominio público, no[45]. En un punto similar, aunque la Misión de investigación de la ONU no consiguió que el gobierno israelí colaborara con ella, sí hizo un uso extenso de los testimonios públicos disponibles antes de la Comisión Turkel, mientras que el Informe Turkel «no se molestó en utilizar los extensos testimonios de primera mano recogidos por la Misión Internacional de investigación»[46]. La yuxtaposición de estos dos hechos apunta a dos temperamentos judiciales muy distintos, de los cuales solamente uno de ellos parecía perseguir la verdad. Vamos a examinar los puntos principales en los que se enfrentan la Misión de investigación de la ONU y el Informe Turkel.

¿Qué bando inició la violencia? La Misión de investigación de la ONU concluyó que, a medida que las lanchas rápidas israelíes «se acercaban» al Mavi Marmara, fueron «disparando […] armamento no letal contra el barco, incluyendo granadas de humo y aturdidoras, gases lacrimógenos y balas de pintura» y posiblemente «balas de plástico»; y que, «minutos después», este asalto inicial israelí fue repelido por los pasajeros; y que los helicópteros israelíes intervinieron, abriendo fuego con «munición real […] sobre la cubierta superior con anterioridad al descenso de los soldados»[47]. El Informe Turkel presentaba un cuadro totalmente distinto. Sí reconocía que las normas de combate israelíes permitían «el uso de la fuerza […] necesaria para cumplir con la misión, es decir, detener los barcos», aunque esta «debe ser mínima» y debe entenderse únicamente como un «último recurso». También reconocía que las órdenes operativas permitían que «antes del estadio de la toma de control de las naves […], al mando del operativo se le permitía emplear diversas medidas para detener los barcos, incluyendo arrojar “bombas fétidas” […] obligar a los barcos a cambiar el rumbo o a detenerse mediante […] disparos al aire de aviso y “luz blanca” (cegadora, mediante el uso de un foco gigante)». Como mínimo, entonces, la planificación de la operación por parte de Israel no prohibía tajantemente el iniciar un ataque. Pero, basándose en el «testimonio a puerta cerrada del jefe del Estado Mayor», el Informe concluía que, «en la práctica, no se utilizaron esas medidas»[48]. El Informe afirma que los comandos israelíes en las lanchas motoras se acercaron al Mavi Marmara pacíficamente y que recurrieron a las pistolas de pintura y a las granadas aturdidoras únicamente después de que «encontraran resistencia»[49]. Junto a los testimonios israelíes, el Informe cita grabaciones de vídeo. No se puede evaluar esta prueba en vídeo, porque es imposible verla, aunque no podemos evitar preguntarnos por qué Israel no la puso a disposición pública después de la publicación de las conclusiones de la Misión de investigación de la ONU. Si Israel hubiera tenido una prueba convincente que refutaba la misión de la ONU, ¿por qué iba a guardarse dicha prueba, cuya publicación no podía de ningún modo plantear una amenaza para la seguridad? El Informe señala el momento preciso en el que los pasajeros recurrieron a la fuerza contra los comandos en las lanchas motoras[50]. Pero no apunta las veces en las que estos comandos recurrieron a las supuestas acciones violentas «en represalia». En un

típico non sequitur, el Informe, buscando refutar «la idea de que los activistas de IHH (Insani Yardim Vakfi) actuaban en “defensa propia”», afirma: «Buscando capturar y abordar el barco, las fuerzas israelíes tuvieron que responder a la violencia que primero desplegó el IHH. Esto queda probado en la cinta magnética que muestra los niveles extremos de violencia que se emplearon contra los soldados de las IDF»[51]. Pero el material grabado por los pasajeros que recurrían «a niveles extremos de violencia» no confirma que ellos iniciaran dicha violencia. El Informe también concluía que no se disparó con munición real desde los helicópteros israelíes que después llegaron al lugar. Sí reconocía, no obstante, que se habían arrojado granadas aturdidoras desde los helicópteros antes de que los comandos abordaran el barco. Afirmaba que los helicópteros no usaron munición real porque «el uso preciso de armas de fuego desde un helicóptero requiere tanto de un material específico como de un personal especialmente adiestrado, algo de lo que carecían los helicópteros»[52]. Pero si, por una parte, el fin de la potencia de fuego había sido –como las granadas aturdidoras– aterrorizar a los pasajeros y despejar la cubierta antes de que los comandos aterrizaran sobre ellas, entonces ni siquiera hacían falta tiradores de precisión, mientras que, por otra parte, sorprende que las unidades de combate de elite israelíes no tuvieran suficientes tiradores entrenados.

La decisión de interceptar la flotilla a altas horas de la noche parece desmentir el desarrollo secuencial que hace el Informe Turkel sobre lo que ocurrió. El Informe declara que Israel lanzó la operación a las 4.26 AM porque «durante una operación así, operar bajo el manto de las tinieblas es una gran ventaja» (citando al jefe del Estado Mayor israelí)[53]. Pero no es tan evidente por qué un ataque comando a altas horas de la noche sería una ventaja para Israel. El Informe subraya repetidamente que «a lo largo del proceso de planificación» las autoridades israelíes en todos los niveles esperaban que «los participantes en la flotilla fueran todo civiles pacíficos» y que «no parecen haber considerado necesario el uso de la fuerza». «Esperaban» que los comandos se encontraran «como mucho con resistencia verbal, empujones o golpes», con «una desobediencia civil relativamente menor», con «algunos empujones y un contacto físico limitado». El Informe citaba a los propios comandos que testimoniaban: «Esperábamos encontrarnos con

activistas que intentarían herirnos emocionalmente, creando provocaciones en el nivel de los insultos, escupitajos […] pero no esperábamos una confrontación física complicada»; «esperábamos encontrarnos con activistas pacifistas y, por lo tanto, la perspectiva de tener que usar armas o cualquier otro medio era […] casi cero»[54]. Pero, si no esperaba una resistencia física, ¿por qué no lanzó Israel la operación a pleno día, incluso transportando con ellos a personal de prensa que pudiera dar fe de sus intenciones no violentas? Una operación que se lanza a medianoche sí tendría sentido si Israel hubiera querido sembrar pánico y confusión como un preludio y como una justificación retrospectiva de un asalto violento, así como para ocultar de los testigos potenciales su violento procedimiento de ataque. Al planificar una operación así –es decir, una operación basada en el uso de la fuerza violenta–, entonces sí que claramente había «una gran ventaja al operar bajo la protección de la oscuridad». Una decisión premeditada de asaltar el Mavi Marmara también daría sentido a la amplitud y naturaleza de la planificación. Se entendería por qué Israel se entregó a unos preparativos intrincados y ramificados, que incluían todo el espectro de los aparatos político, militar y de inteligencia israelíes, entre ellos «el primer ministro y el ministro de Defensa», el «escalón superior de política y seguridad y personas con experiencia en estos campos», el «Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Justicia, oficiales de las IDF y personal de relaciones públicas»[55]; por qué «se decidió que el nivel de mando fuera muy alto, incluyendo al comandante de la Armada mismo»[56]; por qué se impuso un «apagón comunicativo» sobre la flotilla[57]; y por qué se desplegó la unidad de elite de las Fuerzas Especiales Shayatet 13, que estaba entrenada para el combate mortal, en lugar de una unidad policial rutinaria formada para enfrentarse a la resistencia civil. El Informe afirma que «los equipos de las Fuerzas Especiales con formación específica a menudo se usan cuando se espera que un abordaje se encuentre con "oposición" o con "no conformidad"»[58]. Pero, sin duda, atrapar a pasajeros dispuestos a «insultar y escupir» no requiere el despliegue de las fuerzas de combate de elite israelíes. También afirma que se emplearon las Fuerzas Especiales debido a la «formación especializada» que se necesitaba para «abordar con cuerdas rápidamente la cubierta de un barco por la noche»[59]. Pero esto sigue sin dar respuesta a la

pregunta de por qué se lanzó el ataque por la noche.

Nos podríamos preguntar por qué a Israel le preocupaba tanto destacar que no se esperaba una resistencia violenta. ¿No podría haber alegado simplemente que, aunque su intención fuera resolver pacíficamente la crisis, sí esperaba violencia, y que por eso la operación se lanzó antes del amanecer y requería de tanta planificación al estilo militar? La razón, no obstante, no es difícil de averiguar. Si los comandos hubieran estado preparados para una confrontación violenta, entonces lo que ocurrió a bordo del Mavi Marmara habría sido realmente, como se lamentaban los comentaristas israelíes, un «desgraciado fiasco» y una «humillación nacional»[60]. La única coartada que Israel podía fabricar para conservar el aura de los comandos era que la violencia les pilló desprevenidos; si la unidad de elite lo hizo tan mal era porque no se había preparado para una resistencia armada. De hecho, uno de los aspectos más cómicos del Informe Turkel eran los relatos de las gestas de los comandos, claramente diseñados para restaurar la imagen heroica de las IDF y subir la moral de la nación:

– El Soldado n.o 1[61] recordaba que «diez personas saltaron sobre mí y empezaron a golpearme brutalmente por todos lados, con porras, barras de metal y los puños»; que «unos cuantos atacantes me agarraron por las piernas y el torso y me lanzaron por la borda hasta la cubierta inferior»; que «me rompí el brazo y una multitud de docenas de personas me atacó y prácticamente me linchó – incluyendo quitarme el casco, estrangularme, meterme dedos en los ojos para sacarlos de sus órbitas, tirando de mis miembros en todas las direcciones y golpeándome de manera muy dura con porras y barras de metal, especialmente en la cabeza»–; que «recibí un golpe especialmente duro en la cabeza con una barra metálica […]. La sangre me corría por la cara debido a las heridas de la cabeza»; que después de su captura por los pasajeros lo «único» que hizo el equipo médico del barco fue «limpiarme la sangre de la frente», aunque tenía «una herida profunda en el cuero cabelludo y el cráneo fracturado» (más tarde alegaría que necesitó 14 puntos) y que –a pesar de los golpes atroces y de la sangre que manaba– consiguió librarse de uno de los guardas: «Le clavé el codo en las

costillas y salté al agua […] en cuanto toqué el agua me hundí para que no pudieran alcanzarme desde el barco. Me quité la camisa mientras nadaba y buceaba y mi intención era nadar y bucear rápidamente, en zigzag, para escapar de los enemigos que estaban en el barco. Después de mi primera inmersión, salí a la superficie del agua y vi una […] lancha» que lo rescató tras nadar «rápidamente» hacia ella, y después «cogí un rifle M16 […] y empecé a disparar […] porque me preocupaba que la turba dentro del barco quisiera secuestrar al Soldado n.o 4, que estaba aún en el barco, y quería impedírselo»[62].

– El Soldado n.o 3 recordaba: «Me golpearon con barras de metal y piedras […]. Noté un golpe muy fuerte en el cuello desde atrás»; la «gente […] me golpeaba con todas sus fuerzas con barras y porras»; «una multitud de gente me rodeaba y me daba muchos golpes, la mayoría dirigidos a la cabeza»; «seguí recibiendo fuertes golpes en el abdomen»; «luché con todas mis fuerzas hasta un cierto punto en el que se las apañaron para tirarme por la borda. Me quedé colgado de un lado, agarrándome con las manos […]. La gente que tenía encima me golpeaba en las manos y otras personas tiraban de mis piernas»; «me quedé tirado en cubierta, con mucha gente encima, una de ellas saltó sobre mí y sentí un dolor agudo en el abdomen […] y me di cuenta de que me había apuñalado […] en esa fase recibo muchos golpes, algunos con porras»; después de su captura por pasajeros, la única ayuda que recibió del equipo médico a bordo fue «una gasa», aunque «estoy sangrando abundantemente, es decir, estoy perdiendo mucha sangre y sé que parte de mis intestinos se me salen. […] También reparo en un corte profundo en el brazo izquierdo, por el que pierdo gran cantidad de sangre. También me sale sangre de la nariz y me llega a la boca»; «me ataron con cuerda de pies y manos. Colocaron a una persona encima de mí con un palo de madera […]. Me golpea con el palo de madera» y «como consecuencia de la pérdida de sangre, empiezo a marearme» y –a pesar de los golpes atroces (que le rompen la nariz y le seccionan un tendón del dedo) y de la sangre a borbotones, las heridas de cuchillo y los intestinos asomando– consigue escapar: «Corrí hasta el extremo del barco, salté al agua desde una altura de 12 metros y empecé a nadar hacia nuestros barcos»[63].

¿Sería muy injusto preguntarse si estos comandos han visto demasiadas películas de Rambo?

¿Conspiraron y se armaron los «activistas» islámicos para matar a israelíes? El Informe Turkel concluyó que los pasajeros a bordo del Mavi Marmara, el «núcleo duro», compuesto por unos 40 «activistas del IHH»[64], habrían conspirado antes de embarcarse «para resistir con violencia»[65], incluso para cometer asesinatos, y que iban en pos del martirio. «No tengo ninguna duda», testificó un mando israelí de la operación, «de que los terroristas a bordo de la nave planificaron, organizaron, previeron los acontecimientos y planearon matar a un soldado»[66]. Es evidente, concluye el Informe, que «las IHH organizaron y planificaron una confrontación violenta con las fuerzas militares israelíes»; «que el IHH tenía un plan prestablecido para oponerse con violencia al abordaje israelí»; y que «una serie de activistas de IHH participó en las hostilidades desde una perspectiva planificada y lógica mucho antes de la llegada de las fuezas armadas israelíes»[67]. El Informe alega que, contra la aplastante mayoría de pasajeros «relativamente moderados»[68], los activistas del IHH «subieron al Mavi Marmara por separado y sin ningún control de seguridad» y que así fueron capaces de colar a bordo un arsenal de armas para poder llevar a cabo su intención criminal[69]. Si sirve de algo, el gobierno turco respondió, no solamente una, sino dos veces, que «todos los miembros de la tripulación y los pasajeros fueron sometidos a […] rigurosos controles de rayos x, así como controles de aduanas y pasaporte. […] Todos sus efectos personales y la carga de los barcos se inspeccionaron y comprobaron rigurosamente […]. La carga no contenía armas, municiones o ningún otro material que pudiera constituir una amenaza»[70]. El inventario que hace el Informe del «material de combate que supuestamente subieron a bordo los participantes de la flotilla» incluía «150 chalecos protectores de cerámica […], 300 máscaras antigás […] aparatos de comunicación, aparatos ópticos (varias gafas de visión nocturna y algunos prismáticos), hondas de varios tipos, 200 cuchillos, 20 hachas, miles de rodamientos y piedras, discos de sierra, esprays de pimienta y antorchas de humo»[71]. Este repositorio de «material de combate», esta «concentración de armamento», este «material que se subió a bordo» para reforzar el plan[72] adquiere un aspecto menos siniestro cuando se yuxtapone con la lista de materiales del

Informe, que dice que «las cocinas y cafeterías del barco» tenían «en total unos 200 cuchillos», y que «el material de extinción de incendios» incluía «unas 20 hachas»[73]. Resulta increíble que esta obvia correlación no llamara la atención de la Comisión ¿o sí lo hizo? El Informe «no concluye que las pruebas apunten concluyentemente al hecho» de que los activistas del IHH llevaran armas de fuego a bordo del Mavi Marmara[74]. Pero, si planificaban «una confrontación violenta» con una de las mayores potencias militares mundiales, y si podían llevar libremente a bordo las armas a su elección, sorprende que los complementos más mortíferos que se les ocurriera llevar fueran hondas y canicas. ¡Si es que estos shaheeds no pueden ser más meshugge! El Informe señala que, justo antes de que empezara la operación israelí, los extremistas islámicos «improvisaron» armas, como barras de hierro y palos de madera[75]. La Comisión, aparentemente, nunca se planteó la pregunta obvia: si estaban más que dispuestos a cometer sangrientos asesinatos «mucho antes de que aparecieran las fuerzas armadas israelíes», ¿por qué los islamistas no subieron a bordo armas de fuego, y por qué esperaron hasta el último minuto antes de fabricar armas improvisadas?

La Misión de investigación de la ONU «no encontró pruebas de que ninguno de los pasajeros usara armas de fuego […] en ningún momento»[76]. Pero, mientras que el Informe Turkel no encontró pruebas de que los pasajeros hubieran llevado consigo armas de fuego, aun así concluía que «miembros activistas de las IHH usaron armas de fuego contra las fuerzas israelíes»[77], que presumiblemente tomaron de los comandos después de herir a dos de ellos. El Informe afirmaba que había consultado «informes médicos sobre las heridas de los soldados»[78]. Pero no citaba los registros hospitalarios que documentaran las supuestas heridas de bala de los comandos; en lugar de ello, citaba una declaración presentada por las IDF y el testimonio oral del jefe del Estado Mayor[79]. En el caso de las heridas no de bala sufridas por los comandos, el Informe sí cita los archivos del hospital[80]. Puesto que el Informe no puede citar los registros del hospital que demuestren las supuestas heridas de bala, es dudoso que existan, pero incluso si existieran, bien podrían haber sido infligidas por otros comandos israelíes. El Informe mismo reconoce que «la melé a bordo del Mavi Marmara, especialmente durante los primeros

momentos sobre la cubierta superior, fue una situación de considerable confusión»[81]. De hecho, uno de los comandos que supuestamente fue herido de bala pensó en un primer momento que su herida había sido producida «por las fuerzas israelíes»[82]. El Informe enumera tres razones para concluir que los pasajeros usaron armas de fuego: «la evidencia física de heridas de bala» –que no dice nada sobre el origen de esos disparos–; «declaraciones de numerosos soldados» –tan creíbles como sus fantasías de Rambo–; y «el hecho de que los activistas del IHH tenían acceso a las armas capturadas a las IDF» –lo que no prueba nada–[83]. Entonces, ¿por qué iba a concluir el Informe, basándose en unas pruebas tan débiles, que los pasajeros usaron armas de fuego contra los comandos? El Informe mismo nos proporciona una respuesta. Mientras que defiende que el recurso de los comandos a la fuerza letal habría estado justificado incluso si los pasajeros no les hubieran disparado[84], el Informe viene a decir que «el uso de armas de fuego por parte de los activistas del IHH es un factor importante», porque «aumentaba significativamente el riesgo al que se enfrentaban los soldados, así como su percepción de dicho riesgo», y «establecer el nivel de amenaza que los soldados israelíes creían estar enfrentando es un factor en la evaluación de si su respuesta fue proporcionada»[85]. Si el Informe quería concluir definitivamente que el recurso a la fuerza letal por parte de los comandos estaba legalmente justificado, tenía que encontrar pruebas de que los pasajeros usaron armas de fuego contra ellos. La disculpa predeterminada dictaba los hallazgos indiciarios.

El Informe Turkel citaba los relatos espeluznantes de los comandos capturados sobre las intenciones asesinas de los islamistas. El Soldado n.o 1 testificaba que «los grupos terroristas querían atacarme y matarme». El Soldado n.o 3 testificaba que estaban «enloquecidos» y «deseando matarlos. Intentaron estrangularnos a mí y al Soldado n.o 4. El odio brillaba en sus ojos»; «Intentaron estrangularme varias veces»[86]. El Informe también destaca que el grupo de asesinos islámicos estaba formado por «hombres altos y fuertes, entre las edades de 20 y 40 años», «muy grandes y robustos»[87], y que «algunos de esos activistas habían expresado su deseo de ser shaheeds»[88]. La cuestión obvia es: ¿cómo es que esta turba de shaheeds maníacos y homicidas no consiguió matar a ninguno de los comandos capturados? Citando a los comandos, la

respuesta imperturbable del Informe es que los pacifistas a bordo –«hombres mayores y mujeres que mostraban contención», «activistas pacifistas no violentos»– acudieron al rescate de los comandos. «El grupo terrorista quería atacarme y matarme, mientras que el grupo moderado intentaba protegerme»; «Había allí dos grupos, el que intentó matarme y […] quienes impidieron al grupo extremista que nos matara»[89]. En otras palabras, los yihadistas enloquecidos fueron paralizados por Abuelitas por la Paz y la Brigada Birkenstock.

¿Usaron los comandos israelíes la fuerza letal como último recurso? «La conducta de los militares israelíes y del resto de personal frente a los pasajeros de la flotilla no solamente fue desproporcionada para la ocasión», concluía la Misión de Investigación de la ONU, «sino que demostró niveles de violencia totalmente innecesarios e increíbles. Delataba un nivel de brutalidad inaceptable»[90]. El Informe Turkel concluía que, por el contrario, los comandos ejercitaron una contención máxima y que usaron la fuerza letal únicamente como último recurso. Declaraba que, durante los preparativos de Israel para la intervención, se prestó «una atención especial» al «valor de la vida humana» y que «todas las personas implicadas» mostraron «un alto nivel de conciencia […] sobre la necesidad de llevar a cabo la operación sin que ninguno de los participantes de la flotilla saliera herido»; que tanto las normas del combate como las órdenes operativas, o ambas, estipulaban que, «si había que recurrir a la fuerza, tendría que ejercitarse gradualmente y en proporción a la resistencia encontrada, y solamente después de examinar alternativas que evitaran el deterioro de la situación»: «el único caso en el cual se permitía el uso de armas letales era en defensa propia, para evitar un peligro real e inminente de muerte, siempre que ese peligro no pudiera evitarse por medios menos gravosos»; que «la formación y preparación de los soldados previa a la operación fue exhaustiva, con un énfasis particular en el uso de armas menos letales», «la posición por defecto era usar armas menos letales hasta que una amenaza opuesta obligara al uso de opciones letales»; que se afirmaba en un resumen operativo que «abrir fuego solamente debería tener lugar en una situación en la que la vida estuviera amenazada, para neutralizar a la persona que presentaba el peligro, pero que, sin embargo, “siempre que fuera posible” debería darse el beneficio de la duda»; que, incluso después

de que se pudieran oír «disparos» en el Mavi Marmara, «el mando del Shayetet 13 se negó a aprobar que se disparara “para evitar muertes entre los participantes de la flotilla”»; y que «los soldados de las IDF hicieron un uso considerable de la fuerza graduada» –es decir, «disparar a las piernas y los pies de una persona»– «durante la operación, con los soldados alternando repetidamente entre armas letales y menos letales», incluso después de que los pasajeros supuestamente usaran armas de fuego contra ellos[91]. Los comandos israelíes estuvieron tan pendientes del bienestar de los pasajeros, según el Informe, que después del sangriento enfrentamiento «algunos heridos de las IDF recibieron tratamiento únicamente después de que se curara a los participantes de la flotilla heridos»; el mando de la fuerza atacante testificó que arriesgó «poner en peligro a mi gente dentro de la nave» con tal de «evacuar a los [pasajeros] heridos del barco, a pesar de su falta de deseo de ser evacuados, para así salvar sus vidas»[92]. El Informe concluía que «el personal de las IDF actuó con profesionalidad frente a una violencia generalizada y no anticipada» y que no «sobrerreaccionó»[93].

La manera en que murieron los nueve pasajeros a bordo del Mavi Marmara parece desmentir el relato del Informe Turkel. La Misión de investigación de la ONU descubrió que «las circunstancias de la muerte de al menos seis de los pasajeros se produjeron de una manera coherente con una ejecución extralegal, arbitraria y sumaria»[94]. El propio Informe relata los hallazgos de un «examen externo» por parte de médicos israelíes, según el cual todos los pasajeros muertos sufrían múltiples heridas de bala y cinco de ellos recibieron un tiro en la nuca; por ejemplo –citamos el examen israelí–, el «Cuerpo n.o 2» tenía «heridas de bala en el lado derecho de la cabeza, en la parte derecha de la nuca, en la mejilla derecha, bajo la mandíbula, en la parte derecha de la espalda y en un muslo. Se le palpó una bala en la parte izquierda del pecho»; mientras que el «Cuerpo n.o 9» contenía «heridas de bala en el área de la sien derecha y nuca, herida de bala en el pezón izquierdo, herida de bala en el lado izquierdo de la cabeza, herida de bala en la cara (nariz), herida de bala en el torso izquierdo, herida de bala en el lado derecho de la espalda, dos heridas de bala en el muslo izquierdo, dos heridas de bala como resultado de una bala atravesando los dedos 4 y 5 del pie izquierdo»[95]. El Informe no trata de cuadrar

estos hechos macabros de las muertes de los pasajeros con su sublime hallazgo de que los comandos ejercieron una contención máxima. A lo más que llega es a mencionar brevemente en otro contexto, y no refiriéndose específicamente a los pasajeros fallecidos, que «en algunos momentos, se dispararon numerosas ráfagas, bien por un soldado o por más de un soldado para detener a un activista de las IHH que constituía una amenaza para sus propias vidas o para las de otros soldados»[96]. Lo que es más, el Informe no mostraba ninguna curiosidad por las muertes de los pasajeros, que se despachan tranquilamente en solamente dos de las casi trescientas páginas del Informe[97]. El Informe citaba los testimonios escalofriantes de los comandos israelíes acerca de cada rasguño que habían sufrido, pero no gastaba ni una palabra en contar cómo pudo ser que, a pesar de haber tomado todas las precauciones posibles y ejercitar la mayor contención concebible, los comandos acabaran asesinando a nueve pasajeros, disparando a casi todos ellos numerosas veces[98]. Tal vez la Comisión olvidó –¿olvidó?– requerir información específica sobre sus muertes[99], o tal vez los comandos olvidaron –¿olvidaron?– mencionar estas muertes en sus declaraciones. Ninguna de las dos posibilidades deja en muy buen lugar a la credibilidad del Informe. El Informe declaraba que «la Comisión ha examinado todos los casos del uso de la fuerza que han declarado los soldados de las IDF en sus testimonios». Pero no se molestó en mencionar si alguno de estos testimonios narraba las muertes de los nueve pasajeros[100]. También declaraba que «la Comisión ha examinado 133 incidentes en los que se utilizó la fuerza […] que fueron descritos por más de 40 soldados […] y también incluye unos pocos incidentes que se describieron en las cintas magnéticas relevantes y que no se corresponden con los testimonios de los soldados»[101]. Pero no se molesta en mencionar si los medios magnéticos captaron o no los asesinatos de ninguno de los pasajeros. Además, mientras que la Misión de investigación de la ONU pidió los informes de las autopsias turcas, la Comisión Turkel aparentemente no lo hizo[102]. La cuestión era que, aunque el asesinato de los nueve pasajeros a bordo del Mavi Marmara había despertado una indignación internacional, el Informe no contenía una sola sílaba acerca de cómo había muerto ninguno de ellos. Únicamente una vaga alusión enterrada en una nota a pie de página, citando a un comando que «disparó dos o tres ráfagas hacia el centro de una

multitud y hacia abajo y una ráfaga hacia las cabezas (el soldado testificó que después de disparar esa última ráfaga el personal de las IHH [sic] cayó y él detuvo el fuego)»[103]. El Informe tenía tal afán de demonizar a los pasajeros muertos, y a la vez le preocupaba tan poco cómo fue que murieron, que no se da cuenta de la extraña paradoja que albergan sus conclusiones: los shaheeds conspiraron y se armaron para matar a israelíes, pero no consiguieron matar ni siquiera a aquellos que habían atrapado, mientras que los israelíes tomaron todas las precauciones posibles y ejercitaron toda la contención posible para no matar a nadie, pero terminaron por matar a nueve personas. Para que no pensemos que a Israel no le conmovía la tragedia de los pasajeros, el Informe registra puntualmente que un tribunal militar condenó a un cabo a cinco meses de cárcel por robar un ordenador portátil, dos objetivos de cámara y una brújula[104].

En el prefacio al Informe, los miembros de la Comisión Turkel –que incluyen a un exjuez del Tribunal Supremo, un exdirector general del Ministerio de Asuntos Exteriores, un expresidente de un distinguido instituto científico, un respetado catedrático de Derecho y un observador extranjero que ganó el Premio Nobel de la Paz– afirmaban que «asumimos conjuntamente y como individuos la tarea difícil y agotadora de esclarecer la verdad». El Departamento de Estado de Estados Unidos elogió la investigación que culminó en el Informe como «creíble e imparcial y transparente», y al documento en sí como «independiente»[105]. Lamentablemente, ni la información fáctica ni el análisis legal del Informe arroja ninguna luz sobre lo que ocurrió en aquella desgraciada noche del 31 de mayo de 2010. La única reflexión que suscita el Informe es: ¿cómo puede haber firmado esta basura cualquier individuo que se respete a sí mismo? Pero más allá de este sórdido espectáculo de degradación moral asoma, si bien de manera inversa, un testamento inspirador sobre la majestad de la austera Verdad. «Oh, qué intrincada red tejemos», decía Walter Scott, «la primera vez que practicamos el engaño». Si la Comisión Turkel se enredó en 1.000 penosos nudos fue porque no se propuso encontrar la Verdad, sino defender a Israel a cualquier precio.

[1] Public Commission to Examine the Maritime Incident of 31 May 2010, The Turkel Commission Report, Part One (enero de 2011); a partir de ahora, Informe Turkel. (La segunda parte de este Informe, Israel's Mechanism for Examining and Investigating Complaints and Claims of Violations of the Laws of Armed Conflict, se publicó en febrero de 2013. No se ocupaba directamente de los acontecimientos del 31 de mayo de 2010, por lo que aquí no lo tratamos, pero véase cap. XIII.) Poco después de la publicación del Informe Turkel, el gobierno turco publicó las conclusiones de su propia investigación, Turkish National Commission of Inquiry, Report on the Israeli Attack on the Humanitarian Aid Convoy to Gaza on 31 May 2010 (febrero de 2011); a partir de ahora, Informe turco.

[2] Informe Turkel, cit., §16.

[3] Véase cap. I.

[4] Informe Turkel, cit., §1.

[5] El Informe Turkel sí mencionaba después los ataques israelíes sobre Gaza (§§ 16, 18), pero los consideraba en represalia (Israel «respondía»), mientras que, en realidad, las pausas en el conflicto entre Israel y los palestinos fueron «mayoritariamente» interrumpidas por Israel. Véanse caps. I y II.

[6] Informe Turkel, cit., p. 48, n. 143, §§ 45-47.

[7] Ibid., § 19.

[8] Véase cap. II.

[9] Informe Turkel, cit., § 72.

[10] Ibid., § 73.

[11] Ibid., § 71.

[12] Ibid., §§ 72, 76. El Informe citaba la definición de «inseguridad alimentaria» que usa la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU: «Cuando la gente carece de un acceso físico o económico a alimentos adecuados, seguros, nutritivos y

socialmente aceptables para poder mantener una vida saludable y productiva».

[13] Ibid., §§ 76, 77.

[14] Véase D. Guilfoyle, «The Mavi Marmara Incident and Blockade in Armed Conflict», British Yearbook of International Law (2011), pp. 197-204, que defiende que el derecho internacional no prohíbe únicamente la muerte de hambre literal y que no respalda la prohibición de introducir productos alimenticios en Gaza mientras su población esté hambrienta.

[15] Para un rebuscado reconocimiento de que el derecho internacional prohíbe los bloqueos que no solamente causen muertes por hambre («bloqueos de hambre»), sino también «ejemplos menos extremos» de «sufrimiento», véase Informe Turkel, cit., § 90 (véase también ibid., p. 102, n. 363).

[16] Ibid., § 76, cursivas añadidas.

[17] Sobre este punto, véase también D. Guilfoyle, «Mavi Marmara Incident», cit., p. 200.

[18] Informe Turkel, § 79.

[19] Ibid., §§ 80 («No hay [...] pruebas [...] de que Israel esté negando objetos esenciales para la supervivencia de la población civil»), 90 («Israel no ha impedido el paso de objetos esenciales para la supervivencia de la población civil»).

[20] Ibid., § 82.

[21] L. Schlein, «WHO: Medical supplies blocked from entering Gaza», Voice of America, 31 de mayo de 2010.

[22] Informe Turkel, §§ 19, 68, 97. El Informe también afirmaba repetidamente que romper el bloqueo era innecesario, puesto que Israel expresó previamente a la flotilla su disposición a llevar provisiones «humanitarias» en barco hasta Gaza. Pero el Informe también deja claro que provisiones «humanitarias» no incluían objetos prohibidos que llevaba la flotilla, como cemento y otros materiales de construcción (véase ibid., §§ 3, 27, 110, 113, 149,

198).

[23] Bajo el derecho humanitario, la proporcionalidad de un ataque se define como la prohibición de «lanzar un ataque que se espera que produzca pérdidas incidentales de vidas civiles, heridas a civiles, daño a objetos civiles o una combinacion de esto, que sería excesivo en relación con las ventajas militares directas y concretas esperadas». International Committee of the Red Cross, Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules, Cambridge, 2005, norma 14.

[24] Informe Turkel, §§ 50, 63. Para un análisis en detalle, véase cap. IX.

[25] Informe Turkel, cit., § 67.

[26] Ibid., § 106.

[27] Véase cap. II.

[28] «Cashless in Gaza?», WikiLeaks, 3 de noviembre de 2008.

[29] Gisha (Legal Center for Freedom of Movement), Partial List of Items Prohibited / Permitted in the Gaza Strip, mayo de 2010.

[30] Informe Turkel, cit., § 91.

[31] En un momento dado el Informe parece conceder que Israel restringió el paso de alimentos «empleados únicamente para las necesidades civiles», pero después justifica esta política (aunque con advertencias) invocando las sanciones genocidas de Gran Bretaña y Estados Unidos sobre Irak (ibid., §§ 91-93). Sobre las sanciones iraquíes, véase J. Gordon, Invisible War: The United States and the Iraq sanctions, Cambridge, 2010.

[32] Véase cap. VII.

[33] UN Human Rights Council, Report of the International Fact-Finding Mission to Investigate Violations of International Law, Including International Humanitarian and Human Rights Law, Resulting from the Israeli Attacks on the Flotilla of Ships Carrying Humanitarian Assistance, 27 de septiembre de 2010; a partir de

ahora, Report of the Fact-Finding Mission. Véase cap. VII para las conclusiones del Informe de la ONU.

[34] Israel Ministry of Foreign Affairs, «Government Establishes Independent Public Commission», 14 de junio de 2010.

[35] Informe Turkel, cit., § 237.

[36] Ibid., § 236.

[37] El Informe Turkel señalaba expresamente la excepción de un comando que llamó «activistas» a sus asaltantes (ibid., p. 157, n. 533).

[38] Ibid., § 236.

[39] Ibid., § 237.

[40] Véase cap. III.

[41] Informe Turkel, §§ 9, 237, pp. 211, n. 736 y p. 212, n. 737. Citaba el testimonio de un israelí palestino, pero únicamente para desacreditarlo mediante el testimonio de otro israelí palestino. También citaba el testimonio crucial del capitán del Mavi Marmara durante su interrogatorio, pero únicamente para desecharlo sin contemplaciones basándose en el testimonio contrario de un vigilante aéreo israelí (ibid., §§ 144, 125, 203).

[42] Informe turco, cit., pp. 40-42, 44, 47, 108.

[43] Informe Turkel, cit., §§ 9, 237.

[44] Amnesty International, «Israeli Inquiry into Flotilla Deaths No More than "Whitewash"», 28 de enero de 2011.

[45] Para ejemplos de estos testimonios, véase M. Bayoumi, (ed.), Midnight on the Mavi Marmara: The Attack on the Gaza Freedom Flotilla and How it Changed the Course of the Israel / Palestine Conflict, Nueva York, 2010, parte 1. De manera excepcional, el Informe hace al final referencia de pasada, en una larga nota a pie de página, a una entrevista en Haaretz con uno de los pasajeros (Informe Turkel, cit., pp. 202-203, n. 703).

[46] Amnesty, «Israeli Inquiry», cit.

[47] Report of the Fact-Finding Mission, cit., §§ 112-114. La Misión se refiere a las lanchas israelíes como zódiacs, mientras que el Informe Turkel las llama Morenas.

[48] Informe Turkel, cit., § 121.

[49] Ibid., § 128.

[50] Ibid., § 130.

[51] Ibid., § 200.

[52] Ibid., § 230.

[53] Ibid., § 174.

[54] Ibid., §§ 132, 180, 213, 243, 244, p. 149, n. 518. El Informe afirma que «en las discusiones estratégicas anteriores a la operación, se mencionó la posibilidad de que hubiera armas de fuego», pero que no tuvo consecuencias prácticas (ibid., p. 247, n. 863, § 243).

[55] Ibid., §§ 115-122.

[56] Ibid., § 121.

[57] Ibid.

[58] Ibid., § 182.

[59] Ibid., § 242.

[60] Véase cap. VII.

[61] Son las designaciones numéricas que se usan en el Informe.

[62] Informe Turkel, cit., §§ 133, 135, 140.

[63] Ibid., §§ 133, 135, 140, p. 250, n. 871.

[64] Ibid., §§ 165, 192.

[65] Ibid., § 169.

[66] Ibid., § 167.

[67] Ibid., §§ 196, 199, 201, 220.

[68] Ibid., § 136.

[69] Ibid., §§ 165, 196.

[70] Informe turco, cit., pp. 15-16, 56, 113.

[71] Informe Turkel, cit., § 165. El Informe Turkel afirmaba que «cuatro casquillos de bala que no usaban las IDF se encontraron a bordo», pero «no puede decirse con completa certeza que fueran balas disparadas desde un arma que no pertenecía a las IDF, puesto que no puede descartarse que estas balas llegaran de alguna manera a la munición de las IDF». El Informe también cita, pero parece no tener en cuenta, el testimonio de un oficial de las IDF que «vio cócteles molotov colocados en montones ordenados» (ibid., p. 207, n. 718, § 145).

[72] Ibid., p. 211, nn. 735, 736, § 169.

[73] Ibid., § 167.

[74] Ibid., § 221.

[75] Ibid., § 167.

[76] Report of the Fact-Finding Mission, cit., §§ 116, 165.

[77] Informe Turkel, cit., § 222.

[78] Ibid., § 236.

[79] Ibid., pp. 155, n. 529, p. 157, n. 531, § 221.

[80] Ibid., p. 250, nn. 871, 873.

[81] Ibid., § 222.

[82] Ibid., § 221. Se puede recordar aquí que casi la mitad de las

bajas en combate israelíes durante la Operación Plomo Fundido fueron producidas por «fuego amigo» (véase cap. IV).

[83] Informe Turkel, cit., § 222.

[84] Ibid., §§ 217-219.

[85] Ibid., §§ 220, 223.

[86] Ibid., §§ 135, 136, 140.

[87] Ibid., §§ 136, 167.

[88] Ibid., §§ 166, 168, 197.

[89] Ibid., §§ 135, 136, 167, 190.

[90] Report of the Fact-Finding Mission, cit., §264 (véase también ibid., §§167, 169, 172).

[91] Informe Turkel, cit., §§ 119, 121, 140, 206, 223, 228, 229, 245.

[92] Ibid., §§ 141, 142.

[93] Ibid., §§ 239, 246.

[94] Report of the Fact-Finding Mission, cit., § 170.

[95] Informe Turkel, § 155.

[96] Ibid., § 230.

[97] Ibid., § 155. El Informe contenía dos referencias más a las nueve muertes (ibid., §§ 143, 168).

[98] El Informe turco declaraba (pp. 27-28) que dos pasajeros fueron «asesinados por una única herida de bala». Tal vez omitía mencionar sus heridas de bala no mortales. La Misión de investigación de la ONU afirmaba que todos los fallecidos, excepto uno, presentaban múltiples heridas de bala.

[99] En la sección dedicada a analizar «el uso de la fuerza por parte

de los soldados de las IDF durante la operación de asalto», el Informe afirmaba que «la Comisión envió peticiones por escrito a las autoridades de las IDF siete veces, para profundizar y ampliar las investigaciones que se estaban llevando a cabo» (Informe Turkel, § 236).

[100] Ibid., § 233. Señalaba que los «testimonios detallados de los soldados, así como su análisis, pueden encontrarse en un anexo al informe» (ibid., § 235). Este anexo parece que nunca fue puesto a disposición del público.

[101] Ibid., § 239.

[102] El Informe afirmaba solamente que la Comisión «no había accedido a los informes de la autopsia […] por el requerimiento del gobierno turco, inmediatamente después de los acontecimientos, de que el gobierno israelí no practicara autopsias a los cadáveres de las víctimas» (§ 237). La autopsia turca concluía que «cinco de los fallecidos fueron disparados en la cabeza desde muy poca distancia» (Informe turco, pp. 26, 85, 114).

[103] Informe Turkel, cit., p. 261, n. 929.

[104] Ibid., § 160.

[105] US Department of State, «Daily Press Briefing», 24 de enero de 2011.

IX. LAVADO DE CARA II: EL INFORME DEL COMITÉ DE LA ONU

El ataque mortal de Israel sobre el Mavi Marmara se negaba a desaparecer de la vista. Turquía no cedía en su petición de responsabilidad y, como es un Estado con cierta posición dentro de la comunidad internacional, parecía mejor situada que Gaza para obtener esa satisfacción. El presidente del Consejo de Seguridad de la ONU publicó una declaración el 1 de junio de 2010 (el día después del incidente) pidiendo «una investigación rápida, imparcial, creíble y transparente, según los criterios internacionales»[1]. Inicialmente se atascó, puesto que Israel se oponía a una investigación internacional, sin duda porque una investigación verdaderamente independiente por fuerza llegaría a las conclusiones condenatorias de la Misión de investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU[2]. Pero Ban Ki-moon, siempre atento a las señales que emanaban de la Casa Blanca, acudió al rescate de Israel. Negoció la creación de un Comité de Investigación (a partir de ahora, Comité de la ONU) con un encargo descafeinado; no se le encargó llevar a cabo «una investigación imparcial, creíble y transparente», sino simplemente «revisar [...] los informes de las investigaciones nacionales sobre el incidente»[3]. Para atar todos los cabos, Ban nombró al especialmente corrupto y criminal Álvaro Uribe, el expresidente de Colombia, que era también un declarado defensor de unos vínculos militares más estrechos entre Colombia e Israel, como vicepresidente del Comité[4] (el presidente era un ex primer ministro de Nueva Zelanda). Israel entonces dio marcha atrás y accedió a la propuesta del secretario general mientras proclamaba que «no tenía nada que ocultar»[5]. Era predecible –y se predijo en su momento– que el Comité haría un lavado de cara[6]. Aun así Tzipi Livni, la líder de la oposición israelí, lamentó la creación de un Comité de la ONU, porque «la intervención internacional en las operaciones militares llevadas a cabo por Israel es inaceptable. [...] Israel está investigando por sí mismo los acontecimientos de la flotilla y con eso basta»[7]. Claro que sí: ¿a quién se le ocurre que el asesinato de extranjeros por parte de Israel en aguas internacionales no sea un asunto interno israelí? El Report of the Secretary-General’s Panel of

Inquiry on the 31 May 2010 Flotilla Incident se publicó en julio de 2011. Basándose en el Informe Turkel israelí[8] y en un informe recíproco proporcionado por Turquía, el Comité de la ONU describe «los hechos, circunstancias y contexto del incidente» y «recomendaba maneras de evitar incidentes similares en el futuro»[9]. Aunque concluía que el asesinato de los nueve pasajeros por parte de Israel a bordo del Mavi Marmara no podía justificarse, el Comité respaldaba el argumento central de Israel de que el bloqueo naval de Gaza era legal. Por si la población de Gaza no había sufrido suficiente, ahora el secretario general ponía el sello de la ONU al principal instrumento de su tortura continuada. El informe en sí fue probablemente el documento más mendaz y degradante que nunca se haya publicado bajo la égida de la ONU.

El Comité de la ONU alegaba que Israel tenía derecho a imponer un bloqueo naval sobre Gaza con el fin de defenderse contra los ataques de misiles y morteros de Hamás. El contexto histórico que esbozaba el Comité era tan sesgado como el que presentaba Israel en su propia investigación[10]. «Israel se ha enfrentado y continúa enfrentándose a una amenaza real para su seguridad, procedente de los grupos militantes de Gaza», señalaba el Comité. «Proyectiles, misiles y bombas mortero han sido arrojadas sobre Israel desde Gaza [...]. Desde el año 2001, esos ataques han producido más de 25 muertes y cientos de heridos»[11]. El Comité no dedicaba una sola palabra a los ataques israelíes sobre Gaza. Desde el año 2001, es decir, durante ese mismo periodo, las incursiones israelíes asesinaron a unos 4.500 gazatíes, en su gran mayoría civiles[12]. Según el Comité, «el fin de estos actos violentos [de Hamás], que han sido repetidamente condenados por la comunidad internacional, ha sido producir daños a la población de Israel»[13]. Pero un estudio publicado en la revista de la National Academy of Sciences establecía que la violencia palestina dirigida hacia Israel «respondía a un patrón de respuesta a un ataque»[14]. Si el Comité no podía concebir que la violencia palestina fuera reactiva, esto se debía a que, en su opinión, los asaltos israelíes iniciales no habían ocurrido; solamente los gazatíes disparaban «proyectiles, misiles…». El Comité aparentemente desconocía que los ataques israelíes sobre Gaza también «habían sido condenados repetidamente por la comunidad internacional». El Comité afirmaba que «parece lo bastante obvio que detener estos actos de violencia [de Hamás] era

un paso necesario que debía adoptar Israel para proteger a su población y para defenderse a sí misma»[15]. Si el Comité se hubiera percatado de las muertes palestinas, tal vez habría sido «lo bastante obvio» que Hamás tenía derecho a imponer un bloqueo naval sobre Israel «con el fin de proteger a su población y defenderse a sí misma». Amnistía Internacional señalaba que es ilegal, según el derecho internacional, transferir armas a quien viola repetidamente los derechos humanos y que, por lo tanto, habría que imponer «un embargo de armas, total e inmediato», tanto a Hamás como a Israel[16]. Si el Comité pasaba por alto este hecho «lo bastante obvio» quizá fuera porque su vicepresidente Uribe, en una de sus diatribas periódicas contra las organizaciones de defensa de los derechos humanos, había denunciado la «ceguera» y el «fanatismo» de Amnistía[17].

El Comité de la ONU concluía que el bloqueo naval de Israel sobre Gaza constituía una «medida legítima de seguridad […] y que su implantación cumplía con los requisitos del derecho internacional»[18]. Pero el Comité también «recalcaba» repetidamente que «no se le había pedido que determinara los asuntos legales» y que «no se le había pedido que determinara la legalidad o no de los acontecimientos»[19]. Si a pesar de ello emitía esos juicios legales, solamente podía ser porque quería validar innecesariamente el estrangulamiento de Gaza por parte de Israel. El Comité afirmaba que «no le sirve para nada a las Naciones Unidas […] seguir discutiendo hasta la saciedad sobre la ley que debe aplicarse»[20]. Sin embargo, dedicaba la mayor parte de su informe (incluyendo un apéndice de 25 páginas) a un análisis legal del bloqueo que eximía de culpas a Israel. La absolución de Israel era el único veredicto legal que emitía el Informe. Establecía que el bloqueo terrestre de Israel sobre Gaza y el asesinato de nueve pasajeros a bordo del Mavi Marmara eran ambos «inaceptables». Pero no decía que fueran acciones ilegales, ni mucho menos criminales[21]. El Comité afirmaba que no podía entregar «conclusiones definitivas de hecho o derecho» porque no pudo «obligar a los testigos a proporcionar pruebas» y no pudo «llevar a cabo una investigación penal». No obstante, a continuación afirmaba que sí «podía dar su opinión»[22]. Pero si podía «dar su opinión» sobre el carácter legal

del bloqueo naval sin poseer esas facultades judiciales, sin duda podría haber dado una opinión sobre la legalidad del bloqueo terrestre y sobre los asesinatos de los nueve pasajeros. En otras palabras, el único veredicto potencialmente consecuente que pudo alcanzar el Comité era favorable a Israel, mientras que sus juicios desfavorables sobre Israel se reducían a poco más que palmetazos retóricos. En contraste, Amnistía consideraba que el bloqueo israelí era «una violación flagrante del derecho internacional»[23], mientras que la Misión de investigación del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que investigaba el asalto a la flotilla, establecía que «las circunstancias de la muerte de al menos seis de los pasajeros se produjeron de una manera que encaja con una ejecución extralegal, sumaria y arbitraria»[24]. El Comité también deshacía la ley cuando le convenía a Israel. Así, se refiere a «un estatus legal incierto de Gaza bajo el derecho internacional», aunque el consenso legal era que, incluso después de la «desconexión» israelí de 2005, Gaza seguía siendo un territorio «ocupado»[25].

El argumento que fabricó el Comité de la ONU para justificar el bloqueo naval de Israel contenía unas secuencias de proposiciones relacionadas entre sí:

1. El bloqueo naval israelí sobre Gaza no tenía relación con el bloqueo terrestre;

2. Israel se enfrentaba a una amenaza de seguridad novedosa, procedente de las aguas costeras de Gaza, cuando impuso el bloqueo naval;

3. Israel impuso el bloqueo naval como respuesta a esta amenaza para su seguridad;

4. El bloqueo naval era el único medio del que disponía Israel para enfrentarse a esa amenaza para su seguridad;

5. El bloqueo naval israelí alcanzó sus objetivos de seguridad sin causar un daño desproporcionado a la población civil de Gaza.

Para dictaminar que el bloqueo naval era legal, el Comité tenía que defender todas y cada una de estas afirmaciones. Con que una de ellas fuera falsa, la defensa del bloqueo se desmoronaba. Lo sorprendente era que todas ellas eran falsas. Vamos a abordar estas afirmaciones una a una.

Afirmación espuria n.o 1: el bloqueo naval israelí sobre Gaza no tenía relación con el bloqueo terrestre. El objetivo dual del bloqueo israelí era evitar que llegaran armas a Gaza y desestabilizar al régimen de Hamás bloqueando el paso de artículos vitales para la población civil. Las ramas naval y civil del bloqueo constituyen, tanto en su concepción como en su ejecución, dos mitades complementarias de la estrategia israelí, en la que la eficacia de una rama dependía de la eficacia de la otra. Pero la premisa fundamental del Comité de la ONU era que el bloqueo naval israelí era independiente del bloqueo terrestre. Alegaba que, mientras que en el bloqueo terrestre sí estaba ese doble objetivo, el bloqueo naval era una simple medida de seguridad y que, por lo tanto, era legal. El Comité se inventaba esta bifurcación que no tenía ninguna base real. De hecho, incluso el gobierno israelí negaba esa distinción. El Comité se la inventó para evitar tener que hacer un juicio legal sobre el castigo colectivo a la población civil de Gaza; declaraba que sus órdenes eran evaluar legalmente únicamente ese bloqueo naval, del que se alegaba que era independiente y distinto. Pero, simultáneamente, el Comité apoyaba el derecho de Israel de infligir ese castigo colectivo declarando que Israel actuaba en defensa propia contra el contrabando de armas cuando bloqueaba a las flotillas.

Desde el inicio de la ocupación, en 1967, Israel había regulado el paso de bienes y personas tanto en las fronteras terrestres como en las fronteras marítimas de Gaza. Después de que Hamás consolidara su control de Gaza en 2007, Israel impuso un bloqueo aún más severo[26]. El motivo tras el bloqueo era doble: un objetivo de seguridad, que buscaba prevenir que entraran armas en Gaza; y un objetivo político, que buscaba conducir a la economía gazatí «al borde del abismo» (tal como los funcionarios israelíes repetían una y otra vez en privado), para castigar a los gazatíes por haber elegido a Hamás y conseguir que lo repudiaran. La lista de objetos que Israel impedía que entraran en Gaza –como el chocolate, las patatas

fritas y las gallinas– indicaban el aspecto político irreductible del bloqueo[27]. El Comité de la ONU, que citaba el Informe Turkel de Israel, sí reconocía que el bloqueo israelí estaba «diseñado para debilitar la economía» de Gaza. Pero inmediatamente añadía: «con el fin de minar la capacidad de Hamás de atacar a Israel»[28]. Es para echarse a temblar si imaginamos cómo habría sido la potencia del arsenal militar de Hamás si Israel hubiera permitido que se colaran unos bombones. De hecho, aunque el Informe Turkel de Israel defendía a Israel en todos los puntos clave que tenían que ver con el asalto a la flotilla, también tenía que conceder (aunque circunspectamente) el objetivo dual del bloqueo naval. Tomemos por ejemplo el testimonio que se cita en el Informe de Tzipi Livni, que era ministra de Exteriores en el momento en el que se impuso el bloqueo naval y el documento que cita del general de Brigada (res.) Amos Gilad, director de la Oficina de Asuntos Políticos y Militares del Ministerio de Defensa, que resume los fines del bloqueo:

Tzipi Livni dijo que […] la imposición del bloqueo naval […] se hizo dentro de un contexto más amplio, como parte de la estrategia global de Israel (a la que se refiere como una «estrategia dual») de deslegitimar a Hamás, por una parte, y reforzar el estatus de la Autoridad Palestina ante la Franja de Gaza, por otra […]. Según este enfoque […] los intentos de transferir bienes [humanitarios] a la Franja de Gaza por vía marítima […] concedían legitimidad al régimen de Hamás en la Franja de Gaza. […] Livni también afirmaba que sería un error examinar las circunstancias de la imposición del bloqueo naval desde una limitada perspectiva de seguridad únicamente […].

El documento [de Gilad] contiene dos argumentos [sobre el bloqueo]: uno […] es evitar que Hamás se refuerce militarmente; el otro […] es «aislar y debilitar a Hamás». En este contexto, el general de brigada (en la reserva) Gilad afirmaba que la importancia de abrir una ruta marítima para la Franja de Gaza era que reforzaba significativamente a Hamás, tanto desde un punto de vista económico como político. Afirmaba también que abrir una ruta marítima con Gaza, especialmente mientras esta estuviera bajo

el control de Hamás […] sería equivalente a [sic] «un logro muy importante para Hamás» […]. El general de Brigada (en la reserva) Gilad concluía: «En resumen, la necesidad de imponer un bloqueo naval sobre la Franja de Gaza surge por razones de seguridad y militares […] y también para evitar cualquier legitimación y refuerzo económico y político de Hamás que lo refuerce en el panorama político palestino interno [frente a la Autoridad Palestina en Cisjordania]».

«Parecería, por lo tanto», concluía el Informe Turkel, «que incluso aunque el bloqueo naval se hubiera hecho fundamentalmente con fines de seguridad, quienes lo decretaron consideraban que su imposición era legítima dentro de la "estrategia dual" global israelí contra Hamás en la Franja de Gaza»[29]. El Informe Turkel no discutía tampoco que el bloqueo naval era una parte integral de la estrategia para lograr ambos objetivos. Por el contrario, subrayaba que los bloqueos naval y terrestre debían tratarse como un conjunto único:

Tanto el bloqueo naval como la política de fronteras terrestre fueron impuestos e implantados debido al prolongado conflicto armado internacional entre Israel y Hamás. […] En un nivel estratégico […] el gobierno considera el bloqueo naval como parte de los esfuerzos generales de Israel para no conceder legitimidad al gobierno de Hamás en la Franja de Gaza, para aislarlo en la escena internacional y fortalecer a la Autoridad Palestina.

El Informe Turkel señalaba posteriormente que «el bloqueo naval se conecta con la política de cruce de fronteras terrestres en un plano táctico»: cuando la carga que llevan los barcos que se dirigen a Gaza se desviaba a través de la ruta terrestre, quedaba sometida a las restricciones que impedían el paso por tierra de bienes esenciales, como «hierro y cemento». Y continuaba: «En otras palabras, mientras que las fronteras terrestres estén sometidas al control israelí, hay prima facie una posibilidad de que la apertura de una

ruta adicional hacia la Franja de Gaza, como pueda ser una ruta marítima que no esté controlada por el Estado de Israel, afecte a la situación humanitaria en la Franja de Gaza»[30]. Dicho más claramente, si las flotillas abrían una ruta por mar hacia Gaza, los bienes esenciales civiles que actualmente bloquea Israel en las fronteras terrestres podrían llegar a su destino. «Por lo tanto», concluía el Informe Turkel, «es posible que la imposición del bloqueo naval, junto con la implantación de una política de fronteras terrestres, tenga un impacto humanitario sobre la población, al menos en principio»; «el enfoque del gobierno israelí […] creó […] una conexión en lo que se refiere a los efectos humanitarios sobre la Franja de Gaza entre el bloqueo naval y la política de fronteras terrestre»[31]. Vamos, que incluso el Informe Turkel, que Israel entregó al Comité y del que el Comité era una prolongación en cualquier caso, describía el bloqueo naval como un elemento no menos importante que el bloqueo terrestre para alcanzar el objetivo político de Israel: llevar a la economía de Gaza «al borde del abismo»[32].

Si el Informe Turkel sostenía que los bloqueos naval y terrestre, tanto «en principio» como por una cuestión «táctica» (práctica), constituían un todo único, unificado, únicamente se podía defender la adecuación del bloqueo naval defendiendo simultáneamente la adecuación del bloqueo terrestre y tratando ambos «conjuntamente»[33]; separarlos, fingir que el bloqueo naval difería del bloqueo terrestre habría sido un ejercicio de casuística. «Teniendo en cuenta el enfoque de la Comisión (Turkel), que consideraba que el bloqueo naval y las restricciones terrestres están interconectadas», señalaba una pareja de académicos israelíes, «solo se puede justificar el primero defendiendo la legalidad del segundo»[34]. El caso es que el Informe Turkel concluyó, aunque fuera mediante tortuosos razonamientos y elidiendo hechos, que el bloqueo unificado terrestre-naval se podía considerar legal[35]. El Comité de la ONU, por lo tanto, se enfrentaba a un dilema. Si repetía el argumento del Informe Turkel tendría que dictaminar sobre el conjunto de la política de bloqueo israelí. Pero, si emitía un juicio global, el Comité solamente podría ponerse de parte de Israel contradiciendo escandalosamente la opinión legal casi unánime, que declaraba que el bloqueo israelí sobre Gaza era una forma de castigo colectivo y una violación flagrante del derecho

internacional[36]. Para enfrentarse al desafío de confirmar la legalidad del asedio sin ofender a la opinión internacional, el Comité decidió una estrategia igualmente insólita. Separó artificialmente el bloqueo terrestre y el naval, consideró el bloqueo terrestre un asunto secundario y marginal y se centró en el bloqueo naval como si fuera un elemento independiente[37]. Nunca se insistirá bastante en el carácter radical de la cirugía que practicó el Comité; con todas sus justificaciones. Ni siquiera el Informe Turkel fue capaz de concebir un divorcio así. En la carta de desacuerdo que el representante turco adjuntó al informe final del Comité, este acusaba al Comité, con razón, de haberse «adherido totalmente» a los análisis legales israelíes que justificaban el bloqueo, mientras que la valoración del informe turco, que decía que el bloqueo era ilegal, era la que había encontrado eco entre «la amplia mayoría de la comunidad internacional»[38]. Pero omitía, no obstante, el punto más elocuente: para defender a Israel, el Comité se aventuraba en un terreno legal extraño, que era incluso ajeno al propio Informe Turkel de Israel. Una vez emprendido ese camino, el Comité no se achantó ni siquiera ante las distorsiones flagrantes. Afirmó que «varias organizaciones e instituciones internacionales, entre ellas el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y el ICRC [Comité Internacional de la Cruz Roja], habían declarado que las restricciones terrestres constituían un castigo colectivo»[39]. No obstante, estas organizaciones declaraban que no solamente las «restricciones terrestres», sino que el conjunto de la política de fronteras israelí –el bloqueo terrestre y el naval– era ilegal. Fue el Comité quien concibió la idea de que el bloqueo naval existía de manera independiente de las «restricciones terrestres». De hecho, el propio Informe Turkel reconocía que «las distintas organizaciones humanitarias y de defensa de los derechos humanos […] concluían que la destrucción de la economía de la Franja de Gaza se debe al bloqueo naval impuesto por Israel y a su política de fronteras terrestres»[40]. Si la economía gazatí estaba explotando, no se debía únicamente a las «restricciones terrestres».

El Comité de la ONU afirmaba que el bloqueo naval y el bloqueo terrestre israelí constituían «dos conceptos distintos que requerían un tratamiento y un análisis diferenciados». «Por lo tanto, trata[ba] el bloqueo naval como algo distinto e independiente de los controles en los puestos fronterizos», que «no tienen relación directa

con el bloqueo naval»[41]. Para defender esta anómala declaración, el Comité apuntaba a que, cronológicamente, la imposición del bloqueo terrestre (en 2007) precedía a la imposición del bloqueo naval (en 2009); a que la «intensidad» del bloqueo terrestre «fluctuaba» con el tiempo, mientras que el bloqueo naval «no ha sido alterado desde su imposición»; y a que el bloqueo naval «se imponía principalmente para permitir [...] que Israel ejerciera un control sobre los barcos que trataban de llegar a Gaza con armas y otros bienes relacionados»[42]. Esta serie de afirmaciones confundía y mezclaba los objetivos estratégicos del bloqueo israelí con las modalidades tácticas de su imposición. Aunque Israel ajustaba periódicamente sus políticas de asedio para acomodarlas a las nuevas contingencias políticas, el objetivo dual, de seguridad y político, se mantenía constante. La premisa que efectivamente apuntala el análisis legal del Comité –que, frente a las funciones políticas y de seguridad del bloqueo terrestre, el fin del bloqueo costero era exclusivamente evitar que llegaran armas a Gaza– no solo contradice el mismísimo testimonio de Israel. También desborda los términos de referencia del Comité. Al Comité se le encargó únicamente «revisar» los informes israelí y turco. Pero ninguno de estos dos informes cuestiona el objetivo dual del bloqueo unificado naval-terrestre, ninguno defiende que el bloqueo naval se diseñara únicamente para interceptar armamento. El Comité se inventó una distinción para resolver una controversia inexistente. En el fondo, el Comité buscaba apartar la cuestión de la legalidad de la imposición de un asedio económico a una población civil; evitar emitir un juicio sobre si Israel tenía legalmente el derecho a bloquear el paso de bienes esenciales civiles, como chocolate, patatas fritas y gallinas. Si el Comité respaldaba la legalidad de un asedio así, se arriesgaba a provocar la indignación de la comunidad de defensa de los derechos humanos, pero, si declaraba ilegal el bloqueo, intervenía en el inalienable derecho de Israel a atormentar a Gaza y eso sí que no podía ser. Se libró del dilema separando artificialmente el bloqueo naval del terrestre y centrándose exclusivamente en el bloqueo naval, a la vez que fingía que el bloqueo naval no interceptaba bienes civiles, únicamente armas. Por supuesto, una evaluación legal respectiva del bloqueo naval y el terrestre sí requeriría un análisis diferenciado, porque los cuerpos legales relevantes no coinciden del todo[43]. Pero, hasta que entró en escena el Comité, nadie había sugerido, ni siquiera el

Informe Turkel de Israel, que los fines generales del bloqueo naval difirieran de manera fundamental de los fines del bloqueo terrestre. Únicamente el Comité osó afirmar que el bloqueo naval carecía de una dimensión política; que no tenía un lugar relevante en la estrategia de Israel para desestabilizar a Hamás mediante el castigo a la población civil de Gaza. La ironía final era que, sensu stricto, el bloqueo naval servía únicamente para uno de los dos fines, pero no era el militar; su fin era claramente político. El Comité, por lo tanto, erraba doblemente: el bloqueo naval no era «distinto» del bloqueo terrestre, y el fin del bloqueo naval no era «principalmente» la seguridad.

Afirmación espuria n.o 2: Israel se enfrentaba a una amenaza de seguridad novedosa, procedente de las aguas costeras de Gaza, cuando impuso el bloqueo naval. «El principio fundamental de la libertad de navegación en alta mar», observaba el Comité de la ONU, «está sometido únicamente a unas excepciones limitadas bajo el derecho internacional»[44]. Un Estado que trate de restringir esta libertad, por lo tanto, necesita aportar muchas pruebas para justificarlo. De esto se sigue que, cuanto mayor sea el impedimento que un Estado coloca ante la libertad de navegación, mayor debe ser la carga de la prueba que aporte. Cuando está en juego una libertad fundamental, hay que graduar las infracciones que se cometan contra ella: una restricción extrema no se justifica si la amenaza percibida se pudiera interceptar con una restricción menor. En el caso que nos ocupa, si «la visita y registro» de una nave (cuando hubiera «razones suficientes» para sospechar) fuera una manera efectiva de evitar que el contrabando[45] llegara a Gaza, entonces no podría justificarse el imponer una medida más restrictiva, como es un bloqueo naval, que impide indiscriminadamente el paso de todas las mercancías, militares y no militares, y que, por lo tanto, inflige daños a la población civil[46]. (Por ahora vamos a dejar de lado que no solamente el bloqueo, sino también los protocolos de visita y registro de Israel eran ilegales[47].)

El Comité de la ONU afirmaba que Israel se enfrentaba a una nueva amenaza para su seguridad procedente de las aguas costeras de Gaza, que únicamente podía afrontarse mediante un bloqueo naval. Sin embargo, las pruebas aportadas para respaldar esta afirmación no impresionan. Citan, basándose en el Informe Turkel, tres supuestos ejemplos de intentos de introducción de armas de

contrabando en Gaza desde el mar, el último de los cuales, en 2003, había ocurrido seis años antes de que Israel impusiera el bloqueo naval[48]. Aducía además, citando el Informe Turkel, que, después de la «desconexión» de Gaza en 2005, Israel tuvo que establecer una nueva base legal si aún quería evitar que las armas llegaran a Gaza. Incluso si esto fuera cierto, tampoco explicaría por qué el procedimiento de visita y registro resultaba eficaz entre 2005 y mediados de 2008, momento en el que, según el Comité (haciéndose eco del Informe Turkel), su implantación planteó abruptamente «dificultades prácticas»[49]. No se daba el caso, como alegaba el Informe Turkel, de que Israel se hubiera visto repentinamente desbordada por una enorme cantidad de operaciones de contrabando de armas, de manera que el procedimiento de visita y registro se hubiera hecho demasiado arduo. El Comité, citando el Informe Turkel, también alegaba que únicamente un bloqueo naval proporcionaba una base legal para impedir el contrabando de armas por parte de Hamás hacia el exterior de Gaza, para así lanzar ataques a Israel desde el mar[50]. Sin embargo, el Comité no citaba ejemplos –aparentemente, no hay ninguno– de que Hamás hubiera intentado una maniobra así. Sí citaba que en general a Israel le preocupaba que Hamás pudiera intentar una maniobra semejante en el futuro. Pero, en la medida en la que no se había intentado en el pasado; y en la medida en la que Israel aparentemente no albergaba esos miedos antes de 2009 (si fuera así, habría impuesto antes el bloqueo naval); y en la medida en la que Israel no cita pruebas acusatorias de su afirmación de que en algún momento del nebuloso futuro Hamás podría intentar una maniobra de esta clase; en la medida, en suma, en la que Israel no ha justificado materialmente su supuesto miedo, se trataba de una justificación claramente volátil para una limitación tan restrictiva de la libertad de navegación. El resultado fue que el Comité no aportó ninguna prueba de que Israel se enfrentara a una amenaza novedosa para la seguridad, procedente de las aguas costeras de Gaza, cuando aumentó su infracción del principio de la libertad de navegación imponiendo un bloqueo naval indiscriminado.

Afirmación espuria n.o 3: Israel impuso el bloqueo naval como respuesta a esta amenaza para su seguridad. El Comité de la ONU alegaba, basándose en el Informe Turkel, que Israel había impuesto el bloqueo

naval «para prevenir que armas, terroristas y dinero entraran o salieran de la Franja de Gaza por vía marítima»[51]. Pero, aunque Israel apuntaba formalmente a esta amenaza, el Comité no presentaba un argumento persuasivo para dar crédito a este testimonio israelí. En su análisis legal del bloqueo naval, el punto de partida del Comité era que, si Israel lo dice, debe ser cierto: «El informe que Israel ha presentado al Comité deja claro que el bloqueo naval […] se adoptó con el fin de defender su territorio y a su población y el Comité acepta que esto es así»; «Es evidente que Israel tenía un objetivo militar. El objetivo principal declarado del bloqueo naval era la seguridad. Se trataba de evitar que armas, municiones, suministros militares y gente entrara en Gaza y de impedir que los operativos de Hamás salieran de Gaza con barcos llenos de explosivos»[52].

Aun así, la perplejidad no desaparece. Si no era para impedir el contrabando de armas, ¿por qué impuso Israel el bloqueo naval? De hecho, la explicación estaba ahí, en el Informe Turkel. A partir de mediados de 2008, observaba el Informe Turkel, «se organizaron varias flotillas cuyo destino expreso era la Franja de Gaza. En vista del hecho de que los barcos afectados eran neutrales, las IDF tenían unas opciones relativamente limitadas, que principalmente incluían la facultad de visita y registro, una facultad que podía usarse, inter alia, con la condición de que hubiera razones suficientes para sospechar que el barco podía ser objeto de captura», es decir, que transportara contrabando. El problema al que se enfrentaba Israel, sin embargo, era que las flotillas no llevaban armas; por lo tanto, carecía de un motivo legal para bloquear su paso a Gaza. Inicialmente, Israel dejó pasar una sucesión de barcos sin ni siquiera molestarse en registrarlos, con la esperanza de que el fenómeno de las flotillas se desvaneciera (entre agosto y diciembre de 2008 Israel dejó pasar seis naves a Gaza)[53]. Cuando vio que los barcos seguían llegando, Israel respondió con una escalada de la violencia, pero seguían viniendo. Fue «en esas circunstancias, el 3 de enero de 2009», proseguía el Informe Turkel, cuando «el Ministerio de Defensa ordenó un bloqueo naval […]. La importancia de imponer un bloqueo naval según las reglas del derecho internacional, que permite a un bando de un conflicto armado impedir la entrada en el área prohibida de cualquier barco que intente romper el bloqueo (incluso sin tener que demostrar que el barco está ayudando a la actividad terrorista)»[54]. En un testimonio que cita el Informe

Turkel, que el Comité, una vez más, pasó prudentemente por alto, el abogado general militar israelí afirmaba que el bloqueo naval se había impuesto específicamente para evitar que las flotillas humanitarias llegaran a Gaza:

El abogado militar general testificó ante la Comisión que las IDF se vieron obligadas a encontrar una solución operativa adecuada para la zona marítima en vista del aumento del fenómeno de las flotillas […]. Se consideró que un bloqueo naval era el mejor método operativo para tratar este fenómeno, porque otras soluciones, como el uso del derecho de visitar y registrar, se habían demostrado problemáticas y otras fuentes de autoridad se consideraban más débiles.

[…] El abogado militar general informó al jefe del Estado Mayor […] de que había hablado con el fiscal general, quien también había expresado la postura de que la declaración de un bloqueo naval en la Franja de Gaza proporcionaba la «solución legal-operativa óptima para evitar la entrada de barcos extranjeros dentro de la Franja de Gaza, y proporcionaba a la Armada todas las herramientas y poderes necesarios para evitar el paso de los barcos. Las fuentes de autoridad que permiten que se emprendan acciones contra los barcos, en ausencia de una declaración de "bloqueo naval", son más débiles y su carácter práctico se puede poner en duda» […].

[…] El 30 de diciembre de 2008, el abogado militar general una vez más se puso en contacto con el jefe del Estado Mayor y le dijo que a primeras horas de esa mañana las fuerzas de la Armada habían sido requeridas para lidiar con el yate Dignity [uno de los primeros barcos humanitarios], que había salido de Chipre en dirección a la Franja de Gaza, y que el incidente mostraba la dificultad legal de lidiar con barcos civiles extranjeros que trataban de alcanzar las costas de la Franja de Gaza. De nuevo, pidió al jefe del Estado Mayor que presentara su recomendación de un bloqueo naval ante la jerarquía política.

[…] El 3 de enero de 2009, después de que la asesoría legal de los servicios de seguridad diera su opinión sobre el tema, el ministro de

Defensa firmó una orden que imponía el bloqueo[55].

Evidentemente, no era el tipo de barco –comercial / civil, frente a militar / naval– lo que planteaba complicaciones a Israel. Ya poseía la autoridad legal, bajo el protocolo de visita y registro, para detener un barco civil y evitar la entrada de armas, y el protocolo había demostrado ser practicable. De hecho, Israel nunca se molestó en registrar los barcos humanitarios que se dirigían a Gaza (era, presumiblemente, consciente del hecho de que no almacenaban armas), ni tampoco se enfrentaba ahora a una invasión de contrabando de armas. Más aún, si se iban a meter armas de contrabando, seguramente se esconderían en barcos civiles y comerciales. La llegada de las flotillas, por lo tanto, no alteraba la situación legal: tanto antes como después, la principal preocupación legal de Israel, oficialmente, deberían haber sido los barcos civiles. El desafío real al que se enfrentaba Israel era que carecía de autoridad legal para prohibir la carga humanitaria, a menos que impusiera un bloqueo naval. En el hipócrita y opaco lenguaje del Comité, el bloqueo se impuso no por el contrabando de armas, sino «como reacción a determinados incidentes que se producían con los barcos que habían llegado a Gaza por vía marítima»[56]. Esos «determinados incidentes» apuntaban a la decisión de los pasajeros de la flotilla de, contra viento y marea, hacer llegar bienes humanitarios de primera necesidad a la población bajo asedio de Gaza. Lo que Israel temía no era el tráfico de armas, sino la derrota política que sufriría si se abría una ruta marítima que permitiera a los barcos con ayuda humanitaria llegar a Gaza y, en el proceso de apertura de una ruta así, esas flotillas desvelarían el asedio inmoral, ilegal e inhumano de Israel. La ironía es que el Comité separaba falsamente el bloqueo terrestre y el bloqueo naval para así justificar el bloqueo naval por razones de seguridad, mientras que incluso los oficiales de alto rango israelíes concedían que el bloqueo naval se impuso no para afrontar una amenaza a la seguridad, sino «el aumento del fenómeno de las flotillas […] la entrada de barcos civiles extranjeros». De hecho, fue porque Israel no se enfrentaba a una amenaza a su seguridad por lo que se sustituyó el protocolo de visita y registro por un bloqueo naval: si se hubiera atenido al procedimiento anterior, únicamente hubiera podido apoderarse

legalmente del contrabando, pero tendría que haber dejado pasar a los barcos[57]; mientras que, si imponía un bloqueo naval, podría prohibir legalmente a los barcos con ayuda humanitaria que llegaran a Gaza. Pero (se podría argumentar), si una sucesión de flotillas humanitarias abría una ruta marítima hasta Gaza, ¿no crearía eso una amenaza de seguridad para Israel, en tanto que podrían usarla barcos que transportaran armas de contrabando? Incluso si una contingencia así fuera real, aún quedaría el hecho de que el bloqueo no se impuso debido a una amenaza real para la seguridad de Israel. Sería difícil justificar una restricción de esta índole del derecho fundamental a la libertad de navegación, sobre la base de una amenaza que podría materializarse –pero igualmente no materializarse– en un nebuloso futuro. La imposición de un bloqueo draconiano sobre la base de una contingencia futura especulada sería aún más difícil de justificar ante el daño humanitario que provocaba en el momento presente.

Afirmación espuria n.o 4: el bloqueo naval era el único medio del que disponía Israel para enfrentarse a esa amenaza para su seguridad. El fin del bloqueo naval no era enfrentarse a una amenaza para la seguridad, sino evitar con antelación la derrota política si se rompía el asedio a una Franja de Gaza aún controlada por Hamás. Incluso si, hipotéticamente, diéramos crédito a la afirmación de que, en términos prácticos, y dejando de lado la ley, ningún país en guerra permitiría que un convoy de barcos –ni siquiera un convoy humanitario declarado, que hubiera sido revisado de antemano– pasara libremente a territorio enemigo bajo su control, Israel tenía aún otra opción a su disposición. El mismo Comité de la ONU alude a ella, aunque sea de paso y en otro contexto. «En un informe inmediatamente posterior al incidente del 31 de mayo de 2010», informa el Comité, «un funcionario superior de las Naciones Unidas señaló que se hubiera podido evitar la pérdida de vidas humanas si Israel hubiera respondido a las reiteradas peticiones de finalizar su bloqueo de Gaza»[58]. Si Israel hubiera querido detener los convoyes humanitarios que se dirigían a Gaza, obviamente lo único que tenía que hacer era levantar el bloqueo económico ilegal que estaba produciendo en primer lugar la crisis humanitaria. Y, aun así, tan reacio era el Comité a desprenderse de la ficción de que el bloqueo naval estaba diseñado para interceptar armas –y exponer así a Israel a la acusación

de castigo colectivo–, que ignoró por completo esta opción en su análisis de la legalidad del bloqueo.

Afirmación espuria n.o 5: el bloqueo naval israelí alcanzó sus objetivos de seguridad sin causar un daño desproporcionado a la población civil de Gaza. Mientras que el Informe Turkel defendía la legalidad del asedio en su conjunto, el Comité de la ONU se esforzaba por evitar el escándalo de un escrito legal general redefiniendo el asedio naval como una cosa aparte, cuya legalidad debía defenderse por sus propios méritos. Así, según el Comité, incluso aunque el bloqueo terrestre se hubiera diseñado para evitar que los suministros humanitarios llegaran a Gaza, eso no convertía necesariamente en ilegal al bloqueo naval. El audaz procedimiento quirúrgico del Comité, no obstante, no resguardaba el caso de Israel. De hecho, hacía que la posición de Israel fuera aún más indefendible. El Comité alegaba que «en ausencia de instalaciones portuarias importantes en Gaza», el daño causado por el bloqueo naval a la población civil de Gaza era «leve» y que, por lo tanto, no era desproporcionado con respecto a la ganancia militar[59]. Pero si, como las pruebas muestran sin ambigüedad ninguna, el bloqueo naval israelí no servía como defensa propia frente a un ataque armado, sino que se impuso para lograr un objetivo político, entonces la prueba de la proporcionalidad era por completo irrelevante. Como el propio Comité observaba: «La imposición de un bloqueo debe tener un objetivo militar conforme a la ley»[60]. Dicho de otro modo, incluso si el valor humanitario del punto de entrada marítimo fuera mínimo, el bloqueo naval aún seguiría haciendo un daño proporcionalmente grande, puesto que su valor militar era igual a cero: no se impuso para impedir el contrabando de armas o para lograr cualquier otro objetivo militar legítimo, mientras que el protocolo de visita y registro, que no obstaculizaba el paso de los suministros humanitarios, podría haber neutralizado la amenaza (especulada) de dicho contrabando. Además, incluso si el bloqueo naval sí sirviera a un objetivo militar real, habría sido precipitado concluir que no causaba un daño desproporcionado. El Informe Turkel advertía contra la tentación de minimizar el potencial de Gaza para el tráfico marítimo, entre otras cosas porque eso iría en contra de las razones de Israel para imponer el bloqueo. Si las mercancías apenas podían entrar en Gaza por el mar, entonces tampoco las armas podían entrar fácilmente y, en ese caso, un bloqueo naval sería innecesario y cualquier justificación insostenible: «La ausencia de un puerto comercial no es un factor decisivo, puesto que está claro que

es posible encontrar otras maneras de transportar las mercancías que llegan por mar, por ejemplo, descargando los barcos mediante barcas de pesca. Además, la suposición de que las mercancías no pueden transportarse hasta la Franja de Gaza debido a la falta de un puerto comercial contradice inherentemente el propósito principal del bloqueo, es decir, el evitar el paso de armas a la Franja de Gaza, puesto que, según esa misma lógica, no sería posible transportar armas por mar a la Franja de Gaza»[61]. Lo máximo que aventuraba el Informe Turkel era que, «en ausencia de información y registros, es difícil determinar el efecto del bloqueo naval por separado en la situación humanitaria en la Franja de Gaza»[62]. No podemos sino pasmarnos ante el modo en que el Comité daba por seguro que el daño potencial del bloqueo naval era «leve», cuando incluso el descaradamente exculpatorio Informe Turkel declaraba su agnosticismo al respecto. De hecho, si existía una crisis humanitaria en Gaza, y si el paso marítimo era el último punto que quedaba para acceder a la población asediada de Gaza, entonces el daño colateral del bloqueo naval debería haberse considerado grave, con lo que la posibilidad de que Israel hubiera aprobado la prueba de proporcionalidad se reducía enormemente. El Comité rechazó este cálculo de la proporcionalidad, mientras que minimizaba el potencial humanitario de una ruta marítima a Gaza: «Pasar armas de contrabando por mar es una cosa; entregar comida que abulta y otros suministros a una población de aproximadamente un millón y medio de personas es otra cosa»[63]. Pero se puede decir lo contrario con la misma facilidad: «Meter de contrabando por mar armas que abultan es una cosa; entregar medicinas que se necesitan desesperadamente y otros bienes básicos y ligeros para suministro de una población…»[64]. La prueba de proporcionalidad del Comité justificaba a Israel porque se basaba en premisas falsas, mientras que el bloqueo nunca hubiera podido aprobar un examen de proporcionalidad que se basara rigurosamente en la situación real. No olvidemos que el espurio examen de proporcionalidad del Comité no solamente justificaba a Israel: también condenaba a la población civil de Gaza a un bloqueo estricto, no solamente por tierra, sino por mar, mientras sufría una crisis humanitaria. Está claro que, por mucho que se hubiera podido romper el bloqueo naval, esto no habría resuelto el desastre humanitario en Gaza. El objetivo general de las flotillas era, de hecho, no tanto entregar ayuda humanitaria, como llamar la atención sobre el carácter ilegal e inhumano del bloqueo. Al Comité este último objetivo le parecía culpable, si no legalmente, sí moralmente.

El Comité de la ONU presentaba una secuencia de afirmaciones interrelacionadas para justificar legalmente el bloqueo naval de Israel sobre Gaza. Si alguna de esas afirmaciones resultaba ser falsa, el Comité no habría podido mantener su defensa del asedio. Resulta que, cuando se examinan con atención, todas y cada una de esas afirmaciones son espurias: el bloqueo naval israelí sí se relacionaba con el bloqueo terrestre israelí; Israel no se enfrentaba a una nueva amenaza de seguridad procedente de las aguas costeras de Gaza cuando impuso el bloqueo naval; Israel no impuso el bloqueo naval en respuesta a una amenaza de seguridad; el bloqueo naval no era el único medio que tenía Israel a su disposición para enfrentarse a esa supuesta amenaza para su seguridad; y el bloqueo naval israelí solo podía lograr su supuesto objetivo de seguridad causando un daño desproporcionado a la población civil de Gaza[65]. Sería difícil exagerar la pura mendacidad de las justificaciones múltiples que se inventó el Comité para dar por bueno el bloqueo naval. Pero el Comité no solamente legitimó vergonzosamente el asedio ilegal, inmoral e inhumano de Israel. También denunció «los actos peligrosos e insensatos» de los pasajeros de la flotilla que trataron de romper ese bloqueo[66]. Llegó al extremo de pedir a los Estados que intervinieran activamente para impedir que se repitieran iniciativas tan irresponsables en el futuro: «Es importante que estos acontecimientos no se repitan»; «Es importante que los Estados […] hagan todo lo que esté en su mano para evitar una repetición del incidente»; «Es en interés de la comunidad internacional desalentar activamente otros intentos de romper un bloqueo legalmente impuesto»[67]. Los Estados, no los ciudadanos corrientes, son quienes mejor pueden ayudar al destino y el futuro del pueblo de Gaza, apuntaba el Comité. Recordemos, no obstante, qué ocurrió cuando la comunidad internacional de Estados sí controlaba el destino y el futuro de Gaza. En 2007 Israel impuso un bloqueo sobre Gaza que, siendo una forma de castigo colectivo, constituía una flagrante violación del derecho internacional. La comunidad internacional no movió un dedo. En un viaje a Gaza, en esos momentos, la ex alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Mary Robinson, declaraba que «toda la civilización de Gaza había quedado destruida». La comunidad internacional no movió un dedo. En 2008, Israel intensificó el bloqueo, conduciendo

a las infraestructuras de Gaza –en palabras de una organización israelí de defensa de los derechos humanos– «al borde del abismo»·. La comunidad internacional seguía sin mover un dedo. «Ante nosotros se está derrumbando toda una sociedad», anunciaba, angustiada, la economista política de Harvard Sara Roy, «pero no hay apenas respuesta internacional, más allá de los llamamientos de la ONU, que se ignoran». A finales del año 2008, Israel invadió Gaza y, a lo largo de lo que Amnistía definió como «22 días de muerte y destrucción», masacró a la población civil y redujo a escombros la infraestructura civil[68]. A principios del año 2009, el Consejo de Seguridad de la ONU finalmente reaccionó ante la indignación global sobre los crímenes de Israel y aprobó una resolución (1860) que expresaba su «grave preocupación […] ante la profundización de la crisis humanitaria en Gaza» y pedía «la provisión y distribución sin impedimentos a lo largo de Gaza de ayuda humanitaria, incluyendo comida, combustible y tratamientos médicos»[69]. Pero Israel persistía en su bloqueo estrangulador y la comunidad internacional aún no movía un dedo. Fue únicamente después del martirio de los pasajeros del Mavi Marmara, como efectivamente concedía el Comité[70], cuando los líderes mundiales de repente experimentaron la revelación de que el bloqueo israelí era «insostenible»[71] y algo de ayuda (aunque claramente insuficiente) le llegó a la desesperada población civil de Gaza. Pero si el Comité se hubiera salido con la suya, y si la Flotilla de la Libertad no hubiera cometido una «acción peligrosa e insensata» que desafiaba las prerrogativas de los Estados, Israel no habría sido molestado y la población de Gaza habría quedado abandonada a su suerte. Los logros de la flotilla, en último término, pueden considerarse marginales[72], pero, en el Reino de la Justicia, difícilmente se les podrá reprochar nada. Los pasajeros pusieron en peligro sus vidas y varios de ellos las perdieron, para que la población de Gaza pudiera respirar. ¿Qué había hecho la comunidad de Estados, excepto saturar la atmósfera con emisiones continuas de aire caliente?

Mientras que el Comité de la ONU consideraba que las muertes causadas por los comandos israelíes a bordo del Mavi Marmara eran «inaceptables», se esforzó mucho en «equilibrar» esa crítica arrojando dudas también sobre las motivaciones de los pasajeros. El Informe Turkel había apuntado que los organizadores del Mavi

Marmara eran yihadistas decididos a asesinar a israelíes. Le costó bastante sostener esa acusación, no obstante, puesto que las armas más letales que se habían «metido de contrabando» a bordo eran tirachinas y canicas de vidrio, mientras que también fue complicado explicar cómo estos hombres jóvenes, fornidos y fanáticos, no habían conseguido matar a nadie, ni siquiera a los tres comandos que capturaron[73]. Así como el Comité había adoptado una estrategia novedosa para demostrar la legalidad del bloqueo, así conjuró también una prueba creativa para justificar que el Informe Turkel hablara de estos supuestos yihadistas. El Comité señalaba seriamente que «cuestionaba gravemente la verdadera naturaleza y objetivos de los organizadores de la flotilla». ¿Por qué? Porque había descubierto que no solamente pretendían llevar ayuda humanitaria, sino también «generar publicidad sobre la situación en Gaza». Para anclar esta acusación, el Comité reproducía a bombo y platillo este documento «preparado por» los organizadores:

Fin: los fines de este viaje son crear una conciencia entre el público de todo el mundo y las organizaciones internacionales sobre el embargo injusto e inhumano sobre Palestina, contribuir al fin de este embargo que claramente viola los derechos humanos y entregar ayuda humanitaria a la población palestina[74].

Por si esta declaración de intenciones no fuera lo suficientemente incriminatoria, el Comité desplegaba aún más pruebas de esta trama siniestra: «El número de periodistas a bordo de los barcos refuerza la conclusión de que el fin principal de la flotilla era generar publicidad»[75]. Es sin duda la primera vez, y sin duda es el nadir de los anales de las Naciones Unidas, que un informe que lleva su sello culpe a las víctimas de un ataque mortal porque deseaban arrojar luz sobre un crimen contra la humanidad que se está produciendo[76].

[1] «Statement by the President of the Security Council», 1 de junio de 2010, S/PRST/2010/9.

[2] Véanse caps. VII y VIII.

[3] Report of the Secretary-General's Panel of Inquiry on the 31 May 2010 Flotilla Incident, julio de 2011, § 3; a partir de ahora, Comité de la ONU. El Comité de la ONU estaba también facultado para «requerir las aclaraciones e informaciones que pudiera necesitar de las autoridades nacionales relevantes» (ibid.).

[4] International Federation for Human Rights, «FIDH Deeply Concerned by the Composition of UN Panel of Inquiry into the Flotilla Events», 6 de agosto de 2010; «Álvaro Uribe, el más investigado en la Comisión de Acusaciones», Elpais.com, 8 de noviembre de 2013.

[5] Israel Ministry of Foreign Affairs, «Israel to Participate in UN Panel on Flotilla Events», 2 de agosto de 2010.

[6] N. G. Finkelstein, «This Time We Went Too Far»: Truth and Consequences of the Gaza Invasion, edición de bolsillo aumentada, Nueva York, 2011, pp. 195-196.

[7] S. Shamir, «Livni Tells UN to Mind Its Own Business over Flotilla Probe», Haaretz, 6 de octubre de 2010.

[8] Public Commission to Examine the Maritime Incident of 31 May 2010, The Turkel Commission Report, Part One, enero de 2011; a partir de ahora, Informe Turkel. Véase cap. VIII.

[9] Comité de la ONU, cit., § 3.

[10] Véase cap. VIII.

[11] Comité de la ONU, cit., § 71 (véase también ibid., § 78).

[12] B'Tselem (Israeli Center for Human Rights in the Occupied Territories), Statistics, disponible en [btselem.org/statistics].

[13] Comité de la ONU, cit., § 71.

[14] J. Haushofer, A. Biletzki y N. Kanwisher, «Both Sides Retaliate in the Israeli-Palestinian Conflict», Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, 4 de octubre de 2010.

[15] Comité de la ONU, cit., § 71.

[16] Véase cap. IV.

[17] Amnesty International, «Colombian President Should Stop False Accusations against Human Rights Group», 28 de noviembre de 2008.

[18] Comité de la ONU, cit., § 82.

[19] Ibid., §§ 5, 67.

[20] Ibid., § 15.

[21] Ibid., p. 4 (viii), §§ 134, 151.

[22] Ibid., § 6.

[23] Amnesty International, «Suffocating Gaza: The Israeli blockade's effects on Palestinians», 1 de junio de 2010.

[24] UN Human Rights Council, Report of the International Fact-Finding Mission to Investigate Violations of International Law, Resulting from the Israeli Attacks on the Flotilla of Ships Carrying Humanitarian Assistance, 27 de septiembre de 2010, § 170.

[25] Véase cap. I.

[26] La política de aislamiento de Israel sobre Gaza fue impuesta por primera vez en 1991 y se endureció progresivamente a medida que pasaba el tiempo. Véase Gisha (Legal Center for Freedom of Movement), A Guide to the Gaza Closure: In Israel's Own Words, Tel Aviv, 2011.

[27] Véase cap. VIII.

[28] Comité de la ONU, cit., § 153.

[29] Informe Turkel, cit., § 50, cursivas añadidas.

[30] Ibid., § 63.

[31] Ibid.

[32] Frase citada en WikiLeaks (véase cap. VIII).

[33] Informe Turkel, cit., § 107.

[34] A. Cohen e Y. Shany, «The Turkel Commission's Flotilla Report (Part One): Some critical remarks», EJIL: Talk!, 28 de enero de 2011.

[35] Véase cap. VIII.

[36] Para un restablecimiento contemporáneo de esa opinión de consenso, véase «Flotillas and the Gaza Blockade», Diakonia, 2011.

[37] La estrategia legal del Comité de la ONU recordaba al enfoque del Tribunal Supremo israelí en el caso Muro. En 2004, El Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) emitió un dictamen no vinculante que concluía que la construcción por parte de Israel de un muro dentro del territorio palestino ocupado era ilegal. Cuando el Tribunal Supremo de Israel tuvo que juzgar después el asunto, evitó dictar una sentencia que contradijera frontalmente al TIJ. En lugar de ello, el Tribunal Supremo, en desacuerdo con las conclusiones generales del TIJ, propuso que la legalidad del muro debía evaluarse segmento a segmento. Para una comparación del dictamen no vinculante del TIJ y la sentencia del Tribunal Supremo israelí, véase N. G. Finkelstein, Knowing Too Much: Why the American-Jewish Romance with Israel Is Coming to an End, Nueva York, 2012, pp. 307-353.

[38] Comité de la ONU, cit., p. 105.

[39] Ibid., p. 43, n. 274.

[40] Informe Turkel, cit., § 72.

[41] Comité de la ONU, cit., §§ 70, 77.

[42] Ibid.

[43] Para el carácter legal de un bloqueo naval, véase especialmente el San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea, 1994.

[44] Comité de la ONU, cit., § 82.

[45] Contrabando significa «bienes que en último término se destinen a un territorio bajo control enemigo y que sean susceptibles de ser empleados en un conflicto armado». UK Ministry of Defense, The Manual of the Law of Armed Conflict, Oxford, 2005, p. 350.

[46] El Informe Turkel sudaba tinta para justificar que el protocolo de visita y registro no era suficiente para el desafío con que se confrontaba Israel y que se sustituyó por un bloqueo naval «únicamente» como último recurso. Así, el Informe alegaba –sin citas que lo justificaran, y contra el sentido común– que «durante un conflicto armado, es legítimo imponer un bloqueo naval, sin sopesar las alternativas» (§ 51, cursivas añadidas).

[47] D. Guilfoyle, «The Mavi Marmara Incident and Blockade in Armed Conflict», British Yearbook of International Law (2011), pp. 204-207.

[48] Comité de la ONU, cit., § 72, citando el Informe Turkel, cit., § 22. Los tres intentos que se mencionan sucedieron respectivamente en 2001 (Santorini), 2002 (Karine A), y 2003 (Abu Hassan). (El intento de 2002 se ha cuestionado.) El Informe Turkel también aducía (§ 27) un cuarto intento en 2009 (Tali), pero el Comité de la ONU no lo cita, y ni siquiera el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel alega que esa embarcación transportara armamento. «Cargo Boat Attempting Illegal Entry to Gaza Intercepted», Israel Ministry of Foreign Affairs, 5 de febrero de 2009.

[49] Comité de la ONU, cit., §§ 72, 74, citando el Informe Turkel, cit., § 49. El Informe Turkel alegaba que la visita y registro era un procedimiento impracticable por la «casi certeza de que no se les concedería el consentimiento para el registro por parte del mando de los barcos que se dirigían a Gaza»; y que «no estaba claro que se pudiera obtener el consentimiento del país bajo cuya bandera navegaban» (§ 52). Sin embargo, no alegó ninguna prueba –no existía ninguna– de esa «casi certeza». En otro momento, el Informe Turkel alegaba que «un requisito clave es que un derecho así [de visita y registro] no puede ejercerse de manera arbitraria. El desafío al que se enfrentan las autoridades israelíes era obtener suficiente

información sobre la carga o el personal a bordo de las embarcaciones como para encontrar indicios que hagan sospechar que el barco lleva contrabando o a combatientes enemigos» (§ 54). Pero el Informe Turkel no cita ni un solo incidente en el que este requisito impidiera la visita y registro. Otros países han ejercido el derecho de visita y registro sobre la base de una sospecha razonable en tiempos de guerra: ¿por qué no iba a funcionar en otro lugar? El Informe Turkel también alegaba que, si Israel no podía recurrir a la medida menor de declarar las aguas costeras de Gaza una «zona de exclusión», era porque «había una falta de claridad en las leyes acerca de si una zona así proporciona autoridad únicamente para buscar contrabando» (§ 53, cursiva añadida). Dicho de otra manera, la dificultad era que declarar una «zona de exclusión» no permitiría explícitamente a Israel rechazar barcos que no llevaran contrabando, sino únicamente bienes civiles.

[50] Comité de la ONU, cit., § 72, citando el Informe Turkel, cit., § 48 (véase también el Informe Turkel, §§ 55, 89).

[51] Comité de la ONU, cit., § 46, citando el Informe Turkel, cit., §§ 48-50, 112 (véase también Informe Turkel, § 89).

[52] Comité de la ONU, cit., §§ 72, 77. El Comité también parecía alegar, copiando el Informe Turkel, que la disminución de los ataques con misiles y morteros de Hamás sobre Israel se relacionaba de alguna manera con el bloqueo naval (§ 72, citando el Informe Turkel, § 89). La base para esta afirmación era, por decirlo de la forma más amable posible, frágil, entre otras cosas porque el Comité no presentaba ninguna prueba de que alguna vez hubieran llegado armas a Gaza por vía marítima.

[53] Informe Turkel, cit., §§ 25, 53.

[54] Ibid., § 26, cursivas añadidas.

[55] Ibid., § 49, cursivas añadidas.

[56] Comité de la ONU, cit., § 70.

[57] San Remo Manual, cit., «Section II: Visit and Search of Merchant Vessels».

[58] Comité de la ONU, cit., § 151.

[59] Ibid., § 78 (véase también ibid., § 72).

[60] Ibid., § 33, cursivas añadidas; véase también International Committee of the Red Cross, Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules, Cambridge, 2005, rule 53.

[61] Informe Turkel, cit., § 62.

[62] Ibid.

[63] Comité de la ONU, cit., § 78.

[64] Sobre este punto, véase también D. Guilfoyle, «Mavi Marmara Incident», cit., p. 203.

[65] E. Spelman, «The Legality of the Israeli Naval Blockade of the Gaza Strip», European Journal of Current Legal Issues, 2013, «acepta que se impuso el bloqueo naval en la Franja de Gaza junto con, pero de manera separada, los cierres aéreos y terrestres» y «acepta que el bloqueo naval israelí sobre la Franja de Gaza es parte de una "estrategia dual" militar israelí contra Hamás». La autora no proporciona ninguna prueba que justifique que se acepte y no existe ninguna.

[66] Comité de la ONU, cit., § 92.

[67] Ibid., §§ 96, 148, 149, 159.

[68] Véase cap. II.

[69] UN Security Council resolution 1860 (S/R ES/1860), 8 de enero de 2009.

[70] Comité de la ONU, cit., §§ 151, 154.

[71] Véase cap. VII.

[72] Véase cap. VII.

[73] Véase cap. VIII.

[74] Comité de la ONU, cit., §§ 86-87.

[75] Ibid., § 89. Mientras que el Informe Turkel tomaba nota de que los pasajeros buscaban publicitar el impacto negativo del bloqueo, ni siquiera se atrevía a impugnar su integridad a este respecto. Se limitaba a afirmar, sencillamente, que «el objetivo de la Flotilla obviamente no era únicamente romper el bloqueo, sino también buscaba que la presión internacional tuviera un efecto sobre las restricciones terrestres» (§ 62).

[76] Uniendo la obscenidad a la imbecilidad, el Comité de la ONU (cit., §§ 88, 93) también condenaba a esta supuesta camarilla que buscaba publicidad por no alertar suficientemente al resto de los pasajeros de los peligros que acechaban en el caso de que se intentara romper el bloqueo, como si el resto de los decididos activistas que se unieron a la flotilla no tuvieran ni idea de que Israel era capaz de cometer asesinatos.



Gaza, agosto de 2014

CUARTA PARTE

OPERACIÓN MARGEN PROTECTOR

X. EL GIGANTE ATASCADO

El 14 de noviembre de 2012, Israel lanzó la Operación Pilar Defensivo. Duró únicamente ocho días y causó mucha menos muerte y destrucción que la Operación Plomo Fundido (2008-2009) o que la Operación Margen Protector (2014). Su modus operandi y su resultado apuntaban a limitaciones en la libertad de Israel para lanzar operaciones militares mortíferas. El relato oficial israelí seguía el argumento habitual: solamente reaccionaron después de absorber estoicamente cientos de misiles de Hamás. «Israel no quiere la guerra», declamaba el ministro de Defensa, Ehud Barak. «Pero las incesantes ráfagas de misiles de artillería y morteros de Hamás […] nos han obligado a actuar»[1]. Los hechos, sin embargo, apuntan a otra cosa. Desde el 1 de enero hasta el 11 de noviembre de 2012, una persona israelí había muerto como consecuencia de los ataques procedentes de Gaza, mientras que 78 gazatíes habían muerto a causa de los ataques israelíes[2]. Si el objetivo de Israel era reinstaurar la calma en su frontera sur, ¿por qué provocó una nueva escalada de violencia asesinando al jefe militar de Hamás, Ahmed Jabari, que era el principal interlocutor de Israel en Gaza, o, como lo expresaba un analista de seguridad de Haaretz, el «subcontratista, a cargo de mantener en Gaza la seguridad de Israel»[3]? El momento preciso del asesinato era aún más delator. Jabari se encontraba en el proceso de «avanzar en un acuerdo de alto el fuego» cuando Israel lo eliminó[4]. Aunque se adujo que Hamás estaba deseando luchar cuando Israel lanzó la Operación Pilar Defensivo, de hecho el gobierno islámico había evitado mayormente la confrontación armada con Israel. Sí se había resistido, no obstante, a convertirse en un clon de la Autoridad Palestina (AP) iniciando una «cooperación en materia de seguridad» con Israel. Por lo tanto, podía hacer oídos sordos o sumarse (aunque solamente fuera para evitar una escalada) cuando las provocaciones de Israel provocaban ataques de respuesta por parte de los rivales militarizados de Hamás[5].

Las razones que tenía Hamás para buscar un alto el fuego estaban claras. Antes de la ruptura de las hostilidades estaban en un buen

momento. Sus compañeros de cama ideológicos, los Hermanos Musulmanes, habían ganado las primeras elecciones democráticas en Egipto en junio de 2012. El emir de Qatar había viajado a Gaza en octubre de 2012 y había prometido 400 millones de dólares en ayuda, mientras que se esperaba pronto la visita del primer ministro turco, Recep Tayyip Erdoğan[6]. Mientras tanto, Gaza había experimentado «un enorme boom de la construcción»; «presumía de una impresionante tasa de crecimiento del PIB de un 23 por 100 solamente en 2011», «el paro descendía rápidamente» y Arabia Saudí había prometido duplicar sus inversiones en Gaza[7]. En otro frente, la Universidad Islámica de Gaza había logrado un triunfo diplomático por su cuenta en octubre de 2012, cuando organizó un congreso académico al que asistiría el reputado lingüista Noam Chomsky[8]. La estrella de Hamás ascendía sobre el horizonte, de manera lenta pero segura, a expensas de la desafortunada AP. Lo último que necesitaba era una confrontación armada con Israel que minara estos logros en aumento que tanto habían costado. Un puñado de comentaristas israelíes escépticos especuló con si el primer ministro, Benjamin Netanyahu, habría lanzado la Operación Pilar Defensivo para mejorar sus posibilidades en las siguientes elecciones[9]. Como regla general, sin embargo, los líderes israelíes no han emprendido operaciones militares de envergadura, o comprometido los intereses principales del Estado, buscando una ventaja electoral partidista[10]. También se dijo que la coalición que gobernaba Israel se sentía obligada a apaciguar la indignación popular ante los proyectiles de Hamás. Pero estos apenas habían tenido presencia en el radar político de Israel; la opinión pública estaba centrada en la República Islámica de Irán y en diversos asuntos internos. Entonces, ¿por qué atacó Israel?

En cierto plano, Israel fue transparente en lo que se refiere a sus motivos. Seguía repitiendo que quería restaurar su «capacidad disuasoria». El enigma era la naturaleza de la amenaza que esperaba aplastar, o de qué, exactamente, quería disuadir. La decisión de Israel de lanzar la Operación Pilar Defensivo procedía de una sucesión de reveses en la política exterior. Netanyahu se había dedicado a intentar unir a la comunidad internacional para atacar a Irán. Acabó haciendo el ridículo, no obstante, cuando mostró ante la Asamblea General de la ONU, en septiembre de 2012, una descripción caricaturesca de «la bomba iraní»[11]. Un

par de semanas más tarde, Hezbolá presumía de que un dron suyo había invadido el espacio aéreo israelí y había sobrevolado «lugares sensibles»[12]. Mientras tanto, su advenedizo gemelo «terrorista» en Gaza cimentaba su credibilidad mientras que las potencias regionales hacían burla a Israel a las puertas de su casa. El escándalo definitivo fue que Hamás se negara a comportarse como una organización terrorista y que, en lugar de ello, adquiriera un poder soberano legítimo y responsable. Un alto el fuego duradero equivaldría a agrandar su bona fide. Había llegado el momento de recordar a los nativos quién estaba al mando. Dicho de otra manera, y usando la metáfora favorita de Israel, ya era hora de «segar el césped» de nuevo en Gaza. «En el fondo de la Operación Pilar Defensivo», observaba astutamente el Crisis Group, «hay un intento de demostrar que la confianza recién adquirida de Hamás era del todo prematura y que, a pesar del despertar islamista, esos cambios en Oriente Próximo no iban a cambiar casi nada»[13]. Aun así, Israel necesitaba una coartada para justificar una nueva invasión sangrienta en Gaza. Cuando Israel necesitó una excusa para lanzar la Operación Plomo Fundido, rompió el alto el fuego (asesinando a seis militantes) para provocar un ataque de respuesta por parte de Hamás[14]. Cuatro años más tarde, asesinó al artífice del alto el fuego para provocar a Hamás.

La operación en sí, sin embargo, difería de su antecesora. La Operación Pilar Defensivo fue cualitativamente menos destructiva que la Operación Plomo Fundido. La clase experta postuló que Israel ya dominaba el arte de evitar las bajas civiles: las IDF usaron armamento de precisión durante la operación, mientras que las «lecciones» de la Operación Plomo Fundido / Informe Goldstone habían sido «aprendidas e interiorizadas»[15]. Pero el 99 por 100 de los ataques aéreos durante la Operación Plomo Fundido habían golpeado con exactitud sus objetivos, puesto que el objetivo declarado de Israel había sido «castigar, humillar y aterrorizar» a la población civil de Gaza (Informe Goldstone)[16]. Si la Operación Plomo Fundido había resultado una masacre, no había sido debido a los «errores» en la planificación o en la ejecución, y si la Operación Pilar Defensivo resultó menos letal, no lo fue porque Israel estuviera teniendo cuidado para evitar esos «errores». De hecho, cuando la constelación de las fuerzas políticas se realineó de nuevo a favor de Israel en 2014 y este desató la Operación Margen

Protector, las IDF desecharon conscientemente todas las lecciones que supuestamente habían aprendido[17]. La decisión de Israel de rebajar el uso violento de la fuerza en 2012 se relaciona con la matriz política excepcional en la que se desarrolló la Operación Pilar Defensivo. En primer lugar, Turquía y Egipto habían dejado claro hasta la saciedad que no se quedarían de brazos cruzados si Israel repetía la Operación Plomo Fundido, y explícitamente trazaron una línea roja ante una invasión por tierra israelí[18]. (El Cairo incluso llamó a consultas a su embajador en Israel.) Avisado por estas potencias regionales, la Casa Blanca aconsejó a Israel que no invadiera. En segundo lugar, la perspectiva de un «mega Goldstone»[19] pendía sobre Israel. Después de la Operación Plomo Fundido, los oficiales israelíes se habían escapado por un pelo de su responsabilidad legal. Pero si se cometía otra masacre y si El Cairo (donde en esos momentos gobernaba el progenitor político de Hamás) y Ankara (aún escocida por el ataque al Mavi Marmara)[20] abogaban por Gaza en la escena internacional, era posible que Israel no tuviera tanta suerte esta vez. En tercer lugar, Gaza era un hervidero de prensa extranjera. Israel había aislado a Gaza del mundo exterior con la colaboración del gobierno egipcio de Hosni Mubarak antes de la Operación Plomo Fundido. En la fase inicial de la operación, Israel había disfrutado de un monopolio casi total sobre la cobertura mediática. Pero esta vez la prensa podía entrar libremente en Gaza a través de Egipto (Israel no se había molestado en bloquear la entrada en ese flanco) y podía informar con credibilidad sobre las atrocidades israelíes en tiempo real. Teniendo en cuenta este trío de factores, Israel apuntó en su mayoría a «objetivos legítimos» durante la Operación Pilar Defensivo. Al mismo tiempo, la muerte y destrucción infligidas por Israel, aunque fuera en una escala menor, recibieron una gráfica cobertura periodística en profundidad. Cuando Israel desafiaba las leyes de la guerra, los problemas asomaban. Después de arrasar las estructuras civiles del gobierno en Gaza, los titulares de The New York Times en la edición web decían: «Israel apunta a edificios civiles». Unas horas más tarde, se metamorfoseó por «edificios gubernamentales» (probablemente, después de que los secuaces de Israel presentaran una queja). Pero había quedado escrito: la conducta de Israel se observaba con lupa desde el extranjero, así que mejor que tuviera cuidado por dónde pisaba.

Es cierto que fueron asesinados unos 100 civiles gazatíes (incluyendo 35 niños y niñas), y que de hecho Israel cometió numerosos crímenes de guerra (se destruyeron por completo 126 hogares)[21], pero en el tribunal de la opinión pública eso podía plausiblemente considerarse «daños colaterales». La precipitada escala de ataques sobre civiles coincidió con el inicio de las negociaciones diplomáticas[22]. A medida que las hostilidades llegaban a su fin, Israel volvió a su modo operativo habitual de apuntar o disparar indiscriminadamente sobre civiles para conseguir los mejores términos posibles en un acuerdo final. En los últimos cuatro días del asalto murieron cuatro veces más civiles gazatíes que en los cuatro primeros días. Israel también apuntaba a los periodistas en esos cuatro últimos días para impedir la transmisión de esos ataques terroristas y como prevención, en caso de que las conversaciones se interrumpieran y las IDF, después de todo, tuvieran que embarcarse en una invasión terrestre mortífera[23]. A Hamás también se le acusó de cometer crímenes de guerra, como «el lanzamiento de cientos de misiles contra los centros de población en Israel». Fueron asesinados cuatro civiles israelíes. Además, Human Rights Watch informó de daños en la propiedad civil israelí, por ejemplo, «un misil arrancó el tejado de una escuela»[24].

La resistencia armada que Hamás presentó durante los ocho días que duró el asalto israelí fue mayoritariamente nominal. La asimetría de la «guerra» fue algo a lo que apuntaba el ministro de Defensa Barak cuando presumía de que «Hamás solamente ha logrado llegar a los objetivos israelíes con una sola tonelada de explosivos, mientras que los objetivos en Gaza fueron atacados con 1.000 toneladas»[25]. Por otra parte, aunque Israel celebrara su despliegue de la Operación «Cúpula de Hierro»[26], el sistema de defensa antimisiles no «salvó innumerables vidas israelíes» y probablemente no salvó ninguna vida[27]. Comparemos las bajas civiles antes y después de que el sistema de defensa antimisiles de Israel estuviera operativo (véase el cuadro 3). Se concluye que la Operación Cúpula de Hierro no marcó ninguna diferencia. Era improbable que en general, aun concediendo algún caso aislado, Hamás usara proyectiles más sofisticados durante la Operación Pilar Defensivo. A través de su ejército de confidentes y su vigilancia aérea de última generación, Israel habría sido informado de

cualquier arsenal de armas sofisticadas de Hamás y habría destruido esos almacenes al inicio del ataque. Israel anunció el primer día de la Operación que «las IDF habían dañado gravemente las capacidades de Hamás para lanzar misiles de largo alcance (de un alcance de 40 kilómetros), así como las instalaciones de almacenamiento clandestino de armamento»; y el tercer día de que «las IDF han destruido una parte importante del arsenal de Fajr-5 de Hamás, muchos de ellos en plataformas de lanzamiento clandestinas»[28]. Era también improbable que Netanyahu se hubiera arriesgado a un ataque justo antes de unas elecciones si Hamás hubiera poseído armas capaces de infligir fuertes pérdidas. Un puñado de proyectiles de Hamás sí se internaron más profundamente en Israel que antes, pero estos no llevaban explosivos: un oficial israelí los llamó despectivamente «petardos, básicamente»[29]. Si Israel alababa la Operación Cúpula de Hierro era porque buscaba rescatar algo de una operación básicamente fallida. Poco después de que terminara la Operación Pilar Defensivo, el experto en defensa antimisiles del MIT, Theodore Postol, expresó sus dudas. «Inicialmente me tragué todo sobre la Cúpula de Hierro», admitió. «Ahora soy escéptico. Sospecho que no funciona tan bien como dicen los israelíes.» Un importante ingeniero aeroespacial israelí posteriormente calificó las cosas que se decían de la Operación Cúpula de Hierro como poco de «exageradas»[30].

Cuadro 3. ¿El milagro de Cúpula de Hierro?

	«Misiles» que llegaron a Israel	Bajas civiles	Ratio
Antes de Cúpula de Hierro (Plomo Fundido)	925	3	300:1
Después de Cúpula de Hierro (Pilar Defensivo)	1.350	4	300:1

▪

a Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, Update n.o 2 (18 de noviembre de 2012).

b Israel Defence Forces «2012 Operation Pillar of Defense».

El desarrollo de la Operación Pilar Defensivo seguía su curso cuando Israel se topó con un cul de sac táctico. Había atacado todos los objetivos militares planificados en Gaza y no podía recurrir al bombardeo sostenido para aterrorizar, mientras que Hamás, adoptando la estrategia de Hezbolá, seguía lanzando sus proyectiles hacia Israel. El resultado psicológico era que Netanyahu no podía declarar la victoria y se veía obligado a lanzar una invasión terrestre para detener los ataques de los proyectiles. No obstante, solamente podía evitar fuertes pérdidas entre sus combatientes si las IDF bombardeaban todo lo que se les pusiera al alcance (y lo que no) mientras se abrían camino por Gaza. Pero, en el nuevo contexto político de la Operación Pilar Defensivo, donde poderosos agentes regionales se oponían frontalmente a una invasión israelí; ante la amenaza de una reedición de Goldstone; con la prensa extranjera no solo infiltrada entre las tropas israelíes, sino entre la población de Gaza, Israel se inhibió de lanzar una invasión terrestre mortífera al estilo de la Operación Plomo Fundido. El primer ministro israelí se encontraba literalmente entre la espada y la pared. No podía someter a Hamás sin una invasión terrestre, pero no podía desencadenar una invasión terrestre sin incurrir bien en un coste interno inaceptable, o en un coste diplomático inaceptable, es decir, demasiadas bajas civiles en el bando palestino[31]. Es posible señalar el momento exacto en el que la Operación Pilar Defensivo se vino abajo. En la conferencia de prensa del 19 de noviembre, el líder de Hamás, Khalid Mishal, le dijo claramente a Netanyahu: «¡Vamos, invade! Si quisieras hacerlo», se reía, «ya lo habrías hecho»[32]. El primer ministro israelí entró en pánico; su farol había sido descubierto. Lo que ocurrió a continuación fue una repetición del ataque de Israel en Líbano en 2006. Incapaz de detener los ataque con misiles de Hezbolá, pero receloso de una invasión terrestre completa que implicara un combate cuerpo a

cuerpo, Israel había llamado a la secretaria de Estado estadounidense Condoleezza Rice para negociar un alto el fuego. Esta vez se convocó a la secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton para que le sacara las castañas del fuego a Israel. Ni siquiera el ataque con bombas del 21 de noviembre en un autobús de Tel Aviv, que hirió a 28 civiles, y que normalmente habría desencadenado la congelación de las negociaciones y una respuesta contundente de Israel, desestabilizó la decisión de Netanyahu de acabar a toda prisa con la Operación Pilar Defensivo, antes de que Hamás volviera a lanzar más pullas[33].

Los términos formales del acuerdo que ponía fin a la Operación Pilar Defensivo[34] señalaban un revés sorprendente para Israel. Se pedía un alto el fuego mutuo, y no, como exigía Israel, la imposición de un alto el fuego unilateral a Hamás. También incorporaba un lenguaje que sugería que se levantaría el asedio de Gaza y especialmente omitía la precondición de que Hamás debía acabar con su contrabandeo o fabricación de armas. Las razones no eran difíciles de descubrir. Bajo el derecho internacional, a los pueblos que se resisten a la ocupación extranjera no se les prohíbe usar la fuerza armada[35]. Egipto, que había patrocinado el alto el fuego, no estaba dispuesto a hacer cambalache con la prerrogativa legal de Hamás[36]. Israel sin duda creía que Washington usaría su musculatura política para lograr unos términos mejores para el alto el fuego de El Cairo. A lo largo del ataque, Estados Unidos había prestado un apoyo público abundante a Israel[37]. Pero el presidente Obama, que tenía la esperanza de atraer al «nuevo» Egipto bajo el ala de Estados Unidos, se negó a imponerse sobre los Hermanos Musulmanes y a «cargar con todo su peso en apoyo de Israel»[38]. Si quedaba alguna duda acerca de quién había ganado y quién había perdido en este último asalto, enseguida se despejó. Israel lanzó la Operación Pilar Defensivo para que Gaza volviera a temerlo. Pero después de que se anunciara el alto el fuego y sus condiciones, los palestinos invadieron las calles de Gaza, celebrándolo como si fuera una boda[39]. En una entrevista de la CNN con Christiane Amanpour, Mishal tenía la presencia y exudaba la confianza de un líder mundial[40]. Mientras tanto, en la conferencia de prensa israelí que anunciaba el alto el fuego, el triunvirato gobernante –Netanyahu, Barak y el ministro de Asuntos Exteriores, Avigdor Lieberman– parecía un grupo de escolares a

quienes se les hubiera convocado al despacho del director, contando los segundos para que acabara la humillación. Los comentaristas leales a Israel trataron de vender la Operación Pilar Defensivo como «un fulminante éxito militar», un «éxito impresionante» o, con más prudencia, «hasta cierto punto, un éxito»[41], pero solo los muy dispuestos a ser crédulos se lo tragaron. Aun así, ya se podía predecir entonces con seguridad que Israel no cumpliría los términos del acuerdo final y que no levantaría el asedio en Gaza[42]. Durante las deliberaciones del Consejo de Ministros israelí sobre si aceptar o no el alto el fuego, el ministro de Defensa Barak desechaba cínicamente la letra pequeña, burlándose: «Un día después del alto el fuego, nadie recordará lo que se ha escrito en el documento»[43]. Hasta qué punto Egipto y Turquía estaban dispuestos a llegar en defensa de Gaza también se exageraba[44]. Muchos palestinos dedujeron de las rotundas derrotas que había sufrido Israel que solamente la resistencia armada podría terminar y terminaría con la ocupación israelí. De hecho, la resistencia de Hamás operaba en buena medida en el nivel de las percepciones, los proyectiles que se dirigían a Tel Aviv sí desestabilizaban a los residentes de la ciudad. Pero apenas había pruebas, no obstante, de que los palestinos pudieran reunir una fuerza militar suficiente como para obligar a que Israel se retirara por completo de los territorios ocupados. Con todo, la firmeza de Gaza hasta las horas finales de la Operación Pilar Defensivo sí demostraba la voluntad indomable del pueblo palestino. Si esta fuerza potencial pudiera canalizarse en una campaña de desobediencia civil masiva, y si los defensores en el extranjero de los derechos palestinos a la vez movilizaran a la opinión pública internacional, entonces se podría a obligar a Israel a finalizar la ocupación, mientras que se perderían menos vidas palestinas que en una resistencia armada (futil).

[1] Israel Ministry of Foreign Affairs, «Pillar of Defense-Statement of DM Ehud Barak», 14 de noviembre de 2012.

[2] «Gaza Abacus», The Economist, 19 de noviembre de 2012.

[3] A. Benn, «Israel Killed Its “Subcontractor” in Gaza», Haaretz, 14 de noviembre de 2012. Benn señala que «Jabari fue el socio de Israel en las negociaciones para la liberación de Gilad Shalit; fue él

quien garantizó la seguridad y bienestar de Gilad Shalit y fue quien se encargó de que Shalit regresara a su casa el pasado otoño».

[4] R. Pedatzur, «Why Did Israel Kill Jabari?», Haaretz, 4 de diciembre de 2012; G. Baskin, «Assassinating the Chance for Calm», The Daily Beast, 15 de noviembre de 2012; N. Hasson, «Israeli Peace Activist: Hamas leader Jabari killed amid talks on long-term peace», Haaretz, 15 de noviembre de 2012; C. Balmer y N. al-Mughrabi, «Gaza Militants Signal Truce with Israel after Rockets», Reuters, 12 de noviembre de 2012.

[5] G. Baskin, «Assassinating». Véase también International Crisis Group, Fire and Ceasefire in a New Middle East, 2012, pp. 1, 4.

[6] J. Rudoren, «Qatar's Emir Visits Gaza, Pledging $400 Million to Hamas», The New York Times, 23 de octubre de 2012; J. Rudoren, «Turkish Leader Says He Plans a Visit to Gaza Soon», The New York Times, 2 de noviembre de 2012.

[7] S. Roy, The Gaza Strip: The Political Economy of De-development, 3.a ed. aumentada, Washington, DC, 2016, pp. xxxviii-xxxix; para detalles de este optimista cuadro, véase ibid., pp. xli-xlvi, lxii.

[8] «Chomsky in First Visit to Gaza: End the blockade», Haaretz, 19 de octubre de 2012.

[9] A. Benn, «Israel Killed», cit.; R. Pedatzur, «Why Did Israel?», cit.

[10] Véase cap. II.

[11] H. Sherwood, «Netanyahu's Bomb Diagram Succeeds-But Not in the Way the PM Wanted», The Guardian, 27 de septiembre de 2012.

[12] «Hezbollah Admits Launching Drone over Israel», BBC, 11 de octubre de 2012.

[13] Crisis Group, Fire and Ceasefire, cit., p. 8.

[14] Véase cap. II.

[15] N. Jeffay, «Israel Learned the Lessons of the Last Gaza War», Forward, 26 de noviembre de 2012; A. Shavit, «End the War While You're Ahead», Haaretz, 19 de noviembre de 2012.

[16] Véase cap. III y cap. V.

[17] Véase cap. XI.

[18] Crisis Group, Fire and Ceasefire, cit., p. 17, n. 117.

[19] B. Dror Yemini, «Ceasefire Now», NRG-Ma'ariv, 18 de noviembre de 2012.

[20] Véase cap. VII.

[21] «One Year Following the Israeli Offensive on Gaza», Palestinian Center for Human Rights, 14 de noviembre de 2013; OCHA, «Escalation in Hostilities, Gaza and Southern Israel», 26 de noviembre de 2012.

[22] J. Borger y H. Sherwood, «Israeli Envoy Arrives in Egypt for Gaza Ceasefire Talks», The Guardian, 18 de noviembre de 2012; I. Barzak y K. Lamb, «Israel Intensifies Attacks despite Truce Talks», Associated Press, 20 de noviembre de 2012; B'Tselem (Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories), «Human Rights Violations during Operation Pillar of Defense», 2013.

[23] Human Rights Watch, «Unlawful Israeli Attacks on Palestinian Media», 20 de diciembre de 2012; Reporters without Borders, «RWB Condemns Air Strikes on News Media in Gaza City», 18 de noviembre de 2012; Committee to Protect Journalists, «Three Journalists Killed in Airstrikes in Gaza», 20 de noviembre de 2012.

[24] Human Rights Watch, «Palestinian Rockets Unlawfully Targeted Israeli Civilians», 24 de diciembre de 2012.

[25] E. Leshem, «Israel Dealt Hamas "A Heavy Blow" and Is Prepared to Resume Offensive If Need Be, Netanyahu Says», The Times of Israel, 22 de noviembre de 2012.

[26] I. Orpaz, «How Does the Iron Dome Work?», Haaretz, 19 de

noviembre de 2012; C. Levinson y A. Entous, «Israel’s Iron Dome Battled to Get Off the Ground», The Wall Street Journal, 26 de noviembre de 2012.

[27] N. G. Finkelstein, «Iron Dome or Swiss Cheese?», 23 de noviembre de 2012, disponible en [normanfinkelstein.com/2012/11/23/iron-dome-or-swiss-cheese/]; Israel Defense Forces, «2012 Operation Pillar of Defense» (n. d.), disponible en [idfblog.com/about-the-idf/history-of-the-idf/2012-operation-pillar-of-defense/]. «Countless» citado por esta fuente.

[28] Disponible en [mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Terrorism/Palestinian/Pages/Operation_Pillar_of_Defense_Nov_2012-IDF_updates.aspx].

[29] D. Williams, «Some Gaza Rockets Stripped of Explosives to Fly Further», Reuters, 18 de noviembre de 2012.

[30] P. Koring, «Success of Israel’s Iron Dome Effectiveness Questioned», The Globe and Mail, 29 de noviembre de 2012; R. Pedatzur, «The Fallibility of Iron Dome Missile Defense», Haaretz, 11 de noviembre de 2013. Véase también cap. XI.

[31] N. G. Finkelstein, «I Still Say, No Invasion», 19 de noviembre de 2012, disponible en [normanfinkelstein.com/2012/11/19/norman-finkelstein-i-still-say-no-invasion/].

[32] F. Akram, J. Rudoren y A. Cowell, «Hamas Leader Dares Israel to Invade amid Gaza Airstrikes», The New York Times, 19 de noviembre de 2012.

[33] H. Sherwood, «Tel Aviv Bus Bombing Hardens Israeli Public Opinion against Gaza Ceasefire», The Guardian, 21 de noviembre de 2012; B. Ravid, «During Gaza Operation, Netanyahu and Obama Finally Learned to Work Together», Haaretz, 26 de noviembre de 2012. El ataque del autobús fue posteriormente atribuido a un ciudadano palestino de Israel.

[34] «Ceasefire Agreement between Israel and Gaza’s Palestinians», Reuters, 21 de noviembre de 2012.

[35] Véase cap. XI.

[36] En una nota diplomática al margen para Netanyahu, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, prometía vagamente «ayudar a Israel a abordar sus necesidades de seguridad, especialmente el asunto de la entrada ilegal de armas y explosivos en Gaza», Office of the Press Secretary, The White House, 21 de noviembre de 2012.

[37] US Department of State, «Gaza Rocket Attacks», 14 de noviembre de 2012; White House, «Remarks by President Obama and Prime Minister Shinawatra in a Joint Press Conference», 18 de noviembre de 2012.

[38] M. Kalman y K. Sengupta, «Fragile Truce Deal Hailed as a Victory on Both Sides», The Independent, 21 de noviembre de 2012.

[39] C. Balmer, «Relief at Gaza Ceasefire Can't Mask Its Frailty», Reuters, 21 de noviembre de 2012.

[40] C. Amanpour, «Israel-Hamas Cease-Fire; Interview with Hamas Political Leader Khaled Meshaal», CNN, 21 de noviembre de 2012.

[41] A. Pfeffer, «Winners and Losers of Israel-Hamas Cease-Fire», Haaretz, 22 de noviembre de 2012; A. Shavit, «Operation Rectification», Haaretz, 22 de noviembre de 2012; A. Harel, «Bullet Points from Israel's Home Front», Haaretz, 30 de noviembre de 2012.

[42] N. G. Finkelstein, «Israel's Latest Assault on Gaza», The New Left Project, 28 de noviembre de 2012.

[43] B. Ravid, «Behind the Scenes of Israel's Decision to Accept Gaza Truce», Haaretz, 22 de noviembre de 2012.

[44] Este autor señalaba entonces:

Probablemente Egipto no vaya a presionar a Estados Unidos para que le imponga a Israel los términos de este alto el fuego. Los intereses respectivos del «nuevo» Egipto y de Hamás divergen en su

mayoría, no convergen. Egipto necesita desesperadamente las subvenciones de Estados Unidos y actualmente está negociando un préstamo de 5.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. La popularidad del gobierno de los Hermanos Musulmanes y del presidente Mohammed Morsi se basará en último término en lo que entregue a los egipcios, no a los gazatíes. Las elites políticas estadounidenses están poniendo a Morsi por las nubes, masajeándole el ego y especulando sobre la «relación especial» que ha creado con Obama. A quienes estén familiarizados con las manipulaciones psicológicas de Washington en lo que se refiere a los líderes árabes –en especial con los mediocres, como Anwar El Sadat– no les sorprenderá que Estados Unidos ahora corteje a Morsi. Es también improbable que Turquía se arriesgue a favor de Hamás. Ahora mismo Ankara se está doliendo del feo de Obama, que no la ha designado a ella, sino a El Cairo, como interlocutor principal para lograr un alto el fuego. (Turquía aparentemente quedó descalificada porque etiquetó a Israel como un «Estado terrorista» durante la Operación Pilar Defensivo.) Aun así, como aspira a ser el socio preferente de Estados Unidos en la zona, y calculando que el camino a Washington pasa por Tel Aviv, Turquía ha retomado las negociaciones con Israel para romper el atasco diplomático después del asalto letal de Israel al Mavi Marmara en 2010. Mientras tanto, esta operación reciente ha hecho ver a Israel que alejarse de los dos aliados históricos que tenía en la región, Egipto y Turquía, no es una política prudente, por lo que una reconciliación que deje a ambos en buen lugar entre Ankara y Tel Aviv (el gobierno turco ha pedido disculpas formales, una compensación monetaria y el fin del asedio a Gaza) probablemente esté en el horizonte. La lección que esto enseña es que, incluso cuando se abre una nueva era, hay límites muy definidos en lo que respecta a con cuánto apoyo en la zona pueden contar, en realidad, los palestinos (N. G. Finkelstein, «Israel’s Latest Assault»).

XI. ISRAEL TIENE DERECHO A DEFENDERSE

El 8 de julio de 2014, Israel lanzó la Operación Margen Protector. Ha sido el más largo y destructivo de los ataques recientes de Israel sobre Gaza; de hecho, fue «el asalto más devastador en Gaza desde el inicio de la ocupación israelí en 1967»[1]. La Operación Plomo Fundido duró 22 días, mientras que la Operación Margen Protector duró 51 días (terminó el 26 de agosto). Unos 350 niños y niñas fueron asesinados y se destruyeron 6.000 hogares durante Plomo Fundido, mientras que en Margen Protector se mató a más de 550 niños y niñas y se destruyeron 18.000 hogares. Israel dejó 600.000 toneladas de escombros en Plomo Fundido, mientras que dejó 2 millones y medio de desechos en Margen Protector. Aún más, Margen Protector «tuvo un impacto en una economía ya paralizada en un momento en el que las condiciones socioeconómicas se encontraban en el momento más bajo desde 1967. Esta operación, además, tuvo un impacto más grave sobre las condiciones socioeconómicas en comparación con las dos operaciones militares previas en 2008 y 2012»[2]. Pero, en contraste con la Operación Plomo Fundido y con la guerra del Líbano de 2006, Margen Protector no fue planificada con mucha antelación; la decisión de atacar fue el resultado de factores contingentes[3]. La cúpula israelí también se lo pensaba dos veces durante Margen Protector antes de hacer esas audaces declaraciones incriminatorias que en el pasado les metían en embrollos legales. Inmediatamente después de la Operación Plomo Fundido, la ministra de Exteriores, Tzipi Livni, había presumido en público de las órdenes criminales que había emitido, pero después sería objeto de una querella criminal[4]. Aplacada tras su roce con la ley, esta vez Livni cantaba en otro tono como ministra de Justicia tras Margen Protector: «Cuando se detiene el fuego, empieza el fuego legal dirigido hacia Israel, sus líderes, sus soldados y sus comandantes. […] Yo intento estar en primera línea de estas batallas […] y le daré a cada soldado y a cada oficial de las IDF un chaleco antibalas legal»[5]. Aun así, muchas de las tácticas israelíes –provocaciones, fuerza masiva– se ajustaban al patrón de las últimas décadas. Margen Protector también terminaba con una nota conocida: Israel no podía declarar

una victoria militar decisiva, mientras que Hamás no podía extraer una ganancia política concreta.

Margen Protector se originaba en otro audaz despliegue del pragmatismo de Hamás. A finales de abril de 2014, el movimiento islámico y su rival seglar palestino Al Fatah formaron un «gobierno de consenso». Estados Unidos y la Unión Europea no suspendieron sus relaciones, sino que «dieron una prudente bienvenida» a la iniciativa palestina, adoptando una estrategia de esperar a ver[6]. Era, evidentemente, un momento de revancha, puesto que Israel había abortado la iniciativa de paz de 2013-2014 que había liderado el secretario de Estado estadounidense, John Kerry[7]. Aunque fuera por la puerta trasera, Hamás había ganado una legitimidad sin precedentes, pero también había hecho una concesión sin precedentes. Estados Unidos y la Unión Europea llevaban mucho tiempo defendiendo la relación diplomática con los líderes palestinos con tres condiciones previas: reconocimiento de Israel, renuncia a la violencia y reconocimiento de los acuerdos previos[8]. Hamás no puso objeciones cuando el presidente palestino Mahmoud Abbas, hablando en nombre de la nueva unidad de gobierno, reiteró su apoyo a las condiciones previas. Mientras se desarrollaban estos acontecimientos, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, estallaba de rabia[9]. La perspectiva de una «unidad palestina» era una «línea roja» para Netanyahu (y para los líderes israelíes en general), así que conscientemente buscó cómo sabotearla[10]. En el supuesto de que el consenso palestino se mantuviera, él no podía ya invocar la coartada habitual israelí –Abbas solamente representaba a una facción palestina; Hamás era una organización terrorista volcada en la destrucción de Israel– para evadir una resolución del conflicto[11]. La ira del primer ministro aumentó aún más porque Estados Unidos y la Unión Europea ya habían ignorado su premonición de que Irán pretendía crear un «segundo holocausto» en Israel. En lugar de ello, habían iniciado conversaciones diplomáticas con Teherán para lograr un acuerdo sobre el programa de armas nucleares.

En junio de 2014, a Netanyahu le cayó un regalo del cielo. Una célula rebelde de Hamás secuestró y mató a tres adolescentes israelíes en Cisjordania. Netanyahu fue informado enseguida de que los adolescentes habían sido asesinados (no capturados para un

futuro intercambio de prisioneros) y de que la dirección de Hamás no era responsable[12]. «El gobierno supo casi desde el inicio que los chicos habían muerto», observaba J. J. Goldberg, exdirector del periódico (judío) Forward. «No había duda ninguna»[13]. Pero, siempre dispuesto a aprovecharlo todo, Netanyahu se sirvió de esta «ayuda»[14] macabra para romper el gobierno de unidad palestina. Fingiendo una misión de rescate, Israel lanzó la Operación Guardián de mi Hermano a mediados de junio. Al menos cinco palestinos de Cisjordania murieron, se demolieron casas, se arrasaron comercios y 700 palestinos, en su mayoría miembros de Hamás, fueron detenidos, incluyendo a muchos de los que habían sido liberados en un intercambio de prisioneros en 2011[15]. Esta conducta desbocada estaba claramente diseñada para provocar una respuesta violenta por parte de Hamás, para así «demostrar» que era una organización terrorista. Netanyahu podía entonces, y de hecho así lo hizo, reprocharle a Washington: «Nunca vuelvas a dudar de mí»[16]. Hamás al principio se resistió a la provocación israelí, aunque otras facciones de Gaza sí dispararon proyectiles. Pero, en la refriega consiguiente, Hamás entró al trapo y la violencia se volvió incontrolable[17].

Una vez estallaron las hostilidades, Israel se enfrentó a un dilema ya familiar. Los proyectiles de corto alcance del tipo de los que poseía Hamás[18] no podían desmantelarse desde el aire, tenían que conquistarse desde tierra. Pero una invasión terrestre le costaría demasiado a Netanyahu en el frente interno si morían muchos soldados israelíes en el combate cuerpo a cuerpo con Hamás por las calles, o le costaría demasiado en el frente internacional si los soldados israelíes se inmunizaban contra las bajas disparando indiscriminadamente contra la población y la infraestructura civil a medida que avanzaban[19]. Incapaz de labrarse un camino seguro a través de la selva de incógnitas políticas, Netanyahu en un primer momento se abstuvo de lanzar una invasión terrestre. Pero después le cayeron dos regalos más del cielo. El primero fue que el ex primer ministro británico Tony Blair aparentemente logró, aunque fue el hombre fuerte de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi, quien lo presentó formalmente[20], un acuerdo de alto el fuego (el 14 de julio) según el cual Hamás dejaría de disparar misiles a Israel e Israel suavizaría el bloqueo de Gaza cuando «se estabilizara la situación en términos de seguridad»[21]. El anterior alto el fuego

que Hamás había firmado con Israel no contenía esa advertencia sobre la «seguridad»[22]. Puesto que Israel consideraba que Hamás era una organización terrorista, la situación de seguridad en Gaza solamente podría estabilizarse si Hamás era derrotado o se desarmaba y, en ausencia de estas condiciones, el asedio podía continuar. No fue una sorpresa para nadie que Hamás rechazara los términos de esta tregua. Pero, mientras que la propuesta de el-Sisi no puso fin a las hostilidades armadas, sí le dio a Israel una excusa creíble para una brutal invasión terrestre. ¿Qué otra opción le quedaba (podría haber argumentado Israel) frente a la intransigencia de Hamás? En segundo lugar, el 17 de julio un avión de una aerolínea malasia que sobrevolaba Ucrania fue abatido[23]. Este incidente políticamente explosivo desplazó instantáneamente a Gaza de las portadas de los periódicos. Siempre un consumado y cínico político, Netanyahu aprovechó esta oportunidad de oro. Se dice que poco después de la masacre de la plaza de Tiananmen en 1989, Netanyahu habría declarado que Israel había cometido una torpeza enorme por no haberse deshecho de «5, 50 o 500» palestinos instigadores de la primera intifada mientras todos los medios de comunicación estaban pendientes de China[24]. El derribo del avión malayo fue el «momento Tiananmen» de Netanyahu. Libre gracias a esta distracción de desencadenar un ataque sin restricciones, Netanyahu lanzó la invasión terrestre unas horas más tarde, en la noche de ese mismo día[25]. La nueva constelación regional, a medida que la Primavera Árabe degeneraba en el Invierno Árabe, le envalentonó aún más. Hamás se quedó a la intemperie, sin ningún Estado dispuesto a batirse por él y con muchos deseando su derrota. El destino había puesto en fila los patos para la escopeta de Netanyahu: la excusa perfecta, el reclamo perfecto, la perfecta alineación de los cuerpos políticos terrenales. Finalmente podía ajustar las cuentas con Hamás y, de paso, vengarse con gusto de la humillación que había sufrido con la Operación Pilar Defensivo (2012)[26].

A medida que las tropas de infantería atravesaban la Franja, Israel soltaba con abandono su arsenal explosivo. La población y las infraestructuras civiles de Gaza –casas y comercios, escuelas y mezquitas, hospitales y ambulancias, centrales eléctricas y depuradoras, refugios civiles y civiles huyendo espantados– cayeron bajo un ataque incesante, indiscriminado, desproporcionado y

deliberado. Israel supuestamente disparó 20.000 proyectiles de artillería de alto poder explosivo, 14.500 obuses desde tanques, 6.000 misiles y 3.500 proyectiles navales en el enclave[27]. Este recuento no incluye el tonelaje de bombas –más de 100 bombas de una tonelada se arrojaron únicamente en el barrio de Shuja'iya–. Más de 1.500 civiles gazatíes fueron asesinados durante la Operación Margen Protector. (En Israel fueron asesinados seis civiles)[28]. En un ranking global sobre el número de víctimas civiles como resultado de las armas explosivas, la diminuta Gaza ocupaba el tercer lugar –por debajo de Irak y Siria, pero por encima de Afganistán, Pakistán y Ucrania[29]–. Amplios sectores de Gaza quedaron reducidos a escombros; la economía de Gaza «efectivamente se derrumbó» y se calculaba que su recuperación «llevaría décadas»[30]. La abrumadora y violenta fuerza que desató Israel estaba diseñada para limitar las bajas en combate de las IDF bombardeando a todo lo que se pusiera por delante del ejército invasor y para subyugar la voluntad de resistencia de Gaza, aterrorizando a la población civil y pulverizando las estructuras civiles. Pero también era un indicio del sadismo y la brutalidad que permeaba el escalafón de las IDF. El Informe Goldstone había concluido que el objetivo de Israel en la Operación Plomo Fundido era «castigar, humillar y aterrorizar a una población civil»[31]. La Operación Margen Protector repetía la misma actuación israelí, pero a una escala mucho mayor. Peter Maurer, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, observaba después de recorrer la Franja devastada: «Nunca antes había visto una destrucción así»; mientras que el coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en Oriente Próximo observaba: «Ningún ser humano que venga aquí puede quedar indiferente ante la terrible devastación que se ve»[32]. Fue una «salvaje guerra vengativa», recordaba el periodista de Haaretz Zvi Bar, «que convirtió a toda la población de Gaza en una infraestructura que había que destruir»[33]. «En los treinta años que llevo investigando y escribiendo sobre Gaza y su pueblo», reflexionaba Sara Roy, de la Universidad de Harvard, después de la Operación Margen Protector, «puedo decir sin lugar a dudas que nunca había visto la destrucción humana, física y psicológica que hoy he visto»[34]. Incluso el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, que habitualmente seguía la estela de Washington, sintió la necesidad (o se sintió obligado) de hablar en la Asamblea General de la ONU durante la

operación: «La muerte y destrucción masiva en Gaza ha escandalizado y avergonzado al mundo entero», mientras que, unos meses más tarde, dijo en una conferencia de prensa después de visitar Gaza: «La destrucción que he visto al venir aquí desafía toda descripción»[35]. Mientras tanto, la opinión de consenso dentro de Israel era que Margen Protector era «una operación militar limitada»[36].

Para disculpar la cifra de muertes civiles en Gaza, Israel, como era habitual, acusaba a Hamás de usar a civiles como «escudos humanos»[37]. Pero ni las más fiables organizaciones de defensa de los derechos humanos ni la prensa, como de costumbre, encontraron pruebas que respaldaran las alegaciones de Israel[38]. En una defensa global de su conducta durante la Operación Margen Protector, Israel afirmó que «las IDF perseguían lograr los fines marcados por el Gobierno de Israel, a la vez que se adherían a la Ley de Conflictos Armados y, en determinados aspectos, las IDF incluso fueron más allá de sus obligaciones legales»[39]. Como si estuviera leyendo un guión oficial israelí, un Grupo Militar de Alto Nivel –financiado y seleccionado por los «Amigos de la Iniciativa de Israel», y que incluía al perenne palmero de Israel, el coronel Richard Kemp– proclamaba: «Las IDF no solo han cumplido las obligaciones que les imponía la Ley de Conflictos Armados, sino que a menudo las han superado». De hecho, decían que «las IDF habían mostrado una enorme contención» y que «una ética de conservación de la vida [...] se había extendido por todo el escalafón». Incluso llegaba tan lejos como para «expresar su gran preocupación porque las acciones y prácticas de las IDF para prevenir los daños colaterales fueran tan extensas [...] que limiten la efectividad de nuestra fuerza militar, si se convierten en normas bélicas limitantes promulgadas en el derecho consuetudinario»[40]. La credibilidad de estas declaraciones, no obstante, choca con los testimonios de los soldados israelíes que combatieron durante Margen Protector. Por contraste, la «evaluación» del Grupo Militar de Alto Nivel consistió en gran medida en una transcripción estenográfica de lo que les contaron los oficiales israelíes de alto rango. Los testimonios presenciales de las IDF fueron recopilados por Breaking the Silence, una organización no gubernamental israelí formada por exsoldados. Ninguno de los cientos de testimonios que esta organización recogió durante más de una década ha sido demostrado que fuera falso y

todos ellos recibieron la aprobación para publicarse por parte de la censura de las IDF. La tendencia política de Breaking the Silence no era exageradamente izquierdista (no apoya el movimiento de Boicot, Sanciones y Desinversiones y se opone a que se procese por lo penal a los oficiales israelíes), mientras que la mayoría de los soldados testigos no mostraban arrepentimiento[41]. Las dimensiones delictivas de Margen Protector pueden atisbarse en estos relatos de los testigos de las IDF (véase el cuadro 4). Aunque Israel se retraiga ante los paralelismos de su propia conducta con la de los nazis, uno de los testimonios de Breaking the Silence (n.o 83) rompe ese tabú: «Está esa foto famosa que siempre muestran en los viajes a Polonia [en los que la juventud israelí visita los lugares de memoria del Holocausto], que muestra Varsovia antes de la guerra y Varsovia después de la Segunda Guerra Mundial. La foto muestra el corazón de Varsovia y es una ciudad europea con clase, y después la muestra al final de la guerra. Es exactamente el mismo barrio, solo queda una casa en pie y el resto son todo ruinas. Aquello parecía lo mismo». Para evitar confusas redundancias, el cuadro 4 omite la sucesión de combatientes que testificaron que el modus operandi de las IDF durante la operación era disparar a matar a todo lo que se mueve, a menudo con órdenes explícitas, pero también porque «molaba»[42]. Si el Grupo Militar de Alto Nivel desechó sin más miramientos todos estos testimonios de combatientes fue porque «los altos mandos israelíes, así como quienes lideraban el combate sobre el terreno», los contradecían[43]. ¿Quién pondría en duda a una autoridad tan desinteresada? El último testimonio (n.o 111) de la colección de Breaking the Silence nos da una idea de cómo la sociedad ha criado «el ejército más moral del mundo». «Sales de la Franja de Gaza y la pregunta más obvia es: “¿Has matado a alguien?”», se lamentaba un sargento de infantería. «Incluso si te encuentras con la chica más de izquierdas del mundo, en algún momento empezará a pensar: “¿Mataste o no a alguien?” y, ¿qué le vas a hacer? La mayor parte de la gente en nuestra sociedad lo considera una distinción de honor. Así que todo el mundo quiere salir de allí con esa sensación de satisfacción».

Cuadro 4. Cómo combatió Israel en Margen Protector: una

selección de testimonios de las IDF

18	Cuando nos fuimos después de la operaci
21	Me acuerdo de que el nivel de destrucció
22	Entramos en Gaza […] usando una poten
25	Parecía todo una película de ciencia ficci
30	Antes de entrar a pie [a la Franja de Gaza
31	Los efectos de las explosiones causaban u
36	Podíamos ver el centro de la Franja. Diga
38	Disparas a todo lo que se mueve, y tambi
49	Allí había una destrucción absoluta, las f
70	El inabarcable número de muertos en un
74	Es la destrucción en un nivel totalmente
94	La fuerza aérea descargó una cantidad de
96	Se disparan obuses todo el rato. Incluso c

▪

Fuente: Breaking the Silence, This is How We Fought in Gaza: Soldier's Testimonies and Photographs from Operation Protective Edge, 2014

Los testimonios están numerados en la recopilación .

El balance oficial israelí sobre Margen Protector afirmaba que «la artillería se empleó de una forma contenida y calculada, después de adoptar varias precauciones técnicas y doctrinarias con el fin de minimizar el daño potencial civil y optimizar la precisión de los disparos» (State of Israel, 2014 Gaza Conflict, §357), mientras que el High Level Military Group afirmaba que «la vasta mayoría de los disparos de artillería durante la operación terrestre se produjeron en zonas abiertas de Gaza sin ninguna presencia civil […]. Las IDF, además, empleaban una serie de medios técnicos y operativos para garantizar la precisión de su artillería» (Assessment, § 117).

A Israel le fue mejor y peor de lo que esperaba con la Operación. En un lado de la balanza, a pesar de los asesinatos y el caos que Israel infligía diariamente a Gaza, la Casa Blanca le dio luz verde para seguir. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos informaron desde bastante temprano que Israel probablemente estaba apuntando o disparando de manera indiscriminada a la población civil y a las infraestructuras civiles[44]. Pero ahora, a pesar de alguna fricción entre bastidores[45], Estados Unidos no presionaba públicamente a Israel para que desistiera. Por el contrario, el presidente Barack Obama o sus portavoces invocaban puntualmente el «derecho a la defensa propia» de Israel mientras hacían la vista gorda sobre las atrocidades de las IDF y oídos sordos a los lamentos de Gaza[46]. El hecho indiscutible era que no solamente Obama estaba permitiendo esta última masacre israelí en Gaza: era su principal posibilitador. Podríamos preguntarnos por qué apoyaba la masacre, cuando previamente había apoyado las negociaciones con el gobierno de unidad Hamás-Al Fatah. La respuesta sencilla es que, una vez que los proyectiles de Hamás empezaron a sobrevolar Israel, y el lobby interno israelí buscaba permanentemente el apoyo del Congreso[47], habría requerido tener firmeza, algo de lo que claramente carecía Obama, para

desafiarlo. Además, ¿acaso la realpolitik no le impelía a reafirmar el «derecho a la defensa propia» de Israel día sí y día también, incluso aunque las organizaciones de defensa de los derechos humanos documentaran las atrocidades israelíes? Más aún, Israel obtenía grandes beneficios y Gaza grandes pérdidas de una reconfiguración radical de la región. Tanto Egipto como Arabia Saudí deseaban abiertamente que Hamás fuera desalojado del poder[48], mientras que la Liga Árabe –en su única reunión en Gaza– respaldó el cínico ultimátum de alto el fuego de el-Sisi[49]. Solamente Irán, Turquía y Qatar, entre las potencias de Oriente Próximo, se oponían al violento ataque israelí. Si Israel había mostrado una contención relativa durante la Operación Pilar Defensivo, había sido por las líneas rojas que habían trazado Egipto y Turquía en defensa de Hamás[50]. Pero, después del golpe de julio de 2013, Egipto se revolvió vengativamente contra Hamás, mientras que Turquía estaba ocupada y empantanada en Siria. Convulsionada por sus propios conflictos y crisis humanitarias, la opinión popular de amplios sectores del mundo árabe enmudeció durante Margen Protector. Los déspotas árabes, por lo tanto, no pagaban un precio interno apostando por Israel. Mientras tanto, la Unión Europea también le otorgó a Israel un pase libre porque temía al «islam militante», que se estaba extendiendo como un incendio en la pradera bajo la bandera del ISIS y al que se asimilaba a Hamás casi como un acto reflejo. La excepción global redentora fue el bloque latinoamericano. En un despliegue ejemplar de solidaridad generosa con la atribulada Gaza, los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador, Perú, Uruguay y Venezuela expresaron su rechazo a las acciones israelíes[51]. No obstante, en medio de la matanza, Gaza estaba claramente sola y abandonada.

En el otro platillo de la balanza, a Israel le había pillado con la guardia baja la potente y ramificada red de túneles que Hamás había construido. Adoptando y adaptando la estrategia de Hezbolá durante la guerra del Líbano de 2006, Hamás usaba los proyectiles para atraer a Israel a una invasión terrestre. Después emergían desde los túneles, que resistían los bombardeos aéreos de Israel, e infligían un número excepcional de bajas entre los combatientes[52]. En la Operación Plomo Fundido solamente habían muerto diez soldados israelíes, cuatro de ellos víctimas de «fuego amigo»; muchos soldados israelíes habían testificado no

haber visto ni siquiera a un combatiente de Hamás[53]. En esta ocasión, no obstante, unos 62 soldados israelíes fueron abatidos por los militantes[54]. Frente a esta resistencia sorprendentemente firme, las IDF se tomaron su tiempo, una vez que habían cruzado a Gaza, sin aventurarse a más de dos o tres kilómetros de la frontera[55]. Mientras lanzaba su invasión terrestre, Israel repentinamente recalibró su misión y esta pasó de ser destruir los «misiles» de Hamás a destruir los «túneles del terror» de Hamás que atravesaban la frontera. Pero, de los 32 túneles que supuestamente descubrió y detonó Israel, solamente entre 12 y 14 realmente pasaban por debajo de la frontera[56]. No se sabe por qué Israel no se limitó a sellarlos desde su lado, de la misma manera que Egipto, después del golpe de julio de 2013, había sellado unos 1.500 túneles comerciales que llegaban a Gaza desde el Sinaí. Más tarde, cuando Egipto inundó los túneles que aún quedaban (supuestamente, para evitar el contrabando de armas), el ministro de Energía israelí Yuval Steinitz lo alabó como «una buena solución»[57]. ¿Por qué era «una buena solución» para Egipto, pero no «una buena solución» para Israel? Quizá Israel no podía, por razones técnicas, duplicar el modus operandi israelí. Pero nunca se planteó la cuestión de por qué Israel estaba arrasando Gaza para eliminar los «túneles del terror», si tenía a mano soluciones menos destructivas. Una vez que las IDF atravesaron la frontera de Gaza y se encontraron con una dura resistencia, se buscó destruir la red de túneles dentro de Gaza, de tal forma que Hamás no pudiera causar muchas bajas la próxima vez que Israel «cortara el césped». Si Israel afirmaba que tenía «derecho» a destruir los túneles –una prerrogativa que le concedía buena parte de la opinión internacional de todo el mundo–, lo hacía declarando que Gaza no tenía derecho a defenderse de las masacres periódicas de Israel. Incluso aunque fuera cierto que Israel buscaba destruir únicamente los túneles que cruzaban bajo la frontera, aún sería difícil imaginarse por qué este era un objetivo previsor legítimo. El inveterado propagandista de Israel, el coronel Richard Kemp, comparó estos túneles nada menos que con Auschwitz: «El fin de ambas cosas era matar judíos»[58]. Samantha Power, la representante de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, reprobó al Consejo de Seguridad por «no decir nada de los recursos retraídos de ayudar a la población residente en Gaza para cavar túneles dentro del territorio israelí para que los terroristas pudieran atacar

a los israelíes en sus propias casas»[59]. Pero estas catacumbas que cruzaban fronteras eran «únicamente empleadas para dirigir ataques a las posiciones de las IDF en Israel en la vecindad de la Línea Verde, que son objetivos militares legítimos»[60]. Entonces, ¿las leyes de la guerra prescriben que aviones, proyectiles de artillería y tanques pueden atravesar la frontera de Gaza según los caprichos y la voluntad de Israel, pero que los túneles de Hamás que apuntan a los combatientes no deben transgredir el sagrado espacio de Israel?

Israel no solamente distorsionaba la amenaza que planteaban los «túneles del terror» de Hamás. También hinchaba el desempeño de su sistema de defensa antimisiles y la amenaza que suponían los «misiles» de Hamás. Hamás supuestamente disparó 5.000 misiles y 2.000 morteros a Israel durante la operación[61]. Para conciliar la inmensa discrepancia entre los muchos miles de proyectiles que habría arrojado Hamás, por una parte, y la mínima muerte y destrucción que habían infligido, por la otra, Israel señalaba a su maravillosa Cúpula de Hierro, su sistema de defensa antimisiles. Un destacado corresponsal militar israelí declaraba que, si no hubiera sido por la Cúpula de Hierro, «la cifra de bajas israelíes podría haber sido infinitamente más alta», mientras que un diplomático israelí señalaba que la Cúpula de Hierro «previno miles de bajas civiles israelíes potenciales»[62]. Pero esta explicación no convence. Aunque Israel alegaba que la Cúpula de Hierro había interceptado 740 misiles, el Departamento de Seguridad de la ONU daba una cifra cercana a 240[63]. No obstante, el cálculo más escéptico provenía de una de las autoridades mundiales en defensa antimisil, Theodore Postol, del MIT[64]. (Postol previamente había desmontado las declaraciones que ensalzaban el sistema de defensa antimisiles Patriot en la Guerra del Golfo de 1991)[65]. Postol llegó a la conclusión de que la Cúpula de Hierro había interceptado con éxito un 5 por 100 de los misiles que procedían de Hamás, o, basándose en los datos crudos de Israel, unos míseros 40 de ellos[66]. Incluso aceptando, como mera hipótesis, el cálculo israelí de 740 proyectiles interceptados con éxito, aún desconcierta por qué los miles de proyectiles de Hamás que la Cúpula de Hierro no interceptó causaron tan pocos daños. De hecho, incluso antes de que Israel desplegara por primera vez la Cúpula de Hierro (durante Pilar Defensivo, en 2011), las consecuencias materiales de los proyectiles de Hamás eran apenas perceptibles. Reflexionemos

sobre estas cifras. Mientras que Hamás disparó unos 13.000 misiles y proyectiles de mortero hacia Israel entre 2001 y 2012, un total de 23 civiles israelíes fueron asesinados, es decir, una muerte por cada 500 proyectiles[67]. A lo largo de la Operación Plomo Fundido, el ataque más violento de Israel sobre Gaza previo a Margen Protector, antes de que se desplegara la Cúpula de Hierro, Hamás disparó unos 900 proyectiles y, sin embargo, solamente asesinó a tres civiles[68]. Incluso durante Margen Protector, unos 2.800 proyectiles de Hamás, o el 40 por 100 del total, impactaron en la región fronteriza de Israel[69], donde la Cúpula de Hierro no se había desplegado y, aun así, únicamente un civil israelí fue asesinado por un misil[70]. (La mayoría de los israelíes de la región fronteriza «siguieron en sus comunidades» durante la operación[71], y la mayoría de los proyectiles de Hamás golpearon «zonas construidas» allí)[72]. Postol atribuía la escasez de bajas civiles durante Margen Protector principalmente (pero no de manera exclusiva) a los anteriores sistemas de alarma y refugio israelíes[73], que habían mejorado sustancialmente en los últimos años[74]. Pero eso no podía dar cuenta completa de la escasez de víctimas civiles antes de que Israel revisara su sistema de defensa civil. Lo que es aún más elocuente: no podía dar cuenta del mínimo daño sobre la propiedad israelí durante Margen Protector. La web del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí registraba diariamente el daño que causaban los misiles de Hamás en las infraestructuras civiles[75]. El cuadro 5 resume sus entradas. El balance oficial de Israel sobre Margen Protector alegaba que «varias comunidades residenciales de la frontera con la Franja de Gaza […] fueron impactadas con disparos de misiles y mortero»[76]. Sin embargo, aun concediendo que un determinado porcentaje impactara contra las zonas no construidas, ¿cómo era posible que miles y miles de misiles de Hamás hubieran producido tan pocos daños? ¿Cómo podía haber sido destruida solamente una casa israelí, y otras 11 golpeadas o dañadas por una megarráfaga de misiles?[77]. La respuesta más obvia y plausible era que la mayoría de esos llamados «misiles» eran petardos aumentados, o «cohetes caseros»[78].

Cuadro 5. Daños a la propiedad israelí resultado de los ataques con misiles de Hamás durante la Operación Margen Protector

Fecha	Descripción
7 de julio	
8	Daño a propiedad
9	edificio cerca de guardería impactado
10	
11	una casa completamente destrozada, otra
12	
13	Impacto de misil sobre central eléctrica is
14	
15	daños significativos a coches y propiedad
16	casa dañada
17	edificio dañado
18	guardería y sinagoga dañadas
19	daños masivos en zona residencial
20	
21	impacto en una casa, edificio dañado
22	casa dañada
23	
24	
25	
26	
27	dos casas atacadas
28	
29	
30	
31	
1 de agosto	
2	
3	impacto en patio de colegio
4	
5	impacto en casa
6	
7	
8	impacto en casa
9	
10	
11	

12
13
14
15
16
17
18
19 impacto en centro comercial
20
21 impacto en edificio
22 impacto en una casa y una sinagoga
23
24
25
26 impacto en una casa y un parque infantil

▪

Fuente: Ministerio israelí de Asuntos Exteriores

La tríada de estribillos mediáticos en torno a Margen Protector –«misiles de Hamás», «túneles del terror» y «Cúpula de Hierro»– constituye en la actualidad un pilar básico de la campaña de hasbara (propaganda) israelí. Israel inicialmente hinchó la amenaza que suponían los proyectiles de Hamás para justificar su asalto «demente» y «loco» a la población e infraestructura civil de Gaza. No obstante, la excusa se les volvió en contra cuando los proyectiles seguían cayendo y la industria del turismo israelí acusó el golpe[79]. Cuando un proyectil de Hamás impactó en las proximidades del Aeropuerto Ben-Gurion, causando que las líneas aéreas internacionales suspendieran los vuelos con destino a Israel, el exalcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, amablemente voló hasta allí para tranquilizar a los posibles viajeros[80]. Pero si la tranquilidad reinaba sobre la Tierra Prometida, entonces, ¿por qué estaba Israel pulverizando a Gaza? Sin perder un segundo, Israel produjo una nueva justificación, rápidamente imitada por la prensa crédula: los «túneles del terror» de Hamás, que «tienen el único fin de aniquilar a nuestros ciudadanos y asesinar a nuestros hijos» (Netanyahu)[81]. Esta coartada nuevecita también se les vino en contra, no obstante, porque los evacuados israelíes se negaban a regresar a sus comunidades de la frontera. Entonces Israel admitió que los combatientes de Hamás que se infiltraban por los túneles tenían como objetivo a las IDF, no a la población civil[82]. En una retrospectiva que señalaba el primer aniversario de la Operación Margen Protector, un importante corresponsal militar israelí afirmó sin tapujos que «estos túneles permitían a Hamás trasladar fuerzas comando bajo la frontera y dentro de Israel sin advertencia previa, para llevar a cabo ataques sobre los soldados»[83]. Israel invocaba el prodigio técnico de la Cúpula de Hierro después de la Operación Pilar Defensivo para compensar los magros réditos de la operación[84]. Se puso de moda una vez más durante Margen Protector, para tranquilizar los nervios de punta tanto de su población interna no adoctrinada como de los potenciales turistas.

(El floreciente negocio de armas israelí también obtuvo excelentes dividendos de la fanfarria sobre la Cúpula de Hierro.) Pero, en su balance oficial sobre Margen Protector, Israel se contradijo para justificar la muerte y destrucción que había desencadenado sobre Gaza. Minimizó la eficacia de Cúpula de Hierro y, en su lugar, magnificó la vulnerabilidad del frente interno israelí[85]. Amontonando una mentira sobre otra, Israel seguía enredándose en la intrincada red de sus engaños. Si sus contradicciones y falsedades no eran percibidas, es un elogio a la capacidad de la hasbara israelí, por una parte, y al sesgo de los medios de comunicación occidentales, por otra.

Cuando Israel atacó a civiles que se habían refugiado en una escuela de la ONU, dejando montones de muertos y cientos de heridos, cruzó una línea roja[86]. (Una Junta de Investigación de la ONU descubrió más tarde que Israel tenía los datos actualizados de las coordenadas de GPS de todos los refugios de la ONU a los que apuntó y que empleaba armas indiscriminadas, como artillería, en las áreas densamente pobladas donde estaban situados estos refugios, así como armas de precisión, como los misiles guiados. La Junta no dio crédito a las diversas justificaciones de Israel para estos ataques)[87]. Cuando la comunidad internacional reaccionó escandalizada[88], las fichas de dominó empezaron a caer del lado de Israel. Notando la ira desde el interior de la burocracia de la ONU, Ban Ki-moon denunció el 3 de agosto una de estas atrocidades como «un escándalo moral y una acción criminal»[89]. Aislada en la escena mundial y reticente a asumir la responsabilidad de este último reguero de atrocidades israelíes, la Casa Blanca se unió el 3 de agosto al coro de condenas, mientras que los palmeros de Israel en el Congreso estadounidense se quedaban callados. Una vez que Estados Unidos declaró que estaba «horrorizado» por el «vergonzoso» bombardeo letal con obuses en las proximidades de un refugio de la ONU[90], Israel cayó en la cuenta de que había llegado el momento de poner fin a la operación. El 2 de agosto Netanyahu había cortado de raíz los rumores de una próxima retirada de tropas israelí: «Nos tomaremos todo el tiempo necesario y aplicaremos la fuerza que se necesite»[91]. Pero, abandonado por su principal valedor en la Casa Blanca, Netanyahu anunció ese mismo 3 de agosto que las tropas israelíes se retiraban[92]. Para disimular que habían fracasado a la hora de destruir las catacumbas

de Hamás, Israel introdujo el discreto calificativo de que habían detonado casi todos los túneles «conocidos» de Hamás[93]. La operación se alargó otras tres semanas, sin embargo, mientras Israel trataba de obtener los mejores términos posibles en la fase diplomática final y mientras aún albergaba esperanzas de infligir una derrota militar decisiva sobre Hamás por erosión. Recurrió a los bombardeos aéreos indiscriminados, a matar y herir a muchos civiles y a asesinar a los principales líderes militares de Hamás[94]. Tras la decapitación de un periodista americano el 19 de agosto[95], la atención mediática se desplazó al ISIS y la masacre de Gaza entró en esa fase más-de-lo-mismo del ciclo de las noticias. Israel pudo entonces retomar los ataques terroristas de precisión con un abandono sin precedentes, arrasando altos edificios de apartamentos como si fuera un videojuego y sin apenas pretensión ninguna de que constituyeran objetivos militares legítimos[96]. Pero los misiles y los morteros de Hamás seguían llegando y aumentaban la cuenta de las bajas israelíes. El 26 de agosto un acuerdo de alto el fuego se materializó. Sus términos esenciales estipulaban que Israel (y Egipto) suavizarían el bloqueo sobre Gaza, mientras que la Autoridad Palestina gestionaría los pasos fronterizos, coordinaría el esfuerzo internacional de reconstrucción e impediría la entrada de armas en Gaza. El acuerdo remitía a futuras conversaciones el resto de los puntos en conflicto, como la liberación de prisioneros y la construcción de un aeropuerto y de un puerto de mar en Gaza[97].

En una conferencia de prensa inmediatamente después de que se alcanzara el alto el fuego, Netanyahu presumió del «gran logro político y militar» de Israel[98]. Pero Israel no había alcanzado los objetivos que perseguía. Inicialmente Netanyahu buscaba fracturar el gobierno de unidad palestino provocando una reacción violenta de Hamás y poder así volver a demonizarla en tanto organización terrorista. Pero el gobierno de unidad se mantuvo, incluso aunque es posible que el presidente Abbas deseara que Israel le asestara a Hamás el golpe definitivo. Si Israel tenía la esperanza de demostrar que Hamás era una organización terrorista no arrepentida, acabó convenciendo a mucha más gente de que Israel era un Estado terrorista no arrepentido. Si Israel esperaba convencer a Estados Unidos y a la Unión Europea para no negociar con un gobierno de unidad que incluía a Hamás, acabó él mismo negociando con el

gobierno de unidad e indirectamente con Hamás. «Efectivamente», observaba un influyente columnista israelí, «Israel ha reconocido a Hamás»[99]. Si el gobierno de unidad en último término no fructificó, fue por el conflicto entre facciones, no por la Operación Margen Protector[100]. Una vez que aumentó la escalada de hostilidades, el objetivo confeso de Netanyahu fue destruir los «misiles» y los «túneles del terror» de Hamás. Pero ambos objetivos resultaron estar fuera de su alcance. Hamás siguió disparando proyectiles (matando a dos israelíes en la última hora antes del alto el fuego), mientras que un número indeterminado de túneles siguieron intactos. El objetivo más amplio de Israel de infligir una derrota total política y militar a Hamás también quedó inconcluso. Aunque Israel hubiera hecho alguna concesión contingente sobre el desarme de Hamás, el acuerdo de alto el fuego no obligaba a la resistencia islámica a deponer las armas y se pudo obtener únicamente una vaga promesa de que la AP contendría el flujo de armas hacia Gaza. Los términos del alto el fuego «no incluían ninguna declaración, ni siquiera una pista, en lo referente a las exigencias de seguridad de Israel», rezongaba un corresponsal diplomático israelí. «No hay nada sobre la desmilitarización de la franja, el rearme o el asunto de los túneles»[101]. Aunque era la potencia regional, Israel «no consiguió imponer su voluntad sobre un enemigo aislado que operaba en un territorio asediado sin armamento sofisticado»[102]. El principal beneficiario de esta última masacre en Gaza fue el Líbano. Después de su fiasco militar, Israel se lo pensaría dos veces antes de atacar a Hezbolá, que poseía un formidable arsenal de misiles reales, sofisticados[103], lo cual reduciría el cociente de eficacia potencial de la Cúpula de Hierro desde porcentajes de un solo dígito hasta casi cero; poseía también una red de túneles cavada en el interior de las montañas. En una repetición de la última escena del último acto de la Operación Pilar Defensivo, el primer ministro israelí, el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor se presentaron cabizbajos en la conferencia de prensa para proclamar la «victoria» de Israel en la Operación Margen Protector[104]. Aun así, Netanyahu podía regodearse en un par de triunfos complementarios. Había saciado la sed de sangre de la sociedad israelí y él mismo se había animado. Podía ahora deleitarse en la idea de que la población de Gaza debía confrontarse, una vez que el polvo se asentara, a la muerte y destrucción masiva que les había regalado Israel. «La última

operación militar», concluía un informe general de la ONU, «ha eliminado efectivamente lo que quedaba de las clases medias, condenando a casi toda la población a la indigencia y a la dependencia de la ayuda humanitaria internacional»[105]. Israel, concomitantemente, había vapuleado, si es que no lo había quebrado por completo, el espíritu de la población de Gaza. La violencia siempre en aumento, el caos que dejaba, el futuro sin futuro finalmente se había cobrado un precio. Nueve meses después de la Operación Margen Protector, «ni una sola de las casas totalmente destruidas» se había reconstruido[106]. La mitad de los gazatíes que respondieron a una encuesta después de Margen Protector expresaron su deseo de marcharse. En casos extremos, pero indicativos, se aventuraron en embarcaciones precarias para escapar (cientos de ellos se ahogaron), cruzaron ilegalmente a Israel en busca de trabajo o del consuelo de una celda en la cárcel y, en números nunca vistos, se suicidaron[107]. Si el objetivo tácito de Israel en sus principales operaciones recientes había sido «castigar, humillar y aterrorizar» a la población civil gazatí (Informe Goldstone), entonces esta vez podían enorgullecerse de un trabajo bien hecho. También desmentían el dicho de que la violencia no funciona. Sí funciona, y funcionó.

Hamás también hacía el signo de la victoria[108]. De hecho, su popularidad entre los palestinos aumentó después de luchar con Israel y quedar en tablas[109]. Pero el repunte resultó efímero. Cuando las hostilidades armadas estallaron, el objetivo principal de Hamás era poner fin al bloqueo de Gaza. Mientras que el acuerdo original egipcio de alto el fuego estipulaba que el asedio se levantaría únicamente después de que «la situación en términos de seguridad se estabilice» en Gaza, el acuerdo final de alto el fuego omitía esta precondición. No obstante, pedía únicamente que el bloqueo se suavizara (no que se levantara) y no incluía ningún mecanismo de imposición externo, algo que Hamás había pedido[110]. En efecto, reinstauraba los términos del alto el fuego que puso fin a la Operación Pilar Defensivo, que Israel desde entonces se había dedicado a incumplir[111]. Hamás pactó por debajo de sus mínimos debido al incesante bombardeo israelí. «Nuestras exigencias eran justas», dijo el líder de Hamás, Khalid Mishal, en una conferencia de prensa, «pero al final teníamos por una parte las exigencias palestinas y por otra el dolor de la

población civil palestina». «Acordamos el alto el fuego», seguía diciendo Mishal, «sabiendo que el asedio sería levantado»[112]. Pero ya entonces estaba claro[113] que esto era una fantasía, hasta (y a no ser) que Hamás se desarmara. Dos años después de la Operación Margen Protector, el ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, aún sostenía que solamente «si Hamás deja de cavar túneles, de rearmarse y de disparar misiles, levantaríamos el bloqueo»[114]. Como el movimiento islámico no se rendía, el asedio no mostraba señales de reducirse: «La prohibición virtual de exportar desde Gaza no se ha levantado», mientras que, con el volumen de tráfico de camiones que Israel permite, se tardarían «174 años para que Gaza regresara al punto en el que estaba en mayo de 2014»[115]. Si la población gazatí se echó a las calles después de que se declarara el alto el fuego, fue para proclamar, en primer lugar a ellos mismos y después al mundo entero, que, por muy alto que fuera el precio por pagar, por infinito que fuera el sacrificio, el pueblo de Palestina vivía aún. ¡Fuimos, somos y seremos!

Durante la Operación Margen Protector cristalizó un consenso oficial según el cual Israel tenía derecho a defenderse, incluso aunque hubiera iniciado las hostilidades, y Hamás debía desarmarse, incluso aunque hubiera actuado en defensa propia. En julio de 2014, la Unión Europea pidió a Hamás que «pusiera fin inmediatamente a estas acciones y que renunciara a la violencia. Todos los grupos terroristas de Gaza deben desarmarse». Al mismo tiempo, reconocía «el legítimo derecho de Israel para defenderse contra cualquier ataque», con la advertencia de pasada de que «las operaciones militares israelíes deben ser proporcionales y acordes con el derecho humanitario internacional»[116]. Esta adjudicación de derechos y deberes no solamente contradice los hechos circunstanciales de la operación: también contradice el marco legal de la ocupación. Mientras que el derecho internacional prohíbe que una potencia ocupante emplee la fuerza para suprimir una batalla por la autodeterminación, no impide a una población que lucha por su autodeterminación emplear la fuerza. Israel, por lo tanto, no tiene un permiso legal para usar la fuerza contra la lucha por la autodeterminación palestina[117]. Podría argumentarse que, en la

medida en que esta lucha por la autodeterminación se ha desarrollado dentro del marco de una ocupación beligerante, Israel tendría el derecho legal, en tanto potencia ocupante, a imponer la ocupación el tiempo que esta dure[118]. Pero el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) dictaminó en 1971 que, puesto que Sudáfrica se había negado a entablar una negociación de buena fe para acabar con su ocupación de Namibia, la ocupación a partir de ese momento se había vuelto ilegal. A la luz del precedente de Namibia, el fracaso de Israel a la hora de llevar a cabo negociaciones con buena fe basadas en el derecho internacional también ha deslegitimado su ocupación[119]. Si Israel puede reclamar cualquier «derecho», sería –como exhortaba Estados Unidos en la época del debate sobre Namibia– «a retirar su gobierno […] inmediatamente y después poner fin a la ocupación». Cuando proclama su derecho a defenderse contra los proyectiles de Hamás, Israel, en efecto, está promulgando un derecho a emplear la fuerza para perpetuar una ocupación. Si Israel cesara su represión violenta, la ocupación terminaría y, en un plano ideal, los ataques con proyectiles también cesarían, mientras que Palestina se dedicaría a consolidar su propio Estado independiente. Israel podría invocar justamente su derecho a la defensa propia si a pesar de esto continuaran los ataques. Por una parte, Israel no puede pretender un derecho a una defensa propia si el ejercicio de este derecho se remonta a una ocupación injusta o ilegal o a la negación de un derecho de autodeterminación (ex injuria non oritur ius)[120]. Por otro lado, Israel no necesitaría invocar el derecho si dejara de infligir el perjuicio. En 2016 la Unión Europea publicó una declaración que pedía «a todas las partes […] que cambiaran fundamentalmente […] la situación en la Franja de Gaza, incluyendo el fin del cierre y la apertura total de los puntos fronterizos, si se adecuaba a las legítimas preocupaciones de Israel por su seguridad»[121]. Pero Israel no puede invocar «preocupaciones de seguridad legítimas», en lo que respecta a Gaza, cuando la fuerza que despliega allí tiene como objetivo atrincherar un régimen ilegítimo. La postura legalmente correcta fue enunciada por la misión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la Operación Margen Protector, que pedía a Israel que «levantara, inmediatamente e incondicionalmente, el bloqueo sobre Gaza»[122]. El estribillo de que Israel tiene derecho a defenderse es una maniobra de distracción. La cuestión real es: ¿tiene Israel

derecho a usar la fuerza para perpetuar una ocupación ilegal? La respuesta es negativa.

Pero (se podría alegar) incluso concediendo que, a diferencia de Israel, los palestinos pueden recurrir legalmente a la fuerza, ¿acaso el uso indiscriminado por parte de Hamás de los proyectiles, y el hecho de que apunten a civiles israelíes, no constituye en cualquier caso un crimen de guerra? La situación es más equívoca de lo que se suele admitir. Primero, no está claro qué es lo que constituye un arma indiscriminada y el criterio implícito no es justo. Hay un tipo de arma que pasa los controles legales porque la posibilidad de que alcance su objetivo es relativamente alta. Este umbral legal se ajusta y relaciona con la tecnología punta. Las parejas avanzada / primitiva y discriminatoria / indiscriminatoria se superponen; un arma de alta tecnología puede discriminar entre sus objetivos, mientras que un arma no sofisticada no puede. En este caso, solamente un pueblo capaz de adquirir armamento de alta tecnología podría defenderse a sí mismo contra un asalto aéreo de alta tecnología. Si carece de recursos materiales, si las circunstancias le obligan a usar armas rudimentarias, un pueblo que emprende una guerra en defensa propia o una lucha por su autodeterminación no puede vencer a menos que quebrante las leyes de la guerra; si obedeciera las leyes de la guerra, sería sin duda derrotado. Si esta es la ley, es una ley muy curiosa, porque niega la razón de ser del derecho, la sustitución de la fuerza por el derecho, y entroniza la fuerza, o la riqueza, sobre la justicia. En segundo lugar, se ha afirmado que, incluso si la población civil de una de las partes del conflicto es objeto de incesantes ataques, no tiene el derecho legal a ejercer «represalias beligerantes», es decir, a apuntar deliberadamente a los civiles del otro bando hasta que este último bando desista de sus ataque iniciales ilegales. «Con independencia de quién ha empezado este último asalto, los ataques a civiles violan las normas humanitarias básicas», declaraba Human Right Watch justo nada más empezar la Operación Margen Protector. «Todos los ataques, incluyendo los ataques en represalia, que apuntan o hieren indiscriminadamente a civiles, están prohibidos bajo las leyes de la guerra, y punto»[123]. Pero ¿es eso cierto? De hecho, el derecho internacional no prohíbe (aún no, en cualquier caso) los ataques en represalia[124]. Estados Unidos y Reino Unido han defendido incluso el derecho a desplegar armas

nucleares en represalias beligerantes[125]. La población de Gaza, sin duda, tendría entonces el derecho a usar proyectiles de fabricación casera para poner fin a un bloqueo ilegal e implacable de siete años por parte de Israel, que afecta a la población civil, y para poner fin al bombardeo criminal por parte de Israel de la población civil. De hecho, en su pionero dictamen no vinculante de 1996 sobre la legalidad de las armas nucleares, el TIJ declaró que el derecho internacional no había decidido sobre el derecho de un Estado a usar armas nucleares cuando su «supervivencia» estaba en peligro. Pero si esa abstracción escurridiza llamada Estado puede usar legalmente armas nucleares cuando su supervivencia está en juego, entonces sin duda un pueblo tiene derecho a usar proyectiles de fabricación casera cuando su supervivencia está en juego. La prudencia política de la estrategia de Hamás podría cuestionarse legítimamente. Pero la ley no está claramente en su contra, mientras que los criterios de la moralidad se inclinan a su favor. Israel ha impuesto un asedio brutal sobre Gaza que ya ha reducido a la mitad su ya «desdesarrollado» PIB. Como resultado del bloqueo y de los ataques militares recurrentes, a la población de Gaza se le ha «negado un estándar de vida humana», mientras que el 95 por 100 de su agua no es apta para el consumo humano. «Seres humanos inocentes, la mayoría de ellos jóvenes», se lamentaba Sara Roy, «están siendo lentamente envenenados por el agua que beben». No solamente están encerrados, sino literalmente condenados a una muerte lenta. «Cuando un lugar se vuelve invivible, la gente se muda», observaba la Agencia de las Naciones Unidas para la Ayuda y la Reconstrucción. Así ha sido el caso de desastres ambientales como las sequías, o los conflictos, como el de Siria.

Pero este último recurso se le deniega a la población de Gaza. No pueden salir de su territorio de 365 kilómetros cuadrados. No pueden escapar ni de la devastadora pobreza ni del miedo a otra guerra. Su juventud, muy educada […] no tiene la opción de viajar, de ampliar sus estudios fuera de Gaza, o de encontrar trabajo en cualquier lugar más allá de la valla perimetral y de los dos puntos fronterizos estrechamente controlados en el norte y el sur de la Franja de Gaza.

Con el paso de Rafah entre Egipto y Gaza casi totalmente cerrado excepto unos pocos días al año, y con Israel negando casi siempre la salida incluso a casos graves humanitarios o al personal de las organizaciones internacionales, la amplia mayoría de la población no puede obtener uno de los tan codiciados «permisos». Tampoco pueden salir por mar sin arriesgarse a ser detenidos o disparados por la armada israelí o egipcia, y no pueden trepar por el muro perimetral entre Israel y Gaza por las mismas razones[126].

La población de Palestina respaldó a Hamás mientras este lanzaba ataques en represalia contra Israel. En el clímax de su martirio, los gazatíes eligieron morir antes que vivir agonizando bajo un bloqueo inhumano[127]. La resistencia fue prácticamente nominal, puesto que los proyectiles rudimentarios causaban pocos daños. Así que la cuestión definitiva es: ¿tienen los palestinos derecho a resistir simbólicamente una muerte lenta, agudizada por masacres periódicas, o lo que les corresponde es tumbarse y morir?

[1] United Nations Country Team in the State of Palestine, Gaza: Two years after, 2016.

[2] United Nations Conference on Trade and Development, «Report on UNCTAD Assistance to the Palestinian People: Developments in the economy of the Occupied Palestinian Territory», julio de 2015, §§ 27, 42 (2,5 millones de toneladas).

[3] J. A. Heyer, «Ex-Israeli Security Chief Diskin: "All the conditions are there for an explosion"», Spiegel Online International, 24 de julio de 2014. Sobre los preparativos para Plomo Fundido, véase cap. II; sobre Líbano en 2006, véase B. S. Lambeth, Air Operations in Israel's War against Hezbollah: Learning from Lebanon and Getting it Right in Gaza, Arlington, VA, 2011, p. 97.

[4] Véanse caps. II y V.

[5] B'Tselem, Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories, Whitewash Protocol: The So-called

Investigation of Operation Protective Edge, 2016, pp. 4-5.

[6] P. Beaumont, «Palestinian Unity Government of Fatah and Hamas Sworn In», The Guardian, 2 de junio de 2014; «Why Hamas Fires Those Rockets», The Economist, 19 de julio de 2014.

[7] N. Barnea, «Inside the Talks' Failure: US officials open up», ynetnews.com, 2 de mayo de 2014.

[8] Véase cap. I.

[9] J. Khoury, «Abbas: Palestinian unity government will recognize Israel, condemn terrorism», Haaretz, 26 de abril de 2014; J. Heller, «Netanyahu Urges World Not to Recognize Palestinian Unity Government», Reuters, 1 de junio de 2014; Arab Center for Research and Policy Studies, «The US Stance on the Palestinian Unity Government», Doha, 19 de junio de 2014.

[10] La inminencia de un gobierno de unidad palestino en 2006 precipitó una respuesta israelí idéntica. J.-P. Filiu, Gaza, cit., p. 295.

[11] I. Landau, «The Unfolding Lie of Operation Protective Edge», +972, 15 de julio de 2014; A. Issacharoff, «PM: Palestinian unity government would kill off the peace process», Haaretz, 18 de marzo de 2011.

[12] A. Harel e Y. Kubovich, «Revealed: Behind the scenes on the hunt to find kidnapped teens», Haaretz, 1 de julio de 2014; K. Zavadski, «It Turns Out Hamas May Not Have Kidnapped and Killed the 3 Israeli Teens After All», New York, 25 de julio de 2014; «Hamas: We wouldn't target civilians if we had better weapons», Haaretz, 23 de agosto de 2014; A. Harel, «Notes from an Interrogation: How the Shin Beth gets the lowdown on terror», Haaretz, 2 de septiembre de 2014.

[13] J. J. Goldberg, «How Politics and Lies Triggered an Unintended War in Gaza», Forward, 10 de julio de 2014.

[14] I. Landau, «Unfolding Lie», cit.

[15] Human Rights Watch, «Serious Violations in West Bank Operations», 3 de julio de 2014.

[16] «Netanyahu to US: “Don’t ever second-guess me again”», ynetnews.com, 2 de agosto de 2014.

[17] C. Case Bryant, «Ending Détente, Hamas Takes Responsibility for Today’s Spike in Rocket Fire», Christian Science Monitor, 7 de julio de 2014; D. C. Hendrickson, «The Thrasybulus Syndrome», National Interest, 29 de julio de 2014; N. Thrall, «Hamas’s Chances», The London Review of Books, 21 de agosto de 2014; A. Sharon, «Failure in Gaza», The New York Review of Books, 25 de septiembre de 2014.

[18] Aquí, como en otros lugares, Hamás se usa como abreviatura para todos los grupos armados palestinos en Gaza cuando nos referimos a las acciones militares y la capacidad militar palestina.

[19] Véase cap. X.

[20] En julio de 2013, el-Sisi sustituyó al gobierno egipcio democráticamente elegido liderado por los Hermanos Musulmanes, en un golpe de Estado sangriento.

[21] «The Full Text of the Egyptian Ceasefire Proposal», Haaretz, 15 de julio de 2014; B. Ravid, «Secret Call between Netanyahu, al-Sissi Led to Abortive Cease-fire», Haaretz, 16 de julio de 2014.

[22] «Israel and Hamas Ceasefire Begins», BBC, 19 de junio de 2008; «Ceasefire Agreement between Israel and Gaza’s Palestinians», Reuters, 21 de noviembre de 2012.

[23] S. Tavernise, E. Schmitt y R. Gladstone, «Jetliner Explodes over Ukraine; Struck by Missile, Officials Say», The New York Times, 17 de julio de 2014.

[24] M. Shalev, «Netanyahu Recommends Large-Scale Expulsions», The Jerusalem Post, 19 de noviembre de 1989. La primera intifada empezó en 1987 y en 1989 aún tenía mucha fuerza.

[25] En un artículo retrospectivo un año después de Margen Protector, Haaretz observaba que uno de los «factores externos» que operaron a favor de Israel durante Margen Protector fue «la caída del Vuelo 17 de las Líneas Aéreas Malasias el 17 de julio», C.

Shalev, «Israel's Deceptive Diplomatic Success», Haaretz, n. d. Para un estudio riguroso que demuestra que «las autoridades israelíes pueden escoger el momento de sus ataques estratégicamente para minimizar la publicidad negativa internacional», véase R. Durante y E. Zuravskaya, «Attack When the World Is Not Watching? International media and the Israeli-Palestinian conflict», Becker Friedman Institute for Research in Economics, 2015.

[26] Véase cap. X.

[27] United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA, Humanitarian Bulletin-Monthly Report, junio-agosto de 2014; «Taking Stock», BaYabasha, Ground Forces Journal, octubre de 2014, p. 47, en hebreo.

[28] Véase cap. XII para las fuentes.

[29] Action on Armed Violence, AOAV, Explosive States: Monitoring Explosive Violence in 2014, 2015. El ranking se basaba en las víctimas gazatíes durante 2014, no solamente durante Margen Protector.

[30] S. Roy, The Gaza Strip: The Political Economy of De-development, 3.a ed. ampliada, Washington, DC, 2016, p. 401; el cálculo es una cita del coordinador especial para el proceso de paz de Oriente Próximo de las Naciones Unidas.

[31] Véase cap. V.

[32] S. Raghavan, «Month-Long War in Gaza Has Left a Humanitarian and Environmental Crisis», Washington Post, 9 de agosto de 2014; «Arriving for Talks in Gaza, New UN Envoy Urges Palestinian Unity, End to Israeli Blockade», UN News Centre, 30 de abril de 2015.

[33] Z. Bar'el, «Israeli Security Assessments Are Reality Built on a Lie», Haaretz, 19 de abril de 2016.

[34] S. Roy, Gaza Strip, cit., p. 395.

[35] S. Raghavan, «Month-Long War», cit.; P. Beaumont y H. Balousha, «Ban Ki-moon: Gaza is a source of shame to the

international community», The Guardian, 14 de octubre de 2014.

[36] M. Rapoport, «The Coup against Israel's Army», The Middle East Eye, 21 de mayo de 2016.

[37] State of Israel, The 2014 Gaza Conflict, 7 July-26 August 2014: Factual and Legal aspects, 2015, §§ 161-165.

[38] Amnesty International, Israel / Gaza Conflict: Questions and Answers, 25 de julio de 2014; «Jeremy Bowen's Gaza Notebook: "I saw no evidence of Hamas using Palestinians as human shields"», New Statesman, 25 de julio de 2014; K. Sengupta, «The Myth of Hamas's Human Shields», Independent, 21 de julio de 2014. Para el supuesto uso de «escudos humanos» por parte de Hamás en la Operación Plomo Fundido, véase cap. IV; para Margen Protector, véase también cap. XII y cap. XIII.

[39] State of Israel, 2014 Gaza Conflict, § 15.

[40] High Level Military Group, An Assessment of the 2014 Gaza Conflict, 2015, §§ 7, 59, 119, 216, 207; véase también §§ 12, 24, 30, 54, 63, 103, 113, 169, 180, 205. El grupo se describe como «profesionales de alto nivel procedentes de naciones democráticas cuyo conocimiento experto cubre todo el espectro de la conducta bélica, sus marcos legales, estratégicos, tácticos y operativos», §§ 1, 201. Kemp aducía que si las conclusiones del High Level Military Group eran «diametralmente opuestas a las del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a los grupos de defensa de los derechos humanos», era porque esos grupos «analizaban la situación basándose en la legislación sobre derechos humanos, no sobre las leyes que rigen un conflicto armado». Lo más caritativo que se puede decir es que Kemp no se leyó una palabra de cualquiera de estos informes críticos, que por supuesto basaban mayoritariamente sus análisis sobre las leyes que rigen los conflictos armados. R. Kemp, «We Put Our Reputations on the Line: This is why», Jewish Chronicle, 16 de diciembre de 2015. Para Kemp, véase cap. IV y cap. V.

[41] H. Matar, «Why Do So Many Israelis Hate Breaking the Silence?», +972, 14 de diciembre de 2015.

[42] Quien tenga curiosidad puede consultar los testimonios número 2, 3, 16, 17, 22, 24, 28, 40, 51.

[43] High Level Military Group, Assessment, cit., § 115.

[44] Amnesty International, «UN Must Impose Arms Embargo and Mandate an International Investigation as Civilian Death Toll Rises», 11 de julio de 2014; Human Rights Watch, «Gaza: Airstrike deaths raise concerns on ground offensive», 22 de julio de 2014. Sin duda, Human Rights Watch era muy cauto en su crítica a Israel al inicio de Margen Protector; véase «Indiscriminate Palestinian Rocket Attacks», 9 de julio de 2014. Para el equívoco historial de HRW en Israel, véase N. G. Finkelstein, Knowing Too Much: Why the American Jewish Romance with Israel is Coming to an End, Nueva York, 2012, pp. 123-154.

[45] M. Newman, «Israeli Official Confirms US Nixed Arms Shipment», The Times of Israel, 14 de agosto de 2014.

[46] G. Porter, «US Avoided Threat to Act on Israel's Civilian Targeting», Inter Press Service, 12 de agosto de 2014.

[47] R. Cox, «Senate Passes Resolution in Support of Israel», The Hill, 17 de julio de 2014; C. Bruck, «Friends of Israel», The New Yorker, 1 de septiembre de 2014.

[48] D. Hearst, «Saudi Crocodile Tears over Gaza», The Huffington Post, 28 de julio de 2014.

[49] «Arab League Urges "All Parties" to Back Egypt's Gaza Truce Plan», Arab News, 15 de julio de 2014.

[50] Véase cap. X.

[51] R. Kozak, «Israel Faces Latin American Backlash», Wall Street Journal, 30 de julio de 2014.

[52] High Level Military Group, Assessment, § 110; N. Barnea, «Tumbling into Gaza, and Climbing Out Again», ynetnews.com, 29 de julio de 2014; N. al-Mughrabi, «Hamas Fighters Show Defiance in Gaza Tunnel Tour», Reuters, 19 de agosto de 2014; G. Cohen, «Tunnel Vision on Gazan Border», Haaretz, 17 de julio de 2014; M.

Perry, «Why Israel's Bombardment of Gaza's Neighborhood Left US Officers "Stunned"», Al Jazeera America, 27 de agosto de 2014; A. Harel, «Israel and Hamas Are in an Underground Race in Gaza», Haaretz, 31 de enero de 2016; S. Eldar, «Is Hamas on the Offensive or Defensive?», Al-Monitor, 18 de abril de 2016.

[53] Véase cap. III y cap. IV.

[54] Otros tres soldados israelíes fueron abatidos por fuego amigo y un cuarto murió en un accidente durante un operativo.

[55] A. Harel, «Using Gaza Lessons to Prepare for Next Hezbollah War», Haaretz, 7 de agosto de 2014.

[56] A. Harel, «Gaza War Taught Israel Time to Rethink Strategies», Haaretz, 5 de agosto de 2014.

[57] «Egypt Flooded Gaza's Tunnels at Israel's Request», Agence France-Presse, 8 de febrero de 2016.

[58] «Kemp: Hamas tunnels like Auschwitz», Australian Jewish News, 16 de marzo de 2015.

[59] «US Ambassador to the UN Samantha Power's Full Speech at the Security Council», Haaretz, 24 de diciembre de 2016. Power, como siempre cargada de razón moral, también condenó al Consejo de Seguridad por no «reunir la voluntad para adoptar la más sencilla de las resoluciones pidiendo una pausa de siete días en el salvaje bombardeo de civiles inocentes, hospitales y escuelas en Alepo», incluso aunque ella y el gobierno de Obama habían bloqueado toda actuación de la ONU contra el salvaje bombardeo por parte de Israel de civiles inocentes, hospitales y escuelas en Gaza.

[60] UN Human Rights Council, Report of the Detailed Findings of the Independent Commission of Inquiry Established Pursuant to Human Rights Council Resolution S-21/1, 2015, § 108, cursivas añadidas.

[61] UN Department of Safety and Security, UNDSS, citado en Addendum to Report of the United Nations High Commissioner for

Human Rights, A/HRC/28/80/Add.1, 26 de diciembre de 2014, p. 8.

[62] H. Goodman, «Israel's Narrative-An Overview», y A. Baker, «The Limits of the Diplomatic Arena», en H. Goodman y D. Gold (eds.), The Gaza War: The War Israel did not Want and the Disaster it Averted, 2015, pp. 12, 70.

[63] UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Humanitarian Bulletin, junio-agosto de 2014, p. 19.

[64] T. Postol, «The Evidence That Shows Iron Dome Is Not Working», Bulletin of the Atomic Scientists, 19 de julio de 2014; «Iron Dome or Iron Sieve?», Democracy Now!, 31 de julio de 2014, disponible en [democracynow.org/2014/7/31/iron_dome_or_iron_sieve_evidence] y [democracynow.org/blog/2014/7/31/part_two_theodore_postol_asks_is].

[65] T. A. Postol, «Lessons of the Gulf War Patriot Experience», International Security, invierno 1991/1992.

[66] Israel defendía que Cúpula de Hierro había interceptado 740 (o el 90 por 100) de los misiles de Hamás en las zonas pobladas en las que se había desplegado, lo que situaría la cifra total de misiles desplegados en esas áreas en 820. Y. Zitun, «Iron Dome: IDF intercepted 90 percent of rockets», ynetnews.com, 15 de agosto de 2014.

[67] State of Israel, 2014 Gaza Conflict, §§ 44, 51, p. 58, n. 174; B'Tselem, Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories, Attacks on Israeli Civilians by Palestinians, disponible en [btselem.org/topic/israeli_civilians]. El primer ataque con misiles de Hamás que causó bajas civiles no ocurrió hasta 2004, «después de tantos misiles que únicamente habían causado daños materiales o heridas leves». J. P. Filiu, Gaza, cit., p. 274.

[68] Véase cap. X.

[69] State of Israel, 2014 Gaza Conflict, cit., § 114, p. 122 n. 361. Afirmaba que «más del 60 por 100» de los proyectiles de Hamás disparados durante la operación Margen Protector cayó en las zonas

fronterizas, pero situaba el número total de proyectiles disparados por Hamás en 4.000. Ibid., §§ 103, 112, mientras que la cifra más fiable de la UNDSS era de 7.000.

[70] Las otras cinco muertes civiles en Israel fueron resultado de ataques de mortero. State of Israel, 2014 Gaza Conflict, cit., pp. 112-113, nn. 328-332.

[71] Ibid., § 210.

[72] Report of the Detailed Findings of the Independent Commission of Inquiry Established Pursuant to Human Rights Council Resolution S-21/1, 22 de junio de 2015, § 90.

[73] Las pruebas circunstanciales respaldan la afirmación de Postol. Aunque los ataques con misiles de Hamás solamente mataron a un civil en dos de las regiones fronterizas no protegidas por Cúpula de Hierro, los morteros mataron a otros cuatro. El resultado diferencial se debía, quizá, al hecho de que el sistema de alarma de Israel proporcionaba un lapso de 15 segundos para quien buscara refugio en caso de un misil, pero solamente de 3 o 5 segundos en el caso de un ataque con mortero. Postol también menciona el tamaño modesto de las cabezas explosivas de los misiles de Hamás como un factor que tener en cuenta.

[74] State of Israel, 2014 Gaza Conflict, § 183, p. 111, n. 327; I. Hod, «The Israeli App Red Alert Saves Lives», The Daily Beast, 14 de julio de 2014.

[75] Dispononible en [mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Terrorism/Pages/Israel-under-fire-july-2014-A-Diary.aspx].

[76] State of Israel, 2014 Gaza Conflict, p. 65, pie de foto.

[77] Esta cifra se mofaba del patrón establecido: solo una casa israelí fue «casi completamente destruida» durante Plomo Fundido, véase cap. III; para ver el mínimo daño sobre la propiedad previo a Plomo Fundido, véase Human Rights Watch, Indiscriminate Fire: Palestinian Rocket Attacks on Israel and Israeli Artillery Shelling in the Gaza Strip, 2007, pp. 24-28.

[78] M. Perry, «Gaza's Bottle Rockets», Foreign Affairs, 3 de agosto de 2014.

[79] «Israel Visitor Numbers Nosedive during Gaza Offensive», Agence France-Presse, 11 de agosto de 2014.

[80] «In CNN Interview, Combative Bloomberg Says US Flight Ban a Mistake», cnn.com, 22 de julio de 2014.

[81] T. el-Ghobashy y J. Mitnick, «Israel Says It Is Escalating Gaza Campaign», The Wall Street Journal, 29 de julio de 2014.

[82] A. J. Klein y M. Ginsburg, «Could Israeli Soldiers, Not Civilians, Be the Target of the Attack Tunnels?», The Times of Israel, 29 de julio de 2014; E. Yelin, «Were Gaza Tunnels Built to Harm Israeli Civilians?», +972, 11 de agosto de 2014; «Can Complete the Destruction of Tunnels within 24 Hours», Galei Tzahal, 14 de agosto de 2014, en hebreo.

[83] A. Harel, «The Last Gaza War-and the Next», Haaretz, 1 de julio de 2015, cursivas añadidas. Véase también R. Ben Yishai, «Ten Years of Lessons Learned», ynetnews.com, 19 de junio de 2016.

[84] Véase cap. X.

[85] State of Israel, 2014 Gaza Conflict, cit., §§ 189-190, véase también §§ 4, 113, 190. El Informe, que se publicó en 2015 para evitar las esperadas conclusiones críticas de una investigación del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, véase cap. XIII, dedicaba solamente 2 de sus 460 parágrafos a Cúpula de Hierro y destacaba no su desempeño brillante, sino, en lugar de ello, que era «falible» y que no podía evitar «extensos daños a la vida y la propiedad civil».

[86] Human Rights Watch, In-Depth Look at Gaza School Attacks, Nueva York, 2014. HRW consideró que esos ataques eran «crímenes de guerra».

[87] Summary by the Secretary-General of the Report of the United Nations Headquarters Board of Inquiry into Certain Incidents That Occurred in the Gaza Strip between 8 July 2014 and 26 August

2014, 2014.

[88] P. Krähenbühl, «In the Eye of a Man-Made Storm», Foreign Policy, 26 de septiembre de 2014.

[89] «Gaza: Ban condemns latest deadly attack near UN school as “moral outrage and criminal act”», UN News Centre, 3 de agosto de 2014.

[90] D. Chiacu, «US Slams “Disgraceful Shelling” of UN School in Gaza», Haaretz, 3 de agosto de 2014.

[91] G. Witte y S. Raghavan, «Netanyahu Says Israeli Military “Will Take as Much Time as Necessary” in Gaza», The Washington Post, 2 de agosto de 2014.

[92] En la decisión de retirarse había también un factor táctico. Israel podía seguir con la invasión terrestre solamente si se aventuraba dentro de las zonas construidas de Gaza. Para evitar un combate calle a calle, que le costaría bajas entre los combatientes, Israel tendría que volar todo lo que se le pusiera por delante, causando muchos miles de muertes civiles, algo que no aceptaría la opinión pública internacional, e incluso así Israel sufriría fuertes bajas entre sus combatientes a medida que los militantes de Hamás fueran saliendo de los túneles. A. Harel, «Operation Protective Edge Advances with No Exit Strategy», Haaretz, 20 de julio de 2014; A. Harel, «As Bulldozers Destroy Hamas’ Underground Network, IDF Sees Light at End of Tunnel», Haaretz, 1 de agosto de 2014; A. Harel, «IDF Wary of New Gaza Ground Op Even as Diplomacy Lags», Haaretz, 25 de agosto de 2014.

[93] G. Cohen, «Senior Officer: Hamas still able to carry out tunnel attacks against Israel», Haaretz, 31 de julio de 2014; «Operation Protective Edge in Numbers», ynetnews.com, 27 de agosto de 2014.

[94] N. al-Mughrabi y M. Lubell, «Israeli Air Strike Kills Three Hamas Commanders in Gaza», Reuters, 21 de agosto de 2014.

[95] «James Foley: Islamic State militants “behead reporter”», BBC, 20 de agosto de 2014.

[96] A. Masi, «Israeli Airstrikes on Gaza Collapse Apartment Building», The International Business Times, 23 de agosto de 2014. Véase también cap. XII.

[97] N. al-Mughrabi y L. Baker, «What's in the Gaza Peace Deal?», Reuters, 26 de agosto de 2014; I. Prusher, «Israel and Palestinians Reach Open-Ended Cease-Fire Deal», Time, 26 de agosto de 2014.

[98] B. Ravid, «Netanyahu: Gaza op was great military, political achievement», Haaretz, 28 de agosto de 2014.

[99] Z. Bar'el, «With Truce, Israel Talks to Hamas and Islamic Jihad», Haaretz, 27 de agosto de 2014.

[100] A. Hass, «Tensions between Hamas and Fatah Overshadow Reconciliation Government», Haaretz, 6 de septiembre de 2014.

[101] B. Ravid, «Netanyahu Saw His Chance to Run Away from Gaza, and He Took It», Haaretz, 26 de agosto de 2014.

[102] M. Rabbani, «Israel's "Operation Status Quo"», Norwegian Peace-Building Resource Center, 25 de agosto de 2014.

[103] J. Al Salami, «Rockets and Iron Dome, the Case of Lebanon», Offiziere.ch, 5 de agosto de 2014, disponible en [offiziere.ch/?p=17519]; «Israel Preparing for "Very Violent" War against Hezbollah, TV Report Says», The Times of Israel, 6 de septiembre de 2014.

[104] Y. Verter, «Netanyahu after the War: Less popular, but still unchallenged», Haaretz, 29 de agosto de 2014.

[105] United Nations Conference on Trade and Development, «Report on UNCTAD Assistance», 2015, § 30.

[106] United Nations Relief and Works Agency, Gaza Situation Report N.o 93, 22 de mayo de 2015.

[107] S. Roy, Gaza Strip, pp. 405-406; J. Khoury, «Thousands of Gazans Fleeing to Europe via Tunnels, Traffickers and Boats», Haaretz, 17 de septiembre de 2014; S. Eldar, «Escaping Gaza, Hundreds of Palestinians Drown», Al-Monitor, 19 de septiembre de

2014; M. Othman, «Suicide Rates on Rise in Gaza», Al-Monitor, 9 de febrero de 2015; J. Rudoren y M. Al Waheidi, «Desperation Drives Gazans over a Fence and into Prison», The New York Times, 17 de febrero de 2015; M. Omer, «“The Smell of Death Hangs Everywhere”: Blockade drives Gazans to suicide», Middle East Eye, 11 de abril de 2016; S. Kamal y H. Stuart, «Palestinians Paying Thousands in Bribes to Leave Gaza», Al Jazeera, 5 de septiembre de 2016.

[108] K. A. Toameh, «Ismail Haniyeh Makes First Appearance since Start of Gaza Operation», The Jerusalem Post, 27 de agosto de 2014.

[109] Palestinian Center for Policy and Survey Research, «Special Gaza War Poll», 2 de septiembre de 2014.

[110] E. Zahriyeh, «Citing Past Failures, Hamas Demands an Enforceable Cease-fire», Al Jazeera America, 16 de julio de 2014.

[111] M. Daraghmeh y K. Laub, «Hamas Claims “Victory for the Resistance” as Long-Term Truce Is Agreed with Israel», The Independent, 26 de agosto de 2014.

[112] J. Khoury, «Meshal: Hamas will go back to war against Israel if upcoming truce talks fail», Haaretz, 28 de agosto de 2014; Amira Hass, «Hamas Trying to Sell “Victory” to Gazans», Haaretz, 27 de agosto de 2014.

[113] N. G. Finkelstein, Method and Madness: The Hidden Story of Israel’s Assaults on Gaza, Nueva York, 2014, pp. 159-160.

[114] J. Khoury, «Israel Will Help Rebuild Gaza If Hamas Disarms, Lieberman Says», Haaretz, 24 de octubre de 2016.

[115] S. Roy, Gaza Strip, cit., pp. xxxi, 406, citando a la organización de ayuda humanitaria internacional Oxfam.

[116] Council of the European Union, 22 de julio de 2014.

[117] Véase cap. VII.

[118] Ibid.

[119] Véase Apéndice.

[120] No puede derivarse un beneficio o derecho de una acción ilegal.

[121] «Council Conclusions on the Middle East Peace Process», 18 de enero de 2016, disponible en [consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/01/18-fac-conclusions-mepp/]; cursivas añadidas.

[122] Véase cap. XIII.

[123] Human Rights Watch, «Indiscriminate Palestinian Rocket Attacks», 9 de julio de 2014.

[124] International Committee of the Red Cross, Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules, Cambridge, 2005, norma 146. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU cita este estudio como fuente autorizada sobre el estado actual del derecho consuetudinario. Report of the Detailed Findings of the Independent Commission of Inquiry Established Pursuant to Human Rights Council Resolution S-21/1, 22 June 2015, § 33. Véase también A. P. V. Rogers, Law on the Battlefield, 2.a ed., Mánchester, 2004, p. 235.

[125] Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 8 July 1996–Letter dated 16 June 1995 from the Legal Adviser to the Foreign and Commonwealth Office of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, together with Written Comments of the United Kingdom; Letter dated 20 June 1995 from the Acting Legal Adviser to the Department of State, together with Written Statement of the Government of the United States of America; Oral Statement of US representative, 15 November 1995; Dissenting Opinion of Vice-President Schwebel. El propio TIJ decidió no pronunciarse sobre la legalidad de las represalias beligerantes, § 46.

[126] B'Tselem, Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories, «Over 90 Percent of Water in Gaza Strip Unfit for Consumption», 9 de febrero de 2014; United Nations Relief and Works Agency, «Denied a Human Standard of Living: The Gaza blockade has entered its tenth year», 21 de octubre de 2016; S. Roy,

Gaza Strip, pp. lii-lvii, lxviii, 402-403.

[127] A. Hass, «Hamas's Rejection of the Cease-Fire Deal Was a Foregone Conclusion», Haaretz, 16 de julio de 2014.

XII. TRAICIÓN I: AMNISTÍA INTERNACIONAL [1]

Aunque la Operación Margen Protector (2014) resultó ser el asalto más destructivo de los últimos que Israel ha descargado sobre Gaza, suscitó una respuesta muda por parte de las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Apenas exageraríamos si dijéramos que la toleraron. Tras la Operación Plomo Fundido (2008-2009) se publicaron unos trescientos informes sobre derechos humanos[2]. Solamente Human Rights Watch (HRW) sacó cinco estudios importantes[3]. Pero HRW publicó únicamente un informe sobre Margen Protector[4]. La excepción resultó ser Amnistía Internacional, que publicó toda una serie de informes. Pero, lejos de ser la excepción que confirmaba la regla, Amnistía fue una variante de la regla: en lugar de silenciar los crímenes de Israel durante la Operación Margen Protector, Amnistía los blanqueó. En especial, su acusación integral a Hamás[5], Unlawful and Deadly: Rocket and Mortero Attacks by Palestinian Armed Groups During the 2014 Gaza / Israel Conflict[6], equivalía a una abdicación de su deber profesional y una traición a la población de Gaza.

Cuadro 6. Pérdidas civiles en la Operación Margen Protector

▪

	Total de ba[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Israel	73	6a (8)	67 (92)	55.000.000b	1c
Gaza	2.200 (550)	1.560 (70)d	640 (30)	4.000.000.000e	18.000f

▪

Nota: algunas cifras se han redondeado.

a Uno de los civiles era un trabajador temporal tailandés.

b State of Israel, 2014 Gaza Conflict, informaba de que la compensación total por los daños directos a los civiles israelíes alcanzaría los 40 millones de dólares, mientras que el Estado gastaría otros 15 millones en reparar infraestructura pública que había sido dañada (§§ 112, 223).

c Otros 11 sufrieron algún daño.

d Las cifras y el desglose de bajas de Gaza se basan en Fragmented Lives, de la Oficina de la ONU para la Coordinación de la Ayuda Humanitaria (OCHA), 2015. Las principales organizaciones de defensa de los derechos humanos en Gaza (Al Mezan, Palestinian Center for Human Rights) dan una cifra de civiles muertos de entre 1.600 y 1.700, mientras que la principal organización de derechos humanos israelí, B'Tselem, da un total de civiles asesinados de 1.400. El balance oficial israelí de Margen Protector supone que hubo un total de 2.125 bajas gazatíes, 936 (el 44 por 100) de las cuales serían «militantes» de Hamás, 761 (el 26 por 100) serían civiles y 428 (el 20 por 100) estarían aún «por determinar». También afirmaba que «en todos los casos, menos en unos pocos, las mujeres, los niños menores de 16 años y los ancianos» fueron automáticamente definidos como «no implicados» en sus cálculos. Pero, según la OCHA, el número de mujeres y niños gazatíes asesinados, es decir, sin incluir a ningún adulto varón, ya alcanzaba los 850. (La única discrepancia sutil es que la OCHA contaba a los niños menores de 17 años.) El informe israelí censuraba a OCHA por basar su desglose de civiles / combatientes en la «lista diaria de bajas publicada por el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás», la cual, continúa, «no identifica si el fallecido es o no militante». Es difícil saber cómo OCHA puede haberse basado en un desglose del ministerio, si el ministerio no ofrecía ningún desglose. State of Israel, 2014 Gaza Conflict, p. 56, n. 165, §§ 9, 13, 25-27.

e State of Palestine, The National Early Recovery and Reconstruction Plan for Gaza, 2014, p. 9.

f 113.000 otros sufrieron algunos daños.

Una evaluación en términos de derechos humanos de Margen Protector necesariamente comienza con la muerte y destrucción civil que esta operación aparejó. El cuadro 6 resume los datos en crudo. «En ambos bandos», observaba Amnistía en Unlawful and Deadly, «una vez más la población civil soportó el peso de esta tercera guerra a gran escala en menos de seis años». Aunque se puede decir que es cierta[7], esta afirmación ocultaba el abismo que separaba la magnitud del sufrimiento infligido sobre los gazatíes en comparación con los civiles israelíes[8]. Sería difícil aportar un ejemplo más palpable de cómo una diferencia cuantitativa se convierte en una diferencia cualitativa, que ese único niño israelí frente a los 550 niños y niñas gazatíes muertos, y no disminuye la santidad de ninguna vida humana apuntar que, si la muerte de un niño israelí fue terrible, entonces, por la misma regla, las muertes infantiles en Gaza fueron 550 veces más terribles. Una Misión Médica Internacional de investigación, reunida por la rama israelí de Médicos por los Derechos Humanos y compuesta de eminentes doctores, coronó su informe sobre Margen Protector con esta advertencia: «Aunque no deseamos de ninguna manera devaluar los efectos traumáticos de la guerra sobre los civiles israelíes, estos palidecen en comparación con las consecuencias de la destrucción masiva desencadenada sobre Gaza»[9]. Incluso el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que había manchado su mandato con excusas en favor de Israel[10], distinguió cuidadosamente entre los ataque letales de Israel sobre las instalaciones de la ONU durante la Operación Margen Protector, a la vez «que “deploraba” el mal uso por parte de Hamás de las instalaciones de la ONU, sobre el cual estaba “consternado”»[11]. Es inútil hojear Unlawful and Deadly para encontrar un reconocimiento o un matiz semejante por parte de Amnistía. Al limitarse a su pretensión de ecuanimidad, Amnistía transmitió la impresión de que Israel y Hamás eran igualmente culpables de quebrantar las leyes de la guerra. Durante un periodo crucial, en el que aún podía influir en las políticas públicas, Amnistía publicó dos informes que documentaban los crímenes de Israel y dos informes que documentaban los crímenes de Hamás (cuatro en total), mientras que, sorprendentemente, dedicaban, en

conjunto, muchas más páginas para acusar a Hamás (107) que a Israel (78)[12]. En el pasado la diferencia no era tanta. En Operation Cast Lead, Israel concentraba el grueso de las acusaciones de Amnistía: el espacio que se le adjudicaba (60 páginas a los crímenes israelíes, frente a 13 páginas para los crímenes de Hamás) era más proporcional (aunque aún lejos de serlo del todo) con la respectiva muerte y destrucción infligida por cada bando[13]. La introducción a cada uno de los cuatro informes de Amnistía sobre Margen Protector equilibraba precavidamente el reparto de las culpas. Como si esto no fuera ya lo suficientemente problemático, Unlawful and Deadly detallaba la muerte del único niño israelí abatido por un ataque de Hamás a lo largo de más de dos páginas. Si realmente tuviera la intención de lograr un (y no fingirlo) equilibrio, ¿no debería haber dedicado Amnistía unas 1.100 páginas a los 550 niños y niñas de Gaza que fueron asesinados? Amnistía incluso daba a entender que Hamás era el más culpable de los dos bandos. Así, la conclusión de Unlawful and Deadly inequívocamente deplora «el flagrante desprecio [de Hamás] por el derecho humanitario internacional», mientras que uno de los informes recíprocos de Amnistía, Families under the Rubble: Israeli Attacks on Inhabited Homes, concluye cautelosamente que los estragos ocasionados –18.000 casas gazatíes fueron destruidas o quedaron inhabitables[14] y más de 110.000 personas perdieron su hogar– «suscitan preguntas difíciles para el gobierno israelí, que hasta ahora no han logrado responder»[15]. Por supuesto, es concebible que Hamás cometiera tantos crímenes de guerra como Israel, si no más, durante Margen Protector, pero prima facie esta sería una conclusión de lo más anómala. Tanto en términos absolutos como relativos, la culpabilidad parece inclinarse claramente del lado israelí: Hamás asesinó a 73 israelíes, de los cuales únicamente el 8 por 100 eran civiles, mientras que Israel asesinó a 2.200 gazatíes, de los cuales un 70 por 100 eran civiles; el daño infligido a la infraestructura civil de Gaza (4.000 millones de dólares) superaba en un factor de 70 a los daños infligidos sobre la infraestructura de Israel (55 millones de dólares), mientras que la ratio de hogares civiles destruidos por Israel, frente a los que destruyó Hamás, es de 18.000:1. La cuestión que nos intriga es: ¿cómo se las arregló Amnistía para convertir este salvaje desequilibrio en una acusación «equilibrada» de ambos bandos en conflicto?

Para justificar la violencia masiva que había desatado sobre Gaza, Israel se aferraba al arsenal de misiles mortales que Hamás habría supuestamente reunido. Haciéndose eco de la hasbara (propaganda) israelí, Unlawful and Deadly informaba de que, ya desde 2001, Hamás había estado almacenando misiles de corto alcance; que después había desarrollado «misiles Qassam de largo alcance»; que, «en los últimos años, grupos armados en Gaza habían producido, actualizado o metido de contrabando miles de misiles BM-21 Grad de diversos tipos, con alcances que iban desde 20 a 48 kilómetros, y que habían adquirido o producido en cantidades más pequeñas misiles de medio y largo alcance», incluyendo «los iraníes Fajr 5 y los producidos localmente M-75 (ambos con un alcance de 75 kilómetros) y los misiles J-890, producidos localmente, con un alcance de 80 kilómetros». «La mayoría de los 8,3 millones de población israelí y la totalidad de los 2,8 millones de palestinos de la Cisjordania ocupada», concluía ominosamente Amnistía, «están ahora dentro del alcance de al menos algunos de los misiles en posesión de los grupos armados palestinos de la Franja de Gaza. […] El círculo del miedo se ha ampliado». Aunque Amnistía no cita en qué se basan estos datos[16], es casi seguro que proceden de fuentes oficiales israelíes, y es difícil no mostrar escepticismo ante ellos. El balance oficial israelí tras Margen Protector alegaba que, en la víspera de la Operación Pilar Defensivo (2012), Hamás «había almacenado más de 7.000 misiles y morteros», mientras que en la víspera de Margen Protector «había adquirido más de 10.000 misiles y morteros». También proporcionaba un desglose preciso de esos proyectiles («6.700 misiles con un alcance de hasta 20 kilómetros», «2.300 misiles con un alcance de hasta 40 kilómetros», etc.)[17]. Cabe preguntarse cómo obtuvo Israel una información tan detallada y por qué, si poseía esa información, Israel no impidió previamente que Hamás usara un armamento tan terrible. Si podía estar seguro de la cantidad y calidad de estos proyectiles, tendría que saber también dónde se almacenaban, e Israel nunca se ha arrugado a la hora de lanzar un ataque preventivo para aplastar en el nido una amenaza «existencial», real o inventada. Si no lanzó un ataque así, es casi seguro que fue bien porque Hamás no poseía tal arsenal o porque, si lo poseía, Israel lo desconocía. En cualquier caso, Israel escogía sus datos publicados, en los que se basaba Amnistía (y otros), con poca base. Si Hamás hubiera, en efecto, amasado un arsenal monstruoso de armas letales, lo sorprendente es

que infligiera tan poca muerte y destrucción. Robando otra página de la hasbara israelí, Amnistía adjudicaba este milagro a las baterías antimisiles israelíes: «El sistema de defensa contra misiles de Israel, la Cúpula de Hierro, ayudó a limitar las bajas civiles en muchas zonas», y se usó «para proteger las áreas civiles de los proyectiles lanzados desde la Franja de Gaza». De hecho, era perfectamente obvio, a partir de las fuentes públicas, que el arsenal de Hamás consistía en fuegos de artificio aumentados, o «cohetes caseros», mientras que la Cúpula de Hierro salvó pocas o ninguna vida israelí[18]. En su hiperbólico inventario del arsenal de Hamás, Amnistía también citaba la alegación israelí de que había interceptado una embarcación que transportaba misiles iraníes «rumbo a Gaza». Si bien omitía el muy difundido hallazgo por parte de un Comité de expertos de la ONU de que las armas iraníes no tenían como destino Gaza, sino Sudán[19]. Al adoptar la argumentación israelí de un mortífero arsenal de misiles de Hamás, Amnistía se convirtió, conscientemente o no, en un proveedor de propaganda estatal. Su descripción de las catacumbas de Hamás no era menos tendenciosa. Amnistía repetía la alegación oficial israelí de que la invasión terrestre se lanzó para «destruir el sistema de túneles […] especialmente aquellos con bocas descubiertas cerca de zonas residenciales situadas en Israel»; y que las tropas israelíes evitaron repetidamente que infiltrados de Hamás atacaran a comunidades civiles. Ignoraba las pruebas proporcionadas por fuentes intachables israelíes que demostraban que los combatientes de Hamás que salían de los túneles apuntaban a los soldados israelíes, no a civiles[20]. Incluso aunque el balance oficial israelí sobre Margen Protector informaba pomposamente de que los túneles de Hamás desembocaban «en zonas residenciales o en su proximidad»[21], su propio desglose mostraba que todos los ejemplos de infiltraciones de Hamás culminaron no en un ataque dirigido a civiles, sino en un encuentro armado con combatientes israelíes[22].

El resultado de la confianza depositada por Amnistía en las fuentes oficiales israelíes fue que se magnificó la culpabilidad criminal de Hamás y se redujo la de Israel. Esta distorsión provenía en parte de otra de las acciones «equilibradoras» estratégicas de Amnistía. Israel había prohibido a Amnistía (y a otras organizaciones de defensa de los derechos humanos) la entrada en Gaza durante[23] y después de

la Operación Margen Protector. Por lo tanto, excepto por, como mucho, un par de sus trabajadores de campo que vivían en Gaza, Amnistía tuvo que llevar a cabo su investigación desde el exterior. Desde un punto de vista práctico, esta limitación impuesta por Israel evitó repetidamente que Amnistía pudiera contrastar la veracidad de las disculpas oficiales israelíes. ¿Cómo resolvía Amnistía este desafío forense? Normalmente informaba sobre el crimen de guerra israelí que se le adjudicaba, después mencionaba la negación israelí y a continuación, «neutralmente», pasaba a pedir una investigación adecuada sobre el terreno, una investigación que Amnistía sabía perfectamente que Israel nunca permitiría. El lector se quedaba entonces en un limbo perfecto y permanente y no sabía dónde residía la verdad. Cuando evaluaba las alegaciones de que Hamás había violado el derecho internacional durante Margen Protector, Amnistía primero señalaba violaciones previas por parte de Hamás como pruebas que corroboraban su culpabilidad[24]. ¿No debería haber contextualizado también los momentos en que Israel negaba su culpa, con la advertencia de que las anteriores negaciones de Israel habían demostrado ser, tras una inspección, falsedades flagrantes? De hecho, el estudio del Comité de Investigación de la ONU sobre los ataques israelíes contra instalaciones de la ONU durante Margen Protector repetidamente desmontaba las mentiras que sustentaban la petición de inocencia por parte de Israel[25]. En su comunicado de prensa, en el que lamentaba la negativa de Israel a permitirle la entrada en Gaza, Human Rights Watch observaba agudamente: «Si Israel confía en su afirmación de que Hamás es responsable de las muertes civiles en Gaza, no debería bloquear que las organizaciones de defensa de los derechos humanos efectuaran investigaciones sobre el terreno». Amnistía misma señalaba que «los gobiernos que desean ocultar sus violaciones de los derechos humanos a los ojos del mundo exterior habitualmente han prohibido que Amnistía Internacional accediera a los lugares en los que se habían cometido»[26]. Así pues, si Israel bloqueaba el acceso a Gaza después de Margen Protector, ¿no debería Amnistía haber trabajado con la premisa de que la defensa de Israel no soportaría una investigación sobre el terreno? Si un sospechoso niega a una investigación imparcial el acceso a la escena del crimen, entonces la inferencia inexorable es que tiene algo que ocultar. Es cierto que, para justificar su negativa, Israel ha alegado repetidamente que Amnistía tiene prejuicios en su contra. Pero sería

curioso que Amnistía misma diera crédito a esta acusación como una razón suficiente para suspender su juicio. El principio relevante en juego no es si Israel es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es que si Israel se declara no culpable debe cargar con el peso de la prueba, incluso cuando se niega a demostrar su inocencia ante una tercera parte no implicada, frente a acusaciones creíbles basadas en un montón de pruebas incriminatorias. En último término, la neutralidad de Amnistía incentivó la no cooperación israelí. Pues si conceder a los grupos de defensa de los derechos humanos la entrada en Gaza les permitiría documentar los crímenes de Israel, entonces una política de Estado prudente sería apartar por completo a estas organizaciones y buscar un veredicto agnóstico. Para el caso, eso es lo que hizo Israel y ese fue el veredicto que emitió Amnistía. Finalmente, hay que destacar una inmensa laguna en las pretensiones equilibradoras de Amnistía. Citaba profusamente las declaraciones basura de la hasbara israelí, pero ni una sola vez informó de los pertinentes hallazgos de las más respetadas organizaciones de defensa de los derechos humanos de Gaza, como el Al Mezan Center for Human Rights y el Palestinian Center for Human Rights[27]. La sección sobre metodología de Unlawful and Deadly afirmaba: «Amnistía Internacional ha examinado la documentación relevante producida por las agencias de la ONU, los organismos militares y gubernamentales israelíes, las ONG palestinas e israelíes, los grupos armados palestinos y los informes de los medios de comunicación, entre otras fuentes, y ha consultado con expertos relevantes y profesionales antes de redactar el informe. Amnistía Internacional quisiera agradecer a las ONG israelíes y a otros organismos israelíes la ayuda que han prestado a sus investigadores»[28]. Mientras que el informe daba amplio espacio a las afirmaciones de los organismos militares y gubernamentales israelíes, no contenía ni una sola referencia a cualquier ONG palestina.

Los problemáticos criterios indiciarios de Amnistía en Unlawful and Deadly adjudicaban sutilmente a Hamás una parte de culpabilidad por los crímenes más egregios de Israel durante Margen Protector. Vamos a examinar unos ejemplos.

Hospitales. Israel destruyó o dañó 17 hospitales y 56 centros de salud primaria durante Margen Protector[29]. Unlawful and Deadly apuntó al supuesto mal uso por parte de Hamás de tres de estas instalaciones.

1. Al-Wafa. Israel atacó repetidamente, y después redujo a escombros, el hospital Al-Wafa, la única clínica de rehabilitación de Gaza. No era la primera vez que Israel apuntaba al hospital. Durante la Operación Plomo Fundido, Al-Wafa soportó impactos directos de ocho obuses de tanque, dos misiles y miles de balas, incluso mientras Israel admitía públicamente que no apuntaba a «terroristas» que lanzaban ataques «en la vecindad de un hospital»[30]. En esta ocasión, Amnistía citaba las alegaciones israelíes de que Al-Wafa era un «centro de mando». Podría haber apuntado que «centro de mando» era la excusa por defecto de Israel para atacar objetivos civiles durante Margen Protector[31] y que, en otros contextos, Amnistía habría considerado estas alegaciones sin fundamento[32]. Mostrando una fotografía aérea, el ejército israelí alegó que Hamás había disparado un misil desde las inmediaciones de Al-Wafa. Amnistía concluyó, no obstante, que «la imagen tuiteada por el ejército israelí no se corresponde con las imágenes de satélite del hospital de Al-Wafa y parece que describe una localización diferente». Este hallazgo parecía invalidar la excusa israelí, excepto que, siempre tan ecuánime, Amnistía concluía que «no había sido posible verificar las afirmaciones israelíes de que el hospital se usara para lanzar misiles» y que la alegación israelí debería «investigarse de manera independiente». En otras palabras, incluso aunque la única prueba que aportaba Israel fuera demostrablemente falsa, aún quedaba abierta la cuestión de si su coartada era o no cierta. Con estos criterios probatorios, Amnistía no podría nunca descubrir si Israel había cometido un crimen de guerra, a no ser que Israel admitiera haberlo cometido. De hecho, Israel después retiró la alegación sobre el misil[33]. Amnistía apuntaba, además, que, «según los informes de prensa», «se disparó un misil antitanque desde Al-Wafa». Los «informes de prensa» que citaba Amnistía resultaron ser básicamente un comunicado de prensa oficial israelí que The Jerusalem Post había reproducido obedientemente[34]. Es igualmente interesante lo que Amnistía decidió no citar. Si

consideraba que la hasbara israelí era una prueba creíble, ¿no debería entonces haber citado al director de Al-Wafa, que le dijo a Haaretz que las afirmaciones israelíes eran «falsas y engañosas»; o al representante de la Organización Mundial de la Salud en Gaza, que reconocía de primeras la probable presencia de un «lugar de lanzamiento de misiles en las inmediaciones» de Al-Wafa, pero decía que «estaba a más de 200 metros de distancia del hospital»[35]? «Las fuerzas armadas israelíes niegan haber apuntado directa e intencionadamente al hospital [Al-Wafa], diciendo que buscaban neutralizar unos disparos de misil que se originaron en las inmediaciones del hospital», observaba una delegación de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) después de entrar en Gaza y examinar las pruebas. «No obstante, hay varios elementos que indican que el hospital fue, de hecho, objeto de un ataque directo e intencionado por parte de las fuerzas armadas israelíes»[36]. Al optar en su lugar por apaciguar las dudas sobre la inocencia israelí, Amnistía informaba: «Una investigación interna del ejército israelí sobre su ataque sobre Al-Wafa […] descubría que los ataques se habían llevado a cabo de acuerdo con el derecho internacional». ¿No debería haber mencionado que ninguna organización de defensa de los derechos humanos, Amnistía incluida, concedían valor alguno a los resultados de las investigaciones internas israelíes?[37].

2. Al-Shifa. Sobre la base de una prueba «creíble» de que Hamás había disparado un misil desde la parte trasera del hospital Al-Shifa, Amnistía pidió una investigación independiente. Después pidió una investigación de «otros informes y declaraciones que afirman que los líderes de Hamás y las fuerzas de seguridad usaron las instalaciones del hospital para fines militares y para interrogatorios durante las hostilidades». Israel había hecho acusaciones idénticas durante la Operación Plomo Fundido, pero las pruebas que había aportado en su defensa eran minúsculas[38]. En esta ocasión, Amnistía citaba muchas fuentes de calidad variable[39]. Lo que no hizo, claramente, fue citar fuentes que discutieran la alegación. Ignoraba el testimonio convincente y matizado de dos respetados cirujanos noruegos que trabajaban como voluntarios en Al-Shifa durante Margen Protector: aunque «podían pasear libremente en el hospital», no se encontraron ninguna señal de que «fuera un centro de mando de Hamás»[40]. A requerimiento de este autor, una de las

académicas mundiales más importantes especializada en Gaza, Sara Roy, de la Universidad de Harvard, consultó a una serie de sus fuentes en Gaza, personas de las que podía responder por su integridad personal y profesional. El consenso entre ellas fue que, aunque se habían disparado misiles en las inmediaciones de Al-Shifa (pero no desde los terrenos del hospital), era altamente improbable que Hamás hubiera hecho uso militar del edificio del hospital[41]. Amnistía o bien eligió ignorar estas opiniones contrarias, o no se molestó en recabar dichas opiniones contrarias de fuentes impecables y fácilmente accesibles. También aportaba el chisme supuestamente incriminatorio de que «un periodista palestino […] fue interrogado por los oficiales de la Seguridad Interna de Hamás en una sección abandonada del hospital». Al-Shifa estaba lleno hasta los topes, albergando a unas 13.000 personas sin hogar durante Margen Protector. Como permitía recoger noticias vía satélite, el hospital servía también como centro de reunión de medios de comunicación, portavoces políticos, funcionarios de la ONU, organizaciones de defensa de los derechos humanos y otras ONG. Nos sorprende que Amnistía no haya considerado que era algo siniestro, o al menos digno de señalarse, que un partido asediado, luchando contra una invasión extranjera mortífera, interrogara –no torturara o intimidara, únicamente cuestionara– a alguien en una instalación repleta de una recua de gente de todo tipo, entre ellos supuestamente espías, saboteadores y provocadores[42]. ¿Es que al organismo que gobernaba en Gaza no se le permitía ni siquiera ejercer las funciones rutinarias de seguridad? En su informe «Strangling Necks»: Abductions, Torture and Summary Killing of Palestinians by Hamas Forces During the 2014 Gaza / Israel Conflict, Amnistía declara sin tapujos: «Las fuerzas de Hamás utilizaron las áreas abandonadas del hospital Al-Shifa de Gaza, incluyendo la zona de pacientes externos, para retener, interrogar, torturar y maltratar de otros modos a los sospechosos». Las pruebas que aporta Amnistía para la más incendiaria de esas aseveraciones, es decir, que Hamás torturaba sistemáticamente sospechosos en Al-Shifa, no impresionan[43]. Por cierto, ¿cómo es que esta cámara de tortura pasó desapercibida a la multitud de periodistas, funcionarios de la ONU y ONG acomodados en Al-Shifa hasta que el único trabajador sobre el terreno de Amnistía en Gaza apareció para dar la primicia? Incluso el balance oficial de Israel sobre Margen Protector, aunque está repleto de la

más descarada propaganda y falsedades, no llegaba más allá de aducir que Hamás usaba Al-Shifa para «interrogatorios de los servicios de seguridad»[44]. ¿Estaba Amnistía inclinándose tanto, como para tumbarse del todo, con el fin de demostrar su imparcialidad?

3. Shuhada al-Aqsa. Israel atacó con obuses el hospital de Shuhada al-Aqsa, matando al menos a cuatro personas e hiriendo a docenas de ellas. Señalando que Israel había apuntado a un almacén oculto de misiles antitanques, almacenados «en las inmediaciones del hospital», Amnistía declaraba que «no había podido confirmar este incidente» y pedía que fuera «investigado de manera independiente». En la medida en la que obsequiosamente informaba de la excusa de Israel para esta atrocidad, ¿no debería Amnistía haber citado también el relato de un testigo ocular, una enfermera del lugar? Esta testificó que después de que cuatro palestinos fueran asesinados en vehículos aparcados fuera, «el hospital fue impactado 15 veces en una rápida sucesión por los tanques». Mientras que, en la valoración de Amnistía, Hamás e Israel podrían haber sido igualmente culpables de violar el derecho internacional[45], la misión médica de investigación concluía: «Lo que es importante aquí es que [al-Aqsa] fue atacado por el ejército israelí mientras se admitía a pacientes, había profesionales de la salud trabajando y civiles que buscaban un refugio de los ataques en el área circundante»[46].

4. Ambulancias. Unas 45 ambulancias fueron o bien dañadas o bien destruidas como resultado de ataques directos israelíes o de daños colaterales durante Margen Protector. Amnistía informaba de que Israel había «publicado material audiovisual en el que decía que se veía a militantes palestinos entrando en una ambulancia». Este clip de vídeo de 24 segundos fue la única prueba que Israel adujo para justificar sus repetidos ataques a las ambulancias durante Margen Protector[47]. De hecho, el valor indiciario del vídeo puede calcularse exactamente como igual a cero. Registra a dos militantes desarmados de Hamás en una fecha desconocida y en un lugar desconocido, entrando en una ambulancia que pertenece a la unidad médica de emergencia del brazo armado de Hamás (las brigadas al-Qassam). Por lo que se puede deducir del vídeo, estaban participando en una misión de rescate médico rutinaria. (Merece

decirse entre paréntesis que el ministro de Sanidad había ordenado que el personal de ambulancias no llevara ningún arma a bordo, ni siquiera pistolas.) Puesto que referenciaba este vídeo vacuo, ¿por qué Amnistía no señalaba también que Israel había disparado repetidamente contra las ambulancias palestinas en operaciones anteriores[48]; que, a pesar de su tecnología de seguimiento a la última, Israel aportaba pruebas que justificaran un ataque criminal sobre una ambulancia en un único incidente que se remontaba a 2002; y que, en esta única instancia, a la propia Amnistía le parecía dudosa esta prueba?[49]. De hecho, Amnistía, la misión de investigación médica y la delegación de la FIDH habían documentado ampliamente ataques premeditados y sin mediar provocación de Israel sobre las ambulancias palestinas durante Margen Protector[50].

Escuelas. Israel destruyó 22 escuelas y dañó otras 118 durante Margen Protector[51]. «El ejército israelí ha afirmado que se lanzaron misiles y morteros desde dentro de varias escuelas en la Franja de Gaza durante las hostilidades», informaba Amnistía, y que «al menos 89 misiles y morteros se lanzaron en un radio de 30 metros de las escuelas de la ONU». Después de confesar su incapacidad «para comprobar cualquiera de estas acusaciones específicas», Amnistía recomendaba que «se investigaran de manera independiente». Pero ¿por qué Unlawful and Deadly cita solamente –y hasta la saciedad– los comunicados de prensa del Ministerio de Exteriores y de las IDF?[52]. Sin duda podría haber contrastado las coartadas israelíes oficiales consultando a los grupos palestinos en defensa de los derechos humanos, a los funcionarios de la ONU y a las ONG más importantes que seguían en Gaza. La Junta de investigación de la ONU indagó siete ataques israelíes, muchos de ellos mortales, sobre las escuelas de la ONU, todas las cuales, excepto una, habían sido convertidas en refugios de emergencia. La Junta no encontró pruebas que apoyaran, y sí numerosas pruebas que refutaban (incluyendo los testimonios de los guardas de seguridad y de otros testigos), las trilladas alegaciones de Israel de que Hamás lanzaba misiles desde dentro o desde las inmediaciones de las escuelas de la ONU atacadas por Israel[53].

Mezquitas. Israel destruyó 73 mezquitas y dañó otras 130 durante Margen Protector. Amnistía informaba de que, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, «al menos se lanzaron 83 misiles y morteros a menos de 25 metros de mezquitas durante las hostilidades, en algunos casos desde dentro del recinto de las mezquitas». Amnistía no citaba ninguna otra fuente. No era la primera vez que Israel atacaba mezquitas en Gaza. Destruyó 30 mezquitas y dañó otras 15 durante la Operación Plomo Fundido. Entonces, la Comisión del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, encabezada por Richard Goldstone, investigó un ataque con misiles «intencionado» por parte de Israel sobre una mezquita, que mató al menos a 15 personas que se encontraban allí rezando. No encontró «pruebas de que esta mezquita se usara para el almacenamiento de armas o para cualquier otra actividad militar por parte de grupos palestinos armados»[54]. Si se citaban las justificaciones oficiales israelíes para el ataque conjunto sobre los lugares de devoción islámicos –sin duda semejante a una noche de los cristales rotos–, ¿no debería al menos Amnistía haber señalado que en el pasado dichas justificaciones habían resultado espurias?[55].

Centrales eléctricas. Israel atacó repetidamente la única central eléctrica de Gaza durante Margen Protector. Los ataques empeoraron los ya graves apagones eléctricos y destrozaron los servicios de agua, alcantarillado y sanitarios. No era la primera vez que Israel atacaba la única central eléctrica de Gaza. En 2006 Israel lanzó múltiples disparos de misil precisamente apuntando a los transformadores de la central. B'Tselem consideró que el ataque de 2006 era un «crimen de guerra»[56]. Amnistía declaraba que el ataque sobre la central eléctrica de Gaza durante Margen Protector «podría suponer un crimen de guerra»[57], pero después se apresuraba a matizar esta calificación. «Un general de brigada israelí negó que Israel apuntara intencionadamente a la central eléctrica, pero no desechó la posibilidad de que fuera abatida por error.» Si Amnistía citaba la predecible negación del general de brigada, ¿no debería también haber señalado que Israel había atacado intencionadamente esa misma central eléctrica en el pasado? «La localización de la central eléctrica era bien conocida», apuntaba la delegación de la FIDH cuando visitó Gaza después de Margen Protector. «Los ataques reiterados […] y la negativa [por parte de Israel] a garantizar la seguridad de la central no respaldan la

afirmación de que los ataques fueron accidentales»[58]. Es notable lo desacompasada que iba Amnistía respecto a las organizaciones de defensa de los derechos humanos que sí consiguieron entrar en Gaza.

Las evidencias sesgadas de Amnistía también manchaban su informe sobre los ataque aéreos israelíes que apuntaban a residencias civiles durante Margen Protector. El informe Families under the Rubble sí concluía que los ocho ataques que Amnistía investigaba eran, por diversas razones, ilegales y posiblemente crímenes de guerra. En especial, decía que «la pérdida de vidas civiles, las heridas a civiles y el daño a objetos civiles parecen desproporcionados, es decir, sin relación con la posible ventaja militar de ejecutar el ataque». Israel mismo «no ha hecho declaraciones sobre quién o qué era el objetivo de los ataques, ni ha reconocido que llevó a cabo estos ataques particulares». Pero, aunque Amnistía afirmaba con propiedad que «la carga de la prueba le corresponde a Israel para proporcionar información respecto a los ataques y a sus supuestos objetivos», extrañamente asumía la carga de desentrañar excusas que pudieran justificarlos. El resultado vacilaba entre la sátira y el escándalo (véase el cuadro 7). Primero, Amnistía especulaba repetidamente, a menudo con justificaciones mínimas, que Israel había atacado una casa porque pudiera haberse escondido dentro un militante de Hamás. Segundo, no se preguntaba la cuestión obvia, ¿cómo podría haber sabido Israel la supuesta presencia del militante, si la mayoría de los vecinos no lo sabían?[59]. Tercero, detectaba en todos y cada uno de los ataques a un posible militante gazatí objeto del ataque de Israel. Pero incluso el más severo de los críticos de Israel concedería que algún hogar civil podría haber sido impactado no intencionalmente, sino debido a un desliz operativo. Amnistía estaba tan volcada en proporcionar coartadas a Israel que terminó pasándose de frenada, evitando incluso la plausible excusa del error humano[60].

Cuadro 7. Amnistía Internacional: por qué Israel atacó hogares civiles en Gaza

▪

Caso 1: 18 civiles palestinos asesin[illegible]

Caso 2: 26 civiles palestinos asesin[illegible]

Caso 3: 36 civiles palestinos asesin[illegible]

Caso 4: 14 civiles palestinos asesin[illegible]

Caso 5: 5 civiles palestinos asesin[illegible]

Caso 6: 6 civiles palestinos asesin[illegible]

Caso 7: 8 civiles palestinos asesin[illegible]

Caso 8: 8 civiles palestinos asesin[illegible]

▪

Nota: el texto en cursiva de la columna de la derecha se cita directamente de Families Under the Rubble.

a A pesar de la intrépida labor detectivesca de Amnistía, el balance oficial israelí sobre Margen Protector (publicado después del informe de Amnistía) apuntaba a «Omar Al-Rahim, un mando superior de la Yihad Palestina Islámica» como el objetivo real de este ataque. State of Israel, 2014 Gaza Conflict, §§ 267, 456.

La argumentación del informe de Amnistía Families under the Rubble daba la impresión de que Israel en la mayoría de los casos apuntaba a militantes de Hamás cuando atacaba las casas civiles. Absolvía a Israel de la acusación que más impresionaría al tribunal de la opinión pública: que las IDF apuntaban deliberadamente a civiles y a propiedad civil. Dándole pretextos a Israel para cometer las peores atrocidades durante Margen Protector, Amnistía hacía más fácil la labor de la hasbara israelí. Es mucho más sencillo refutar las acusaciones nebulosas, subjetivas y relativas de un ataque «desproporcionado», que la acusación de un ataque deliberado sobre la población civil. De hecho, el balance oficial israelí sobre Margen Protector repetidamente invocaba las innumerables advertencias adjuntas al principio de proporcionalidad que, en efecto, demuestran la casi imposibilidad de obtener una condena basándose en este[61]. Pero el escándalo principal es este: la impresión que dejaba Families under the Rubble era palmariamente falsa, y Amnistía debía saberlo. En un estado de locura inflamada, pero también mediante un sobrio cálculo de su valor pedagógico, Israel infligió una forma grotesca de castigo colectivo cuando, de manera indiscriminada o intencionada, arrasó un número abrumador de hogares gazatíes. Inicialmente apuntaba a las casas de los militantes de Hamás[62]; después, a medida que avanzaba la invasión terrestre, se embarcó en un frenesí destructor salvaje, y entonces, en el desenlace de Margen Protector, hizo añicos cuatro rascacielos importantes de Gaza. En su informe «Nothing is Inmune»: Israel’s Destruction of Landmark Buildings in Gaza, Amnistía admitía que la destrucción de estos edificios

representativos era «una forma de castigo colectivo». Pero también señalaba esta acción culminante de Israel como la excepción a la regla: «Los ataques tienen una enorme importancia, porque son ejemplos de lo que parece haber sido una destrucción y ataque deliberado a gran escala sobre los edificios y sobre la propiedad civil, llevados a cabo sin necesidad militar ninguna». De hecho, la amplia mayoría de la destrucción israelí durante Margen Protector consistía en un castigo colectivo de unas dimensiones lunáticas y desprovisto de fin militar, cuanto más de necesidades militares. Situado en la dimensión completa de esta destrucción sistemática, el ataque específico de Israel a militantes de Hamás, que ocupaban o partían de casas civiles, equivalía como mucho a un error estadístico. ¿De verdad creía Amnistía que había un militante de Hamás escondido en todos o en la mayoría de los 18.000 hogares que Israel destruyó en Gaza? La horrible verdad de lo que ocurrió en Gaza no fue recogida por el eficaz blanqueo de Amnistía, sino por la colección de testimonios de soldados de las IDF que habían participado en Margen Protector, recogidos por Breaking the Silence (véase el cuadro 8)[63].

Cuadro 8. Destrucción de propiedades / casas en Gaza durante la Operación Margen Protector: una selección de los testimonios de las IDF

▪

1a	[¿Viste alguna foto aérea «antes y despué
5	Durante la charla [en el entrenamiento] é
14	Tengo la sensación de que todas las casas
15	Mientras estuvimos allí destinados, los bl
20	[¿A qué disparabas?] A las casas. [¿Casas
21	No sé cómo lo hacían, pero los operadore
29	No había amenazas y todo estaba tranqui
30	Todo «húmedo» [usando munición real].
33	El mismo día que salíamos de Gaza, las ca
34	A nosotros [los cuerpos blindados] nos da
37	A uno de los altos mandos le encantaba d
42	Las tropas […] destrozaron todo lo que q

46	Hubo una tarde en la que el comandante
51	Una semana o dos después de que entrára
52	[¿Se usan los tanques M16 todo el rato?]
54	En cualquier casa en la que entren los chi
63	[El comandante] dice: «Mirad, esta es la p
67	[Las tropas de ingenieros de combate] vo
71	El día que aquel chaval de nuestra compa
74	Me acuerdo de una vez en la que se deton
83	Había un alto el fuego humanitario que s
110	Un oficial de muy alto rango del centro d

▪

a Los testimonios están así numerados en la recopilación.

b Los intercalados entre paréntesis y en cursiva son de Breaking the Silence.

c Excavadoras blindadas.

En su introducción a Families under the Rubble, Amnistía pedía a Israel que «aprendiera las lecciones de este conflicto y de los conflictos previos y cambiara su doctrina y táctica militar de combate en áreas densamente pobladas, como las de Gaza, para asegurarse un estricto cumplimiento del derecho humanitario internacional». Pero Israel ya había aprendido las lecciones sobre cómo luchar en Gaza; su doctrina militar ya había incorporado esas lecciones y las IDF las habían ejecutado con brillantez en la última operación. Se requería una disciplina mental extraordinaria para no darse cuenta de que asegurar «el cumplimiento estricto del derecho internacional» no era algo que Israel tuviera en cuenta y que mucho menos era una prioridad. Por el contrario, el fin de Margen Protector era dejar «a las familias bajo los escombros»[64].

La suposición de que no solamente Israel, sino también Hamás había cometido violaciones masivas y escandalosas del derecho internacional subyacía bajo el «equilibrado» pliego de acusaciones de Amnistía. Su acusación de que Hamás era culpable de «flagrantes violaciones del derecho internacional», es decir, de crímenes de guerra, se repartía en dos epígrafes: (1) el uso por parte de Hamás de armamento forzosamente indiscriminatorio; y (2) sus ataques indiscriminados o deliberados a civiles y a propiedad civil israelí. Además, Amnistía acusaba a Hamás de violar la ley internacional que requería tomar todas las precauciones a su alcance para proteger a la población civil en zona de combate. Cada uno de estos epígrafes se analizará a continuación[65].

Armamento indiscriminado. Amnistía afirmaba que «todos los misiles»

del arsenal de Hamás constituían «proyectiles no guiados, que no pueden ser dirigidos hacia objetivos específicos». Además, aunque reconoce que Hamás «sí parecía haber apuntado con algunos morteros a objetivos militares», Amnistía añadía la advertencia fundamental de que los morteros «siguen siendo un arma imprecisa y que, por lo tanto, nunca deben usarse para atacar objetivos militares localizados entre los civiles o entre los objetos civiles». En una segunda formulación, el criterio legal aún se ponía más alto: «Incluso en manos de un operador formado y con amplia experiencia, un mortero nunca puede ser lo bastante preciso como para impactar en un objetivo preciso. Por lo tanto, cuando se usen morteros con la intención de golpear objetivos militares situados en las inmediaciones de concentraciones civiles, y estos impacten en civiles o en objetos civiles, constituyen ataques indiscriminados» (cursivas añadidas). Excepto las armas de mano, como las pistolas, los misiles antitanque y las IED, Amnistía efectivamente declaraba ilegal la mayor parte del arcaico arsenal militar de Hamás. De hecho, según Amnistía, «el derecho humanitario internacional prohíbe el uso de armas que sean por naturaleza indiscriminadas»; «usar armas prohibidas es un crimen de guerra»; «disparar el misil es un crimen de guerra» (cursivas añadidas). Así pues, en el libro de cuentas de Amnistía, cada vez que Hamás disparaba un misil o un mortero proyectil cometía un crimen de guerra, con independencia de si el arma impactaba o no en una persona u objeto civil. Teniendo en cuenta que Hamás disparó unos 7.000 misiles y morteros a Israel, según Amnistía habría cometido otros tantos 7.000 crímenes de guerra[66], incluso aunque solamente hayan muerto seis civiles en Israel y solo se destruyera una casa. Con un cálculo así, la única manera de defender el carácter «equilibrado» de la acusación de Amnistía tendría que hacerse a expensas de convertir el derecho internacional o, en cualquier caso, la construcción y aplicación que hace de él Amnistía, en un objeto digno de burla. Si el mero uso por parte de Hamás de estas armas constituye crímenes de guerra, también habría que preguntarse por qué Amnistía se molestó en investigar la consiguiente muerte y destrucción civil. Se podría pensar que, después de una acusación que ya recogía miles de crímenes de guerra, la documentación suplementaria sobre los crímenes de guerra sería innecesaria, como golpear a un caballo muerto. Pero hay otra anomalía. Amnistía alude de pasada al hecho de que las «violaciones» israelíes del derecho internacional durante Margen Protector incluyen «ataques usando municiones como la artillería, que no puede apuntar con precisión, en áreas residenciales densamente pobladas». De hecho, si

Amnistía se hubiera molestado en seguir esa línea de investigación, habría descubierto que Israel disparó no menos que 20.000 obuses de artillería altamente explosivos y sin guía en Gaza, y se calcula que un 95 por 100 de ellos cerca de áreas civiles pobladas. Los proyectiles de artillería israelíes eran doblemente indiscriminados: no se podía apuntar con ellos y los efectos de su fragmentación hacían imposible que se limitaran a un objetivo específico. Así, por una parte, un ataque con un «Doher» howitzer de 155 mm se consideraba técnicamente un «acierto» si el proyectil aterrizaba dentro de un radio de 46 metros del objetivo – muy lejos del umbral de «objetivo específico» de Amnistía y, en cualquier caso, como confirman los testimonios de Breaking the Silence, se disparaba la artillería sin demasiado cuidado–, mientras que, por otra parte, el radio en el que se esperaba que se produjeran daños por cada proyectil de artillería de 155 mm era de unos 300 m[67]. El balance oficial israelí de Margen Protector afirmaba que «en la inmensa mayoría de los casos» Israel había disparado proyectiles de artillería de alto poder explosivo en «zonas abiertas despejadas de presencia civil»[68]. Pero también decía que, «más que utilizar las zonas menos pobladas de la Franja de Gaza, donde operan durante las treguas de las hostilidades», Hamás había realojado «sus posesiones y operaciones en zonas de construcción civil para resguardarse del ataque de las IDF»[69]. Si tenemos que creer a esta acreditada publicación oficial israelí, Israel debería entonces haber disparado la inmensa mayoría de sus 20.000 proyectiles de artillería de alto poder explosivo en espacios vacíos desprovistos por completo de sentido militar. Mientras tanto, según la contabilidad de Amnistía, en la que cada uso de un arma indiscriminada constituye un crimen de guerra, Israel habría cometido casi 300 veces más crímenes de guerra que Hamás únicamente por el uso de proyectiles de artillería, aunque de eso no nos enteramos por los informes de Amnistía[70]. Era sintomático del excesivo sesgo de Amnistía que, mientras que había inventariado meticulosamente el arsenal de Hamás, quien leyera los informes se quedaría sin saber la cantidad y calidad de la potencia de fuego que Israel dejó en Gaza. ¿Cuántas bombas (y de cuánto tonelaje) dejó caer Israel? ¿Cuántos ataques con misiles? ¿Cuántos proyectiles de tanque y artillería gastó? Sería inútil buscar respuestas a estas preguntas básicas en los informes de Amnistía sobre Margen Protector, incluso aunque estos datos fueran públicamente accesibles[71]. La superposición de los arsenales que desplegaron respectivamente ambos bandos habría arrastrado por los suelos la pretensión de equilibrio de Amnistía. Si la palabra «guerra»

denota un conflicto armado entre dos partes beligerantes más o menos igualadas, entonces lo que ocurrió durante Margen Protector no se acerca a una guerra ni remotamente: por desgracia, los proyectiles tan criminales de Hamás se desvanecen en una invisibilidad negativa al lado de las legalísimas máquinas de matar de tecnología punta de Israel.

Ataques indiscriminados y deliberados a civiles y objetos civiles. Amnistía no acusa únicamente a Hamás de desplegar armamento no discriminador. También, como una discreta línea en su «debe», le acusa de «ataques indiscriminados» y de «ataques dirigidos a civiles». Dicho de otra manera, Hamás es acusado de desplegar armamento no discriminador y también de desplegar ese armamento para lanzar ataques indiscriminados y dirigidos a civiles y objetos civiles. El artículo 51 de los Protocolos adicionales a las Convenciones de Ginebra prohíbe «los ataques indiscriminados». Define tales ataques (inter alia) como «aquellos no dirigidos a un objetivo militar específico», o «aquellos que emplean un método o medio de combate que no pueda ser dirigido a un objetivo militar específico». Así, ambas prohibiciones se subsumen bajo la única rúbrica «ataques indiscriminados»: si se usa un arma indiscriminatoria, o si se dispara indiscriminadamente un arma, ambas cosas constituyen el mismo crimen de guerra, un ataque indiscriminado[72]. Amnistía, sin embargo, lo divide en crímenes separados y distintos. Pide a Hamás que «termine con el uso de armas inherentemente indiscriminatorias, como los misiles no guiados, denuncia ataques dirigidos a civiles y ataques indiscriminados». El «valor» de cada proyectil de Hamás en el pliego de cargos de Amnistía, por lo tanto, se duplica: Hamás cometía un crimen de guerra cada vez que «usaba» un arma indiscriminatoria y también cada vez que lanzaba un «ataque» –ya fuera indiscriminado o apuntando a civiles– con un arma indiscriminatoria. Esta clara sutileza lingüística permitiría a Amnistía hinchar la acusación contra Hamás hasta los 14.000 crímenes de guerra (para quien quiera seguir contando), incluso si, recordemos, solamente murieron seis civiles israelíes y una única casa israelí fue derribada. Vamos a examinar con más detalle la acusación que hace Amnistía a Hamás por «apuntar» a zonas civiles. Se dice que, «en muchos casos», Hamás dirigía, o se dijo que dirigía sus proyectiles «hacia los objetos civiles y la población civil israelí». Si Amnistía había decidido que Hamás quebrantaba las leyes de la guerra desplegando

misiles que «no podían apuntar con precisión hacia objetivos específicos», es difícil encajar cómo Amnistía podía también acusar a Hamás de «apuntar» hacia comunidades civiles cuando los disparaba: ¿cómo se apunta con un arma que es «inherentemente» incapaz de apuntar? Si Hamás hubiera declarado públicamente su intención de apuntar a la comunidad civil, habría sido culpable de presumir, pero no de un ataque deliberado; era, según las pruebas de Amnistía, incapaz de lanzar un ataque deliberado. Aun así (se podría argumentar), ¿no serían los misiles de Hamás lo bastante precisos como para apuntar a una gran comunidad civil, aunque no a un objeto específico dentro de ella? Pero entonces sorprende la cantidad de misiles de Hamás que aterrizaron en las zonas vacías de Israel, alejadas de los núcleos urbanos. (De los 5.000 misiles que Hamás disparó hacia Israel, menos de 1.000 cayeron dentro del radio de Cúpula de Hierro, que se había desplegado en torno a los principales centros de población israelíes.) No resulta muy convincente suponer que Hamás apuntara al espacio vacío; si tantos misiles de Hamás aterrizaron en lugares desiertos es porque no podían dirigirse con precisión. Aún más, Amnistía acusaba a Hamás de apuntar deliberadamente a una comunidad civil israelí no solamente cuando esa era su intención declarada, sino también cuando su objetivo declarado era una propiedad militar localizada dentro o en las inmediaciones de la comunidad: «Estas declaraciones [de Hamás], la mayoría de las cuales especificaban el momento de cada ataque, la comunidad (o, en casos más raros, la base militar) que constituía el objetivo, y la munición utilizada, indican que estos ataques se dirigían a objetos o población civil» (cursivas añadidas). Sí, según Amnistía, una nota de prensa de Hamás servía como prueba de intenciones, nos sorprende cómo demostraba la intención de apuntar a civiles cuando manifiestamente negaba un intento así[73]. En uno de los casos, Hamás casi consigue apuntarse un triple, cuando Amnistía lo acusa de disparar morteros sobre un kibutz: el mortero era un «arma imprecisa» y era un «ataque directo sobre propiedad o población civil»; e «incluso aunque el ataque hubiera tenido como objetivo las tropas de las IDF o el material militar en las inmediaciones del kibutz […] el ataque aún habría sido indiscriminado». El apunte más extravagante del pliego de cargos de Amnistía, no obstante, le corresponde a un misil mal disparado que mató a 13 civiles gazatíes. A Hamás se le apuntan cuatro puntos por este: «Era un ataque indiscriminado usando un arma prohibida que podría haber sido lanzado desde un área residencial dentro de la Franja de Gaza y que podría haber tenido la intención de impactar sobre la

población civil israelí» (cursivas añadidas). No voy a agotar la paciencia del lector analizando las incongruencias de esta frase. Como muestra, «un ataque indiscriminado», ¿contra quién? En cualquier caso, por muchos multiplicadores que Amnistía aplicara a los crímenes de guerra de Hamás, la suma total aún palidecería ante el horror que infligió Israel.

No adoptar todas las precauciones viables. El derecho humanitario internacional obliga a las partes en un conflicto a adoptar «todas las precauciones viables», o precauciones «dentro de lo posible viables», para «proteger la propiedad y a la población civil bajo su control frente a los peligros que se derivan de las operaciones militares». La advertencia clave es, por supuesto, «viables». La inclusión de este calificativo en una ley vinculante «reflejaba la preocupación de los países pequeños y densamente poblados, a quienes les resultaría difícil separar la población y la propiedad civil de los objetivos militares»; estos países «enfatizaron el hecho» de que el principio de «evitar situar los objetivos militares dentro o en las inmediaciones de zonas densamente pobladas» era «difícil de aplicar». La cláusula se entiende habitualmente en el sentido de ordenar «tomar las precauciones que son practicables o posibles teniendo en cuenta todas las circunstancias que rigen ese momento, incluyendo las consideraciones humanitarias y militares»[74]. Por lo tanto, para poder acusar a Hamás con fundamento de violar la cláusula sobre las «precauciones», le concernía a Amnistía demostrar como poco una o dos cosas: (1) que en cada situación de combate específica Hamás tenía una alternativa viable, «teniendo en cuenta todas las circunstancias que rigen ese momento». Pero, como la propia Amnistía señalaba, «la negativa de Israel de conceder acceso a la Franja de Gaza […] ha dificultado más el documentar y verificar las violaciones específicas» por parte de Hamás. De hecho, sería difícil evaluar desde un lugar remoto si, «en las circunstancias que rigen cada momento», en cada supuesta infracción del principio de precaución, Hamás tenía otra opción; o (2) incluso si las «circunstancias» generales que «regían el momento» hubieran convertido en «difícil de aplicar» la cláusula de «precaución» –Gaza es uno de los «lugares más densamente poblados del planeta»[75]–, Hamás aún habría sometido a la población y la propiedad civil a un riesgo innecesario. ¿Cómo negocia Amnistía estos obstáculos probatorios? Afirma que «hay pruebas sustanciales de que

algunas de las operaciones militares y conductas» de Hamás «violaban sus obligaciones de adoptar todas las precauciones viables para evitar y minimizar el daño». Pero no aporta, sin embargo, dichas pruebas. En lugar de ello, simplemente rechaza la importante advertencia de la «viabilidad». Hay que recordar aquí que, incidente tras incidente, Amnistía buscó concienzudamente –a veces hasta un punto absurdo– una coartada que disculpara efectivamente a Israel de la acusación de apuntar a la población y la propiedad civil. En el caso de Hamás, no obstante, hizo precisamente lo contrario. En lugar de investigar si, en cada supuesta violación del principio de «precauciones», Hamás tenía una alternativa viable, Amnistía encontraba prima facie las pruebas de una violación del principio de «precauciones» todas y cada una de las veces que podía mostrarse (aunque fuera tenuemente) que Hamás estaba luchando en las proximidades de civiles (véase el cuadro 9)[76]. Pero una prueba así no demostraba nada por sí misma: luchar en las inmediaciones de civiles no es el criterio de ilegalidad que ha fijado el derecho internacional. En cada caso particular hay que decidir si había otras opciones «practicables o posibles» para resistir y cuáles eran las «circunstancias que regían ese momento». En su informe anterior sobre la Operación Plomo Fundido, Amnistía sí tomaba en cuenta esos factores y, como resultado, presentaba un cuadro matizado y auténticamente equilibrado[77]. Pero, a la hora de evaluar las tácticas militares de Hamás durante Margen Protector, Amnistía desechó su equipo quirúrgico y lo cambió por un martillo pilón.

Cuadro 9. Una selección de las pruebas de Amnistía Internacional de que Hamás no adoptó «todas las precauciones viables» para proteger a civiles

▪

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (O
Un corresponsal de France 24 estaba informando en directo desde una zona
Un misil lanzado [...] al otro cabo de la calle desde la que un equipo de fil
Un equipo de la NDTV, una cadena de televisión india, filmó a miembros d

▪

Sería la maravilla de las maravillas que Hamás no hubiera luchado la mayor parte del tiempo que se prolongó el Margen Protector en las inmediaciones de la población civil: estamos en Gaza, después de todo. Y, de hecho, Amnistía no era indiferente a este dilema, pero la solución que propone en Unlawful and Deadly es escandalosa: «Hay que señalar que incluso aunque la densidad general de población en la Franja de Gaza es muy alta, especialmente en Ciudad de Gaza y sus alrededores, hay importantes zonas dentro de los 365 kilómetros cuadrados del territorio que no son residenciales y llevar a cabo las hostilidades o lanzar desde allí la munición presenta un riesgo menor de poner en peligro a la población civil palestina». Al presentar esto como una alternativa «viable», Amnistía omitía el importante contexto fáctico y legal: «Las zonas abiertas son relativamente escasas» en Gaza[78]; «luchar en zonas urbana no constituye por sí solo una violación del derecho humanitario internacional»[79]; no se puede esperar que una de las partes del conflicto sitúe sus fuerzas armadas y sus instalaciones de tal manera que las haga conspicuas para beneficio del adversario[80]. Pero, incluso si no tomamos en cuenta estos factores que no son en absoluto triviales, la alternativa «viable» de Amnistía aún es ridícula. Por una parte, desde 2005 Israel había mantenido su ocupación en Gaza principalmente por control remoto. «La tecnología moderna ahora permite un control eficaz desde el exterior del territorio ocupado y esto es lo que ha establecido Israel», observaba el distinguido jurista internacional John Dugard:

Antes de la retirada física de Israel de Gaza en 2005, los actos de resistencia violenta palestina se dirigían a las fuerzas de ocupación israelí dentro del territorio. Esto fue durante la segunda intifada. Desde entonces, los militantes palestinos han tenido que llevar su resistencia a la ocupación y al asedio ilegal de Gaza dentro de Israel. La alternativa es no hacer nada, una vía que ningún pueblo ocupado a lo largo de la historia ha tomado. No es habitual que un pueblo ocupado lleve su resistencia fuera del territorio ocupado. Pero es también inhabitual que una potencia ocupante mantenga

una ocupación brutal desde fuera del territorio[81].

Por otra parte, Amnistía había declarado que casi todos los proyectiles del arsenal de Hamás eran ilegales. Se sigue de aquí que, si Israel establecía su control sobre Gaza desde lejos, y si los proyectiles de Hamás eran ilegales, entonces Hamás no podría «entablar hostilidades ni lanzar munición» para poner fin a la ocupación y a la vez aprobar el examen legal. El consejo de Amnistía venía a decir: para resistir la ocupación inhumana e ilegal de Israel[82], compuesta por su bloqueo ilegal e inhumano y puntuada periódicamente por las masacres a gran escala, los militantes de Hamás deberían haberse concentrado, en masa y desarmados, en campo abierto. Para facilitar y acelerar el asunto, ¿no deberían también alinearse, como los patos? Pero aún hay más. De la misma manera que aplicaba un multiplicador a los «ataques indiscriminados» de Hamás, también Amnistía inflaba verbalmente las violaciones de la cláusula de «precaución». Lo que empezó en Unlawful and Deadly como «algunos» casos «determinados» en los que Hamás había quebrantado esta cláusula, se transformó en «lejos de ser aislados», y «no […] infrecuentes» violaciones, hasta que, en la conclusión del informe, se acusaba a Hamás de violar «rutinariamente» la cláusula de «precaución» y de un «fracaso general» a la hora de atenerse a ella. Mientras tanto, es igualmente instructivo ver qué cosas eligió no remover Amnistía. «En Ashlelon, Sderot, Be’er Sheva y en otras ciudades del sur de Israel, así como en otros lugares del país, las bases militares y otras instalaciones se sitúan dentro o en las inmediaciones de las zonas residenciales, incluyendo kibutzs y aldeas», informa tranquilamente Amnistía. «Durante la Operación Margen Protector, había más posiciones y actividades militares de lo habitual cerca de las zonas civiles del sur de Israel y las fuerzas israelíes lanzaban diariamente ataques de artillería y de otros tipos desde esas zonas a lo largo del perímetro de Gaza». Pero, según la cláusula de «precauciones», «los gobiernos deberán esforzarse en buscar lugares alejados de las zonas densamente pobladas para situar» los objetivos militares, como bases militares; y, «en lo que se refiere a los objetivos móviles, deberán tener cuidado en especial durante el conflicto para evitar colocar tropas, material o transporte en las zonas densamente

pobladas»[83]. A Israel no le faltaban espacios vacíos; podía incluso elegir entre un pasmoso espectro de armas, que podían lanzarse prácticamente desde cualquier terreno, altitud y distancia. ¿Acaso Israel, entonces, no violaba flagrantemente la cláusula de «precauciones»? Se diría que no, al menos según Amnistía, que no emitía crítica ninguna.

La cuestión aquí no es si Hamás quebrantó el derecho internacional durante Margen Protector. Algunos combatientes probablemente buscaran la protección de los objetivos civiles, como casas o mezquitas, dentro de Gaza[84], aunque, si Israel ya había bombardeado 10.000 edificios civiles, habría quedado claro que no eran ninguna garantía. Por el contrario, Israel se habría relamido ante la idea de, por así decirlo, matar dos pájaros de un tiro: un combatiente de Hamás y una propiedad civil. La cuestión pertinente, no obstante, es si las violaciones de Hamás estaban remotamente en la misma escala que las violaciones de Israel. El subtexto de la presentación de Amnistía, que «equilibraba» cuidadosamente la muerte y la destrucción infligida, así como la culpabilidad criminal de ambos bandos, daba a entender que así era. Pero el paralelismo entre la patética lluvia de «petardos» dirigidos hacia Israel y la hecatombe que cayó sobre Gaza es materialmente ridículo y moralmente una farsa. La cuestión entonces pasa a ser: ¿cómo se las apañó Amnistía para demostrar lo indemostrable? Lo hizo actuando no como un árbitro neutral, sino como el abogado defensor de Israel. Presentó el mejor caso posible para Israel, ocultando pruebas fácticas que lo incriminaban, aduciendo pruebas especulativas que lo absolvían y aplicando un criterio legal laxo, que le concedía a Israel el beneficio de la duda cuando no se lo merecía. Presentó el peor caso posible para Hamás, ocultando pruebas fácticas, aduciendo pruebas especulativas que lo incriminaban y aplicando un criterio legal exagerado, que inflaba su culpabilidad legal y que no le dejaba otra opción militar, si quería mantenerse dentro de los límites de la ley, que quedarse quieto y dejarse matar. Si Amnistía presentaba este caso para un veredicto «equilibrado» era porque el caso estaba amañado de antemano.

* * *

Después de que el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU publicara su informe sobre la Operación Margen Protector[85], Amnistía Internacional publicó aún otro informe propio, «Black Friday»: Carnage in Rafah during 2014 Israel / Gaza Conflict. Su tardía publicación[86] impidió que tuviera ningún efecto en el importante informe de la ONU. Aun así, este quinto y último capítulo de Amnistía era inusitadamente ambicioso y, por esta razón únicamente, merece una atención detallada. «Black Friday» se centra en el recurso por parte de Israel a la violencia masiva contra la población civil de Rafah entre el 1 y el 4 de agosto de 2014. El ataque ocurrió después de que un oficial israelí, el teniente Hadar Goldin, fuera supuestamente capturado con vida por combatientes de Hamás. Junto con Forensic Architecture, un equipo de investigación de la Universidad de Londres, Amnistía empleó una miscelánea de tecnología punta para reconstruir, con unos efectos visuales sorprendentes, la secuencia de acontecimientos sobre el terreno. Este análisis, no obstante, se centrará únicamente en el texto escrito de Amnistía.

El formato de «Black Friday» se aleja del cuarteto anterior de informes sobre Margen Protector. (Para que conste, antes de la publicación de Black Friday, Amnistía ya había leído mi análisis sobre las publicaciones anteriores. No sabría decir si esta crítica influyó o no, y de qué manera, sobre la presentación por parte de Amnistía de este último informe)[87]. Amnistía ya no pretendía presentar un «equilibrio» engañoso. En la sección «Contexto» de este informe, la muerte y destrucción en Gaza durante Margen Protector ocupa cinco veces más espacio que la muerte y destrucción en Israel[88]. Un par de subtítulos incendiarios, Carnage in Rafah during 2014 Israel / Gaza Conflict y «Los asesinatos en masa de civiles por parte de Israel en Rafah durante el conflicto de Gaza de 2014» (en la página del índice), igualmente denotan un claro cambio de tono. Además, Black Friday reconoce reiteradamente las aportaciones de las principales asociaciones de defensa de los derechos humanos de Gaza, nombrando en especial, y de manera visible, al Palestinian Center for Human Rights y al Al Mezan Center for Human Rights[89]. No obstante, el núcleo de Black Friday comprende una presentación de los hechos y una valoración legal

de las violaciones del derecho internacional por parte de Israel, dentro del marco analítico y exculpatorio de los anteriores informes de Amnistía. Si esta vez el crimen duele más profundamente es por la densidad de los crímenes cometidos en Rafah. En cualquier caso, hay que señalar directamente que, aunque Amnistía transmitía la impresión –entre otras cosas, por la extraordinaria inversión que hizo para relatar lo que había ocurrido– de que el baño de sangre de Rafah marcaba una diferencia clara con el resto de la Operación Margen Protector, de hecho, como confirman los testimonios de Breaking the Silence, aunque la destrucción gratuita allí puede que haya sido cuantitativamente peor[90], no difería en lo esencial de lo que se había desatado en otras partes de Gaza[91].

El bombardeo israelí sobre Rafah comenzó después de un fuego cruzado en el que Hamás supuestamente capturó vivo al teniente Hadar Goldin. La cultura política de Israel no tolera que sus combatientes sean retenidos en cautividad, pero también rechaza los intercambios de presos, que invariablemente implica la liberación de muchos palestinos encerrados en las cárceles israelíes. Para reconciliar estos impulsos en conflicto, Israel creó una doctrina militar macabra, apodada la Directiva Aníbal, que permitía efectivamente el asesinato de sus propios combatientes si caían en manos enemigas y no podían ser rescatados, según el principio tácito de que «la muerte de los soldados capturados es preferible a que los atrapen con vida». No hay prácticamente dudas de que las IDF no querían rescatar a Goldin, sino matarlo: no lanzaron un ataque comando preciso, sino que convirtieron la zona en la que «creían que se localizaba el teniente Goldin» en un infierno[92]. Dicho sea de paso, es complicado sondear el ethos de una nación que se sume en un duelo profundo cuando uno de sus soldados es capturado, pero que prefiere que esté muerto antes que capturado con vida. En cualquier caso, cuando Goldin fue hecho prisionero por Hamás la mañana del 1 de agosto y no se pudo rastrear su localización, Israel desencadenó un ataque masivo sobre las zonas civiles más densamente pobladas de Rafah con la intención de matarlo. Incluso después de que las pruebas forenses dejaran claro que Goldin había muerto, el ataque mortífero continuó, aunque con una intensidad algo menor, como acto de venganza y para dar una lección. El asalto a Rafah se desarrolló en la casi completa ausencia de resistencia armada. «Apenas se informó de disparos de

respuesta», concluía Amnistía, «y las IDF no sufrieron bajas[93], a medida que los jets, drones, helicópteros y artillería descargaban fuego sobre los peatones y los vehículos en los cruces, impactando indiscriminadamente sobre coches, ambulancias, motos y peatones», mientras «los civiles que trataban de huir del infierno eran alcanzados por misiles y artillería»[94]. Más de 2.000 bombas (incluyendo bombas de dos toneladas), misiles y proyectiles de artillería se dispararon el primer día (1.000 proyectiles en las tres horas siguientes a la captura de Goldin). Cuando concluyó el ataque, el 4 de agosto, al menos habían sido asesinados 200 civiles y 2.600 casas habían quedado total o parcialmente destruidas. En el lúcido idioma de la ley, Israel había cometido un crimen contra la humanidad en Rafah, excepto que, mientras que el registro de los hechos que acabamos de resumir ha sido tomado directamente de Black Friday, la valoración legal de Amnistía iba en una dirección totalmente diferente. Acusaba a Israel de (1) ataques indiscriminados, es decir, de impactar de manera imprudente sobre población o propiedad civil mientras apuntaba a objetivos militares[95]; (2) ataques desproporcionados, es decir, causar excesivos daños colaterales a población o propiedad civil mientras se apuntaba a objetivos militares[96]; y (3) no adoptar todas las precauciones viables para minimizar el daño incidental a la población civil en el curso de las operaciones militares[97]. Solo en poquísimos momentos (y a regañadientes) Amnistía acusaba a Israel de apuntar a la población y la propiedad civil, incluso aunque sus propias pruebas testimoniaban que el asalto asesino a Rafah se desarrolló en una ausencia casi completa de un objetivo militar legítimo.

Pero (se podría argumentar), aunque Hamás hubiera «apenas» disparado en respuesta, la fase inicial del ataque a Rafah, eliminar a Goldin, constituía un objetivo militar legítimo. ¿No podría ese fin justificar una parte, aunque no la totalidad, de la potencia de fuego que descargó Israel? Para que un objetivo sea considerado legítimo, no obstante, su obtención debe conferir una ventaja militar concreta y directa[98]. Sería un uso lingüístico de lo más extraño convertir el asesinato calculado de su propio soldado en algo que le conferiría una ventaja militar. El Informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Margen Protector desechaba la idea de que «las consideraciones políticas abstractas y las estrategias a largo plazo»,

como un posible intercambio de prisioneros en el futuro, pudieran legítimamente contarse dentro de los cálculos de la ventaja militar; la ventaja, subrayaban, debe ser concreta y directa[99]. Se sigue de esto que el infierno que Israel creó en Rafah para asesinar a Goldin no puede entenderse legalmente dentro del ámbito de un ataque indiscriminado, de un ataque desproporcionado o de un fracaso a la hora de tomar todas las precauciones viables, puesto que todos estos supuestos implican la existencia de un objetivo militar legítimo. En la medida en que la población civil de los barrios densamente poblados de Rafah fue sometida a un bombardeo de saturación durante la fase de caza al hombre, y en la medida en la que este bombardeo se produjo con solamente unos disparos aislados como respuesta (que no eran ni siquiera objetivo del bombardeo), el principio legal aplicable era el ataque deliberado a población y propiedad civil. Aun así (podría argumentarse también), la intención de Israel era matar a Goldin, no infligir muerte y destrucción entre la población civil de Rafah. Pero, según la ley, «a quien actúa se le supone que ha buscado las consecuencias naturales y previsibles de sus actos»[100]. Las consecuencias naturales y previsibles de bombardear los barrios civiles de Rafah son la muerte masiva de civiles y la destrucción masiva de la propiedad civil. Incluso si la meta expresa de Israel era matar a Goldin, el bombardeo aún constituye, en términos legales, un ataque intencionado sobre población y propiedad civil. Categorizar la masacre de Rafah como un ataque desproporcionado, como un ataque indiscriminado o como un fracaso a la hora de adoptar todas las precauciones viables debido a las intenciones de Israel de matar a Goldin es equivalente a legitimar el objetivo por completo ilegítimo de lanzar un ataque armado contra una población civil para evitar un futuro intercambio de prisioneros. Es verdad que describir el infierno de Rafah como un ataque intencionado sobre la población civil, aunque legalmente sea correcto, no capta toda la realidad de la fase de caza al hombre. La formulación correcta, entonces, sería algo así: un ataque intencionado, dirigido sobre una población civil en pos de un objetivo militar ilegítimo. Si la formulación no es elegante es porque la realidad que trata de expresar es igualmente aberrante: no todos los días un Estado ejecuta una masacre para matar a su propio soldado con vistas a evitar un futuro intercambio de prisioneros.

Pero ¿qué más da cómo categorizara y describiera Amnistía la masacre de Rafah, si concluyó que Israel cometía crímenes de guerra?[101]. La respuesta es la siguiente. Destilada a su esencia, la Operación Margen Protector se diseñó –como el informe Goldstone expresaba en el contexto de la Operación Plomo Fundido (2008-2009)– para «castigar, humillar y aterrorizar» a la población civil. El resto de las atrocidades durante la Operación Margen Protector –Khuza'a Shuja'iya– claramente carecían de una justificación militar[102]. La masacre de Rafah parecía ser diferente, puesto que se ligaba expresamente a un objetivo militar. El hecho de que el informe más ambicioso de Amnistía se centrara en la intención israelí de matar a Goldin y en su resultado concomitante, la Directiva Aníbal, que desató la sangrienta caza al hombre, daba la impresión clara de que Margen Protector era una operación militar que se les había ido de las manos: errada, criminal, pero aún «comprensible» en términos militares. Pero, de hecho, ni siquiera la primera fase de la caza al hombre en la masacre de Rafah, si esta se concibe correctamente, puede entenderse como una operación militar. Incluso cuando se confirmó la muerte de Goldin (probablemente al final de la tercera hora del primer día)[103] «el ejército israelí continuó su ataque» a Rafah, no en búsqueda de un supuesto objetivo militar, sino para «enseñarles una lección», «saldar cuentas», y «extraer [sic] un precio» (Amnistía, citando a los soldados israelíes). Si, como sostienen los oficiales israelíes, «no hubo una respuesta seria en forma de disparos», especulaba Amnistía, más cautamente imposible, «surge la cuestión de si el uso de fuego masivo por parte del ejército no tenía de hecho la intención de "vengarse" de Rafah»[104]. En otras palabras, el ataque a Rafah aparece, después de la fase de caza al hombre, como una masacre pura y dura.

La «carnicería» premeditada en Rafah y «el asesinato en masa de civiles en Rafah» constituían, en todas sus partes (incluyendo la fase inicial de caza al hombre) y como totalidad, un crimen de guerra indiscutible, puesto que Israel apuntó a propiedad y población civil en ausencia de un objetivo militar legítimo (aparte de un fuego de respuesta desdeñable); y también un crimen contra la humanidad, pues lanzó «un ataque generalizado y sistemático contra una población civil» (Estatutos de Roma, artículo 7). Pero, en lugar de afirmar lo obvio, Amnistía eligió sistemáticamente ocultar la

esencia terrorista de la masacre de Rafah exprimiendo una tras otra las coartadas israelíes. Afirmaba que, después de que se confirmara oficialmente que Goldin había muerto, «el ejército israelí continuó la destrucción de invernaderos y hogares aparentemente como parte de la búsqueda del teniente Goldin o de sus restos»[105]. No aduce una sola prueba que apoye esta especulación, mientras que el propio informe documenta que Israel buscaba, mediante esta destrucción gratuita, vengarse y dar una lección. De hecho, ¿se habían olvidado de que estas tácticas de las IDF constituían el procedimiento habitual en Gaza a lo largo de la Operación Margen Protector, independientemente del destino de Goldin? Amnistía observaba a continuación que «el ejército no consiguió recuperar los restos mortales del teniente Goldin. El bombardeo masivo de las zonas de los túneles redujeron la posibilidad de encontrarlos»[106]. Pero si el «bombardeo masivo […] redujo la posibilidad de encontrar» los restos mortales de Goldin, entonces quizá el recuperar sus restos no era el objetivo del bombardeo, mientras que sí lo era la venganza. Lo que es más, Amnistía examinaba la directiva Aníbal, que subyacía bajo el ataque de cuatro días, bajo el epígrafe «CAMBIO EN LA PROPORCIONALIDAD»[107]. Pero, en la medida en la que matar a Goldin no era un objetivo militar legítimo, y que ni la «venganza» ni «el disuadir futuros intentos de captura» (frases de Amnistía) podían entenderse como objetivos militares legítimos, ¿qué posible relevancia tenía aquí el principio de proporcionalidad, que presupone un objetivo de ese tipo? Black Friday señalaba, además, en su sección «cambio en la proporcionalidad»:

Los informes posteriores al conflicto de los soldados y las declaraciones de los oficiales israelíes apuntan a que el alto número de bajas y la destrucción masiva no se veían como lamentables efectos colaterales, sino como «logros» o «cumplimientos» que mantendrían a Gaza «cinco años callada». Un soldado del Cuerpo de Inteligencia citaba a un oficial superior del ejército que decía: «2.000 muertos y 11.000 heridos, medio millón de refugiados, destrucción que durará décadas. Muchos miembros de Hamás y sus casas y familias dañadas. Esto se afirma como un logro para que nadie dude de que lo que hemos hecho durante este tiempo tenía un

sentido». Otro soldado israelí le contó a Breaking the Silence que la intención de los bombardeos era «disuadirlos, atemorizarlos, romperlos psicológicamente».

[…] Estas declaraciones indican una intención de generar daños materiales como método de disuasión.

Si la intención declarada del asalto a Rafah era lograr «un alto número de bajas y una destrucción masiva» para quebrar la voluntad de resistir de Gaza, no era entonces un ataque desproporcionado, sino, sin duda ninguna, un ataque terrorista sobre la población civil.

Black Friday reunía cinco casos en los que se asesinó a civiles durante los cuatro días de asalto a Rafah. El estudio de estos casos, lejos de arrojar luz sobre las conclusiones perversas de Amnistía, sorprende y horroriza por su recurso a una gimnasia legalista que evade y oculta lo obvio. Por tedioso que pueda parecer, para exponer la hipocresía de Amnistía hay que exponer cada caso por separado (véase el cuadro 10).

Cuadro 10. Casos estudiados por Amnistía

▪

Estudio	Descripción de Amnistía	Valoración legal de Amnistía	Comentario de Finkelste[in]
1a	El 1 de agosto, [illegible]	[illegible]	[illegible]
2c	El 1 de agosto, [illegible]	[illegible]	[illegible]
3d	El 1 de agosto, [illegible]	[illegible]	[illegible]
4e	El 1 de agosto, [illegible]	[illegible]	[illegible]
5f	El 1 de agosto, [illegible]	[illegible]	[illegible]
6g	Dos miembros [illegible]	[illegible]	[illegible]
7h	El 1 de agosto, [illegible]	[illegible]	[illegible]
8i	El 1 de agosto [illegible]	[illegible]	[illegible]
9j	El 1 de agosto, [illegible]	[illegible]	[illegible]
10k	El 1 de agosto, [illegible]	[illegible]	[illegible]

11m El 2 de agosto, un [illegible]
12n El 2 de agosto, un [illegible]
13o El 1 de agosto cay [illegible]
14p El 2 de agosto, se [illegible]
15q El 2 de agosto, un [illegible]

▪

a Amnesty International, «Black Friday», pp. 45-46 (familia Bin Hammad).

b Ibid., pp. 31-34.

c Ibid., pp. 46-47 (familia Lafi).

d Ibid., pp. 47-49 (familia Qishta).

e Ibid., pp. 48-49 (familia al-Saba).

f Ibid., pp. 49-50 (familia Abu Mohsen).

g Ibid., pp. 50-52 (familia Abu Duba).

h Ibid., pp. 52-53 (familia al-Gharib).

i Ibid., pp. 53-54 (familia Arafat).

j Ibid., pp. 54-56 (Hospital Abu Youssef al-Najjar); véanse también pp. 39-41.

k Ibid., pp. 56-58 (ambulancia Musabbeh, Eastern Rafah).

l Commentary on the Additional Protocols, Artículo 12.

m Amnesty International, «Black Friday», pp. 58-59 (familia Abdel-Wahhab).

n Ibid., pp. 59-60 (familia Abu Taha).

o Ibid., pp. 60-62 (familia Zoroub).

p Ibid., pp. 62-64 (familia Neireb, Ghoul, Manyarawi, Abu Ayta).

q Ibid., pp. 64-65 (familia Abu Suleiman).

La masacre israelí sobre Rafah constituye en sus partes y en su totalidad un ataque intencionado sobre una población civil para

lograr un objetivo dual: (1) matar a un soldado israelí prisionero para evitar un intercambio futuro de presos, lo que no constituye un objetivo militar legítimo; y (2) un «deseo de venganza, de darles una lección o de castigar a la población de Rafah por la captura del teniente Goldin» (Black Friday, conclusión), que, a fortiori, tampoco era un objetivo militar legítimo[108]. Aun así, Amnistía concluía que Israel apuntó directamente a propiedad y población civil solamente en dos de los quince casos que investigó[109]. En la conclusión general fáctica del informe, lo máximo que concedía Amnistía era que «en algunos casos hay señales de que [el ejército israelí] directamente disparó y mató a civiles, incluyendo algunos que estaban huyendo […] en algunos casos advirtieron a los civiles que se quedaran en sus casas, que estaban siendo bombardeadas»[110]. En los otros 13 incidentes, Amnistía ni informó de fuego de respuesta ni aportó pruebas creíbles de un objetivo militar legítimo. En lugar de ello, conjuró escenarios muy especulativos que le permitían invocar principios legales –la distinción (entre civiles y combatientes), la proporcionalidad, las precauciones–, presuponiendo un objetivo militar o invocando principios legales que presuponían un objetivo militar, sin ni siquiera molestarse en especular sobre el objetivo en cuestión. Podría argumentarse que Amnistía daba pábulo a tantas premisas israelíes o a premisas favorables a Israel con la idea de mostrar que, incluso si se aceptaran dichas premisas, Israel aún sería legalmente culpable. Pero el resultado de esta estrategia preventiva (si es que es una estrategia preventiva) era que difundía una representación errónea de lo que había ocurrido y libraba a Israel de las acusaciones más graves. Las horribles y desgarradoras historias que se compilan en los casos que estudió Amnistía no dejan apenas duda de que, lejos de ser una operación militar, el infierno que Israel desató en Rafah era un ataque terrorista contra personas indefensas. Y, aun así, en la conclusión legal general del informe, lo máximo que admite Amnistía es que «algunas de las violaciones cometidas por el ejército israelí en Rafah […] pueden haberse ejecutado como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil […] como fomento de una política de Estado; podrían también constituir un crimen contra la humanidad»[111]. No obstante, las pruebas recogidas en Black Friday apuntan ineluctablemente a la conclusión de que no solamente en «algunos» casos «podrían» ser un crimen contra la humanidad, sino que lo era el conjunto de este

ataque mortífero. Aunque invirtió unos recursos considerables en Black Friday, Amnistía, en último término, y para su vergüenza eterna, reculó de sus propios hallazgos fácticos y entregó una disculpa legal.

* * *

No se puede poner en duda que los informes de Amnistía Internacional sobre la Operación Margen Protector carecían de objetividad y profesionalismo. Dejaban traslucir un sesgo sistemático contra Hamás y a favor de Israel. También registraban una clarísima regresión desde los minuciosos criterios que Amnistía fijó en los informes que cubrían las dos últimas décadas del conflicto israelí palestino. Amnistía podría estar tentada de responder: si un reconocido partidario de los derechos humanos palestinos (como yo) critica su sesgo pro Israel, mientras que Israel critica su sesgo pro palestino, es que algo estamos haciendo bien. Pero, por decirlo de alguna manera, si a uno le atacan por un lado quienes piensan que la tierra es plana y por el otro quienes piensan que es redonda, eso no demuestra que quienes digan que la tierra es oblonga dicen la verdad. El único criterio válido es el que muestran los hechos mismos; el supuesto sesgo de quien transmite esos hechos está fuera de la cuestión. Juzgando por este criterio y por las pruebas reunidas en este capítulo sobre su negligencia, se le presionó a Amnistía para que defendiera su labor posterior a Margen Protector. Cuando aceptó el desafío, lo que más nos sorprendió fue la debilidad de su respuesta[112].

Hay otra cuestión, aparte pero también importante: «¿Qué ocurrió?». A falta de una pistola humeante, solo podemos especular sobre las causas del repentino cambio de rumbo de Amnistía. Probablemente se entienda mejor si se sitúa en un contexto político más amplio. En los últimos años, Israel ha estado perdiendo, lenta pero regularmente, la batalla por la opinión pública en Occidente[113]. La postura firme y proactiva de las organizaciones fiables de defensa de los derechos humanos a la hora de exponer las violaciones que cometía Israel respecto a los derechos humanos de

los palestinos ha desempeñado un papel catalítico en este desplazamiento histórico. Su momento más álgido ocurrió después de la Operación Plomo Fundido, cuando una serie de informes de derechos humanos documentó con meticulosidad los crímenes israelíes durante el ataque, y parecía que, finalmente, Israel iba a responder ante la justicia por sus crímenes. Frente a esta amenaza grave y palpable, Israel y su poderoso lobby internacional se dedicaron a revertir la marea combatiendo en lo que se llamó «el frente legal» –es decir, «el aislamiento a Israel mediante el lenguaje de los derechos humanos»[114]–. Se montó una campaña implacable y furiosa, repleta de calumnias, difamaciones y tácticas matonas, que apuntaba a los críticos con el historial de derechos humanos de Israel. La víctima más famosa de esta fuerza de la naturaleza fue Richard Goldstone: un juez judío y sionista con unas credenciales profesionales implacables fue obligado a entonar un público y humillante mea culpa que perjudicó su carrera y mancilló para siempre su reputación[115]. El destino de Goldstone sirvió de advertencia para la comunidad de defensa de los derechos humanos; ninguno de los críticos de Israel estaba fuera de su alcance, ninguno estaba a salvo de la venganza. En rápida sucesión, los respetados juristas Christian Tomuschat[116] y William Schabas[117] fueron devorados por las fauces israelíes. Si quedaba alguna duda después de la caída en desgracia de Goldstone, ahora estaba ya escrito sobre piedra: si tú (o alguien cercano a ti) tienes algún esqueleto en el armario, lo más prudente es no meterte demasiado con Israel, o, mejor aún, tachar a Israel de tu agenda. Sin duda otros factores contribuyeron. Los informes sobre derechos humanos en la Operación Plomo Fundido iban muriendo de una muerte lenta a manos de la burocracia de la ONU, mientras que Estados Unidos, Israel y la Autoridad Palestina se confabulaban para asesinarlos[118]. No tiene sentido publicar más informes sobre derechos humanos si su destino va a ser el olvido, incluso por las propias víctimas o, en cualquier caso, por sus representantes legales. Para cuando Israel lanzó la Operación Margen Protector, la opinión pública estaba inmunizada contra las masacres periódicas de Israel. Documentar minuciosamente la carnicería parecía menos urgente, puesto que cada vez menos gente albergaba dudas de que Israel fuera capaz de tales brutalidades. Mientras tanto, a medida que la Primavera Árabe se metamorfoseaba en el Invierno Árabe, la consiguiente rebelión en la región y la posterior catástrofe para los

derechos humanos empequeñecieron y marginaron la cuestión palestina. Pero el factor intimidante fue, sin duda, el decisivo en el giro de Amnistía. De hecho, los grupos lobbistas israelíes, como NGO Monitor, habían apuntado claramente hacia Amnistía[119]. Además de los informes defectuosos sobre Margen Protector, una votación sobre el antisemitismo en la rama británica de Amnistía era prueba del clima que se vivía. Todas las pruebas disponibles apuntan a la conclusión de que el antisemitismo era un fenómeno muy marginal en la vida británica. Según los resultados de una encuesta, mucho menos del 10 por 100 de la población tenía opiniones negativas sobre los judíos, mientras que el 60 por 100 tenía opiniones negativas sobre los romaníes / gitanos y un 40 por 100 una opinión negativa de los musulmanes[120]. El claro propósito de las campañas periódicas que se lamentaban de un «nuevo antisemitismo» ha sido ahogar las críticas hacia el atroz historial de Israel en términos de derechos humanos[121]. Pero en 2015 la Junta británica de Amnistía firmó, aunque sus miembros la tumbaron por un margen muy estrecho (468 a 461), una resolución pidiendo una campaña de Amnistía UK contra el resurgir del antisemitismo[122].

Si Amnistía había capitulado ante el chantaje político, su viraje también reflejaba que, por primera vez, tuvo que apañárselas sola en la jungla de la política Israel / Palestina. Hasta Margen Protector, Amnistía y Human Right Watch (HRW) solían publicar informes complementarios, o corroborarse en su postura sobre los temas potencialmente explosivos. Cada uno contaba con el respaldo del otro; podían contar mutuamente con su apoyo político. Ambas organizaciones publicaron informes que documentaban la práctica generalizada de la tortura por parte de Israel durante la primera intifada; ambas publicaron declaraciones apoyando el derecho de los refugiados palestinos a regresar a sus hogares en Israel; ambas documentaron los crímenes de guerra israelíes durante la Operación Defensive Shield (2002); ambas publicaron informes condenatorios sobre Plomo Fundido[123]. Pero HRW prácticamente se hizo a un lado después de Margen Protector. Desapareció en combate. Si Amnistía no hubiera publicado cinco informes sobre Margen Protector, este capítulo no podría haber documentado sus múltiples transgresiones. Si este capítulo guarda silencio sobre HRW es porque HRW guardó silencio sobre Margen Protector[124]. Queda

para los moralistas decidir qué fue peor, si el pecado cometido por Amnistía o el pecado por omisión de HRW.

Sería difícil exagerar el daño que ha producido el giro de Amnistía. Los defensores de los derechos humanos palestinos y de una paz justa y duradera habían llegado a depender de Amnistía como un correctivo creíble a la hasbara israelí y a los medios con un sesgo proisraelí. La abdicación de su deber profesional no podía sino descorazonar y desalentar. El peor pecado de Amnistía, no obstante, era más profundo: el abandono de un pueblo olvidado, que sufría un bloqueo ilegal e inhumano puntuado por masacres recurrentes cada vez más brutales; su invitación abierta a Israel para cometer nuevas y peores masacres, en el conocimiento cierto de que las organizaciones de defensa de los derechos humanos habían sido amedrentadas. Aunque solo sea por el bien de la población de Gaza, esperamos que Amnistía (así como HRW) recupere su rumbo.

Una vez que Israel logró intimidar y someter a la comunidad internacional de defensa de los derechos humanos, el único flanco débil eran las organizaciones locales de defensa de los derechos humanos. De estas, Breaking the Silence fue quien despertó más la ira de Israel[125]. Los testimonios oculares de los soldados que había compilado después de cada una de las masacres de Gaza eran tan impecables como devastadores. Por lo tanto, Israel se embarcó en una campaña pública para destrozar a Breaking the Silence[126]. En Estados Unidos, la campaña de difamación fue encabezada por el antiguo catedrático de Derecho de Harvard Alan Dershowitz, que acusaba al grupo de «producir un tremendo daño a Israel, porque no están contando la verdad»[127]. Si hubiera conseguido neutralizar a Breaking the Silence, Israel se habría librado del último obstáculo en su camino para cometer masacres futuras en Gaza. Ya no quedaría nadie para documentar convincentemente sus crímenes para un público occidental. Por muy reconocidas y fiables que sean las organizaciones palestinas de defensa de los derechos humanos, desgraciada e injustamente, carecían de credibilidad entre el público en general en Occidente. En las «operaciones» futuras, Israel sería capaz de llevarlas a cabo como ella quisiera, envalentonada con la conciencia de que podría hacerlo con una impunidad garantizada. Es una nueva secuencia de catástrofes la que nos acecha.

No fueron únicamente las organizaciones de defensa de los derechos humanos reputadas las que fallaron a Gaza. Las declaraciones que publicó UNICEF durante Margen Protector equilibraban muchísimo el impacto de la operación sobre los niños y niñas gazatíes e israelíes: «La escala de violencia en Gaza e Israel amenaza un daño devastador para los niños y las niñas de ambos bandos»; «Los niños y las niñas se llevan la peor parte del empeoramiento de la violencia en Gaza e Israel»; «La violencia en Gaza reclama vidas aún más jóvenes y [...] los estragos en los niños y niñas de ambos bandos se ahondan»; «Otra escuela en Gaza ha sido atacada [...]. Los niños de Israel han vivido bajo la amenaza de los ataques indiscriminados»; «Las muertes de los niños de ambos bandos constituyen una evidencia trágica más del terrible impacto que el conflicto está teniendo sobre los niños y sus familias de ambos bandos»[128]. Entonces, a pesar de las peticiones de Save the Children, War Child e incluso UNICEF, así como de una docena de organizaciones palestinas de defensa de los derechos humanos y de B'Tselem, Israel fue tachada de una lista de la ONU de 2015 de graves violadores de los derechos de los niños, después de que los funcionarios superiores de la ONU «se doblaran ante las presiones políticas» de Israel[129]. Una a una, una falange de instituciones humanitarias se derritieron como mantequilla después de Margen Protector, a medida que Israel intensificaba el asedio. En medio de Margen Protector, la venerable revista médica británica The Lancet había publicado una «carta abierta» firmada por una serie de profesionales médicos que lamentaban la «agresión» y la «masacre» de Gaza. La carta provocó una tormenta de protestas, acusaciones y refutaciones que se desató en las páginas de la revista durante los siguientes cuatro meses. Aunque aún tenía que soportar una riada de acusaciones ad hominen, el editor jefe, Richard Horton, inicialmente se mantuvo firme mientras la revista publicaba un editorial que describía Gaza como una «cárcel», catalogando el ataque de Israel como una carnicería y defendiendo la decisión de publicar la carta. Pero a medida que la vasta red de apparachiks de Israel aumentaba la campaña difamatoria y amenazaba con un boicot, Horton sucumbió. Lo que vino después fue un eco extraño de la caída en el camino a Damasco de Pablo, combinado con la Revolución Cultural de Mao. En un ritual de autohumillación a lo Goldstone, Horton se embarcó en un viaje a Israel que fue «un punto de inflexión para mí», una «experiencia reveladora». Llegó a

la conclusión de que había sido mal informado –la realidad israelí que ahora experimentaba era «un modelo inspirador de convivencia entre árabes y judíos […] una visión para un futuro pacífico y productivo entre los pueblos»– y después entregó una autocrítica pública en la que prometía, entre otras cosas, que él nunca «volvería a publicar una carta así». Aparentemente, no pronunció una sola palabra de crítica a Israel durante su estancia, o después de esta. Pero sí encontró tiempo adicional para asistir a una conferencia y conversar en persona con el filósofo israelí Asa Kasher, quien había redactado el código de ética militar de Israel y a quien anteriormente «le había impresionado profundamente el valor de los soldados israelíes en la operación Plomo Fundido». Horton pasó a expresar un «inmenso respeto» por el «punto de vista» de que los combatientes israelíes «asumieron precauciones extremas para evitar las bajas civiles y […] que con ese fin se pusieron a sí mismos en peligro» durante las últimas operaciones de Israel. Y siguió reflexionando: «En esa situación, ¿cómo me habría comportado yo? Es muy fácil criticar desde un sofá de Londres, y mucho más difícil vivir de acuerdo con tus ideas cuando estás en una zona de combate». ¿No es esa la defensa de todo criminal de guerra? Es difícil decidir si este ejemplo humillante de pusilanimidad desagrada más por su banalidad o por su cursilería[130]. Poco tiempo después, Jacques de Maio, el representante en Israel y en los territorios ocupados palestinos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), pronunció un discurso en Jerusalén sobre derecho humanitario. En él no solamente no criticaba la Operación Margen Protector, sino que elogió a Israel: «El acceso humanitario en Israel y los TO [territorios ocupados] es, en un sentido comparativo, destacadamente bueno. De hecho, no se me ocurre otro contexto en el que opere el CICR […] en el que el acceso para las organizaciones humanitarias sea tan bueno como aquí». De Maio cantaba este servil elogio a su anfitrión, aunque Israel bloqueaba repetidamente el acceso a las organizaciones humanitarias, entre ellas a la Cruz Roja, e incluso había disparado sin piedad a los primeros en acudir a las misiones de rescate; así como hasta la propia Cruz Roja había «condenado firmemente esta alarmante serie de ataques contra los trabajadores humanitarios, ambulancias y hospitales» durante la última operación israelí[131]. No sería la última vez que De Maio tocaba fondo en la depravación moral blanqueando los crímenes de Israel.

Mientras tanto, el exfiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno-Ocampo, se ha reinventado en los últimos años como el principal asesor de Israel. En su labor pro Israel amontonó elogios en este sentido para el «imperio de la ley», afirmó que el estatus legal de los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados era una cuestión «completamente nueva» y abierta (incluso aunque los 15 jueces del Tribunal Penal Internacional unánimemente los habían declarado ilegales hace ya más de una década)[132] y adujo que, en el aspecto legal, Margen Protector era «enormemente complicada»[133]. No queda claro exactamente dónde radicaba la complicación: ¿era porque Israel había lanzado más de 100 bombas de una tonelada sobre Shuja'iya, o porque había disparado indiscriminadamente 20.000 proyectiles de artillería HE en zonas densamente pobladas? ¿Era porque Israel había apuntado a ambulancias claramente marcadas, o porque había apuntado a refugios civiles marcados incluso después de prometer explícitamente que no lo haría? El público israelí sin duda disfrutó las palabras dulces de Moreno-Ocampo, mientras que el lector informado no puede sino reaccionar con repulsión antes estos actos gratuitos de prostitución criminal[134].

The Lancet, la Cruz Roja, el Tribunal Penal Internacional…: la rendición era tan generalizada como patética. En aún otro espectáculo abyecto de negligencia profesional, incluso el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU traicionó a Gaza después de Margen Protector.

ADENDA

Se le envió a Amnistía Internacional la crítica que hace este capítulo sobre Black Friday para que la comentara. Esta adenda incluye una versión ligeramente editada de la respuesta de Amnistía (que se reproduce con su consentimiento expreso) y de la réplica del autor.

Respuesta a la crítica realizada por Norman G. Finkelstein sobre el Informe Black Friday de Amnistía Internacional[135]

Consideramos que su crítica falsea nuestro trabajo sobre el conflicto Gaza / Israel de 2014 y nuestro análisis legal; no toma en cuenta nuestros esfuerzos a favor de que se haga justicia para las víctimas de los crímenes cometidos durante el conflicto y no examina el cuerpo de pruebas que hemos puesto a disposición pública a partir de nuestra investigación conjunta con Forensic Architecture. Aunque agradecemos la interacción real con nuestro trabajo, incluyendo las críticas, rechazamos por completo la conclusión de que nuestro Black Friday constituye un «blanqueo».

Amnistía Internacional, junto con Forensic Architecture, eligió centrar su investigación en el ataque de Israel sobre Rafah entre el 1 y el 4 de agosto de 2014 por una serie de razones. Estas incluyen: la capacidad de los trabajadores sobre el terreno en la Franja de Gaza contratados por Amnistía Internacional para obtener testimonios oculares y otra información relevante; la cantidad de material fotográfico y audiovisual que se colgó en los medios de comunicación y en las redes sociales en tiempo real, que permitió que los analistas pudieran reconstruir los ataques específicos y localizarlos en el tiempo y en el espacio; la disponibilidad de imágenes de alta resolución de Rafah procedentes de los satélites, incluyendo desde las 11:39 a. m. del 1 de agosto de 2014, cuando se lanzaron algunos de los ataques más fuertes; y el hecho de que se hubiera invocado la directiva Aníbal. Esta combinación de factores llevó a Amnistía Internacional y a Forensic Architecture a concluir que –a pesar de que Israel seguía negando sistemáticamente el acceso a la Franja de Gaza a los investigadores de Amnistía Internacional durante y después de la guerra de 2014– se podían obtener pruebas sólidas de que las fuerzas israelíes cometieron crímenes durante el asalto a Rafah. Las violaciones por parte de Israel del Derecho Humanitario Internacional (DHI) y los crímenes cometidos durante la Operación Margen Protector sin duda no se limitaban a Rafah; Amnistía Internacional no ha querido decir que así fuera, ni en Black Friday ni en ninguna de las otras publicaciones sobre la guerra de 2014, y la organización ha documentado ataques israelíes en muchas zonas de la Franja de Gaza que considera que deben ser investigados como posibles crímenes de guerra. En especial, el uso masivo por parte de Israel de

artillería y otra potencia de fuego en las zonas residenciales, como Shuja'iya y Khuza'a, tiene un gran parecido con el asalto a Rafah.

Amnistía Internacional emplea el derecho internacional como marco para presionar a los actores estatales y no estatales de todo el mundo a defender los derechos humanos y a proteger a los civiles, incluso en situaciones de conflicto armado, y para presionar por la justicia, la verdad y la reparación cuando los derechos se violan y se cometen crímenes. Como parte de ese trabajo, recolectamos rigurosamente pruebas de violaciones y, basándonos en nuestros hallazgos, analizamos lo ocurrido a la luz de los criterios internacionales relevantes (principalmente, pero no de manera exclusiva, en el DHI en situaciones de conflicto bélico). Usamos nuestros hallazgos y análisis legales para hacer campaña pública y para hacer recomendaciones a los gobiernos, organismos internacionales y otros, en un intento de detener las violaciones futuras y garantizar reparación para aquellas ya cometidas. También colaboramos con mecanismos de investigación y organismos judiciales nacionales e internacionales cuando lo vemos apropiado. Nuestro análisis legal no es, por lo tanto, ni una acusación ni un juicio; en lugar de ello, se presenta a la luz de la información que hemos recogido y para apoyar las recomendaciones que hacemos a los gobiernos, organismos internacionales y otros. Al llevar a cabo nuestro análisis legal sobre casos específicos, especialmente aquellos que pueden revelar crímenes según el derecho internacional, tenemos en mente los criterios probatorios y el peso de la prueba que sería necesario para presentar un argumento ante un tribunal competente, que son criterios mucho más severos que los que se emplean para defender un argumento concreto en un artículo periodístico o académico.

También tenemos en mente el hecho de que, incluso en casos en los que se han cometido crímenes según el derecho internacional, todo procesado por cometer u ordenar dichos crímenes tiene derecho a un juicio justo, incluyendo la presunción de inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad en los cargos concretos. Suponer que un ataque concreto fuera premeditado, o que toda una operación militar en su conjunto, como la Operación Margen Protector de Israel, estuviera «diseñada [...] para "castigar, humillar y aterrorizar" a una población civil», no es una opción para los jueces

o los jurados en los tribunales que se adhieren a los criterios internacionales.

Nuestra jurisdicción es recolectar rigurosamente, valorar y dar a conocer información que documente violaciones y hacer campaña por la justicia y la reparación para las víctimas y sus familias, todas ellas tareas que emprendimos durante y después de la guerra entre Israel y Gaza de 2014. Nuestros resultados han sido recogidos ampliamente por los medios de comunicación, lo que ha hecho que la justicia para las víctimas siguiera figurando en la agenda pública, y han sido tenidos en cuenta por gobiernos y organismos judiciales, incluyendo la Oficina del fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI) que ahora está llevando a cabo una investigación preliminar sobre Palestina. Nuestros esfuerzos para terminar con la impunidad de quienes sean responsables de crímenes de guerra y otras violaciones del DHI en Israel y en los territorios ocupados palestinos (TOP), incluyendo, pero no limitándonos, a aquellos cometidos durante la guerra Israel / Gaza de 2014, continuarán. Dentro de nuestros recursos limitados y de otras limitaciones, hacemos todo lo que está en nuestras manos para llevar a cabo este trabajo de una manera que sea estratégica y que contribuirá a lograr un cambio auténtico y duradero en los derechos humanos. Esto, más que la crítica de nuestra labor en Israel y en los TOP desde varios puntos de vista, es lo que nos guía.

En situaciones de conflicto bélico, donde una fuerza militar posee y emplea armamento sofisticado, parte del análisis fáctico y legal que Amnistía Internacional debe llevar a cabo es, desde luego, tratar de entender y evaluar las premisas que han empleado los estrategas militares y los políticos, lo que no es lo mismo que disculparlas. En otras palabras, tenemos que sopesar si hubo, o si pudo haber habido, un objetivo militar auténtico por cada ataque israelí analizado, incluso cuando el ataque ocurrió en un contexto como el ataque a Rafah entre el 1 y el 4 de agosto de 2014, en el que la dimensión y los estragos de los ataques israelíes no pueden justificarse por el objetivo de evitar la captura de un soldado israelí.

Los objetivos militares podrían incluir a combatientes palestinos y blancos militares, como instalaciones o estructuras empleadas con fines militares, o almacenes de armas y munición. Otros objetos,

que no son necesariamente militares por naturaleza, incluyendo túneles y casas civiles u otros edificios, podrían constituir un objetivo militar cuando se empleen en el momento de los ataques para contribuir de manera efectiva a la acción militar y si su destrucción o captura ofrece una clara ventaja militar en las circunstancias que rigen ese momento. Las autoridades israelíes no liberaron suficiente información sobre los objetivos y blancos específicos como para permitir una valoración total de su legalidad –un hecho que hemos criticado siempre–. No obstante, en el contexto de las hostilidades en Rafah entre el 1 y el 4 de agosto de 2014, y de manera más general durante la guerra entre Israel y Gaza de 2014, no podemos asumir necesariamente que no hubiera un blanco militar legítimo por cada ataque específico israelí únicamente porque no hemos descubierto información que apunte a ello. Puesto que el ejército israelí empleó municiones dirigidas, como misiles guiados por drones durante el ataque a Rafah (además, evidentemente, del uso de cantidades masivas de artillería y otras armas aéreas), y puesto que había combatientes palestinos e instalaciones militares en alguna parte de Rafah durante las hostilidades, tenemos que albergar la posibilidad de que cada ataque israelí tuviera un blanco militar legítimo. Lo máximo que podemos decir es que, después de diversos tipos de investigaciones, no hemos sido capaces de descubrir un blanco militar legítimo para un ataque concreto; esto no quiere decir que creamos necesariamente que lo haya. Es incluso más complicado determinar la intención de un ataque concreto basado en la información disponible, puesto que incluso cuando se usa armamento dirigido, el DHI permite la posibilidad de que un «jefe razonable», que haya basado su decisión en la información de la que disponía en ese momento, cometa un error. Básicamente, tenemos que analizar cada caso y presentar nuestras conclusiones de una manera deliberadamente cauta y considerada, lo que a menudo significa afirmar lo mínimo que se podría concluir sobre un caso, más que lo máximo. En lo que se refiere a los casos incluidos en el informe Black Friday, creemos que de hecho hemos construido un argumento potente que afirma que, incluso cuando se consideran desde el punto de vista del «jefe razonable», estos casos deberían investigarse de manera independiente como crímenes de guerra y que determinados individuos deberían ser procesados por ellos. En otras palabras, la estrategia es de hecho similar a la que usted

supone cuando afirma: «Amnistía asume tantas de las premisas de Israel, o de las premisas favorables a Israel, para así mostrar que, incluso si se tuvieran que aceptar dichas premisas, Israel aún sería legalmente culpable» (cursivas en el original). Creemos que esta estrategia es la correcta y la que hay que emplear si queremos acercarnos al fin de que el personal militar o político israelí sea procesado por su responsabilidad en los crímenes de guerra.

Por lo tanto, rechazamos su crítica, que considera que esta estrategia «acaba falseando lo que ocurrió y libera a Israel de las acusaciones más graves».

Legalmente no existe una jerarquía entre los diferentes tipos de crímenes de guerra o entre los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad; todos se consideran «los crímenes más graves en lo que concierne a la comunidad internacional en su conjunto, [que] no deben quedar sin castigo». Cuando existen suficientes pruebas admisibles, a todos los estados se les permite –y a veces se les obliga– llevar ante la justicia a cualquier persona responsable de cometer u ordenar estos crímenes, con independencia de qué categoría de crimen de guerra cometiera o si era un acto cometido como parte de un crimen contra la humanidad. Los crímenes contra la humanidad se definen en el Artículo 7 del Estatuto de Roma del TPI e incluyen actos como el asesinato cuando se cometen «como parte de un ataque generalizado o sistemático contra cualquier población civil, con conocimiento del ataque».

En términos de crímenes de guerra, legalmente hablando, lanzar intencionadamente un ataque con el conocimiento de que el ataque va a causar bajas civiles o un daño a propiedad civil que claramente sería excesivo en relación con la ventaja militar concreta y directa que se espera (es decir, un ataque desproporcionado) es tan criminal como lanzar intencionadamente un ataque directo sobre propiedad o población civil, o un ataque que impacte sobre objetivos militares y población o propiedad civil sin distinción, o que trate como un único objetivo militar un número de objetivos militares diferentes localizados en una ciudad o pueblo civil. Todo esto está prohibido por el DHI y constituye crímenes de guerra.

En los casos en los que Amnistía Internacional fue incapaz de precisar si un ataque en el que civiles resultaron muertos o heridos

se dirigía a un objetivo militar, afirmamos, dependiendo de las circunstancias particulares, que ese ataque en concreto era desproporcionado o, en su caso, indiscriminado, si es que no era un ataque directo sobre la propiedad o población civil. Es simplemente incorrecto aducir que la organización buscaba de alguna manera minimizar los crímenes israelíes o ignorar el hecho de que el ataque se cometió como parte de un asalto militar de cuatro días aparentemente motivado por un deseo de vengarse o castigar a la población civil de Rafah.

Parece confundir nuestro análisis de los ataques específicos dentro del ataque israelí a Rafah con nuestro análisis del ataque israelí en su conjunto. No estamos «categorizando la masacre de Rafah como un ataque desproporcionado, un ataque indiscriminado o un fracaso a la hora de adoptar todas las precauciones viables debido al intento de Israel de matar a Goldin»; como hemos descrito antes, cada ataque debe analizarse de manera individual, y después se pueden sacar conclusiones sobre el asalto de cuatro días en el que tuvieron lugar los ataques. No obstante, no estamos para nada de acuerdo en que nuestros análisis «equivalgan a legitimar el objetivo totalmente ilegítimo de lanzar un ataque armado para evitar un intercambio futuro de prisioneros». Ni tampoco usar expresiones como «variación en la proporcionalidad», para referirnos a la lógica de la Directiva Aníbal y a la lógica del ejército militar a la hora de implantarla, implica que de algún modo estemos a favor de esa lógica. En nuestro informe examinamos lo que sabemos sobre la Directiva Aníbal (puesto que la directiva en sí es confidencial) y sobre la manera en la que se aplicó en Rafah entre los días 1 y 4 de agosto de 2014; de ninguna manera apoyamos ni la directiva ni la manera en la que se aplicó. Argumentar eso sería malinterpretar nuestro informe.

Réplica a la respuesta de Amnistía

El punto crucial de la discusión con Amnistía Internacional en este capítulo se reduce a una única pregunta: ¿fue la población civil de

Gaza el objetivo principal de Israel durante la Operación Margen Protector, o eran objetivos militares legítimos? Mientras que las pruebas fácticas de Amnistía afirman coherentemente lo primero, su análisis legal de estas pruebas coherentemente supone lo segundo. En otras palabras, su análisis legal repetidamente contradice sus propios hallazgos probatorios y absuelve efectivamente a Israel de las acusaciones más explosivas que se le adjudican.

Los múltiples informes de Amnistía sobre Margen Protector analizaban el ataque en tres niveles separados: los incidentes individuales (por ejemplo, una sola casa), los ataques principales (por ejemplo, Rafah) y la operación en su conjunto. En cada uno de esos niveles, el análisis legal de Amnistía alcanzaba una conclusión similar: Israel podría haber cometido crímenes de guerra mientras perseguía objetivos militares legítimos, pero casi nunca apuntó intencionadamente a los civiles. Por ejemplo, en Families under the Rubble, que analizaba los hogares gazatíes objeto de ataques israelíes que tuvieron como resultado muertes civiles en gran número, Amnistía adivinaba un posible objetivo militar israelí en todos y cada uno de los ataques. En Black Friday, que investigaba el asalto de Israel sobre Rafah, en el que su uso «demente» y «loco» de potencia de fuego alcanzó su cénit, Amnistía aún adivinaba un posible objetivo militar en los quince incidentes individuales que analizó, con la excepción de dos de ellos. «Black Friday», por lo tanto, concluía que Israel «podría» haber apuntado a civiles y cometido crímenes contra la humanidad como mucho en «algunos» casos. Pero las pruebas que había reunido Amnistía en Black Friday apuntaban indefectiblemente a una conclusión muy diferente. En los niveles micro y macro, el asalto sobre Rafah fue un ataque deliberado y premeditado sobre una población civil. Constituye un crimen contra la humanidad.

En lugar de responder a las críticas concretas de este capítulo sobre Black Friday, la Respuesta de Amnistía, en su mayor parte, se pierde en generalidades vagas y, en el mejor de los casos, tangenciales. Es, por lo tanto, inadecuada para la tarea: el diablo está en los detalles y, evadiéndose de los detalles, la respuesta no convence. Esta breve réplica se centrará en los pocos argumentos con fundamento que Amnistía consigue hacer. El texto en cursiva está extraído de su Respuesta:

1. Suponer que un ataque concreto fuera premeditado, o que toda una operación militar en su conjunto, como la Operación Margen Protector de Israel, estuviera «diseñada […] para “castigar, humillar y aterrorizar” a una población civil», no es una opción para los jueces o los jurados en los tribunales que se adhieren a los criterios internacionales.

Amnistía parece aquí invertir la crítica que se le hace. Una yuxtaposición de las pruebas fácticas que Amnistía recogió en Black Friday y el análisis legal que produjo demuestra que, incidente tras incidente, Amnistía misma seguía «suponiendo» que el ataque israelí no apuntaba directamente a los civiles, a pesar de que sus propias pruebas fácticas claramente mostraban que sí lo hacía. Amnistía misma estaba «suponiendo» en contra de sus propias pruebas y a favor de Israel. Para un ejemplo típico, véase el cuadro 11 (adaptado a partir del cuadro 10).

Cuadro 11. Detalle de los casos estudiados por Amnistía

▪

Descripción de Amnistía	Valoración legal de Amnistía	Comentario de Finkelstein
El 1 de agosto cayó u[illegible]	«Amnistía Internacional [illegible]	[illegible]

▪

El análisis legal que presentaba Amnistía se basaba en un escenario hipotético, divorciado de los hechos reales, que protegía a Israel de la acusación políticamente explosiva de apuntar a civiles. Es instructivo comparar la cadena de deducciones de Amnistía en otros de sus informes regionales publicados contemporáneamente. En Bombs Fall from the Sky Day and Night: Civilians under Fire in Northern Yemen (2015), Amnistía afirma:

Las pruebas de […] los ataques sobre objetivos militares, infraestructura, edificios del gobierno, vehículos en movimiento y otros blancos en otras partes de Yemen indican que las fuerzas de la coalición son capaces de golpear sus blancos escogidos con un cierto grado de precisión. En investigaciones sobre ataques aéreos en otras partes del país, Amnistía Internacional ha descubierto que las bases militares controladas por los Huthi u otros objetivos militares han sido repetidamente atacadas por las fuerzas aéreas de la coalición. Aun así, la investigación ha encontrado propiedad civil en el distrito de Sa'da que ha sido impactada más de una vez, lo que sugiere que, de hecho, era el objetivo del ataque.

Por ejemplo, en al menos cuatro de los ataques aéreos investigados por Amnistía Internacional, las casas fueron disparadas más de una vez, apuntando a que eran los objetivos escogidos. Amnistía Internacional también visitó seis mercados en Sa'da y sus alrededores que habían sido atacados desde el aire y analizó los vídeos del día después de los ataques en una serie de mercados en otras ciudades y pueblos cercanos. Algunos mercados fueron atacados repetidamente y en ocasiones diferentes, a veces de día, cuando había muchos civiles presentes […]. Amnistía Internacional no ha encontrado pruebas que indiquen que los mercados se usaran con fines militares.

El criterio probatorio empleado por Amnistía en el caso yemení era el siguiente: si un beligerante posee armas capaces de «golpear […] blancos escogidos con un cierto grado de precisión», y si la

propiedad civil fue «atacada repetidamente y en ocasiones diferentes, en momentos del día en el que muchos civiles estaban presentes»; y si Amnistía «no ha encontrado pruebas que indiquen» que la propiedad civil «se hubiera usado para fines militares», entonces todo apunta que la población civil era, «de hecho, el objetivo del ataque». Pero, entonces, ¿los bombardeos de saturación israelíes, sus ataques con misiles de precisión, y el intenso fuego de artillería sobre los barrios densamente poblados de Rafah, que se alargaron sin descanso durante cuatro días y ante la casi total ausencia de un objetivo militar legítimo, no apuntarían a que la población civil era «el objetivo buscado del ataque»? Dicho de otra manera, ¿por qué Amnistía metía con calzador la advertencia en el caso de Yemen –«Amnistía Internacional no ha encontrado pruebas que indiquen que los mercados se usaran con fines militares. Incluso si hubiera sido un objetivo militar…»–?

Las distorsiones que se establecen en el modus operandi de Amnistía se volvieron aún más claras, dolorosas y nauseabundas en un documento publicado dos años después de Margen Protector, que lamentaba que no se hubieran adjudicado responsabilidades por las atrocidades cometidas durante la operación[136]. Recordaba los detalles de un desgraciado incidente en el que cuatro niños palestinos, de edades comprendidas entre los 10 y los 14 años, habían sido asesinados «mientras jugaban al escondite en la playa»; «el ataque tuvo lugar ante los ojos de los periodistas internacionales […] ellos pudieron ver claramente que la gente que corría por la playa eran niños»; un portavoz israelí «anunció que el ataque tenía como objetivo un “complejo” de la fuerza naval de Hamás, lo que los periodistas describieron como una choza de pescadores pequeña y en mal estado»; «ninguno de [los periodistas] informó de haber visto operaciones militares en las inmediaciones de la choza». ¿Qué concluye Amnistía de esta acumulación de pruebas incriminatorias? «Como mínimo, el ataque no adoptó las precauciones exigidas para la protección de los civiles, incluyendo el asegurarse de que los objetivos son de naturaleza militar antes de desencadenar el ataque.» ¿Acaso es la misión de una organización de defensa de los derechos humanos el informar sobre lo que «como mínimo» ocurrió, o, basándose en todas las pruebas disponibles, sobre lo que probablemente ocurrió? Amnistía señalaba que una investigación israelí que había absuelto al ejército de la responsabilidad de esos

asesinatos «no explicaba por qué el ejército no había identificado “como tales” a los niños». No podría siquiera concebir, o no se permitía concebir, que las IDF habían identificado a cuatro niños retozando en una playa «como tales» y que después los asesinaron[137].

La Respuesta aduce que los organismos ligados por el derecho internacional no tienen la «opción» de concluir que la carnicería de Rafah fue «diseñada […] para “castigar, humillar y aterrorizar” a una población civil». Pero la cita procede del Informe Goldstone sobre la Operación Plomo Fundido (2008-2009)[138]. Que ahora Amnistía se distancie de Goldstone, cuando previamente había publicado hasta 15 declaraciones ratificando el informe, es una triste noticia[139]. Por ejemplo, una de las declaraciones de Amnistía decía:

Todos los organismos relevantes de la ONU deberían pronta y coordinadamente implantar las recomendaciones del Informe Goldstone encargado por la ONU sobre las violaciones del derecho internacional […] Las conclusiones del informe encajan con las que ha extraído Amnistía Internacional en su investigación sobre el terreno. […] Conclusiones clave [que el Informe Goldstone incluye]: las fuerzas armadas israelíes cometieron violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario internacional que equivalen a crímenes de guerra y algunas de ellas probablemente equivalgan a crímenes contra la humanidad. Más concretamente, las investigaciones sobre los numerosos ejemplos de ataques letales contra propiedad y población civil revelaban que los ataques fueron intencionados, que algunos de ellos se lanzaron con la intención de extender el terror entre la población civil y sin un objetivo militar justificable[140].

El punto más importante, no obstante, es este. En sus objetivos y su modus operandi Margen Protector no difería sustantivamente de Plomo Fundido, excepto en que la devastación desencadenada por Margen Protector era de una escala muchísimo mayor. Sobre la base de las pruebas recogidas, el Informe Goldstone concluía, y los

propios descubrimientos de Amnistía lo corroboraban, que Israel atacó deliberadamente a la población civil de Gaza «en numerosas ocasiones». Pero, aunque las pruebas recogidas por los informes de Amnistía Internacional sobre Margen Protector, y por Black Friday en particular, apuntaban a la misma conclusión, el análisis legal de Amnistía infería, hacía hipótesis o especulaba en dirección contraria: que Israel, casi sin excepción, no atacaba a la población civil, sino, por el contrario, a objetivos militares legítimos. Tampoco queda claro por qué Amnistía, desde un punto de vista legal, no tendría la «opción» de llegar a la conclusión de que Israel buscaba «castigar, humillar y aterrorizar» a la población civil de Gaza durante la Operación Margen Protector. De hecho, el propio informe Black Friday concluye que Israel cometió una «"carnicería" en Gaza» con el «deseo de vengarse, de dar una lección o de castigar a la población». Apenas el canto de un duro separa esta descripción fáctica de la masacre de Rafah de la frase «castigar, humillar y aterrorizar» que Amnistía dice que no tiene «opción» de utilizar. El problema real parece estar en que, en sus conclusiones legales, Amnistía se separa de sus propios hallazgos fácticos sobre lo que realmente ocurrió. En su Respuesta, Amnistía reprende al autor porque supuestamente «no tiene en cuenta las pruebas que hemos puesto a disposición del público». Pero ¿no es Amnistía quien no tiene en cuenta sus propias pruebas?

2. [N]o podemos asumir necesariamente que no hubiera un blanco militar legítimo por cada ataque específico israelí únicamente porque no hemos descubierto información que apunte a ello. Puesto que el ejército israelí empleó municiones dirigidas, como misiles guiados por drones durante el ataque a Rafah (además, evidentemente, del uso de cantidades masivas de artillería y otras armas aéreas), y puesto que había combatientes palestinos e instalaciones militares en alguna parte de Rafah durante las hostilidades, tenemos que albergar la posibilidad de que cada ataque israelí tuviera un blanco militar legítimo. Lo máximo que podemos decir es que, después de diversos tipos de investigaciones, no hemos sido capaces de descubrir un blanco militar legítimo para un ataque concreto; esto no quiere decir que creamos necesariamente que lo haya.

La esencia de esta afirmación es: cada vez que Israel usa armas de

precisión, Amnistía «no puede suponer necesariamente que no hubiera un objetivo militar legítimo»; de hecho, debe «albergar la posibilidad» de que lo hubiera, incluso aunque todas las pruebas apunten a la conclusión de que Israel estaba atacando a civiles. Esta admisión nos intriga por varias razones. Primero, lo que antes se argumentaba contra la «presunción» de que Israel hubiera atacado a civiles, aquí Amnistía misma lo usa para argumentar a favor de «presuponer» que Israel atacaba objetivos militares cuando utilizaba armas de precisión, e incluso aunque todas las pruebas disponibles demuestren otra cosa. Segundo, Amnistía invierte la presunción intuitiva de que si se usan armas de precisión en un ataque que tiene como resultado muertes civiles, y si no existen pruebas de un objetivo militar, entonces –justamente porque se han empleado armas de precisión– el ataque sobre los civiles debe haber sido deliberado. En lugar de ello, Amnistía declara que, si se usan las armas de precisión, la presuposición debe ser que Israel no atacaba a civiles, incluso aunque todas las pruebas apunten a la conclusión de que sí lo hacía. Amnistía no proporciona una razón para esta aguda presunción de que Israel no usaría las armas de precisión para atacar a los civiles, aunque hay voluminosas pruebas de que Israel ha atacado descarada y repetidamente a civiles, incluyendo a niños, y propiedad civil, muchas de estas pruebas recogidas por la propia Amnistía. Tercero, si le incumbe a Amnistía «albergar la posibilidad» de que el objetivo de Israel sea un «objetivo militar legítimo» cuando usa armas de precisión, entonces Amnistía por definición no puede concluir que Israel atacó a civiles cuando usó armas de precisión, a no ser que Israel confiese, porque siempre existirá la posibilidad de que el objetivo fuera «un objetivo militar legítimo». En otras palabras, si Amnistía no concluye que Israel estaba atacando a civiles no fue por una falta de pruebas (de hecho, fue a pesar de unas pruebas abrumadoras, muchas de ellas procedentes de los propios israelíes), sino porque era una imposibilidad epistemológica: por una parte, su hipótesis de trabajo era que Israel no apuntaba deliberadamente a civiles cuando usaba las armas de precisión, mientras que, por otra parte, la lógica de este razonamiento era tal que no había cantidad posible de pruebas que pudiera convencerles de lo contrario.

Merece la pena detenerse un momento para sopesar las sorprendentes afirmaciones de Amnistía. Un típico informe sobre

derechos humanos incluye una sección sobre el derecho internacional que cita las cláusulas relevantes en el derecho internacional humanitario y sobre derechos humanos. Por ejemplo, el capítulo legal de Black Friday incluye estos epígrafes: «Prohibición de los ataques directos sobre propiedad y población civil: el principio de distinción»; «Prohibición sobre ataques indiscriminados y desproporcionados»; «Precauciones que adoptar en un ataque»; «Precauciones de la defensa»; «Castigo colectivo»; «Investigación»; y «Legislación internacional sobre derechos humanos». Todas estas secciones citan las fuentes habituales, como las Convenciones de Ginebra de 1949 y los Protocolos Añadidos I y II (adoptados en 1977). Pero, sin que sus lectores se percaten, Amnistía interpone entre sus hallazgos fácticos y su análisis legal una presunción fantasma especial para Israel –llamémosla SP4I–, según la cual, cada vez que Israel despliega armas de precisión, la presunción operativa debe ser que está apuntando a un objetivo militar y que, incluso si todas las pruebas apuntan a lo contrario, aún hay que albergar la posibilidad de que se estuviera apuntando a un objetivo militar. Debería ser obvio que SP4I no se basa en ninguna cláusula existente de la legislación internacional; que esta dispensa se aplica únicamente a Israel (¿invocaría Amnistía una presunción así en el caso del régimen sirio?) y que no hay justificación para ello en el extenso historial de Israel en sus enfrentamientos armados. Si de este intercambio no se obtienen resultados, al menos merece la pena que SP4I, hasta ahora invisible en los análisis legales de Amnistía, salga a la superficie.

3. Legalmente no existe una jerarquía entre los diferentes tipos de crímenes de guerra o entre los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad; todos se consideran «los crímenes más graves en lo que concierne a la comunidad internacional en su conjunto, [que] no deben quedar sin castigo». […] En términos de crímenes de guerra, legalmente hablando, el lanzar intencionadamente un ataque con el conocimiento de que el ataque va a causar bajas civiles o daño a propiedad civil que claramente sería excesivo en relación con la ventaja militar concreta y directa que se espera (es decir, un ataque desproporcionado) es tan criminal como lanzar intencionadamente un ataque directo sobre propiedad o población civil, o un ataque que impacte sobre objetivos militares y población o propiedad civil sin distinción, o que trate como un único objetivo

militar un número de objetivos militares diferentes localizados en una ciudad o pueblo civil. Todo esto está prohibido por el DHI y constituye crímenes de guerra.

Si no existe una jerarquía entre los crímenes de guerra, habría que preguntarse por qué Amnistía es tan cauta para no acusar a Israel de atacar deliberadamente a civiles y por qué empieza con la presunción de que Israel no estaba atacando a civiles; y por qué persiste en esa presunción incluso cuando todas las pruebas que ha recogido muestran que Israel los estaba atacando; y por qué, por el contrario, en un comunicado de prensa del Informe de Amnistía que deploraba que no se hubieran atribuido responsabilidades dos años después de Margen Protector, eligió destacar «varios ataques que claramente apuntaban a civiles en violación del derecho humanitario internacional»[141]. Pero, por supuesto, sí existe una jerarquía, si no en un sentido legal estricto, en un sentido político. El umbral de tolerancia del público es mucho mayor para las muertes civiles en una operación que se dirige a objetivos militares legítimos que para las muertes civiles en una operación destinada a «castigar, humillar y aterrorizar a la población civil». Una encuesta de 2016 del Comité Internacional de la Cruz Roja señalaba que solamente la mitad de la opinión pública entre los cinco países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (y Suiza) creía que estaba mal apuntar «a combatientes enemigos en zonas pobladas […] a sabiendas de que morirían muchos civiles», mientras que un 80 por 100 creía que estaba mal «atacar hospitales, ambulancias y a trabajadores de la sanidad para debilitar al enemigo»[142]. Más aún, si los civiles mueren en ausencia de un objetivo militar, es una grave infracción del derecho internacional, semejante a las violaciones o al uso forzado como escudos humanos. No obstante, el asesinato de civiles en el contexto de un objetivo militar, que es lo que presuponen los ataques indiscriminados y desproporcionados, disminuye la probabilidad de una condena, porque introduce un elemento de turbiedad y proporciona laxitud para juzgarlo. El Tribunal Internacional de Justicia ni siquiera pudo alcanzar un consenso sobre si el uso de las armas nucleares era desproporcionado e indiscriminado en cualquier circunstancia; o, dicho de otra manera, las categorías proporcionado y discriminado son tan elásticas que pueden acomodarse incluso al uso de armas nucleares[143]. Amnistía acusa a Israel de cometer ataques

indiscriminados y desproporcionados durante su asalto a Rafah, mientras que elude escrupulosamente acusar a Israel de ataques premeditados sobre la población civil, a pesar de las pruebas abrumadoras. Esto fue claramente una decisión política: Amnistía calibró sus hallazgos legales para no incurrir por completo en la ira de Israel. La decisión política, no obstante, trajo consigo un alto precio. Escudó a Israel de recibir por completo la justificada ira pública blanqueando la más desagradable verdad sobre el infierno de Rafah: que no era el resultado de los excesos de una operación militar legítima que salió mal, sino de una operación que ab initio intencionalmente atacaba a la población civil.

El resto de la Respuesta de Amnistía consiste en trivialidades autocongratulatorias o réplicas no argumentadas.

[1] La mayor parte de los datos sobre Israel de este capítulo proceden de State of Israel, The 2014 Gaza Conflict, 7 July–26 August 2014: Factual and Legal Aspects, 2015.

[2] Véase cap. V.

[3] Rain of Fire: Israel's Unlawful Use of White Phosphorus in Gaza, 2009; Precisely Wrong: Gaza Civilians Killed by Israeli Drone-launched Missiles, 2009; Rockets from Gaza: Harm to Civilians from Palestinian Armed Groups' Rocket Attacks, 2009; White Flag Deaths: Killings of Palestinian Civilians during Operation Cast Lead, 2009; «I Lost Everything»: Israel's Unlawful Destruction of Property during Operation Cast Lead, 2009. Estos informes varían en su longitud y tienen entre 25 y 115 páginas.

[4] In-Depth Look at Gaza School Attacks, 2014. Ocupa solamente 15 páginas y, teniendo en cuenta que tanto el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, como el gobierno de Obama habían ya rechazado los ataques (véase cap. XI), no era especialmente destacado.

[5] Hamás se emplea aquí para referirnos a todos los grupos armados de Gaza.

[6] Amnesty International, Unlawful and Deadly: Rocket and Mortero Attacks by Palestinian Armed Groups during the 2014 Gaza / Israel Conflict, 2015.

[7] Por otra parte, solamente el 8 por 100 del total de las bajas israelíes fueron civiles.

[8] Sin embargo, en su informe, «Strangling Necks»: Abductions, Torture and Summary Killings of Palestinians by Hamas Forces during the 2014 Gaza / Israel Conflict, 2015, Amnistía sí mencionaba que «la amplitud de las bajas y de la destrucción que ha llevado Israel a Gaza excede con mucho la causada por los ataques palestinos sobre Israel, reflejando el poderío militar mucho mayor de Israel, entre otros factores».

[9] J. Bachmann et al., Gaza 2014: Findings of an independent medical fact-finding mission, 2015, p. 101; a partir de ahora: Medical Fact-Finding Mission.

[10] Véase cap. V y cap. IX.

[11] Las observaciones de Ban Ki-moon se añadieron al resumen del informe final de una Junta de Investigación de la ONU a la que él había encargado investigar «determinados incidentes que tuvieron lugar en la Franja de Gaza entre el 8 de julio de 2014 y el 26 de agosto de 2014». Para el Informe de la Junta de Investigación de la ONU, véase cap. XI; a partir de ahora: UN Board of Inquiry.

[12] Además de Unlawful and Deadly and «Strangling Necks», Amnistía publicó Families under the Rubble: Israeli Attacks on Inhabited Homes, 2014; y «Nothing Is Immune»: Israel’s Destruction of Landmark Buildings in Gaza, 2014. Estos cuatro informes se publicaron durante la ventana de oportunidad crítica, antes de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU publicara su propio informe en junio de 2015. El Informe de la ONU citaba extensamente el cuarteto de publicaciones de Amnistía, véase cap. XIII. Amnistía publicó otro informe sobre Margen Protector, del que hablaremos ahora, pero fue después de la publicación del Informe de la ONU, cuando ya era demasiado tarde como para influir en él.

[13] Este informe se cita ampliamente en la Primera Parte. Una

yuxtaposición precisa deja aún más en evidencia la adjudicación de espacio de Amnistía en sus informes sobre Margen Protector: en cifras absolutas, la escala de la muerte y destrucción infligida por Israel durante Margen Protector fue mucho más masiva que durante Plomo Fundido, mientras que en el caso de Hamás fue más o menos igual.

[14] Gisha, «Where's the Housing Boom?», cit., 2015.

[15] Para ser justos, «Strangling Necks» sí afirmaba categóricamente: «Las fuerzas armadas israelíes cometieron crímenes de guerra y otras graves infracciones del derecho internacional durante la Operación Margen Protector».

[16] Tampoco se justificaba la perversa inclusión de los palestinos de Cisjordania en el «círculo de miedo»: ¿realmente temían los misiles de Hamás?

[17] State of Israel, 2014 Gaza Conflict, cit., §§ 51, 54.

[18] M. Perry, «Gaza's Bottle Rockets», Foreign Affairs, 3 de agosto de 2014. Véase cap. XI para más detalles.

[19] L. Charbonneau, «UN Comité: Arms ship seized by IDF came from Iran, but not bound for Gaza», Haaretz, 28 de junio de 2014.

[20] Véase cap. XI.

[21] State of Israel, 2014 Gaza Conflict, cit., §§ 91, 109, 119; véase también §§ 56, 85, 91, 220, y p. 42, n. 130.

[22] Ibid., §§ 96, 119.

[23] Amnesty International, «Israel "Playing Games" as Human Rights Organizations Denied Access», 20 de agosto de 2014; Human Rights Watch, «Provide Rights Groups Access to Gaza», 20 de agosto de 2014.

[24] «Los numerosos incidentes de ataques lanzados en extrema proximidad a los edificios civiles de los que han informado las autoridades israelíes, junto con los relatos de los periodistas en Gaza durante el conflicto y los hallazgos de los investigadores de

Amnistía Internacional que han documentado las hostilidades previas, indican que los ataques por parte de los grupos armados de Gaza que se lanzan desde el interior de las zonas residenciales están lejos de ser hechos aislados», Unlawful and Deadly, cit., cursivas añadidas.

[25] Hablaremos de esto más adelante; véase también cap. XI.

[26] Amnesty International, Families under the Rubble, cit.

[27] La misión de investigación médica alabó la «independencia y credibilidad de grupos locales de la sociedad civil como Al Mezan, PCHR», p. 100.

[28] La lista de organizaciones israelíes específicas que ayudan a Amnistía se omite aquí.

[29] Al Mezan Center for Human Rights et al., No More Impunity: Gaza's Health Sector Under Attack, 2015.

[30] Véase cap. III.

[31] State of Israel, 2014 Gaza Conflict, cit., §§ 54, 129, 145, 151, 153, 254, 275, 277, 278, 280.

[32] Amnesty International, «Nothing Is Immune», cit.

[33] State of Israel, 2014 Gaza Conflict, cit., § 129. Por cierto, que este informe describe la obliteración de Al-Wafa por parte de Israel y cómo «se respondió de una manera precisa y discriminada», cit., § 285.

[34] «Los terroristas de Gaza dispararon un misil antitanques a las IDF desde el hospital Al-Wafa el jueves, usando la estructura como base para atacar, a pesar del ataque aéreo de Israel sobre la estructura el miércoles, después de disparos y misiles lanzados previamente desde allí por Hamás. Las IDF respondieron al fuego, matando a dos terroristas, y más tarde las fuerzas aéreas atacaron el edificio desde el que se había disparado el misil. Las fuerzas aéreas también atacaron una estructura cercana al hospital de Al-Wafa que se empleaba para almacenar armas, así como centro de mando y de control». Y. Lappin, «Terrorists Fire Anti-tank Missile from Al-Wafa

Hospital in Gaza», The Jerusalem Post, 25 de julio de 2014.

[35] G. Cohen et al., «Israel Bombs Empty Gaza Hospital, Calling It Hamas Command Center», Haaretz, 23 de julio de 2014; Medical Fact-Finding Mission, p. 50. En otro contexto de Unlawful and Deadly, Amnnistía cita a un «alto oficial de Hamás» que declara que los misiles se dispararon «a 200 o 300 metros de distancia» de las escuelas y hospitales, y también que «se cometieron algunos errores que enseguida se subsanaron». El valor probatorio de una declaración en interés propio por parte de un «alto funcionario de Hamás» es, por supuesto, equivalente al del comunicado de prensa del ministro de Exteriores israelí, es decir, cero.

[36] International Federation for Human Rights, FIDH, Trapped and Punished: The Gaza civilian population under Operation Protective Edge, abril de 2015, p. 40.

[37] Véase, por ejemplo, B'Tselem, Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories, Israeli Authorities Have Proven They Cannot Investigate Suspected Violations of International Humanitarian Law by Israel in the Gaza Strip, 5 de septiembre de 2014, disponible en [btselem.org/accountability/20140905_failure_to_investigate].

[38] Véase cap. III.

[39] Tanto Amnistía como la hasbara israelí se apoyan en las exclusivas del corresponsal extranjero del Washington Post, William Booth, para las acusaciones más sensacionalistas contra Hamás. State of Israel, 2014 Gaza Conflict, cit., p. 76, n. 234, p. 91, n. 269, y p. 214, n. 496. El periodismo creativo de Booth ya se le había vuelto en su contra cuando fue despedido del Post por plagio. P. Farhi, «Washington Post to Suspend William Booth over Panama Canal Story», The Washington Post, 18 de enero de 2013.

[40] «He podido circular libremente por el hospital y hacer las fotos que deseara y hablar con quien quisiera. Por supuesto, no puedo decir que haya estado en cada rincón del hospital, pero, en lo que se refiere a lo que tanto yo como el doctor Erik Fosse hemos visto, ninguno de nosotros hemos visto que fuera un centro de mando de Hamás.» Cirujano noruego Mads Gilbert, citado en

[en.wikipedia.org/wiki/Al-Shifa_Hospital].

[41] Correspondencia por mail del 15, 17 de abril de 2015, remitida por la doctora Roy y procedente de tres de sus contactos.

[42] Hamás defendía que la Autoridad Palestina proporcionaba a Israel información sobre los objetivos recogida mediante sus agentes en Gaza. E. Miller, «Hamas: PA gave Israel nearly a third of its Gaza targets», The Times of Israel, 5 de febrero de 2015.

[43] De los 17 casos documentados en el informe sobre las infracciones de los derechos humanos por parte de Hamás, los más relevantes que mencionaban Al-Shifa eran estos:

Los oficiales [de Hamás] llevaron a Saleh Swelin a sus instalaciones de detención en Jabalia, conocidas como el centro al-Sisi, y de ahí a la clínica ambulatoria del hospital de Al-Shifa en Ciudad de Gaza, que las fuerzas de Hamás usaban para retener e interrogar a sospechosos. M. S., el hermano menor de Saleh Swelin, le dijo a Amnistía Internacional que los oficiales de Seguridad Interna también lo detuvieron aquel día y que vio a Saleh Swelin tanto en las instalaciones de al-Sisi como en el hospital de Al-Shifa y que los oficiales de Seguridad Interna los torturaron a ambos. [Continúa un extenso testimonio de M. S. describiendo su tortura, pero termina así:] «Ambos confesamos después de ser golpeados. Seguimos en el campo de al-Sisi hasta el día siguiente y después nos trasladaron al hospital de Al-Shifa. Allí se nos trató con respeto en el ambulatorio. No nos golpearon y nos trataron con respeto, especialmente después de que vieran las quemaduras y las marcas de golpes de mi cuerpo. Nos curaron las heridas y nos trataron los médicos».

Los tres hombres [de Hamás] se llevaron a Ali Da’alsa y M. D. en un hyundai negro, pero, después de 10 minutos, durante los cuales los atacaron, dejaron marchar a M. D., soltándolo cerca de la Universidad Al Quds. Al día siguiente M. D. acudió a la parte del hospital Al-Shifa que usaba Seguridad Interna para preguntar por Ali Da’alsa. M. D. le dijo a Amnistía Internacional: «Fui al ambulatorio de Al-Shifa donde Seguridad Interna tenía una habitación. Llamé a la puerta y no contestó nadie. Seguí llamando

hasta que finalmente llegó [Seguridad Interna]. Me agarraron y golpearon y me insultaron y me trataron mal y siguieron golpeándome».

A. H., 43, miembro de al-Fatah, activista y ex alto oficial de la AP, le dijo a Amnistía Internacional que miembros de la fuerza de Seguridad Interna de Hamás lo detuvieron cuando salía de una mezquita en la zona este de Ciudad de Gaza el 17 de agosto de 2014 y se lo llevaron al ambulatorio de Al-Shifa. Allí, dijo, lo torturaron durante unas dos horas con las manos atadas a la espalda y los ojos tapados, lo golpearon, también con un martillo y tubos de plástico, provocándole varias pérdidas de consciencia, y lo insultaron, antes de preguntarle por sus vínculos con las fuerzas de seguridad de la AP: «No fue un interrogatorio en realidad, solo una sesión de tortura».

El segundo de estos tres testimonios no parece cumplir con la práctica de tortura tal como la han definido las organizaciones de defensa de los derechos humanos; si así fuera, todo soldado israelí que ha tratado de tal modo a un palestino en Cisjordania sería culpable de tortura, una acusación que Amnistía, prudentemente, nunca ha emitido. Así, únicamente el tercer testimonio sería una prueba de torturas en Al-Shifa, pero procede de un «miembro de al-Fatah, activista y ex alto oficial de la AP», no necesariamente la fuente más fiable.

[44] State of Israel, 2014 Gaza Conflict, cit., § 129.

[45] «Si grupos armados palestinos infringen el derecho humanitario internacional almacenando municiones cerca del hospital, y si este era el objetivo de Israel cuando atacó el hospital y mató a civiles, aun así habría serias dudas sobre la forma y ejecución del ataque de Israel».

[46] Medical Fact-Finding Mission, pp. 50-51; véase también FIDH, Trapped and Punished, p. 44.

[47] State of Israel, 2014 Gaza Conflict, § 129.

[48] Véase cap. III.

[49] N. G. Finkelstein, Beyond Chutzpah: On the Misuse of Anti-Semitism and the Abuse of History, ed. de bolsillo ampliada, Berkeley, 2008, pp. 128-130.

[50] Amnesty International, «Evidence of Medical Workers and Facilities Being Targeted by Israeli Forces in Gaza», 7 de agosto de 2014; Medical Fact-Finding Mission, pp. 44-49; FIDH, Trapped and Punished, pp. 32-38.

[51] Un documento israelí reimpreso en su balance oficial afirmaba con descaro que, hasta los últimos dos días de Margen Protector, «las IDF se refrenaron de causar daños en las escuelas», mientras que el Informe mismo afirmaba que Israel atacaba escuelas en solo «muy pocas ocasiones». State of Israel, 2014 Gaza Conflict, cit., p. 176, §§ 281, 404.

[52] Aquí está la totalidad de las fuentes que cita Amnistía:

Israel Ministry of Foreign Affairs, Hamas' Violations of the Law, pp. 20, 23.

Israel Ministry of Foreign Affairs, Hamas' Violations of the Law, p. 25; IDF, Declassified Report Exposes Hamas Human Shield Policy, diapositiva 13.

Israel Ministry of Foreign Affairs, Hamas' Violations of the Law, pp. 20, 22; IDF, Declassified Report Exposes Hamas Human Shield Policy, diapositiva 14.

Israel Ministry of Foreign Affairs, Hamas' Violations of the Law, pp. 20-21. Israel Ministry of Foreign Affairs, Hamas' Violations of the Law, pp. 20-26.

[53] En una nota relacionada, basándose en los comunicados de prensa de la ONU, Amnistía relata el mal uso por parte de Hamás de otras escuelas de la ONU no atacadas por Israel: «Los grupos armados palestinos almacenaban misiles y otra munición en […] las escuelas de la ONU. La UNRWA descubrió municiones palestinas en tres de sus escuelas vacías en la Franja de Gaza», específicamente

«20 misiles en una escuela infantil en Ciudad de Gaza»; «misiles […] en una escuela primaria en Jabalia»; «otro escondite de misiles […] en una escuela en Nuseirat». La junta de investigación descubrió más tarde, sin embargo, que las armas almacenadas en estas escuelas vacías (estaban cerradas por las vacaciones de verano) no eran misiles, sino más bien un mortero y veinte proyectiles en la escuela de Ciudad de Gaza, «un objeto, posiblemente un arma», en la escuela de Jabalia, y un mortero y tres proyectiles en un caso, y un mortero y veinte proyectiles en el otro, en la escuela de Nuseirat. (La propia UNRWA ha admitido que había exagerado el caso debido a un mal informe y a la falta de conocimiento técnico por parte del trabajador de campo de la UNRWA en Gaza.) El balance oficial israelí sobre Margen Protector afirmaba falsamente que, según la Junta de Investigación de la ONU, «en el momento en el que se describieron las armas», «albergaba aproximadamente a 300 gazatíes». State of Israel, 2014 Gaza Conflict, p. 82, pie de foto, § 280.

[54] Véase cap. III.

[55] El caso que Israel ha construido a lo largo de los años para justificar su ataque a las mezquitas de Gaza no tiene consistencia. Véase cap. III.

[56] B'Tselem, Act of Vengeance: Israel's Bombing of the Gaza Power Plant and its Effects, Jerusalén, 2006.

[57] En un comunicado de prensa durante Margen Protector, Amnistía afirmaba que el ataque «muy probablemente» equivalía a «un crimen de guerra». «Gaza: Attacks on UN school and power plant are likely war crimes», 30 de julio de 2014.

[58] FIDH, Trapped and Punished, cit., pp. 48-52.

[59] En otra nota incongruente, Amnistía culpaba repetidamente a Israel por no alertar antes de los ataques. Pero si el objetivo era un militante de Hamás, ¿no iría contra esta meta el advertirlo de antemano?

[60] Al contrario, y de manera nada plausible, Israel afirmaba que, incluso si morían muchos civiles cuando atacaba a militantes de

Hamás en residencias civiles, aun así esas muertes eran el resultado de errores, en especial, que las IDF no eran conscientes de que había no combatientes presentes. B'Tselem, Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories, Whitewash Protocol: The So-called Investigation of Operation Protective Edge, 2016, p. 21. Pero, si los servicios de inteligencia alertaban en tiempo real de la repentina aparición de un militante de Hamás en una residencia civil, sin ninguna duda quien informaba a Israel era un gazatí. ¿No mencionaba el delator que también había civiles presentes, o los cerebros israelíes no se molestaban en preguntarlo?

[61] State of Israel, 2014 Gaza Conflict, §§ 49, 317-333, 401-402, 452, 456; anexo, §§ 6-8. Véase también B'Tselem, Whitewash Protocol, p. 23. En una nota relacionada, cuando Hamás disparaba morteros sobre una zona poblada, Amnistía lo acusaba directamente de un ataque «indiscriminado», mientras que, cuando Israel soltaba una bomba de 2.000 libras y disparaba proyectiles de artillería en una zona densamente poblada, matando a muchos civiles, Amnistía lo acusaba de cometer un ataque «desproporcionado», una acusación a la que invitaba después a Israel para que la refutara: «La carga de la prueba recae sobre Israel para proporcionar información relativa a por qué atacó». Véase Families under the Rubble, Al-Dali Building, Al-Louh Family Home.

[62] B'Tselem, Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories, Black Flag: The Legal and Moral Implications of the Policy of Attacking Residential Buildings in the Gaza Strip, Summer 2014, 2015, pp. 37-41.

[63] Breaking the Silence, This Is How We Fought in Gaza: Soldiers' testimonies and photographs from Operation «Protective Edge», 2014.

[64] Para la destrucción indiscriminada de Israel de hogares, que «debería haber implicado la aprobación del mando de alto nivel del ejército o del gobierno israelí con capacidad de decisión», véase también Medical Fact-Finding Mission, pp. 35-37, 98.

[65] En «Strangling Necks», Amnistía también acusaba a Hamás de haber cometido «crímenes de guerra» en su «tortura» y «ejecución sumaria, extrajudicial» de «al menos 23» supuestos

colaboracionistas en Gaza. Este asunto se tratará en el cap. XIII.

[66] Cada uno de los 5.000 misiles disparados constituirían automáticamente un crimen de guerra, como lo serían cada uno de los 2.000 morteros disparados en las inmediaciones de una concentración civil.

[67] Action on Armed Violence, Under Fire: Israel's artillery policies scrutinized, 2014.

[68] State of Israel, 2014 Gaza Conflict, cit., § 347, véase también §§ 354-357.

[69] Ibid., § 123, véase también p. 152, n. 417.

[70] En el resumen de legislación internacional humanitaria incluido en Unlawful and Deadly, Amnistía afirma que las partes de un conflicto deben escoger los medios y métodos de ataque adecuados cuando los objetivos militares se localizan en el interior de las zonas residenciales. Este requisito sanciona el uso de determinados tipos de armamento y tácticas. El uso de armas que son inherentemente no discriminatorias, como los misiles no teledirigidos, está prohibido. Y el uso en zonas densamente pobladas de armas imprecisas que no pueden apuntar a un objetivo militar con la precisión suficiente, como los morteros, es probable que tenga como resultado un ataque indiscriminado y también está prohibido.

Aparte de que, a diferencia de Israel, Hamás no puede permitirse el lujo de «elegir» sus medios y métodos de ataque, es revelador que Amnistía aludiera a los misiles no dirigidos de Hamás como «armas prohibidas» y a su uso de morteros en zonas densamente pobladas como «prohibido», pero no hiciera alusión al uso ilegal por parte de Israel de obuses de artillería (en una escala mucho mayor) en zonas de población civil. Podría suponerse que la omisión se debía al hecho de que Unlawful and Deadly se centraba en los crímenes de guerra de Hamás. Pero, en el compendio de derecho humanitario internacional que complementaba los dos informes de Amnistía sobre los crímenes israelíes, la criminalidad inherente de las ráfagas de artillería en zonas pobladas por civiles por parte de Israel también pasaba desapercibida.

[71] Véase cap. XI.

[72] International Committee of the Red Cross, ICRC, Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, Geneva: 1987, article 51. Amnistía citaba correctamente esta provision en el compendio del derecho internacional humanitario de Unlawful and Deadly.

[73] Según Amnistía, Hamás también argumentaba que sus ataques en zonas civiles «se cometieron como represalia por los abusos o agresiones de Israel». Sobre el estatus legal de estas represalias beligerantes, véase cap. XI.

[74] International Committee of the Red Cross, Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules, Cambridge: 2005, rules 22, 23; ICRC, Commentary on the Additional Protocols, artículo 58.

[75] Human Rights Watch, Indiscriminate Fire: Palestinian rocket attacks on Israel and Israeli artillery shelling in the Gaza Strip, 2007, p. 19.

[76] Para ser justos con Amnistía, sí absolvía a Hamás, aunque por los pelos, de la acusación ampliamente difundida de usar «escudos humanos». El balance oficial israelí sobre Margen Protector alegaba que Hamás había usado escudos humanos con coerción sobre la dudosa base de «testimonios oculares de una serie de oficiales de las IDF». State of Israel, 2014 Gaza Conflict, cit., §§ 161-164. Pero, al igual que ocurrió en Plomo Fundido, resultó que no fue Hamás, sino Israel, quien usó escudos humanos en Margen Protector. Véanse caps. IV y XI, y Medical Fact-Finding Mission, cit., pp. 91, 94.

[77] Véase cap. IV.

[78] Human Rights Watch, Indiscriminate Fire, p. 7.

[79] Amnesty International, Operation «Cast Lead»: 22 Days of death and destruction, Londres, 2009, p. 75.

[80] ICRC, Commentary on the Additional Protocols, artículo 58.

[81] J. Dugard, «Debunking Israel's Self-Defense Argument», Al

Jazeera America, 31 de julio de 2014, disponible en [http://america.aljazeera.com/opinions/2014/7/gaza-israel-internationalpoliticsunicc.html].

[82] Sobre la ilegalidad de la ocupación, véase Apéndice.

[83] ICRC, Commentary on the Additional Protocols, artículo 58.

[84] Estas excepciones, no habría ni que decirlo, no pueden justificar el ataque sistemático e indiscriminado de Israel a la propiedad civil y no digamos a la religiosa. Es también posible que algunas mezquitas tuvieran un túnel subterráneo, no para apilar armas, que Hamás almacenaba al aire libre, lejos de civiles, sino para facilitar la huida en el caso de un ataque de Israel, y que algunos minaretes tuvieran instaladas cámaras para monitorizar los movimientos de tropas israelíes.

[85] Véase cap. XIII.

[86] 2015.

[87] Se le envió un borrador a Philip Luther, director de la división de Oriente Próximo y África del Norte de Amnistía Internacional, y partes de este capítulo aparecieron en una serie de www.Byline.com, «Has Amnesty International Lost Its Way?», 9, 13, 17 de julio de 2015.

[88] Amnesty International, «Black Friday», pp. 16-18, 684 versus 131 palabras.

[89] Ibid., pp. 13, 22, 39, 53, 78. Su omisión en los informes anteriores de Amnistía Internacional sobre Margen Protector ha sido señalada por el autor en su crítica.

[90] Ibid., p. 44.

[91] «Black Friday» señalaba que incluso antes de que empezara el ataque israelí a Rafah a las IDF se les ordenó en el inicio de un alto el fuego que dispararan indiscriminadamente como para «hacer una gran explosión», (citando a un soldado israelí) y, cuando se disponían a destruir un túnel, que demolieran «todas las casas y estructuras agrícolas de la zona [...] que destruyeran cosas a

propósito», según dice otro soldado israelí, mientras que era un procedimiento habitual de las IDF a lo largo de Margen Protector «disparar misiles u obuses desde los tanques a los edificios antes de acercarse a ellos», ibid., pp. 23-26.

[92] Ibid., pp. 19-20, 29-31, 34.

[93] Ibid., p. 37.

[94] Ibid., p. 27.

[95] ICRC, Customary International Humanitarian Law, rule 12; ICRC, Commentary on the Additional Protocols, artículo 51.

[96] ICRC, Customary International Humanitarian Law, rule 14; ICRC, Commentary on the Additional Protocols, artículo 51.

[97] ICRC, Customary International Humanitarian Law, rule 15; ICRC, Commentary on the Additional Protocols, artículo 57.

[98] ICRC, Customary International Humanitarian Law, rules 8, 14; ICRC, Commentary on the Additional Protocols, artículo s51, 52, 57.

[99] Report of the Detailed Findings of the Independent Commission of Inquiry Established Pursuant to Human Rights Council Resolution S-21/1, 22 de junio de 2015, §§ 369-370. «Black Friday», pp. 91-92, tomó nota de esta conclusión de la comisión de la ONU. Si el teniente Goldin hubiera sido elegido porque portara planes para un ataque inminente del enemigo, por supuesto se habrían planteado otras cuestiones.

[100] International Court of Justice, Advisory Opinion, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 8 de julio de 1996, «Dissenting Opinion of Judge Weeramantry», ch. III, «Humanitarian Law», sec. 10, «Specific rules of the humanitarian law of war», (a) «The prohibition against causing unnecessary suffering»; cursivas en el original.

[101] Amnesty International, «Black Friday», p. 91, «Conclusion and Recommendations».

[102] Véase cap. XIII.

[103] Amnesty International, «Black Friday», p. 30. Goldin fue declarado oficialmente fallecido el 2 de agosto.

[104] Ibid., pp. 36-37, 42-43.

[105] Ibid., p. 42, cursivas añadidas.

[106] Ibid.

[107] Ibid., pp. 43-44.

[108] Ibid., p. 91.

[109] Caso 1, «ataques directos a civiles» y Caso 10, «ataques a ambulancias y personal médico».

[110] Amnesty International, «Black Friday», p. 91, cursivas añadidas.

[111] Ibid., cursivas añadidas.

[112] Véase la Adenda a este capítulo.

[113] N. G. Finkelstein, Knowing Too Much: Why the American Jewish romance with Israel is coming to an end, Nueva York, 2012, pp. 5-95.

[114] Véase cap. V.

[115] Véase cap. VI.

[116] Ibid.

[117] Véase cap. XIII.

[118] Véase cap. V.

[119] NGO Monitor, Amnesty International: Failed Methodology, Corruption, and Anti-Israel Bias, 2015. Para el lobby de Israel que atacaba a Human Rights Watch, véase cap. V. Para el lobby de Israel que atacaba a otros grupos de defensa de los derechos

humanos, como UNRWA, véase A. Delmar-Morgan, «Pro-Israel NGO Puts Pressure on UNRWA for Aiding Palestinian Refugees», Middle East Eye, 7 de marzo de 2016. Véase también S. Marusek y D. Miller, «How Israel Attempts to Mislead the United Nations: Deconstructing Israel's campaign against the Palestinian Return Centre», spinwatch.org, 2015.

[120] Pew Research Center, Faith in European Project Reviving, 2015; YouGov, «Roma People and Muslims Are the Least Tolerated Minorities in Europe», 2015.

[121] N. G. Finkelstein, Beyond Chutzpah, cit., parte 1. En Gran Bretaña el fantasma antisemita se conjuró también en 2016 para desacreditar al nuevo liderazgo insurgente del Partido Laborista. A pesar de la escasez de pruebas sustanciales, las alegaciones contra el laborismo recibieron una cobertura mediática ubicua y acrítica. Véase J. Stern-Weiner, «Jeremy Corbyn Hasn't Got an "Antisemitism Problem". His Opponents Do», openDemocracy, 27 de abril de 2016; N. G. Finkelstein y J. Stern-Weiner, «The American Jewish Scholar behind Labour's "Antisemitism" Scandal Breaks His Silence», openDemocracy, 3 de mayo de 2016; J. Stern-Weiner, «Labour Antisemitism Witch-Hunt Turns on Leading Anti-racist Campaigner», jamiesternweiner.wordpress.com, 9 de mayo de 2016.

[122] Amnesty International, UK, Section Board Meeting, «Draft Minutes of the Meeting Held on Saturday 21 de marzo de 2015», MB 39/15, disponible en [amnesty.org.uk/webfm_send/1287]; R. Doherty, «Amnesty Rejects Call to Campaign against Anti-Semitism», Jewish Chronicle, 21 de abril de 2015.

[123] N. G. Finkelstein, Beyond Chutzpah, cit., pp. 102-103, 155-156, 349-351. Véase también la Primera Parte.

[124] En cambio, HRW fue firme e inequívoco en su condena del gobierno sirio y de Rusia por haber «atacado deliberadamente a civiles y a instituciones civiles» en Aleppo, lo que era un «claro crimen de guerra». Para apoyar esta alegación, el director ejecutivo, Kenneth Roth, adujo la prueba de que «Assad-Putin» habían bombardeado repetidamente «hospitales o mercados o semejantes» usando «armamento de precisión». Cuando quería, HRW sí podía unir los puntos. «Slaughter or Liberation? A debate on Russia's role

in the Syrian war and the fall of Aleppo», democracynow.org, 14 de diciembre de 2016. HRW también quería excusar su inacción porque no podía acceder a Gaza durante o después de Margen Protector. Sin embargo, sí publicó un informe, aunque mínimo; las otras principales organizaciones de defensa de los derechos humanos sí se las apañaron, a pesar de las mismas condiciones en contra, para publicar informes sustanciosos; y una excusa así incentiva a Israel para sellar la escena del crimen. HRW siempre habría tenido la opción de llegar a conclusiones provisionales usando pruebas disponibles, o aliándose con las prestigiosas organizaciones locales de defensa de los derechos humanos que sí tenían acceso.

[125] B'Tselem, la más importante organización israelí de defensa de los derechos humanos que vigila los territorios palestinos ocupados, se absolvió a sí misma sin honores en su informe sobre Gaza. Tenía poco que decir y parte de este poco mejor que no lo hubiera dicho. Su director de investigación, Yael Stein, declaró al The New York Times, después de Plomo Fundido: «Yo no acepto la conclusión de Goldstone de un ataque sistemático sobre la infraestructura civil. No es convincente». E. Bronner, «Israel Poised to Challenge a UN Report on Gaza», The New York Times, 23 de enero de 2010. Frente a una montaña de pruebas que apuntaban a un ataque sistemático israelí de ese tipo, su negación era lo que no resultaba convincente. B'Tselem siempre ha procurado situarse dentro del consenso nacional israelí. A medida que ese consenso derivaba inexorablemente hacia la derecha, ya no le era posible conseguir que la opinión israelí le prestara atención si parecía estar «defendiendo a terroristas» en Gaza. Por lo tanto, vacilaba entre el silencio absoluto y las más burdas apologías. Véase también cap. III y cap. IV.

[126] B. Sales, «Breaking the Silence Comes under Withering Attack after Questioning Israel's Military», Forward, 18 de diciembre de 2015.

[127] P. Miller, «Controversy Erupts over Anti-Israel Group at Columbia University Hillel», Observer, 1 de abril de 2016.

[128] UNICEF, «Escalating Violence in the Gaza Strip and Israel Threatens Devastating Harm for Children», 10 de julio de 2014;

UNICEF, «Children Are Bearing the Brunt of the Worsening Violence in Gaza and Israel», 13 de julio de 2014; UNICEF, «Basic Services for Children under Assault in Gaza», 18 de julio de 2014; UNICEF, «“Outrage Has Become Commonplace”», 30 de julio de 2014; «UNICEF Statement on Latest Deaths of Children in Israel and Gaza», 23 de agosto de 2014.

[129] H. Sherwood, «UN Officials Accused of Bowing to Israeli Pressure over Children’s Rights List», The Guardian, 17 de marzo de 2015.

[130] Durante la Revolución Cultural, los chinos que en el pasado habían disentido de la «línea política correcta» fueron obligados a confesar públicamente lo errado de sus opiniones. «An Open Letter for the People in Gaza», Lancet, 2 de agosto de 2014; «Gaza: An urgent call to protect civilian life and health», Lancet, 9 de agosto de 2014; J. Siegel-Itzkovich, «The Lancet Editor Relents on Medical Journal’s Unbalanced Attacks on Israel», The Jerusalem Post, 2 de octubre de 2014; A. Tobin, «“Lancet” Editor Sees Positive Side of Israel in Visit», The Times of Israel, 13 de octubre de 2014; B. White, «Lobbying the Lancet: How Israel’s apologists smeared “Doctors for Terrorism”», Middle East Monitor, 15 de octubre de 2014; R. Horton, «Offline: People to people», Lancet, 11 de octubre de 2014; R. Horton, «Geopolitical Issues and Responsibilities of Medical and Scientific Journals», Rambam Maimonides Medical Journal, enero de 2015. Sobre Kasher, véase cap. IV.

[131] J. de Maio, discurso inaugural, Ninth Annual Minerva / ICRC International Conference on Humanitarian Law, 3-4 de noviembre de 2014. Report of the Detailed Findings, §§ 330-332, 355, 378-379, 456-465, 521.

[132] Véase cap. II.

[133] A. Pfeffer, «Israel Has Little to Fear from the International Criminal Court», Haaretz, 20 de mayo de 2014; Y. J. Bob, «Former ICC Prosecutor: High Court approval could save settlements from war crime label», The Jerusalem Post, 10 de diciembre de 2015.

[134] Incluso los honorables funcionarios internacionales de quienes esperábamos lo mejor nos decepcionaron. El distinguido

diplomático Álvaro de Soto redactó un cáustico informe documentando la magnanimidad de Estados Unidos e Israel, por un lado, y la debilidad de la ONU, por el otro, durante su mandato como enviado de la ONU para el proceso de paz de Oriente Próximo. Aun así, reservó su lenguaje más duro para Hamás, a quien repetidamente acusó de iniciar la violencia a la que Israel responde. De hecho, el propio De Soto confesó: «Parece haber el reflejo, en cualquier situación dada en la que la ONU va a tomar postura, de preguntar primero cómo reaccionarán Israel o Washington, antes de preguntarse cuál es la postura correcta. Yo confieso que no estoy por completo libre de ese reflejo y lo lamento». Álvaro de Soto, End of Mission Report, mayo de 2007, cit., §§ 25, 74-76, 134. Pero hay que decir en su favor que De Soto sí menciona el importante detalle de que a Hamás nunca se le ha dado la oportunidad de gobernar y de convertirse así en un actor político responsable: véase cap. I.

[135] Septiembre de 2015.

[136] Amnesty International, «Time to Address Impunity: Two years after the Gaza / Israel war», 8 de julio de 2016.

[137] Véase también cap. XIII sobre este incidente.

[138] Véase cap. V.

[139] NGO Monitor, «Amnesty International’s Goldstone Campaign, with a Review of Statements from Other NGO’s», 22 de octubre de 2009, disponible en [ngo-monitor.org/article/amnesty_international_goldstone_s_cheat_sheet_#amnesty].

[140] Amnesty International, «UN Must Ensure Goldstone Inquiry Recommendations Are Implemented», 15 de septiembre de 2009, cursivas añadidas.

[141] Amnesty International, «Time to Address Impunity», cursivas añadidas.

[142] International Committee of the Red Cross, People on War: Perspectives from 16 countries, Geneva, 2016, pp. 7, 9.

[143] International Court of Justice, Advisory Opinion, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 8 de julio de 1996, §§ 95-97.

XIII. TRAICIÓN II: EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU

En agosto de 2014 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU nombró una misión de investigación para «investigar las supuestas violaciones del derecho humanitario internacional y los derechos humanos» durante la Operación Margen Protector (2014)[1]. William Schabas, un respetado jurista internacional, fue designado presidente de la misión. Israel inmediatamente se puso en movimiento para destituirlo, porque había proferido previamente sacrilegios de esta índole: «¿Por qué procesamos al presidente de Sudán [en el Tribunal Penal Internacional] por Darfur, y no al presidente de Israel por Gaza?». El ministro de Exteriores, Avigdor Lieberman, hizo una extraña analogía comparando la incorporación de Schabas a «nombrar a Caín para investigar quién mató a Abel». Incapaz de resistir esta tormenta, Schabas «dimitió» y fue sustituido por una jueza estadounidense, Mary McGowan David, que venía del Estado de Nueva York[2]. Las consecuencias en este punto eran tan predecibles como cuando el secretario general de la ONU nombró a Álvaro Uribe vicepresidente del Comité de Investigación después del asalto de Israel al Mavi Marmara[3]. La traición había comenzado.

En junio de 2015, la misión del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU (UNHRC) publicó su informe[4]. En él, predeciblemente, se acusaba a Hamás[5] de haber cometido crímenes de guerra. Pero una lectura atenta del Informe de la ONU no podía tampoco complacer a Israel. En sus análisis separados de los numerosos incidentes registrados durante el asalto, los hallazgos fácticos del Informe sugerían reiteradamente que Israel también podría haber cometido crímenes de guerra. Un lector poco familiarizado con los hechos quizá pudiera quedar impresionado por la ecuánime presentación del Informe, mientras que un lector familiarizado con ellos probablemente se escandalizaría ante este equilibrio espurio. Lo curioso del Informe era que sí hacía una crónica, a menudo hasta en sus detalles más escabrosos, de los horrores que Israel había infligido sobre Gaza. No obstante, después procedía a emitir análisis

legales que metódicamente, y en muchos casos cómicamente, aplacaban la gravedad de los crímenes de Israel. En otras palabras, replicaba exactamente el modus operandi exculpatorio de los informes de Amnistía Internacional sobre Margen Protector[6]. La consecuencia fue que el informe de la ONU presentaba un cuadro totalmente engañoso y distorsionado sobre lo que había ocurrido en Gaza. Daba la impresión de que Margen Protector era una campaña militar legítima, desgraciadamente lastrada por diversos excesos. De hecho, el ataque había sido una campaña de terror diseñada si no para quebrar, sí en cualquier caso, para atemperar la voluntad de resistencia de Gaza. Para demostrar convincentemente el sesgo del Informe, no queda otra alternativa que explorar sus conclusiones separadamente. Esperamos que cuando el lector haya terminado este capítulo esté convencido de que el autor ha llegado a esta dura conclusión no por mala fe o prejuicios, sino después de haber examinado cuidadosamente las pruebas, aunque también perciba su creciente sensación de desesperación mezclada con indignación, porque, incluso a estas alturas, cuando ya ha pasado un río de sangre aparentemente interminable bajo el puente, a lo largo de las innumerables «operaciones» de Israel que tienen como objetivo al pueblo mártir de Gaza, un documento que lleva el sello del Consejo de los Derechos Humanos aún esté tan desprovisto de valor e integridad.

El Informe de la ONU sobre Margen Protector no carece de rasgos redentores. Confirmaba previas declaraciones legales acreditadas sobre una serie de puntos importantes. Así pues, reiteraba que «el Territorio Palestino Ocupado se compone de Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este y la Franja de Gaza»[7]. También concluía, después de un análisis minucioso, que, a pesar de su retirada, anunciada a bombo y platillo, de 2005, Israel «ha conservado el control efectivo de la Franja de Gaza. […] Gaza continúa bajo la ocupación de Israel»[8]. El Informe seguía afirmando que «el bloqueo de Gaza por parte de Israel» ha estado «estrangulando la economía de Gaza»; que la situación crítica en Gaza desde el final de Margen Protector «no puede evaluarse de manera separada respecto del bloqueo impuesto por Israel»; y que la ayuda humanitaria internacional actual «no es un sustituto del

cese del bloqueo»[9]. El pronunciamiento más sonoro de todo el Informe pedía que Israel «levantara inmediatamente y de manera incondicional el bloqueo sobre Gaza»[10]. En otro punto clave legal, el Informe rechazaba el argumento israelí de que, si podía evitar la captura de uno de sus soldados, sería legítimo el recurso a una fuerza en otro caso desproporcionada; el examen de proporcionalidad, había defendido Israel, «debe tener en cuenta la consideración estratégica de negar a los grupos armados la ventaja que podrían obtener de Israel en unas negociaciones por la liberación del soldado capturado». El Informe apuntaba convincentemente a que este razonamiento constituía «una interpretación errónea del derecho humanitario internacional»:

La ventaja que los grupos armados podrían obtener en una negociación no depende únicamente de la captura de un soldado, sino de cómo decida el gobierno de Israel reaccionar después de que se produzca la captura. La estrategia militar de la ventaja política buscada, por lo tanto, no es una ventaja militar concreta y directa, tal como lo exige el derecho humanitario internacional […]. De hecho, la interpretación propuesta de la ventaja militar anticipada, que permitiría que las consideraciones políticas abstractas y las estrategias a largo plazo se incorporaran al análisis de proporcionalidad, tendría como consecuencia vaciar el principio de proporcionalidad de cualquier elemento protector[11].

No obstante, estas pocas decisiones legales que contiene el Informe, aunque se agradecen, no rediman ni remotamente sus muchas conclusiones problemáticas y, en ocasiones, escandalosas.

El encargo que se le hace al Informe de la ONU formalmente cubría únicamente ius in bello (las reglas que cubren el comportamiento durante un conflicto armado) y no ius ad bellum (las normas que gobiernan el recurso al conflicto armado). No obstante, sus aportaciones sobre el desencadenante de la Operación Margen Protector justificaban efectivamente la ofensiva israelí. Empezaba de manera neutral: «Las hostilidades de 2014 surgen en el contexto de la prolongada ocupación de Cisjordania, incluyendo Jerusalén

Este, y de la Franja de Gaza, así como del aumento del número de misiles lanzados sobre Israel»[12]. Pero después, cruzando al terreno jurídico del ius ad bellum, el Informe cita sin matices las justificaciones públicas israelíes para lanzar el primer ataque aéreo y la posterior invasión terrestre[13]: «El 7 de julio de 2014, las fuerzas de defensa israelíes comienzan la Operación Margen Protector en la Franja de Gaza, con el objetivo explícito de detener los ataques de misiles por parte de Hamás y de destruir su capacidad para llevar a cabo operaciones contra Israel»; «El 17 de julio de 2014, las IDF lanzan una operación terrestre en Gaza. Las fuentes oficiales israelíes indican que se hizo para degradar la infraestructura militar de las "organizaciones terroristas" y [neutralizar] su red de túneles de asalto que cruzaban bajo la frontera»[14]. Pero, desde un punto de vista legal, Israel no podría haber recurrido a la defensa propia armada hasta que no hubiera agotado todas las opciones no violentas y, por lo tanto, fuera impelido por la «necesidad» a lanzar un ataque[15]. En aquel momento, Israel sí tenía a mano un remedio eficaz no violento. Incluso los más escandalosos propagandistas israelíes admitían que el objetivo de Hamás desde el inicio de las hostilidades era «abrir de nuevo las fronteras de Gaza»[16]. El Banco Mundial informaba en aquel tiempo de que «el acceso a Gaza sigue estando altamente controlado», mientras que Amnistía había calificado el asedio de «una forma de castigo colectivo» y el Informe de la ONU pedía que Israel «levantara, de manera inmediata e incondicional, el bloqueo sobre Gaza»[17]. Se deduce que si el objetivo de Israel era que cesaran los ataques con misiles de Hamás, entonces le habría bastado con poner fin al asfixiante asedio sobre Gaza, que habría colocado a Israel en el lado correcto de la ley y evitado su «necesidad» de una defensa propia armada, a la vez que a los gazatíes les habría evitado un ataque mortífero y los habría, finalmente, dejado respirar. Pero ¿qué hay de los «túneles de asalto que cruzaban la frontera» de Hamás? Hipotéticamente, vamos a aceptar que suponían una amenaza mortal. ¿Qué le impedía a Israel sellar los túneles desde su lado de la frontera, como había hecho Egipto para bloquear el tráfico transfronterizo y las incursiones entre Gaza y el Sinaí?[18]. De hecho, a mediados de 2016, Israel anunció sus planes para «construir un muro de hormigón que cubriera decenas de metros por encima y debajo del nivel del suelo, para responder a la amenaza de los túneles de ataque de

Hamás»[19]. Antes, ese mismo año, el ministro de Defensa había anunciado que la «solución para los túneles» costaría algunos cientos de millones de dólares, pero que «esa financiación no se ha previsto en el presupuesto de defensa de los próximos años» –lo que parecería indicar que los líderes israelíes no le atribuían una especial urgencia al peligro que planteaban–[20]. Dice mucho del asentado sesgo del Informe que ni siquiera pondere las opciones de Israel aparte de la fuerza armada, sino que alegremente repita la hasbara israelí.

El informe de la ONU equilibra perfectamente sus veredictos generales sobre Margen Protector: «La alta incidencia de pérdidas de vidas humanas y heridas durante las hostilidades de 2014 es terrible»; «Los palestinos y los israelíes quedaron profundamente conmocionados por los acontecimientos del verano de 2014»; «Las hostilidades de 2014 han tenido un enorme impacto en las vidas palestinas e israelíes. La escala de la devastación no tenía precedentes y la cifra de muertos y el sufrimiento causado por las heridas y los traumas son elocuentes»; «La comisión se conmovió profundamente por el inmenso sufrimiento de las víctimas palestinas e israelíes, que han sido sometidas a repetidas oleadas de violencia»[21]. En general, el equilibrio es una cualidad admirable: connota objetividad y ausencia de partidismo. Pero equilibrar una cuenta de resultados tan desequilibrada es como un acto partidista de tergiversación. Las conclusiones de las comisiones nombradas por la ONU en otras situaciones sí toman nota cuando las cuentas están claramente inclinadas de un lado[22]. Es cierto que la adjudicación de espacio dentro del Informe no estaba distribuida de manera tan igual. La ratio de párrafos dedicados a las infracciones del derecho internacional por parte de Israel, en comparación con los de Hamás es de 4:1[23], mientras que la ratio de párrafos dedicados a los estragos materiales y humanos en Gaza, frente a los de Israel, se queda en 4:3[24]. Aun así, aunque «favorables» a Gaza, estas ratios no se acercan ni remotamente a las magnitudes relativas de muerte y destrucción durante Margen Protector. De hecho, como el mismo Informe documenta, Israel mató a tantos niños y niñas palestinos en Cisjordania –que ni siquiera era un escenario bélico– como el número total de muertos israelíes durante Margen Protector e Israel destruyó más casas palestinas en Cisjordania que el total de casas destruidas en Israel[25]. Con cualquier métrica que se

compare, el desequilibrio colosal emerge ante nuestros ojos (véase el cuadro 12). La inmensa desigualdad que se registra en estas ratios apenas era perceptible en el Informe. Por ejemplo, mientras que los datos en crudo, como los de las cifras totales de bajas, típicamente ocupan un lugar destacado en los documentos en defensa de los derechos humanos y, por lo tanto, el número de bajas israelíes apareció enseguida en el Informe[26], la cifra de bajas palestinas quedó enterrada en el fondo de sus páginas[27]. Por mucho que jugueteara con estos datos para conservar la verosimilitud de su aspiración al equilibrio, el Informe, no obstante, tiene que verter un contenido sustancial en sus muchos párrafos dedicados a las «terribles» pérdidas de vidas humanas de Israel, a la «devastación» y al «inmenso sufrimiento». Pero, por inhumano que suene, el hecho es que ahí no había mucho que decir. ¿Cuántas líneas podía invertir el Informe en la muerte de un niño israelí y en la destrucción de un hogar israelí? Resolvía este dilema elevando a una infracción de las leyes de la guerra, incluso casi a un crimen de guerra, el que Hamás infligiera un daño psicológico / emocional a Israel.

Cuadro 12. Operación Margen Protector: algunas comparaciones críticas

	Gaza	Israel	Ratio
Civiles asesinados	1.600	6	270:1
Niños asesinados	550	1	550:1
Casas gravemente dañadas o destrozadas	18.000	1	18.000:1
Lugares de oración destrozados o dañados	203	2	100:1
Guarderías destrozadas o dañadas	285	1	285:1
Servicios médicos dañados o destrozados	73	0	73:0

▪

Nota: véanse las fuentes citadas en la cuarta parte del presente libro.

En los conflictos bélicos, las investigaciones en defensa de los derechos humanos se centran propiamente en las violaciones de las leyes de la guerra; en particular, en los ataques intencionados, indiscriminados y desproporcionados sobre propiedad y población civil. Así, en la sección sobre Gaza del capítulo «Impact» del informe de la ONU, en su mayor parte, se relata la muerte y destrucción masiva que Israel desató sobre la población civil de Gaza; únicamente tres párrafos al final apuntan al «trauma» permanente y la «desesperanza» en la Franja[28]. Sin embargo, la sección sobre Israel del capítulo «Impact» invertía estas proporciones. Prudentemente se callaba el número total de víctimas civiles israelíes y apuntaba el daño económico que Hamás había causado en los tres párrafos concluyentes[29]. (Para ejemplificar este daño, destacaba a la miembro de un kibutz, cuyo «negocio de fotografía en Beer Sheva cesó su actividad durante la guerra porque a ella le daba demasiado miedo coger el transporte público, lo que hizo que se endeudara con otros muchos miembros del kibutz».) En lugar de esto, el Informe abría la sección sobre Israel con un perfil del «impacto psicológico» de la Operación Margen Protector, y después procedía a describir estos efectos con unas repeticiones agotadoras, amontonando una anécdota de angustia sobre otra de «ansiedad», como si, incluso después de inventarse esta rúbrica poco ortodoxa para igualarse con la sección sobre Gaza, aún se esforzara en ocupar espacio (véase el cuadro 13). El derecho internacional prohíbe «actos o amenazas de violencia cuyo fin principal sea extender el terror sobre la población civil»[30]. No obstante, las leyes de la guerra no prohíben actos de violencia que pudieran inducir «terror en algún grado» entre los civiles, lo cual es un acompañamiento inevitable y una consecuencia del recurso a la fuerza armada[31]. De no ser así, las leyes de la guerra prohibirían efectivamente los principales conflictos armados; su fin, sin embargo, no es eliminar la guerra –una meta utópica, en cualquier caso, en el tiempo presente–, sino más bien minimizar su carácter destructivo. Las diversas angustias, tensiones, miedos y traumas que

experimentaron los civiles israelíes durante Margen Protector parecían entrar en esta categoría de estados mentales que, por muy desagradables y confusos que puedan ser, se esperan inevitablemente en un conflicto armado. Elevar tácitamente la tensión y el trauma a la misma altura que la muerte y destrucción civil mina la distinción legal fundamental entre aquellos actos de guerra que la humanidad ha decidido abolir (o contener) y aquellos que hasta la fecha no ha decidido que sea así. Si una sirena de autodefensa israelí, que suena por un ataque de misiles de Hamás, causa angustia entre los israelíes, de ahí no se sigue que Hamás quebrantara las leyes de la guerra. En efecto, el Informe se excede de su encargo legal ampliando y, por lo tanto, desvirtuando las leyes de los conflictos armados. Más aún, igualando las condiciones de sufrimiento que estas leyes tanto se han esforzado en diferenciar, homogeneiza situaciones que, por acuerdo común y como punto de ley, son cualitativamente distintas. Si los israelíes experimentaron la angustia de no poder salir de sus casas, los palestinos experimentaban la angustia de no tener una casa a la que volver. El Informe de igual modo no distingue entre situaciones tan radicalmente diferentes de grado como para hacerlas cualitativamente incomparables. Si los israelíes experimentaban miedo y se hacían heridas cuando se dirigían a un refugio, entonces los gazatíes experimentaban el miedo de no tener hacia dónde huir en medio de un infierno y después ser objetos de un ataque deliberado; o, si tenían suerte de poder resguardarse en los escasos refugios, ser asesinados por las armas de precisión israelíes que los atacaban. Si los israelíes tenían que soportar la conmoción de los cohetes caseros, entonces los gazatíes tenían que soportar la conmoción de las bombas de una tonelada. No se puede poner en duda que los redactores del Informe conocían estas distinciones elementales. Eligieron, no obstante, cargárselas, no por una elevada sensibilidad ante el espectro completo del sufrimiento humano, o por una ilustrada negativa a jerarquizar el sufrimiento humano, sino, casi con toda seguridad, porque de otro modo las pretensiones de equilibrio del Informe no se sostendrían. Si el Informe hubiera cumplido adecuadamente su encargo esencial de investigar las violaciones de las leyes de la guerra durante Margen Protector, toda la sección israelí en el capítulo «Impacto» podría haberse reducido a una frase: seis civiles fueron asesinados y una casa fue destruida.

Cuadro 13. Operación Margen Protector: impacto sobre Israel

■

«Los niños no podían hablar, temblaban por la noche, mojaban la cama. Ah
Muchos israelíes han experimentado lo que describen como un sufrimiento
El impacto psicológico del conflicto sobre los civiles israelíes se manifiesta t
Los niños, especialmente quienes viven en zonas vecinas a Gaza, sufren peo
159 personas fueron heridas o traumatizadas como resultado de tropezar o

▪

Nota: las declaraciones están sacadas de los testimonios israelíes citados por el Informe de la ONU.

a Informe de la ONU, § 559.

b Ibid., § 560.

c Ibid., § 563.

d Ibid., § 564.

e Ibid., § 568.

La operación de convertir el producir miedo en una infracción de las leyes de la guerra, que hace el Informe de la ONU, arruina igualmente su tratamiento de la red de túneles de Hamás. Sí reconocía que «los túneles se utilizaban únicamente para llevar a cabo ataques dirigidos contra las posiciones de las IDF en Israel en las inmediaciones de la Línea Verde, que son objetivos militares legítimos»[32]. Pero, aun así, se regodeaba en la «sensación de inseguridad» y en los «ataques de pánico», en el «trauma y el miedo persistentes», en la «gran angustia», etc. que los túneles producían a los israelíes[33]. Después pasaba a sugerir que el miedo que estos túneles inducían equivalía a una violación de las leyes de la guerra. En sus «observaciones concluyentes», el Informe adjuntaba estas «graves preocupaciones» en lo que se refiere a Hamás: «La naturaleza inherentemente no discriminatoria de la mayoría de los proyectiles que dirigió hacia Israel [...] y [...] apuntar a civiles israelíes, lo que viola el derecho humanitario internacional y puede llegar a ser un crimen de guerra. El aumento de los niveles de miedo entre los civiles israelíes como resultado del uso de los túneles era palpable»[34]. Sus «recomendaciones» finales pedían a Hamás de manera correlativa «que respetara los principios de la distinción, la proporcionalidad y la precaución, incluyendo el terminar con todos los ataques sobre la población y la propiedad civil israelí y detener todos los ataques con misiles, o cualquier otra acción que pudiera extender el terror entre la población civil en

Israel» (cursivas añadidas). Las únicas «otras acciones» que se recogen en el Informe fueron las excavaciones e infiltraciones por los túneles de Hamás. Pero si Hamás debe desistir de estas excavaciones / infiltraciones por debajo del suelo –que solamente se usan para atacar a combatientes–, porque producen miedo a la población israelí, ¿no debería Israel desistir de ataques aéreos con bombas, misiles y proyectiles –que se dirigen en su mayoría contra civiles–, porque producen miedo a los gazatíes? Además, el derecho internacional no prohíbe que un pueblo que lucha por su autodeterminación recurra a las armas, mientras que sí prohíbe que un Estado que suprime una lucha de este tipo despliegue fuerza violenta[35]. Israel ha privado al pueblo de Gaza de su derecho a la autodeterminación mediante una ocupación impuesta de manera externa[36]. Sin duda, entonces, Hamás tiene derecho a atacar mediante túneles a los combatientes israelíes que imponen esta ocupación desde fuera, por mucha angustia que estos ataques a través de los túneles pudieran producir a la población civil. ¿O a los palestinos se les permite usar las armas solamente si no inquietan a los israelíes?

Por muy ingeniosas que sean las estrategias retóricas que despliega el informe de la ONU para igualar las infracciones del derecho internacional por parte de Hamás y de Israel (véase el cuadro 14 para otra muestra), aún no puede colmar el abismo que separa la devastación infligida, respectivamente, por cada bando. Es posible, por supuesto, que incluso si hubiera causado menos muerte y destrucción, Hamás hubiera cometido tantos crímenes de guerra como Israel. Pero es también cierto que, una vez que la proporción alcanza magnitudes de, digamos, 550:1 (niños asesinados por Israel versus niños asesinados por Hamás) o de 18.000:1 (hogares destruidos por Israel frente a hogares destruidos por Hamás), una afirmación así no solamente carece de plausibilidad, sino que también resulta claramente ridícula. ¿Cómo, entonces, resuelve este dilema el Informe? En parte tergiversando los hechos relevantes pero, más significativamente, enturbiando la normativa relevante, invocando repetidamente legislación irrelevante. Esta hipocresía permea el tratamiento que hace el informe de los crímenes de guerra de Hamás e Israel.

Cuadro 14. «La Comisión anota...»

▪

El Informe de la ONU estaba plagado con declaraciones exculpatorias de Isr

▪

a UN Report, §§ 225, 412, 610 (véase también §§ 232, 238, 385).

b Ibid., § 408 (véase también § 412).

c Action on Armed Violence (AOAV), Explosive States: Monitoring Explosive Violence in 2014, 2015.

d UN Report, §§ 461, 477. Véase también cap. 12.

e UN Report, § 477.

f Ibid., § 385 (véase también § 376). El Informe también aducía «hipotéticamente» en defensa de Israel (ibid., § 339), aunque no fuera una coartada planteada por Israel y fabricaba argumentos a favor de Israel (ibid., §365) que admitían ellos mismos que las pruebas contradecían.

g Ibid., § 472.

h Los fragmentos escogidos supuestamente de los manuales de Hamás que Israel tradujo están llenos de interpretaciones tendenciosas intercaladas. State of Israel, The 2014 Gaza Conflict, 7 July–26 August 2014: Factual and Legal Aspects, 2015, §§ 125-126.

i Breaking the Silence, This Is How We Fought in Gaza: Soldiers' Testimonies and Photographs from Operation «Protective Edge», 2014.

j UN Report, § 418.

k Véase cap. 11 y cap. 12.

Los crímenes de guerra de Hamás. El Informe de la ONU prepara el escenario para su acusación de Hamás citando directa o indirectamente las fuentes oficiales israelíes que describen el formidable arsenal de Hamás[37]. Pero el desempeño en la batalla de estas armas apunta claramente a que la mayor parte eran poco más que petardos reforzados[38]. El Informe también regurgita puntualmente las

afirmaciones israelíes respecto a los impresionantes resultados del sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro[39], incluso aunque reputados expertos y los hechos sobre el terreno los contradecían[40]. En una admisión insólita, el Informe sí observa que, según los «expertos en seguridad», la «política oficial declarada» de Hamás durante Margen Protector era «centrarse en objetivos militares o semimilitares y evitar otros, especialmente civiles»[41]. Seguía mencionando ejemplos documentales en los cuales Hamás parecía estar atacando a combatientes israelíes y propiedad militar, mientras que Israel mismo admitía que los proyectiles de mortero de Hamás habían asesinado a 10 combatientes de las IDF apostados en el lado israelí de la frontera[42]. El Informe también señalaba que Hamás había intentado «en algunos momentos» advertir a los civiles israelíes de los inminentes ataques y, de hecho, que esas alarmas por parte de Hamás fueron mucho más efectivas que las que produjo Israel, «puesto que, a diferencia de Gaza, los residentes podían huir a otras zonas de Israel menos expuestas a las amenazas»[43]. No obstante, el Informe concluía que «la amplia mayoría» de los proyectiles de Hamás apuntaban a «los centros de población en Israel»[44]. Dedicaba 15 párrafos completos a describir con detalles gráficos los efectos de estos ataques de Hamás, incluso aunque únicamente seis civiles israelíes fueron asesinados y el daño a la propiedad era desdeñable. A menudo se ha apuntado (aunque el Informe no lo hace) que si murieron tan pocos civiles fue debido únicamente a la Cúpula de Hierro y que un cálculo adecuado daría una idea del probable número de muertes civiles en su ausencia. El argumento es fácticamente falso –Cúpula de Hierro probablemente no salvó muchas vidas y tal vez no salvara ninguna–, e, incluso aunque fuera cierto, es irrelevante: si hubieran muerto más civiles porque Israel careciera de su sistema de defensa / refugio y porque sus edificios fueran menos sólidos, ¿habría que contar también las víctimas que se hubieran producido si los israelíes vivieran en condiciones por debajo de lo normal, como las de Gaza? Si hubiera que basar el cálculo en «todas las cosas por igual», se eliminaría la injusticia básica, consistente en que Israel y Palestina no son iguales.

El Informe de la ONU concluyó que los ataques con proyectiles de Hamás «podrían» constituir «crímenes de guerra»:

– Los ataques con misiles de Hamás: «Los misiles no pueden apuntar a un objetivo militar específico y, por lo tanto, los ataques que emplean estas armas constituyen ataques indiscriminados»; «las declaraciones […] indican la intención de dirigir estos ataques contra civiles».

– Los ataques con mortero de Hamás: «Las declaraciones […] indican que en algunos casos […] se buscaba atacar a las comunidades civiles […]. Si se usaron para atacar propiedad o población civil, esto sería una violación del principio de distinción»; «en los casos en los cuales los ataques se dirigían a objetivos militares localizados entre la población y propiedad civil o en sus inmediaciones, los morteros no son el arma más adecuada. La naturaleza imprecisa de los morteros hace que le sea difícil al bando atacante, si usa este arma en una zona en la que hay una concentración de civiles, distinguir entre la propiedad y población civil y el objetivo militar del ataque»[45].

En su defensa, Hamás alegó que «los misiles palestinos son “primitivos” y no muy avanzados tecnológicamente, pero que, no obstante, las facciones trataron de dirigir sus misiles hacia los objetivos militares en Israel»[46]. El Informe, breve y fríamente, responde: «La capacidad militar de las partes de un conflicto es irrelevante en lo que respecta a su obligación de respetar la prohibición de ataques indiscriminados». Las razones humanitarias de la prohibición del uso de armamento indiscriminado son evidentes. Pero la noción de la indiscriminalidad es relativa. Varía según el sistema de guía más sofisticado disponible en la actualidad para cada tipo de armamento. Así que es igualmente evidente que la prohibición contra las armas indiscriminadas discrimina a los Estados o a los actores no estatales que sean tan pobres que no se puedan permitir tecnología punta. En el caso que nos ocupa, el Informe, efectivamente, criminaliza casi el total del primitivo arsenal de Hamás. Y, por lo tanto, niega a Gaza el derecho «inherente» (anclado en la Carta de la ONU) de la defensa propia armada y el derecho (efectivamente sancionado por el derecho internacional) a la resistencia armada en su lucha por la autodeterminación. Incluso aunque se admita que, a pesar de sus

efectos discriminatorios, se pueden alegar razones convincentes para conservar intacta la prohibición, aun así no es propio de un documento sobre derechos humanos rechazar perentoriamente como «irrelevante» una objeción totalmente razonable (aunque debatible). Llama también la atención lo mucho más sensible que se mostraba el Informe ante las inquietudes israelíes. Por ejemplo, el Informe «reconoce el dilema al que se enfrenta Israel cuando libera información que puede desvelar en detalle los objetivos de los ataques militares, puesto que dicha información puede estar clasificada y poner en peligro fuentes de información»[47]. Aunque aún se coloca «la carga de la prueba […] sobre Israel para que proporcione detalles suficientes sobre la elección de sus objetivos, y permitir así una valoración independiente de la legalidad de los ataques», el Informe no solo demuestra una sensibilidad ausente en su altivo desdén por Hamás, sino que da crédito a la coartada israelí de que la información se había retenido por razones de seguridad y no porque su publicación pudiera minar las mentiras oficiales. El Informe seguía infiriendo un motivo siniestro tras los ataques con misiles de Hamás. Si estos proyectiles no podían apuntar con precisión a los objetivos militares, entonces el Informe «no puede excluir la posibilidad de que los ataques indiscriminados con misiles constituyan actos violentos cuyo fin principal sea producir terror entre la población civil»[48]. Producir terror podría haber sido un motivo para Hamás, pero se nos ocurren otros posibles motivos. Los ataques con misiles podrían haber sido «represalias beligerantes» (algo que no prohíbe el derecho internacional)[49] para forzar a Israel a parar y desistir de su asalto terrorista sobre la sociedad gazatí. El Informe mismo apunta a que Hamás «publicó una declaración confirmando [su] intención de atacar a civiles israelíes como respuesta al “ataque israelí sobre civiles palestinos en sus hogares y sus refugios”»[50]. O pensemos en el motivo que confesó el líder de Hamás, Khalid Mishal, durante la Operación Plomo Fundido (2008-2009): «Nuestros modestos proyectiles caseros son nuestro grito de protesta ante el mundo»[51]. Uno se pregunta por qué el Informe no sopesó estas posibilidades más benignas.

El derecho internacional exige que todas las partes de un conflicto adopten «todas las precauciones en la elección de sus medios y métodos de ataque con vistas a evitar […] heridas a la población civil y daños a la propiedad civil»[52]. El Informe de la ONU

alegaba que, a pesar de los sustanciales impedimentos para su investigación, fue capaz de adivinar «patrones de comportamiento» por parte de Hamás que quebrantaban esa obligación legal[53]. Citaba un cuarteto de incidentes en los que Hamás disparó misiles en las inmediaciones de civiles[54]. Y resulta que Amnistía apuntó exactamente estos mismos cuatro incidentes en su acusación a Hamás[55]. La duplicación sugiere una escasez de pruebas que lo corroboren. El Informe cita también un puñado de ejemplos en los que Hamás llevó a cabo «operaciones militares dentro de lugares que se benefician de una protección especial bajo el derecho internacional o en sus inmediaciones», en especial, en los alrededores de dos o tres escuelas y de una iglesia. Estos incidentes también se citaban en investigaciones previas[56]. El Informe señalaba, además, que «las fuentes oficiales israelíes» acusaban repetidamente a Hamás de violar su obligación de «adoptar unas precauciones viables», pero que «no fue capaz de verificar de manera independiente» estas alegaciones[57]. El Informe reconocía que la obligación de las «precauciones viables» «no es absoluta»; que «incluso si hay zonas que no son residenciales, el pequeño tamaño de Gaza y su densidad de población hace especialmente complicado que los grupos armados puedan cumplir» esa obligación; y que varios firmantes del instrumento internacional relevante estipulaban que «en el caso de países densamente poblados, el requisito de evitar situar los objetivos militares dentro de las zonas densamente pobladas puede ser difícil de aplicar»[58]. Aun así, el Informe concluía que, a la luz de los «números de casos» en los que Hamás «llevó a cabo operaciones militares en el interior o en las inmediaciones de propiedad civil y de lugares específicamente protegidos, no da la impresión de que este comportamiento fuera simplemente una consecuencia del curso normal de las operaciones militares» y, «por lo tanto», que «no siempre se cumplió» la ley[59]. Aunque se trata de una conclusión cauta y matizada, hay de todos modos que plantearse la pregunta: ¿el Informe la demuestra? Tendría que mostrar que los ejemplos que documenta prueban una elección deliberada por parte de Hamás de no evitar la propiedad civil o protegida, y que no se trataba simplemente de incidentes aleatorios consecuencia de «el curso normal de la operación militar» en un terreno con una alta densidad de población civil. Pero el puñado de incidentes que recicla el Informe, durante un conflicto armado de 51 días, en el

que Hamás disparó 7.000 proyectiles y se enfrentó a un ejército invasor, en el que ambos bandos sufrieron un número de bajas hasta entonces inaudito, no parece que alcance el umbral probatorio de un «patrón»[60]. El Informe no solamente no conseguía acreditar suficientemente esa afirmación, sino que también se solazaba en especulaciones sin base. Por ejemplo, afirmaba que «si se confirma que al usar [...] localidades para llevar a cabo operaciones militares, los grupos armados lo hacían con la intención de usar la presencia de civiles o de personas hors de combat [...] para evitar que sus posesiones militares fueran atacadas, esto constituiría una violación de la prohibición del derecho consuetudinario de usar escudos humanos» y «equivaldría a un crimen de guerra»[61]. Pero el Informe no proporcionaba una brizna de prueba que demostrara una «intención» así. ¿Qué sentido tendría una conjetura infundada de la índole de este ejemplo[62], excepto para establecer una imagen falsa en la mente del lector, o para apaciguar a Israel, que acusaba repetidamente a Hamás de usar escudos humanos, además de para ambas cosas? En su especulación más audaz –o escandalosa–, el Informe apuntaba a criminalizar la resistencia civil no violenta, porque planteaba si Hamás podría estar aprovechándose de ella:

En el caso del bombardeo de un edificio residencial que examinó la comisión, la información recogida indica que, después de una advertencia específica por parte de las IDF de que la casa iba a ser atacada, algunas personas se dirigieron a la azotea de la casa para «protegerla». Si miembros de los grupos armados palestinos les hubieran indicado hacerlo, esto equivaldría al uso de la presencia de civiles en un intento de escudar objetivos militares y protegerlos del ataque, violando la prohibición del derecho consuetudinario de usar escudos humanos. En relación con este incidente, a la comisión le inquieta la supuesta petición de un portavoz de Hamás a la población gazatí para que adoptara la práctica de proteger sus hogares del ataque subiéndose a las azoteas. Aunque la petición se dirigía a los residentes de Gaza, se puede ver y entender como una llamada a que los grupos armados palestinos usen escudos humanos[63].

En lugar de mostrar compasión por los gazatíes que arriesgaban su vida y su integridad para proteger sus casas y las de sus vecinos, el Informe se centraba en Hamás para negar, sobre una base puramente especulativa, uno de los pocos medios de resistencia no violenta que la población tenía a su disposición en mitad de un ataque aniquilador, llegando incluso al punto de achacar a la predisposición del movimiento islámico hacia estos actos conmovedores de voluntad, cuya estirpe espiritual se remonta a Gandhi[64], el embrión de un crimen de guerra. También nos pasma que el Informe haya designado una morada claramente civil como un «objetivo militar»: ¿es que perdía automáticamente su estatus de protección en cuanto Israel decidía atacarla, o es que el Informe parte de la premisa de que todo en Gaza estaba, si no alineado, sí ligado con el terrorismo?

Finalmente, el Informe de la ONU acusaba a Hamás de «ejecuciones extrajudiciales» de sospechosos de colaboracionismo durante Margen Protector. «El hecho de que la mayoría de las víctimas fueran arrestadas y encerradas antes del conflicto», observaba, «suscita preocupación de que fueran ejecutadas para aumentar la presión sobre la población de Gaza, con la idea de prevenir que otros espiaran»[65]. La mayoría de las ejecuciones «se produjeron el día después de que tres [jefes] de Hamás fueran asesinados por las IDF». El Informe también señala que debido al «estigma» que tienen los colaboracionistas, estas ejecuciones tuvieron un efecto «devastador» sobre los miembros de sus familias, que tenían que lidiar con las «tachas indelebles» en su «reputación y su honor». Con tanta comprensión como exhibía el Informe ante un supuesto dilema israelí (el de liberar información clasificada), podría haberse parado a pensar el dilema de Hamás, que tenía que resistir a una brutal invasión estando invadido ya de colaboracionistas internos, directa o indirectamente en la nómina del enemigo. El revolucionario ruso Leon Trotski defendía convincentemente que, en mitad de una invasión extranjera, la amenaza de la cárcel no disuadiría a los potenciales colaboracionistas, puesto que la premisa misma para alinearse con el enemigo era la confianza en su victoria: «No se les puede asustar con la amenaza del encierro, puesto que no creen que vaya a durar. Es únicamente este hecho sencillo pero

decisivo lo que explica el recurso generalizado al fusilamiento»[66]. Plantearse la pregunta de cómo, si no, iba Hamás a disuadir a los colaboracionistas no es de ninguna manera disculpar las ejecuciones de Hamás. ¿Cómo, si no, se supone que podía Hamás evitar a los colaboracionistas? La prohibición de ejecutar a los colaboracionistas se diría que entra en la misma categoría de la prohibición de las armas indiscriminadas: es un dilema insoluble. Habría que recordar aquí que un líder de la insurrección del gueto de Varsovia expresaba que «nuestra mayor culpa» fue que «inmediatamente, desde el primer día, no matáramos» a los colaboracionistas judíos. «Si hubiéramos matado a unos cuantos, otros habrían tenido miedo de unirse a la policía. Deberíamos haberlos colgado de las farolas, como amenaza. […] Estoy convencido de que, siempre que haya una traición interna, la guerra debe empezar por destruirla»[67]. El Informe decide que estas ejecuciones de Hamás no solamente «podrían», sino que claramente «equivalían a un crimen de guerra» y exhortaba a que «quien fuera responsable de los asesinatos […] fuera enjuiciado»[68]. En ninguna de sus acusaciones a Israel usa el Informe ese lenguaje tan enfático e inequívoco. También pedía que Hamás «combatiera el estigma al que se enfrentan las familias de los supuestos colaboracionistas»[69]. Aunque reconocía que Hamás ya se había ocupado «de apoyar a las familias de las personas acusadas de colaboracionismo», el Informe concluía que «los efectos a largo plazo del estigma piden una respuesta más potente»[70]. ¿Se le estaba pidiendo legalmente a Hamás que organizara el desfile del Orgullo Colaboracionista?

Crímenes de guerra israelíes. El Informe de la ONU dividía las alegaciones de los crímenes de guerra israelíes en categorías múltiples, algo arbitrarias y que, en muchos casos, se solapaban. Si hubiera dejado que las pruebas hablaran, el Informe habría compilado un dossier devastador para procesar a Israel por Margen Protector. Pero no lo hizo. En lugar de ello, entre sus hallazgos fácticos, por una parte, y sus conclusiones, por otra, interpolaba análisis legales retorcidos. El Informe afirmaba que «las conclusiones fácticas formaban la base para el análisis legal de los incidentes individuales»[71]. En realidad, sus análisis legales diluían la horrible realidad. El resultado de esta intercesión como intérprete y árbitro de la ley fue un dossier que,

aunque no podría haber satisfecho a Israel (¿qué le satisfaría, aparte de una absolución total?), no lograba cubrir los criterios más exiguos de la justicia. En sus partes y en su totalidad, el Informe era, por decirlo claramente, una tapadera. Para dejar esto claro no nos queda otra alternativa que yuxtaponer los hechos presentados en cada incidente (o grupo de incidentes) con la tendenciosa interpretación legal que hace de ellos el Informe.

1. Ataques aéreos. El Informe de la ONU señala que, como resultado de los ataques aéreos israelíes a edificios residenciales y de otro tipo, al menos «124 familias palestinas han perdido a tres o más miembros en el mismo incidente […] hasta sumar un total de 742 bajas»[72]. Dos supervivientes de dichos ataques recuerdan, respectivamente, estas escenas:

Me encontré los cuerpos decapitados de mi tío y de mi hija. Mi primo estaba vivo, pero murió de camino al hospital. Encontramos el cadáver de otro primo seccionado en dos. En las primeras ambulancias llevábamos diez cadáveres. No encontramos supervivientes […]. Después de retirar el cemento identifiqué el cuerpo de mi prima Dina. Lo que vi fue espantoso. Estaba embarazada de nueve meses y se había mudado a casa de sus padres para dar a luz. No nos podíamos imaginar que hubiera muerto. Su estómago estaba desgarrado y el bebé no nacido seguía allí con el cráneo destrozado. Seguimos buscando cadáveres y encontramos a la esposa de mi tío. Nos costó muchísimo sacar todos los trozos de cemento de su cuerpo[73].

Miré atentamente los cadáveres. De mi hija de nueve años solamente quedaba la parte superior. Mi hijo Mohamed tenía las tripas colgando. Mi primo de 16 años había perdido ambas piernas. Mi hijo Mustafa, que estaba a cinco metros de mí, había recibido tanta metralla que casi lo había decapitado. Mi sobrino de 16 años perdió los brazos y las piernas. Me pedía ayuda. Yo lo único que quería es que muriera rápidamente. No quería que sufriera así. También estaba mi hija de un año, en brazos de su madre. Encontramos su cuerpo en un árbol […]. Yo mismo perdí el brazo izquierdo[74].

El Informe no pudo encontrar un «posible objetivo militar» en seis de los 15 ataques aéreos que investigó[75]. En uno de esos ataques mortales carentes de objetivo militar, una bomba de precisión de 500 libras atacó a unos niños sobre una azotea, a la que habían subido a «dar de comer a las aves», matando a tres de ellos e hiriendo a otros dos[76]. La tabulación del Informe, que apuntaba a un posible objetivo militar en el 60 por 100 (9/15) de los incidentes, arroja una luz más favorable sobre los ataques israelíes de lo que permiten los hechos establecidos. Pensemos en las pruebas que fundamentan sus cálculos. El semioficial Israeli Intelligence and Terrorism Information Center (ITIC) publica el nombre, fecha, localización y estatus de combatiente («operativo terrorista») / civil («no implicado») de los habitantes de Gaza asesinados durante Margen Protector[77]. Si en este recuento hasbara figuraba una persona asesinada durante uno de los ataques aéreos israelíes sobre un edificio residencial como «operativo terrorista», el Informe automáticamente lo calificaba de «posible objetivo militar»[78]. Pero, dejando de lado esta dudosa categorización del estatus de una víctima (¿dónde y cómo se ha obtenido esta información?), el ITIC nunca afirmó que el edificio se atacara por la presencia del «operativo terrorista», o, para el caso, que Israel hubiera sido siquiera consciente de su presencia allí cuando se atacó el edificio. Además, el propio Informe observa que la presencia de un miembro de Hamás no transforma por sí misma una residencia en un objetivo militar: «El mero hecho de ser miembro de la rama política de Hamás o de cualquier otra organización en Gaza, o de trabajar para las autoridades […], no es en sí y por sí mismo razón suficiente para convertir a una persona en un objetivo militar»[79]. Teniendo todos estos factores en cuenta, es posible que los ataques aéreos israelíes investigados por el Informe apuntaran a combatientes o a propiedad militar solamente en una pequeña minoría de casos.

El Informe de la ONU documentaba que, en la mayoría de los incidentes que relató, Israel lanzó el ataque aéreo en un momento del día en que era probable que una gran cantidad de civiles estuvieran presentes. Por ejemplo, «la familia se estaba preparando para comer el iftar, la ruptura del ayuno al atardecer»; «Fue apenas

unos pocos minutos después de que nos levantáramos para tomar el suhhur, la última comida del día durante el Ramadán hasta la comida de la noche»; «Los 12 miembros de la familia estaban en casa, preparando la comida de la noche del Ramadán»; «La familia acababa de terminar una larga comida en honor del segundo día del Eid, y la mayoría de sus miembros estaban durmiendo la siesta»; «Nos habíamos reunidos para el iftar»[80]. El Informe descubrió, asimismo, que Israel no avisó en al menos 11 de los 15 incidentes, mientras que, en algunos de los avisos que sí hizo Israel, «solamente pasaron unos minutos (entre 3 y 5) entre el aviso y el ataque»[81]. El Informe además descubrió que Israel usó misiles teledirigidos o bombas teledirigidas de precisión de entre 250 y 1.000 kilos en los 15 incidentes. Así es como los expertos describen el impacto de una GBU-31, que Israel usó en «varios» de los ataques aéreos investigados por el Informe:

La explosión crea una ola expansiva que ejerce una presión de miles de libras por pulgada cuadrada (psi). Por comparación, una ola expansiva de 12 psi podría derribar a una persona; y el umbral de herida es de 15 libras psi. La presión que causa la explosión de un artefacto como la Mark84JDAM[82] puede estallar pulmones, incendiar fosas nasales y desgarrar miembros a cientos de metros del lugar de la explosión, según traumatólogos. Cuando impacta, la JDAM genera una bola de fuego de 8.500 grados y crea un vendaval capaz de derribar paredes a varias manzanas de distancia y lanzar objetos de metal a una distancia de más de kilómetro y medio. Hay un efecto de concusión muy grande. Los daños a cualquier ser humano en las inmediaciones pueden ser muy graves[83].

En lo que se refiere al uso por parte de Israel, inter alia, de las bombas GBU-31/MK-84 de 2.000 libras, el Informe concluye: «Con independencia de lo precisa que sea la bomba, sigue siendo enormemente cuestionable si un arma con un área de impacto tan amplia permite que quien la opere pueda distinguir adecuadamente entre objetos y población civil y el objetivo militar del ataque cuando se usa en zonas densamente pobladas»[84]. Sobre este último punto, recordemos que el Informe calificaba el despliegue de

Hamás de sus primitivos misiles, que llevan entre 5 y 10 kilos de explosivo, de ataques inherentemente indiscriminados porque «no se pueden dirigir hacia un objetivo militar específico». Nos deja perplejos, por lo tanto, por qué no es también un ataque inherentemente indiscriminado cuando Israel descarga, mediante un impacto preciso en el corazón de una vecindad civil densamente poblada, una bomba de 2.000 libras que «genera una bola de fuego de 8.500 grados Fahrenheit, cava un cráter de 20 pies, desplaza 5.000 kilos de roca y grava y genera suficiente viento como para derribar paredes a manzanas de distancia y lanzar trozos de metal a más de kilómetro y medio de distancia». En lugar de ello, el Informe considera que el uso de un arma así por parte de Israel en esas circunstancias es «extremadamente cuestionable». Por favor, ¿qué más hay que cuestionar?[85].

El punto principal, no obstante, es este: el informe de la ONU no consiguió aducir unas pruebas creíbles de que Israel atacaba en su mayoría objetivos militares en estos ataques aéreos sobre edificios civiles. Incluso si en un puñado de incidentes estuvieran presentes militantes de Hamás, aun así, juzgando por el momento de los ataques (es decir, cuando era más probable que se reunieran muchos civiles), la escasez e ineficacia de las advertencias emitidas, el uso de armas de precisión con alta carga explosiva en zonas civiles densamente pobladas y la «destrucción generalizada» de edificios civiles que ya habían sido evacuados[86], juzgando por la acumulación y composición de estos factores, los ataques aéreos israelíes no son ataques desproporcionados, ni siquiera ataques indiscriminados, sino, por el contrario, ataques dirigidos contra la infraestructura y la población civil de Gaza, en los cuales la presencia ocasional de un militante de Hamás no era tanto un objetivo como una excusa, siendo casi con absoluta certeza el objetivo de esos ataques, más allá de una cruda venganza, aterrorizar a la población de Gaza y someterla, causando suficiente muerte y destrucción como para quebrar su voluntad o volverla en contra de Hamás. El Informe, no obstante, no llega a esta conclusión. Sí establece que los seis ataques aéreos dirigidos israelíes en los cuales no se podía discernir un objetivo militar, así como «la mayoría de los casos» denunciados por las organizaciones no gubernamentales, «podrían […] constituir un ataque directo contra propiedad o población civil, un crimen de guerra»; mientras

que los nueve incidentes restantes, en los que se podía discernir un posible objetivo militar, «podrían ser desproporcionados y, por lo tanto, equivaler a un crimen de guerra»[87]. Pero, aunque no se privaba de especular que Hamás había disparado misiles para «extender el terror», el Informe se callaba, a pesar de la abundancia de pruebas circunstanciales, sobre la posibilidad de que el fin general de estos ataques aéreos de Israel pudiera haber sido extender el terror. Sí admitía que «los ataques se llevaban a cabo cuando se suponía que la mayor parte de los miembros de una familia estaría en casa (a la noche o al amanecer, cuando las familias se reunían para el iftar o el suhhur, las comidas de Ramadán, o durante la noche, cuando la gente dormía)[88], y que se habían «empleado armas pesadas, aparentemente destinadas a arrasar edificios»[89]. Pero evitaba cuidadosamente plantear la cuestión: ¿por qué Israel elegía esos momentos de la jornada y esas armas? El Informe admitía que, en las escasas ocasiones en los que Israel avisó unos pocos minutos antes de un inminente ataque aéreo, «al dar ese aviso, las IDF aceptaban que el ataque no requería el elemento de sorpresa, por lo tanto no parece haber ninguna razón para no conceder más tiempo para la evacuación de los residentes de la casa»[90]. Pero no se plantea la siguiente y obvia pregunta: ¿por qué Israel concedía tan poco tiempo a los ocupantes de las casas para evacuarlas? El Informe admite que, «en lo que respecta a la destrucción de los rascacielos [durante la última semana de Margen Protector], una declaración de un general de las IDF parece sugerir que el objetivo de esos ataques era ejercer presión sobre la “elite social” de Gaza destrozando los rascacielos»[91]. Pero, si se buscaba ejercer presión política sobre civiles mediante ataques aéreos que apuntaban a la propiedad civil, ¿acaso el fin de Israel no era extender el terror? El Informe admitía que un ataque aéreo que usa «armamento de precisión […], lo que indica que se persigue un objetivo específico»[92], mató a unos niños que jugaban en una azotea. A continuación apunta a que Israel «podría haber quebrantado sus obligaciones de adoptar todas las precauciones viables para evitar, o al menos minimizar, el daño incidental a civiles». Pero ¿acaso no era el argumento legal relevante que Israel «adoptó todas las medidas viables» para maximizar el daño a los civiles, incluyendo a los niños, es decir, que apuntó a esos niños con armas de precisión? El Informe observa que «la escala masiva de la destrucción y el número de casas y edificios civiles atacados

suscitan la inquietud de que la interpretación por parte de Israel sobre lo que constituye un “objetivo militar” es más amplia que la definición que aporta el derecho humanitario internacional»; y también «suscita la inquietud de que estos ataques puedan haber constituido tácticas militares reflejo de una política más amplia […] que prioriza el objetivo militar percibido por encima de otras consideraciones, descuidando la obligación de minimizar los efectos en la población civil»[93]. Pero laboriosamente esquiva la «inquietud» de que la devastación masiva fuera el «objetivo militar» de Israel, con el fin de maximizar «los efectos sobre la población civil», aterrorizándola; de que su «táctica militar» fuera un «reflejo» de su «política general» y de que sus «tácticas militares» y sus «objetivos militares» planificados de antemano no fueran simplemente «más amplios que la definición que proporciona» el «derecho humanitario internacional», sino concebidos en una escandalosa infracción voluntaria de este.

2. Operaciones terrestres. La sección del informe de la ONU dedicada a las operaciones en tierra israelíes se centra en las atrocidades que las IDF cometieron en Shuja’iya (19-20 de julio), Khuza’a (20 de julio-1 de agosto), Rafah (1-3 de agosto) y el mercado de Shuja’iya (30 de julio). Afirmaba que «el impacto combinado de estas operaciones terrestres ha tenido un impacto devastador sobre la población de Gaza, tanto en términos de sufrimiento humano como en términos de daños a las infraestructuras». Al menos 150 civiles fueron asesinados y más de 2.000 hogares destruidos por completo[94]. El Informe analiza estas operaciones individualmente y después presenta un análisis sinóptico de todas.

A. Shuja’iya. Situada cerca de la Línea Verde, Shuja’iya es uno de los enclaves más poblados de Gaza. Aunque Israel lanzó avisos antes de la operación en tierra, la mayor parte de sus residentes decidieron quedarse. El 20 de julio, 13 soldados de las IDF fueron abatidos por militantes de Hamás en enfrentamientos con armas de fuego. Israel entonces intensificó sus bombardeos, supuestamente para rescatar a los soldados heridos, momento en el cual huyeron la mitad de los residentes[95]. El Informe de la ONU señala que Israel lanzó 6.000 obuses de artillería sobre Shuya’iya en menos de una hora el 20 de julio (el bombardeo continuó durante más de seis

horas) y soltó «más de 100 bombas de una tonelada en un breve periodo de tiempo». El testimonio de un testigo ocular de las IDF citado por el Informe recuerda: «Los cuerpos de artillería y las fuerzas aéreas limpiaron totalmente el lugar»; mientras que otro testimonio aporta: «Uno de los oficiales de mayor graduación de las IDF […] se limitaba a marcar casas en una foto aérea de Shuja'iya, para que se derribaran». Cuando terminó la operación, Shuja'iya era un «área arrasada» y «probablemente aplanada como resultado de los trabajos de demolición precisos de las IDF». Más de 1.300 edificios civiles fueron totalmente destrozados o gravemente dañados, y muchos civiles murieron o resultaron heridos[96]. El análisis legal del Informe concluía que los métodos y medios empleados por las IDF en Shuja'iya «suscitaban preguntas» y «suscitaban graves inquietudes» en lo que se refiere a las leyes de la guerra: en lo relativo a la discriminación, la abrumadora potencia de fuego «no podría, en una zona tan pequeña y tan densamente poblada, dirigirse a un objetivo militar específico» y también «violaba la prohibición de abordar varios objetivos militares diferentes dentro de una zona densamente poblada como un solo objetivo». Por lo tanto, había «potentes indicadores» de que la operación «se llevó a cabo infringiendo la prohibición de los ataques indiscriminados y puede suponer un crimen de guerra»; sobre las precauciones viables, se «puede cuestionar si el uso de esta enorme potencia de fuego en un periodo tan breve de tiempo habría permitido a las IDF […] respetar su obligación de hacer todo lo que estuviera en su mano para comprobar que los objetivos eran objetivos militares»; mientras que el hecho de que las IDF persistieran en el «bombardeo intensivo» mucho después de que fueran conscientes del «terrible impacto […] sobre la población y la propiedad civil […] demuestra que el mando no cumplió con su obligación de hacer todo lo viable para suspender el ataque si quedaba claro que no se ajustaba al principio de proporcionalidad»; respecto a la proporcionalidad, «el objetivo del ataque con proyectiles y del intenso bombardeo parece haber sido principalmente la protección de las fuerzas de combate. […] Teniendo en cuenta los medios y métodos que las IDF emplearon en Shuja'iya, es posible concluir que un mando razonable debería haber sido consciente de que un ataque tan intenso podría tener como resultado una cifra muy alta de muertes civiles. Así pues, es muy probable que un mando razonable hubiera concluido, por lo

tanto, que la esperada pérdida incidental de vidas civiles y el daño y destrucción potencial de propiedad civil serían excesivos en relación con la ventaja militar esperada por este ataque»[97]. Antes de evaluar las conclusiones legales del Informe, es útil dar un paso atrás. Después de sufrir un desacostumbrado número de bajas en las IDF, Israel disparó probablemente miles de proyectiles de artillería HE y lanzó grandes cantidades de bombas de una tonelada sobre Shuja'iya. Israel aducía que desplegó tal potencia de fuego masiva para rescatar a los combatientes heridos[98]. El Informe ni siquiera intenta demostrar una relación lógica entre esta fuerza masiva e indiscriminada, por una parte, y una operación de rescate, por otra. En lugar de ello, se hace fiel eco de la hasbara israelí: «El objetivo del ataque con proyectiles y del intenso bombardeo parece haber sido principalmente proteger a las fuerzas de combate». ¿Cómo demonios se puede rescatar a soldados heridos disparando a discreción miles de proyectiles de artillería indiscriminadamente, y soltando bombas de una tonelada en una zona residencial densamente poblada? ¿Cómo se rescata a soldados heridos demoliendo metódicamente cientos y cientos de residencias civiles? El Informe señala que «Hamás acusaba a las IDF de vengar sobre la población civil su derrota militar en el campo de batalla»[99]. Pero después desecha esta explicación, aunque, prima facie, es sin duda la más plausible. De hecho, los testimonios de los soldados de las IDF aluden a que se atacaban viviendas civiles al azar como venganza por la muerte de un soldado[100]. El Informe afirmaba que las IDF «podrían» haber cometido «ataques indiscriminados». Pero cuando soltaban bombas de una tonelada y disparaban proyectiles de artillería en el interior de una zona residencial densamente poblada, en ausencia de un objetivo militar creíble, ¿acaso las IDF no estaban llevando a cabo ataques discriminados sobre civiles? ¿Era la esencia del crimen israelí el que «trataba varios objetivos militares distintos […] como un solo objetivo militar», o que trataba a toda la población e infraestructura civil como un objetivo militar? El Informe censura a Israel por no hacer «todo lo viable para verificar que los objetivos eran objetivos militares» y por persistir en la operación mucho tiempo después de seguramente darse cuenta de su «horrible impacto» sobre la población civil. Pero ¿no era el fin manifiesto de la operación apuntar no a los «objetivos militares», sino a la población y la propiedad civil? ¿Acaso Israel no insistía no a pesar, sino por el

«horrible impacto» de la operación sobre la población civil? El Informe afirma que Israel no sopesó adecuadamente la pérdida «incidental» de vidas civiles y la destrucción de propiedad civil en relación con la «ventaja militar». Pero ¿qué «ventaja militar» podría haber obtenido Israel al desplegar tal potencia de fuego masiva en una zona residencial densamente poblada? ¿Cómo podría ser «incidental» a la operación, cuando era su mismísima esencia? El Informe observaba que, «a pesar de la significativa destrucción y de las alegaciones creíbles sobre la pérdida de vidas civiles», en Shuja'iya no había «ninguna investigación en curso sobre estos acontecimientos» por parte de Israel[101]. Pero, si el objetivo de la operación era infligir una muerte y destrucción civil significativa, ¿no sería superflua una investigación? En lugar de iluminar, mediante el lenguaje de la ley, la naturaleza de los crímenes de Israel en Shuja'iya, el Informe la oscurece; la clave de su análisis legal, es decir, que Israel perseguía «un objetivo militar» y que buscaba una «ventaja militar», es un blanqueo y una vergüenza. Es también escandaloso que, mientras que el Informe expresaba su convicción de que las ejecuciones de Hamás de presuntos colaboracionistas «equivalían a un crimen de guerra», el bombardeo de saturación de Israel sobre una zona residencial densamente poblada «podría equivaler a un crimen de guerra».

B. Khuza'a. El 21 de julio, el pueblo de Khuza'a, situado cerca de la frontera israelí, sufrió un ataque aéreo israelí y el 22 de julio las IDF lo aislaron físicamente del mundo exterior, lo dividieron internamente, cortaron la electricidad y el suministro de agua. El pueblo entonces sufrió un «intenso fuego desde aire y tierra». El Informe afirma que Khuza'a se convirtió en un lugar «de combate activo en el que todo se volvió objeto de ataque». Pero no queda claro por qué el Informe usa la frase «zona de combate activo»; ni sus fuentes ni otras fuentes[102] han documentado ningún combate o ninguna baja entre las IDF. Cuando terminó la operación, unos 70 gazatíes, entre los que se incluían al menos 14 civiles, habían muerto y 740 edificios habían sido dañados o destruidos[103]. El Informe incluye varios incidentes durante el asalto a Khuza'a, entre ellos: «Civiles ondeando una bandera blanca que trataban de salir de Khuza'a fueron confrontados con un grupo de soldados de las IDF que […] les dispararon. […] 11 personas resultaron gravemente heridas»; «La única clínica de Khuza'a […] fue repetidamente

impactada por los ataques aéreos israelíes»; una «ambulancia se encontró a un niño de seis años […] que estaba herido de gravedad. Se le llevó al puesto de control de las IDF para que se le pudiera transferir a la ambulancia más cercana. La ambulancia fue retenida al menos 20 minutos, a pesar de la evidente gravedad de las heridas de la víctima y de que fuera un niño. El chico murió»; una familia «huyó […] en un estado de completo pánico, dejando detrás a uno de los miembros de la familia, […] una mujer de unos 70 años, en silla de ruedas. […] Cuando un miembro de la familia regresó a casa] unos días más tarde, se encontró su cadáver. Tenía una marca de bala en la cabeza y sangre en la cara. El médico que examinó el cadáver [afirmó] que había recibido un disparo desde poca distancia, unos dos metros […]. Unos días o semanas más tarde, un soldado israelí publicó en Twitter una foto de otro soldado de las IDF ofreciéndole agua [a la anciana]»[104]. El análisis legal del Informe de la ONU concluyó que la «intensidad del bombardeo», que diezmó la infraestructura civil de Khuza'a, y la «demolición de edificios a lo largo de la operación terrestre […] suscitaban inquietud sobre si los ataques con proyectiles y los ataques aéreos de las IDF no estaban dirigidos exclusivamente a objetivos militares»; que «parece muy improbable que los 740 edificios que fueron destruidos o dañados fueran "una contribución eficaz a la acción militar"»; y que «la destrucción completa de algunas áreas de Khuza'a […] indica que las IDF podrían haber abordado varios objetivos militares distintos dentro de una zona residencial como un único objetivo militar», y también «es un indicio de que las IDF llevaron a cabo destrucciones no exigidas por la necesidad militar». El Informe concluye que hay «potentes indicios» de que estos «elementos» del asalto de las IDF en Khuza'a «pueden calificarse como ataques directos contra la propiedad y la población civil y que, por lo tanto, pueden equivaler a un crimen de guerra»[105]. Concluía también que, «al negarse a permitir la huida de la población civil» a pesar del «intenso ataque con proyectiles y bombardeo aéreo» y del «conocimiento claro de su presencia», «muy probablemente» las IDF cometieron ataques «indiscriminados o desproporcionados» y que «también suscita dudas sobre si las IDF no tomaron todas las precauciones viables para minimizar el peligro para los civiles en su ataque contra la ciudad de Khuza'a»[106]. Observaba, además: «La amplitud de la destrucción, combinada con las afirmaciones que durante la operación hizo el mando de la

Brigada responsable de la operación de Khuza'a, aludiendo a que "los palestinos tienen que entender que esto no les compensa", indican una intención punitiva […] y pueden constituir un castigo colectivo»[107]. El análisis legal del Informe es tan revelador en lo que no dice como en lo que dice. Registra la «preocupación» de que el uso masivo de proyectiles y el ataque aéreo de Israel, que arrasó la «infraestructura civil» de Khuza'a «no estuviera exclusivamente dirigido a objetivos militares». Pero, aunque no localiza un solo enfrentamiento armado ni una baja en las IDF, y aunque no localiza un solo objetivo militar, el Informe nunca explicita la posibilidad de que la potencia de fuego de Israel tuviera como objetivo mayoritario a la población y la propiedad civil. Al Informe le parece «muy improbable» que la demolición sistemática por parte de Israel de los edificios civiles fuera «una contribución eficaz a la acción militar». Pero, incluso aunque concluye que la devastación «puede calificarse como ataques directos contra la población y la propiedad civil», niega claramente la posibilidad de que, si Israel llevaba a cabo una «acción militar», su «objetivo militar» fuera destruir los edificios civiles. Plantea un escenario según el cual, al borrar del mapa zonas enteras de Khuza'a, «las IDF pudieran estar abordando varios objetivos militares distintos dentro de una zona densamente poblada, como si fuera un único objetivo militar», y que podrían haber «llevado a cabo destrucciones no exigidas por la necesidad militar». Pero no considera la posibilidad de que el «objetivo» de Israel no fuera militar, sino por completo civil; de que «la necesidad militar» ni siquiera fuera un elemento de sus cálculos: ¿cómo podría serlo, si no había un objetivo militar? Al Informe le parecía «muy probable» que encerrar a la población civil en un pueblo y después bombardearlo constituye un ataque «indiscriminado y desproporcionado». Más probable parece que haya sido un ataque deliberado contra civiles, especialmente cuando el Informe no identifica ningún combate, objetivo militar o baja en las IDF, o ningún otro valor militar contra el que medir la pérdida de vidas civiles. El Informe sí admite, en un único párrafo, que el impulso tras la operación puede haber incluido también un elemento «punitivo» y que, por lo tanto, constituiría un «castigo colectivo». Pero la muerte y destrucción que Israel volcó sobre Khuza'a no fue meramente incidental o un componente subordinado de una operación «militar»; era el resultado natural y predecible, es decir, la intención[108], de una operación que principalmente apuntaba,

y que se había diseñado, para castigar y aterrorizar a la población civil.

C. Rafah[109]. Después de que Hamás matara a dos combatientes de las IDF en Rafah y de que, aparentemente, capturara vivo a un tercer soldado, Israel lanzó una operación militar importante, Black Friday, el 1 de agosto. El Informe afirma que las IDF sellaron Rafah, «dispararon unos 1.000 proyectiles contra Rafah en un lapso de tres horas y lanzaron al menos 40 bombas», que lanzaron «intensos ataques» contra sus habitantes «en sus casas y en las calles», que dispararon «sobre las ambulancias y los vehículos privados que intentaban evacuar a los civiles» y que «demolieron docenas de casas». La ferocidad de Black Friday se remonta al miedo de Israel a que se repitiera el asunto Gilad Shalit[110], en el que la captura por parte de Hamás de un soldado de las IDF llevó posteriormente a la liberación de más de 1.000 retenidos palestinos en un intercambio de presos. El Informe se centraba en varios incidentes atroces; por ejemplo, un hospital que fue impactado por dos misiles y «docenas de proyectiles». Citaba «grabaciones de audio filtradas de las comunicaciones de radio de las IDF» que indicaban el uso no limitado por parte de Israel de la potencia de fuego y concluía que «prácticamente toda persona o edificio en Rafah se convirtió en un objetivo militar potencial»[111]. El análisis legal del Informe afirmaba que la información disponible sobre «los ataques sobre todos los vehículos de la zona, incluyendo las ambulancias, así como los incidentes en los que grupos de civiles parecen haber sido objetivo de disparos desde los tanques, suscitan graves dudas sobre el respeto de las IDF al principio de discriminación [...]. Esto equivale a un ataque deliberado contra población y propiedad civil y puede equivaler a un crimen de guerra». A continuación afirma que, a la luz del uso masivo y no limitado de la potencia de fuego, «en una zona densamente poblada y edificada durante un periodo de unas pocas horas», el ataque «parece haber infringido la prohibición de ataques indiscriminados». Entre las masacres que se describen en el Informe, Rafah fue el único momento en el que Israel parecía tener un objetivo militar casi identificable, es decir, matar al soldado israelí capturado para evitar un futuro intercambio de presos, aunque, como deja claro el Informe, este objetivo no podía legitimar lo que sucedió[112]. El Informe afirma inequívocamente que los «ataques sobre todos los vehículos» por

parte de Israel y los disparos a «grupos de ciudadanos […] equivalen a un ataque deliberado contra la población y la propiedad civil». Pero después inserta la advertencia «y puede equivaler a un crimen de guerra» (cursivas añadidas). Incluso aunque el Informe se atreve a pronunciar lo impronunciable –que Israel apuntaba a civiles–, se achanta ante su complemento legal: ¿cómo es posible que «un ataque deliberado contra la población y la propiedad civil» no sea un crimen de guerra?

D. Mercado de Shuja'iya. El 30 de julio, Israel anunció una tregua unilateral de cuatro horas, pero matizó que el alto el fuego «no se aplicaría a las zonas en las que los soldados de las IDF están operando actualmente». El Informe incluye una sangrienta secuencia de incidentes en un barrio de Shuja'iya. La azotea de una casa fue impactada por un obús de alta potencia explosiva, que mató a ocho miembros de una familia, incluyendo a siete niños de edades entre tres y nueve años que estaban jugando allí y a su abuelo, de setenta años. Israel adujo que el ataque era en respuesta a un «misil antitanque» y una «ráfaga de morteros» que se había disparado desde las inmediaciones y que había matado a un soldado. Las IDF entonces dispararon «otra ráfaga de proyectiles» diez minutos más tarde, «justo cuando tres ambulancias y los paramédicos llegaban al lugar de los hechos», que también impactaron contra «mucha de la gente que se había reunido en torno a la casa [de la familia] para intentar ayudar a los supervivientes». El Informe cita a un periodista testigo que se quedó «horrorizado» por el «supuesto ataque a las ambulancias y a los periodistas que habían acudido a prestar ayuda a los heridos y a informar del incidente». Más tarde señala que los relatos de los testigos oculares están «reforzados por dos grabaciones en vídeo», una de las cuales muestra a «un camarógrafo agonizando que sigue filmando y a las ambulancias atacadas por un misil». El Informe concluye: «Como resultado de esta segunda ronda de proyectiles, 23 personas murieron, incluyendo tres periodistas, un paramédico y dos bomberos. Además, otras 178 resultaron heridas, entre ellas 33 niños, 14 mujeres, un periodista y un paramédico. Se dice que otros cuatro han muerto a consecuencia de las heridas que recibieron en este ataque». Aunque Israel alegó posteriormente «que no disponía de un rastreo en tiempo real» del letal asalto, el Informe no se cree esta coartada: «A la comisión le resulta difícil creer que las IDF no

tuvieran conocimiento de la presencia de ambulancias en la zona inmediatamente después del ataque inicial, especialmente cuando los equipos de rescate, un camión de bomberos y tres ambulancias llegaron al lugar con las sirenas a todo volumen»[113]. El análisis legal del Informe culpa a Israel de usar morteros indiscriminadamente «en una zona edificada y densamente poblada». Por lo tanto, concluye que el ataque «podría» haber violado la «prohibición de ataques indiscriminados» y la obligación «de adoptar todas las precauciones viables y elegir medios […] que protejan a los civiles»[114]. Por más que se intente, es muy difícil encontrarle un sentido a este análisis legal. Como mera hipótesis, concedamos que los siete niños que jugaban en una azotea y su abuela de setenta años murieron en un ataque indiscriminado, aunque, como el Informe mismo, así como varios informes previos de defensa de los derechos humanos[115] han documentado, no sería la primera vez que Israel apunta a niños que están jugando en una azotea. Pero ¿qué hay del segundo ataque, diez minutos después? El asalto comenzó «precisamente cuando» vecinos, ambulancias, equipos de rescate y un camión de bomberos llegaban al lugar. Un periodista testificó que se «apuntaba a ambulancias y periodistas» (cursivas añadidas), mientras que una grabación de vídeo captó a las «ambulancias siendo impactadas por un misil». El propio Informe desdeña la posibilidad de que Israel no fuera consciente de la masacre, «especialmente cuando los equipos de rescate, un camión de bomberos y tres ambulancias llegaron al lugar con las sirenas a todo volumen». Clasificar esta artillería dirigida y esta lluvia de misiles sobre una operación de rescate civil-médica, en ausencia de cualquier objetivo militar discernible, como un ataque indiscriminado en el que Israel no adoptó las precauciones suficientes para proteger a los civiles, con el añadido de que «podría entenderse como [un] ataque directo contra civiles» y no como un ataque concebido y dirigido hacia civiles, es una burla del lenguaje, de la ley y del sufrimiento humano.

El Informe de la ONU también abordó un análisis sinóptico de las operaciones en tierra de Margen Protector bajo varios encabezados: (1) Protección de civiles, protección de las fuerzas de combate. El Informe concluyó que Israel había priorizado la seguridad de sus combatientes por encima de las preocupaciones humanitarias hacia la población civil de Gaza. La «protección de los soldados de las IDF

era la principal consideración de las IDF, superando y a veces eliminando cualquier preocupación por el impacto de su comportamiento sobre los civiles. […] Cuando las vidas de los soldados estaban en peligro o había riesgo de captura, las IDF descuidaban los principios básicos» de las leyes de la guerra[116]; (2) Avisos y estatus protegido continuo de los civiles. El Informe concluyó que las advertencias israelíes producían resultados equívocos. «Las IDF trataron de avisar a la población por adelantado mediante panfletos, anuncios por megafonía, mensajes de texto y telefónicos, emisiones de radio, lo que condujo a la evacuación lograda de algunas zonas. […] Mientras que estos avisos generales parecen haber salvado las vidas de muchas personas que los siguieron, en otros casos los habitantes no abandonaron sus hogares por una serie de razones.» Sobre este último punto, el Informe observaba que Gaza carecía de refugios seguros a los que los habitantes pudieran huir («el 44 por 100 […] o bien es una zona sin acceso o había sido objeto de advertencias de evacuación»), que «todas las zonas de Gaza, incluyendo aquellas hacia las que se derivó a la población, han sido o era probable que fueran atacadas desde el aire» y que «las advertencias generalizadas y a menudo no específicas a veces tenían como consecuencia el pánico y los desplazamientos masivos». De hecho, el portavoz de la principal organización de ayuda al refugiado de Gaza, Chris Gunness, de la United Nations Relief and Works Agency (UNRWA), reflexionaba dolorosamente en mitad del ataque israelí: «Gaza es un conflicto rodeado de una valla. No hay ningún lugar seguro al que ir y ahora no hay lugar seguro donde esconderse». El Informe, además, apuntaba a que, por una parte, las reglas efectivas del enfrentamiento armado consideran que los civiles que se quedan son combatientes enemigos, incluso aunque las IDF «deberían haber sido plenamente conscientes» de que los civiles se habían quedado y que, por otra parte, las alertas previas «podrían entenderse como un intento de usar esos avisos para justificar los ataques contra individuos civiles»·que no hubieran huido[117]; (3) Uso de la artillería y de otras armas explosivas en zonas construidas. El Informe concluye que Israel ha hecho un «uso significativo de armas explosivas con efectos expansivos en zonas densamente pobladas», lo que ha tenido como resultado «un amplio número de bajas civiles y una destrucción generalizada de la propiedad civil». Señalaba, además, que Israel persistía en el empleo de estas armas

indiscriminadas en zonas civiles densamente pobladas incluso «después» de que «tuvieran como resultado significativas bajas civiles»[118]; (4) Destrucción. El Informe concluye que la potencia de fuego «empleada en Shuja'iya, Rafah y Khuza'a produjo una destrucción significativa […] que algunas zonas fueron virtualmente "arrasadas" […] completamente obliteradas». También cita a los soldados israelíes testimoniando que «cada casa por la que pasábamos [en la Franja de Gaza] era golpeada por un proyectil y las casas que se encontraban más lejos, también»; y que «el daño a la propiedad palestina no era algo que tener en cuenta cuando se decidía el rango y la potencia del disparo». El Informe seguía diciendo que «la inmensa escala de la destrucción podría haber sido adoptada como una táctica bélica», que «las IDF seguían un patrón precalculado de destrucción generalizada de los barrios en determinadas zonas» y que «esta destrucción de zonas completas […] puede que no fuera una exigencia estricta de la necesidad militar»[119]; y (5) Ataques a civiles. En un breve tratamiento (solamente un párrafo), el Informe señala «una serie de casos en los que los civiles, que claramente no estaban participando en las hostilidades, parecen haber sido atacados en la calle». Apunta a un par de incidentes en los que «civiles, entre ellos niños, supuestamente llevando banderas blancas, recibieron disparos de los soldados» y un tercer incidente, en el que «un hombre herido […] tumbado en el suelo, fue disparado de nuevo dos veces y asesinado»[120]. El Informe concluye que Israel mató deliberadamente a solamente dos civiles durante el conjunto de la operación terrestre.

En esencia, el cuadro que describe el Informe de la ONU se parece un poco a esto. Israel lanzó la Operación Margen Protector para lograr un par de objetivos militares irreprochables: terminar con los ataques con proyectiles de Hamás y desmantelar la red de túneles de Hamás. A lo largo del ataque, recurrió a la fuerza desproporcionada e indiscriminada, principalmente porque concedía prioridad a las vidas de sus propios combatientes antes que a la población civil de Gaza. Aun así, por una parte, Israel sí dio avisos que, aunque no siempre eran eficaces, «salvaron la vida a mucha gente» (el Informe no proporciona la justificación de este cálculo)[121] y, por otra parte, aunque muchos civiles fueron heridos y asesinados, Israel solo atacó intencionadamente a un

puñado de estos. Dicho sencillamente, Margen Protector fue una operación militar legítima que, desgraciadamente, a menudo se salía de madre, pero solo excepcionalmente cruzaba la línea roja de apuntar deliberadamente a la infraestructura civil de Gaza, y casi nunca cruzaba la línea roja de apuntar deliberadamente a su población civil. El concepto general del Informe no podía, sin embargo, acomodar en su interior muchos de sus propios hallazgos y conclusiones. Si los avisos se habían diseñado para salvar vidas, ¿por qué se emitieron tan pocos, por qué se les concedía tan poco tiempo desde que se publicaban, y por qué eran tantos de ellos, como los «toques en las azoteas», tan ineficaces, según el propio relato del Informe?[122]. Si las zonas hacia las que Israel canalizaba a la población civil «era posible que fueran objeto de ataques aéreos», entonces quienes huían después de una alerta descubrían que la seguridad de su nueva ubicación era más una cuestión de azar que otra cosa. De hecho, Israel casi con toda certeza publicó esos avisos para adornar su campaña de hasbara y para proporcionarse una cobertura legal en caso de que se le acusara en la posguerra –o, por usar las palabras mismas del Informe, «para justificar ataques contra civiles individuales» que no huyeran tras la alerta–. También servían para fomentar «el pánico y el desplazamiento de masas» que el Informe describe como un efecto colateral, pero que, a juzgar por las operaciones previas israelíes, constituían un objetivo premeditado[123]. El desarrollo de Margen Protector ofrece la prueba más contundente de que, mayoritariamente, los avisos israelíes estaban pensados no para salvar vidas, sino con estos otros objetivos en mente. Aunque había sido obligado a dar por finalizada la invasión terrestre a primeros de agosto, después de que la indignación internacional se disparara, Israel aún buscaba obtener ventajas en las negociaciones en marcha lanzando un ataque aéreo a finales de agosto sobre cuatro rascacielos residenciales ocupados por la elite social de Gaza[124]. No obstante, temerosa de suscitar una renovada condena, Israel puso mucho cuidado en no matar a civiles, especialmente civiles influyentes, por lo que publicó avisos eficaces que permitieron a todos los residentes de esos edificios una evacuación segura[125]. El hecho de que ningún gazatí muriera en esos ataques aéreos indica que, si Israel así lo hubiera querido, podría haber emitido avisos realmente eficaces. El Informe alaba estos últimos avisos de agosto como «una buena práctica, mediante la cual Israel trató de

[…] minimizar las víctimas civiles»[126]. ¿No era un poco extraño felicitar a Israel por su «buena práctica […] para minimizar víctimas civiles», cuando, en esta última escena de este último acto de un ataque terrorista sobre una población civil indefensa que ya había dejado más de mil civiles muertos y a decenas de miles sin hogar, Israel seguía arrasando aún más casas; en especial cuando esta «buena práctica» era una prueba positiva de que, excepto cuando le resultaba políticamente ventajoso, Israel publicaba avisos únicamente para engrasar su maquinaria de relaciones públicas y para sembrar el pánico, no para salvar vidas, puesto que el objetivo primordial de Israel, que había quedado claro por su uso de bombas de una tonelada en barrios civiles densamente poblados, era –hasta el punto en el que lo permitieran las limitaciones diplomáticas– maximizar las víctimas civiles? Si, como deducía el Informe, el motivo principal tras el recurso por parte de Israel a la fuerza indiscriminada y desproporcionada hubiera sido proteger a sus combatientes, eso podría explicar por qué adoptaba una política criminal de disparar a todo lo que se moviera en los terrenos en los que operaban las tropas. Pero ¿por qué disparaba Israel de manera indiscriminada, desde lejos, decenas de miles de proyectiles de artillería HE hacia barrios civiles densamente poblados, con el «resultado de un gran número de víctimas civiles y una destrucción generalizada de la propiedad civil»? ¿Y por qué persistía en el uso de esas armas indiscriminadas de alto poder explosivo incluso «después» de que quedara claro que «producían un número significativo de víctimas civiles»? ¿Por qué lanzaba cientos de bombas de una tonelada sobre barrios civiles densamente poblados? ¿Por qué «arrasaba» completamente y «obliteraba» barrios civiles completos, en una ausencia total, como los relatos de los testigos oculares de las IDF afirman repetidamente, de actividad militar? El Informe sí admite que Israel tal vez infligía esta devastación «precalculada» como una «táctica bélica», que no era «un requisito estricto de la necesidad militar». Era, qué duda cabe, una forma muy rara de describir un proceso de destrucción en el cual, mayoritariamente, ni la «necesidad militar» ni, para el caso, las consideraciones militares de ningún tipo figuraban siquiera como un factor. El Informe no se plantea y, por supuesto, no responde, la cuestión que pide a gritos plantearse: si no era por «necesidad militar», entonces, ¿por qué Israel, de una manera «precalculada», adoptó «tácticas bélicas» que desencadenaban muerte y destrucción

masiva en Gaza? De hecho, si salvaguardar las vidas de los combatientes israelíes a cualquier precio era el modus operandi de Margen Protector, entonces castigar y aterrorizar a la población civil, hasta someterla, era su objetivo general. El Informe mismo documenta copiosamente que Israel disparó decenas de miles de proyectiles de artillería de alto poder explosivo y que lanzó cientos de bombas de una tonelada sobre barrios civiles densamente poblados, que apuntó a hospitales, ambulancias, equipos de rescate, vehículos civiles y «grupos de ciudadanos» y que adoptó una política de disparar a todo lo que se moviera en áreas pacificadas en las que aún vivían civiles. Pero, no obstante, fue la conclusión de este documento cínico y cobarde que, de los 1.600 civiles gazatíes asesinados por Israel durante los 51 días de terror, solamente dos de ellos fueron asesinados deliberadamente.

El Informe de la ONU incluía una sección miscelánea que analizaba los ataques israelíes (1) sobre refugios civiles, (2) sobre la única central eléctrica de Gaza y (3) sobre las ambulancias.

1. Refugios civiles. El Informe de la ONU señalaba que Israel había atacado múltiples refugios civiles e investigaba los ataques a tres de ellos –Beit Hanoun Coeducational A y D (Escuela de Beit Hanoun), Escuela de primaria femenina A y B de Jabalia (escuela de Jabalia) y Escuela preparatoria A masculina de Rafah (escuela de Rafah)–, que tuvieron como resultado la muerte de unas 45 personas, entre ellas 14 niños:

– Escuela de Beit Hanoun. El Informe afirma que la UNRWA estaba en «contacto regular» con los oficiales israelíes, que «les había dado en doce ocasiones las coordenadas de la escuela» y que les había informado de que la escuela se usaba como «refugio de emergencia designado». Además, declaraba que Beit Hanoun estaba siendo testigo en el momento del incidente de «fuertes combates», incluyendo «el lanzamiento diario de proyectiles desde las inmediaciones de la escuela». A medida que se intensificó el combate, se convenció a los ocupantes del refugio de que lo abandonaran y se sincronizó una «franja de tiempo» para su evacuación entre las IDF y la UNRWA. Un mando de las IDF posteriormente expresó su intención de atacar otras escuelas de la

zona, supuestamente porque entre ellas se escondía «un arsenal de Hamás», pero «había reconfirmado al menos dos veces» que el Refugio de Emergencia Designado no sería atacado. No obstante, mientras que las familias reunían sus pertenencias y se agrupaban en el patio del colegio el 24 de julio para esperar al autobús que los transportaría, el edificio fue «repentinamente atacado» con «al menos dos proyectiles mortero 120 MM de alto poder explosivo (HE), […] uno que impactó en el centro del patio y un segundo en las escaleras de entrada a la escuela». Israel alegó varias cosas: que Hamás había impedido que los ocupantes del refugio salieran a la hora programada, que «los impactos habían sido causados por misiles de Hamás que se desviaron» y que «los soldados respondieron disparando hacia lugares desde los que se habían lanzado hacia ellos misiles palestinos». El Informe no encontró pruebas que apoyaran estas coartadas oficiales israelíes. Al contrario, señalaba que los testigos afirmaban coherentemente que no se habían disparado misiles desde la escuela ni había militantes operando en las inmediaciones, ni cualquier otra «actividad sospechosa». El Informe concluye: «El hecho de que el ataque ocurriera antes de la implantación de un acuerdo de evacuación indica que el aviso con antelación comunicado a la UNRWA [sic] por las IDF no fue eficaz»[127].

– Escuela de Jabalia. El Informe afirmaba que «con anterioridad al 30 de julio, las agencias israelíes fueron notificadas 28 veces en 14 días acerca del empleo de esa localización como refugio de la UNRWA» y que Israel había confirmado la recepción de esa información. Además, la UNRWA estaba en contacto regular con las agencias relevantes israelíes por mail y teléfono. Pero el 30 de julio, sin ningún aviso previo, «la escuela fue golpeada por una ráfaga de 4 proyectiles 155MM de alto poder explosivo (HE) y por fuego indirecto de artillería». 18 personas fueron asesinadas, entre ellas tres niños. Las IDF alegaron que «Hamás había disparado a las fuerzas armadas israelíes desde las inmediaciones de la escuela». El Informe, no obstante, no encontró pruebas que corroboraran la alegación israelí[128].

– Escuela de Rafah. El Informe afirmaba que el 3 de agosto «un misil teledirigido de precisión impactó en la calle frente» a la escuela, matando a quince personas, entre ellas al menos a siete

niños. Israel alegó que «las IDF habían disparado un misil desde el aire a una moto que llevaba a tres militantes de la Yihad Islámica Palestina». El Informe no aporta pruebas que apoyen o desmientan la versión oficial israelí de los hechos[129]. (Una investigación posterior por parte del Al Mezan Center for Human Rights descubrió que eran dos, y no tres, los gazatíes que conducían la moto y que ambos eran civiles)[130].

El análisis legal del Informe de la ONU sobre los dos primeros incidentes (Beit Hanoun y Jabalia)[131] afirmaba que Israel «debería haber sido consciente» de que desplegando armas relativamente indiscriminadas, como artillería o morteros, «para golpear un objetivo situado en una zona densamente poblada y adyacente a las escuelas que la UNRWA usaba como refugio», podía también alcanzar a la propiedad civil. Seguía expresando «graves dudas» respecto a que «la elección de medios [por parte de Israel] para el ataque no haya tenido en cuenta el requisito de evitar […] la pérdida incidental de vidas civiles, […] ni adoptara todas las precauciones viables para elegir medios con la idea de evitar […] bajas». Por lo tanto, estos ataques «es altamente probable que constituyan un ataque indiscriminado […] y puede que […] equivalgan a un crimen de guerra». La premisa explícita que subyace en el análisis legal del Informe es que Israel apuntaba a objetivos militares en estos ataques. Pero el Informe no presenta ni un ápice de prueba que apoye esta premisa. Por el contrario, el conjunto de las pruebas presentadas apuntan a la conclusión de que Israel atacó intencionadamente a civiles que se habían refugiado. El propio resumen fáctico del Informe (en el caso de Beit Hanoun) apuntaba que el «ataque [no] ocurrió» durante un intercambio de disparos, sino «antes de la implantación de un acuerdo de evacuación». ¿Cómo se puede interpretar si no esta contextualización, excepto pensando que el ataque fue sincronizado o dirigido hacia la evacuación prevista y que el objeto del ataque eran los terrenos del refugio? Los hechos indiscutibles de que se había alcanzado un acuerdo con las IDF para un éxodo pacífico y ordenado, y que el mando de las IDF prometió expresamente dos veces no atacar este refugio en particular, hacían de este crimen un horrible acto de perfidia. La afirmación del Informe de que estos

incidentes constituyen ataques «indiscriminados» se disipa ante sus propios hallazgos fácticos, mientras que la descripción de las consiguientes muertes civiles como «incidentales» suscita la pregunta: ¿incidentales en relación con qué? El Informe no apunta a un objetivo militar en ninguno de los incidentes, mientras que, como el Informe mismo documenta, la versión oficial israelí va cambiando según se van concibiendo las diversas coartadas. El Informe supone como un hecho clave que el «aviso por adelantado» de Israel «no fue eficaz», incluso aunque ese aviso se demostró el instrumento más eficaz de perfidia criminal, mientras que el Informe consideraba como una conclusión legal importante que Israel no adoptó «todas las precauciones viables» para proteger a los civiles, incluso aunque adoptó todas las precauciones viables para preparar una masacre. Es como si el Informe estuviera jugando a un juego de salón victoriano: ¿quién puede inventar la descripción legal o fáctica más absurda de un acto criminal manifiesto? En otra afirmación inventada, el Informe asevera que, mientras que Israel confiaba en sus agencias civiles» para facilitar la comunicación entre las organizaciones internacionales y el ejército israelí […], y que parece haber habido intentos de notificar a la UNRWA sobre posibles ataques en el caso de Beit Hanoun, el incidente apunta a que la comunicación entre la UNRWA y las IDF no era eficaz». Pero el mismo Informe documenta que, incluso aunque las IDF coordinaron la evacuación con la UNRWA, e incluso aunque el mando de las IDF prometió explícitamente en repetidas ocasiones no atacar el refugio, las IDF lanzaron un ataque sobre los terrenos del refugio justo antes de la «franja de tiempo» acordada, mientras «las familias empezaban a reunir sus pertenencias en el patio para estar preparadas cuando llegaran los autobuses». El resultado no fue una ruptura en las comunicaciones, sino una mala fe criminal. De hecho, ni siquiera Israel, en sus diversas justificaciones oficiales, achacaba el ataque a una interrupción de las comunicaciones; el Informe se inventa esta coartada de cabo a rabo. El análisis legal del Informe observa, además: «Incluso si el ataque contra las escuelas de la UNRWA pudiera no haber sido deliberado, las IDF están obligadas a tomar medidas de precaución y de verificación de los objetivos "para evitar ataques dirigidos por negligencia a la propiedad o la población civil"». La elección de esa fraseología, «incluso si el ataque […] pudiera no haber sido deliberado», era doblemente peculiar. Por una parte, los hallazgos fácticos del

Informe nunca apuntaron a que los ataques fueran deliberados –por el contrario, evitaban cuidadosamente esa conclusión–, mientras que, por otro lado, las pruebas fácticas recogidas en el Informe apenas dejaban dudas de que de hecho eran deliberados. El Informe también consideraba un punto legal relevante el que Israel no hubiera adoptado suficientes precauciones «para evitar ataques dirigidos por negligencia contra propiedad o población civil», mientras que era difícil no concluir del propio despliegue de los hechos que hacía el Informe que Israel, lejos de ser negligente, había adoptado todas las precauciones y actuado con total premeditación para atacar a civiles y a propiedad civil[132]. Incluso el siempre cauto secretario general de la ONU, Ban-Ki Moon, estalló finalmente tras el ataque israelí a la escuela de Rafah, el séptimo refugio civil que se atacaba, diciendo que «era un escándalo moral y una acción criminal»[133].

2. La única central eléctrica de Gaza. El Informe de la ONU señalaba que el reiterado bombardeo por parte de Israel de la única central eléctrica en Gaza a finales de julio causó graves daños. El último bombardeo del 29 de julio provocó una explosión en uno de los tanques de combustible que «destrozó casi una sección entera de la central y dañó otras partes». También señalaba que «como resultado de dicho ataque y del daño general a la infraestructura eléctrica [...] Gaza experimentó cortes de luz de 22 horas al día durante las hostilidades», lo que «obligó a los hospitales a operar con una capacidad muy limitada; condujo a una drástica reducción del bombeo de agua a los hogares y afectó a las plantas desalinizadoras y al tratamiento de las aguas residuales». Un año más tarde, Israel aducía que sus proyectiles, «desgraciadamente, habían fallado su objetivo previsto». Aunque el Informe se declaraba agnóstico («la comisión es incapaz de verificar este punto»), también observaba que Israel ya había atacado la central eléctrica en 2006, así como durante la Operación Plomo Fundido; que, en el inicio de Margen Protector, un oficial de alta graduación israelí había pedido que el gobierno «cortara inmediatamente el suministro de combustibles y electricidad en la Franja de Gaza» y también había exhortado al gobierno a «usar todos los medios de presión [...] a su disposición para obligar a Hamás a aceptar un alto el fuego»; y que «la central había recibido tres ataques» en los días previos al culminante ataque del 29 de julio. El análisis legal del

Informe reitera que, «debido a las limitadas pruebas a nuestra disposición […] no es capaz de determinar si la central eléctrica sufrió un daño incidental procedente de un ataque con otro objetivo, o si fue el objeto de un ataque deliberado». Aun así, seguía especulando: «Si los impactos sobre la central eléctrica fueron accidentales, como defiende Israel, sigue abierta, no obstante, la cuestión de si se adoptaron todas las precauciones apropiadas por parte de las IDF para evitar dañar una propiedad civil»[134]. Es de señalar que no sopesa la posibilidad de que el ataque fuera deliberado y las consecuencias legales de que así lo fuera. Pero el punto más general es el siguiente: el encargo legal confeso del Informe no era alcanzar una determinación definitiva, sino, en su lugar, usar el criterio menos severo de «las “razones suficientes” para valorar los incidentes investigados y los patrones de lo que podría haber ocurrido»; es decir, «lo que una persona razonable y medianamente prudente podría tener razones para pensar» que había ocurrido. Se diría una apuesta segura que «una persona razonable y medianamente prudente» habría concluido algo del tipo: a la luz del patrón de ataques dirigidos israelíes sobre la central eléctrica en los años anteriores[135] y de los múltiples bombardeos de la central en los días anteriores al ataque del 29 de julio, y a la luz de las afirmaciones amenazadoras por parte de un oficial israelí de alto rango antes del ataque; a la luz del hecho de que la única prueba a contrario consiste en la trillada negación israelí, que raramente ha soportado el escrutinio en el pasado; a la luz de esta acumulación convincente de pruebas circunstanciales, el ataque a la única central eléctrica de Gaza, que exacerbó su ya gravísima escasez de electricidad, lo más probable es que fuera deliberado y que equivalga a un crimen de guerra. Si el Informe no llegaba a esta conclusión es porque entendía que la mejor manera de ser prudente es ser pusilánime.

3. Ambulancias. El Informe de la ONU señalaba que Margen Protector «produjo daños en 16 ambulancias y la muerte de 23 personas del cuerpo sanitario». Se centraba en un trío de incidentes que ya había examinado con atención, en Shuja’iya, el mercado de Shuya’iya y Rafah, y en un par de incidentes similares en el pueblo de Al Qarara y en Beit Hanoun, en los cuales las ambulancias fueron objeto de ataques israelíes y 35 personas, entre personal médico y civiles, fueron asesinadas y muchas otras, heridas. Presentaba una

versión condensada de los tres primeros incidentes y un relato más detallado de los otros dos:

– Shuja'iya: «Una ambulancia de la asistencia médica militar fue atacada directamente dos veces mientras trataba de proporcionar primeros auxilios a las víctimas».

– Mercado de Shuja'iya: «En un contexto de fuego intenso, un proyectil impactó en el suelo, junto a tres ambulancias, en las proximidades de una casa que había sido atacada».

– Rafah: «Ocho personas ardieron hasta morir en una ambulancia que recibió un impacto».

– Al-Qarara: «Mohamed Hassan Al Abadla, conductor de ambulancias […] se encontró bajo el fuego mientras evacuaba a una persona herida […]. Cuando la ambulancia llegó a su destino, las IDF dieron instrucciones al personal de que saliera del vehículo y continuara a pie. Mohammed Hassan Al Abadla y uno de los voluntarios salieron de la ambulancia y se acercaron al paciente con una linterna encendida, como se les había indicado. Caminaron unos doce metros cuando se les disparó y Mohammed Hassan Al Abadla recibió disparos en el pecho y el muslo. Dos equipos de ambulancia, que llegaron un poco más tarde para rescatar a su colega herido, también recibieron disparos, a pesar de que la ICRC (Comité internacional de la Cruz Roja) había recibido información de que las IDF aprobaban su entrada en la zona. Finalmente se le permitió a un tercer equipo llevar a Al Abadla al hospital en Jan Yunis, donde murió poco después de llegar. Los movimientos de las ambulancias fueron en todo momento coordinados por las IDF a través de la ICRC».

– Beit Hanoun: «Parece que un misil habría impactado en la trasera de una ambulancia de la PRCS (Sociedad de la Luna Creciente Roja Palestina) durante una operación de rescate en Beit Hanoun. Como resultado […] un voluntario de la ambulancia […] fue asesinado y otros dos miembros del equipo de rescate dentro de la ambulancia resultaron heridos. Cuando se envió otra ambulancia para recogerlos un misil impactó en la parte trasera de este vehículo, que

se incendió. La ambulancia acudía con la sirena y las luces rojas encendidas y, en el momento del impacto, la calle estaba desierta».

El Informe no descubre en ninguno de los cinco incidentes «ninguna información o recibe ninguna alegación que indique que las ambulancias implicadas estuvieran siendo usadas para un fin distinto que su función humanitaria». Sigue observando que «los informes de los repetidos ataques a ambulancias que venían en rescate del personal herido [...] apuntan a que las ambulancias y su personal pueden haber sido específicamente atacados»; que «muchos, cuando no la mayoría de los ataques que se han denunciado sobre las ambulancias, parecen haber sucedido sin que hubiera ninguna amenaza obvia o actividad militar en la zona»; y que «las ambulancias estaban marcadas con emblemas, los trabajadores sanitarios iban de uniforme y las IDF habían sido notificadas repetidamente de sus movimientos». El análisis legal del Informe concluye que «algunos de los incidentes [...] constituyen una violación por parte de las IDF de la prohibición de atacar los transportes y al personal médico y pueden equivaler a crímenes de guerra, en especial si los vehículos o el personal atacado usaban los emblemas distintivos de las convenciones de Ginebra»[136]. Aunque parece razonable, en cualquier caso, si lo comparamos con el terriblemente bajo criterio que fija habitualmente el Informe, aún podemos discutir algunos puntos con esta presentación fáctica y estas conclusiones legales. Afirman que las ambulancias en el mercado de Shuja'iya fueron atacadas «en un contexto de fuego intenso». Pero si ninguno de los testigos ha informado de que los palestinos devolvieran el ataque, ¿no debería haber dicho «en un contexto de fuego intenso israelí»? Afirma que «algunos de los incidentes» violaban las leyes de la guerra. ¿Cuál de los cinco escandalosos incidentes, cabría preguntarse, no las violaba? Si el Informe había concluido inequívocamente que la ejecución por parte de Hamás de unos supuestos colaboracionistas «equivalía a un crimen de guerra», bien podríamos preguntarnos por qué, incluso aunque el Informe recopila tanto una cantidad como un patrón de pruebas condenatorias, ahora solamente puede concluir que el ataque repetido por parte de Israel sobre ambulancias claramente señalizadas, en ausencia de cualquier justificación militar, «podría

equivaler a un crimen de guerra». Si el Informe puede exhortar «a que se lleve ante la justicia» a «quien sea responsable» de la ejecución de los supuestos colaboracionistas en Gaza, cabría preguntarse también por qué no era igualmente enfático a la hora de pedir que quien sea responsable de atacar a personal médico y equipos de rescate sea llevado ante la justicia. Las conclusiones legales del Informe declaran que Israel podría haber cometido un crimen de guerra porque había violado la prohibición contra los ataques «sobre el personal y los transportes médicos». Pero ¿no sería también un crimen de guerra si no fueran médicos, sino simples civiles? Esto suscita la pregunta más intrigante y grave de todas. El Informe ha encontrado pruebas convincentes de que Israel «atacó específicamente» a estos civiles / personal médico sin que mediara ninguna razón militar y con el total conocimiento de su estatus de no combatientes. Los cinco ataques a ambulancias que investigó sumaban 35 muertos. Pero, entonces, ¿por qué calculaba el Informe, bajo el epígrafe Ataques a civiles, que Israel solamente había cometido dos asesinatos deliberados de civiles durante Margen Protector? De hecho, los ataques de Israel a ambulancias, personal médico y equipos de rescate sin mediación de ningún objetivo militar discernible no se desviaban, sino que arrojaban luz sobre el verdadero objetivo estratégico de Margen Protector: castigar, humillar y aterrorizar a la población civil de Gaza, parte del cual era causar múltiples bajas civiles.

Finalmente, una omisión flagrante en el inventario que hace el Informe de la ONU de los crímenes de guerra israelíes se merece una nota. Israel destruyó 70 mezquitas y dañó otras 130 durante la Operación Margen Protector. Es un crimen de guerra, según la legislación internacional, atacar «lugares de culto que constituyen la herencia espiritual o cultural de un pueblo»[137]. El Informe hace exactamente cuatro alusiones de pasada a los ataques sobre las mezquitas de Gaza, de las cuales tres repiten la hasbara israelí de que Hamás escondía armas dentro o de que disparaba desde su interior, y la otra es un fragmento de una frase que dice que una mezquita había recibido un impacto[138]. El Informe dedica numerosos párrafos a la angustia psíquica que los israelíes sufrieron durante Margen Protector, pero no tiene ni una palabra que decir sobre el impacto psíquico que en una sociedad profundamente religiosa producen los ataques de Israel sobre las mezquitas de

Gaza. Si Hamás hubiera destruido un rosario de sinagogas israelíes, ¿podríamos pensar que el Informe lo habría ignorado? El tema no es si Israel atacó o no deliberadamente las mezquitas de Gaza sin una justificación militar, aunque las pruebas a nuestro alcance sugieren mayoritariamente que así fue[139]. El punto más elocuente es el siguiente: que el Informe no consideró que la destrucción masiva de las mezquitas fuera algo digno de atención, mucho menos de ser investigado.

El penúltimo capítulo del Informe de la ONU analiza las medidas que ha adoptado cada bando para responsabilizar a quienes hayan violado las leyes de la guerra durante Margen Protector. La sección sobre Palestina, que consiste en nueve parágrafos, esencialmente aduce que «no había mucha información disponible» y después concluye que «las autoridades palestinas no han conseguido garantizar que quienes perpetraron infracciones» de las leyes de la guerra «comparezcan ante la justicia»[140]. El grueso de este capítulo, con 45 parágrafos, examina la respuesta judicial de Israel[141]. Atendiendo a la cantidad de espacio que ha dedicado el Informe a este respecto, da la sensación de que el sistema israelí de atribución de responsabilidades legales era un objeto digno de investigación. Los hechos, sin embargo, revelan que este sistema es una farsa.

El Informe de la ONU observaba que Israel, en el pasado, «no había logrado atribuir responsabilidades sobre las supuestas violaciones» de las leyes de la guerra. Por ejemplo, durante la Operación Plomo Fundido, fueron asesinados 1.400 gazatíes, entre ellos más de 1.200 civiles, y la mayor parte de la infraestructura civil gazatí quedó inutilizada. Pero solamente cuatro israelíes fueron condenados y solamente tres de ellos con penas de cárcel (la máxima sentencia fue de siete meses y medio por el robo de una tarjeta de crédito palestina)[142]. El Informe seguía diciendo que Israel no había «puesto en marcha ni una sola investigación penal» en lo que se refiere a la Operación Pilar Defensivo (2012). Concluía que el historial del sistema judicial israelí «suscitaba serias dudas en lo que se refiere a la eficacia de los mecanismos actuales para procesar a las personas responsables de los presuntos delitos más graves».

Después añadía que «el cuadro es igualmente desolador cuando se revisan otros datos», ya sean sobre los muchos asesinatos de palestinos en Cisjordania («solamente […] dos acusados y una sentencia condenatoria») o sobre las numerosas alegaciones de tortura y maltrato de palestinos («ni una sola investigación penal se abrió»). Aun así, el Informe atisba un rayo de luz en el horizonte. Manifiesta que, en los últimos años, Israel ha mejorado significativamente su sistema de atribución de responsabilidades legales. En 2010, los comandos israelíes lanzaron un ataque sobre la Flotilla de la Libertad para Gaza, asesinando a nueve pasajeros a bordo del barco estandarte, el Mavi Marmara[143]. El escándalo internacional que siguió a estas muertes obligó a Israel a nombrar una comisión de investigación presidida por el exjuez del Tribunal Supremo, Jacob Turkel. Las conclusiones de la Comisión Turkel se recogían en dos volúmenes que se publicaron por separado. El primer volumen (2011), que pretendía examinar las circunstancias que rodearon al asalto del comando sobre la flotilla, aunque estaba repleto de notas académicas y referencias eruditas, resultó ser, cuando se lo examinaba de cerca, un blanqueo completo[144]. El segundo volumen (2013) tenía la misión de valorar si los «mecanismos» israelíes para perseguir judicialmente a quienes violaran las leyes de la guerra se adecuaban a los criterios internacionales; como cabría esperar, la Comisión Turkel concluyó que el mecanismo israelí «en general» aprobaba, pero también recomendaba algunas mejoras. El Informe de la ONU alababa las recomendaciones de la Comisión Turkel, pues daban un «ímpetu» a las reformas «notables» / «importantes» / «bienvenidas» que Israel instituyó posteriormente. El Informe de la ONU también delineaba los restantes fallos «procedimentales, estructurales y sustantivos», ya bosquejados por la Comisión Turkel, y seguía repitiendo, como un mantra, que si Israel les ponía remedio, su sistema judicial estaría muy cerca de garantizar la total asunción de responsabilidades legales. Un típico párrafo que mezcla el «triste» pasado con el rosado futuro sería, por ejemplo:

[Al Informe de la ONU] le preocupa que prevalezca la impunidad generalizada para las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos supuestamente cometidas

por las fuerzas armadas israelíes, ya sea en el contexto de las hostilidades activas en Gaza o en los asesinatos, torturas y malos tratos en Cisjordania. Israel debe poner fin a su reciente y lamentable historial, que impide que los malhechores den cuenta de sus actos. […] Hay que llevar ante la justicia a todas aquellas personas sospechosas de haber violado el derecho internacional en todos los niveles y estamentos políticos y militares. Un factor importante para posibilitar un proceso así sería la implantación de las recomendaciones de la Comisión Turkel[145].

El análisis del Informe de la ONU se centra en el «mecanismo» legal de Israel como si se tratara de un mecanismo crítico que necesitaba reformas. Un pequeño ajuste más, anticipaba, y todo irá de rechupete. Pero las bases racionales de este optimismo simplón nos dejan perplejos. Vamos a ver esta cronología. El Informe destacaba que Israel ya había implantado varias de las reformas que había propuesto el Informe Turkel antes de la Operación Margen Protector, y las elogiaba como iniciativas «notables» / «significativas» / «bienvenidas». Pero también señalaba que después de Margen Protector, y a pesar de estas cacareadas reformas, B’Tselem (Centro de Información israelí para los derechos humanos en los territorios ocupados) y Yesh Din –los principales guardianes de los derechos humanos palestinos dentro del territorio de Israel– se negaban a cooperar con las investigaciones oficiales israelíes de dicha operación. «El mecanismo actual de investigación», declararon conjuntamente, «impide una investigación seria y está deteriorado por varios fallos estructurales que lo vuelven incapaz de llevar a cabo una investigación profesional»[146]. Se diría que estas organizaciones de defensa de los derechos humanos en Israel estaban menos felices acerca de las supuestas reformas israelíes de lo que estaba el Informe. Aún más, si estas reformas eran mejoras «notables» / «significativas» / «bienvenidas», ¿cómo es que los resultados materiales de la investigación israelí sobre Margen Protector parecen un calco de los de la Operación Plomo Fundido? El Informe señala que en 2015 Israel había publicado tres acusaciones: «Dos soldados fueron acusados de robar 2.420 NIS (algo más de 600 dólares) de una casa palestina en Shuja’iya, Ciudad de Gaza. A un tercer soldado se le acusó de cooperación con

ellos». A menos que el Informe sea de la opinión de que una acusación por robar dinero en efectivo, en lugar de por robar una tarjeta de crédito, marca un salto civilizatorio, un amplio abismo separa el entusiasmo desbordante del Informe del producto mensurable de esas reformas. Un año después de la publicación del Informe de la ONU, B'Tselem publicó un informe propio, The Occupation's Fig Leaf: Israel's Military Law Enforcement System as a Whitewash Mechanism[147]. Y anunciaba que, a partir de ese momento, dejaban de cooperar con el sistema de imposición israelí de la ley militar. Inter alia, comentaba sobre la Comisión Turkel, que tanto impresionaba al Informe de la ONU: «La Comisión […] recomendaba una serie de mejoras en el sistema de aplicación de la ley militar […]. La implantación de esas recomendaciones, que ya se ha puesto en marcha, podría mejorar las apariencias del sistema actual, pero no remediaría los fallos sustantivos de este». El informe de B'Tselem concluía:

La apariencia de un sistema judicial operativo permite que los oficiales israelíes nieguen las acusaciones que se les hacen, tanto en Israel como en el extranjero, de que Israel no aplica la ley a los soldados que dañan a los palestinos. […] Estas apariencias también ayudan a conceder legitimidad […] a la continuación de la ocupación. Hace más fácil rechazar las críticas sobre las injusticias de la ocupación, gracias a la pretensión externa del ejército de que incluso consideran que algunos actos son inaceptables y respalda esta pretensión diciendo que ya está investigando dichas acciones […]. La cooperación de B'Tselem con la investigación militar y con el sistema de imposición de estas no ha logrado la justicia y, en lugar de ello, ha prestado legitimidad al régimen de la ocupación y ha ayudado a blanquearlo […]. Ya no tiene ningún sentido el buscar la justicia y el defender los derechos humanos trabajando con un sistema cuya función real se mide por su capacidad de seguir tapando con éxito los actos ilegales y de proteger a quienes los cometen.

El fin de las pseudoinvestigaciones emprendidas por Israel después de Margen Protector, observaba B'Tselem en una publicación

complementaria, Whitewash Protocol: The So-called Investigation of Operation Protective Edge, era «evitar que el Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya se encargara él mismo del asunto[148]. Si tan siquiera el Informe de la ONU hubiera reunido una inocencia, valor e integridad así… En lugar de ello, prestó sus buenos oficios al blanqueo y sacó brillo a la hoja de parra de la ocupación.

La valoración que hace el Informe de la ONU de los mecanismos de asunción de responsabilidades de Israel incluye el estudio del caso de cuatro niños palestinos asesinados por misiles israelíes[149]. Los niños estaban jugando al escondite en torno a una pequeña y cochambrosa casita de pescador, «que se encontraba a la vista de los hoteles de las inmediaciones, donde se alojaban los periodistas internacionales, ninguno de los cuales declaró haber visto a militantes en la zona en el momento del ataque» (The Guardian)[150]. El Informe señala que «los chicos tenían una edad entre 9 y 11 años y, por lo tanto, tenían una estatura más pequeña que la del adulto medio», mientras que Amnistía señala que «pronto apareció material en vídeo en el que se veía claramente que los individuos atacados eran niños»[151]. Pero la investigación oficial israelí había concluido que los niños habían sido confundidos con «militantes» y que el «proceso de ataque […] se ajustaba a las leyes internas israelíes y a los requisitos de la legislación internacional». Si la valoración legal que hacía el Informe difería de la de Israel, lo hacía sobre la razón más mínima: «Encontraba indicios potentes de que las IDF no habían cumplido con su obligación de adoptar todas las medidas viables para impedir o al menos minimizar el daño incidental a civiles». No queda claro por qué el Informe descarta la posibilidad de que los misiles israelíes apuntaran deliberadamente a los niños. Como si las IDF nunca antes hubieran apuntado a niños palestinos, o, para el caso, los hubiera torturado[152] y los hubiera usado como escudos humanos[153]; o como si los colonos israelíes, muchos de los cuales en algún momento han pasado por las IDF, no hubieran cometido las atrocidades más horribles contra los niños palestinos, como quemarlos vivos[154]. El Informe apenas se para a reflexionar, y lo hace indirectamente, sobre si la afirmación de que las IDF confundieron a cuatro niños «de estatura pequeña en comparación con la de un adulto de estatura media» con «militantes» de Hamás es plausible. Así, en línea con su análisis

habitual sobre las «precauciones viables», el Informe critica a las IDF porque «podrían haber verificado de manera más exhaustiva si aquellos a quienes apuntaban estaban tomando parte directa en las hostilidades». ¿Qué «hostilidades»? El propio Informe afirma que «no había soldados de las IDF en la zona, porque la operación terrestre no había comenzado, ni había ninguna otra persona en peligro inminente». Entonces, ¿acaso la premisa tácita del Informe, de que las IDF creían que los niños «estaban tomando parte directa en las hostilidades [...]», no es un acto de mala fe, sin motivo ni razón y, a la luz del sangriento historial israelí de matar y torturar a niños palestinos, totalmente injustificado? El Informe continúa: «El complejo se localiza en el centro de una ciudad de casi 550.000 residentes, entre una plaza pública y una zona que usan habitualmente los pescadores [...]. Por lo tanto, no se puede descartar que hubiera civiles, incluyendo niños, presentes. Estos elementos fácticos apuntan a que, asumiendo que los individuos eran miembros de grupos armados simplemente por el motivo de su presencia en un lugar determinado, las IDF invirtieron la presunción de estatus civil». Este pasaje nos desconcierta por varias razones. Primero, el Informe da por sentado que el ataque del misil israelí apuntaba a un «complejo» de Hamás, incluso aunque los periodistas testigos testimoniaron que se trataba de una cabaña cochambrosa. Segundo, reconoce que el área del ataque era un lugar civil densamente poblado. Tercero, era muy improbable que se pudieran confundir a niños «de corta estatura» con militantes de Hamás. ¿Por qué, entonces, el Informe infiere que las IDF habían «asumido que los individuos eran miembros de grupos armados»? Sobre la base de las pruebas circunstanciales, que el propio Informe había reunido, parecía mucho más probable que las IDF hubieran apuntado deliberadamente a niños inocentes; de hecho, excepto por las negativas pro forma israelíes, no hay otra base para inferir algo diferente. Empezando con la suposición de que los niños eran militantes, y no civiles (en lugar de al contrario), el Informe concluye que Israel «parece haber validado una aplicación incorrecta del derecho humanitario internacional». La ironía, que se pierde por completo en este desgraciado documento, era que, al empezar por la premisa altamente dudosa de que las IDF habían «supuesto» que la cochambrosa cabaña era un «complejo» de Hamás, que los diminutos niños eran un «grupo armado», el Informe mismo validaba una aplicación incorrecta del derecho

humanitario internacional: el principio legal aplicable no era el de «todas las precauciones viables», sino, simplemente, el ataque deliberado a civiles[155].

El análisis que hace el Informe de la ONU del sistema de responsabilidad legal de Israel se imbrica, y por eso hace aguas, dentro de una cadena de premisas falsas, aunque anodinas y convenientes. A saber: Israel ha lanzado periódicamente operaciones militares en Gaza, con unos objetivos y fines militares convencionales y legítimos; en el curso de dichas operaciones, las IDF han cometido excesos, desgraciadamente: ¿qué ejército no lo hace?, que a veces se desbordan en crímenes de guerra; si Israel se ha mostrado reticente a la hora de perseguir judicialmente estas infracciones de las leyes de la guerra, ha sido por culpa de un «mecanismo» legal administrativo aún deficiente. Pero, afortunadamente, solo se requiere un pequeño ajuste –bastaría que Israel implementara un par más de las recomendaciones de la Comisión Turkel– para eliminar los fallos y permitir que las ruedas de la justicia vayan como la seda. El cuadro cambia radicalmente, no obstante, si vemos Margen Protector a través de las lentes del Informe Goldstone, publicado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU después de la Operación Plomo Fundido[156]. El Informe Goldstone concluyó que la muerte y destrucción que Israel impartió sobre la población civil de Gaza no era «incidental», o el resultado de «no haber tomado todas las precauciones viables», sino, por el contrario, algo calculado y deliberado, «diseñado para castigar, humillar y aterrorizar a una población civil»[157]. La doctrina militar que impulsaba Margen Protector procedía de Plomo Fundido; era una nueva representación, amplificada. Las pruebas fácticas que se recogen en el Informe de la ONU no dejan mucho espacio para dudar de que Israel estaba atacando deliberadamente a la población y la propiedad civil durante Margen Protector. Si el análisis legal del Informe sacaba unas conclusiones distintas, no se debía a un déficit de pruebas materiales, sino a un déficit de integridad moral. El Informe desplegaba el idioma de la ley no para arrojar luz sobre la naturaleza criminal de las andanzas de Israel, sino para purificarlas. Es cierto que el Informe en muchas ocasiones «suscita dudas» de que Israel «pudiera» haber cometido crímenes de guerra. Pero voluntaria y repetidamente, y de manera imperdonable, ignoraba las pruebas dispositivas de que estos

crímenes israelíes, lejos de ser colaterales o producto de los excesos tácticos en la prosecución de un objetivo militar bona fide, eran integrales e inherentes a una estrategia criminal que apuntaba a la población civil de Gaza. Ya fuera por interés profesional, cobardía o cinismo, el resultado era que el Informe, de manera transparente y desvergonzada, se apartaba de las conclusiones condenatorias que surgían, inexorablemente, de sus propios hallazgos fácticos. ¿Acaso no bordeaba el absurdo, no entraba de lleno en el terreno del absurdo, cuando el Informe acusaba a Israel de no «adoptar todas las precauciones viables […] para evitar daños incidentales a civiles», después de que los misiles israelíes apuntaran y asesinaran a cuatro niños jugando al escondite en una zona civil abierta, en ausencia de ninguna actividad militar, a plena luz del día, en presencia de numerosos testigos oculares creíbles, que contradijeron las negaciones pro forma de Israel en todos y cada uno de sus puntos? En dos lugares, el Informe se pregunta si la fuerza «masiva y destructiva» de Israel había sido «aprobada, al menos tácitamente, por los niveles más altos del gobierno», y aborda cautelosamente «el papel de los oficiales de alta gradación, que establecen la política militar […] los soldados individuales es posible que hayan seguido una política militar acordada». También plantea una seductora pregunta: ¿por qué «el liderazgo político y militar […] no revisa sus políticas o cambia el curso de sus acciones, a pesar de la considerable información acerca de la muerte y destrucción masiva en Gaza»? Señala después que los organismos relevantes israelíes no habían iniciado procedimientos judiciales contra «la cúpula militar o civil». Pero, aun así, el Informe sigue con la idea quimérica de que, si las recomendaciones de la Comisión Turkel se implantaran por completo, el sistema judicial israelí podría «llevar ante la justicia a los individuos que hubieran desempeñado un papel en los hechos, con independencia de su posición en la jerarquía»[158]. En realidad, si los oficiales de alto rango israelíes persistían tozudamente en un curso de acción que causaba caos y muerte en Gaza, y si ninguno de ellos era posteriormente acusado (ni sentenciado, claro), la razón no era ningún misterio: la operación se desarrollaba según los planes y el plan gozaba de un apoyo casi universal. Si los autores del Informe no veían esto es porque no querían verlo, ni querían que lo viera nadie que leyera sus hallazgos y conclusiones. El Informe era un monumento al sofisma, la ofuscación y la evasión. Apelaba a la absurda panacea de

«mecanismos de responsabilidad completos y eficaces»[159], cuando de hecho casi toda la sociedad israelí (judía), de arriba abajo y totalmente, estaba unida en la convicción dual –que se despliega en los testimonios de Breaking the Silence– de que la vida árabe no valía nada y de que la vida judía valía su peso en oro. Esto es algo que el Informe también finge no ver y que no quiere que otros vean[160]. Porque si se admitiera esta sórdida realidad, habría que confrontarse con su implicación fatídica: que el obstáculo para alcanzar la justicia no era localizado, sino sistémico. Israel no se reformaría porque no puede reformarse. Está contaminado en todos los niveles (y, entre ellos, el judicial no es el menos afectado) por una veta virulenta de racismo y arrogancia que circula libremente en un organismo político cuyo sistema inmunológico está destrozado. Cuando alimenta la ilusión de que si Israel añade un puñado de reformas administrativas internas se curaría, el Informe implica y valida la imagen totalmente falsa de que Israel es esencialmente una sociedad sana. Pero un Estado que cada dos años lanza –con un apoyo popular mayoritario, y sin una sombra de remordimiento– una guerra relámpago de alta tecnología contra una población civil indefensa y atrapada es un Estado profundamente enfermo. Si queremos evitar otra Operación Margen Protector, e impedir que el pueblo de Gaza sufra otra masacre, necesitamos ejercer presión desde fuera, no basta con unas chapuzas irrelevantes y sin sentido desde el interior.

La traición a Gaza por parte de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, que estas páginas recoge, constituye una triste verdad. Aun así, hay que difundirla. «El inicio de la sabiduría», decía Confucio, «es llamar a las cosas por su nombre».

EL CUADRO DE HONOR













De arriba a abajo: Philip Luther, Amnistía Internacional; Kenneth Roth, Human Rights Watch; Luis Moreno-Ocampo, Tribunal Penal Internacional; Mary McGowan Davis, Comisión Independiente de Investigación de la ONU; Jacques de Maio, Comité Internacional de la Cruz Roja; Richard Horton, The Lancet.

Créditos fotográficos: Karen Hatch Photography; Harald Dettenborn; Estonian Foreign Ministry; Jean-Marc Ferré; ICRC Audiovisual Archives; Bluerasberry.

[1] «UN Rights Council Appoints Members of Commission to Investigate Purported Gaza Violations», UN News Centre, 11 de agosto de 2014.

[2] T. Lazaroff, «UNHRC Investigator Schabas Stays Mum on Hamas as “Terror Group”», The Jerusalem Post, 12 de agosto de 2014; S. Winer, «UN Gaza Probe Head Says He’s Not Anti-Israel, Will Be Impartial», The Times of Israel, 12 de agosto de 2014; R. Ahren, «Watchdog Group Demands That Schabas Quit UN Gaza Inquiry over Anti-Israel Bias», The Times of Israel, 4 de septiembre de 2014; «Head of UN Inquiry into Gaza Conflict to Quit», ynetnews.com, 2 de febrero de 2015; B. Ravid y J. Khoury, «Netanyahu: After Gaza inquiry head quit, UN should shelve report», Haaretz, 3 de febrero de 2015; B. Ravid, «New Head of UN Inquiry into Gaza War Expected to Be More Balanced toward Israel», Haaretz, 3 de febrero de 2015. El motivo inmediato tras la dimisión de Schabas fue la «revelación» de que en una ocasión fue contratado para una consultoría rutinaria por la Organización para la Liberación de Palestina que no mencionó en su currículo. Si hubiera informado de ello, tal vez hubiera sobrevivido a la caza de brujas.

[3] Véase cap. IX.

[4] Report of the Detailed Findings of the Independent Commission of Inquiry Established Pursuant to Human Rights Council Resolution S-21/1, 22 de junio de 2015; a partir de ahora: UN Report.

[5] Hamás se usa para referirse a todos los grupos armados de Gaza.

[6] Véase cap. XII.

[7] UN Report, cit., § 26.

[8] Ibid., §§ 26-30.

[9] Ibid., §§ 54, 598, 599.

[10] Ibid., § 681(d). El Informe se distanciaba implícitamente en este punto del Comité de Investigación nombrado por el secretario general Ban Ki-moon, que había dicho que el bloqueo costero de Gaza era legal: véase cap. IX.

[11] Ibid., §§ 369-370.

[12] Ibid., § 53.

[13] El Informe repetía también, sin cuestionarlas, las justificaciones israelíes para lanzar la operación Guardián de mi Hermano: «El 12 de junio de 2014, Eyal Yifrah, de 19 años, Gilad Sha'er y Naftali Frenkel, de 16, fueron secuestrados y brutalmente asesinados […]. Como respuesta a su secuestro, entre el 12 y el 30 de junio de 2014, Israel lanzó la Operación Guardián de mi Hermano, mediante la cual las IDF buscaban encontrar a los tres jóvenes y, simultáneamente, "debilitar el terrorismo de Hamás"», ibid., § 503. Sin embargo, en una operación aparentemente chapucera, sus secuestradores asesinaron a los adolescentes israelíes. El gobierno israelí, que sin duda ninguna conocía este giro de los acontecimientos antes de lanzar Guardián de mi Hermano, se aprovechó de estos asesinatos al servicio de una agenda política más amplia. Véase cap. XI.

[14] UN Report, cit., §§ 58, 246. La invasión terrestre, continuaba, «fue la respuesta a lo que Israel describía como un ataque militante dentro de Israel el 17 de julio, llevado a cabo a través de un túnel desde Gaza; del lanzamiento de un vehículo aéreo sin piloto; de un intento de infiltración por mar hacia Israel por parte de los comandos navales de Hamás; de disparos constantes de misiles desde Gaza; y de la negativa de Hamás a aceptar un alto el fuego», ibid., § 246. Pero el impulso más probable tras la decisión israelí de lanzar una invasión terrestre el 17 de julio fue la caída de un avión comercial malasio sobre Ucrania ese mismo día. Véase cap. XI.

[15] Y. Dinstein, War, Aggression and Self-Defence, 4.a ed., Cambridge, 2005, pp. 209-210.

[16] Gaza Conflict Task Force, 2014 Gaza War Assessment: The New Face of Conflict, Jewish Institute for National Security Affairs, JINSA, 2015, p. 8; véase también pp. 16, 19. La fuerza especial fue un encargo de la JINSA.

[17] S. Roy, The Gaza Strip: The Political Economy of De-development, 3.a ed. aumentada, Washington, DC, 2016, p. xxx; Amnesty International Report 2015/16: The State of the World's Human Rights, 2016, p. 201.

[18] Véase cap. XI.

[19] N. Barnea, «Israel to Build Underground Wall around Gaza Strip», ynetnews.com, 16 de junio de 2016.

[20] A. Harel, «Israel Doesn't Intend to Strike Gaza over Hamas Tunnels», Haaretz, 2 de febrero de 2016. Después se informó de que, aunque habían comenzado las obras del muro, «está en peligro de quedarse sin fondos, porque no se le ha adjudicado ninguna partida al proyecto en el año fiscal 2017-2018». El Ministerio de Economía insistía, no obstante, en que «hay, de hecho, un presupuesto para el proyecto». M. Tzuri, «Building Starts on Underground Gaza Barrier», ynetnews.com, 7 de septiembre de 2016.

[21] UN Report, cit., §§ 16, 555, 597, 668. La única nota «falsa» en esta letanía de ecuanimidad fue un reconocimiento de pasada de que «los palestinos han demostrado en el pasado una resiliencia extraordinaria», § 54.

[22] Véase, p. ej., Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United Nations Secretary-General, 25 de enero de 2005, §§ 190, 271, 285.

[23] UN Report, cit., §§ 110-465, 503-550, Israel; §§ 59-109, 466-502, Hamás.

[24] Ibid., §§ 573-596, Gaza; §§ 556-572, Israel.

[25] Ibid., §§ 526-546.

[26] Ibid., § 66.

[27] Ibid., § 574.

[28] Ibid., §§ 593-595.

[29] Ibid., §§ 569-571.

[30] International Committee of the Red Cross, ICRC, Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, Ginebra 1987, artículo 51.

[31] Ibid., Comentario, § 1940.

[32] UN Report, cit., § 108.

[33] Ibid., §§ 55, 74, 104, 106, 108, 558, 561.

[34] Ibid., § 673.

[35] Véanse caps. VII y XI.

[36] Véase cap. XII.

[37] UN Report, cit., §§ 63-64.

[38] Véase cap. XI y cap. XII.

[39] UN Report, cit., §§ 78, 95, 556, 565, 566.

[40] Véase cap. XI.

[41] UN Report, § 60, véase también § 89.

[42] Ibid., §§ 78, 80, 91.

[43] Ibid., §§ 92, 95.

[44] Ibid., § 90.

[45] UN Report, cit., §§ 97-102. También señalaba, ibid., §§ 484-486, que «los misiles que disparan los grupos armados palestinos parecen haber funcionado mal en algunos casos o haber sido disparados a la ligera y se han quedado cortos y han caído, en algunos casos, en zonas densamente pobladas de Gaza, causando muertos y heridos». En un incidente especialmente trágico, once niños gazatíes y dos adultos fueron asesinados. Aunque se pide que Hamás «lleve a cabo una investigacion exhaustiva de este caso para determinar el origen y las circunstancias del ataque», el Informe trataba este incidente con claramente menos malicia que Amnistía: véase cap. XII.

[46] Ibid., § 85.

[47] Ibid., § 669, véase también § 215.

[48] Ibid., § 99.

[49] Véase cap. XI.

[50] UN Report, cit., § 90.

[51] Véase cap. II.

[52] ICRC, Commentary on the Additional Protocols, artículo 59.

[53] UN Report, cit., §§ 466-469.

[54] Ibid., § 471.

[55] Véase cap. XII.

[56] UN Report, cit., § 475.

[57] Ibid., §§ 472, 476-477.

[58] Ibid., § 473.

[59] Ibid., § 478.

[60] En un parágrafo posterior, ibid., § 482, el Informe alega una prueba, aunque insuficiente. Cita «varias» declaraciones públicas de Hamás exhortando a los gazatíes la víspera de la amenazada invasión terrestre de Israel a seguir firmes y a «no atender las advertencias que lanzan las IDF, que aconsejan a los residentes […] la evacuación. […] Las declaraciones son un indicio claro de que las autoridades de Gaza no tomaron todas las precauciones necesarias para proteger a la población civil». Pero si Hamás no impidió físicamente a los gazatíes que se marcharan; si la población civil de Gaza eligió, como un acto de voluntad propia, y plenamente consciente de los peligros inminentes, permanecer en su lugar; y si el agente activo que ponía en peligro a la población civil era Israel, y no Hamás, entonces la única infracción documentada de la obligación de adoptar «precauciones» por parte de Hamás resulta ser bastante trivial.

[61] Ibid., § 479, cursivas añadidas.

[62] Véase también ibid., § 480.

[63] Ibid., § 483, véase también § 177, cursivas añadidas. En 2006, Human Rights Watch hizo una acusación casi idéntica, pero, después de sufrir la presión pública, la retiró. N. G. Finkelstein, Knowing Too Much: Why the American Jewish Romance with Israel is Coming to an End, Nueva York, 2012, p. 126.

[64] N. G. Finkelstein, What Gandhi Says: About Nonviolence, Resistance and Courage, Nueva York, 2012, pp. 72-73.

[65] UN Report, cit., §§ 492-502.

[66] L. Trotsky, Terrorism and Communism, Ann Arbor, 1972, p. 58.

[67] Y. Zuckerman, A Surplus of Memory: Chronicle of the Warsaw Ghetto Uprising, Berkeley, 1993, pp. 192, 209.

[68] UN Report, cit., §§ 502, 673.

[69] Ibid., § 683(b).

[70] Ibid., § 499.

[71] Ibid., § 20.

[72] Ibid., § 111.

[73] Ibid., § 134, Caso 4, Abu Jabr.

[74] Ibid., § 190, Caso 13, Al Sayam y Abu Sanimah.

[75] Ibid., § 220.

[76] Ibid., §§ 193-200, Caso 14, Shuheibar.

[77] Preliminary, Partial Examination of the Names of Palestinians Killed in Operation Protective Edge and Analysis of the Ratio between Terrorist Operatives and Noninvolved Civilians Killed in Error, 28 de julio de 2014, disponible en [terrorism-info.org.il/Data/articles/Art_20687/E_124_14B_472268844.pdf].

[78] UN Report, § 119, Caso 1, Al Hajj, § 160, Caso 8, Al Batsh, §

185, Caso 12, familia Dheir, § 191, Caso 13, Al Sayam y Abu Sanimah. En uno de los casos, aunque aparentemente había un militante en el edificio, Israel justificó su ataque por razones totalmente distintas, ibid., §§ 178-179; Caso 11, Kaware. «Los objetivos militares posibles» que determinaba el Informe también se basaban en datos cuestionables proporcionados por Amnistía, véase cap. XII.

[79] UN Report, cit., § 220, véase también § 222.

[80] Ibid., § 122, Caso 2, Qassas, § 128, Caso 3, Al-Najjar, § 141, Caso 5, Al Hallaq y Ammar, § 147, Caso 6, Balatah, § 170, Caso 10, Al Salam Tower-Al Kilani y Derbass.

[81] Ibid., §§ 233, 237.

[82] Los GBU-31 y los Mark-84 JDAM pertenecen a la misma familia de armas.

[83] UN Report, cit., § 225.

[84] Ibid., § 226, cursivas añadidas.

[85] La decisión del Informe en lo que se refiere al uso de los proyectiles de artillería HE por parte de las IDF en las zonas de Gaza densamente pobladas también nos confunde. Más allá del poder explosivo de estos proyectiles, el Informe observaba que «los sistemas de fuego indirecto, como la artillería de 155 mm […], son considerados "armamento estadístico". […] La amplia dispersión de sus proyectiles es un resultado esperado, pues así es como se han diseñado estas armas». Casi 20.000 de estos doblemente indiscriminados proyectiles de artillería HE se dispararon con un abandono imprudente, como muestra la recopilación de Breaking the Silence, el 95 por 100 de ellos dentro o en las inmediaciones de zonas civiles densamente pobladas, convirtiendo el uso que de ellos hacía Israel en triplemente indiscriminado: un proyectil altamente explosivo, con una amplia área de dispersión, se disparaba a ciegas en zonas densamente pobladas. El Informe concluye, extrañamente, que «el uso de dicha artillería no es adecuado en zonas densamente pobladas, con independencia de la legalidad de recurrir a dichas armas». Es difícil decidir qué horroriza más, si el uso por parte del

Informe de esas frases ceremoniosas, como «no adecuado», o su inequívoca implicación de que el uso por parte de Israel de esa artillería en Gaza era legal. Pero seis parágrafos más adelante, el Informe parece contradecirse: el uso de armas con efectos en grandes áreas por parte de las IDF, en zonas densamente pobladas, es muy probable que constituya una violación de la prohibición de ataques indiscriminados» y «podría [...] equivaler a un crimen de guerra», ibid., §§ 408-409, 415. Véase también cap. XII.

[86] UN Report, cit., § 208.

[87] Ibid., §§ 219-221.

[88] Ibid., § 221, véase también § 232.

[89] Ibid., § 221.

[90] Ibid., § 237.

[91] Ibid., § 222. Sobre los ataques israelíes a los rascacielos, véase cap. XI.

[92] UN Report, cit., §§ 227-228, 230, 241.

[93] Ibid., §§ 223, 243, cursivas en el original.

[94] Ibid., §§ 248, 250.

[95] Ibid., §§ 257-260.

[96] Ibid., §§ 262-278, 283-285, 292-293.

[97] Ibid., §§ 293-296.

[98] Israel nunca argumentó que estaba intentando evitar que Hamás capturara a un soldado herido, como en Rafah, cuando se invocó la Doctrina Aníbal.

[99] UN Report, cit., § 286.

[100] Véase, por ejemplo, cap. XII, Cuadro 8, Testimonio 51 y Testimonio 71.

[101] UN Report, cit., § 299.

[102] Human Rights Watch, «Gaza: Israeli soldiers shoot and kill fleeing civilians», 4 de agosto de 2014.

[103] UN Report, cit., §§ 308-313.

[104] Ibid., §§ 329-333.

[105] Ibid., §§ 337, 340, cursivas en el original.

[106] Ibid., § 339.

[107] Ibid., § 341. El Informe señalaba en este contexto que «el artículo 33 de la IV Convención de GInebra establece que los castigos colectivos y medidas de intimidación o terroristas semejantes están prohibidos». Pero se limitaba a acusar a Israel de castigo colectivo.

[108] Véase cap. XII.

[109] Para un análisis detallado de la masacre de Rafah, véase cap. XII.

[110] UN Report, cit., § 359.

[111] Ibid., §§ 352-357.

[112] Ibid., §§ 365-366, cursivas añadidas; véase cap. XII.

[113] UN Report, cit., §§ 376-385.

[114] Ibid., §§ 386-388.

[115] Human Rights Watch, Precisely Wrong: Gaza Civilians Killed by Israeli Drone-launched Missiles, 2009.

[116] UN Report, cit., § 392.

[117] Ibid., §§ 396-405; C. Alfred, «"The Present Is Tragic But the Future Is Unthinkable" in Gaza», The Huffington Post, 31 de julio de 2014 (Gunness); B'Tselem, Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories, Whitewash Protocol: The So-

called Investigation of Operation Protective Edge, 2016, pp. 22-23.

[118] UN Report, cit., §§ 406-415.

[119] Ibid., §§ 416-419.

[120] Ibid., § 420.

[121] El Informe también afirmaba, sin citar fuentes, que «los ataques aéreos en más de 200 edificios residenciales no arrojaron víctimas civiles», ibid., § 234.

[122] Ibid., §§ 235-239; J. Bachmann et al., Gaza 2014: Findings of an Independent Medical Fact-Finding Mission, 2015, recopilado por Physicians for Human Rights-Israel, pp. 39-44.

[123] Véase cap. III.

[124] Véase cap. XI; UN Report, cit., §§ 210-211, 233-234.

[125] UN Report, cit., §§ 211, 234.

[126] Ibid., § 234.

[127] Ibid., §§ 425-430.

[128] Ibid., §§ 433-438.

[129] Ibid., §§ 439-443.

[130] Al Mezan Center for Human Rights, «Israeli Military Refuses to Investigate Attack near UNRWA School in Rafah, Gaza That Killed 14 Civilians», 31 de agosto de 2016.

[131] UN Report, cit., §§ 445-449.

[132] Ibid., §§ 446-448. El análisis legal del Informe no evalúa directamente el tercer incidente en la escuela de Rafah.

[133] Véase cap. XI.

[134] UN Report, cit., §§ 450-455, 581-583.

[135] B'Tselem calificó el ataque de 2006 como un «crimen de guerra», véase cap. XII.

[136] UN Report, cit., §§ 456-465.

[137] ICRC, Commentary on the Additional Protocols, artículo 53.

[138] UN Report, cit., §§ 247, 355, 474, 476.

[139] Véase cap. XII.

[140] UN Report, cit., §§ 652-661, 666.

[141] Ibid., §§ 607-651, véase también ibid., § 681[b].

[142] Véase cap. IV; B'Tselem, «Israeli Authorities Have Proven They Cannot Investigate Suspected Violations of International Humanitarian Law by Israel in the Gaza Strip», 5 de septiembre de 2014.

[143] Véase cap. VII.

[144] Véase cap. VIII.

[145] UN Report, cit., § 664.

[146] Ibid., § 609.

[147] B'Tselem, The Occupation's Fig Leaf: Israel's Military Law Enforcement System as a Whitewash Mechanism, 2016.

[148] B'Tselem, Whitewash Protocol, cit., p. 25. Sobre la incapacidad de Israel de investigar las infracciones del derecho internacional después de Margen Protector, véase también Al Mezan Center for Human Rights, Gaza Two Years On: Impunity over Accountability, 28 de agosto de 2016.

[149] UN Report, cit., §§ 630-633.

[150] T. Hicks, «Through Lens, 4 Boys Dead by Gaza Shore», The New York Times, 16 de julio de 2014; P. Beaumont, «Israel Exonerates Itself over Gaza Beach Killings Last Year», The Guardian,

11 de junio de 2015; P. Beaumont, «Gaza Beach Killings: No justice in Israeli exoneration, says victim's father», The Guardian, 13 de junio de 2015.

[151] Amnesty International, «Black Friday», p. 77. Para este informe, véase cap. XII.

[152] UN Committee against Torture, «Concluding Observations on the Fifth Periodic Report of Israel», 3 de junio de 2016, § 28; Amnesty International Report 2015/16, también informaba de que «los niños […] parecen ser víctimas de asesinatos ilegales», pp. 201-202; UN Report, cit., § 517.

[153] Véase cap. IV. El uso por parte de Israel de niños gazatíes como escudos humanos tiene una larga historia; véase J.-P. Filiu, Gaza, cit., p. 98.

[154] J. Rudoren, «Autopsy Suggests Palestinian Teenager Was Burned to Death after Abduction», The New York Times, 5 de julio de 2015; J. Khoury, «Palestinian Infant Burned to Death in West Bank Arson Attack», Haaretz, 31 de julio de 2015.

[155] Nos deprime que la eminente organización israelí de defensa de los derechos humanos, B'Tselem, también defienda la ficción oficial de que Israel apuntaba a un complejo de Hamás y que la muerte de los niños se debió a un equipo de vigilancia imperfecto. B'Tselem, Whitewash Protocol, cit., pp. 17-21. Sobre este último punto, si fuera cierto que Israel no podía distinguir entre niños de diez años jugando al escondite a plena luz del día en una zona civil, por una parte, y militantes de Hamás a punto de lanzar un atraque mortal, por la otra, entonces es difícil calibrar la afirmación genérica de Israel de que tenía cuidado de no atacar a civiles. ¿Cómo podía saber siquiera si estaba atacando a civiles o a combatientes?

[156] Véase cap. V.

[157] Ibid.

[158] UN Report, cit., §§ 243, 640-643, 671-672.

[159] Ibid., §§ 667, 675.

[160] Al contrario, citaba expresiones nada representativas de la preocupación israelí hacia los gazatíes, ibid., §§ 75, 77.

XIV. CONCLUSIÓN

Un Informe de 2012 planteaba esta pertinente cuestión: ¿será Gaza un lugar «vivible» en 2020? Su respuesta, basada en las tendencias actuales, era que no lo sería apenas y que requeriría un esfuerzo «hercúleo» invertir esas tendencias[1]. El pronóstico era aún más desolador unos años más tarde. «Tres operaciones militares israelíes en los últimos seis años, además de ocho años de bloqueo económico», concluía un informe de la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas (UNCTAD), «han arrasado la ya debilitada infraestructura de Gaza, roto en mil pedazos su base productiva, no han dejado tiempo para una reconstrucción significativa o para una recuperación económica y han empobrecido a la población palestina de Gaza». Cuando escribo esto, un 50 por 100 de la población de Gaza está en paro, mientras que un 70 por 100 padece inseguridad alimentaria y depende de la ayuda humanitaria; el 70 por 100 de las casi 20.000 viviendas que se destruyeron durante Margen Protector aún no se han reconstruido; el 70 por 100 de los gazatíes tienen agua corriente únicamente 6 o 9 horas cada dos o cuatro días, mientras que casi todos los habitantes de Gaza sufren cortes de electricidad que duran entre 16 y 18 horas al día. Por primera vez en el último medio siglo, un equipo de investigadores de la salud descubrieron que «la tasa de mortalidad ha aumentado entre los recién nacidos palestinos refugiados en Gaza». En respuesta a la pregunta que planteaba el Informe de 2012 de la ONU, el informe de la UNCTAD predecía que, si se sigue la trayectoria presente, «Gaza será invivible» en 2020[2]. Es posible que esta predicción, que confería a Gaza un margen de cinco años, fuera demasiado optimista. En 2016, los altos funcionarios israelíes observaban ominosamente que otra guerra con Gaza era «inevitable». «No podemos seguir en una guerra de desgaste constante. Por lo tanto, el próximo conflicto tiene que ser el último»[3].

La causa más latente de la desesperada situación en Gaza es el bloqueo. El informe de 2015 de la UNCTAD observaba que «el levantamiento completo e inmediato del bloqueo israelí [es] más

urgente que nunca si queremos que Gaza tenga la oportunidad de evitar daños mayores y pueda convertirse en un lugar vivible». En un informe posterior, un año más tarde, la UNCTAD de nuevo hacía sonar la alarma: «La población de Gaza está encerrada, se le niega el acceso a Cisjordania y al resto del mundo. Incluso a las personas que necesitan tratamiento médico no se les permite viajar para obtener cuidados esenciales [...]. La recuperación completa de la Franja de Gaza es muy difícil sin un levantamiento del bloqueo, que afecta colectiva y negativamente a toda la población de 1,8 millones de personas y la priva de sus derechos económicos, civiles, sociales y culturales, así como del derecho al desarrollo»[4]. El bloqueo, que constituye una forma de castigo colectivo, es una violación flagrante del derecho internacional. El informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la Operación Margen Protector, aunque era una vergüenza y un blanqueo, no obstante pedía a Israel que levantara el bloqueo «inmediata e incondicionalmente»[5]. Las graves restricciones que impone Israel a las exportaciones desde la Franja de Gaza, concluye Sara Roy, de la Universidad de Harvard, «tienen poco o nada que ver con la seguridad [...]. Su propósito, claramente, es mantener la separación entre Gaza y Cisjordania»[6]. Sus graves restricciones de movimiento, según Gisha, el Centro Legal Israelí para la Libertad de Movimiento, «son más un resultado del enfoque minimalista que aplica Israel a sus obligaciones hacia los 1,9 millones de palestinos que viven en la Franja de Gaza que de su obligación de proteger la seguridad de la ciudadanía israelí [...]. Los beneficios para la seguridad de Israel son difíciles de precisar»[7]. Incluso el prestigioso periódico israelí Haaretz se burlaba de la idea de que el bloqueo proporciona seguridad, y pedía que se levantara: «No hay justificación alguna para el cierre de Gaza. No ha evitado que los misiles caigan sobre Israel. No ha suscitado el tan esperado levantamiento público contra el gobierno de Hamás. Y constituye una incubadora para la desesperación y para los ciclos de violencia que han convertido en intolerables las vidas de quienes residen en el sur de Israel [...]. El gobierno israelí debe terminar inmediatamente este bloqueo en Gaza [...]. Hay que abrir el gueto palestino»[8].

Lo más probable es que no se combatan esas tendencias letales que prefiguran el agotamiento de Gaza como hábitat viable.

Desgraciadamente, carecemos del músculo político necesario para invertir la política israelí ante Gaza. En la nueva constelación que emerge, con sus alineamientos políticos regionales y globales, la estrella de Israel está en ascenso y ha hecho considerables avances diplomáticos entre los actores estatales clave[9]. Al mismo tiempo, la estrella palestina está en declive. Aunque se benefició de una prominencia única en la escena mundial en este pasado medio siglo, la causa de Palestina ha sido eclipsada ahora por las innumerables crisis humanitarias que asolan Oriente Próximo. Incluso si el polvo se asienta, y cuando se asiente, es improbable que Palestina vuelva a adquirir su antigua resonancia moral. Inexorablemente, se verá reducida al minúsculo peso geopolítico de su demografía y su territorio y se parecerá cada vez más a las luchas por la autodeterminación de Timor Este y el Sáhara Occidental. Si antes era una batalla complicada, ahora se presenta casi imposible.

Una cascada de acontecimientos recientes que afectan a Gaza engordan este cuadro desolador. En el peor de los casos, los actores regionales, como Egipto, aprietan las tuercas sobre Gaza más de lo que incluso Israel aconsejaría[10]. En el mejor, los actores regionales, como Arabia Saudí, tratan de ganar puntos ante la opinión pública árabe y comprar apoyos locales anunciando envíos humanitarios –para el caso, la mayoría incumplidos– para Gaza[11]. Ninguna de las potencias regionales, no obstante, va a gastar capital político en favor de Gaza. Al contrario, tanto Egipto como Arabia Saudí están forjando una alianza estratégica a largo plazo con Israel[12]. Tras el incidente del Mavi Marmara, Turquía condicionó el retomar las relaciones normales con Israel a que este pusiera fin al bloqueo[13]. Pero, en 2016, el presidente Recep Tayyip Erdoğan se rindió. Restableció los lazos diplomáticos después de absurdas concesiones israelíes que le permitían salvar la cara[14]. Mientras tanto, el Cuarteto de Oriente Próximo (Estados Unidos, la Unión Europea, la ONU y Rusia) publicó en 2016 una declaración largo tiempo esperada sobre el «proceso de paz». Atribuía la principal culpabilidad del deterioro de las relaciones entre Israel y Gaza al «acopio ilícito de armas y a la actividad militante de Hamás» y establecía que «prevenir el uso del territorio para ataques contra Israel es un compromiso clave que es esencial para una paz y seguridad duradera». La única mención directa del horror que se desató durante la Operación Margen Protector dice:

«A lo largo del conflicto de 2014, Israel descubrió 14 túneles que se adentraban en su territorio». El informe sí admite de pasada que la «situación humanitaria gravísima» de Gaza «se exacerbó por el cierre de los pasos fronterizos» y que «las restricciones israelíes sobre el comercio exterior y el acceso a las aguas de pesca contribuyen a la inseguridad alimentaria y a la dependencia de la ayuda humanitaria». Pero el Cuarteto pedía a Israel no que acabara, sino únicamente que «acelerara el levantamiento de las restricciones de movimiento y acceso hacia y desde Gaza» y después interpolaba la cláusula que le permitía zafarse, diciendo que había que «examinar debidamente» la «necesidad [de Israel] de proteger a su ciudadanía de los ataques terroristas»[15]. Así pues, mientras Israel manifieste que aislar a Gaza del mundo exterior es necesario para protegerse del terrorismo de Hamás, o, en otras palabras, hasta que (y a no ser que) Gaza se rinda ante Israel, el asedio continuará con el beneplácito del Cuarteto. Los planes internacionales complementarios para la reconstrucción de Gaza, observa Roy, «se leen más como planes de seguridad, exponiendo cuidadosamente las preocupaciones israelíes y las formas en las que las Naciones Unidas se amoldarán a ellos [...]. Israel debe aprobar todos los proyectos y sus localizaciones y tendrá capacidad de veto sobre cualquier aspecto del proyecto, por razones de seguridad [...]. No solamente se mantendrá el bloqueo de Gaza, sino que la responsabilidad de su mantenimiento se transferirá, de hecho, a las Naciones Unidas, que estará encargada de monitorizar todo un proceso sobre el que Israel tendrá control absoluto»[16]. Es cierto que, tras una visita a Gaza en 2016, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, declaró en una conferencia de prensa: «El cierre de Gaza ahoga a su población, estrangula su economía e impide los trabajos de reconstrucción. Es un castigo colectivo por el que alguien debe responder ante la justicia»[17]. Desgraciadamente, alcanzó esta epifanía cuando le quedaban seis meses de sus diez años de mandato. En este caso, no era mejor tarde que nunca, era nunca.

Gaza aún no ha cruzado el umbral sin retorno. Por supuesto, habría que estar más ciego que el rey Lear para creer que las negociaciones diplomáticas por sí solas pueden aún dar fruto. Cuando la fase actual del «proceso de paz» se inauguró en 1993, 250.000 colonos israelíes ilegales residían en el territorio palestino ocupado; en 2016 hay 600.000 colonos en Cisjordania (incluyendo Jerusalén Este). El

fruto amargo que se cosecha en Gaza no necesita comentarse más. Si la esencia de un fenómeno se capta mejor en el envoltorio que en el contenido, entonces Palestina ha sido testigo no de un proceso de paz, sino de un proceso de anexión y expolio. El informe del Cuarteto pedía la «reanudación de las negociaciones serias». Pero no es posible retomar lo que nunca empezó. Aun así, tampoco es probable que la estrategia de resistencia armada de Hamás arroje resultados sustantivos. Por muy legal y moralmente defendible que sea, lanzar cohetes caseros a una de las potencias mundiales militares no va a doblegarla. Simplemente proporciona a Israel una conveniente coartada cuando decide periódicamente –en pos de objetivos totalmente apartados de los misiles– aniquilar Gaza.

Una estrategia de resistencia masiva no violenta, en cambio, podría aún invertir la corriente. Uno de los recursos más ricos de Gaza es su población, la verdad y la opinión pública. Una y otra vez, y pase lo que pase, el pueblo de Gaza ha mostrado una voluntad de granito, procedente de una «pura dignidad indomable» (portavoz de la UNRWA, Chris Gunness) para no someterse[18]. Margen Protector vapuleó esa voluntad, pero, por lo que parece, no la ha quebrado. La verdad está del lado de Gaza. Si este libro produce un crescendo de ira e indignación es porque las infinitas mentiras sobre Gaza por parte de aquellos que conocen la verdad me revuelven las tripas. Gandhi llamó a su doctrina de la no violencia satyagraha, que él traducía como «aferrarse a la verdad». Si el pueblo de Gaza, en sus multitudes, se aferra a la verdad, es posible (lo que no quiere decir probable, ni mucho menos seguro, únicamente posible, y no sin un inmenso sacrificio personal, que puede incluir la muerte) que se pueda obligar a Israel a levantar el sofocante bloqueo. «¿Qué Cúpula de Hierro o qué sistema de detección de túneles podría detenerlos», preguntaba retóricamente un observador israelí, «si un día unas pocas decenas de miles, o quizá unos cientos de miles, deciden escalar el muro o ponerse en huelga de hambre junto a él?»[19]. La causa palestina aún inspira y puede recurrir a grandes reservas de apoyo público internacional, incluyendo, en los últimos años, amplias capas de la opinión judía alienadas de la deriva derechista y del salto al abismo moral de Israel[20]. En el núcleo de esta masa de opinión pública proclive destaca un movimiento de solidaridad internacional preparado, dispuesto y capaz, cuando llegue el momento, de darlo todo por Gaza. Si el pueblo de Gaza,

por una parte, y la opinión pública global, por la otra, se movilizan, galvanizan y organizan; y si una causa inspirada por la verdad, fortalecida por la ley, animada por la razón moral y que se inclina ante la justicia puede desatar, como la historia ha mostrado, un poder moral irresistible para derrotar, desarmar y difuminar la fuerza bruta; entonces aún puede ocurrir un pequeño milagro: el pueblo de Gaza será capaz, finalmente, de respirar de nuevo y si ellos (si todos nosotros) perseveramos, podía terminar con la ocupación.

En A Century of Dishonor, escrito a finales del siglo XIX, Helen Hunt Jackson relataba la destrucción de la población nativa americana a manos de una política gubernamental consciente y deliberada. El libro fue ampliamente ignorado, después olvidado y finalmente descubierto por las generaciones posteriores, ya preparadas para escuchar y soportar la verdad. Hablando del destino de la nación cherokee, que fue expulsada de un territorio tribal tras otro, y finalmente despojada de sus posesiones tribales por el gobierno de Estados Unidos, Jackson escribe: «No hay historial más negro que el recuerdo de esta perfidia a esta nación»[21]. Este libro se ha modelado a imagen de su ardiente réquiem. Su autor alberga poca esperanza de que encuentre un público entre sus contemporáneos. Aun así, la verdad debe ser conservada; es lo menos que le debemos a las víctimas. Tal vez un día, en un futuro remoto, cuando el tenor de los tiempos sea más receptivo, alguien se topará con este libro que colecciona polvo en una estantería, le quitará las telarañas y padecerá por el escándalo y la corrupción, el oportunismo y el cinismo, la avaricia y la cobardía de los mortales. «Llegará un día», anticipaba Jackson, «en el que al estudiante de la historia americana le parecerá casi increíble» lo que se les ha hecho a los cherokees. ¿No es verdad que un día el negro historial del martirio de Gaza nos parecerá, retrospectivamente, algo casi increíble?

[1] United Nations Country Team in the Occupied Palestinian Territory, «Gaza in 2020: A liveable place?», 2012, p. 16.

[2] United Nations Conference on Trade and Development, «Report on UNCTAD Assistance to the Palestinian People: Developments in the economy of the Occupied Palestinian Territory», julio de 2015, §§ 25, 60; United Nations Country Team in the State of Palestine, «Gaza: Two years after», 2016, pp. 4-5, 9; M. M. van den Berg et al., «Increasing Neonatal Mortality among Palestine Refugees in the Gaza Strip», PLOS ONE, 4 de agosto de 2015.

[3] A. Harel, «Israel's Defense Ministry Takes Harsher Tone, and IDF Better Prepare», Haaretz, 15 de junio de 2016; N. Barnea, «Israel to Build Underground Wall around Gaza Strip», ynetnews.com, 16 de junio de 2016.

[4] United Nations Conference on Trade and Development, «Report on UNCTAD Assistance», 2015, § 55; United Nations Conference on Trade and Development, «Report on UNCTAD Assistance to the Palestinian People: Developments in the economy of the Occupied Palestinian Territory», septiembre de 2016, §§ 22, 28.

[5] Véase cap. XIII.

[6] S. Roy, The Gaza Strip: The Political Economy of De-development, 3.a ed. aumentada, Washington, DC, 2016, p. xxxi. Un Informe de la ONU concretaba el impacto del veto a la exportación: «En el periodo de cinco años entre 2000-2004, el número medio anual de cargas exportadas desde Gaza era de casi 11.500. En los cinco primeros años después del bloqueo, esta cifra ha caído en un 7.000 por 100, con 162 cargas al año. Mientras que ha habido un pequeño incremento, 621 cargas en 2015 y casi 500 cargas desde este año hasta ahora, la escala de las exportaciones desde Gaza sigue siendo solamente el 5 por 100 con respecto a los niveles anteriores a 2007». United Nations Country Team, «Gaza: Two years after», p. 11.

[7] Gisha, Legal Center for Freedom of Movement, Split Apart, 2016, p. 1. Para las restricciones de movimiento de Israel sobre Gaza, véase también A. Hass, «Israel Clamps Down on Palestinians Seeking to Leave Gaza, Cites Security Concerns», Haaretz, 15 de julio de 2016.

[8] «It's Been a Decade: Open Gaza, the Palestinian ghetto»,

Haaretz, 17 de mayo de 2016.

[9] L. Baker, «Diplomatic Ties Help Israel Defang International Criticism», Reuters, 5 de julio de 2016.

[10] «The Enemy of My Enemies», Economist, 23 de julio de 2016.

[11] Association of International Development Agencies, «Charting a New Course: Overcoming the stalemate in Gaza», 2015, p. 16, cuadro B; A. Slemrod, «18 Months On, Gaza Donors Still Falling Way Short», IRIN, 18 de abril de 2016.

[12] B. Caspit, «Is Israel Forming an Alliance with Saudi Arabia and Egypt?», Al-Monitor, 13 de abril de 2016; Z. Tahhan, «Egypt-Israel Relations "at Highest Level" in History», Al Jazeera, 20 de noviembre de 2016.

[13] Véase la Tercera Parte.

[14] A Turquía se le permitió entregar ayuda humanitaria, construir un hospital, una central eléctrica y una planta de desalinización en Gaza. Si Israel hizo estas «concesiones», declaró el primer ministro Benjamin Netanyahu, fue porque Israel buscaba beneficiarse también de ellas. B. Ravid, «Israel and Turkey Officially Announce Rapprochement Deal, Ending Diplomatic Crisis», Haaretz, 27 de junio de 2016. Véase también R. Ahren, «Taking Up Post, Turkish Envoy Hails New Start with "Friend Israel"», The Times of Israel, 12 de diciembre de 2016.

[15] «Report of the Middle East Quartet», 1 de julio de 2016. El informe aludía vagamente a la destrucción desatada por Margen Protector.

[16] S. Roy, Gaza Strip, cit., pp. 407-409.

[17] United Nations Relief and Works Agency, UNRWA, «Remarks by UN Secretary-General Ban Ki-moon at Press Encounter in Gaza», 28 de junio de 2016.

[18] S. Roy, «Interview: Chris Gunness», Middle East Policy, primavera de 2016, p. 146. UNRWA es la mayor organización de ayuda a refugiados en Gaza.

[19] Z. Bar'el, «Israeli Security Assessments Are Reality Built on a Lie», Haaretz, 19 de abril de 2016.

[20] N. G. Finkelstein, «This Time We Went Too Far»: Truth and Consequences of the Gaza Invasion, edición de bolsillo aumentada, Nueva York, 2011, pp. 107-129; N. G. Finkelstein, Knowing Too Much: Why the American Jewish Romance with Israel is Coming to an End, Nueva York, 2012.

[21] H. H. Jackson, A Century of Dishonor: A Sketch of the United States Government's Dealings with some of the Indian Tribes, Boston, 1889, p. 270.

APÉNDICE

¿Es legal la ocupación?

RESUMEN

Existe un amplio consenso entre los organismos representativos y autorizados en lo que respecta a que, bajo el derecho internacional, el bloqueo israelí sobre Gaza es ilegal y que, incluso después de su retirada de 2005, Israel sigue siendo una potencia ocupante en Gaza. Pero ¿cuál es el estatus legal de la propia ocupación israelí? La esencia de una ocupación, bajo el derecho internacional, es una situación temporal. Una ocupación que no termina y que no puede terminar es, de facto, una anexión irreversible. En la medida en la que la adquisición de territorio mediante la guerra es ilegal según el derecho internacional, una ocupación que se metamorfosea en una anexión irreversible también debe ser ilegal. A la luz de la jurisprudencia del Tribunal Internacional de Justicia sobre el caso de Namibia, por una parte, y de la negativa continuada de Israel a negociar un fin de la ocupación sobre la base del derecho internacional, por otra, se alega que la ocupación israelí de Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, y de la Franja de Gaza, se ha vuelto ilegal bajo el derecho internacional. Como tal, Israel ha renunciado a sus derechos como potencia ocupante. El único «derecho» que aún se puede arrogar es ejecutar una completa retirada de los territorios palestinos que ocupa ilegalmente.

1.0 LA LEGISLACIÓN INTERNACIONAL SOBRE OCUPACIÓN

1.1 ¿Depende el estatus legal de la ocupación de cómo se originó esta?

1.1.1 El consenso más amplio apunta a que el derecho internacional no distingue entre una ocupación militar que sea resultado de una guerra en defensa propia y una ocupación militar resultado de una guerra de agresión. En ambos casos se le conceden los mismos derechos y obligaciones, codificados en el Reglamento de La Haya (1907) y en la Cuarta Convención de Ginebra (1949) a la potencia ocupante[1]. En esto se parece a las leyes de la guerra, que se aplican igualmente a ambos bandos de un conflicto, con independencia de qué bando lo inició y de cuál de ellos actuaba en defensa propia.

1.1.2 Una opinión discrepante, basada en la evolución reciente del derecho internacional, sostiene que la ocupación militar es intrínsecamente ilegal, puesto que es un resultado del uso ilegal de la fuerza e infringe el derecho consuetudinario de la autodeterminación. La única excepción sería una ocupación que tanto se impone mediante el uso legal de la fuerza como tiene una duración limitada[2].

1.1.2.1 Incluso si nos suscribimos a la novedosa afirmación de que una ocupación militar es inherentemente ilegal, e incluso si la ocupación israelí no pudiera reclamarse una excepción, aun así no se podría sortear el hecho de que la resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU, que sigue siendo la base reconocida para resolver el conflicto entre Israel y Palestina, condiciona la retirada israelí a un acuerdo negociado. Sea cual sea su origen, la ocupación israelí entonces no puede ser ilegal en virtud de ser una ocupación.

1.1.2.2 El parágrafo preambular de la resolución «Implantación de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los países y pueblos coloniales» (3481), emitida por la Asamblea General en diciembre de 1975, reza que «cualquier ocupación militar, aunque sea temporal» constituye un «acto de agresión» y en un parágrafo operativo, de manera acorde, «considera la ocupación por parte de Israel de los territorios árabes una violación de la Carta de las Naciones Unidas, de los principios del derecho internacional y de las reiteradas resoluciones de las Naciones Unidas»[3]. Pero esta resolución aislada no parece haber tenido consecuencias políticas de resonancia diplomática.

1.1.3 En los primeros años de la ocupación, los partidarios de Israel

aducían que, mientras que Israel gobernara sobre los territorios árabes mientras libraba una guerra defensiva, se trataba de «un participante legal […] que tenía derecho a la ocupación […] esperando la resolución de un tratado de paz»[4]. Si la ocupación israelí era legal, lo era, supuestamente, porque surgía de una guerra en defensa propia.

1.1.3.1 Esta afirmación se anclaba en la reclamación doble de que Israel (creía que) se enfrentaba a un inminente ataque egipcio cuando atacó a su vez en 1967 y que el recurso a la fuerza por parte de Israel fue posteriormente validado por las Naciones Unidas. Una lectura atenta de los documentos muestra, no obstante, que un ataque egipcio no era inminente. Los líderes israelíes no temían un ataque y la comunidad internacional no avaló ex post facto la «narración» israelí de la cadena de acontecimientos que culminaron en su primer ataque[5].

1.1.4 Incluso aunque la comunidad internacional no avalara la «narración» israelí de cómo acabó ocupando las tierras árabes, tampoco le pidió a Israel que se retirara unilateralmente. Después de un prolongado debate, primero en la Asamblea General y más tarde en el Consejo de Seguridad[6], las Naciones Unidas decidieron, en la resolución 242, condicionar la retirada de Israel del territorio árabe ocupado (según la ley consuetudinaria de la «inadmisibilidad de la adquisición de territorio mediante la guerra») a que se «terminaran todas las reclamaciones o situaciones de beligerancia» por parte de los países árabes vecinos (según el principio del derecho internacional, que prohíbe «la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial, o la independencia política de cualquier Estado»).

1.1.5 El cuadro básico, entonces, es que la legalidad de la ocupación israelí no radica en cómo se ha originado. Ya sea la ocupación resultado de una guerra en defensa propia o de una guerra de agresión, la cuestión no es esa. Incluso si se demostrara que la reivindicación israelí de haber actuado en defensa propia fuera falsa, aun así Israel no estaría legalmente obligado a retirarse hasta que los países árabes vecinos no reconocieran sus derechos recíprocos en tanto Estado. La ocupación israelí «no tiene límite temporal» y «podría, desde un punto de vista legal, continuar

indefinidamente», deducía el ex juez presidente israelí Meir Shamgar, «mientras no haya una solución alternativa política o militar»[7].

1.2 El estatus legal de un ocupante recalcitrante

1.2.1 Pero ¿podría la ocupación israelí «desde un punto de vista legal […] continuar indefinidamente» si Israel se resistiera a la retirada incluso después de que los estados árabes expresaran su disposición a reconocerlo? Shamgar introduce la advertencia clave: «mientras no haya una solución política alternativa» ¿Qué ocurriría si a Israel se le ofreciera una solución así, pero la rechazara?

1.2.2 Esta cuestión se planteó por primera vez en el contexto de la ocupación israelí (después de la guerra de 1967) de la península egipcia del Sinaí. En el transcurso de la mediación comisionada por la ONU (la «Misión Jarring»), Egipto accedió a un tratado de paz completo con Israel, pero Israel seguía negándose a retirarse de la península del Sinaí. Una vez que se rompieron las negociaciones y que todos los caminos que podían conducir a un acuerdo diplomático fueron boicoteados por la intransigencia israelí, Egipto advirtió repetidamente que declararía la guerra para recuperar el Sinaí ocupado. Cumplió su advertencia en 1973[8].

1.2.2.1 Inmediatamente antes de que Egipto lanzara su ofensiva, el Consejo de Seguridad de la ONU acordó deliberar sobre el callejón sin salida diplomático. Israel afirmaba que, por la resolución 242, no estaba obligado a retirarse hasta que, y a menos que, se alcanzara una resolución del conflicto de mutuo acuerdo. El reino de Jordania pertinentemente respondió, no obstante, que discutir los principios legales axiomáticos no constituía una negociación, sino que, por el contrario, era equivalente a evitar un acuerdo:

Mientras que el acuerdo tiene un lugar propio y necesario en los esfuerzos por lograr la paz, no debería permitirse que se emplee como una táctica subversiva y un pretexto. No se pueden volver a cuestionar todos los principios fundamentales y establecidos de la

Carta [de la ONU] y sus consecuencias lógicas […] en cada circunstancia en la que una de las partes en disputa considere práctico para sus intereses ilegítimos vetar la aplicación de esos principios […]. Nos gustaría que se produjera una retirada completa mediante un acuerdo. Pero si la parte ocupante y en oposición objetiva a un pacto justo insiste en colocar su no acuerdo como una barrera tanto para la retirada como para la paz, ¿qué hacemos?[9].

1.2.2.2 Un borrador de resolución, que se puso sobre la mesa en esta sesión del Consejo, «deploraba enérgicamente la continuada ocupación por parte de Israel de los territorios ocupados como resultado de la guerra de 1967»[10]. En su defensa de la resolución, el redactor indio afirmó: «Rechazamos por completo cualquier afirmación de que, tanto la resolución 242 (1967) o el acuerdo de alto el fuego, de cualquier modo admita y mucho menos autorice, directa o indirectamente, tácita, implícita o explícitamente, que las fuerzas israelíes continúen ocupando territorios árabes»[11]. Estados Unidos vetó la resolución, justificándolo en que condenar la ocupación israelí «no tiene relación ninguna con las cláusulas y los principios de la resolución 242 (1967)»[12]. Pero la opinión de mayor consenso, con la excepción de la delegación americana, era que, una vez que Israel se negaba a negociar un acuerdo de paz basado en el derecho internacional, renunciaba efectivamente a su derecho a ser un ocupante. De acuerdo con esta decisión, después de que Egipto cruzara el Canal de Suez en octubre de 1973 para echar al ocupante israelí y recuperar la península del Sinaí, «ni un solo gobierno acusó a Egipto de “agresión”», como se quejaba más tarde en sus memorias Abba Eban, ni siquiera Estados Unidos[13].

1.2.3 La literatura académica sobre el derecho de ocupación apenas menciona el estatus legal de un ocupante recalcitrante. El estudio más completo hasta la fecha, The Law of Occupation: Continuity, and Change of International Humanitarian Law, and its Interaction with International Human Rights Law[14], de Yutaka Arai-Takahashi, no contempla ese escenario. The International Law of Belligerent Occupation, de Yoram Dinstein, desdeña el «mito» de que una ocupación «se vuelve con el tiempo inherentemente ilegal

bajo el derecho internacional» en un breve y poco inteligible parágrafo[15].

1.2.3.1 Se cita a menudo un artículo de Orna Ben-Naftali, Aeyal Gross y Keren Mitchel titulado «Illegal Occupation: Framing the occupied Palestinian territory»[16] para afirmar que la ocupación de Israel es ilegal. Allí se argumenta, aunque en un lenguaje a veces intencionadamente opaco, que la infraestructura que Israel ha impuesto en Cisjordania (asentamientos, carreteras que la atraviesan, el muro, etc.) constituye «una anexión de facto» que viola «los principios básicos de la temporalidad» que definen una ocupación; y que Israel ha cometido también «graves infracciones de las normas humanitarias de los derechos humanos» en el proceso de anexión. El efecto acumulativo de estas acciones ilegales israelíes, concluyen los autores, ha sido convertir en ilegal la ocupación. La fuerza de la tesis es que Israel ha estado persiguiendo políticas que inexorablemente han convertido la ocupación en irreversible a posteriori, incumpliendo con sus obligaciones como ocupante, por una parte, y violando el derecho de los palestinos a la autodeterminación, por otra. Pero en la medida en que los asentamientos israelíes, etc. aún no han vuelto irreversible la ocupación, parece legalmente mucho más matizado, y acorde con los precedentes, condenar concretamente las prácticas ilegales israelíes, sin por ello declarar la ocupación en sí como ilegal.

1.2.3.1.1 El Consejo de Seguridad de la ONU ha declarado ilegal la política israelí de asentamientos y anexión de Jerusalén Este[17] y la Asamblea General se ha referido a la «anexión de facto [de Israel] de amplias zonas del territorio»[18].

1.2.3.1.2 En su fundamental dictamen no vinculante, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) afirmaba, más tentativamente, que «la construcción del muro y su régimen asociado crea un fait accompli sobre el terreno que bien podría hacerse permanente, en cuyo caso, y a pesar de la caracterización formal del muro por parte de Israel, sería equivalente a una anexión de facto»[19]. En un voto separado, no obstante, el juez Koroma concluía, sin matices, que «la construcción del muro ha implicado la anexión de parte del territorio ocupado

por Israel»[20].

1.2.3.1.3 El eminente especialista en derecho James Crawford ha observado que los asentamientos israelíes constituyen una «anexión de facto del territorio de Cisjordania que […] ha impedido que el pueblo palestino ejerza su derecho a la autodeterminación»[21].

1.2.3.1.4 No obstante, ni el Consejo de Seguridad, ni la Asamblea General, ni el juez Koroma, ni Crawford han determinado que la anexión por parte de Israel del territorio palestino vuelva forzosamente ilegal la ocupación en sí. Una determinación prudente parecería ser que, incluso aunque con el tiempo el carácter recalcitrante de la ocupación tuviera como resultado una anexión de facto (o, como en el caso de Jerusalén Este, de iure), eso aún no ilegalizaría en sí la ocupación.

1.2.3.1.5 Para que conste, la postura oficial israelí es que los asentamientos judíos y el muro que rodea la periferia de los principales bloques de asentamiento son «inherentemente temporales» (Tribunal Supremo de Justicia israelí)[22] y que «no anexan territorios al Estado de Israel»[23]. A lo largo de la construcción del muro, sin embargo, los altos funcionarios del gobierno israelí, incluyendo a la ex ministra de Justicia Tzipi Livni, el ex primer ministro Ariel Sharon y el exministro de Defensa Ehud Barak, públicamente concedieron que el muro señalaba la futura frontera israelí[24].

1.2.3.2 El erudito en leyes israelí Eyal Benveniste aborda el desafío legal que plantea el ocupante recalcitrante desde un ángulo diferente en The International Law of Occupation. Empieza (como Shamgar) afirmando que el derecho internacional ni «limita la duración de la ocupación, ni requiere que el ocupante devuelva la soberanía a los territorios antes de que se firme un tratado de paz». No obstante, Benvenisti añade entonces esta advertencia:

Un régimen de ocupación que se niega a contribuir honestamente a los esfuerzos para alcanzar una solución pacífica debe considerarse ilegal. De hecho, una negativa así debería considerarse una anexión pura y dura. El ocupante tiene el deber, bajo el derecho

internacional, de entablar negociaciones de buena fe para encontrar una solución pacífica. Se diría que un ocupante que propone condiciones irrazonables, o que de alguna otra forma obstruye las negociaciones para la paz con el fin de retener el control sobre el territorio ocupado, podría considerarse un infractor del derecho internacional.

Sigue diciendo que «un ocupante que de mala fe obstaculice los esfuerzos para una resolución pacífica de su gobierno sería considerado un agresor y su mandato mancillado de ilegalidad»[25].

1.2.4 Determinar si un ocupante negocia con mala fe y que, por lo tanto, ha «mancillado de ilegalidad» la ocupación ya había ocurrido, de hecho, en el caso Namibia. Después de prolongadas e infructuosas negociaciones, la Asamblea General de la ONU, seguida del Consejo de Seguridad, aprobó unas resoluciones que declaraban la «ocupación» de Namibia por parte de Sudáfrica «ilegal» y posteriormente el TIJ validó estas decisiones de la ONU. El caso Namibia tiene muchas similitudes con la ocupación israelí del territorio palestino. Su desarrollo y conclusión proporcionan un mapa de carreteras para que la comunidad internacional sepa cómo enfrentarse a otro ocupante recalcitrante.

2.0 EL CASO NAMIBIA

2.1 Contexto histórico

2.1.1 Aunque hoy en día está prácticamente olvidado, a mediados del siglo XX el Mandato sobre Namibia de Sudáfrica «provocó más resoluciones, promovió más comités y produjo más decisiones judiciales», recordaba la autoridad legal John Dugard, «que cualquier otra cuestión que compareciera ante los órganos de las Naciones Unidas». Fue, en palabras de Dugard, «la cause célèbre internacional»[26] o, como expresó uno de los jueces del TIJ que

juzgaba el caso, «el tema internacional más explosivo del mundo de la posguerra»[27]. En años posteriores fue desplazado de la agenda internacional por la cuestión más amplia del apartheid sudafricano, del cual Namibia fue a partir de entones un tema subsidiario, y por la cuestión palestina, que era la otra herida sangrante pendiente de la era de los mandatos.

2.1.2 Después de llegar al poder en Rusia, los bolcheviques denunciaron la Primera Guerra Mundial como imperialista y proclamaron su apoyo al principio de autodeterminación de las naciones oprimidas. En buena parte como reacción y como resultado, el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, se puso a la cabeza del derecho a la autodeterminación e impuso sobre las potencias aliadas el principio de no anexión de las colonias de las Potencias Centrales derrotadas[28].

2.1.3 Al final de la guerra se creó un Sistema de Mandatos, que quedó codificado en el Artículo 22 del Pacto de la Sociedad de Naciones. Cada una de las antiguas colonias de las Potencias Centrales, supuestamente «aún no capaces de mantenerse por sí mismas bajo las duras condiciones del mundo moderno», se puso bajo la «tutela» de una «nación avanzada» a la que se le encargaba que la preparara para el ejercicio de su autodeterminación. El papel tutelar de la potencia mandataria, actuando «en nombre de la Sociedad» para promover el «bienestar y el desarrollo» de la antigua colonia, se consideró «un encargo sagrado de la civilización».

2.1.4 El Mandato sobre la ex colonia alemana de Namibia (Sudáfrica del Oeste) «le fue conferido a su Majestad Británica para que lo ejerciera en su nombre el gobierno de la Unión de Sudáfrica». Bajo los términos del Mandato, y sometido a revisión por la Sociedad (y en último término por el Tribunal Permanente de Justicia Internacional), Sudáfrica se obligaba a «promover en la mayor medida posible el bienestar material y moral y el progreso social de los habitantes».

2.1.5 Tras la disolución de la Sociedad en 1946, se «contempló claramente»[29] que el Mandato de Namibia se convirtiera en un Fideicomiso de la ONU, con vistas a alcanzar la condición de Estado[30]. Pero Sudáfrica tenía en mente un futuro diferente, sin embargo, pues su intención era anexionarse Namibia (o sus partes

más deseadas)[31].

2.1.6 A esto le siguió una prolongada refriega legal y política. Naciones Unidas, liderada por un contingente de Estados africanos, exigió que Sudáfrica reconociera la supervisión de la Asamblea General y el derecho de Namibia a la independencia, mientras que, ante la mudez persistente de Pretoria, simultáneamente remitió la cuestión de Namibia al TIJ para aclarar y certificar las obligaciones legales de Sudáfrica.

2.1.7 Una secuencia de procedimientos contenciosos y divisores tuvo lugar en La Haya.

2.1.7.1 En un dictamen no vinculante de 1950, International Status of South West Africa, el TIJ estableció que, incluso después de la disolución de la Sociedad de Naciones, Sudáfrica seguía teniendo el deber de promover «el bienestar moral y material y el progreso social de sus habitantes»; que los poderes de supervisión de la Sociedad sobre el Mandato de Sudáfrica habían sido transferidos a la Asamblea General; y –controvertidamente– que, aunque «se esperaba que los estados mandatarios siguieran el curso normal que indicaba la Carta, es decir, concluir los Acuerdos Fideicomisarios», aun así Sudáfrica no estaba legalmente obligada a convertir su Mandato en un Fideicomiso de la ONU, pero que tampoco podía modificar unilateralmente el estatus internacional de África del Sudoeste.

2.1.7.1.1 En una serie de votos discrepantes sobre este último punto, el juez Álvarez afirmaba que «la Unión de Sudáfrica […] tiene la obligación legal de negociar y llegar a un acuerdo con las Naciones Unidas para colocar a África del Sudoeste bajo un Fideicomiso»; el juez de Visscher (apoyado por el vicepresidente Guerrero, el juez Zoričić y el juez Badawi Pasha) opinaba que Sudáfrica incurría en la «obligación legal de estar dispuesto a tomar parte en las negociaciones y llevarlas a cabo de buena fe con la idea de concluir un acuerdo [de Fideicomiso]»; y el juez Krylov sostenía que Sudáfrica se encontraba «bajo la obligación legal de negociar con la idea de cerrar un Acuerdo de Fideicomiso»[32].

2.1.7.2 Un dictamen no vinculante de 1955, South West Africa – Voting Procedure, incidía en un punto técnico respecto al contenido

y procedimiento de la supervisión por parte de la Asamblea General del Mandato de Sudáfrica sobre Namibia. El Tribunal respaldaba las prerrogativas de la Asamblea[33].

2.1.7.3 En un dictamen no vinculante de 1956, Admissibility of Hearing of Petitioners by the Committee on South West Africa, el Tribunal respaldaba el derecho de la Asamblea General de hacer uso de procedimientos suplementarios (como los testimonios orales de los demandantes de Namibia ante un subcomité de la ONU) para facilitar su función de supervisión, ante la intransigencia de Sudáfrica[34].

2.1.8 Las negociaciones de La Haya alcanzaron un desenlace tormentoso en un par de decisiones complementarias pero contradictorias del Tribunal en 1962 y 1966.

2.1.8.1 Etiopía y Liberia, ambas anteriormente parte de la Sociedad de Naciones, innovaron una cláusula del Mandato de la Sociedad que permitía que los Estados miembros rechazaran la conducta de un Mandatario por medio de la actuación del Tribunal. Requirieron al TIJ no un dictamen no vinculante, sino un veredicto que pudiera imponerse[35] acerca de (inter alia) el argumento de que Sudáfrica había infringido sus obligaciones de «promover en la mayor medida posible el bienestar moral y material y el progreso social de los habitantes» de Namibia y que, en lugar de ello, «practicaba el apartheid, es decir, hacía distinciones de raza, color, origen tribal o nacional a la hora de establecer los derechos y obligaciones de los habitantes».

2.1.8.2 El (tristemente) famoso caso se dividió en dos fases teóricamente discretas, «jurisdicción» y «méritos». En su veredicto de 1962, el Tribunal respondía afirmativamente que tenía jurisdicción para decidir[36]. Pero después, en el veredicto de 1966, cuando tenía que decidir sobre los méritos del caso contra Sudáfrica[37], el TIJ se contradijo a sí mismo[38], declarando, en «el veredicto más controvertido de su historia»[39], que de hecho carecía de jurisdicción, puesto que los Estados aplicantes no podían demostrar «ningún derecho o interés legal que les concerniera en el asunto que tratar» en su alegación contra Sudáfrica[40].

2.1.8.3 Mientras que ambas fases del caso se remontaban a arcanos

técnicos, lingüísticos e históricos –lo que el juez Forster en su voto particular discrepante ridiculizaba con razón como «áridos escrutinios e incansables análisis»[41]–, y mientras que, posteriormente, tanto los jueces del caso como los comentaristas legales afirmaban que se trataba de filosofías legales en conflicto («teleólogos» contra «positivistas»), lo que estaba en juego en el Tribunal, un observador desinteresado no podía sino concluir que cada bando era capaz de reunir pruebas convincentes[42], que el caso que cada parte presentó en La Haya era tendencioso y que la división en el Tribunal era, en el fondo, y por muy crudo y reduccionista que esto suene, política: las potencias coloniales del Viejo Mundo tratando de refrenar a las advenedizas occidentales, aunque con la curiosa anomalía de que, mientras que el Viejo Mundo estaba representado en el Tribunal, como era de esperar, por el juez Fitzmaurice, un británico tenaz, erudito aunque francamente molesto, su archinémesis, que era en todos los sentidos un contrincante a la altura, atlética e intelectualmente, resultó ser un americano, el juez Jessup[43]. En una de las escasas desviaciones de la etiqueta judicial (que sostiene la ilusión de que la ley se sitúa por encima de la refriega política), el juez De Castro, en un voto particular posterior, describía los procedimientos del TIJ sobre Namibia, malévolamente (pero con precisión), como, esencialmente, «la lucha entre colonialistas y progresistas»[44].

2.2 La incapacidad de Sudáfrica para negociar de buena fe: las deliberaciones de la ONU

2.2.1 Escandalizada por la dimisión mediante evasivas del TIJ en el caso contra Sudáfrica y el subsiguiente malgasto de años, de tiempo y de recursos invertidos en los procesos legales[45], la ONU dio una serie de pasos dramáticos y drásticos para enderezar el entuerto del Tribunal. Una resolución de la Asamblea General (2145) «finalizaba» el Mandato de Sudáfrica sobre Namibia; una resolución de 1967 (2325) declaraba que «la presencia continuada de las autoridades sudafricanas en África del Sudoeste es una violación flagrante de su integridad territorial»; y una resolución de 1968 (2372) condenaba «la acción de Sudáfrica de consolidar su control ilegal sobre Namibia» y pedía «a todos los estados que desistieran

de aquellos tratos con el Gobierno de Sudáfrica que tuvieran el efecto de perpetuar la ocupación ilegal de Sudáfrica».

2.2.2 Enfatizando «el derecho inalienable del pueblo namibio a la libertad y la independencia y la legitimidad de su lucha contra la ocupación extranjera», la Asamblea General justificaba su decisión (en 2145) de finalizar la «ocupación ilegal» de Sudáfrica bajo tres encabezados:

– Ruptura de sus obligaciones internacionales. El gobierno de Sudáfrica sobre Namibia violaba «el Mandato, la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos».

– Imposición del apartheid. Las «políticas de apartheid y discriminación racial que el Gobierno de Sudáfrica ha puesto en práctica en África del Sudoeste» constituyen un «crimen contra la humanidad».

– Incapacidad de negociar de buena fe. Los «esfuerzos de las Naciones Unidas para inducir al Gobierno de Sudáfrica a cumplir con sus obligaciones en lo que respecta» a Namibia «han sido inútiles».

2.2.3 A efectos del argumento que aquí presentamos, el texto se centrará en la última de estas justificaciones.

2.2.4 La incapacidad de Sudáfrica para negociar de buena fe ya había sido planteada en las deliberaciones del TIJ sobre Namibia previas a las resoluciones de la Asamblea General.

2.2.4.1 En un voto particular discrepante (1950), el juez Álvarez afirmaba: «No se puede admitir que [...] un acuerdo que pretende resolver un estatus internacional importante no pueda establecerse únicamente por la oposición, la negligencia o la mala fe de una de las partes»; si «es imposible alcanzar dicho acuerdo, las Naciones Unidas entonces deben tomar las medidas apropiadas»[46]. En un

voto particular discrepante muy parecido (1950), el juez De Visscher, aunque de manera más contenida, afirmaba: «La Potencia Mandatoria, aunque sigue siendo libre para rechazar los términos concretos de una propuesta de acuerdo, tiene la obligación legal de estar dispuesta a tomar parte en negociaciones y a dirigirlas de buena fe con vistas a llegar a un acuerdo»[47].

2.2.4.2 En un voto particular (1962), el juez Bustamante apuntaba a las «abrumadoras pruebas no solamente del hecho de que las negociaciones han tenido lugar repetida y reiteradamente [...] sino también a que todos los esfuerzos posibles para encontrar una solución conciliadora han tenido como resultado el fracaso [...]. Durante quince años consecutivos estos puntos de vista fundamentalmente opuestos, esta inflexible oposición del Mandatario ante la virtual unanimidad de los Estados miembros en lo que se refiere a los límites y obligaciones que se derivan del Mandato, ha perpetuado una situación de atasco permanente». A continuación concluía que «ninguna negociación es posible y que cualquier negociación posterior [...] será ineficaz para resolver la disputa», aconsejando, en cambio, «recurrir a una decisión judicial» en La Haya para así «restablecer el funcionamiento armonioso del sistema»[48].

2.2.4.3 En un voto particular (1962) el juez Jessup observaba que aunque «sin duda no hay un test decisivo que permita que un Tribunal afirme en todas las situaciones en qué momento exactamente resulta imposible llegar a un acuerdo negociado [...] parece claro ante este historial que en este caso esa condición se cumple». «Los estados», concluía sucintamente, «no están ligados eternamente al viejo proverbio “si al principio no lo logras, inténtalo una y otra vez”»[49].

2.2.5 Los debates de la Asamblea General que culminaron en una cascada de resoluciones que daban por terminado el Mandato de Sudáfrica y que condenaban su «ocupación ilegal» de Namibia se centraban en la cerrazón de Sudáfrica durante las negociaciones, a la vez que ridiculizaban la petición de Sudáfrica de «tener cuidado de que no se cierre la puerta a un diálogo que tan necesario es para un mejor entendimiento y cooperación»[50].

2.2.5.1 Mientras que los Estados miembros defendían que el

objetivo de las negociaciones era garantizar la posterior independencia de Namibia, Sudáfrica insistía en negociaciones sin condiciones previas o con un resultado predeterminado, dejando abiertas técnicamente «todas las posibilidades», pero, en realidad, excluyendo la independencia real[51].

2.2.5.2 El delegado etíope apuntó al «hecho de que todos los caminos de la negociación pacífica se han agotado»[52], mientras que el delegado noruego señaló: «Después de veinte años de discusiones futiles sobre el dominio sudafricano sobre África del Sudoeste, hemos llegado a un consenso: […] que Sudáfrica ha perdido su derecho a gobernar el territorio y que su Mandato ha terminado»[53].

2.2.5.3 «Frente a la increíble intransigencia del gobierno de Sudáfrica», recordaba el delegado uruguayo,

encontramos toda una retahila de resoluciones de la Asamblea General que cubren un periodo de veinte años y que urgen a Pretoria a cumplir con sus deberes y a asumir sus responsabilidades ante la comunidad internacional […]. Vemos una acumulación de actos de insubordinación, infracciones, falta de respeto a la autoridad, abuso de derechos, desobediencia, burla y desafío cometidos por Sudáfrica contra las Naciones Unidas. […] Hemos esperado veinte años. Esperemos que la moderación no se vuelva el vicio de la debilidad. Nos asiste la ley, los derechos, la moralidad, la voluntad del mundo entero […]. Ha llegado el momento de poner fin a esta lucha entre la ley y la arrogancia. El órgano de la comunidad internacional debe poner fin al Mandato basándose en los repetidas y maliciosos incumplimientos de las obligaciones y deberes inherentes a él[54].

2.2.5.4 Después de recordar que «durante más de quince años hemos estado esperando a que el gobierno de Sudáfrica cumpla con sus nítidas obligaciones», y que los «repetidos intentos por parte de la Asamblea General de convencer al gobierno de Sudáfrica de que adopte una política de cooperación han sido infructuosos», el

delegado británico, Lord Caradon –quien más tarde armaría la resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU– declaró que Sudáfrica, «en efecto, ha renunciado a su título para gobernar el Mandato»[55].

2.2.5.5 El delegado israelí, sumándose a la mayoría, observó que la Asamblea había recurrido al TIJ en 1966 para que emitiera una decisión vinculante solamente «después de que se alcanzara un punto muerto en las negociaciones con Sudáfrica para garantizar la implantación» del dictamen no vinculante del TIJ sobre Namibia; que después de que el TIJ «se inhibiera de decidir sobre el caso [en 1966], la decisión recaía ahora claramente en los hombros de la Asamblea General»; y que Sudáfrica «ha infringido sus principales obligaciones», porque no «ha preparado [a Namibia] para la independencia». En un pasaje digno de ser citado en extenso, el delegado israelí concluía:

Casi cincuenta años después de que se le confiriera el Mandato y de que la Potencia Mandataria lo aceptara, África del Sudoeste no parece estar más cerca de la independencia de lo que estuvo nunca. Es una reflexión irónica que casi todos los pueblos africanos vivan ya bajo su propia soberanía nacional […] mientras que, en el caso de África del Sudoeste y únicamente en ese caso, el sagrado deber de la civilización […] permanece no solamente incumplido, sino también sin visos de cumplirse. Es un hecho que todos los esfuerzos por alcanzar un acuerdo mutuamente aceptable y razonable han sido agotados. Puesto que la Potencia Mandataria es incapaz de cumplir sus obligaciones esenciales bajo el Mandato, se deduce que las Naciones Unidas tienen la libertad de adoptar la acción adecuada […]. Creemos que la Asamblea General ahora está facultada para terminar el Mandato […]. La Asamblea General debería tomar decisiones sobre el futuro del Territorio Mandado con la premisa de que el Mandato puede ser finalizado legal y apropiadamente por la Asamblea General.

Si alargamos el lapso de tiempo a «casi 100 años» después del Mandato, y si la declaración de que África del Sudoeste era el

«único» Mandato en el que la independencia no tenía «visos ninguno de cumplirse» se corrige interpolando que la condición de Estado de la población indígena bajo el Mandato Palestino también estaba, y sigue estando, en suspenso[56], entonces la pertinencia –y la resonancia única– de las observaciones del embajador israelí, tanto como diagnóstico («todos los esfuerzos por alcanzar un acuerdo mutuamente aceptable y razonable se han agotado») como en cuanto remedio propuesto («la Asamblea General está ahora facultada para poner fin al mandato»), no pueden pasar desapercibidas[57].

2.2.5.5.1 Unos meses más tarde, el delegado israelí le dijo a la Asamblea:

El problema de África del Sudoeste, que ha evolucionado hasta una situación intolerable, se ha presentado ante las Naciones Unidas desde su primera reunión, hace ya veintiún años. Todos los enfoques posibles para alcanzar una solución que se conforme a los principios de la Carta y que garantice a la población de esa tierra sus derechos fundamentales se han truncado. Las Naciones Unidas han mostrado paciencia e incluso pereza ante la postura terca en la que ha insistido el gobierno de Sudáfrica con un total desprecio de la posición claramente expresada de las Naciones Unidas[58].

En un discurso anterior, el ministro de Exteriores israelí, Abba Eban, exhortaba a la asamblea a «insistir en que la Potencia Mandataria renunciara a su mandato cuando este de manera constante y flagrante violara los fines básicos para los que se le confirió esa misión»[59].

2.2.5.6 El delegado de Estados Unidos, también alineado con la mayoría de la Asamblea en las deliberaciones, declaró que «en virtud de la ruptura de sus obligaciones […] Sudáfrica renuncia a todo derecho a continuar gobernando Namibia»[60]. «A pesar de los muros de la censura y la propaganda con los que su propio gobierno los ha rodeado», pronosticaba, «el pueblo de Sudáfrica pronto se dará cuenta de que el sistema que están intentando

imponer en Namibia no funcionará –que ni podrá satisfacer las necesidades y deseos de la población no blanca, ni, mediante algún truco mágico, los hará desaparecer a conveniencia–»[61].

2.2.5.6.1 Estados Unidos condenaba a Sudáfrica también por su «imposición en África del Sudoeste de su política de apartheid universalmente condenada» y por su «claro desafío a la sensata admonición de la Asamblea General para que Sudáfrica se abstenga y desista de cualquier acción constitucional, administrativa, política o de otro tipo que, de alguna manera, pueda alterar o tienda a alterar el estatus internacional actual de África del Sudoeste»[62].

2.2.5.6.2 Aún más, Estados Unidos opinaba que, si los habitantes de Namibia que vivían bajo la ocupación recurrían a la fuerza, era en el fondo una reacción a las tácticas represivas de Sudáfrica, que habían producido

desesperación y en esa desesperación hay quien no ha encontrado otra alternativa que la violencia como expresión de su determinación de ser libres. Estados Unidos no admite la violencia. Estados Unidos sí condena la brutalidad de un gobierno cuyas políticas oficiales han generado violencia cerrando todas las vías de la discrepancia pacífica en África del Sudoeste, por lo tanto generando el comportamiento mismo que busca castigar[63].

2.2.5.6.3 Los actos de Estados Unidos, sin embargo, no estuvieron a la altura de esa elevada retórica. «Los Estados Unidos de América son económica y militarmente los más fuertes entre nosotros», observó un delegado caribeño. «Si así lo quisieran podrían, no tengo la menor duda, reducir al gobierno de Sudáfrica por sí solos; y, de hecho, lo podrían hacer incluso aunque el resto de nosotros eleváramos nuestras voces contra ello». Pero, incluso aunque «hemos escuchado al representante de Estados Unidos lamentar, aborrecer y condenar el comportamiento de Sudáfrica en esta misma cámara», se quejaba, la existencia de un «lobby» interno que es «lo suficientemente influyente […] puede hacer que incluso el gobierno más decidido se detenga»[64]. Plus ça change, plus c’est la

même chose.

2.2.6 Aunque remoloneando, el Consejo de Seguridad finalmente se hizo eco de la decisión de la Asamblea General.

2.2.6.1 El Consejo se implicó por primera vez en la cuestión de Namibia a principios de 1968, cuando una resolución (245) tomaba nota de la finalización del Mandato por parte de la Asamblea y expresaba su honda preocupación por la represión «ilegal» de Sudáfrica en Namibia, mientras que una resolución posterior (246), ese mismo año, censuraba «al gobierno de Sudáfrica por su flagrante desafío» del Consejo de Seguridad.

2.2.6.2 Una resolución de 1969 (264) tomaba nota de «las graves consecuencias de la continuada ocupación de Namibia por parte de Sudáfrica», afirmaba que «la presencia continuada de Sudáfrica en Namibia es ilegal» y pedía al «gobierno de Sudáfrica que inmediatamente retirara su gobierno del Territorio». Una resolución posterior (269), ese mismo año, declaraba que «la continuada ocupación del Territorio de Namibia por las autoridades de Sudáfrica constituye una intrusión agresiva de la autoridad de las Naciones Unidas», reconocía «la legitimidad de la lucha del pueblo namibio contra la presencia ilegal de las autoridades sudafricanas en el Territorio» y pedía a Sudáfrica que «retirara inmediatamente su gobierno del Territorio».

2.2.6.3 Enfrentados a la negativa de Pretoria, tanto de negociar de buena fe como de retirarse, el Consejo de Seguridad, en una resolución de 1970 (276), declaró que «las Naciones Unidas habían decidido que el Mandato de África del Sudoeste había terminado», que «la presencia continuada de las autoridades de Sudáfrica en Namibia es ilegal» y que, por lo tanto, «todas las acciones que adopte el gobierno de Sudáfrica en lugar de Namibia o atañendo a Namibia después de la finalización del Mandato son ilegales e inválidas». También pedía la creación de un subcomité para estudiar «modos y maneras» de implantar las resoluciones relevantes de la ONU «a la luz de la flagrante negativa de Sudáfrica a retirarse de Namibia». Unos meses más tarde, el subcomité recomendaba que las Naciones Unidas buscaran otro dictamen no vinculante del TIJ.

2.3 La incapacidad de Sudáfrica para negociar de buena fe: de vuelta a La Haya

2.3.1 Siguiendo las recomendaciones del subcomité, el Consejo de Seguridad adoptó (en 1970) dos resoluciones complementarias. La primera (283) reafirmaba su reconocimiento de «la decisión de la Asamblea General de dar por terminado el Mandato de Sudáfrica», señalaba «con honda preocupación la negativa continua y flagrante del gobierno de Sudáfrica de cumplir con las decisiones que exigía el Consejo de Seguridad […] y la retirada inmediata» y pedía «que todos los estados que tuvieran relaciones diplomáticas o consulares con Sudáfrica emitieran una declaración formal […] a efectos de que ellos […] consideraban ilegal la presencia de Sudáfrica en Namibia». La siguiente resolución (284) devolvía la cuestión de Namibia al TIJ.

2.3.1.1 Cuando defendía este procedimiento de acción contra los escépticos que aún se dolían del desprecio del Tribunal en 1966 (véase supra, 2.1.8.2), el delegado finés del Consejo de Seguridad enfatizaba que «un dictamen no vinculante del Tribunal Internacional de Justicia podría subrayar el hecho de que Sudáfrica ha renunciado a su Mandato sobre África del Sudoeste porque […] Sudáfrica ha actuado de manera contraria […] al derecho internacional. Es importante […] exponer la falsa fachada de legalidad que las autoridades de Sudáfrica tratan de exhibir ante el mundo. Esto ayudaría […] a movilizar a la opinión pública […] especialmente la de aquellos países que tienen el poder de influir en los acontecimientos de África del Sur de manera decisiva»[65].

2.3.1.2 Durante el debate en el Consejo de Seguridad, el delegado americano vilipendiaba el «comportamiento cruel de las autoridades ocupantes ilegítimas». Aunque Sudáfrica «se haya envuelto en un manto de aparente legalidad», declaraba en otra reunión del Consejo,

las justificaciones legales para sus acciones son espurias. No solamente estas acciones contradicen las acciones de los órganos

políticos de las Naciones Unidas, sino que, además, el Tribunal Internacional de Justicia ha dejado clara la responsabilidad internacional de Sudáfrica en lo que se refiere al Territorio […] Su autoridad estaba condicionada por […] la obligación de cuidar el bienestar de sus habitantes. Sin duda, aplicando estas leyes apartheid en el Territorio no honra, sino más bien quebranta esa obligación.

En una tercera intervención, Estados Unidos denunciaba a Sudáfrica por «no solamente intentar anexionarse Namibia, sino […] por extender su cruel política del apartheid […] a ese territorio». Y, en una cuarta reunión del Consejo, lamentó la «política [sudafricana] de la anexión virtual. Ha añadido a este mal la aplicación en territorio internacional de la práctica odiosa del apartheid, con todas las consecuencias miserables que implica esa práctica». No obstante, Estados Unidos se oponía a las sanciones internacionales supuestamente porque «probablemente […] se demuestren ineficaces y […] lejos de mejorar la suerte de los namibios, se corre el riesgo de empeorar aún más su situación»[66].

2.3.2 El Consejo de Seguridad requirió un dictamen no vinculante al TIJ sobre «las consecuencias legales para los Estados de la presencia continuada de Sudáfrica en Namibia (África del Sudoeste) a pesar de la Resolución 276 (1970) del Consejo de Seguridad».

2.3.3 El dictamen del Tribunal, emitido en 1971[67], se dividía (para lo que aquí nos interesa) en dos secciones: las razones tras la resolución de la asamblea General que finalizaba el Mandato y la «competencia» (poder) de la Asamblea para terminar el Mandato[68].

2.3.3.1 El dictamen no vinculante empezaba recordando el contexto que provocó la decisión de la Asamblea General de finalizar y declarar ilegal la ocupación sudafricana. Señalaba que «a lo largo de un periodo de veinte años, la Asamblea General […] ha pedido al gobierno de Sudáfrica que cumpla con las obligaciones que emanan del Mandato»; que la Asamblea había aprobado una serie de resoluciones desde 1946, para recordar a Sudáfrica sus obligaciones e impeliéndola a cumplir con ellas; que las Naciones

Unidas «sin duda ninguna habían llevado a cabo las negociaciones de buena fe», pero que incluso las propuestas de compromiso que de ella habían surgido fueron «rechazadas por Sudáfrica»; y que «se habían mantenido más negociaciones infructuosas». El Tribunal concluía, por lo tanto:

En la práctica la extensión real de las negociaciones no es una prueba de si se han agotado las posibilidades de un acuerdo; podría bastar con mostrar que se ha alcanzado pronto un punto muerto y que uno de los lados se niega rotundamente a llegar a un compromiso. En el caso de Namibia (África del Sudoeste), esta situación se ha alcanzado claramente mucho antes de que las Naciones Unidas hayan finalmente desistido de alcanzar un acuerdo. Incluso así, mientras que Sudáfrica fue la Potencia Mandataria, la vía para buscar un acuerdo seguía abierta. Pero ese capítulo ha llegado a su fin con la finalización del Mandato[69].

2.3.3.1.1 En un voto particular, el juez Dillard (de Estados Unidos) observaba agudamente que las negociaciones se convertían en una farsa si las premisas fundamentales de las partes en conflicto no podían reconciliarse: «Está claro que ningún proceso de negociación puede tener éxito si las partes no acuerdan las bases fundamentales sobre las que descansa el proceso. […] Es obvio que las negociaciones basadas […] en premisas en conflicto resultarán, en el mejor de los casos, en un desfile que nos haga perder el tiempo y, en el peor, en un mero diálogo de sordos».

2.3.3.1.1.1 En el pasaje que precedía a estas observaciones, Dillard reprendía a Sudáfrica por su postura negociadora artera: «El dilema se centra en el proceso de negociación posterior a la disolución de la Sociedad de Naciones. Aunque Sudáfrica no tenía la obligación de someterse al sistema de fideicomisos o de negociar un acuerdo de fideicomiso específico, aun así, en tanto miembro de las Naciones Unidas, sin duda tenía el deber de negociar de buena fe […] con las Naciones Unidas en lo que respecta a una alternativa viable tanto dentro del fideicomiso como fuera de este». En una nota al pie correspondiente, Dillard respondía a la opinión de uno

de sus colegas de que, aunque un Estado miembro de las Naciones Unidas está obligado a «considerar de buena fe» una resolución de la Asamblea, esto no supone una «auténtica obligación legal»: «No puedo estar de acuerdo con esta conclusión. El uso de la discreción y de la libertad de negociar que el sistema puede conferir no implica el derecho a ejercitar una actitud de libertad de acción desinhibida que sería equivalente a operar fuera del sistema»[70].

2.3.3.1.2 En su voto discrepante, el juez Gros, aun concediendo que tanto la Asamblea General como el Consejo de Seguridad tienen «el poder de revocar» el Mandato, no obstante opina que Sudáfrica tenía la obligación legal de negociar de buena fe. Merece la pena citar en extenso el pasaje relevante, porque muestra un apoyo inesperado por parte de un juez discrepante a la opinión mayoritaria sobre el punto decisivo de la buena fe:

El conflicto de partida puede resumirse sumariamente de esta manera: el objetivo de las Naciones Unidas era llegar a la negociación de un acuerdo de fideicomiso, mientras que Sudáfrica no quería convertir el Mandato en un Fideicomiso. Es necesario decidir qué bando ha estado usando mal su posición legal en esta controversia sobre la extensión de la obligación de negociar [...]. Si las negociaciones hubieran empezado de buena fe y si, en un momento dado, se hubiera revelado imposible alcanzar un acuerdo en unos puntos determinados, precisos y objetivamente debatibles, entonces se podría aducir que el Dictamen de 1950, que concluía que no existía la obligación de poner al Territorio bajo un Fideicomiso, impedía seguir con el asunto, en la medida en que la negativa por parte del Mandatario de aceptar un acuerdo de fideicomiso podría en ese caso considerarse justificada: «Ninguna parte puede imponer sus términos a la otra parte» (citando el dictamen no vinculante del TIJ de 1950, véase supra, 2.1.7.1). Pero los hechos no son así: las negociaciones para la conclusión de un acuerdo de fideicomiso nunca comenzaron y de eso es responsable Sudáfrica. La norma legal que aquí se ha infringido es la obligación de negociar de buena fe. Afirmar que las Naciones Unidas deberían haber aceptado la negociación de cualquier otra cosa que un acuerdo de fideicomiso sobre las bases propuestas por Sudáfrica,

eso, viniendo del Gobierno de Sudáfrica, es interpretar el dictamen no vinculante de 1950 de forma contraria a su sentido [...]. Al buscar imponer sobre las Naciones Unidas su propia concepción del objeto de la negociación para la modificación y transformación del Mandato, Sudáfrica no ha cumplido con las obligaciones que se establecían en el Dictamen de 1950 de observar una línea determinada de conducta. Naciones Unidas, por otro lado, no empleó mal, de ninguna manera, su postura legal cuando se negaba a negociar con cualquier otro propósito que no fuera concluir en un acuerdo de fideicomiso, pues tal era, de hecho, el objetivo marcado por el Dictamen de 1950. [...] Naciones Unidas habría estado en su derecho de tomar nota del punto muerto y exigir que Sudáfrica cumpliera con su obligación de negociar. Esta opinión se refuerza por la interpretación coherente que hace Sudáfrica de sus propias facultades, ya sea de su pretensión de incorporar el Territorio –algo esencialmente incompatible con el régimen de Mandato– o de su defensa de sus títulos legales con independencia del Mandato. La posición legal del Mandatario, formalmente reconocida por el Tribunal en 1950, concede a Sudáfrica el derecho a negociar las condiciones para la transformación del Mandato en un Fideicomiso; desde 1950 esa posición se ha usado para obstruir el principio mismo de dicha transformación. Un análisis en este sentido, si lo lleva a cabo el Tribunal y se basa en la conclusión judicial de que se ha infringido la obligación de transformar el Mandato mediante la negociación, como prescribía el Dictamen de 1950, tendría consecuencias legales con respecto a la presencia continuada de Sudáfrica en el territorio mandatado. Considero que, en ese contexto, las consecuencias legales afectadas estarían fundadas sobre sólidas razones legales[71].

Sin embargo, en la medida en que Gros negaba que las Naciones Unidas podían revocar el Mandato, no está claro qué «consecuencias legales con respecto a la presencia continuada de Sudáfrica en el territorio mandatado» tendría en mente.

2.3.3.2 Después de delinear el punto muerto causado por la negativa de Sudáfrica a entablar negociaciones de buena fe, lo siguiente que sopesó el Tribunal fue si la Asamblea General tenía las

competencias para finalizar el Mandato o si había actuado ultra vires (excediéndose de sus funciones legales). El Tribunal resolvió que la decisión estaba dentro del ámbito de la Asamblea.

2.3.3.2.1 Como regla general, las resoluciones de la Asamblea son únicamente recomendaciones.

2.3.3.2.2 El Tribunal concluía, no obstante, que la relación de la Sociedad de Naciones con el Mandato de Sudáfrica incluía un componente de tratado (contrato)[72]; y que es inherente a un acuerdo de tratado el que, si una de las partes rompe materialmente con sus obligaciones, la otra parte tiene derecho a darlo por finalizado; y que, por lo tanto, una vez que las facultades de la Sociedad habían sido transferidas a la Asamblea y que Sudáfrica había deliberado y persistentemente incumplido sus obligaciones bajo el Mandato, la competencia de la Asamblea se ampliaba más allá de la recomendación y la facultaba para tomar una decisión legal vinculante.

2.3.3.2.3 En resumen, el Tribunal concluía que «no sería correcto suponer que porque la Asamblea General esté en principio investida del poder de recomendar, esté privada de poder adoptar, en casos específicos dentro del marco de su competencia, resoluciones que tomen decisiones o que tengan una intención operativa»[73].

2.3.3.2.4 En un voto particular, el juez Nervo amplió las competencias de la Asamblea para tomar decisiones legalmente vinculantes más allá de la ruptura de un tratado:

El hecho de que, hablando muy en general, las actividades de la Asamblea General adopten principalmente el carácter de recomendaciones no quiere decir que la Asamblea General no pueda actuar, en su capacidad como parte, en una situación en la que es parte de una relación contractual; ni quiere decir que, en lo que se refiere a un Territorio que es una responsabilidad internacional, y respecto al cual la soberanía de ningún Estado interviene entre la Asamblea General y el Territorio, la Asamblea General no tenga la capacidad de actuar como lo ha hecho […]. La Asamblea General es el órgano competente de las Naciones Unidas para actuar en

nombre de esta última en una amplia gama de asuntos y, en estos casos, quien actúa es la propia Naciones Unidas. Esto es así especialmente en lo que concierne […] a asuntos de fideicomiso, a territorios sin autogobierno.

Sudáfrica en realidad ha anexionado a todos los efectos, como si fuera propio, el Territorio de Namibia […]. Este comportamiento […] es una razón suficiente para revocar el Mandato. Igualmente lo es la discriminación racial que se practica como política oficial en Namibia con la imposición allí del régimen del apartheid. La discriminación racial como parte de una política gubernamental oficial es una violación de una norma, regla o criterio de la comunidad internacional[74].

2.3.3.3 En un editorial a la mañana siguiente de que el TIJ entregara Legal Consequences for States, The New York Times alababa «el histórico veredicto trece a dos» que «ha aclarado la niebla política y legal que durante años ha ensombrecido el estatus» de Namibia[75].

2.3.4 Más tarde, ese mismo año, el Consejo de Seguridad aceptaba las conclusiones principales del Tribunal[76]. El delegado de Estados Unidos en la reunión del Consejo dejó constancia del respaldo de Washington a las «conclusiones, que declaran […] que Sudáfrica está bajo la obligación de retirar su gobierno de Namibia inmediatamente y poner así fin a su ocupación», y también señaló que «la postura [de Estados Unidos] es coherente con nuestro apoyo de los medios prácticos y pacíficos para lograr la autodeterminación y terminar con la discriminación racial»[77].

2.4 Aún queda por decidir si el precedente de Namibia puede despejar la «niebla política y legal» que durante años ha envuelto a la ocupación del territorio palestino por parte de Israel y, en especial, arrojar luz sobre «los medios para alcanzar la autodeterminación y la discriminación racial» allí.

3.0 NAMIBIA Y PALESTINA, YUXTAPUESTAS

3.1 En 2002, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, transmitió al Consejo de Seguridad que Israel debía terminar con «su ocupación ilegal» de Gaza y Cisjordania[78]. Esta definición provocó una rápida respuesta de los defensores de Israel, que afirmaron que la ocupación era legal hasta que Israel fuera «capaz de negociar un tratado de paz con éxito»[79].

3.1.1 En una clara retirada, el portavoz del secretario general emitió una aclaración que afirmaba que Annan no había acusado de ilegal a la ocupación israelí en sí, sino más bien a la infracción por parte de Israel de sus diversas obligaciones en tanto potencia ocupante[80].

3.2 Teniendo en cuenta el sabio consejo del juez Dillard de que las analogías «siempre hay que usarlas con precaución»[81], se aduce que, a la luz del precedente de Namibia, la ocupación del territorio palestino por parte de Israel es ahora ilegal, puesto que se ha negado persistentemente a negociar de buena fe sobre la base del derecho internacional y a poner fin a la ocupación.

3.3 El contexto histórico político que se superpone

3.3.1 Una matriz común ha conformado las cuestiones namibia y palestina. Ambas se originan en el Sistema de Mandatos de la posguerra y juntas constituyen los vestigios restantes de una era, en tanto los únicos territorios bajo mandato que sobrevivieron a la disolución de la Sociedad de Naciones sin convertirse en Fideicomisos de la ONU.

3.3.2 La Asamblea General de la ONU afirmó su autoridad sobre ambos Mandatos prolongados. Aprobó la Resolución de la Partición (1819) en 1947, allanando el camino a la creación de Israel, y, después de la guerra de 1967, se dispuso a completar la tarea

inacabada de crear un Estado palestino recíproco. En el caso de Namibia, la Asamblea General pronto rechazó la intencion de Sudáfrica de anexionarlo y después reclamó su derecho a supervisar el gobierno sudafricano sobre el territorio, dio por finalizado el Mandato de Sudáfrica, declaró ilegal su ocupación y finalmente pastoreó a Namibia hasta la independencia.

3.4 Contexto legal superpuesto

3.4.1 Las cuestiones namibia y palestina son jurídicamente homólogas.

3.4.1.1 Si a Palestina se la percibe a través de las lentes del Sistema de Mandatos, entonces sus derechos se extienden en tanto Mandato prolongado. En su opinión de 2004 sobre el Muro, el TIJ recordaba la génesis de la cuestión palestina en el Sistema de Mandatos y la «responsabilidad permanente» (citando una resolución de la Asamblea General) que, por lo tanto, recae en la comunidad internacional[82].

3.4.1.2 Si la cuestión palestina se percibe como si emergiera de nuevo después de 1967, entonces los derechos palestinos derivan de su estatus como territorio bajo la ocupación. La opinión del TIJ de 2003, que deliberaba sobre las consecuencias legales de la construcción de un muro en «el territorio palestino ocupado», está plagada de referencias al precedente de Namibia[83].

3.4.2 Ya sea el Sistema de Mandatos o el estatus de un territorio bajo la ocupación lo que sirva como punto de referencia, los mismos principios del «encargo sagrado» y de la «no anexión» rigen las situaciones de Namibia y Palestina.

3.4.2.1 El TIJ subrayaba en múltiples ocasiones que los principios gemelos del «encargo sagrado», es decir, la suprema importancia del bienestar y desarrollo de la población bajo Mandato, y la «no anexión», es decir, que el Mandatario no adquiere derecho ninguno de soberanía sobre un Mandato, constituyen la esencia del Sistema de Mandatos[84].

3.4.2.1.1 Los jueces Koroma, al-Khasawneh y Elaraby, en sus respectivos votos particulares en el caso Muro, localizaron las obligaciones de «encargo sagrado» y «no anexión» en el estatus anterior de Palestina como Mandato[85].

3.4.2.2 Los principios del «encargo sagrado» y la «no anexión» también figuran como sellos distintivos legales de un territorio bajo la ocupación.

3.4.2.2.1 Bajo el derecho internacional, un texto clásico apunta a que «los territorios enemigos en la ocupación de fuerzas armadas de otro país constituyen […] un encargo sagrado, que debe administrarse […] en interés […] de sus habitantes»[86]. En el caso de Namibia, el Tribunal recordó que, en la Carta de la ONU, «el concepto del "encargo sagrado" se confirmó y expandió a todos "los territorios cuyos pueblos aún no hayan alcanzado el pleno autogobierno" (Artículo 73)», y que «un estadio de gran importancia en este desarrollo fue la Declaración de la Concesión de la Independencia a los Pueblos y Países Coloniales de 1960 (resolución 1514 de la Asamblea General), que abarca a todos los pueblos y territorios que "aún no habían alcanzado la independencia"»[87]. Estos precedentes, aunque se invocaban en la jurisprudencia de Namibia, se aplican con fuerza comparable al territorio palestino ocupado, pues está sometido a una «subyugación ajena» (en el lenguaje de la 1514) y, por lo tanto, se puede definir como una situación casi colonial.

3.4.2.2.2 También han observado varios comentaristas que «los cimientos sobre los que se basa todo el derecho de ocupación son el principio de la inalienabilidad de la soberanía mediante el uso o la amenaza de la fuerza […]. El control efectivo por parte de una fuerza militar extranjera no puede traer por sí mismo una transferencia válida de la soberanía»[88]. El juez Koroma, en su voto particular en el caso del Muro, apuntaba que «la esencia de la ocupación» es (inter alia) ser «únicamente de naturaleza temporal»[89].

3.4.3 Más allá de los principios del «encargo sagrado» y de la «no anexión», el derecho no derogable a la autodeterminación también es inherente al estatus legal de Namibia y, más tarde, al territorio ocupado palestino.

3.4.3.1 Este derecho se deriva del estatus anterior de cada uno de estos territorios como Mandato, así como de las reglas que gobernaron la descolonización después de la Segunda Guerra Mundial, que ratificaban la prerrogativa de los pueblos coloniales y de los pueblos sometidos a la ocupación extranjera de ser independientes.

3.4.3.1.1 Un destacado comentarista observaba hace décadas que «el Consejo de Seguridad ha empezado a lidiar con los territorios ocupados por Israel como si fueran colonias», mientras que un destacado comentarista contemporáneo sitúa tanto a Namibia como a Palestina bajo la misma rúbrica de «ocupación [militar] ilegal»[90].

3.4.3.2 El TIJ observaba en el caso de Namibia que el proceso de descolonización tras la Segunda Guerra Mundial dejaba «pocas dudas con respecto a que el objetivo último del encargo sagrado [en el Artículo 22 del Pacto de la Sociedad de Naciones] era la autodeterminación e independencia de los pueblos afectados», mientras que, en el caso del Muro, el Tribunal observaba, después de contextualizar sus conclusiones en el precedente de Namibia, que «la existencia de un "pueblo palestino" no se pone ya en duda», y que «los derechos legítimos» del pueblo palestino «incluyen el derecho a la autodeterminación»[91].

3.5 Si la ocupación de Namibia por parte de Sudáfrica era ilegal, ¿entonces la ocupación del territorio palestino por parte de Israel es también ilegal?

3.5.1 Mientras que, per Dillard, hay que abordar con precaución las analogías, desde los puntos de vista de la historia, el derecho y la política sería difícil concebir un encaje más exacto que Namibia y Palestina:

– Ambas situaciones han emergido históricamente del Sistema de Mandatos;

– Ambas situaciones están regidas por los principios legales fundacionales del «encargo sagrado» y la «no anexión»;

– Ambas situaciones entran dentro de los paradigmas integrales políticos y legales de la descolonización y la autodeterminación[92].

3.5.2 ¿Pero la ocupación de Palestina por parte de Israel alcanza el umbral de la ilegalidad de Namibia?

3.5.3 La Asamblea General finalizó el Mandato de Sudáfrica sobre Namibia y declaró ilegal su ocupación sobre tres puntos: la ruptura de sus obligaciones internacionales, la imposición del apartheid y la incapacidad para negociar de buena fe. Un pliego de cargos igualmente convincente podría redactarse contra la ocupación por parte de Israel del territorio palestino.

3.5.3.1 Ruptura de sus obligaciones internacionales

3.5.3.1.1 Los órganos políticos de las Naciones Unidas, las organizaciones principales de defensa de los derechos humanos y los comentaristas jurídicos más respetados han deplorado repetidamente las violaciones del derecho internacional por parte de Israel en los territorios palestinos ocupados, que incluyen el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, el ataque deliberado a civiles y a infraestructura civil, torturas, construcción de asentamientos y castigos colectivos[93]. Muchas de estas infracciones equivalen a crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

3.5.3.1.2 Estas condenas culminaron en la opinión sobre el Muro, en la que el TIJ concluía que «los asentamientos israelíes en el Territorio Ocupado Palestino (incluyendo Jerusalén Este) se han establecido en ruptura con el derecho internacional». El Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional define como un crimen de guerra «la transferencia, directa o indirecta, por parte de la Potencia Ocupante de partes de su propia población civil al territorio que ocupa». El TIJ también señala que, en su opinión, «la ruta escogida por el muro […] impide gravemente el ejercicio por parte del

pueblo palestino de su derecho a la autodeterminación y es, por lo tanto, una infracción por parte de Israel de su obligación de respetar ese derecho»[94]. El derecho a la autodeterminación se considera generalmente como una «norma perentoria» del derecho internacional, que no es permisible derogar[95].

3.5.3.2 Imposición del apartheid

3.5.3.2.1 Un consenso cada vez mayor ha emergido, abarcando a personalidades acreditadas legales, políticas y morales –entre ellas, muchos israelíes– referente a que Israel ha establecido un régimen de apartheid en el territorio palestino ocupado. La larga lista de quienes han hecho esta analogía con el apartheid en el contexto de la ocupación israelí incluye al expresidente de Estados Unidos y premio Nobel de la Paz, Jimmy Carter; al arzobispo de Sudáfrica y premio Nobel de la paz, Desmond Tutu; al distinguido jurista sudafricano John Dugard; al ex vice primer ministro israelí Dan Meridor (Likud); al ex fiscal general del Estado israelí Michael Ben-Yair; a los ex ministros de Educación Shulamit Aloni y Yossi Sarid; al exalcalde de Jerusalén Meron Benvenisti; al exembajador de Israel en Sudáfrica Alon Liel; al veterano periodista israelí Danny Rubinstein; al Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados (B'Tselem); a la Asociación para los Derechos Civiles en Israel y al consejo editorial de Haaretz[96]. En una monografía sobre Sudáfrica, expertos en derecho internacional concluyeron que «Israel ha introducido un sistema de apartheid en el TOP (territorio ocupado palestino), violando una norma perentoria del derecho internacional»; mientras que un artículo publicado en la prestigiosa revista European Journal of International Law concluye que «se ha desarrollado un sistema de apartheid en el territorio ocupado palestino» que «no solamente nos recuerda», sino que también «en algunos casos es peor [...] que el apartheid que existía en Sudáfrica»[97].

3.5.3.2.2 El punto de referencia para la analogía del apartheid es, en la mayoría de los casos, el sistema legal dual que Israel ha establecido dentro del territorio palestino ocupado que privilegia a los colonos judíos. Pero, incluso en ausencia de los asentamientos judíos, la ocupación en sí misma ahora ya constituiría un régimen de apartheid frente al verdadero Israel. Hace unas tres décadas,

especulaba el reputado experto en derecho internacional Adam Roberts, «Israel podía ver alguna ventaja en la continuación del estatus de territorio ocupado, porque esta disposición le proporcionaba una base legal para tratar a los habitantes árabes de los territorios de una manera totalmente distinta a los ciudadanos de Israel». Si una ocupación prolongada, en la que «Israel se negara a negociar un tratado de paz», ocurriera, continuaba, esto «allanaría el camino para una especie de apartheid»[98].

3.5.3.2.3 Después de su famosa retractación y caída en desgracia[99], el jurista Richard Goldstone se reinventó a sí mismo como un empresario de la agitación y propaganda israelí. En esta capacidad, deploraba la analogía del apartheid, porque Israel «no tiene la intención» de «mantener» ese régimen[100]. Pero si Israel se ha negado persistentemente a finalizar la ocupación según el derecho internacional; y si ha mantenido la ocupación durante medio siglo, un periodo que comprende también la mayor parte de su existencia total como Estado[101], y si ha impuesto una infraestructura diseñada para hacer que la ocupación sea irreversible, entonces, Israel, por el contrario, ha dejado clara su intención de mantener la ocupación, mientras que ha pasado tiempo suficiente como para que la premonición de Robert de un apartheid en construcción se haya convertido en una realidad completa[102].

3.5.3.3 Incapacidad de negociar de buena fe

3.5.3.3.1 Existe un consenso mayoritario sobre que la solución al conflicto israelí palestino debe anclarse en el derecho internacional; sobre los principios legales generales de aplicación y sobre las normas del derecho, como el derecho de ambos pueblos a la autodeterminación; sobre cómo aplicar estos principios y normas generales; sobre cómo adjudicar concretamente el «estatus permanente»; sobre las cuestiones de fronteras, Jerusalén Este, los asentamientos y (aunque con menor precisión) la población refugiada[103].

3.5.3.3.2 A lo largo del «proceso de paz» de Oriente Próximo, los negociadores palestinos han abrazado coherentemente el derecho internacional como el marco de resolución del conflicto, a la vez que sometían a discusión propuestas concretas que protegieran los derechos palestinos bajo el marco de la ley, pero que también

dejaran espacio para la conveniencia política[104], como el intercambio de tierras que hubiera permitido que el grueso de los colonos israelíes permaneciera donde estaba[105]. Por el contrario, Israel ha rechazado no solamente la interpretación consensuada del derecho internacional para resolver el conflicto[106], sino también el derecho internacional en sí como base para las negociaciones. «Yo he sido ministra de Justicia. Soy abogada», decía a sus interlocutores palestinos la ministra de Exteriores Tzipi Livni durante una fase crítica del proceso de paz en 2007; «pero estoy en contra del derecho, en especial del derecho internacional»[107].

3.5.3.3.3 En el caso Namibia, las Naciones Unidas declararon la ocupación ilegal (inter alia) por dos razones imbricadas: (1) Sudáfrica se negaba a negociar la posterior independencia de Namibia de «buena fe» –es decir, sobre la base del derecho internacional tal como lo delineaban las resoluciones de la ONU y el Tribunal Internacional de Justicia–; y (2) las premisas de la postura negociadora de Sudáfrica divergían radicalmente de la opinión de consenso sobre cómo resolver el conflicto –es decir, Pretoria estaba decidida a anexionar bien por completo Namibia o bien las tierras de primera que ocupaban los colonos blancos–. Las negociaciones se habían convertido, en palabras del juez Dillard, «en el mejor de los casos […] en un vacuo desfile que nos hace gastar tiempo, en el peor de los casos […] en un mero diálogo de sordos» (véase supra, 2.3.3.1.1)[108]. Sería complicado encontrar un paralelismo más claro y un precedente más claro de la actitud recalcitrante de Israel en el «proceso de paz», o mejorar la manera en la que Dillard describe el callejón diplomático sin salida resultante.

3.5.3.3.4 En otros casos que se le adjudicaron, el TIJ también destacó el papel fundamental de las negociaciones de buena fe.

3.5.3.3.4.1 En North Sea Continental Shelf, el Tribunal hablaba en su veredicto de «una obligación de entablar negociaciones con la idea de llegar a un acuerdo y no meramente para pasar por el proceso formal de la negociación. […] Las partes se encuentran bajo la obligación de actuar de tal manera que, en el caso concreto, y teniendo en cuenta todas las circunstancias, se apliquen principios equitativos»[109].

3.5.3.3.4.2 En Case Concerning Delimitation of the Maritime

Coundary in the Gulf of Maine Area, el Tribunal apuntaba en su veredicto el «deber de negociar con idea de alcanzar un acuerdo y hacerlo de buena fe, con una intención auténtica de alcanzar un resultado positivo»[110].

3.5.3.3.4.3 En su dictamen no vinculante, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, el Tribunal subrayaba que la «buena fe» no solamente comprendía la «conducta» (el proceso) de las negociaciones, sino también «una obligación de alcanzar un resultado preciso»[111].

3.5.3.3.5 Se sigue de estos ejemplos de la jurisprudencia del Tribunal que la participación intermitente de Israel en el «proceso de paz» no demuestra por sí misma que lleve a cabo negociaciones de «buena fe». Para lograr la aprobación legal, debe también no obstaculizar los progresos discernibles hacia el logro de su obligación, legalmente fundada, de retirarse. Las premisas, no obstante, de la postura negociadora de Israel –que rechaza no solamente la aplicación consensuada del derecho internacional, sino el propio derecho internacional– han bloqueado y evitado cualquier posibilidad futura de un movimiento real hacia el fin de la ocupación.

3.5.3.3.6 El principio de la «buena fe» es por naturaleza objetivo y como tal se registra en actos u omisiones palpables: «El principio de la buena fe es esencialmente objetivo en su aplicación. […] La buena fe atiende a los efectos de las acciones de los estados, más que a sus intenciones o motivos (subjetivos), si los hay, del mismo Estado»; «su violación puede demostrarse mediante actos y omisiones que, agrupados, haga remota o imposible el cumplimiento de las obligaciones específicas de un tratado o que derroten los objetivos y fines del tratado». Más aún, «el principio de la buena fe […] no puede sino aplicarse también a las normas consuetudinarias, puesto que tienen el mismo estatus que las cláusulas de los tratados […]. Por lo tanto, los Estados se encuentran bajo la obligación de refrenarse tanto de actuar para derrotar el objeto y fin de una forma como de cualquier otro acto que impida su implantación»[112].

3.5.3.6.1 La actividad continuada de asentamientos israelíes constituye un caso paradigmático de la mala fe en las

negociaciones, en tanto estos hechos «objetivos» que se multiplican sin descanso están «derrotando el objeto y el fin» de las negociaciones, que bajo los tratados[113], normas[114] y principios[115] del derecho internacional requieren a Israel que se retire del territorio palestino ocupado. «El primer ministro israelí [Benjamin Netanyahu] apoya públicamente una solución de dos Estados, pero la coalición que actualmente gobierna es la más ultraderechista de la historia de Israel, con una agenda que marcan sus elementos más extremistas», observaba el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, en su último discurso importante sobre el conflicto israelí-palestino. «El resultado es que las políticas de este gobierno –que el primer ministro mismo acaba de describir como "más volcado en los asentamientos que ningún otro en la historia de Israel"– están empujando en la dirección opuesta, hacia un único Estado»[116].

3.6 ¿Es competente la Asamblea General para declarar ilegal la ocupación israelí?

3.6.1 Israel ha violado sus obligaciones internacionales en el territorio palestino ocupado, ha impuesto allí un régimen de apartheid y no ha conseguido negociar de buena fe un término de la ocupación. Por lo tanto, ha infringido sus responsabilidades principales en tanto potencia ocupante ante Palestina, el «encargo sagrado» y la «no anexión», y ha negado al pueblo palestino su derecho inderogable a la autodeterminación.

3.6.2 Si se mira a través de la lente del precedente de Namibia, la ocupación israelí se ha vuelto ilegal. Pero ¿tiene la Asamblea General de la ONU la competencia para tomar una decisión así en el caso de la ocupación israelí?

3.6.3 La Asamblea General tiene la autoridad de debatir y aprobar resoluciones sobre la ocupación israelí de los territorios palestinos, así como sobre el estatus y contorno del derecho palestino a la autodeterminación. Esta competencia deriva de un trío de fuentes tanto generales como particulares:

– El Artículo 10 de la Carta de la ONU estipula que la Asamblea «puede debatir cualquier cuestión sobre cualquier asunto» que caiga dentro del ámbito de las Naciones Unidas y «puede hacer recomendaciones a los miembros de las Naciones Unidas o al Consejo de Seguridad, así como a ambos, sobre cualquiera de estas cuestiones o asuntos».

– La Asamblea es heredera de las facultades de supervisión ejercitadas por la Sociedad de Naciones sobre el sistema de Mandato, del cual la cuestión palestina es un asunto inacabado. En su opinión sobre el Muro, el TIJ basaba el derecho palestino a la autodeterminación en el Pacto de la Sociedad («el objetivo último del "sagrado encargo" al que nos referimos en el artículo 22, parágrafo 1, del Pacto de la Sociedad de Naciones era la autodeterminación [...] de los pueblos afectados"»)[117]. Por lo tanto, entra dentro del ámbito de la Asamblea supervisar la búsqueda de la independencia por parte de Palestina.

– La Asamblea ha presidido y complementado los principios y normas y ha desempeñado el papel administrativo garante en los procesos de descolonización y autodeterminación que se han desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial, que incluían «terminar con el sometimiento de los pueblos a la dominación exterior»[118]. En su opinión sobre el Muro, el Tribunal recordaba en especial la «responsabilidad» de la ONU ante la cuestión palestina, que «se ha puesto de manifiesto en la adopción de numerosas resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad y mediante la creación de varios organismos subsidiarios específicamente establecidos para ayudar al cumplimiento de los derechos inalienables del pueblo palestino»[119].

3.6.4 Queda por preguntarse si una resolución de la Asamblea General, que es habitualmente una recomendación (la Asamblea no es un parlamento)[120], sería en este caso legalmente vinculante para todos los Estados miembros.

3.6.4.1 En el caso de Namibia se defendió principalmente que las facultades de supervisión de la Sociedad de Naciones sobre el Mandato de Sudáfrica tenían un aspecto de tratado; que el derecho

a la revocación es inherente a un tratado; y que, consecuentemente, la Asamblea, que ha heredado el papel supervisor de la Sociedad, puede tomar una decisión legal y vinculante que ponga fin al mandato después de que Sudáfrica haya violado sus términos.

3.6.4.2 Este tortuoso razonamiento ya en su momento desafió los límites de la implausibilidad[121], mientras que los autores que han querido retrospectivamente defender la competencia de la Asamblea en el caso de Namibia han desarrollado otras líneas argumentativas[122].

3.6.4.3 En el caso de Palestina, una razón así sería un ardid legal incluso menos persuasivo, entre otras cosas porque Israel nunca se comprometió a un tratado con la Asamblea General comparable al que Sudáfrica contrajo con la Sociedad[123].

3.6.5 La naturaleza legalmente vinculante de una resolución de la Asamblea General para poner fin y declarar ilegal la ocupación israelí, no obstante, puede establecerse firmemente sobre bases diferentes.

3.6.6 El juez Nervo, en un voto particular en el caso de Namibia, defendía que la competencia legalmente vinculante de la Asamblea no se obtenía únicamente «en una situación en la que sea parte de una relación contractual en su capacidad en tanto parte», sino también, y de manera más general, «en relación con un territorio que es una responsabilidad internacional y respecto al cual no interviene la soberanía de ningún Estado entre la Asamblea General y el territorio». Seguía diciendo que la anexión de Namibia «en realidad y a todos los efectos» por parte de Sudáfrica, y su política de «discriminación racial», impuesta «por el sistema del apartheid», constituía «una razón suficiente para la revocación del Mandato (véase supra, 2.3.3.2.4). Según todas estas razones, separadamente y a fortiori combinadas, la Asamblea también sería competente para poner fin a la ocupación israelí del territorio palestino.

3.6.7 La competencia legalmente vinculante de la Asamblea de poner fin a la ocupación israelí también queda implícita e inherente en la función de supervisión que desempeña en el proceso de descolonización / autodeterminación, del cual Palestina, como territorio bajo una «subyugación ajena», es parte constituyente. Si la

Asamblea careciera de dicha competencia legal, no podría efectivamente cumplir con su papel asignado de salvaguardar los derechos de los pueblos que tienen derecho, pero que aún no ejercen su autodeterminación. ¿No es una función supervisora exenta de facultades sancionadoras una contradicción en términos?

3.6.7.1 El efecto acumulativo de las opiniones en serie del TIJ sobre el caso de Namibia apoya estas afirmaciones:

– En International Status of South West Africa, el Tribunal concluyó que salvaguardar los derechos de los pueblos sometidos a Mandatos había «exigido» un órgano supervisor y que la Asamblea General era, a partir de ahora, el órgano adecuado para cumplir con esta «necesidad de supervisión» originalmente desempeñada por el Consejo de la Sociedad[124].

– En Admissibility of Hearings of Petitioners, el Tribunal declaró que «el fin supremo» de las funciones de supervisión de la Asamblea General era «salvaguardar el encargo sagrado de la civilización»[125].

– En South West Africa Cases (primera fase, objeciones preliminares) el Tribunal concluyó que «la supervisión internacional» constituía «la esencia misma del Mandato»[126].

– En Legal Consequences for States, el Tribunal concluyó que la competencia de la Asamblea para poner fin al Mandato residía en sus facultades de supervisión; de otro modo, la Asamblea sería impotente ante las violaciones atroces por parte de Sudáfrica de sus responsabilidades. «Negar a un órgano político de las Naciones Unidas, que es a este respecto un sucesor de la Sociedad [es decir, en su papel supervisor], el derecho de actuar, sobre el argumento de que carece de competencia para entregar lo que se describe como una decisión judicial, no solamente sería incoherente, sino que equivaldría a una completa negación de los remedios que tenemos a nuestra disposición ante las infracciones fundamentales de una iniciativa internacional»[127].

3.6.7.2 Las conclusiones de estos dictámenes del Tribunal eran las siguientes: (1) La protección de los derechos de los pueblos que aún no se autogobiernan requería un órgano supervisor; (2) la Asamblea General era el órgano competente para salvaguardar este «encargo sagrado»; (3) si careciera de la facultad de revocación, la Asamblea no podría desempeñar efectivamente su papel supervisor; ergo (4) la facultad de revocación de la Asamblea necesariamente emana de la función supervisora que se le ha delegado.

3.6.7.3 El juez de Castro, en un voto particular del caso Namibia, exponía convincentemente la lógica interna que vincula esta cadena de argumentos. Elucidaba que, en la medida en la que «conceptos legales» como un «encargo»

contemplen esencialmente la protección de personas (en este caso, de pueblos) que no pueden gobernarse a sí mismas, la consecuencia necesaria es el ejercicio de la supervisión sobre la persona a la que se encarga esta guardia, «supervisión del guardián» y, en el caso de graves infracciones de sus deberes (fides fracta), la pérdida o renuncia de su encargo.

[…] No había necesidad de mencionarlo [en el Mandato…]. La naturaleza esencial de este concepto [de encargo] implica, de manera clara y evidente, la posibilidad de poner fin al Mandato […]. Un Mandato que no pudiera ser revocado en un caso así no sería un mandato, sino una cesión de territorio o una anexión disfrazada.

Es difícil creer que, por una parte, el funcionamiento del Sistema de Mandatos fuera organizado para incluir una Comisión Permanente para controlar el gobierno del Mandatario y que, por otro lado, al Mandatario se le dejara libertad para hacer lo que creyera más adecuado, incluso aunque fuera en contra de la naturaleza misma del Mandato: que alguien le diera posesión de un territorio sin ninguna obligación por su parte […]. Cualquier interpretación que niegue la posibilidad de poner fin al Mandato en caso de violación flagrante por parte de un Mandatario de sus obligaciones reduciría el Artículo 22 a un flatus vocis [palabras vacías], o más bien a una «gravosa burla», que daría un cierto tono de legalidad a la anexión

de los territorios mandados[128].

3.6.7.3.1 El juez Nervo, en un voto particular en el caso de Namibia, también derivaba la competencia de la Asamblea de las funciones que se habían delegado en ella:

La Asamblea General ha tenido, bajo los instrumentos internacionales relevantes, varios papeles distintos en relación con Namibia y la acción que ha adoptado en este momento [es decir, poner fin al Mandato] se basa en todos estos papeles tomados bien de manera individual o colectiva. La Asamblea General actúa: en su capacidad de autoridad supervisora para el Mandato sobre África del Sudoeste; como el único órgano de la comunidad internacional responsable de garantizar las obligaciones y el sagrado encargo asumido en relación con el pueblo y al Territorio de Namibia; y como el órgano principalmente preocupado por los territorios sin autogobiernos y bajo fideicomiso[129].

3.6.8 La competencia de la Asamblea General para poner fin y declarar ilegal la ocupación israelí emana, por una parte, de su lugar como institución designada por las Naciones Unidas para desempeñar las funciones de supervisión y, por otra parte, de la prerrogativa para sancionar que está implícita en esta función. Si careciera de una facultad revocatoria, la Asamblea no podría monitorizar sustantivamente los procesos de descolonización / autodeterminación, de los cuales Palestina es un componente integral, tanto en su condición de ex Mandato como en su condición de unidad de autodeterminación bajo «subyugación ajena»[130].

3.6.9 No se puede defender convincentemente que el poder necesario para poner fin a un Mandato existe, pero que reside en el Consejo de Seguridad y no en la Asamblea General. Por una parte, una división del trabajo así de la función de supervisión no se ha previsto en ninguna parte, mientras que, por otra parte, si la Asamblea careciera de una competencia así, entonces tampoco la

tendría el Consejo[131]. Tampoco se puede defender que, a menos que la Carta de la ONU adjudique explícitamente una facultad de finalización, la Asamblea estaría actuando ultra vires. En Case Concerning the Northern Cameroons, el TIJ concluyó que la Asamblea tenía competencia para poner fin al Fideicomiso, pero no basó esta competencia en una adjudicación explícita de dicho poder en los capítulos sobre el Fideicomisariado de la Carta de la ONU. En lugar de ello, el Tribunal lo basaba en las funciones generales de supervisión de la Asamblea General sobre los procesos de descolonización / autodeterminación[132].

3.6.10 A la luz de sus declaraciones pasadas, Israel estaría en mal lugar para refutar el poder legal vinculante de la Asamblea General para poner fin a la ocupación. Cuando la Asamblea debatió sobre la Resolución de Partición (181) en 1947, el organismo político que representaba al naciente Estado Judío planteó que, en relación con el futuro de un territorio que no «afectara a la soberanía nacional de los miembros de las Naciones Unidas», sino que en lugar de ello estaría «sometido a un fideicomiso internacional», solamente la Asamblea «era competente para determinar el futuro del territorio y su decisión, por lo tanto, tenía un carácter vinculante». Después de su creación, Israel describió la Resolución de Partición como «la única adjudicación internacionalmente válida sobre la cuestión del futuro gobierno palestino». En un debate del Consejo de Seguridad, el representante israelí Abba Eban, señalando hacia la Resolución de Partición, presumió de que Israel «posee el único certificado de nacimiento internacional en un mundo de virtud no demostrada» y que este «estatus jurídico […] emana de la acción de la Asamblea General»[133].

3.6.11 Sobre la misma base jurídica que ha producido el «certificado de nacimiento» de Israel, la Asamblea está facultada para emitir simultáneamente un certificado de defunción para la ocupación israelí y un certificado de nacimiento para Palestina. El juez Dillard, en un voto particular en el caso de Namibia, señalaba que «existen precedentes para el ejercicio de un poder así» de finalización por parte de la Asamblea, y apuntaba, en especial, a la «acción de la Asamblea General con respecto al Mandato de Palestina»[134].

3.7 La potencia de una resolución que declarara ilegal la ocupación israelí se vería reforzada si la Asamblea General requiriera (de acuerdo con el Artículo 96 de la carta de la ONU) un dictamen no vinculante al TIJ que respondiera a la pregunta: «¿Cuáles son las consecuencias legales de la incapacidad de una potencia ocupante de negociar de buena fe sobre la base del derecho internacional para poner fin a la ocupación?».

3.7.1 La cuestión propuesta ha sido redactada en un lenguaje genérico, según las líneas de la pregunta que se le planteó al Tribunal en 1966: «¿Se permite en alguna circunstancia la amenaza o el uso de las armas nucleares bajo el derecho internacional?». Si la Asamblea requiriera del Tribunal una opinión específica sobre las consecuencias legales de la incapacidad de Israel de negociar de buena fe sobre la base del derecho internacional el fin de la ocupación, podría suscitar el tema de la «adecuación judicial», es decir, que el Tribunal no debería emitir un dictamen no vinculante si tiene el efecto de «sortear el principio de que un Estado no está obligado a permitir que sus disputas se sometan a un acuerdo judicial sin su consentimiento»[135]. El movimiento prudente sería, por supuesto, evitar un riesgo así, incluso aunque el Tribunal solamente haya declinado en una ocasión fallar en un caso debido a la falta de consentimiento de una de las partes implicadas[136], e incluso aunque se pudiera montar un caso convincente a favor de un dictamen del Tribunal sobre una pregunta que explícitamente mencione a Israel[137].

3.7.2 Si el Tribunal aceptara la cuestión propuesta e Israel reciclara su objeción preliminar del caso Muro –recordemos: que una opinion del Tribunal «podría impedir una solución política, negociada, al conflicto Israel-Palestina»[138]–, esta objeción casi no tendría recorrido, entre otras cosas porque la premisa misma de la pregunta propuesta es la ausencia de una negociación real.

3.8 Aún podríamos preguntarnos: ¿qué fin real tendría una resolución de la Asamblea que declarara ilegal la ocupación israelí, incluso acompañada de una opinión complementaria del TIJ, si

cualquier acción de la Asamblea solamente puede imponerse mediante una resolución del Consejo de Seguridad que, por ahora y en el futuro visible, nunca se librará de un veto estadounidense, mientras que un dictamen no vinculante del TIJ tampoco puede imponerse?[139].

3.8.1 Una resolución de la Asamblea, junto con un dictamen del Tribunal, constituiría una pareja de armas formidables en la batalla para ganar la opinión pública. Desempeñaría el mismo papel, pero con un poder de persuasión potencialmente mayor, que el que la Resolución de Partición (181) desempeñó en la lucha sionista por la legitimidad y el Estado[140].

3.8.2 «Las disputas políticas y militares, especialmente en el mundo de hoy», observó Michla Pomerance en el contexto del debate sobre Namibia, «nunca están desprovistas de la dimensión de legitimidad como un componente importante del conflicto»[141]. Una resolución de la Asamblea combinada con un dictamen no vinculante del TIJ constituiría un paso importante hacia la deslegitimización de la ocupación israelí.

3.8.3 El delegado finés exhortaba a una saturada Naciones Unidas a obtener un dictamen no vinculante del TIJ en apoyo de sus resoluciones sobre Namibia. Argumentaba convincentemente que ello «expondría la falsa fachada de legalidad con la que las autoridades sudafricanas tratan de presentarse ante el mundo», y que, por lo tanto, ayudaría a «movilizar a la opinión pública […] especialmente en aquellos países que tienen el poder de influir sobre los acontecimientos en el sur de África de manera decisiva» (véase supra, 2.3.1.1).

3.8.4 Para destacar aún más los efectos saludables de un dictamen no vinculante, el juez Weeramantry, en su magistral voto particular en Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, se refería al caso Namibia: «La decisión del Tribunal sobre la ilegalidad del régimen del apartheid tenía pocas perspectivas de ser acatada por el gobierno ofensor, pero ayudó a crear el clima de opinión que desmanteló la estructura del apartheid […]. Cuando la ley es clara, hay más posibilidades de que se cumpla que cuando está embozada en la oscuridad»[142]. De hecho, la acción conjunta de los órganos políticos y judiciales de la ONU, a primeros de la década de 1970,

tuvo poco impacto directo sobre la lucha de autodeterminación de Namibia. Este país no se convirtió en un Estado hasta dos décadas más tarde, y solo después de una masiva pérdida de vidas namibias y de una negociación prolongada. Pero ¿no sería perverso concluir de ahí que los esfuerzos combinados de la Asamblea y el Tribunal fueron irrelevantes?[143].

3.8.5 El jurista James Crawford, representando en Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons a varios Estados del sur del Pacífico devastados por las pruebas nucleares, apuntaba igualmente a la contribución que el derecho internacional puede hacer para lograr un resultado humano:

Nadie es tan ingenuo [...] como para sugerir que el derecho internacional es un antídoto soberano para los riesgos y peligros que presenta la amenaza o el uso de las armas nucleares. Pero tampoco es el derecho internacional una asistenta, una femme de ménage a la que se le llama para limpiar después de que haya pasado el acontecimiento y que todos los participantes hayan vuelto a su casa. Puede ser parte de la solución al problema. Pero solo puede ser parte de la solución si viene a tratarlo mientras que estemos aún allí. Que el Tribunal declarara que el uso o la amenaza del uso de las armas nucleares es ilegal en todas las circunstancias concebibles sería una contribución a uno de nuestros mayores problemas modernos[144].

¿No podría el derecho internacional ser parte de la solución de otro de nuestros mayores problemas modernos y, si tiene que intervenir en este problema, no sería ahora el momento de que la comunidad internacional actúe, mientras Palestina esté aún aquí, y antes de que se le borre del mapa mundial?

4.0 OBSERVACIONES FINALES

4.1 Considerando que era prematuro reconocer un Estado palestino, el mismo James Crawford observaba hace un tiempo: «El punto esencial es que un proceso de negociación que tiende a objetivos identificados y aceptables sigue aún estando, aunque de manera precaria, en marcha». Después planteó como desafío central «cambiar el status quo a favor de un acuerdo global aceptado por todas las partes afectadas, una situación que parece tan remota como siempre»[145].

4.2 Pero ¿y si el «proceso de negociación» es solo una fachada, si no hay acuerdo sobre los «fines», si «un acuerdo global aceptado por todas las partes» no es «remoto», sino inalcanzable, porque –en las palabras del juez Dillard– «las partes no están de acuerdo sobre la base fundamental sobre la que descansa el proceso», y si este prolongado impasse surge enteramente del total rechazo por parte de la potencia ocupante del derecho internacional?

4.3 Ocurre que Crawford sí aborda, aunque de manera oblicua, una contingencia así. «Un Estado», opinaba, «no puede basarse en su propia conducta errónea para evitar las consecuencias de sus obligaciones internacionales»[146]. ¿Acaso no es esta una descripción precisa del «proceso de paz»? Negándose a negociar de buena fe sobre la base del derecho internacional un fin de la ocupación, Israel ha evadido sus obligaciones duales: retirarse del territorio palestino ocupado y –desde un punto de vista legal y moral, lo que es más importante– permitir al pueblo palestino que ejerza, finalmente y después de tanto sufrimiento, su derecho a la autodeterminación[147].

4.4 Ya va siendo hora de poner fin a ese supuesto proceso de paz que en realidad es un proceso de evitación y anexión. «Los Estados», decía el juez Jessup en el caso Namibia, «no están eternamente vinculados por el viejo proverbio "Si al principio no lo logras, inténtalo, inténtalo de nuevo"» (véase supra, 2.2.4.3). El momento de la verdad ha llegado de nuevo a las Naciones Unidas, el

momento –en las palabras del delegado uruguayo– «de poner fin a esta lucha entre la ley y la arrogancia» (véase supra, 2.2.5.3).

4.5 La Asamblea General de la ONU puede y debe declarar, de manera final y conclusiva, que la ocupación de Israel, no solamente tal o cual constituyente de esta, sino en su esencia y totalidad, es ilegal y que una retirada completa israelí ya no estará a merced de un interminable proceso de negociación, cuyo fin manifiesto, después de décadas de intentarlo una y otra vez, ya no puede ponerse en duda (excepto por los voluntariamente ciegos). Ese fin es hacer que la ocupación sea irreversible y consignar al olvido al pueblo palestino.

[1] A. Roberts, «What Is a Military Occupation?», 1985, pp. 293-294, disponible en [bybil.oxfordjournals.org/content/55/1/249.full.pdf].

[2] A. Cassese, Self-Determination of Peoples: A Legal Reappraisal, Cambridge, 1995, pp. 55, 90-99, 335.

[3] Agradezco esta referencia al profesor John Quigley.

[4] A. Gerson, Israel, the West Bank and International Law, Londres, 1978, pp. 75-76.

[5] N. G. Finkelstein, Knowing Too Much: Why the American Jewish Romance with Israel is Coming to an End, Nueva York, 2012, pp. 170-175, 205-208. La mayor autoridad israelí sobre derecho internacional, Yoram Dinstein, ha defendido siempre que el primer ataque de Israel fue legal. Pero a la vez sostiene que el derecho internacional permite el uso de la fuerza en «defensa propia» únicamente en respuesta a un «ataque armado» o –en sus diversas formulaciones– «la inminencia de un ataque armado», «en cuanto se hace evidente para el Estado víctima (sobre pruebas sólidas en aquel momento» que el ataque está «en proceso de preparación», «después de que el otro bando se haya comprometido a un ataque armado de una manera ostensible e irrevocable». Para

poder reconciliar el recurso de Israel al ataque armado en 1967 con los criterios restringentes que plantea, Dinstein afirma que «la campaña israelí equivalía a una defensa propia interceptiva, en respuesta a un incipiente ataque armado de Egipto. [...] Parecía claro que Egipto estaba volcado en un ataque militar y que la única cuestión no era si se materializaría, sino cuándo». La única prueba que Dinstein alega en apoyo de este punto clave, sin embargo, consiste en un artículo que él publicó hace 40 años. Conscientemente ignora el voluminoso historial que desde entonces está disponible y que muestra que Egipto no estaba dispuesto a atacar y que los líderes israelíes no creían que el ataque fuera inminente cuando atacaron a su vez. Incidentalmente, si excepto un ataque armado la única situación que permite recurrir a la violencia en defensa propia es la «inminencia» de un ataque, ¿no sería la «única cuestión» de «cuándo» iba a atacar Egipto una pregunta fundamental? Y. Dinstein, War, Aggression and Self-Defence, 4.a ed., Cambridge, 2005, pp. 182-192. Para las falsas representaciones de la guerra de 1967 en la literatura legal, véase especialmente J. Quigley, The Six-Day War and Israeli Self-Defense: Questioning the legal basis for preventive war, Cambridge, 2013.

[6] N. G. Finkelstein, Knowing Too Much, cit., pp. 209-216.

[7] M. Shamgar, «Legal Concepts and Problems of the Israeli Military Government– The initial stage», en M. Shamgar (ed.), Military Government in the Territories Administered by Israel 1967-1980: The Legal Aspects, vol. 1, Jerusalén, 1982, p. 43 (véase también p. 46).

[8] N. G. Finkelstein, Image and Reality of the Israel-Palestine Conflict, 2.a ed. de bolsillo aumentada, Nueva York, 2003, pp. 150-171.

[9] United Nations Security Council Official Records, S/PV.1735, 26 de julio de 1973, §§ 46-47; a partir de ahora: UNSCOR.

[10] Borrador de resolución del Consejo de Seguridad S/10974, reproducido en M. Cherif Bassiouni, (ed.), Documents of the Arab-Israeli Conflict: Emergence of conflict in Palestine and the Arab-Israeli wars and Peace Process, vol. 1, Ardsley, NY, 2005, pp. 631-632.

[11] UNSCOR, S/PV.1735, 26 de julio de 1973, § 86, cursivas añadidas.

[12] Ibid., § 129.

[13] A. Eban, Personal Witness: Israel through my eyes, Nueva York, 1992, p. 541; W. B. Quandt, Peace Process: American Diplomacy and the Arab-Israeli Conflict since 1967, Berkeley, 1993, p. 152.

[14] Leiden, 2009.

[15] Cambridge, 2009, p. 2, § 5.

[16] Berkeley Journal of International Law, 2005. Véase también A. Gross, «A Temporary Place of Permanence», Haaretz, 27 de octubre de 2015.

[17] Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (UNSC) 446, 22 de marzo de 1979; Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 478, 20 de agosto de 1980.

[18] Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ES 10/14, 8 de diciembre de 2003.

[19] Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Dictamen no vinculante, I. C. J. Reports, 2004, p. 184, § 121, cursivas añadidas.

[20] Juez Koroma, Voto particular, ibid., p. 204, § 2.

[21] J. Crawford SC, «Third Party Obligations with Respect to Israeli Settlements in the Occupied Palestinian Territories», julio de 2012; copia en el archivo del autor.

[22] HCJ 7957/04, Zaharan Yunis Muhammad Mara'abe v. The Prime Minister of Israel, 15 de septiembre de 2005, § 100.

[23] UNSCOR, S/PV.4841, 14 de octubre de 2003, p. 10.

[24] B'Tselem (Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories), Arrested Development The Long Term Impact

of Israel's Separation Barrier in the West Bank, octubre de 2012, pp. 5, 75.

[25] E. Benvenisti, The International Law of Occupation, Princeton, 1993, pp. 145-146, 214-216.

[26] J. Dugard (ed.), The South West Africa / Namibia Dispute: Documents and Scholarly Writings on the Controversy between South Africa and the United Nations, Berkeley, 1973, p. xi.

[27] Juez Nervo, Voto particular discrepante, South West Africa Cases (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa), Segunda fase, Veredicto, I. C. J. Reports, 1966, p. 452.

[28] La Unión Soviética fue también el impulso tras la descolonización y la autodeterminación en la escena internacional después de la Segunda Guerra Mundial. J. Crawford, The Creation of States in International Law, 2.a ed., Oxford, 2006, p. 108; A. Cassese, Self-Determination, pp. 19, 38, 44-52, 71, 321; D. Raič, Statehood and the Law of Self-Determination, La Haya, 2002, pp. 200, 204. Para la relación Wilson-Lenin, véase E. Manela, The Wilsonian Moment: Self-Determination and the International Origins of Anticolonial Nationalism, Oxford, 2007, p. 41. Aparte de su esperanza de robar el rayo a los bolcheviques, Wilson presionó con el principio de autodeterminación para evitar la adquisición por parte de Japón de islas estratégicas del Pacífico.

[29] Legal Consequences for States, I. C. J. Reports, 1971, p. 33, § 56.

[30] El Sistema de Fideicomisos, establecido en los Capítulos XII-XIII de la Carta de la ONU, esencialmente tenía los mismos fines que el Sistema de Mandato, es decir, preparar a los territorios bajo su égida para el autogobierno.

[31] S. Slonim, South West Africa and the United Nations: An International Mandate in dispute, Baltimore, 1973, pp. 75-109. A principios de la década de 1950, Sudáfrica se había anexionado efectivamente Namibia. A finales de la década de 1950, Sudáfrica amagó con la partición y la anexión de una parte de África del Sudoeste, pero fue mayoritariamente rechazada por las Naciones

Unidas. (Un puñado de naciones, entre ellas especialmente Estados Unidos y Reino Unido, inicialmente apoyaron la iniciativa sudafricana.) Durante el debate posterior en la Asamblea General, el delegado de Ghana describió así el objetivo de Sudáfrica:

La población indígena africana quedará desterrada para constituir doce agrupaciones territoriales y étnicas artificiales, o «homelands». En las homelands cada grupo se desarrollará separadamente según sus propios recursos y talentos raciales. El grueso de la tierra habitable de África del Sudoeste, junto con las minas de diamantes y la mayoría de las otras minas, se convertirán en la reserva exclusiva de los colonos blancos descendientes de los boers, alemanes e ingleses. Mediante una astuta maniobra las demarcaciones de las homelands de los colonos están cuidadosamente trazadas en torno a depósitos minerales, puertos marítimos, instalaciones de transporte y comunicación y áreas urbanas.

El delegado de Estados Unidos describió el plan sudafricano como «claramente diseñado para fragmentar el territorio según los principios del apartheid», puesto que adjudicaba «más de la mitad del territorio, incluyendo las granjas, minas y ciudades del corazón del país, al 16 por 100 de la población, que es blanca, y consignaba a la mayoría no blanca a las unidades menos deseables y fraccionadas, alejadas del mar y sin esperanza de un desarrollo económico independiente», y como «una negación de la autodeterminación y un medio de perpetuar la supremacía blanca». General Assembly Official Records (a partir de ahora: GAOR), A/PV.1635, 16 de diciembre de 1967, § 72; GAOR, A/PV.1658, 20 de mayo de 1968, § 57; GAOR, A/PV.1737, 10 de diciembre de 1968, § 118.

[32] International Status of South-West Africa, dictamen no vinculante, I. C. J. Reports, 1950, pp. 133-145. Juez Álvarez, Voto particular discrepante, ibid., p. 184. Juez de Visscher, Voto particular discrepante, ibid., p. 188. Juez Krylov, Voto particular discrepante, ibid., p. 191.

[33] South-West Africa-Voting Procedure, dictamen no vinculante, I. C. J. Reports, 1955, pp. 67-78. Este caso probablemente se recuerde más por el elegante (aunque esquivo) análisis del juez Lauterpacht en su voto particular sobre el estatus legal de las resoluciones de la Asamblea General, ibid., pp. 118-120.

[34] Admissibility of Hearings of Petitioners by the Committee on South West Africa, Dictamen no vinculante, I. C. J. Reports, 1956, pp. 26-32.

[35] Según el Artículo 94 de la Carta de la ONU, «Todo miembro de las Naciones Unidas se compromete a cumplir con la decisión del Tribunal Internacional de Justicia en cualquier caso del cual sea parte», y «si cualquiera de las partes de un caso no desempeñara las obligaciones que se le han atribuido mediante un veredicto pronunciado por el Tribunal, la otra parte puede recurrir al Consejo de Seguridad, que puede, si así lo considera necesario, hacer recomendaciones o decidir que se tomen medidas para que el veredicto se aplique».

[36] South West Africa Cases (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa), Primera fase, Objeciones preliminares, I. C. J. Reports, 1962.

[37] South West Africa Cases, Segunda fase, Veredicto, I. C. J. Reports, 1966.

[38] Entre 1962 y 1966, la composición del Tribunal había cambiado, y su equilibrio ideológico se había inclinado hacia la derecha.

[39] J. Dugard, South West Africa / Namibia, cit., p. 292.

[40] South West Africa Cases, Segunda fase, Veredicto, I. C. J. Reports, 1966, p. 51. Aunque concurre con las conclusiones de la mayoría del Tribunal en su veredicto de 1966, Slonim, no obstante, concede: «A pesar de las afirmaciones en contra del Tribunal, está bastante claro que la decisión de 1966, de hecho, aunque no en su forma técnica, representa una inversión del veredicto de 1962» (South West Africa, p. 284). Defiende el giro del Tribunal justificándolo en que, a lo largo de las prolongadas sesiones, se hizo

evidente que la política del apartheid en Namibia que aplicaba Sudáfrica –«el "corazón" de este proceso por completo» (ibid., p. 224)– era «no justiciable», es decir, no susceptible de supervisión judicial (pp. 297-298), y que, por lo tanto, el Tribunal tenía que rechazar la tesis del solicitante de que Sudáfrica había quebrantado los términos del Mandato. Esta tesis falla en múltiples puntos: (1) El Tribunal no había tomado una decisión en su veredicto de 1966, sino que, en lugar de ello, se apoyaba en una supuesta distinción técnica en la cláusula de adjudicación (compromisorio) del Mandato; (2) aunque Slonim argumenta convincentemente que el manejo legal del caso era una chapuza –en concreto, el «criterio» o «norma» que proponía para condenar a Sudáfrica era insostenible–, también se diría, y Slonim lo reconoce implícitamente (ibid., pp. 300-301, 305-306), que un abogado competente podría haber montado un caso creíble, sobre la base del cual el Tribunal podría haber fallado a favor de los solicitantes; y (3), en su dictamen de 1971, el Tribunal concluyó, basándose esencialmente en la teoría esbozada por el abogado de los solicitantes en 1966, que la política del apartheid que Sudáfrica aplicaba a Namibia constituía una «flagrante violación de los fines y principios» de la Carta de la ONU. Legal Consequences for States, I. C. J. Reports, 1971, p. 57, §§ 129-131. Si el Tribunal tomó o no la decisión correcta no es el asunto aquí; el hecho es que no concluyó que la política del apartheid fuera inherentemente no justiciable. Pero véase también S. Slonim, South West Africa, cit., p. 338, n. 132.

[41] Juez Forster, Voto particular discrepante, South West Africa Cases, Segunda fase, Veredicto, I. C. J. Reports, 1966, p. 482.

[42] Probablemente fuera cierto que las Potencias Mandatarias, que nunca se comprometieron realmente con la no anexión, hubieran accedido tácitamente a una posterior incorporación de África del Sudoeste a Sudáfrica, pero era igualmente cierto que la letra del Mandato prohibía una anexión así. Véase S. Pedersen, The Guardians: The League of Nations and the crisis of empire, Oxford, 2015.

[43] En la fase preliminar el juez Jessup presentó un voto particular de 50 páginas y el juez Fitzmaurice (junto con el juez Spender, australiano) presentó un voto particular discrepante de 100 páginas,

mientras que la fase de méritos, supuestamente redactada por Fitzmaurice (que tenía un estilo literario muy característico), ocupaba 50 páginas y el voto particular discrepante de Jessup llegó a alcanzar más de 100 páginas.

[44] Juez de Castro, Voto particular, Legal Consequences for States, I. C. J. Reports, 1971, p. 211.

[45] La fase de alegaciones del proceso duró unos tres años, mientras que ambas fases juntas se extendieron durante cinco años y produjeron casi 7.000 páginas de registros escritos, que cubrían tanto los alegatos escritos como los orales. Desde una perspectiva jurídica, la tragedia real de la decisión del TIJ de no sopesar los méritos del caso contra Sudáfrica fue que se perdió una oportunidad única de captar en el idioma de la ley exactamente lo que hacía reprobable el sistema del apartheid. El hecho es, prima facie, que Sudáfrica planteó una defensa creíble, a saber: el apartheid (en especial en su forma final de «desarrollo separado» en homelands independientes) constituía meramente una aplicación del principio de autodeterminación a tribus culturalmente distintas, mientras que los conflictos tribales que azotan el continente africano son una demostración de la locura que implica encerrar a grupos heterogéneos dentro de una única frontera. El informe presentado por Sudáfrica, en efecto, solamente podía refutarse mediante un análisis forense paciente y sutil, no mediante fórmulas encapsuladas y menos aún mediante eslóganes. Los intentos del TIJ en el caso de Namibia de definir de pasada los males del apartheid (véase, especialmente, el voto particular discrepante del juez Tanaka en 1966, pero véase también Legal Consequences for States), por muy laudatorios que fueran, no estaban a la altura del desafío judicial. En su voto particular discrepante de 1971, el juez Fitzmaurice censuró justamente al Tribunal por tratar el apartheid como «si fuera autoevidente que es perjudicial para el bienestar de los habitantes del territorio mandado», sin proporcionar argumentos o abrirse a una discusión. Aun así, hay que decir que la reprimenda del juez Fitzmaurice al Tribunal rozaba el escándalo, en la medida en que él mismo había desempeñado un papel principal para evitar el análisis judicial del apartheid por parte del Tribunal en 1966. Juez Tanaka, Voto particular discrepante, South West Africa Cases, Segunda fase, Veredicto, I. C. J. Reports, 1966, pp. 310-313; Legal

Consequences for States, I. C. J. Reports, 1971, p. 57, §§ 129-131; juez Fitzmaurice, Voto particular discrepante, ibid., pp. 222-223.

[46] Juez Álvarez, Voto particular discrepante, International Status of South-West Africa, Dictamen no vinculante, I. C. J. Reports, 1950, pp. 183-185.

[47] Juez de Visscher, Voto particular discrepante, ibid., p. 188.

[48] Juez Bustamante, Voto particular, South West Africa Cases, First Phase, Preliminary Objections, I. C. J. Reports, 1962, pp. 385-386.

[49] Juez Jessup, Voto particular, ibid., p. 435.

[50] GAOR, A/PV.1451, 26 de octubre de 1966, § 21.

[51] S. Slonim, South West Africa, cit., p. 181 (véase también p. 134: «Obviamente, el prerrequisito esencial para el éxito de cualquier negociación, el acuerdo sobre el fin de las negociaciones, estaba totalmente ausente»).

[52] GAOR, A/PV.1414, 23 de septiembre de 1966, § 30.

[53] GAOR, A/PV.1453, 27 de octubre de 1966, § 40.

[54] GAOR, A/PV.1448, 19 de octubre de 1966, §§ 126, 142. En una Asamblea General posterior, el excepcionalmente expresivo delegado uruguayo exhortaba:

Pongámonos pues a trabajar; enfrentémonos a las dificultades. Es lamentable que Sudáfrica persista en su actitud de rebelión contra las Naciones Unidas, pero esto no puede paralizar nuestra acción. El tiempo de las advertencias ha pasado. La verdad es, de hecho, que los torrentes de elocuencia que se han pronunciado durante los últimos veintidós años en las Naciones Unidas no han servido de nada –vox clamantis in deserto–. Los sudafricanos han hecho oídos sordos a nuestras advertencias. Tal vez el personaje de una de las comedias de Benavente, el gran dramaturgo español, tenía razón cuando decía: «No creo en la eficacia de los sermones. Son como los

avisos en las curvas peligrosas, inútiles para los que conducen con cordura, más inútiles aún para quienes van decididos a estrellarse» (GAOR, A/PV.1515 [5 de mayo de 1967], § 96).

[55] GAOR, A/PV.1448, 19 de octubre de 1966, §§ 41-43. Posteriormente, Gran Bretaña, que tenía grandes inversiones en África, terminó oponiéndose (normalmente mediante la abstención) a las resoluciones de la ONU que la condenaban.

[56] Excepto (se podría argumentar) Palestina, ya no quedan territorios actualmente bajo los sistemas del Mandato o el Fideicomiso.

[57] GAOR, A/PV.1439, 12 de octubre de 1966, §§ 98, 101.

[58] GAOR, A/PV.1515, 5 de mayo de 1967.

[59] GAOR, A/PV.1662, 24 de mayo de 1968, § 17 (delegado israelí citando el discurso de Eban ante la asamblea).

[60] GAOR, A/PV.1439, 12 de octubre de 1966, § 73; A/PV.1453, 27 de octubre de 1966, § 5.

[61] GAOR, A/PV.1737, 10 de diciembre de 1968, § 122.

[62] GAOR, A/PV.1632, 14 de diciembre de 1967, § 4.

[63] GAOR, A/PV.1632, 14 de diciembre de 1967, §§ 12-13.

[64] GAOR, A/PV.1449, 19 de octubre de 1966, §§ 19, 22. En el caso en cuestión, el «lobby» al que se refería el delegado comprendía los «intereses comerciales [americanos] en la economía sudafricana. En los siguientes debates de la Asamblea, Estados Unidos insistía en predicar las virtudes del «diálogo» y la «diplomacia», aunque también afirmaba que «no por ello sugería de ninguna manera que se condone el retraso indefinido». GAOR, A/PV.1505, 26 de abril de 1967, §§ 24-25.

[65] UNSCOR, S/PV.1550, 29 de julio de 1970, § 41.

[66] UNSCOR, S/PV.1391, 16 de febrero de 1968, § 67; UNSCOR, S/PV.1465, 20 de marzo de 1969, §§ 10, 15; UNSCOR, S/PV.1496, 11 de agosto de 1969, §§ 20, 24-26.

[67] La composición del Tribunal cambió en el periodo intermedio entre los juicios de 1966 y 1971, escorándose ideológicamente en la dirección opuesta, progresista. El Tribunal se encontraba también bajo una enorme presión internacional y necesitaba redimirse después del fiasco de 1966. El juez Fitzmaurice presentó un voto particular discrepante de 100 páginas en el que atacaba prácticamente toda la jurisprudencia del Tribunal desde el inicio del caso de Namibia en 1950. De hecho, en este punto ya se había despojado efectivamente de su toga judicial y funcionaba como abogado defensor de Sudáfrica. Ya en el momento del juicio de 1966, el juez Jessup había observado en su voto discrepante a la resolución adoptada por el Tribunal (bajo la dirección intelectual de Fitzmaurice) que este no tenía jurisdicción «sobre una teoría que ni siquiera había aportado» la propia Sudáfrica. Juez Jessup, Voto particular discrepante, South West Africa Cases, Segunda fase, Veredicto, I. C. J. Reports, 1966, p. 328, cursivas en el original (pero véase también S. Slonim, South West Africa, cit., p. 219, n. 15 y pp. 291-292). Si la vocación de abogado consiste en probar (o pretender probar) que las palabras no significan lo que claramente significan, entonces hay que decir que Fitzmaurice era un virtuoso de su oficio; incluso negó en 1971 el significado de sus propias palabras en 1966 (J. Dugard, South West Africa / Namibia, cit., pp. 486-487). El meollo de su voto discrepante de 1971 era que ninguno de los órganos de la ONU, ni la Asamblea General, ni siquiera el Consejo de Seguridad, tenía nada legítimo que decir sobre el gobierno de Sudáfrica en Namibia y que, aunque Sudáfrica no podía legalmente anexionarse Namibia, si se embarcara en algo así, las Naciones Unidas no podrían revocar el Mandato «hasta y a no ser» que esa sanción se le impusiera por «medios legales». Pero, en el último punto, si Fitzmaurice rechazaba toda la jurisprudencia del Tribunal en el caso de Namibia, excepto la decisión de 1966 que negaba la jurisdicción del Tribunal, entonces, de facto, como señalaba en su voto discrepante de 1971, Sudáfrica era libre de hacer lo que quisiera. Era una medida de su sesgo el que Fitzmaurice regañara a la Asamblea General por (1) ser «por naturaleza hostil» a Sudáfrica, mientras que él mismo callaba sobre

la disposición de la Asamblea hacia Namibia, que después de todo era su responsabilidad principal («encargo sagrado») bajo el sistema de Mandato; y (2) crear un «estado de tensión permanente» con Sudáfrica promoviendo la independencia de Namibia, mientras que ni siquiera menciona la «tensión» fomentada por la aspiración de Sudáfrica de anexionarse Namibia ilegalmente, y dejando de lado si la tensión engendrada por cada una de las partes era igualmente culpable. El resultado del voto discrepante de Fitzmaurice era que construía a Sudáfrica, y no a Namibia, como el «encargo sagrado» y protegía su soberanía como el objeto preminente de atención judicial. Es indicativo del universo moral en el que habitaba que, al describir las reivindicaciones jurisdiccionales opuestas de las Naciones Unidas y Sudáfrica con respecto al futuro y destino de Namibia, Fitzmaurice se aferraba a una metáfora cretina: «Las Naciones Unidas han apostado por el caballo equivocado». Juez Fitzmaurice, Voto particular discrepante, Legal Consequences for States, I. C. J. Reports (1971), pp. 226, 232-233, 252. Fitzmaurice resultó ser la piedra de toque política en los comentarios sobre el caso de Namibia. Así, entre los dos académicos principales en el caso de Namibia, Dugard, que sentía más simpatía por el bando progresista del Tribunal, ridiculizaba la «sugerencia anárquica [de Fitzmaurice] de que el Tribunal abjurara de todas sus decisiones previas sobre África del Sudoeste», mientras que Slonim, que tendía más hacia los conservadores del Tribunal, alababa su «discrepancia enérgica y potente» como «un desafío formidable a la opinión de la mayoría». J. Dugard, South West Africa / Namibia, cit., p. 485; S. Slonim, South West Africa, cit., pp. 340, 342.

[68] Una parte importante del dictamen se centraba también en las obligaciones legales de los Estados miembros de la ONU después de que el Consejo de Seguridad confirmara la acción de la Asamblea. En la medida en la que una resolución del Consejo de Seguridad afirmando la ilegalidad de la ocupación israelí ni ahora ni en el futuro se librará de un veto americano, esta sección del dictamen no se analizará aquí.

[69] Legal Consequences for States, I. C. J. Reports, 1971, pp. 43-45, §§ 84-86.

[70] Juez Dillard, Voto particular, Legal Consequences for States, I.

C. J. Reports, 1971, pp. 159-160, cursivas en el original.

[71] Juez Gros, Voto particular discrepante, Legal Consequences for States, I. C. J. Reports, 1971, pp. 344-345, §§ 43-45.

[72] S. Slonim, South West Africa, cit., pp. 192-196.

[73] Legal Consequences for States, I. C. J. Reports, 1971, pp. 45-50, §§ 87-105, cita en el § 105. Hay que señalar de pasada que el Tribunal no fue lúcido (ni coherente) en este punto. Según el juez Nervo, la resolución de la Asamblea General no se convertía en «completamente efectiva» hasta después de que las resoluciones del Consejo de Seguridad así lo afirmaran, y como resultado del «efecto combinado de las resoluciones de estos dos órganos principales de las Naciones Unidas», mientras que, según el juez Dillard, la Asamblea tiene el poder en este caso «sui generis» de revocar el Mandato, pero también podría hacerlo como principio general en conjunción con el Consejo de Seguridad. Juez Nervo, Voto particular, Legal Consequences for States, I. C. J. Reports, 1971, p. 114; juez Dillard, Voto particular, ibid., pp. 163-165.

[74] Juez Nervo, Voto particular, Legal Consequences for States, I. C. J. Reports, 1971, pp. 113, 123, cursivas añadidas.

[75] «Clear Verdict on Namibia», The New York Times, 22 de junio de 1971.

[76] Resolución del UNSC 301, 1971.

[77] UNSCOR, S/PV.1598, 20 de octubre de 1971, §§ 17-18.

[78] «Secretary-General Tells Security Council Middle East Crisis “Worst in Ten Years”; Calls on Palestinians, Israelis to “Lead Your People away from Disaster”», disponible en [un.org/press/en/2002/sgsm8159.doc.htm], 12 de marzo de 2002.

[79] G. P. Fletcher, «Annan’s Careless Language», The New York Times, 21 de marzo de 2002.

[80] F. Eckhard, «A Delicate Word in the Mideast», The New York Times, 23 de marzo de 2002.

[81] Juez Dillard, Voto particular, Legal Consequences for States, I. C. J. Reports, 1971, p. 158.

[82] Legal Consequences of the Construction of a Wall, I. C. J. Reports, 2004, pp. 158-159, § 49; p. 165, § 70. El peligro que acecha tras la invocación del Mandato es que los apologetas de Israel puedan entonces apropiárselo para justificar todo tipo de cosas, como su política de asentamientos. Véase E. Rostow, «Correspondence», American Journal of International Law, 1990, pp. 718-720.

[83] Legal Consequences of the Construction of a Wall, I. C. J. Reports, 2004, p. 165, § 70, pp. 171-172, § 88; juez Elaraby, Voto particular, ibid., pp. 250-252, §§ 2.2-2.3; juez Owada, Voto particular, ibid., pp. 263-264, § 10. Para ser precisos, en un par de votos particulares se afirmó lo inepto de la analogía. Véase juez Kooijmans, Voto particular, ibid., p. 219, § I.1, p. 226, §§ IV.23, IV.25, p. 229, § V.33, p. 231, § VI.39; juez Higgins, Voto particular, ibid., pp. 207-208, §§ 2, 3, 5.

[84] International Status of South-West Africa, I. C. J. Reports, 1950, p. 131; Legal Consequences for States, I. C. J. Reports, 1971, pp. 28, 43; Legal Consequences of the Construction of a Wall, I. C. J. Reports, 2004, p. 165, § 70.

[85] Juez Koroma, Voto particular, Legal Consequences of the Construction of a Wall, I. C. J. Reports, 2004, p. 205, § 7; juez al-Khasawneh, Voto particular, ibid., p. 237, § 9; juez Elaraby, Voto particular, ibid., pp. 250-251, § 2.2.

[86] A. Wilson, «The Laws of War in Occupied Territory», Transactions of the Grotius Society, 1932, p. 38 (véase también p. 29).

[87] Legal Consequences for States, I. C. J. Reports, 1971, p. 31, § 52.

[88] M. Benvenisti, International Law, p. 5. Véase también B. Naftali et al., «Illegal Occupation», pp. 592-597.

[89] Juez Koroma, Voto particular, Legal Consequences of the

Construction of a Wall, I. C. J. Reports, 2004, p. 204, § 2.

[90] A. R. Sureda, The Evolution of the Right of Self-Determination: A study of United Nations practice, Leiden, 1973, pp. 260-261; A. Cassese, Self-Determination, pp. 90, 94-95, 230, 240. Véase también juez Higgins, Voto particular, Legal Consequences of the Construction of a Wall, I. C. J. Reports, 2004, p. 214, § 29.

[91] Legal Consequences for States, I. C. J. Reports, 1971, p. 31, § 53; Legal Consequences of the Construction of a Wall, I. C. J. Reports, 2004, pp. 171-172, § 88, pp. 182-183, § 118.

[92] El afamado jurista Antonio Cassese discute ese paralelismo. Mantiene que, mientras que los asuntos legales que corresponden a la retirada de Sudáfrica de Namibia se habían resuelto pronto, los parámetros de una retirada israelí siguen en discusión, así como la «incertidumbre legal acerca de quién detenta los derechos de soberanía sobre los territorios». Incluso concediendo, hipotéticamente, que la opinión de Cassese fuera de algún modo cierta en el momento en el que escribía (1995), claramente ya no es sostenible, a la luz de las numerosas resoluciones de la Asamblea General aprobadas con aplastantes mayorías, incluyendo el dictamen de 2004 del TIJ, que designaba el conjunto de Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este y Gaza, como «territorio palestino ocupado». En su voto particular sobre el caso Muro, la jueza Higgins también discute la analogía. En el caso de Namibia, argumenta, todas las obligaciones legales que adjudicaba el TIJ recaían en Sudáfrica, mientras que, en el conflicto Israel-Palestina, «el problema intratable de fondo […] no puede considerarse como uno en el que solamente una parte ya ha sido clasificada por un tribunal como el infractor legal; donde por sí mismo debe restaurar una situación de legalidad y donde, desde la perspectiva de la obligación legal, ya no le queda a la otra parte nada que hacer». Pero, en la medida en que los interlocutores palestinos han expresado desde hace mucho tiempo su disposición a construir una paz según los términos que prescribe el derecho internacional y avalados por la mayoría absoluta de la Asamblea General, realmente a los palestinos «no les queda nada que hacer» y la responsabilidad por completo de la obligación legal sí recae sobre Israel. A. Cassese, Self-Determination, pp. 130-131, 147-150,

240-242; jueza Higgins, Voto particular, Legal Consequences of the Construction of a Wall, I. C. J. Reports, 2004, pp. 207-208, §§ 2-3 (véase también p. 211, § 18; pp. 214-215, §§ 30, 31).

[93] Véase el cuerpo de este libro para referencias.

[94] Legal Consequences of the Construction of a Wall, I. C. J. Reports, 2004, pp. 183-184, §§ 120-122.

[95] J. Dugard, Recognition, cit., pp. 158-161.

[96] J. Carter, Palestine Peace Not Apartheid, Nueva York, 2006; C. McGreal, «Worlds Apart: Israel, Palestine and apartheid» y «Brothers in Arms: Israel's secret pact with Pretoria», The Guardian, 6 de febrero de 2006, 7 de febrero de 2006 (Tutu); J. Dugard, «Apartheid and Occupation under International Law», Hisham B. Sharabi Memorial Lecture, 30 de marzo de 2009; M. Ben-Yair, «The War's Seventh Day», Haaretz, 2 de marzo de 2002; S. Aloni, «Indeed, There Is Apartheid in Israel», ynet.co.il, 5 de enero de 2006; R. Nahmias, «"Israeli Terror Is Worse"», Yediot Ahronot, 29 de julio de 2005 (Aloni); Y. Sarid, «Yes, It Is Apartheid», Haaretz, 24 de abril de 2008; M. Benvenisti, «Founding a Binational State», Haaretz, 22 de abril de 2004; D. A. Spritzer, «British Zionists Drop Haaretz Columnist», The Jewish Telegraphic Agency, 8 de agosto de 2007 (Rubinstein); E. HaLevi, «Haaretz Editor Refuses to Retract Israel Apartheid Statements», israelnationalnews.com, 30 de julio de 2008 (Rubinstein); B'Tselem (Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories), Forbidden Roads: Israel's discriminatory road regime in the West Bank, agosto de 2004, p. 3; Association for Civil Rights in Israel, The State of Human Rights in Israel and the Occupied Territories, 2008 Report, p. 17; «The Problem That Disappeared», Haaretz, 11 de septiembre de 2006; «Where Is the Occupation?», Haaretz, 7 de octubre de 2007; «Our Debt to Jimmy Carter», Haaretz, 15 de abril de 2008; A. Schocken, «Citizenship Law Makes Israel an Apartheid State», Haaretz, 28 de junio de 2008; «The Price of Deception and Apartheid», Haaretz, 27 de noviembre de 2013; «Meridor Compares Likud Policies to Apartheid», The Times of Israel, 19 de noviembre de 2013.

[97] V. Tilley (ed.), Beyond Occupation: Apartheid, colonialism and international law in the occupied Palestinian territories, Londres,

2012, p. 215; J. Dugard y J. Reynolds, «Apartheid, International Law, and the Occupied Palestinian Territory», European Journal of International Law 24, 2013, p. 912.

[98] A. Roberts, What Is?, cit., pp. 272-273.

[99] Véase cap. VI.

[100] R. J. Goldstone, «Israel and the Apartheid Slander», The New York Times, 31 de octubre de 2011.

[101] Este hecho crudo apunta por sí solo a lo obtuso de la presunción de Israel de ser la «única democracia de Oriente Próximo». Se valore como se valore la situación en el interior de la Línea Verde, Israel, durante la mayor parte de su existencia, ha presidido en los territorios ocupados palestinos sobre una población sierva que abarca casi el 40 por 100 de la población total de ambos lados de la Línea Verde y que carece de todo derecho de ciudadanía.

[102] Hay que señalar también que, cuando las Naciones Unidas condenaron el régimen de apartheid instalado en Namibia, lo hicieron sin tener el cuenta la oferta de Sudáfrica de anexionarse «únicamente» las partes de Namibia pobladas por los colonos blancos. Sobre este punto, véase también J. Dugard y J. Reynolds, «Apartheid», cit., p. 910.

[103] Véase cap. II.

[104] En su voto particular discrepante de 1966, el juez Tanaka dilucidó útilmente la distinción entre la ley y la política:

La diferencia esencial entre la ley y la política o el gobierno radica en el hecho de que la ley distingue de una manera categórica lo que es correcto y justo de lo que es incorrecto e injusto, mientras que la política y el gobierno, siendo los medios para alcanzar fines específicos, y dominados por razones de eficacia, hacen una distinción entre lo práctico y lo no práctico, lo eficaz y lo ineficaz. Por consecuencia, en el juicio de la ley no hay otra posibilidad

aparte de lo que es justo o injusto (tertium non datur), en el caso de la política y el gobierno hay muchas posibilidades o elecciones desde el punto de vista de la eficacia y la conveniencia. La política es susceptible de una gradación, en contraste con la ley, que es categórica y absoluta (juez Tanaka, Voto particular discrepante, South West Africa Cases, Second Phase, Judgment, I. C. J. Reports [1966], p. 282).

[105] Véase, p. ej., el registro literal de las negociaciones de Annapolis recogidas en los Palestine Papers, disponible en [http://transparency.aljazeera.net/Services/Search/default.aspx], esp. «Preliminary Assessment of the Israeli Proposal on Territory», 15 de agosto de 2008; «Meeting Minutes on Borders», 4 de mayo de 2008.

[106] Véase N. G. Finkelstein, Knowing Too Much, cit., pp. 203-248.

[107] Palestine Papers, «Minutes from 8th Negotiation Team Meeting», cit., 13 de noviembre de 2007.

[108] En su descripción positiva de los acuerdos de Oslo, Cassese observa que la autodeterminación palestina «será el sujeto de las negociaciones entre los palestinos democráticamente elegidos y las autoridades israelíes. […] Todo queda para el acuerdo de estas dos partes». A. Cassese, Self-Determination, pp. 244-245, cursivas añadidas. Pero, como señaló Dillard perspicazmente en el caso Namibia, si todo está sujeto a negociación, incluyendo «las bases fundamentales sobre las que descansa el proceso» (véase supra, 2.3.3.1.1), las negociaciones están destinadas al fracaso.

[109] Veredicto de la mayoría, North Sea Continental Shelf, I. C. J. Reports, 1969, pp. 45-47.

[110] Dictamen no vinculante de la mayoría, Case Concerning Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area, I. C. J. Reports, 1984, p. 299.

[111] Dictamen no vinculante de la mayoría, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, I. C. J. Reports, 1996, pp. 263-264.

Véase también el voto particular del juez al-Khasawneh’s en el Wall case:

Aunque no hay nada malo en llamar a los protagonistas a negociar de buena fe con la intención de implantar las resoluciones del Consejo de Seguridad, nadie debería olvidarse de que las negociaciones son un medio para alcanzar un fin y que no pueden en sí mismas reemplazar ese fin. […] Es de la mayor importancia si estas negociaciones no van a producir soluciones de principio, que se basen en la ley, y que el requisito de la buena fe se traduzca en pasos concretos, absteniéndose de crear faits accomplis por motivos […] que no pueden sino prejuiciar el resultado de esas negociaciones (juez al-Khasawneh, Voto particular, Legal Consequences of the Construction of a Wall, I. C. J. Reports [2004], pp. 238-239, § 13, cursivas añadidas).

[112] G. S. Goodwin-Gill, «State Responsibility and the “Good Faith” Obligation in International Law», en M. Fitzmaurice y D. Sarooshi (eds.), Issues of State Responsibility before International Judicial Institutions, Oxford, 2004, pp. 84, 89, 95, cursivas en el original.

[113] Por ejemplo, la Cuarta Convención de Ginebra prohíbe la transferencia de la población ocupante al territorio ocupado.

[114] Por ejemplo, la inadmisibilidad de la adquisición de territorio mediante la guerra.

[115] Por ejemplo, el derecho de los pueblos a la autodeterminación.

[116] US Department of State, «Remarks on Middle East Peace», 28 de diciembre de 2016.

[117] Legal Consequences of the Construction of a Wall, I. C. J. Reports, 2004, pp. 171-172, § 88 (la segunda cita interna procede de Legal Consequences for States).

[118] La resolución original de la Asamblea General que ponía en marcha el proceso de los «territorios en fideicomiso y sin autogobierno» y de «todos los demás territorios que aún no hayan alcanzado la independencia» era la 1514, «Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples» (1960). Declaraba que «el sometimiento de los pueblos al yugo, dominación y explotación ajena constituye una negación de los derechos fundamentales, es contrario a la Carta de las Naciones Unidas y es un impedimento para la promoción de la paz y la cooperación mundial».

[119] Legal Consequences of the Construction of a Wall, I. C. J. Reports, 2004, pp. 158-159, § 49.

[120] La excepción principal atañe a los asuntos de gestión interna, como la validación de presupuestos, en los que las resoluciones de la Asamblea General son vinculantes. Pero la Asamblea también admite nuevos miembros y, por lo tanto, vincula a los miembros existentes a considerar al recién llegado como un Estado, mientras que, en el curso del proceso de descolonización / autodeterminación, era la Asamblea quien decidía qué territorios podían calificarse como carentes de autogobierno, por lo tanto cuáles tenían derecho a la autodeterminación. Véase R. Higgins, The Development of International Law through the Political Organs of the United Nations, Nueva York, 1963, pp. 112-113; A. R. Sureda, Evolution, cit., pp. 65-66; J. Crawford, Creation, cit., pp. 607-608.

[121] Juez Fitzmaurice, Voto particular discrepante, Legal Consequences for States, I. C. J. Reports, 1971, p. 267, § 69.

[122] Crawford afirma que la Asamblea General revocó el Mandato de Sudáfrica, no en su capacidad de un órgano político que poseyera dicha competencia, sino más bien en un «modo declarativo», simplemente especificando o confirmando las consecuencias jurídicas de la conducta ilegal de Sudáfrica. El juez Nervo, en un voto particular en el caso Namibia, defendía igualmente que la finalización del Mandato por parte de la Asamblea fue de «naturaleza declarativa», donde «declaraba lo que de facto y de iure era manifiesto». J. Crawford, Creation, cit., pp. 441, 588, 593-595; juez Nervo, Voto particular, Legal Consequences

for States, I. C. J. Reports, 1971, p. 113.

[123] El juez Elaraby, en su voto particular en el caso Muro, invoca dudosamente el Mandato palestino para justificar la existencia de lo que alega que es un «nexo legal» que hace que las resoluciones de la Asamblea General en relación con un Estado palestino sean «vinculantes para todos los Estados miembros en tanto tienen fuerza legal y consecuencias legales», y dota a la Asamblea de una «responsabilidad legal especial […] hasta la consecución de este objetivo». Juez Elaraby, Voto particular, Legal Consequences of the Construction of a Wall, I. C. J. Reports, 2004, pp. 251-252, § 2.3.

[124] International Status of South-West Africa, I. C. J. Reports, 1950, pp. 136-137. Véase también Voting Procedure, I. C. J. Reports, 1955, p. 76.

[125] Admissibility of Hearings of Petitioners, I. C. J. Reports, 1956, p. 28.

[126] South West Africa Cases, Primera fase, objeciones preliminares, I. C. J. Reports, 1962, p. 334.

[127] Legal Consequences for States, I. C. J. Reports, 1971, p. 49, § 102.

[128] Juez de Castro, Voto particular, Legal Consequences for States, I. C. J. Reports, 1971, pp. 214-215.

[129] Juez Nervo, Voto particular, Legal Consequences for States, I. C. J. Reports, 1971, p. 112.

[130] Para este principio de la «efectividad» en la jurisprudencia del TIJ sobre el caso de Namibia, véase S. Slonim, South West Africa, cit., pp. 162, 210.

[131] Juez Fitzmaurice, Voto particular discrepante, Legal Consequences for States, I. C. J. Reports, 1971, pp. 291-294.

[132] Cuando concluye que la resolución de la Asamblea General 1608 que pone fin al Acuerdo de Fideicomiso sobre el Camerún británico tenía un «efecto legal definitivo», el Tribunal especificaba que «la finalización […] era un efecto legal de las conclusiones en

los parágrafos 2 y 3» de 1608, el texto de los cuales respaldaba los resultados de un plebiscito supervisado por la ONU y pedía su implantación inmediata. Case Concerning the Northern Cameroons (Cameroon v. the United Kingdom), Primera fase, objeciones preliminares, I. C. J. Reports, 1963, p. 32. Pero véase J. Crawford, Creation, cit., p. 614, para una advertencia.

[133] A. R. Sureda, Evolution, pp. 39-40, 45, 47-48; GAOR, A/648 (parte 1), p. 46, § 4.1 («Letter, dated 5 July 1948, addressed to the United Nations Mediator by the Minister for Foreign Affairs of the Provisional Government of Israel»); UNSCOR, 3.a reunión, 27 de julio de 1948, pp. 27-33, cursivas añadidas. El contexto de la declaración de Eban era una propuesta del gobierno sirio para remitir la cuestión palestina a La Haya y pedir un dictamen no vinculante. Rechazando esta iniciativa, Eban afirmaba que la existencia de Israel como Estado «no es una cuestión legal, sino una cuestión fáctica, un asunto que no debe establecerse mediante un juicio, sino mediante la observación». Pero, seguía diciendo, «si el origen legítimo fuera relevante, que no lo es, a la hora de determinar el carácter de Estado», entonces Israel se encontraba en la posición única de haber tenido su nacimiento «legítimamente certificado» por la Asamblea General.

[134] Juez Dillard, Voto particular, Legal Consequences for States, I. C. J. Reports, 1971, p. 163.

[135] Western Sahara, Dictamen no vinculante, I. C. J. Reports, 1975, p. 12.

[136] Dictamen sobre Eastern Carelia, 1923.

[137] Para los precedentes relevantes del Tribunal, véase también Legal Consequences for States, I. C. J. Reports, 1971, pp. 23-24, § 31; Legal Consequences of the Construction of a Wall, I. C. J. Reports, 2004, pp. 157-159, §§ 46-50; juez Owada, Voto particular, ibid., p. 265, §§ 13-14; juez Koroma, Voto particular, ibid., pp. 204-205, § 3; juez Kooijmans, Voto particular, ibid., p. 227, § IV.27; juez Higgins, Voto particular, ibid., pp. 209-210, §§ 10-11.

[138] Legal Consequences of the Construction of a Wall, I. C. J. Reports, 2004, pp. 159-160, § 51.

[139] El Consejo de Seguridad puede imponer, bajo el Artículo 94 de la Carta, el veredicto del Tribunal únicamente en una decisión contenciosa.

[140] N. G. Finkelstein y M. Rabbani, con la colaboración de J. Stern-Weiner, How to Solve the Israel-Palestine Conflict (en prensa).

[141] M. Pomerance, «The ICJ and South West Africa (Namibia): A retrospective legal / political assessment», Leiden Journal of International Law, 1999, p. 432.

[142] Juez Weeramantry, Voto particular discrepante, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, I. C. J. Reports, 1996, p. 550.

[143] Véase también la sensata valoración del jurista sudafricano John Dugard de los factores que condujeron a la derrota del apartheid en Sudáfrica:

No ha sido el idealismo y el altruismo lo que ha sentado al Partido Nacional a la mesa de negociaciones, sino más bien una combinación de la presión internacional y y de la revuelta interna. Aunque las sanciones económicas han sido las armas más importantes que la comunidad internacional ha empleado en contra del apartheid, no hay que descartar el resto. […] El aislamiento político y moral ha desempeñado su papel. […] El no reconocimiento de los Estados bantustaníes ha destruido la viabilidad de la fragmentación territorial de Sudáfrica en una colección de «Estados» étnicos como una solución política aceptable. Y la reiterada denuncia del apartheid como algo moralmente inaceptable para la comunidad internacional ha erosionado las bases morales del apartheid, que sus primeros arquitectos ideológicos tanto lucharon por establecer (J. Dugard, «The Role of International Law in the Struggle for Liberation in South Africa», Social Justice [1991], p. 91).

Para otro comentario relevante, véase K. S. Bhagavad Geeta, «Role

of the United Nations in Namibian Independence», International Studies, 1993, pp. 33-34; y J. Faundez, «Namibia: The relevance of international law», Third World Quarterly, 1986, pp. 540-541, 557.

[144] James Crawford, representando a Samoa, las islas Marshall y las islas Salomón, en audiencia pública celebrada el martes 14 de noviembre de 1995, en Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict.

[145] J. Crawford, Creation, cit., pp. 446, 447.

[146] Ibid., p. 448.

[147] Para los abrumadores costes económicos para el pueblo palestino derivados de la ocupación israelí, véase United Nations Conference on Trade and Development, «Report on UNCTAD Assistance to the Palestinian People: Developments in the economy of the Occupied Palestinian Territory», 1 de septiembre de 2016, §§ 29-53.